

GUATEMALA



NUNCA MAS

III

EL ENTORNO
HISTORICO

NUNCA MAS



ODHAG



ODHAG

GUATEMALA

NUNCA MAS



ENTORNO HISTORICO ODHAG



INFORME PROYECTO INTERDIOCESANO DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA

341.481.782.1

A797 g

V. 3

Arzobispado de Guatemala. Oficina de Derechos Humanos
Guatemala: Nunca Más : El Entorno Histórico /
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala. -- Guatemala : ODHAG, 1998.

p. 408

Volumen 3.

ISBN 84-8377-424-0

1. Guatemala - Derechos Humanos. 2. Guatemala -
Historia 3. Desaparecidos. 4. Víctimas del conflicto. 5.
Conflicto Armado. i. Título.



Primera edición 1998

© ODHAG

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

6 calle 7-70 Zona 1, 01001, Guatemala, Guatemala

Teléfonos: (502) 232-4604, 232-2226, 232-4412

Fax: (502) 232-8384

e.mail odhagua@pronet.net.gt

Foto de portada:

Daniel Hernández

Fotos interiores:

Archivo de Crónica, Derril Bazy y Cirma

Diseño de portada y primeras páginas:

Daniel Hernández

Impreso por:

Litografía e Imprenta LIL, S.A.

Apartado 75-1100 Tibás, Costa Rica

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio sin el consentimiento por escrito de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

TOMO III

EL ENTORNO HISTORICO

Introducción

Este libro tiene como propósito dar un contexto sociopolítico a la reconstrucción de la memoria de las violaciones durante el conflicto armado interno, que ya ha sido analizada en *El Impacto de la Violencia* (Tomo I) y *Los Mecanismos del Horror* (Tomo II) del Informe REMHI.

Es un repaso histórico no es enteramente original. Las fuentes de varios capítulos provienen de un valioso acervo bibliográfico, aunque es notable que la historia del conflicto armado en Guatemala es todavía una tarea pendiente. Hay por lo menos dos períodos que, por razones distintas, están escasamente estudiados desde la perspectiva de los actores del conflicto: el primer ciclo que corresponde a los años 60 y el reciente proceso político de gobiernos civiles electos, que es justamente el tiempo de las negociaciones de paz (1986-1996). Para trabajar estos dos tramos de la historia reciente, hicimos el esfuerzo de integrar información con fuentes primarias por medio de entrevistas a informantes claves y el estudio de documentos originales, los cuales organizamos en una serie de trabajos preliminares que dan sustento al presente material. Esta idea se desarrolló mediante el cruce de dos variables (tiempo y espacio o territorios) de las estrategias de los actores principales.

No nos trazamos la meta de buscar o explicar las causas del conflicto, pues éstas -adelantando una conclusión de este trabajo- están sumergidas en una trama de relaciones de poder riesgosamente desequilibradas las cuales, sin embargo, ha tenido una extraordinaria capacidad para regenerarse en medio de ciclos muy cortos de crisis de gobernabilidad. Existen por lo menos tres grandes categorías de análisis que deberían formar parte central de un esfuerzo en esa dirección, y que aquí todavía no se trabajan con suficiente vigor: el poder (su concentración militar y económica, donde las disputas por la tierra han sido un dato fundamental), las relaciones interétnicas y la violencia.

En cambio buscamos entender las lógicas de las relaciones de poder (y las lógicas de guerra) para complementar la discusión sobre los impactos y las técnicas de la violencia, que en realidad constituyen el corazón del presente Informe.

El libro está dividido en ocho capítulos. Partimos de una descripción muy somera de la aplicación de la noción de Estado liberal desde finales del siglo XIX y sus conflictos con la civilización agraria (indígena/campesino). Describimos aspectos relevantes del intenso período político de los años 50 que adscribe irremediamente a los actores en la polaridad de la guerra fría con un saldo interno muy negativo: el debilitamiento de las mediaciones políticas que larvan el conflicto

armado. Desde este primer capítulo comenzamos a poner en relieve a nuestros actores principales: los militares, los empresarios, las fuerzas políticas, la Iglesia católica y los movimientos sociales. Los actores externos -en particular los Estados Unidos- son descritos a través del impacto, muchas veces decisivos, de sus políticas, como ocurrió con el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz.

El segundo capítulo reconstruye eventos de la organización del conflicto armado en los años 60, el surgimiento de las guerrillas, el foquismo guevarista, sus teatros y métodos de operaciones; las adecuaciones doctrinarias y operativas contrainsurgentes del Ejército, en especial los comisionados militares, los escuadrones de la muerte y los organismos de inteligencia. Junto a ello, el proceso político que coloca a la fuerza armada como eje en las decisiones del Estado y el sometimiento de la institucionalidad civil (ejecutiva y judicial). El tercer capítulo está dividido en dos partes. En la primera se analiza el proyecto militar de los años 70, que encabezó el general Carlos Arana en sociedad con un exclusivo grupo empresarial; por otro lado se alude a la persistente violencia política aplicada como método preventivo de contrainsurgencia. En la segunda parte se profundiza en el tema del agotamiento del proyecto militar, la exacerbación de la violencia y el caos social que corresponde a la época del general Romeo Lucas García; se explica el punto culminante de la guerra interna entre junio de 1980 y julio de 1982, tomando en cuenta la ofensiva estratégica del Ejército en los principales teatros de operaciones (la capital y la costa sur; la zona Ixil; el nudo del altiplano poblado que incluye Chimaltenango-Sur de El Quiché-Sololá; las áreas fronteras como Ixcán y Huehuetenango, entre otras) a partir de octubre de 1981; y se aborda el tema de las víctimas como costo social directo de la guerra.

El cuarto capítulo trata sobre el modelo contrainsurgente aplicado durante el gobierno de Ríos Montt, la continuación de la tierra arrasada y los métodos de control social, como la reconcentración de poblaciones y su encuadramiento en las PAC. Este capítulo y los cuatro que le siguen mantendrán una línea de análisis sobre las alianzas y contradicciones entre los bloques de poder militar y empresarial, la paulatina reorganización de los destacamentos militares de la guerrilla y el retejido de las organizaciones sociales y su agenda de incidencia en los derechos humanos.

El capítulo quinto es una explicación del reajuste del proyecto militar de contrainsurgencia bajo Mejía Víctores. En el sexto se exploran ampliamente las vicisitudes de la implantación del primer gobierno civil en dos décadas, administrado por Vinicio Cerezo y la Democracia Cristiana. En el capítulo séptimo se estudia el período de Jorge Serrano, el inicio de las negociaciones directas con la guerrilla, los movimientos internos del Ejército y la errática agenda del ajuste económico (incluyendo las privatizaciones), todo lo cual genera una mezcla política altamente inestable que hace precipitar en el golpe de Estado del 26 de mayo de 1993. El octavo y último capítulo resume el período de gobierno de Ramiro de León, el reencauce de las negociaciones de paz, el inicio de la administración de Álvaro Arzú y el cierre de las negociaciones de paz el 29 de diciembre de 1996.

Capítulo Primero

Breves Antecedentes

*Una vez industrializadas,
las potencias atlánticas necesitaron
mercados y materias primas baratas de
regiones remotas.*

A & H Toffler

1. De Barrios a Ponce Vaides

Hasta la reforma liberal de 1871 el poder político y económico en Guatemala permaneció en manos de familias descendientes de los conquistadores o los administradores coloniales españoles. Al triunfar su movimiento, en un manifiesto del 8 de mayo de 1871, el general Miguel García Granados hizo el compromiso de reformar jurídicamente el Estado para impedir los excesos del poder personal y dar una base de legitimidad a la propiedad de la tierra en favor de los pujantes cafetaleros. Fue el general Justo Rufino Barrios quien impulsó las reformas liberales, pero asumiendo una dictadura personal.¹

Esas reformas mezclaban los avances tecnológicos y las nuevas concepciones militares -como la organización de un Ejército profesional- con la supresión de derechos comunales y eclesiales sobre la tierra y la instauración del trabajo forzado. Las más afectadas fueron las comunidades indígenas situadas en las áreas de expansión cafetalera, especialmente en la bocacosta de Quetzaltenango, San Marcos y Alta Verapaz. Hasta entonces, la relativa independencia de los pueblos indígenas se había basado en la posesión de las tierras comunales.² Al desconocer el censo enfitéutico, que los conservadores instauraron en el siglo XIX, dañando aunque no aboliendo el derecho de propiedad indígena, fueron adquiridas por los finqueros las tierras que les arrendaban las comunidades. Por ejemplo, en 1873 se enajenaron los terrenos baldíos de Costa Cuca y El Palmar, en Quetzaltenango (2,000 caballerías en total). El rechazo indígena a la expropiación se manifestó, en algunos casos, en

1 En realidad Barrios no propuso una interpretación coherente de la ideología liberal, sino que se apoyó en nociones sobre el desarrollo de diferentes fuentes: los programas reformistas del período de Mariano Gálvez, la reforma mexicana, ciertos dogmas vulgarizados del positivismo y el darwinismo social, y de su experiencia personal (McCreery, 1987).

2 Además, su aislamiento respondía a una estrategia social de las comunidades que les permitía reciclar situaciones adversas o generar transformaciones ante los nuevos retos (Smith, 1997).

misteriosos incendios que consumían cafetales, beneficios y hasta viviendas de los trabajadores temporales de las fincas (Castellanos, 1997).³

Además de la tierra, el liberalismo abordó el tema de la mano de obra forzosa. En 1877 se promulgó el Reglamento de Jornaleros y en 1878 la Ley contra la Vagancia, que obligaba a los indígenas a trabajar de 100 a 150 días al año en las fincas cafetaleras.⁴ Como consecuencia, la mano de obra era muy barata; los hombres ganaban un real por día y las mujeres medio real. Unos 100,000 indígenas bajaban cada año del altiplano a la bocacosta para trabajar en las cosechas. De esa época datan numerosos levantamientos indígenas contra jefes políticos, habilitadores y finqueros. Entre estas revueltas destacan la guerra de guerrillas de los indígenas de Momostenango, el intento de levantamiento de los quichés en 1877 y la rebelión de San Juan Ixcoy en 1898, sofocadas por las milicias ladinas que se apropiaron de sus tierras.

El despojo de tierras comunales y la formalización de las nuevas propiedades se prolongó hasta 1898. A la vez, surgieron las primeras industrias (la textilera Cantel en 1876, la fábrica de fósforos en 1882, y la Cervecería Centroamericana, de los hermanos Castillo Córdova, en 1886); se desarrolló la banca (el Banco Nacional en 1874, el Banco de Occidente en 1881, el Banco Americano de Guatemala en 1895); se iniciaron las grandes obras de infraestructura (como el ferrocarril Guatemala-Escuintla en 1880) y rápidamente emergió una generación de empresarios agrícolas, entre los que destacaron los alemanes y los mestizos.

En 1876 Karl Rudolph Klee, que presidía la Casa Skinner-Klee, la mayor exportadora de cochinilla, solicitó 1,100 caballerías en Pochuta, Suchitepéquez. Similares solicitudes hicieron al Estado otros alemanes, como los Duseldorff y los Nottebaum. En 1880, como parte del contrato para construir la línea de ferrocarril, Guillermo Nanne y Luis Schlesinger recibieron 1,500 caballerías en el valle del Motagua, que más tarde adquirió la United Fruit Company (UFCO) para el cultivo de banano. En el mismo año, José María Díaz Durán introdujo el cultivo de café en Antigua, y más tarde emparentó con los Falla, los Cofiño y los Herrera que llegaron a controlar casi toda la producción de café en Sacatepéquez (Casaus 1992).

Manuel María Herrera Moreno, ministro de Hacienda de Barrios y autor de la Ley de Jornaleros, se convirtió en uno de los mayores apropiadores de tierras. José María Samayoa, ministro de Fomento de Barrios y emparentado con una Klee, fue uno de los primeros impulsores del cultivo de café en Guatemala (Samper, HGCA, 1993; Poitevin, 1977; Casaus, 1992).

Al subir al poder en 1893 el presidente José María Reina Barrios suprimió el trabajo forzado establecido en 1877, pero obligó a contribuir en el Batallón de Zapadores, trabajando en obras del Estado, a aquellos indígenas que no pagaran su liberación del servicio o demostraran tres meses de trabajo en una finca de café, azúcar, cacao o banano.

3 Castellanos Cambranes recoge documentos de 1885 que narran cómo ante el interés de los finqueros por apoderarse de tierras y trabajadores en Alta Verapaz, los hombres desaparecían de la noche a la mañana, hasta el punto de que el jefe político de la región refería que *ha habido una baja considerable de habitantes*.

4 La elite ilustrada asumió que dada la inferioridad racial y cultural de la mayoría indígena, era innecesario y hasta contraproducente reconocer sus derechos civiles, pues ello podría resultar en anarquía institucional y desorden público. A esto se vinculaba la idea racista de que eran incapaces de tomar decisiones por sí mismos (González Ponciano, 1997).

Militarización de los campesinos

Los gobiernos liberales se sirvieron de la experiencia colonial en la práctica de imponer a los campesinos la formación de milicias. Igual que en la Colonia, les preocupaba la existencia de grupos de población dispersos en regiones alejadas de la capital. Además, para asegurar la fuerza de trabajo se requería de un poder descentralizado, coercitivo y eficaz.

Por ello, la representación de la autoridad política del gobierno central fue una de las principales tareas que se asignó a los finqueros, a quienes se les investió no sólo de autoridad civil y policial, sino incluso de autoridad militar (Castellanos, 1997). Las milicias de reserva estaban formadas por reclutas de entre 15 y 50 años. En las fincas, los propietarios o sus representantes debían pasar lista todos los domingos. Los trabajadores estaban obligados a integrar escuadras subordinadas al patrón como si éste fuera su jefe militar.

La militarización de las plantaciones incluía la penalización con trabajos forzados para la creación de la infraestructura cafetalera. Un mes de trabajo en la temible *Compañía de Zapadores* significaba soportar malos tratos y muchas veces implicaba la muerte. Las mujeres y los niños debían hacerse cargo de los campos de cultivo en ausencia de los hombres movilizados en los trabajos. Muchos, desesperados por la prolongación de tantas penalidades, huían.

El ascenso de los nuevos grupos económicos no estuvo libre de fricciones. En 1898 se produjo un levantamiento para impedir la reelección de Reina Barrios, que fue promovido por los caficultores de occidente y acaudillado por los jefes políticos de San Marcos y El Quiché. Como represalia, al fracasar la conjura, fueron ejecutados públicamente los dos empresarios más destacados de Quetzaltenango, Juan Aparicio y Sinfaroso Aguilar, por orden de Manuel Estrada Cabrera, ministro de Gobernación. Al ser asesinado Reina Barrios, Estrada Cabrera asumió la Presidencia (1898-1920) y transformó al Partido Liberal de una elite de profesionales y funcionarios, en una organización que descansó en los círculos liberales de las clases medias.

Durante el período de Estrada Cabrera se consolidaron los agroexportadores de café, entre ellos los Herrera, los Klee, los Alejos, los Falla y los Cofiño; los industriales, como los Castillo, los Novella y los Herrera; y los financieros, como los Aguirre, los Saravia, los Castillo y los Matheu Sinibaldi. En 1901 el gobierno firmó un convenio con la UFCO para la explotación de banano. La concesión se extendió en 1904 para la construcción del ferrocarril Puerto Barrios-El Rancho-ciudad de Guatemala, e incluyó 1,500 caballerías de tierra y la exención de impuestos de exportación por 35 años. Hacia 1920 los Estados Unidos cubrían el 70% de las importaciones guatemaltecas y controlaban el 80% de las exportaciones.

En ese período continuaron las rebeliones indígenas. En 1905 se produjo el levantamiento de Totonicapán. Al mismo tiempo, las asociaciones artesanales y obreras fueron creciendo. La Revolución Mexicana (1910-17) tuvo un fuerte impacto en este movimiento. Ya para 1919 existían 36 nuevas asociaciones obreras y artesanales.

En 1920 se produjo una conspiración de finqueros y comerciantes desplazados del poder desde 1871. Manuel Cobos Batres emergió como líder de la protesta, junto

con el obispo José Piñol y Batres. Un año antes se habían fundado la Liga Obrera, dirigida por Silverio Ortiz, y el Partido Unionista, que reclamaba un régimen parlamentario, la reforma del sistema monetario y la integración centroamericana. En el movimiento de protesta de 1920 surgieron milicias obreras y se creó una situación de insurrección que cobró 1,700 vidas. Estrada Cabrera fue derrocado y llegó al gobierno Carlos Herrera Luna (1920-21), azucarero y banquero. Herrera reconoció algunos avances en materia de cooperativismo y derechos individuales, pero restringió las protestas mediante el Reglamento de Manifestaciones. En esa época destacó por su beligerancia la Unión Ferrocarrilera de Guatemala.

Con el gobierno de Herrera se introdujo el cultivo del cardamomo en Alta Verapaz. En 1920 se creó la Asociación General de Agricultores (AGA), promovida por la familia Aycinena Arrivillaga. Un año después se formó la Cámara de Comercio. En ese entonces llegaron al país familias como los Gutiérrez, los Botrán y los Canella que salían de un México convulso.

En 1921 un triunvirato encabezado por el general José María Orellana (1921-26) derrocó a Herrera. Orellana emprendió la renegociación con la Empresa Eléctrica Bond & Share; también creó el quetzal como moneda, en paridad con el dólar, lo que representó una devaluación de hecho en beneficio de los cafetaleros. En 1924 la UFCO firmó un contrato de arrendamiento de todas las tierras incultas en la cuenca del río Motagua, en una extensión de 100 kilómetros. En 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala, como único emisor del quetzal. El gobierno abrió el Departamento Nacional de Trabajo y promovió algunas leyes de protección laboral, aunque en 1922 reprimió un levantamiento de quichés.

En 1931 fue electo presidente Jorge Ubico Castañeda, jefe político de Verapaz y vinculado a familias muy influyentes como los Castañeda, los Urruela, los Herrera, los Dorión, los Klee y los Saravia. Ubico, al igual que Estrada Cabrera, ejerció un largo gobierno autocrático. A principios de los años 30 Guatemala sufrió los efectos de la depresión económica internacional. Aunque Ubico no podía continuar devaluando la moneda, se ganó el apoyo de los cafetaleros manteniendo el orden social en el campo mediante un programa de obras públicas forzadas. En 1934 el gobernante canceló las deudas por habilitaciones⁵ buscando favorecer así a los empresarios menos competitivos en su lucha por obtener mano de obra, y enfrentar las presiones producidas por el excesivo endeudamiento de los trabajadores y la grave crisis fiscal. Eso permitió a una minoría indígena dedicarse a la actividad comercial desplazándose por todo el país. Estos indígenas rompieron con el patrón cultural de los zahorines⁶ y entraron a un movimiento de conversión religiosa que facilitó la penetración de la Iglesia católica y las iglesias protestantes en el altiplano a partir de las décadas de 1930 y 1940 (Falla, 1980).

5 Sistema de los hacendados de pagar anticipos a los jornaleros, que les permitía mantenerlos endeudados a sus plantaciones.

6 La reforma liberal, la expansión ladina en el altiplano y el debilitamiento de la comunidad indígena, estuvieron acompañados de un declinar de la autoridad de los ancianos (Principales), en favor del poder de los zahorines (chamanes), que reforzaron las prácticas mágico-religiosas (Le Bot, 1995).

Ubico sustituyó a los alcaldes ladinos por intendentes nombrados por él y mantuvo a los alcaldes auxiliares indígenas. Trasladó a la Dirección General de Policía el recién creado Departamento de Trabajo, que dependía del Ministerio de Economía, y se valió del Ejército para llevar a cabo su política. La fuerza armada coaccionó a los campesinos para construir caminos y tender los hilos del telégrafo por todo el territorio nacional. Además, el gobernante persiguió brutalmente a sus opositores. En 1934 descubrió una conspiración en su contra y diezmó a quienes la promovían. Él hizo famosa la ley fuga. Sin embargo, en junio de 1944, en medio de protestas populares, tuvo que entregar el poder a un triunvirato militar presidido por el general Federico Ponce Vaides, quien gobernó 108 días.

Los comisionados militares

El presidente Ubico creó, mediante acuerdo ministerial del 9 de julio de 1938, la figura de los comisionados militares como representantes locales del Ejército. Los comisionados llenaron vacíos que seguían dejando la falta de administración civil en el campo. Sus funciones eran *ad honorem* y se ejercían sin plazos, incluían los reclutamientos para el servicio militar, la captura de delincuentes, citaciones y llamamientos. El poder de negociar en las comunidades quienes debían prestar el servicio militar y quienes no, les dio desde el principio una gran influencia a los comisionados. Ese rol daría un giro dramático más adelante, con el inicio del conflicto armado, sobre todo en el oriente del país.

Ponce continuó el régimen de terror político del ubiquismo y ordenó el asesinato del director de *El Imparcial*, Alejandro Córdova, único candidato oponente a la Presidencia. Por otro lado, los conflictos interétnicos se exacerbaban. Las disputas locales entre los indígenas y los ladinos de Patzicía, Chimaltenango, alentadas por las promesas de Ponce de otorgar tierras a los primeros, no tardaron en trasladarse al escenario político central, y desembocaron en una masacre de cakchiqueles tras su levantamiento contra los ladinos (quienes registraron entre 16 y 19 muertos). Las víctimas indígenas provocadas por la intervención del Ejército el 21 de octubre de 1944 sumaron más de 40, pero en los siguientes días se desató una *cacería de indios* en la que participaron grupos paramilitares ladinos de Zaragoza, que cobró entre 400 y 600 víctimas.⁷

7 En su ensayo *A Sea of Indians*, Jim Handy cita precipitados levantamientos indígenas entre 1944 y 1952. Los periódicos reportaron amenazas de ataques indígenas a quienes quisieran bloquearles el acceso a las tierras que les había prometido Ponce, y expresaban el miedo de los ladinos. En septiembre de 1944 hubo una gran manifestación de campesinos en las afueras de la ciudad de Guatemala, que fue seguida en octubre por los levantamientos en Patzicía y San Andrés Itzapa, y supuestos alzamientos en San Juan Ostuncalco y Chichicastenango. Entre 1945 y 1948 se reportaron otros actos de agitación indígena en Chiquimula, Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, Sololá, San Marcos y Huehuetenango (Handy, 1989; Adams, 1995).

El 20 de octubre de 1944, enfrentado a una conspiración de líderes políticos y militares y un levantamiento popular en la capital, finalmente cayó el gobierno de Ponce Vaidés como símbolo del ubiquismo y se clausuró otro ciclo en la historia de Guatemala.

2. La revolución de octubre

Durante el período de la Revolución de Octubre (1944-54) se produjo el ascenso de la clase media (militares, profesionales, comerciantes, artesanos) a la administración del Estado y las instituciones políticas. El nuevo régimen se basó en un sistema participativo para apoyar las reformas del Estado (derecho al voto, autonomía municipal); se generó una mayor burocracia estatal y el acceso de los intelectuales a las decisiones de poder.⁸ Fueron registrados 30 partidos políticos, entre ellos el Frente Unido de Partidos Arevalistas, que promovió la Constitución de 1945.

El presidente Juan José Arévalo (1945-51) defendió un modelo liberal de intervención estatal, una interpretación del *New Deal* del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, que él definió como *socialismo espiritual* para distinguirlo del socialismo materialista de los marxistas. Su programa económico favoreció a la pequeña industria y permitió la creación del pequeño propietario agrícola. También promovió el cultivo del algodón y la ganadería extensiva, que sólo podían desarrollarse de manera rentable en grandes extensiones de tierra y con el uso de un nuevo tipo de asalariado agrícola. Además, el sector comercial creció, alentado por los altos precios de los productos de exportación y la ampliación de la capacidad de compra interna.

En 1945 se emitió la Ley de Titulación Supletoria para favorecer a los pequeños agricultores, pero fue utilizada para extender las grandes propiedades. En 1946 se aprobó la Ley de Seguridad Social; ese mismo año se inició la reforma bancaria y monetaria, y se creó el Banco de Guatemala como entidad pública descentralizada y autónoma. Las organizaciones de empresarios y trabajadores crecieron en este período. En 1948 fue reconocida legalmente la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), bajo la dirección de Víctor Manuel Gutiérrez, que llegó a aglutinar a unos 90,000 miembros. A la vez, la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), encabezada por Leonardo Castillo Flores, se fue expandiendo hacia el interior del país. Para 1949 ya se había reconocido la personería jurídica de 92 sindicatos.

8 La clase media urbana que permaneció a la sombra del gobierno de Ubico, súbitamente encontró una salida a sus angustias de ingresos y una posibilidad de ascenso social en la burocracia. A la Universidad de San Carlos se le otorgó una singular importancia, que la llevó a convertirse en el principal centro de elaboración ideológica de estos grupos. De ahí habían surgido algunos de los principales líderes del movimiento. Los nuevos abogados, médicos y economistas eran hijos de comerciantes y campesinos ricos de oriente (Poitevin, 1977).

Pronto, sin embargo, el gobierno de Arévalo comenzó a sufrir las conspiraciones de grupos conservadores. El coronel Francisco Javier Arana, junto con Jacobo Árbenz, se perfilaban como los líderes para reemplazar a Arévalo en 1951. Pero Arana planificó acelerar el proceso. En julio de 1949, con el respaldo de algunos finqueros, le presentó a Arévalo un ultimátum demandando que rindiera el poder al Ejército y que cumpliera el resto de su período como fachada civil para un régimen militar. El presidente solicitó tiempo, y con Árbenz y algunos oficiales leales trataron de arrestar a Arana. Capturado solo, Arana se resistió y fue muerto en un tiroteo. Cuando las noticias llegaron a la capital, los aranistas se rebelaron, pero los sindicatos y unidades del Ejército leales al gobierno sofocaron el levantamiento. De todos modos, al final del período de gobierno, la tensión política fue creciendo.⁹

El coronel Jacobo Árbenz ganó las elecciones de 1950 postulado por el Frente Popular Libertador (FPL), representante de las clases medias.¹⁰ Árbenz comenzó a estudiar el problema agrario. El Censo Agropecuario de 1950 mostraba que el 99.1% de las fincas eran minifundios que sólo ocupaban el 14% de las tierras, mientras el 0.1% ocupaba el 41% de la superficie censada; el 40% de las fincas eran propiedad de 23 familias, 54 fincas disponían del 19% de la tierra y cerca de 250,000 campesinos carecían de ella.

Árbenz, igual que Arévalo, intentó incorporar al sector empresarial a la solución de ese problema. En 1951 creó una comisión de tres empresarios para estudiar la situación de las fincas nacionales. En 1952 el Congreso aprobó el Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria, que ordenaba la expropiación de fincas no cultivadas y su entrega a los campesinos a través de los Comités Agrarios Locales. Los finqueros expropiados recibían una paga en bonos del Estado a 25 años plazo, con una tasa de interés anual del 3%. Durante los 18 meses de vigencia de la Reforma Agraria fueron beneficiadas 100,000 familias campesinas; el valor de las expropiaciones alcanzó los US\$8.5 millones. También afectaron 101 fincas nacionales.

Durante la aplicación de la Ley de Reforma Agraria se produjeron abusos por parte de los beneficiarios. Innecesariamente fueron invadidas 30 fincas que podían haberse obtenido sin demoras mediante procesos legales. En algunas regiones de oriente, la CNCG aplicó la Ley de Arrendamientos sólo en provecho de sus asociados. Pero también se desató una ola de violencia en el campo provocada por los finqueros.

Ante esta la situación, el gobierno advirtió que *los terratenientes que se opongan a la ley de reforma agraria por métodos violentos o subversivos serán expropiados en forma total, sin tomar en cuenta las limitaciones y la*

9 Los conservadores hicieron un intento final para tomar el poder días antes de las elecciones. Con unos pocos seguidores, un teniente coronel aranista purgado, Carlos Castillo Armas, atacó una base militar en la ciudad de Guatemala, creyendo que obtendría el apoyo de los militares para hacerse con la Presidencia, cosa que no ocurrió: fue hecho prisionero y encarcelado durante un año, hasta que por medio del soborno pagado a sus custodios logró huir a Honduras, donde planificó otro levantamiento (Cullather, 1994).

10 En esas elecciones votaron 404,239 personas, y por primera vez pudieron participar las mujeres analfabetas, aunque sólo el 50% ejercieron ese derecho. Árbenz, apoyado por el PAR, el PRG y los comunistas, obtuvo 266,778 votos.

indemnización prevista por la ley. La AGA encabezó la oposición a la reforma agraria, destacando en esa lucha los Aycinena Arrivillaga. La oposición política anticomunista, que estaba organizada desde el gobierno de Arévalo, comenzó a desarrollarse con más fuerza. El 19 de marzo de 1952 se produjo la rebelión de Salamá, en la que participaron Juan Córdoba Cerna y el Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, dirigido por Mario Sandoval Alarcón. Los propietarios, además, organizaron Comités de Defensa de la Tierra y Uniones Cívicas, los que emprendieron acciones de asesinatos contra líderes agrarios, a pesar de que la aplicación de la reforma agraria había beneficiado a los prósperos comerciantes de Retalhuleu, Escuintla y Coatepeque.

El Decreto 900 en San Martín Jilotepeque

En San Martín Jilotepeque fueron afectas las fincas La Merced, Canajal de Medina, Rosario Canajal y Los Magueyes; estas dos últimas eran las típicas fincas de mozos. Los campesinos, a cambio del derecho de cultivar en esas fincas, debían trabajar en otras de los mismos propietarios en la costa sur. Este sistema de *fincas dormitorio*s se diseñó a inicios de siglo. Rosario Canajal fue comprada para servir como finca de mozos en 1911 por Carlos Herrera Luna. En los libros de Registro de la Propiedad Inmueble no aparecen inscripciones que se refieran a su afectación por el Decreto 900, y los archivos que contenían la información concerniente a la aplicación de la reforma agraria fueron destruidos, por tanto, la reconstrucción de esos hechos sólo puede basarse en las fuentes de la tradición oral.

Las fincas de mozos propiedad de los Herrera se extendieron en una franja que va de San Juan Sacatepéquez hasta Joyabaj, El Quiché, y a otros municipios aún más lejanos como San Juan Cotzal. La reversión de la reforma agraria convirtió a San Martín en un foco de alta conflictividad social durante las siguientes tres décadas. A pesar de los esfuerzos de inversión en infraestructura de servicios tras el terremoto de 1976, el problema central del control de la tierra y el reconocimiento del poder indígena quedaron sin resolverse, y sólo se comenzaron a abordar por lo menos hasta después del estallido del conflicto armado en esa región (1980 y 1981).

La participación del gobierno de los Estados Unidos resultó fundamental a partir del Decreto 900. La UFCO presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Reforma Agraria, y el gobierno al desconfiar de los magistrados destituyó a la Corte, creando un grave problema de institucionalidad para el propio régimen.

En 1953 Dwight Eisenhower fue electo presidente de los Estados Unidos; John Foster Dulles fue nombrado Secretario de Estado, y Joseph McCarthy llegó al Senado. Por otro lado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ganó

mucha influencia después de una operación exitosa que derrocó al régimen iraní. El elemento clave para la política hacia Guatemala fue el embajador estadounidense John Peurifoy, quien llegó al país en ese mismo año, y en su primera entrevista con el presidente Árbenz le exigió que expulsara del gobierno a todos los comunistas.¹¹

Los representantes del sector empresarial y de los grupos anticomunistas no tardaron en unirse a la cruzada contra el gobierno. La Cámara de Comercio e Industria participó en una campaña internacional contra el régimen. En octubre se inició la Operación Éxito de la CIA; en noviembre el empresario José Luis Arenas se presentó a la embajada de los Estados Unidos ofreciendo al PUA como fuerza política para derrocar a Árbenz. El 24 de diciembre se firmó el Plan de Tegucigalpa que unificó al Movimiento de Liberación Nacional. En mayo de 1954, estando avanzado el plan de la conspiración, los Estados Unidos firmaron tratados de ayuda militar con Honduras y Nicaragua, países desde los que se preparaba la intervención militar contra Guatemala.

Cronología de la Operación Éxito de la CIA

25 Marzo 1952	La estación de la CIA en la Ciudad de México empieza a recibir informes semanales de Carlos Castillo Armas.
16 Junio 1952	El oficial de la CIA encargado del caso arriba a Guatemala.
17 Junio 1952	Árbenz decreta la Ley de Reforma Agraria.
10 Julio 1952	Allen Dulles, director de la CIA, se reúne con Thomas Mann, asistente para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, y le solicita aprobación para llevar a cabo los planes de derrocamiento a Árbenz.
18 Agosto 1952	El director de la CIA da su aprobación a la <i>Operación Éxito</i> .
5 Febrero 1953	El Congreso de Guatemala señala que la Corte Suprema <i>ignora la ley, que se muestra inútil y manifiesta su incapacidad para administrar la justicia</i> , después de que ésta amparó contra la toma de tierras.

11 Exiliados comunistas salvadoreños habían abierto una escuela para obreros, *Claridad*, en 1947, que reunía a unos cuantos organizados alrededor de Víctor Manuel Gutiérrez y de José Manuel Fortuny, quien había sido presidente del PAR. En septiembre de 1949 ellos, entre otros, fundaron el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), como un *partido de vanguardia, un partido del proletariado con bases en el marxismo-leninismo*. En las elecciones de 1951, los comunistas obtuvieron una modesta representación de cuatro curules en un Congreso de 61 diputados. Árbenz no nombró a ningún comunista en el gabinete, y solamente siete tenían cargos significativos en los departamentos, pero se hicieron visibles controlando la radio, la prensa estatal y manteniendo puestos en el departamento agrario y el seguro social. En realidad la principal influencia del PGT provenía de la amistad de Fortuny con el presidente. Fortuny, Gutiérrez y Carlos Manuel Pellecer diseñaron la propuesta de reforma agraria y eso aumentó el peso de los comunistas en el gobierno.

25 Febrero 1953	El gobierno confisca 94,700 hectáreas de tierras de la UFCO.
29 Marzo 1953	Levantamiento de Salamá. Campañas represivas contra los anticomunistas.
12 Agosto 1953	El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos autoriza la acción encubierta contra Guatemala.
11 Septiembre 1953	Un asesor de K. C. King, jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, presenta el Plan General de Acción para la <i>Operación Éxito</i> .
9 Noviembre 1953	José Manuel Fortuny vuela a Praga a negociar la compra de armas.
9 Diciembre 1953	Allen Dulles aprueba el Plan General de Acción y designa US\$3 millones.
25 Enero 1954	El gobierno de Guatemala empieza arrestos masivos de sospechosos de ser subversivos.
29 Enero 1954	El gobierno de Guatemala revela detalles sustanciales de la <i>Operación Éxito</i> .
19 Febrero 1954	Empieza la operación <i>Washtub</i> , un plan para dejar armas soviéticas falsas escondidas en Nicaragua.
24 Febrero 1954	El gobierno confisca 70,013 hectáreas de las tierras de la UFCO.
1, 4 y 5 Marzo 1954	Se abre la reunión de la OEA en Caracas. Dulles habla en la reunión de Caracas. El canciller Guillermo Toriello rechaza los cargos de los Estados Unidos.
13 Marzo 1954	La OEA vota 17 a 1 condenando el comunismo en Guatemala. El secretario de Estado, John Foster Dulles, está informado de la <i>Operación Éxito</i> .
21 Marzo 1954	El programa de la CIA de entrenamiento paramilitar gradúa a 37 guatemaltecos en acciones de sabotaje.
10 Abril 1954	El secretario asistente de Estado, Henry Holland, impresionado por errores de seguridad, demanda una revisión de alto nivel de la <i>Operación Éxito</i> .
6 Abril 1954	Los vuelos secretos son suspendidos, mientras se da la revisión del proyecto.
20 Abril 1954	El programa de entrenamiento paramilitar gradúa a otros 30 elementos.
1 Mayo 1954	Se inicia la operación <i>Sherwood</i> con la emisión de <i>La Voz de la Liberación</i> .
14 Mayo 1954	El programa de entrenamiento paramilitar gradúa a elementos en comunicaciones.
15 Mayo 1954	SS Alfhem arriba a Puerto Barrios con un cargamento de armas checas.
20, 21 y 25 Mayo 1954	Fracasan intentos de asalto del tren cargado de armas checas y otros atentados. <i>La Voz de la Liberación</i> suspende sus transmisiones hasta junio. Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Guatemala.

24 Mayo 1954	La marina de los Estados Unidos comienza la <i>Operación Hardrock Baker</i> , de bloqueo marítimo a Guatemala.
29 Mayo 1954	Árbenz captura casi todo el aparato clandestino de Castillo Armas.
31 Mayo 1954	Árbenz sugiere reunirse con Eisenhower para reducir las tensiones.
4 Junio 1954	El coronel Rodolfo Mendoza de la fuerza aérea guatemalteca deserta a El Salvador en un avión privado.
8 Junio 1954	Víctor Manuel Gutiérrez urge a los sindicatos de trabajadores y campesinos a movilizarse para su propia defensa.
15 Junio 1954	Las fuerzas de invasión son movilizadas a las áreas de acción.
17 Junio 1954	El jefe de la estación de la CIA recibe la solicitud de un bombardeo de la pista de la ciudad de Guatemala, como una demostración de fuerza.
18 Junio 1954	A las 17:00 horas, Árbenz sostiene una reunión masiva en la estación del ferrocarril. Los aviones de la CIA sobrevuelan la manifestación. A las 20:20, Castillo Armas cruza la frontera.
19 Junio 1954	A las 01:50 horas, es destruido el puente de Gualán (Zacapa).
20 Junio 1954	Es tomada Esquipulas (Chiquimula). Los liberacionistas son derrotados en Gualán.
21 Junio 1954	La fuerza liberacionista más grande sufre una derrota en Puerto Barrios.
25 Junio 1954	Es bombardeado el cuartel Matamoros (capital). Chiquimula cae bajo control liberacionista. Los aviones de la CIA atacan a los trenes en los que se transportan tropas oficiales.
27 Junio 1954	Árbenz renuncia. Castillo Armas ataca Zacapa; es derrotado y se retira hacia Chiquimula.
28 Junio 1954	Díaz, Sánchez y Monzón crean la junta a las 11:45 horas. Rehúsan negociar con Castillo Armas. Un F-47 deja caer dos bombas a las 15:30 horas.
29 Junio 1954	Monzón solicita negociar con Castillo Armas.
30 Junio 1954	Frank Wisner, director de planificación de la CIA, urge a los militares a retirarse de los asuntos políticos.
1 Julio 1954	Monzón y Castillo se reúnen en Honduras para tratar sus diferencias.
4-17 Julio 1954	El equipo de recuperación de documentos de la CIA recolecta 150,000 materiales relacionados con el comunismo en Guatemala.

12 Julio 1954

Se cierra la oficina Lincoln de la CIA.

1 Septiembre 1954

Castillo Armas asume la presidencia.

Fuente: Cullather, 1994 (Documento desclasificado).

3. El protagonismo de la Iglesia

Con estos cambios en la vida política, la Iglesia entraba a una nueva etapa. Los embates de los gobiernos liberales habían mermado el tradicional poder eclesiástico. La escasez de personal religioso (en 1940 había 126 sacerdotes para tres millones de habitantes) obligaba a los laicos a encargarse de la sobrevivencia de la fe en sus comunidades. Ellos mantenían las catequesis, las celebraciones comunitarias, las procesiones y otras formas rituales, así como la organización religiosa. Más adelante algunos clérigos se enfrentaron a las cofradías, que en el campo tuvieron un destacado papel como defensoras de los bienes de la Iglesia y mantenedoras de la religiosidad, y a otras instancias laicas, para recuperar el poder religioso.

El arzobispo Mariano Rossell y Arellano (1939-64) buscaba que la Iglesia recuperara el poder y prestigio en la sociedad, y que sus orientaciones influenciaran las políticas de gobierno y a los grupos de dirigentes. La restauración de las condiciones para evangelizar Guatemala suponía una inserción en la parte más alta de la pirámide social, a fin de cristianizar al resto de la sociedad. En su primera carta pastoral, publicada el 16 de abril de 1939, el arzobispo evocó así la historia de la Iglesia hasta sus días: *A la sombra de la Cruz de Cristo se forjaron los templados caracteres de nuestros antepasados, a quienes debemos cuanto hay de noble y de generoso en las clases elevadas y los tesoros de paciencia y de abnegación que contemplamos en las clases populares.*¹²

Desde 1946 el episcopado de Guatemala había advertido contra la amenaza comunista. Durante los años 50 el clima anticomunista era generalizado en la Iglesia. En la teología práctica de muchos jefes figuraba como otro dogma. Rossell veía la lucha contra el comunismo como una cruzada. El 4 de abril de 1954, el arzobispo publicó una Carta Pastoral llamando a la población a levantarse. En su *Carta Pastoral sobre avances del comunismo en Guatemala*, decía: *Obedeciendo los mandatos de la Iglesia, que nos ordena combatir y desbaratar los esfuerzos del comunismo, debemos una vez más elevar nuestra voz de alerta a los católicos... Estas palabras del Pastor quieren orientar a los católicos en justa, nacional y digna cruzada contra el comunismo. El pueblo de Guatemala debe levantarse como un sólo hombre contra el enemigo de Dios y la Patria.*

12 Con esa visión de la base de la sociedad, Rossell fue pionero de la educación escolar para la población indígena. En 1945 fundó en su casa el Instituto Indígena Santiago para preparar maestros y dirigentes indígenas. Posteriormente creó el colegio indígena para jóvenes mujeres Nuestra Señora del Socorro.

Un año antes Rossell había organizado la Peregrinación Nacional de la Imagen del Cristo de Esquipulas, en la que una réplica de la imagen, que en la religiosidad popular ocupa un lugar importante, fue paseada de pueblo en pueblo para encabezar la cruzada contra el comunismo, o sea, contra el gobierno de Árbenz. *La presencia del Santo Cristo hizo más contra el comunismo que si cien misioneros, millones de libros y centenares de horas católicas radiadas hubieran dirigido la campaña anticomunista* (Bendaña, 1996).

En compensación, la Constitución de 1956 reconoció a la Iglesia como persona jurídica con el derecho de poseer bienes. También permitió la enseñanza religiosa en el sistema educativo oficial y la creación de la universidad católica. Asimismo, se abrió el camino a la entrada de misioneros y congregaciones religiosas, ante lo que Rossell tenía reservas. El nuncio Genaro Verolini promovió decididamente la entrada de misioneros, y a través de la creación de parroquias y diócesis, la descentralización administrativa de la Iglesia. Entre 1950 y 1959 el número de sacerdotes creció de 132 a 346, con mayor peso de los extranjeros.¹³

Posteriormente Rossell retiró su apoyo irrestricto a los liberacionistas, especialmente después del asesinato de Castillo Armas (1957). Criticó los métodos violentos con los que atacaron a los agraristas y a los partidarios del gobierno arbenzista. Acusó a los empresarios de ser, por su trato a los trabajadores, los promotores del comunismo. En su mensaje fechado el 15 de octubre de 1954, que ya no recibió la misma publicidad de su carta anterior, proclamaba: *El futuro presidente debe eliminar de su gobierno a todos los explotadores del proletariado, ora sean los causantes de la elevación desmedida del costo de vida, ora sean los directos depredadores de los salarios campesinos, ora los negadores de la asistencia social debida. Más comunistas que los líderes del Soviet, son los explotadores, porque éstos hacen comunistas de corazón, y aquellos hacen comunistas de ocasión... Más importante que invertir fondos en carreteras y obras públicas, es invertirlo en justicia social... lo primordial es tener un pueblo libre de comunismo, porque está libre de miseria y de injusticia... O justicia social, pronta y efectiva, o comunismo.*

13 Muchos de los sacerdotes venían expulsados de la China de Mao Tze-tung, con una dura experiencia de persecución. Entre ellos, algunos Maryknoll, que se ubicaron en Huehuetenango; los Franciscanos que trabajaron en Zacapa, Izabal y el Occidente, y los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, en Escuintla. A éstos se sumaron grupos de sacerdotes españoles que provenían del régimen franquista. Todos formaban una corriente conservadora, y acuñaron una frase que refleja el espíritu que les animaba: *Traemos nuevos métodos de catequización*, que significaba no reconocer la religiosidad existente, actitud que resintieron muchos feligreses y sacerdotes diocesanos.

Acción Católica

La falta de clero en estos años hizo volver la mirada sobre Acción Católica (AC), recomendada por el Vaticano y definida como *la participación organizada de los seglares en la misión apostólica de la jerarquía para la extensión del reino de Dios*. Las raíces de este movimiento se remontan hasta finales de la década de 1930 en Momostenango, Totonicapán, donde fue promovida por el Padre Rafael González Estrada. Hacia 1950 y 1960 ya estaba alcanzando su auge.

La AC fue reconocida por Rossell como un modelo evangelizador, un medio para influir en la sociedad y un arma contra el comunismo. En ese mismo sentido, acompañó a las nuevas organizaciones de AC urbana (Frente Estudiantil Socialcristiano, Juventud Católica Centroamericana), especialmente en su preocupación por crear un partido político católico, que estuvo en los orígenes de la Democracia Cristiana.

En el campo, la AC rural se fue constituyendo en el principal motor del cambio en el paisaje religioso, especialmente en el altiplano indígena. Al inicio fue un movimiento de conversión personal que exigía abandonar el anterior modo de practicar la religión. Comportaba un fuerte rechazo de las Cofradías, que mantenían vivas las tradiciones indígenas. Por ello muchas comunidades llegaron a dividirse. En los años 50, cuando creció el número de sacerdotes y misioneros, éstos reforzaron la línea de AC, lo que les permitió restablecer la relación jerárquica.

La estrategia de la Iglesia consistió en construir grupos sociales dotados de una autonomía propia, pero basados en formas primarias de solidaridad (García-Ruiz, 1997). La base de la AC estuvo constituida por la organización diocesana. Cada obispo asumía directamente la responsabilidad de su organización, aunque frecuentemente le era confiada a un equipo especializado bajo la dirección de un responsable diocesano. A nivel local el párroco tenía la dirección y aunque había un presidente laico, su trabajo estaba siempre referido al sacerdote. Las juntas de dirección parroquiales, que eran el motor de la acción colectiva, constituían las estructuras de representación y organización. Éstas promovían comportamientos, formas de acción y, sobre todo, constituían la matriz de la estrategia de recomposición social local.

4. El golpe del 54

La madrugada del 17 de junio de 1954 cuatro columnas compuestas por 300 hombres armados penetraron en el territorio guatemalteco por el lado de Esquipulas, desde distintos puntos de la frontera con Honduras. Su propósito era derrocar al presidente Jacobo Árbenz.¹⁴

Una de las columnas invasoras, comandada por el coronel retirado Juan Chajón Chúa, intentó tomar Gualán, en Zacapa, pero la defensa que organizó el teniente del Ejército, César Augusto Silva Girón, no solamente lo impidió, sino que la treintena de soldados a su mando logró descalabrar a la tropa liberacionista y capturar a su jefe. Este fue uno de los pocos hechos de armas entre el ejército de liberación y el Ejército de Guatemala, y demostró la superioridad técnica de la fuerza armada oficial.

Si los liberacionistas lograron su propósito de derrocar al gobierno, fue porque el mando militar no quiso combatir; se sumó a la conspiración contra Árbenz y en sus filas cundió la desmoralización. Los rebeldes tomaron el 24 de junio la ciudad de Chiquimula¹⁵ y ahí proclamaron el Gobierno Provisional de Guatemala, con el teniente coronel Carlos Castillo Armas a la cabeza, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Liberación Nacional, que era el brazo armado de un movimiento más amplio.¹⁶ Tres días después Árbenz pronunció por la radio su discurso de renuncia de la Presidencia, y el 3 de julio asumió el control del gobierno una junta de cinco militares encabezada por Castillo Armas.¹⁷

El derrocamiento de Árbenz tuvo desde el primer momento un carácter violento contra la población: el 19 de junio aviones de la liberación ametrallaron la capital de Guatemala, Chiquimula y Zacapa, provocando numerosos heridos. Y tuvo también un carácter selectivo contra los dirigentes de los trabajadores. En los primeros días después del golpe fue fusilado el diputado obrero Alaric

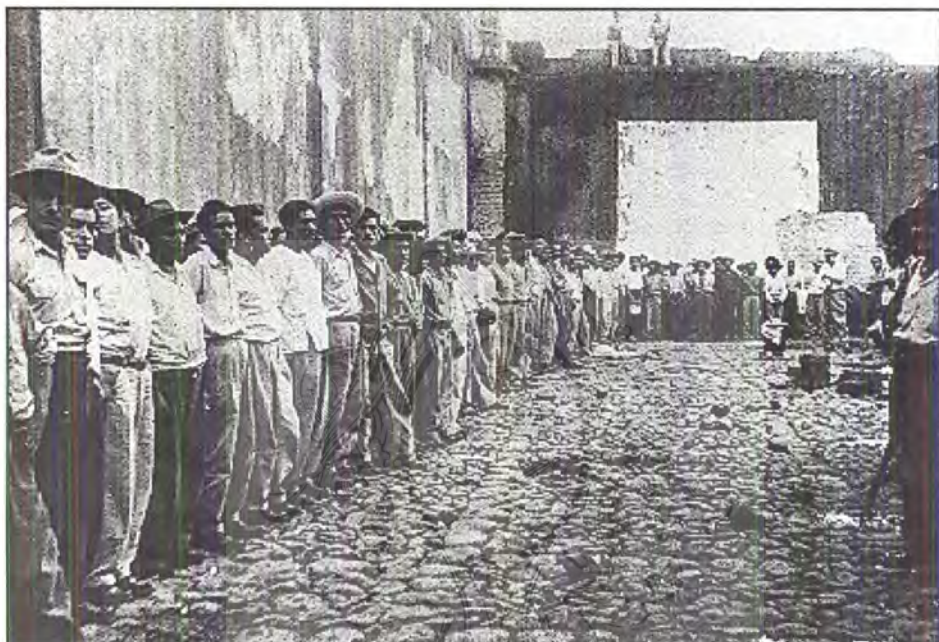
14 Tres de las columnas contaban con unos 80 hombres cada una, y la cuarta tenía 60. Frente a Puerto Barrios operó una goleta con 40 hombres que realizó acciones de hostigamiento en el lugar. La fuerza estaba compuesta por unos 40 oficiales de baja del Ejército de Guatemala, unos 30 cabos y sargentos en la misma situación, algunas decenas de estudiantes, profesionales universitarios y ex-soldados. El resto eran campesinos del oriente, especialmente de Chiquimula y Zacapa.

15 Las fechas del 17 y del 24 de junio citadas, de acuerdo a la investigación hemerográfica de REMHI, no coinciden con la cronología de Cullather. Otras fuentes (algunas de las citadas en la nota 17) coinciden con nuestras fechas.

16 Como Movimiento de Liberación Nacional (MLN) se conoció a una amplia gama de grupos opositores a Arévalo y Árbenz, que levantaron la bandera del anticomunismo para oponerse a las reformas socioeconómicas que impulsaban sus gobiernos. Estos grupos adoptaron el Plan de Tegucigalpa como programa de Gobierno, el que empieza diciendo: Identificados en el común propósito de erradicar de Guatemala al comunismo que deforma la verdad, mancilla la justicia, deturba la belleza y escarnece la moral...

17 Sobre el gobierno y la renuncia de Árbenz se ha producido abundante literatura. Immerman (1982), Schlesinger-Kinzer (1982) y Gleijesses (1990), enfatizan en el papel decisivo que tuvo la CIA; Fortuny (1994) y Pellecer (1997) hablan también del peso de los comunistas del PGT en el gobierno. El interés de muchos estudios recientes se centra en la personalidad de Árbenz y la influencia que ejercieron sobre él su esposa María Vilanova y José Manuel Fortuny, su secretario particular.

Bennett y otros dirigentes en Bananera (Izabal) y Tiquisate (Escuintla). Según la revista *Time* del 12 de julio de 1954, quince días antes el embajador Peurifoy se había presentado ante el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las fuerzas armadas, a quien Árbenz había entregado el poder, con una lista de los comunistas que era necesario fusilar. En lugar de ello Díaz ordenó una inmediata amnistía, pero fue depuesto a los pocos días.



Campesinos arbencistas son detenidos por el MLN. Foto CIRMA.

De inmediato se desencadenó una violenta dinámica de ajuste de cuentas. *El Imparcial* del 2 de julio informó que grupos de anticomunistas asesinaron a 16 trabajadores en Tiquisate. El 6 de julio la prensa reportó una lucha entre *indios comunistas* y *ladinos anticomunistas* en San Juan Sacatepéquez, en la que murieron 17 indígenas y muchos más fueron heridos. El ministro de Gobernación, Jorge Adán Serrano, informó el 14 de julio que 4,000 campesinos comunistas estaban encarcelados en todo el país, aunque se demostró que la mayoría de los detenidos no sabían qué era el comunismo, ni conocían a sus dirigentes guatemaltecos (Adams, 1957). En febrero de 1955 la CGTG hizo público un primer recuento de personas asesinadas, recogiendo 217 casos.

Con el nuevo gobierno regresó el jefe de la policía secreta de Ubico, José Bernabé Linares. El régimen organizó una campaña de publicidad sobre los asesinatos de anticomunistas cometidos en los últimos días del gobierno de Árbenz, al mismo tiempo que eran saqueadas las casas de dirigentes y activistas revolucionarios. Se persiguió todo lo que tuviera *evidente propósito o fines comunistas*, lo que fuera de *inspiración comunista*, y lo que tuviera *naturaleza y objetivos comunistas*. Para ello se creó el Comité Nacional de Defensa contra el

Comunismo y se emitió la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo. Con el fin de aplicarla bajo una cobertura de legalidad se crearon Tribunales de Instrucción en toda la república. Además, el Comité tuvo facultades para ordenar la detención de cualquier persona, pudiendo determinar el encarcelamiento por 30 días o la libertad vigilada. En los primeros meses después de la caída de Árbenz fueron arrestadas 12,000 personas y se exiliaron unos 2,000 dirigentes sindicales y políticos (Carta de Guatemala, 1954).

La prisión de Escuintla

(Un testimonio)

La cárcel de Escuintla, que está pegada a un cuartel, fue prácticamente inundada de gente. Tenía capacidad para unos 200 presos en la cuadra general y tenía bartolinas para unos 20, pero, increíble, se hizo la denuncia que en los primeros quince días de la invasión de Castillo Armas llegó a tener 10,000 presos. Lo denunciaron los periódicos, como La Prensa, ¡10,000 presos en ese lugar costeño bajo un calor tórrido! Allí murieron muchos... murieron de asfixia dentro de la cárcel. Los compañeros trabajadores que tenían más vigor y más oxígeno levantaban a los que ya se estaban muriendo... había como una vara (84 cms.) entre sus cabezas y el techo. Así respiraban un poco y se salvaban, pero regularmente morían. Todos estábamos parados en la cuadra, no había posibilidad de sentarse. Apenas nos daban agua, nos daban comida una que otra vez. Nuestras necesidades teníamos que hacerlas ahí mismo. A los tres días ya estaba todo lleno de moscas. Unas 60 gentes que estaba amarradas a unos árboles, hasta a los zopilotes tenían encima... después se los llevaron. IC 382, Escuintla, 1954.

El Comité quedó encargado de establecer un registro de todas las personas que en cualquier forma hubiesen participado en actividades comunistas. Figurar en dicho registro constituía grave presunción de peligrosidad de la persona. Los detenidos por orden del Comité no tenían derecho de exhibición personal y el efecto de estar nombrados en el registro les impedía desempeñar cargos o empleos públicos. El registro fue creciendo hasta incluir a todos los opositores y críticos del gobierno. Hacia el 21 de diciembre de 1954, el Comité había elaborado una lista de 72,000 personas.

Además de las represalias políticas, la Liberación originó una reversión agraria y una ola de represión laboral. En agosto fueron disueltas las principales centrales sindicales,¹⁸ partidos políticos y grupos culturales. En julio, Castillo Armas emitió el Decreto 31 que devolvía las tierras expropiadas a sus antiguos dueños con sólo presentar el reclamo a la Dirección General de Asuntos Agrarios. Otro decreto, el

18 La CGTG, la Central Nacional del Campo (CNC), la Federación Sindical de Guatemala (FSG), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), de Trabajadores de la UFCO, y el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF).

51, ordenaba la restitución al Estado de todas las fincas nacionales y disolvía las cooperativas instaladas en ellas. Hacia 1956 sólo 400 familias campesinas permanecían en las tierras expropiadas. El nuevo ministro de Gobernación, Miguel Ortiz Passarelli, finquero de Alta Verapaz, fue la autoridad encargada de dirimir cualquier disputa de devolución de tierras.

A pesar de todo, los temas agrario y laboral ya no saldrían de la agenda política, aunque fueran objeto de duras disputas durante las siguientes décadas. El 30 de diciembre de 1954 se creó una comisión para redactar la nueva legislación agraria. Rodolfo Castillo Armas, hermano del jefe de gobierno, fue nombrado presidente de la Dirección General de Asuntos Agrarios. La AGA solicitó la supresión del Código de Trabajo, pero el gobierno respondió protestando por la forma violenta en que muchos finqueros estaban expulsando a los campesinos de las tierras. En San Martín Jilotepeque, por ejemplo, ante la protesta de 1,500 campesinos beneficiados por la reforma agraria, los finqueros destruyeron sus cosechas (*El Imparcial*, 12/3/55).

En esos primeros meses del gobierno castilloarmista la cuestión agraria y laboral tuvo un marcado carácter de *vendetta* política. A los empresarios se les dio acceso al registro elaborado por el Comité de Defensa contra el Comunismo a fin de contratar o despedir personal. Se denunciaron miles de despidos anómalos en Obras Públicas (2,000), el Hospital General (175), la textilera Cantel (120) la IRCA (que cesó a la mitad de su personal, la mayoría sindicalistas que estaban escondidos), la PanAmerican (26) y el beneficio de café De Sola (26), entre otros.

Mientras, un plan de modernización y fortalecimiento del Estado se comenzó a poner en marcha. Los organismos internacionales otorgaron importantes créditos al país. Se organizó el Consejo Nacional de Planificación Económica y se aprobó el Plan de Desarrollo Económico 1955-60, elaborado por el representante del Banco Mundial para Guatemala. Este plan reconoció a los empresarios una importante iniciativa en el desarrollo. Buscando diversificar las exportaciones, el gobierno eliminó los impuestos de venta del algodón y la ganadería. La administración de los Estados Unidos se había comprometido directamente en el proyecto guatemalteco.¹⁹ En febrero de 1955 el vicepresidente Richard Nixon visitó el país y subrayó: *Es la primera vez en el mundo que un gobierno comunista ha sido sustituido por uno libre. El mundo entero está observando quien hace mejor el trabajo.*

Otro componente del *modelo guatemalteco* que se quería impulsar era la reconstitución del tejido de la organización laboral. Con la asesoría de la AFL-CIO, la ORIT y personas como José García Bauer, en 1954 se creó el Comité Nacional de Reorganización Sindical con 26 dirigentes; también se formó la Federación Sindical Autónoma (FAS), de orientación socialcristiana. La reorganización buscó desplazar a las directivas simpatizantes del anterior régimen, especialmente en las empresas transnacionales. En el caso del STEG se creó la Asociación de Maestros Libres, que se propuso *depurar* el cuerpo magisterial. Hacia marzo de 1955 existían

19 Los Estados Unidos se propuso convertir a Guatemala en una *vitrina anticomunista*, y para ello, destinó más recursos financieros a este país que a toda América Latina junta en el mismo período (Jonas, 1981). Por medio de la Administración de la Corporación Internacional (ACI) se estableció un virtual gobierno paralelo. De esa forma, para cada ministerio se creó una División de la ACI con el mandato de asesorar, planificar y ejecutar proyectos.

35 sindicatos. En febrero de 1956, el Decreto-584 prohibió la sindicalización de los empleados públicos. En 1957 la FAS se inscribió legalmente con el nombre de Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA). Pero gran parte de las actividades reivindicativas eran dirigidas por el Consejo Sindical de Guatemala (CSG) bajo la asesoría del sindicalismo estadounidense, que impulsaba movimientos *sin extremismos*.

Al mismo tiempo que esto ocurría, tres miembros del proscrito PGT -los dirigentes sindicales Miguel Valdez, José Luis Ramos y José Alberto Cardoza-regresaron clandestinamente al país para trabajar en la reorganización del movimiento obrero y desplazar a la dirigencia sindical promovida oficialmente. Los estudiantes, en cambio, organizaron pronto y abiertamente algunas actividades con tintes radicales. En junio de 1956 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) realizó una manifestación pública en conmemoración de las jornadas de 1944 contra Ubico, que fue reprimida por la policía.²⁰ En 1959 los estudiantes de posprimaria fundaron el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), que llevó una importante huelga de alumnos que estalló en febrero de ese año. La huelga se extendió a algunas cabeceras departamentales y fue apoyada por el magisterio, hasta que los estudiantes lograron destituir a la ministra de Educación, Julia Quiñonez Ydígoras.

5. Panorama económico

La modernización económica continuó a través de la diversificación de la actividad agroexportadora. Las fértiles tierras de la costa sur siguieron siendo utilizadas para el cultivo del algodón y del azúcar, aprovechando el bloqueo estadounidense a Cuba. La ganadería se incrementó cada vez más racionalmente explotada. Las tierras recuperadas con la reversión de la reforma agraria permitieron el surgimiento de nuevos finqueros provenientes del Ejército o los funcionarios del gobierno. También las familias tradicionales cafetaleras, terratenientes o comerciantes del interior (El Quiché y Quetzaltenango), invirtieron o consiguieron nuevas tierras en la costa sur, ampliándose a los nuevos cultivos de exportación.

El gobierno prosiguió con la política de colonización de tierras a partir de la Ley de Transformación Agraria, desplazando las áreas de entrega de tierras de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez e Izabal, hacia regiones de Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y El Quiché. Cuando Ydígoras asumió, en marzo de 1958, el Estado poseía 132 fincas que pudieron haberse usado para aliviar las necesidades de los campesinos sin tierras. Sin embargo, el 25 de abril el mandatario nombró a tres grandes finqueros (Julio Héctor Leal, Roberto Berger y Manuel Balda) para que se encargaran de vender las fincas nacionales. Entre los primeros compradores estaban 200 oficiales militares que recibieron lotes

20 Resultaron cuatro estudiantes muertos y cerca de 200 detenidos. Los estudiantes asesinados en la 11 calle y 6 avenida zona 1 eran: Álvaro Castillo Urrutia, Salvador Orozco Pineda, Julio Arturo Rosales y Julio Juárez. La AEU inició un proceso judicial contra Santos Lima Bonilla y Aparicio Cahueque Cano, señalados como autores materiales.

urbanos en dos fincas en las afueras de la capital a un precio de Q 0.05 el metro cuadrado (Melville, 1975). El nuevo director de Asuntos Agrarios, coronel Enrique Peralta Azurdia, anunció en junio que todas las personas que ocupaban o vivían en tierras de la UFCO deberían abandonarlas.

Por otro lado, los inversionistas estadounidenses comenzaron a ampliar sus intereses en el país atraídos por la política de incentivos de su propio gobierno y las facilidades del gobierno ydigorista. En 1959 el mandatario condonó a la IRCA una deuda por impuestos de más de US\$15 millones; la UFCO compró la empresa de conservas vegetales Ducal, con lo que se inició la penetración estadounidense en la industria local.²¹

El producto industrial registró un importante crecimiento, que mantendría durante toda la década, del 9.6% anual, superior al producto interno bruto (PIB). Sin embargo, su participación en la producción general y el empleo apenas creció del 12.9% al 16.6%. Siguió avanzando la institucionalización del Mercado Común Centroamericano que atrajo a inversionistas que ampliaron y modernizaron sus fábricas.²² El gobierno otorgó facilidades para la importación de insumos, protegió a los productores de la competencia extranjera y facilitó préstamos que obtenía del extranjero.

Entre tanto, los conflictos laborales estallaron en varias dependencias públicas (seguro social, magisterio, municipalidades) y en el campo, donde los desalojos de fincas prosiguieron. La aguda crisis fiscal que atravesaba el gobierno le llevó a decretar una rebaja salarial del 10% a todos los empleados públicos. Ello produjo numerosos incidentes. El 20 de julio de 1960 se declaró el estado de sitio, pero el descontento no se aplacó. En agosto siguieron las protestas con cientos de detenidos y heridos por la brutal actuación de la policía y la Policía Militar Ambulante (PMA).

6. La situación política

Carlos Castillo Armas fue el hombre del Departamento de Estado para suceder a Árbenz.²³ No obstante, desde 1952 el general Miguel Ydígoras y

- 21 En el período 1957-63 se registraron las siguientes adquisiciones: la empresa Bolsas de Papel, creada por los Arimany en 1960, fue adquirida en un 67% por la Boise Cascade en 1963; la Coca-Cola compró el 67% de Productos Alimenticios Sharp, de los Ríos Sánchez, y la Colgate Palmolive absorbió el 88% de la empresa Industria Química, de los mismos dueños; Ralston Purina compró el 61% de Autocafé Purina de los Melgar-Frener; se fundó la empresa Industria Harinera Guatemalteca, que fue comprada en 1969 por el grupo General Mills.
- 22 En esos años llegó Domingo Moreira, un industrial procedente de Cuba que prosperó rápidamente gracias al decreto de fomento de la producción de pollo, y que trabajó también en la industria pesquera protegido por las autoridades militares marítimas. En los años 70 Moreira llegó a ser un influyente empresario asociado a los gobiernos militares. El apoyo de Ydígoras a Moreira le ganó la enemistad de la Gremial de Avicultores y de la AGA. El gobierno autorizó la importación de huevos y pollos de granja, negocio que también favoreció a un grupo de agroexportadores de la costa sur, encabezados por Roberto Alejos.
- 23 Los tres nombres que barajó el Departamento de Estado para suceder a Árbenz fueron los del general Miguel Ydígoras Fuentes, el abogado de la UFCO Juan Córdoba Cerna y Castillo Armas.

Castillo Armas habían firmado el llamado Pacto de Caballeros, que establecía que éste sería el Jefe Militar Supremo del movimiento contra Árbenz, y aquel sería el candidato presidencial de las fuerzas anticomunistas. El pacto fue ratificado en agosto de 1953 (Villagrán, 1993).

La primera Junta de Gobierno, compuesta por cinco militares, fue presidida durante quince días por el coronel Elfego Monzón, y luego se eligió entre sus miembros al presidente definitivo. La elección recayó en Castillo Armas, y de inmediato renunciaron los tenientes coroneles Mauricio Dubois y José Luis Cruz Salazar. El 1 de septiembre también dimitieron Elfego Monzón y el mayor Enrique Trinidad Oliva. Así, la Presidencia de la República quedó en manos de Castillo Armas.

El 10 de octubre el nuevo gabinete ministerial convocó a un plebiscito. El referéndum se efectuó al mismo tiempo que la elección de la Asamblea Constituyente. Las respuestas de los ciudadanos se presentaron en público frente a los delegados de las mesas electorales. El sí obtuvo 485,699 votos, contra 400 del *no*. La Asamblea electa le fijó un período de seis años al gobierno de Castillo Armas, el que debió concluir el 15 de marzo de 1960. El 6 de noviembre de 1954 Castillo Armas fue investido Presidente de la República. Ydígoras se sintió traicionado.²⁴

Destacadas figuras pasaron a ocupar puestos en el gobierno, entre ellas, Mario Sandoval Alarcón, líder civil del liberacionismo; Jorge Adán Serrano, como ministro de Gobernación; Jorge Skinner-Klee, abogado representante de empresas multinacionales, fue ministro de Relaciones Exteriores; Jorge Arenales Catalán fue el primer ministro de Economía;²⁵ Manuel Villacorta Vielman, ministro de Trabajo, y Jorge Lizarralde estuvo en Hacienda Pública. Edgar Alvarado Pinetta, finquero en San Martín Jilotepeque, fue el segundo ministro de Economía, y Roberto Herrera Ibarquien fue nombrado embajador en El Salvador.

En 1955 se fundó el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), inspirado en el Movimiento Nacional español, como *partido de la violencia organizada*. Lo dirigían, entre otros, Mario Sandoval Alarcón, Miguel Ortiz Passarelli, Eduardo Taracena de la Cerda y Mario López Villatoro. Poco después se creó el Bloque Juvenil del MDN, que dirigía Alejandro Maldonado Aguirre. En la Constitución de 1956 se declaró la libre formación y funcionamiento de partidos políticos, regidos por el Tribunal Electoral. Se prohibieron expresamente las organizaciones comunistas, y el Comité de Defensa contra el Comunismo continuó funcionando.

24 Los otros miembros de la Junta no quedaron como amigos del régimen. Monzón salió al exilio y, tres años más tarde, el mayor Trinidad Oliva fue procesado bajo la acusación de haber participado en el asesinato contra Castillo Armas.

25 Skinner-Klee, Luis Arturo González, Miguel Ortiz Passarelli y Jorge Arenales Catalán asesoraron a Castillo Armas para convocar la primera Asamblea Constituyente, en la que se quitó el derecho de voto a los analfabetas.

La Constitución del 56

La Constitución entró en vigor el 10 de marzo de 1956, y con ella se reinstaló el marco tradicional de la organización del Estado, como la separación de poderes. No se confirmaron los tribunales especiales; quedaron limitadas las funciones de los tribunales militares, determinando que sólo conocerían los delitos cometidos por miembros del Ejército, salvo en los casos de cabecillas o jefes de acciones armadas contra los poderes públicos.

Se mantuvieron las calidades para ser ciudadanos en relación con los hombres y las mujeres; se reafirmó el sufragio secreto y la representación de las minorías en los cuerpos colegiados. Las municipalidades preservaron su autonomía. El artículo 79 recuperó el amparo (derogado por el Estatuto Político) y se reconocieron las garantías individuales, aunque no se incluyeron todas las de 1945.

A pesar de que la Constitución expresaba que *no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos, faltas y penadas por ley anterior a su publicación* (artículo 62, inciso 1), *se decretó que toda acción comunista individual o asociada es punible* (artículo 62, inciso 2). Como nunca, se definieron las acciones comunistas; la persecución abarcó a personas que viajaran o intentaran viajar *detrás de la cortina de hierro*, o que leyeran sociología o economía marxistas.

El MDN adoptó una posición beligerante en favor de los derechos de los trabajadores, enfrentándose al Partido de Unificación Anticomunista (PUA). En agosto de 1955 había surgido la Democracia Cristiana (DC) con René de León Schlotter, Carlos García Arriola, Federico Cofiño (empresario) y otros. Con ese espectro, Castillo Armas gobernó hasta el día en que fue asesinado, el 26 de julio de 1957.²⁶

A Castillo Armas le sucedió Luis González López, primer designado a la Presidencia, quien convocó a elecciones generales el 20 de octubre de 1957. Entonces surgió una tercera fuerza, el Partido Democrático de Reconciliación, *Redención*, liderado por Ydígoras Fuentes. Se trataba de una fuerza integrante del anticomunismo, pero menos radical. Su principal ofrecimiento electoral fue una política de reconciliación, que aludía a cierto relajamiento en la presión sobre los grupos de izquierda y alguna apertura hacia los grupos populares. Para ello, *Redención* sugería separar del gobierno a la fracción anticomunista del MDN.

El 26 de agosto de 1957 fue fundado el Partido Revolucionario (PR) por sectores no comunistas que provenían de las fuerzas que apoyaron a Arévalo y Árbenz y que deslindaron sus posiciones del PGT, partido que continuaba en la clandestinidad. El PR *procuraba la modernización acelerada del país y una alta dosis de medidas sociales dentro del desarrollo capitalista* (Villagrán, 1993).

26 La autoría del asesinato no llegó a establecerse enteramente, a pesar de que se declaró estado de sitio y que fueron detenidos 400 opositores, entre ellos dirigentes de la nueva FASGUA.

Las elecciones del 20 de octubre aparentemente las ganó Ydígoras, pero el candidato oficialista del MDN, Ortiz Passarelli, se apresuró a proclamar su triunfo y eso provocó la movilización de los ydígoristas, que se extendió a algunos sindicatos y estudiantes. En consecuencia, las elecciones fueron anuladas, se estableció otra vez el estado de sitio, y asumió una junta militar integrada por los coroneles Gonzalo Yurrita Nova, Oscar Mendoza Azurdia y Roberto Lorenzana. Posteriormente el Congreso nombró al coronel Guillermo Flores Avendaño como presidente provisional hasta las elecciones del 19 de enero de 1958, en las que participó el PR con candidato propio. La DC apoyó la candidatura del coronel José Luis Cruz Salazar, junto al MDN. Ydígoras salió ganador y tomó posesión el 2 de marzo de ese año.

Durante el régimen ydígorista la corrupción alcanzó altos niveles. Por ejemplo, el presidente se asignó un sueldo de Q150,000, además de Q1.0 millón para gastos confidenciales (Toriello, 1979). A los pocos meses de instalarse el nuevo gobierno, se vendieron 45 propiedades estatales a precios irrisorios, incluyendo una rematada en Q200 e hipotecada a la semana siguiente en Q48,000 (Melville, 1975).

En 1959 se inició la Acción Cívica del Ejército y llegaron asesores estadounidenses bajo la dirección del mayor Karl Krueger. La Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) financió el programa con US\$5 millones. El 13 de noviembre se produjo una sublevación militar, sofocada después de varios días de combate en Zacapa y Puerto Barrios. Se declaró estado de sitio, se realizaron cateos masivos y se produjo la expatriación de los opositores. Fue en ese contexto que se organizó la guerrilla.

7. El Clima en los cuarteles

Tras la renuncia de Árbenz, en el Ejército cundió la desmoralización. La fuerza armada no sólo había fracasado en defender la soberanía nacional y el orden constitucional, sino que las formas triunfalistas del ejército liberacionista subrayaban la baja afirmación de su identidad. El gobierno de Castillo Armas insistió en la unificación de la ideología anticomunista junto a la *depuración castrense*. Eso implicaba la incorporación del ejército liberacionista a las filas regulares con rangos militares y la alteración de la jerarquía institucional. Este conjunto de factores desató un clima de conspiración entre los cadetes de la Escuela Politécnica.

El mismo día en que algunos aspirantes a oficiales del Ejército fueron apresados y obligados a bailar desnudos en un prostíbulo, los dos ejércitos desfilaron por la sexta avenida de la zona 1, entre los abucheos del público. La madrugada del siguiente día, 2 de agosto de 1954, un grupo de cadetes atacó los separos del Hospital Roosevelt donde acampaban cientos de liberacionistas. La refriega duró catorce horas; 136 estudiantes militares, varios ex-cadetes y más tarde con el apoyo de morteros y fusiles que la Base Militar La Aurora mandó acompañados de dos tanques, neutralizaron a la tropa irregular de la Liberación (Cox, 1995).

Para cesar las hostilidades y evitar que saliera de total control se hizo un pacto, con el arzobispo Rossell como garante, pero éste se violó y luego vinieron

los castigos: cadetes acusados de comunistas por ser familiares de ex-funcionarios de Árbenz, algunos encarcelados en las penitenciarías de Antigua y Chimaltenango, otros más enviados a Brasil, Argentina y Francia, y luego el cierre temporal de la Escuela Politécnica. A partir de entonces en el Ejército se expresaron dos corrientes que habrían de separarse con los acontecimientos del 13 de noviembre de 1960: el anticomunismo oficial y la exacerbación del sentimiento *anti-yanqui*.

La existencia de seis gobiernos en tres meses mostró que no era posible volver a junio de 1944 (al ubiquismo). Los liberacionistas tenían opositores dentro del Ejército, entre ellos el coronel Elfego Monzón, que integró varias juntas de transición. El 31 de diciembre de 1955 se llevó a cabo una asonada cuyo blanco fue la Base Militar La Aurora. Se acusó al coronel Francisco Cosenza, piloto aviador y compañero de promoción de Árbenz, y al cadete Rodrigo Hernández, quien había participado en el 2 de agosto. La ocasión se aprovechó para fusilar a varios opositores al régimen y enviar al exilio a los implicados (Cox, 1995).

Hacia 1957 Castillo Armas había logrado consolidarse en el Ejército, pero en junio se descubrió otro conato de golpe que pretendía derrocarlo y retomar el programa de Árbenz. Quien dirigía ese movimiento era el coronel Carlos Alberto Sarti, quien cinco años atrás había arrancado los grados al entonces capitán Castillo Armas. El jefe de la Policía Nacional, Bernabé Linares, mandó a asesinar a Sarti, al coronel Francisco Méndez Montenegro, al mayor Prera y a un dirigente ferrocarrilero (Macías, 1997). Mientras tanto, el gobierno, urgido por los Estados Unidos, trataba de controlar las áreas rurales sin mucho éxito.

Tras el asesinato de Castillo Armas se produjo otro período de inestabilidad en el que los militares jugaron papeles no convincentes para la liberación, eso incluyó el bloqueo de su candidato en 1957. Al mismo tiempo se reforzó su injerencia en asuntos policíacos y políticos. Las represiones callejeras fueron cada vez más violentas. Los jóvenes de secundaria desataron una serie de protestas contra el gobierno y comenzaron a coordinar sus acciones opositoras. Los estudiantes añoraban a los militares de Árbenz, prestaban atención a los discursos del ex-canciller Guillermo Toriello y las ideas del escritor Luis Cardoza y Aragón, y seguían viendo en el cuartel la pieza clave para el rescate de la dignidad nacional (Cox, 1995).

Ydígoras prometió reconciliación y pidió participación. Pero el gobierno no estaba preparado para asimilar el conjunto de las expectativas. Y éstas se desbordaron en reclamos de todo tipo. La juventud aglutinada en el FUEGO recibió con vítores el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959. Poco después, el 26 de julio, estallaron bombas en la Embajada de los Estados Unidos y en el Palacio Arzobispal. Ydígoras tomó todo esto a la ligera, en medio del descontento de algunos militares y de cierta opinión pública que recordaba los días en que el general gobernaba con mano de hierro como jefe político del ubiquismo.

En los cuarteles privaba la idea de que el Ejército debía profesionalizarse y no inmiscuirse más en política partidaria. El capitán Charles Bushong, un ranger estadounidense, entrenaba desde 1957 a los futuros oficiales en operaciones no convencionales de montaña y ataque de jungla. Los más destacados y ambiciosos recibían becas en Fort Benning, Fort Sill y Fort Guilick, donde eran adiestrados en programas de guerra de guerrillas (Cox, 1995).

Capítulo Segundo

El conflicto armado en los años 60

1. La sublevación del 13 de noviembre

En 1960 el Ejército experimentaba sentimientos contradictorios. Ciertos oficiales se habían involucrado en la corrupción a la que Ydígoras los atraía, al mismo tiempo que muchos militares de campo veían con desagrado e indignación el entrenamiento de la fuerza cubana anticastrista en la finca Helvetia (Retalhuleu), propiedad de Roberto Alejos Arzú. A éstos les recordaba la plataforma que los Estados Unidos montaron en Honduras y Nicaragua para derrocar a Árbenz. Además veían en los disturbios callejeros un indicador del deterioro y la impopularidad general del gobierno.

Las diferentes corrientes militares se venían organizando desde tiempo atrás. La más numerosa, que se hacía llamar la Compañía de Niños de Jesús,¹ nucleaba a oficiales del Ejército que estaban interesados en discutir la situación política y económica del país. Otro grupo de oficiales del Cuartel General estaban dirigidos por el coronel Carlos Paz Tejada, quien se encontraba de baja y era ubicado políticamente más a la izquierda. El tercer grupo estaba formado por oficiales que, como cadetes, habían participado en los sucesos del 2 de agosto.

Arturo Chur del Cid, uno de los principales promotores del movimiento, señala que dos fueron las motivaciones principales del alzamiento del 13 de noviembre: barrer la corrupción del gobierno y el sentimiento de vergüenza por haber prestado el territorio nacional para el entrenamiento de cubanos disidentes (Silva Girón, 1994). La primera acción pública de la Compañía fue denunciar, a mediados de 1960, en campo pagado en la prensa los pormenores del entrenamiento de los cubanos en la Helvetia. La publicación fue firmada por el coronel Paz Tejada, pues su condición de baja se lo permitía. Incluso el ex-militar arbencista se presentó al Congreso con la intención de hacer la denuncia.

1 La Compañía Niños de Jesús, según narra uno de sus fundadores, Ricardo Córdón, fue constituida a su regreso de Argentina, a donde viajó con el teniente Alejandro de León para estudiar en el Colegio Militar. Allí conocieron la experiencia del segundo gobierno de Juan Domingo Perón y quedaron impresionados por los discursos de Augusto Frondizi. De regreso a Guatemala, la Revolución cubana también les generó cierta simpatía en sus aspectos nacionalistas y antidictatoriales. En sus conversaciones sobre la situación nacional surgió la inquietud acerca de las condiciones sociales de la población. Estaban contra el ministro de la Defensa y otros altos oficiales, pues consideraban que eran complacientes con la corrupción. Hacia 1959 ya estaban integrados a la Compañía unos 100 oficiales, la mayoría tenientes. Ellos pensaban que desde el Ejército se podía hacer una revolución rápida. No tenían una ideología definida (Cox, 1995).

La sublevación del 13 de noviembre se organizó a nivel de cuarteles dispersos, lo que dificultó su coordinación inicial. La filiación de los insurrectos se hizo a través de la firma de una petición de destitución del ministro de la Defensa, coronel Rubén González Siguí. Para tal efecto, los oficiales firmaban la petición con su nombre completo, y recibían una tarjeta que llevaba impreso un ángel a colores. De ahí vino el nombre de Compañía Niños de Jesús. Uno de los gestores de la rebelión fue el mayor Rafael Sesam Pereira, que había participado en la batalla de Gualán contra los liberacionistas en 1954. Pero el autor más destacado del movimiento fue el capitán Arturo Chur del Cid, recluido en el Cuartel General desde octubre, bajo sospecha de estar conspirando contra Ydígoras.

Ese mismo procedimiento se había empleado en otros cuarteles desde hacía meses. A principios de noviembre fue detenido el coronel Eduardo Llerena Müller, el teniente coronel Hernán Herrera y el teniente Marco Antonio Yon Sosa. Yon Sosa en realidad sabía poco de la conjura, pero era sospechoso por su amistad con Chur del Cid. En total 55 oficiales acuerpaban la rebelión.

Los planes sin embargo se alteraron el 12 de noviembre, cuando fueron dados de baja Herrera Martínez y el capitán César Augusto Silva Girón, el defensor de la plaza de Gualán en 1954, que había sido juzgado y encarcelado por los tribunales de guerra de la Liberación. Ese mismo día se decidió iniciar la sublevación con la toma del Cuartel General. Poco antes de la medianoche Chur del Cid, Yon Sosa y el sargento Werner neutralizaron a la Guardia de Prevención. De los 55 oficiales comprometidos para asistir esa mañana, únicamente se presentaron cinco, entre ellos el teniente coronel Augusto Loarca y los mayores Sesam Pereira y Chicas Lemus. Se apoderaron del cuartel militar, después de haber matado a dos oficiales que se resistieron.

Infructuosamente los rebeldes buscaron al coronel Carlos Paz Tejada para que se hiciera cargo del mando. Pero éste permanecía clandestino tras el levantamiento fallido del teniente Guillermo Lavagnino, en julio de 1960, y de haber publicado las denuncias de la invasión que se preparaba en la finca Helvetia.² En medio de la confusión se dio la orden de que los alzados se trasladaran a Zacapa, en cuya base militar se harían fuertes, pues tendrían el apoyo de la base de Puerto Barrios (Rosales, 1996). Los militares alzados se enfilaron hacia Zacapa con numerosos vehículos militares y varias docenas de soldados y sargentos de la PMA. En torno a las 5:00 horas, el coronel Eduardo Llerena Müller tomó el cuartel de Puerto Barrios sin derramar sangre. Al amanecer sobrevoló el cuartel de Zacapa un avión procedente de Puerto Barrios, el que lanzó un fajo de volantes en los que pedían a los oficiales, en nombre de Llerena Müller, acuerpar el movimiento.

El llamado Manifiesto del 13 de Noviembre -aunque no fue preparado como tal- aludía a *caos total tanto en lo político como en lo económico, y sostenía que sólo el Ejército puede cooperar efectivamente con el pueblo para desterrar a la reacción y a sus aliados, los militares que detentan el poder y se enriquecen a costa del pueblo... Se llamaba a instaurar un régimen de justicia social en que la riqueza sea de quienes trabajan y no de los explotadores, hambreadores del pueblo y de los gringos imperialistas.*

2 El teniente Lavagnino encabezó a un grupo de militares y civiles, entre éstos Alejandro Silva Falla y algunos jóvenes vinculados al PGT, que intentó ocupar la base militar de Cobán.

El subteniente Luis Trejo Esquivel preparó el sometimiento del cuartel de Zacapa, pero la coordinación fracasó en Jutiapa y El Quiché. En Jutiapa, el comandante de la base mandó a capturar a Silva Girón. En Occidente, el jefe de Reservas Militares de Totonicapán, había infiltrado a los conspiradores para luego denunciarlos a Ydígoras. Quetzaltenango, que era la pieza clave para el éxito de la operación, siguió leal al gobierno. Así, las bases de Puerto Barrios y Zacapa quedaron aisladas.

Ydígoras alcanzó a neutralizar a la fuerza aérea, que parecía estar comprometida en el complot, mostrando a los pilotos cheques (falsos) supuestamente girados por Fidel Castro a los oficiales del alzamiento, que sumaban US\$1.0 millón. La fuerza aérea no se sumó al alzamiento, pero se negó a actuar contra los insurrectos. Entonces la embajada de los Estados Unidos ofreció la flota aérea estacionada en la costa sur, que sería la que atacaría a Cuba. Esta fuerza estaba compuesta por 76 aviones de distinto tipo, en su mayor parte bombarderos B-26 y C-46. Sólo esta flotilla superaba con mucho a las fuerzas aéreas de toda Centroamérica (Cox, 1995).

El gobernante formó un agrupamiento de combate para destruir a los alzados, que incluían a buen número de los miembros de la Compañía Niños de Jesús. El principal enfrentamiento tuvo lugar la tarde del 14 de noviembre y por parte de los rebeldes lo dirigió Yon Sosa, pero el balance se decidió en favor de las tropas oficiales cuando entró en combate la aviación estadounidense dirigida por pilotos cubanos. La madrugada del 15 de noviembre hubo un conato de sublevación en la fuerza aérea, que Ydígoras personalmente se encargó de controlar. Los aviones sin bandera que iban a ser utilizados en Cuba bombardearon la base de Puerto Barrios que permanecía bajo el control de Llerena Müller.

La tarde del 17 de noviembre las fuerzas operativas al mando del coronel Enrique Peralta Azurdía ocuparon sin resistencia la base de Puerto Barrios y pusieron fin a la intentona. Llerena Müller y su comando insurrecto huyeron y se dispersaron en la montaña. En 70 horas había quedado aplastada la sublevación. Muchos de sus integrantes, en su mayoría soldados, se entregaron a las tropas gobiernistas. Pero la mayoría de oficiales se escondieron y varios más se dispersaron hacia Honduras, El Salvador y México.

Aunque casi la mitad de la oficialidad simpatizaba con la causa de los insurrectos, en los momentos decisivos mantuvieron su lealtad a las órdenes superiores. Esta vez, a diferencia de 1954, los oficiales cumplieron con el *deber militar*. Por otro lado, hizo falta una figura unificadora de tendencias tan heterogéneas entre los descontentos. A partir de entonces, *la convicción revolucionaria dejó de ser una preocupación del Ejército y se convirtió en una bandera guerrillera* (Cox, 1995).

Como resultado del sofocamiento de la sublevación del 13 de noviembre, unos 70 oficiales, sargentos y soldados se exiliaron. De ellos, los de Honduras (que eran unos 45) continuaron conspirando e hicieron contactos con el PR, el MDN y la DC. Los políticos confabulaban por su lado y les pidieron a los ex-militares no actuar por su cuenta, pues esperaban pronto un golpe de Estado por otra fracción del Ejército. Es más, requirieron al grupo que se trasladara a Guatemala. Por esa razón el 6 de marzo de 1961, 23 de los alzados cruzaron la frontera subrepticamente y llegaron a la ciudad de Guatemala el 12 de ese mes.

Pero en las conversaciones con los partidos se fueron pasando los meses, sin que sucediera nada. Entre tanto, otros hechos sobrevinieron. El 29 de abril se produjo una refriega entre algunos de los *trecistas* y policías judiciales, que de hecho fue el primer choque armado en esta nueva etapa. El cerco policial y militar se fue estrechando y en julio, en un nuevo tiroteo con las fuerzas de seguridad, fue muerto el teniente Alejandro de León Aragón, uno de los líderes del grupo.

En esos mismos días los rebeldes entablaron relación con el PGT. En mayo de ese año, los comunistas habían aprobado la resolución *Táctica general, desarrollo y formas de lucha de la revolución guatemalteca*, que señalaba por primera vez la vía violenta, marcando un viraje en su línea política. No se sabe si ese contacto con los *trecistas* ocurrió antes o después de la aprobación del documento. En cualquier caso, aun dentro de la misma dirección del PGT, esa resolución no tenía interpretaciones unívocas.³

2. El escenario político posterior

Tres meses después de sofocada la rebelión militar las fuerzas ydigoristas presentaron al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, que pretendía establecer un registro no sólo de todas las personas vinculadas al clandestino PGT, sino de las que colaboraban con entidades que podían estar vinculadas directa o indirectamente al comunismo, como los sindicatos más activos.

El 3 de diciembre de 1961 se convocó a elecciones de diputados para renovar la mitad del Congreso. El presidente Ydígoras, con su partido *Redención*, se presentó en coalición con el MDN de Cruz Salazar y Luis Alfonso López, y con la Unidad Democrática, de los abogados Carlos Enrique Peralta Méndez, Arturo Campollo y Jorge Luis Zelaya Coronado. Esa alianza proclamó su triunfo e integró una junta directiva sin participación de ninguna otra fuerza. Pero, como sucedió en los comicios del 20 de octubre de 1957, nunca estuvo claro el resultado electoral. Como oposición se presentaron los aliados MLN-DC-PR y varias escisiones del PR (como el PUR, el PRA y el PNR), que aseguraron preparar la candidatura de Juan José Arévalo para las elecciones presidenciales de 1963. Surgió también la URD, dirigida por Manuel Colom Argueta, Alfredo Balsells Tojo, Américo Cifuentes y Roderico Segura.

El gobierno atravesaba una severa crisis fiscal, la que dio lugar a un debate público acerca de la necesidad de elevar determinados impuestos. La prensa

3 Para Mario Silva Jonama, *se había aprobado como línea fundamental del Partido la lucha armada popular y elaborado un documento llamado de los 'Once Puntos', que señalaba las medidas políticas y organizativas a tomar* (Silva Jonama, 1971). Alfredo Guerra-Borges, otro dirigente del PGT, matizaba esa afirmación: *En su resolución... el Comité Central advirtió que las clases dominantes estaban cerrando la vía de desarrollo pacífico de la lucha... y dio la directiva de preparar al Partido para librar la lucha armada cuando se hiciera inevitable y hubieran madurado las condiciones para ello. Al mismo tiempo... subrayó la necesidad de utilizar todas las formas de lucha... y de formar un amplio frente único de todas las fuerzas democráticas* (Guerra- Borges, 1964).

publicó un manifiesto de 18,000 personas pidiendo que *los ricos paguen más impuestos*, y varios sindicatos se sumaron apoyando las medidas tributarias. En octubre, ante la solicitud de los cafetaleros de una reducción de impuestos a las exportaciones, el Presidente declaró que esta sería posible sólo si el Congreso aprobaba un impuesto sobre la renta.

El Organismo Judicial

A pesar de su debilidad y de actuar dentro de un sistema de presiones políticas, el Organismo Judicial no se subordinó enteramente al Poder Ejecutivo y logró cierto espacio de funcionamiento. Los periódicos de las semanas posteriores al levantamiento del 13 de noviembre estuvieron llenos de artículos sobre recursos de exhibición personal, expuestos en los tribunales. Es claro que el estado de sitio promulgado ese mismo día había limitado el recurso a un instrumento sólo para establecer el tratamiento de los detenidos. Por eso, en algunos casos, no se tramitó la exhibición personal, pues los detenidos o sus familiares no habían denunciado torturas o malos tratos. Pero al cumplir esa tarea, los tribunales aseguraron cierta protección dentro de las cárceles, incluyendo los autos de prisión provisionales otorgados por los tribunales militares.

En el caso de la suspensión de la circulación por 20 días del periódico *El Imparcial* (debido a la publicación de un reportaje del levantamiento en el Cuartel General), la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo en favor del diario, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás.

3. Las Jornadas de marzo y abril

Como consecuencia de los dudosos resultados electorales de diciembre de 1961, la oposición comenzó acciones de protesta en las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango. Prácticamente todo el mes fue de reclamos callejeros contra el supuesto fraude electoral.⁴ En las primeras acciones de protesta fueron detenidas 17 personas. También fueron capturados, entre otros, Mario Méndez Montenegro (líder del PR) y Manuel Colom Argueta. La Asociación de Estudiantes El Derecho (AED) realizó una manifestación el 19 de diciembre para protestar por las detenciones ilegales y la consignación de personas civiles a juzgados militares. Un día después los diarios informaban que, desde el exterior, el ex-presidente Juan José Arévalo aceptaba presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales.

En enero de 1962 comenzó una ola de atentados con bombas que se atribuyeron al propio gobierno. En total estallaron unas 15 bombas de débil

4 Entre los hechos que hicieron pensar en un fraude estaba el que sujetos desconocidos penetraron a la sede del Tribunal Electoral y quemaron las papeletas de El Quiché y Huehuetenango, haciendo suponer a la oposición que habían sido agentes del gobierno. Ydígoras, a su vez, culpó a los partidos opositores.

poder destructivo. En ese mismo mes, los estudiantes de la Escuela Rural de Totonicapán se declararon en huelga y les siguieron los de la Escuela Normal Central para Varones. El FUEGO se solidarizó con el movimiento y otros centros educativos se les sumaron. Los dirigentes liberacionistas, por su parte, culparon a Ydígoras por el clima de agitación política, mientras el gobierno continuaba con las detenciones y sostenía la existencia de una conjura comunista debido a que su embajador en la OEA estaba presionando para que se expulsara a Cuba de ese organismo.

El 15 de febrero la AEU emitió una declaración culpando al gobierno de las consecuencias del clima de inseguridad. El día 26 la policía judicial asaltó la sede de FASGUA, pero el movimiento sindical no intervino todavía. El 9 de marzo los estudiantes realizaron el primer paro de tráfico ciudadano y diversos sectores se les adhirieron. La AEU organizó las protestas callejeras y preparó otro paro de tráfico para el 13 de marzo, día que se convirtió en una jornada generalizada de enfrentamiento con la policía. La respuesta violenta de las fuerzas de seguridad llevó a la AEU a proponer una huelga general para exigir la renuncia de Ydígoras.⁵ Los trabajadores se sumaron y acordaron constituir el Frente Obrero Nacional (FON), en el que participaron FASGUA, el SAMF y el sindicato de la Empresa Eléctrica.

La propuesta de la AEU, que recogía las aspiraciones de algunos sectores políticos, hizo sin embargo retroceder a otros. La lucha callejera amainó, pero las acciones de sabotaje de los estudiantes continuaron. Un punto de quiebre ocurrió el 12 de abril cuando, desde un vehículo militar, dispararon contra un grupo de estudiantes de Derecho que estaba en las puertas de la facultad y resultaron muertos Armando Funes, Jorge Gálvez y Noé López Toledo. Como consecuencia de estos crímenes las protestas adquirieron más fuerza, ya no por medio de enfrentamientos callejeros sino a través de una presión política de las instituciones, encabezadas por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, que insistieron en pedir la renuncia de Ydígoras.

La huelga general se extendió a la municipalidad capitalina, los trabajadores del IGSS y otros. El 24 de abril el SAMF declaró la huelga desde las instalaciones ferroviarias de Puerto Barrios. Organizaciones de estudiantes, periodistas, sindicatos y mujeres constituyeron el Frente Cívico Nacional. Varios partidos apoyaron el regreso de Arévalo.

4. Secuelas de la crisis

Durante la crisis política de marzo y abril los partidos de oposición se mantuvieron alejados. El PR retiró públicamente su apoyo al movimiento de protesta. Si bien la DC no tomaba parte de las marchas, sus grupos juveniles, como la Juventud Universitaria Centroamericana (JUCA) y el Frente Estudiantil

5 La plataforma de los universitarios incluía la renuncia de Ydígoras, la disolución del Congreso, la derogatoria de la Constitución de 1956, la restitución de la de 1945, y la aplicación de la reforma agraria y la reforma urbana.

Socialcristiano (FESC), participaron junto a la AEU y el FUEGO. En respuesta a estas movilizaciones, Ydígoras conformó un gabinete militar e hizo despliegue de su propia fuerza. Desplazó a 7,000 trabajadores de las fincas nacionales para que le manifestaran su apoyo, y despidió a otros 200 que se negaron a participar. Sin embargo, una parte de los empresarios, la Asociación General de Comerciantes de Guatemala, opuestos a la política económica del gobierno y a la corrupción, apoyó las protestas.⁶

El saldo de la crisis fueron alrededor de 100 muertos, cerca de 1,000 heridos y aproximadamente 3,000 detenidos. En esos meses surgió la primera organización paramilitar, o escuadrón de la muerte, el Frente Secreto Anticomunista.

Después de la crisis Ydígoras nombró como ministro de Trabajo al coronel José Luis Aguilar de León, jefe de la policía judicial. Numerosos empleados fueron despedidos por su participación en las protestas, especialmente los ferrocarrileros, y se les prohibió la celebración del 1 de mayo. Sin embargo, las organizaciones continuaron creciendo. El 11 de mayo la prensa informó de la creación del Comité de Unidad Sindical, compuesto por trece organizaciones obreras, entre ellas el STIGSS, el SAMF, la FASGUA y la ATGR. También en mayo, surgió el Frente Cristiano de los Trabajadores de Guatemala, que intentó sin resultados organizar a los 1,200 trabajadores de la GINSA.

En las zonas rurales la contrarreforma agraria continuaba, a la par de los movimientos por mejores salarios.⁷ El 4 de enero se anunció la disolución del Departamento de Fincas Nacionales. En ese momento se estaban devolviendo 16 fincas a los Notebaum, otras tantas al INFOP, al Banco Nacional Agrario y al Crédito Hipotecario, otras más fueron vendidas. Unas 20,000 familias campesinas se vieron afectadas, y los conflictos continuaron. En junio fueron desalojadas por la UFCO 200 familias de El Semillero, Escuintla. Ydígoras trató de establecer una política y emitió el decreto 1551, Ley de Transformación Agraria, que era un calco del decreto 559 de Castillo Armas, pero puso tantos o más obstáculos burocráticos para impedir cualquier reparto agrario. Entretanto, Juan Mini, amigo de Ydígoras, recibió fincas valoradas en Q1.0 millón a cambio de unos terrenos en la capital. Arturo Samayoa, propietario de cines y amigo del presidente, obtuvo la finca Xolhuitz, valorada en Q239,000.

La actividad partidaria ofreció algunas sorpresas. El 20 de octubre se anunció la candidatura presidencial de Juan José Arévalo para las elecciones de 1963. El candidato del MDN era Cruz Salazar; el del MLN, el coronel Luis Urrutia; el de la DC, Alfredo Obiols; el del PR, Mario Méndez Montenegro, y el de Ydígoras, Roberto Alejos. En noviembre se celebraron elecciones para alcalde de Guatemala, en las que triunfó el candidato independiente Francisco Montenegro Sierra. A la luz de esos resultados, el cálculo del ministro de la Defensa y de los partidos de oposición era que Arévalo podría triunfar (Villagrán, 1993).

6 En abril, la Asociación Agrícola del País se sumó a la petición de renuncia de Ydígoras, pero al igual que la Asociación de Comerciantes, pidió la integración de un gobierno militar. La Cámara de Comercio, en cambio, se enfrentó a estas posiciones por considerar que si caía el gobierno los comunistas tomarían el poder.

7 El salario mínimo en las fincas era de Q0.80 diarios, en tanto que para las ocupaciones industriales y de servicios era de Q1.50. La Organización Internacional del Trabajo había declarado en 1962 que el salario diario mínimo para un nivel de vida compatible con la dignidad humana en Guatemala debía ser de Q2.75.

5. Las incipientes guerrillas

Los trecistas

El movimiento de marzo y abril se fue aplacando y no pudo conseguir su objetivo; pero el gobierno tampoco logró desarticular al movimiento opositor. El Ejército, cuya ala más conservadora había alcanzado la hegemonía y unidad interna, se convirtió en pilar del régimen. Esos eventos también tuvieron un impacto en los grupos clandestinos, el PGT y los *trecistas*, aunque la explosión popular y la crisis militar, esta vez, no coincidieron.

Los *trecistas*, encabezados por el teniente coronel Augusto Loarca, el teniente Marco Antonio Yon Sosa, los subtenientes Luis Augusto Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel, entre otros, pasaron a la acción en plena efervescencia política. El 24 de enero de 1962, en una céntrica avenida de la capital, dieron muerte al jefe del Departamento de la Policía Judicial, Ranulfo González Ovalle (*Siete Litros*), a quien consideraban el principal responsable de la muerte del teniente Alejandro de León Aragón. Dos semanas después, el 6 de febrero, este grupo compuesto en su mayoría por jóvenes ex-oficiales, ex-sargentos y ex-soldados, fundó el Frente Insurreccional Alejandro de León Aragón-13 de Noviembre, y de inmediato se trasladaron al nororiente del país con el propósito de tomar la base militar de Zacapa.

Su primer objetivo fue una pequeña guarnición militar ubicada en Bananera, Morales, Izabal, en donde, además, destruyeron las oficinas de la UFCO y se apoderaron de Q18,000 de la empresa. En la acción murió el jefe del destacamento militar, resultó herido un comisionado militar y fue hecho prisionero un soldado.

De inmediato los rebeldes se dividieron en tres columnas guerrilleras comandadas por Yon Sosa, Trejo Esquivel y el ex-teniente Julio Bolaños San Juan. Así divididos, chocaron en diversos puntos con las fuerzas oficiales. Se produjo un enfrentamiento en el cruce del municipio Entre Ríos, Izabal, en el que, según el Estado Mayor Presidencial, fue herido un teniente del Ejército de apellido Ruano, y se dio otro combate a la altura del kilómetro 80 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Progreso.

El plan inicial era que las tres columnas realizaran diversas acciones armadas y se reunieran cerca de Teculután, Zacapa. Solamente la columna de Yon Sosa llegó al lugar señalado, pues la persecución que desplegó el Ejército hizo que las columnas de Trejo y Bolaños se dispersaran. La columna de Trejos estaba compuesta por soldados que se habían unido a los rebeldes en el ataque de Bananera, pero desertaron por la persecución de la fuerza armada. La de Bolaños perdió a sus tres jefes militares en combate.⁸ Bajo constantes vuelos de aviones militares de reconocimiento, la columna de Yon Sosa dio varios rodeos por las estribaciones de la Sierra de las Minas. Unos 23 rebeldes fueron vistos en las cercanías de El Jute, Zacapa, mientras que otro grupo (o quizás el mismo) fue avistado cerca de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde abandonaron algunas armas (*Prensa Libre*, 9/2/62).

La imposibilidad del ataque a la base militar de Zacapa, en donde esperaban que antiguos compañeros de armas se les unieran, aunada a la persecución del

8 Fueron muertos el ex-subteniente Zenón de Jesús Reyna y el ex-sargento Antonio López García, y Bolaños quedó gravemente herido.

Ejército, obligó a los rebeldes a regresar a la ciudad de Guatemala para reorganizarse. En la capital tomaron la radiodifusora Radio Internacional y leyeron el documento *Quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos*. Crearon el comando Marco Antonio Gutiérrez,⁹ al mando de Luis Turcios Lima, y realizaron acciones de sabotaje en medio de las protestas callejeras de marzo y abril.

El foco de Concuá

El 14 de marzo el gobierno divulgó un boletín de prensa en el que informaba que un día antes un grupo de facciosos había chocado con una patrulla militar en un punto entre Concuá y Granados, en Baja Verapaz. En ese enfrentamiento, según el boletín, murieron ocho desconocidos y fue capturado Rodrigo Asturias Amado, hijo del escritor Miguel Ángel Asturias (*Prensa Libre*, 15/3/62).

Desde hacía algún tiempo, el PGT, junto con el Partido de Unidad Revolucionaria Democrática (PURD), prepararon un grupo guerrillero al que denominaron Frente Guerrillero (o Destacamento) 20 de Octubre, bajo el mando del coronel Carlos Paz Tejada. Este grupo divulgó un manifiesto titulado *¡El único camino es la rebelión! ¡No más Ydígoras!* y se internó en las montañas de Baja Verapaz. Este grupo, compuesto por 23 hombres, fue sorprendido y aniquilado por el Ejército. Sus fallas eran graves: desconocían el terreno, su entrenamiento militar era deficiente, descuidaron las medidas de seguridad, y carecían de apoyo social (PGT, 1962).

Los muertos en realidad fueron trece: Octavio Reyes Ortiz, José Mauro de León, Francisco Barrios de León, Brasil Hernández, Marcial Asturias, Amado Izquierdo, Alfonso Jocol y Roberto Cáceres, del PGT; Rodolfo Heller Plaja y Carlos Toledo Hernández, de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT); Moisés Quilo, Guillermo Grajeda y Jaime Facundo Reyes, del PURD. La Secretaría de Información de la Presidencia dio a conocer, poco después, que también habían sido capturados Julio René Rodríguez Aldana, Leonardo Figueroa Hidalgo y Raquel Archila Ortiz; a ellos habría que sumar otros nombres: Leonardo García Benavente, Hugo Rodríguez y Eduardo Aragón. Además fueron aprehendidos, supuestamente por estar relacionados con los sucesos, Eduardo García Aragón Gómez, Eduviges Aragón Ortiz y el capitán Irineo Lokom Marzer. Paz Tejada no pudo ser capturado.

La columna de Huehuetenango

A finales de marzo otro grupo guerrillero, proveniente de México, cruzó la frontera por Huehuetenango y fue capturado en los alrededores de San Mateo Ixtatán. Uno de los guerrilleros habría dejado olvidada una granada de mano en casa de una familia campesina y el artefacto explotó matando a los miembros del grupo. El hecho enfureció a los lugareños, quienes persiguieron y capturaron a los guerrilleros para entregarlos al Ejército. Los detenidos fueron consignados a un tribunal de El Quiché.

9 Marco Antonio Gutiérrez era estudiante de la Facultad de Economía que murió a consecuencia de los sucesos del 13 de marzo.

El grupo guerrillero estaba integrado por los ex-subtenientes Rubén Méndez Orozco, Fernando Morales Eriarte, Bernardo Alfredo López; el ex-teniente José Guillermo Lavagnino, el ex-sargento Carlos Enrique Urrutia y el chofer José Daniel Quintana Tejeda, todos participantes de la rebelión del 13 de Noviembre. También formaron parte del grupo el profesor universitario Rafael Garzaro y el estudiante César Augusto Yon Sosa (hermano de Marco Antonio Yon Sosa).

Los brotes guerrilleros fracasaron en su primera tentativa, pero el sofocamiento de las movilizaciones populares dio nuevos argumentos a los grupos armados, y el resto del año se dedicaron a reorganizarse. La última acción militar de esos meses fue el incendio, el 2 de mayo, de los depósitos de combustible de la Esso Standard Oil en las afueras de la ciudad.

La guerrilla en San Mateo Ixtatán

(Un testimonio)

Fue en invierno cuando agarraron a esos señores. Las milpas ya estaban jiloteando. Yo estaba en la escuela, pero ese día no nos dieron clases, por el susto cuando llegaron unos 200 soldados. Los soldados llegaron porque supieron que los comunistas (así se les decía entonces, no les decían guerrilleros) estaban por ahí... Tenían razón, a los comunistas los habían visto arriba de Nucá. Toda la gente del pueblo se levantó con sus palos, machetes y palos, y fueron a rastrearlos, y en un caserío que se llamaba Xogovio agarraron a uno de esos señores.

Otra noche la gente se levantó a buscar, porque ellos (los guerrilleros) habían entrado al pueblo. Como a las once o doce de la noche encontraron a uno que era compañero de los comunistas. Son los mismos dijo la gente. Los comisionados militares, gente ladina, salieron con sus escopetas y dispararon al encontrar al señor. Al oír los disparos el señor se paró, allí lo agarraron y lo trajeron con los soldados. Al amanecer de ese día la gente del pueblo dijo que había visto a dos o tres de los comunistas en una ruina que se llamaba Calvario... antes era guatal todo eso... abajo de unos arbolitos estaban metidos ellos. La gente los agarró y los entregó a las manos de los soldados. Pero uno se les escapó y se fue a meter a un campamento de camineros que se llamaba Polpo. Los soldados lo supieron y fueron a hablar con el jefe de caminos, que se llamaba Guayo. El mismo jefe de caminos trajo en su carro al comunista, con las manos amarradas para atrás... Al señor lo empujaron los soldados y vino a caer al suelo. Su pelo era como el de las mujeres, usaba el pelo muy largo.

Los soldados les preguntaron a esos señores que dónde tenían sus armas. Parece que las tenían en un lugar que se llama Yamal'quil'cu. Los soldados fueron con ellos (los guerrilleros) en bestia para que se las mostraran. Pasaron como tres días y los soldados regresaron con las armas. No sé qué clase eran. Me acuerdo que usaban dagas en las puntas de las armas. Creo que tenían M-1 y Mauser.

A los comunistas los encerraron en un cuarto del juzgado. Ahí estuvieron amarrados varios días sin comer nada. Pero como la gente de aquí es consciente, dieron una vaca para que comieran los soldados (a pesar de que todo el trabajo de la agarrada lo hizo la gente, no los soldados) y también para que les dieran algo a los comunistas. Después se los llevaron en camiones hasta Huehue... Así empezó aquí la historia de los guerrilleros. Nosotros todavía la recordamos. Y algo quedó, porque los hijos de un señor de Patalcal al que los guerrilleros parece que le pagaban, después poco a poco se organizaron para ser guerrilleros. Ellos después se fueron a Ixcán para hacer esas cosas.

REMHI, *Historia de los años 60 de San Mateo Ixtatán*, 1997. Mimeo.

6. Las primeras FAR

En mayo de 1962 había un numeroso grupo de estudiantes universitarios y de posprimaria que estaban constituyendo una nueva organización denominada Movimiento Revolucionario 12 de Abril, que tomaba ese nombre de la fecha en que habían sido asesinados los tres estudiantes de Derecho.

El PGT, entretanto, manifestaba que se abrían en el país condiciones para el desarrollo de la lucha armada, pero que era necesario tener una orientación más clara sobre el momento en que deberían reiniciar las acciones violentas; además, que habría que subordinar a una línea política madura *la combinación de las formas violentas y pacíficas de la lucha*, así como depender menos de las situaciones que presentasen otras fuerzas de tendencias insurreccionales, o simplemente golpistas (PGT, 1962).

En enero de 1962 el PGT había enviado a tres militantes suyos a Cuba a recibir entrenamiento militar. Por aparte había en Cuba una veintena de muchachos de la JPT, que recién habían llegado becados por el gobierno cubano para estudiar carreras universitarias. Pero al poco tiempo optaron por abandonar la idea de los estudios y en su lugar buscaron entrenamiento militar para convertirse en guerrilleros.¹⁰

Varias versiones coinciden en los nombres de catorce jóvenes comunistas que recibieron entrenamiento en esos meses: Edgar Ibarra, Alejandro Sancho, Ricardo Miranda y Judith, quienes desde enero habían sido enviados a recibir entrenamiento

10 José Manuel Fortuny, representante del PGT en Cuba, afirma que fue testigo directo de cómo los encargados cubanos presionaban e inducían a los jóvenes estudiantes a preferir los cursos militares. En la versión de Fortuny los cubanos, sin consultarle a él o a otro dirigente del PGT, ofrecieron el entrenamiento militar a los estudiantes. Cinco se rehusaron, mientras que Fortuny protestó frente a los cubanos por ese procedimiento. Después consultó a la dirección del PGT y ésta aprobó el entrenamiento militar. La versión de uno de los estudiantes, Julio César Macías (*César Montes*), quien iba a estudiar medicina, sostiene que desde Guatemala la dirección de la JPT les había sugerido que, en lugar de estudiar una carrera universitaria, recibieran un curso militar. Por esa razón, sin consultarle a Fortuny, se pusieron en contacto con la Juventud Comunista Cubana para hacerles la propuesta. La respuesta fue que si se reunía un buen grupo sería posible el entrenamiento militar.

militar; Monterroso, Ricardo Ibarra, Julio César Macías, Rodolfo Payeras, Tristán Gómez, Carlos López, Luis Rivas, Mario Lemus, Plinio Castillo y José María Ortiz Vides, eran los estudiantes que habían optado por el curso militar. De este grupo, varios habrían de tomar parte de la futura guerrilla y algunos llegarían a ser dirigentes guerrilleros, como Julio César Macías, José María Ortiz Vides y Mario Lemus.¹¹

En septiembre, mientras el grupo recibía entrenamiento, una delegación del MR-13 arribó a La Habana *con el propósito de recoger experiencias e ir buscando orientación política* (Yon Sosa, 1968). La delegación estuvo compuesta por Marco Antonio Yon Sosa, Luis Augusto Turcios, Luis Trejo Esquivel y Francisco Amado, quienes habrían visitado al ex-presidente Árbenz para informarle que iniciarían la lucha guerrillera y proponerle que, una vez alcanzada cierta estabilidad, se pusiera al frente de la guerrilla. Además, le habrían consultado sobre la región geográfica en donde deberían implantarse. La respuesta de Árbenz habría sido que el mejor teatro de operaciones era la Sierra de las Minas, por su proximidad a la carretera al Atlántico, ruta principal para el comercio exterior. Así, una vez iniciada la guerra, ese corredor podría convertirse en una amenaza constante para la economía. Árbenz advertiría sobre la importancia de tomar en cuenta la base social en la región.

Según Yon Sosa, el propósito de iniciar la guerra de guerrillas cobró fuerza hasta su regreso a Guatemala a principios de diciembre de 1962. Entonces comenzaron a trabajar formalmente en la instalación de tres focos guerrilleros que funcionarían en San Marcos, Zacapa y en las montañas de Izabal (Yon Sosa, 1968). Hasta diciembre, los contactos entre el MR-13 y el PGT no superaban las reservas y sospechas mutuas, por lo que los cubanos solicitaban a ambos sus apreciaciones respecto del otro. La consulta que la delegación del MR-13 hizo a Árbenz, fue desconociendo la reciente incorporación del ex-presidente al PGT, por eso los *trecistas* le habían pedido que el PGT no se enterara de sus planes (Fortuny, 1994).

Por lo demás, no era de extrañar que si el gobierno de Guatemala había prestado su territorio para preparar una agresión a Cuba, ahora los castristas estuvieran interesados en inducir y apoyar a las guerrillas en Guatemala. Según un informe de Ricardo Miranda (*Federico*) fechado el 17 de noviembre de 1962, los cubanos le sugirieron que el PGT enviara a dos campesinos por departamento de Guatemala, miembros del Partido o no, para que se fueran a entrenar a Cuba. Pedían además que Ricardo Ramírez y otro dirigente del PGT fueran quienes se encargaran de ultimar los detalles.

En Guatemala, a finales de diciembre, el PGT propició la reunión entre dirigentes del MR-13, el M-20 de Octubre (brazo armado de los comunistas) y el MR-12 de Abril, y fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). En esta reunión habrían estado presentes Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Turcios Lima, por el MR-13; Mario Silva Jonama, Carlos René Valle y Joaquín Noval, por el Movimiento 20 de Octubre;¹² por el MR-12 de Abril asistieron los

11 Un hombre clave que recibió entrenamiento de los cubanos, con quienes tejió una relación muy estrecha que sería decisiva en los acontecimientos futuros de la guerrilla guatemalteca, fue Ricardo Ramírez de León (*Rolando Morán*).

12 En realidad los tres eran miembros del Comité Central (CC) del PGT e integraban la Comisión Militar del CC del PGT.

estudiantes Horacio Flores, Roberto Lobo Dubón y, probablemente, Guillermo Paz Cárcamo. Yon Sosa fue nombrado Comandante en Jefe de las FAR.

Los tres frentes (o *focos*, en palabras de Yon Sosa) que se habían acordado en el plan operativo para iniciar la guerra de guerrillas, comenzaron a estructurarse, aunque con variantes y cambios determinados por las condiciones que se iban presentando. Cada frente tendría un comandante militar, que sería asesorado por una suerte de comisario político. Así, el antiguo dirigente sindical de Puerto Barrios, Estanislao de León (miembro del PGT) y el ex-teniente Rodolfo Chacón, fueron comisionados para establecer en las montañas del Mico, en Izabal, un campamento guerrillero de entrenamiento de campesinos lugareños. Según el plan, una vez que los campesinos hubieran recibido el entrenamiento, regresarían a sus lugares de origen a la espera del llamado para iniciar la guerra de guerrillas (Yon Sosa, 1968). En estos preparativos se involucraron los estudiantes, miembros de la JPT, Edgar Ibarra, Carlos Ordóñez Monteagudo y Francisco Macías (hermano de César Macías).

Pero el campamento fue descubierto por el Ejército y sus responsables se vieron obligados a internarse más en las montañas y comenzar a operar militarmente desde principios de 1963. Fue así como, señala Yon Sosa, de forma apresurada se inició la lucha guerrillera en Guatemala a principios de 1963. El área de operaciones de esta incipiente guerrilla fue bautizada con el nombre de frente guerrillero Alaric Bennet, en honor a un obrero portuario asesinado por los liberacionistas en 1954 (Yon Sosa, 1968).

Hacia marzo de 1963 Chacón comandaba una columna guerrillera de 30 hombres, compuesta por ex-soldados y ex-sargentos, obreros portuarios y campesinos de la zona; solamente siete estaban armados. Aún así realizaron un par de ataques exitosos a pequeñas guarniciones militares y se apoderaron de algunas armas, entre ellas dos ametralladores MG-34. Pero el relajamiento de la disciplina guerrillera generó errores que provocaron el descubrimiento, en julio, del campamento insurgente. El Ejército sorprendió a los guerrilleros en un ataque relámpago en el que murieron 22 rebeldes, en cuenta el ex-teniente Rodolfo Chacón. Meses después, Yon Sosa se estableció en la zona y el frente fue denominado Alejandro de León.

El segundo frente, al mando de Luis Trejo Esquivel, intentó establecerse en la montaña de La Granadilla, en Zacapa. A Trejo lo acompañaban los jóvenes ex-oficiales Bernal Hernández Marroquín y Galicia. Este grupo acampó en la entrada a la montaña, en la finca Johnson, con planes de internarse desde ese punto. Comenzaron por concentrar armas, botas, alimentos y algunos explosivos. Pero las desavenencias entre Trejo y Bernal Hernández terminaron por desmovilizar al grupo, dejando abandonado el trabajo preparatorio. Bernal Hernández insistía en tomar la base militar de Zacapa y provocar en ella un alzamiento. Trejo, por su parte, ya se había convencido de la lucha guerrillera (Debray y Ramírez, 1975).

El tercer frente, que debería estar al mando de Luis Augusto Turcios, tenía que ubicarse en la Sierra de las Minas, en Zacapa. Julio César Macías inició la exploración desde el lago de Izabal hacia el sur, junto con *Darío*, un ex-trabajador chiclero miembro del PGT. Entre los dos establecieron, desde mediados de 1963, diversos puntos de concentración de vituallas y armas en las

estribaciones de la Sierra de las Minas, donde llegaba un lanchón que los dejaba en un punto de la costa del lago, para luego buscar hacia el sur la Sierra. En ese punto fueron recibiendo durante los siguientes meses a varios hombres que engrosarían la futura guerrilla.

El 21 de octubre uno de los grupos que operaba al mando de Yon Sosa en Izabal viajaba en un autobús de pasajeros, en el que casualmente encontraron a Ángel Rodríguez, agente de las fuerzas de seguridad. Rodríguez y Edgar Ibarra, el antiguo presidente del FUEGO (1959-60) que había recibido entrenamiento militar en Cuba, se reconocieron y se liaron a tiros. A la altura del kilómetro 242 de la carretera al Atlántico, ambos resultaron muertos. Dos días después, a tres kilómetros del lugar, chocaron una patrulla militar y los guerrilleros de Yon Sosa, y en la refriega resultó muerto Estanislao de León.

El 29 de octubre de 1963 la columna de Turcios, que adoptó el nombre de Guerrilla *Edgar Ibarra* (GEI), inició desde el lago de Izabal el ascenso a la Sierra de las Minas, buscando el macizo montañoso hacia Zacapa. Poco antes, en la capital, la policía descubrió unas casas de apoyo a la futura guerrilla, donde había mapas, planos y listas de colaboradores.

El *modus operandi* de la primera edición de las FAR no cumplió con las pautas de despliegue y detonante que postulaba el foquismo guevarista. La combinación de ex-militares, estudiantes universitarios y algunos campesinos y obreros dio un carácter distinto a cada agrupación. Pero serían los acontecimientos políticos que estaban por ocurrir en el resto del país los que le dieron al fenómeno guerrillero un relieve inusitado.

7. El golpe del 63

En enero de 1963 el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdía, vetó a Arévalo como candidato presidencial. Sin embargo, el 28 de marzo Arévalo se presentó sorpresivamente ante la prensa guatemalteca.¹³ El 31 de marzo el propio Peralta, con el apoyo de otros quince coroneles, quienes ocupaban los principales puestos de mando, derrocó a Ydígoras y asumió el control del gobierno en un incruento golpe de Estado. El primer manifiesto de los golpistas comenzaba diciendo *que la República se halla al borde de un conflicto interno, como resultado de la subversión permanente que han propiciado sectores procomunistas; y que la infiltración comunista se ha venido acentuando en forma alarmante cada día más...*

Por primera vez el Ejército como institución asumió el control del gobierno. Según *The Miami Herald* (24/12/66), la resolución de derribar a Ydígoras partió de una reunión que a finales de 1962 el presidente John Kennedy sostuvo con sus consejeros políticos y con el director de la CIA, Richard

13 Desde que fue claro que el ex-presidente Arévalo estaba decidido a regresar al país para participar en las elecciones, tanto el gobierno de Ydígoras como diversos sectores políticos conservadores trataron de impedirlo. La fuerza que su candidatura había tomado empujó a que grupos simpatizantes conformaran nuevas agrupaciones políticas. Aún en las concentraciones de los otros partidos se escuchaban gritos a su favor (Palmieri, 1963).

Hellman, además del propio embajador de los Estados Unidos en Guatemala, John O. Bell. En cambio, el coronel Peralta Azurdia en sus memorias afirma que el golpe militar se preparó cuidadosamente a lo largo de dos años, por iniciativa de un grupo de oficiales encabezados por él, y que la embajada de los Estados Unidos no tuvo conocimiento de la acción hasta que se realizó. Como fuere, Washington no objetó a Peralta Azurdia y las relaciones entre los dos países no sufrieron alteraciones.

La triple alianza de partidos opositores (PR-MLN-DC) respaldó el golpe en declaraciones de sus líderes, Mario Méndez Montenegro, Mario Sandoval Alarcón y Salvador Hernández Villalobos. El mismo apoyo manifestaron varias entidades empresariales, como la Cámara de Comercio, la Gremial de Exportadores de Café (ANACAFE) y la Asociación Nacional de Cañeros.

La política de Peralta Azurdia

Los militares gobernaron mediante una Carta Fundamental de Gobierno y decretos ley entre 1963 y 1966, mientras estaban suspendidas las garantías constitucionales. En efecto, el gobierno militar derogó la Constitución de 1956, disolvió el Congreso, canceló la personería jurídica del partido de Ydígoras y de su aliado, el MDN, y emitió el Decreto 9, Defensa de las Instituciones Democráticas.¹⁴ El Decreto 1 estableció que todos los delitos contra la seguridad del Estado serían juzgados por tribunales militares. Se penalizó con dos años de prisión la distribución de *literatura comunista*, cinco años por la fabricación de explosivos, diez años por pertenecer al partido comunista y quince años por terrorismo. Cualquier persona involucrada en un acto de terrorismo que tuviera como saldo muertos o heridos, sería ejecutada. La aplicación de este decreto fue bastante arbitraria y se utilizó para perseguir a quienes organizaban a los trabajadores o formaban parte de los sindicatos.

Poco después de que entró en vigor el Decreto 9, la sede de FASGUA fue cateada y sirvió durante meses de cuartel. Víctor Manuel Gutiérrez, uno de sus principales asesores, fue detenido. A mediados de abril la policía capturó a tres miembros del SAMF y los encarceló como medida de seguridad. En mayo, por medio del Decreto Ley 17, se creó un Consejo de Estado, organismo corporativo en el que tuvo representación el sector empresarial y el laboral. En esos días surgió otro grupo paramilitar, la Asociación para la Defensa de la Democracia.

El PGT reaccionó al golpe militar constituyendo el Frente Unido de Resistencia (FUR), de efímera existencia, que se proponía unir a diversas fuerzas de izquierda con el propósito de oponer al gobierno un frente amplio, además de expresar apoyo al naciente movimiento guerrillero. Eso confundió a los grupos arevalistas que habían sido convocados, mientras que el MR-13 lo vio con

14 Esta ley fue emitida el 10 de abril. En su Artículo 19 establecía que el ministerio de la Defensa Nacional deberá organizar inmediatamente un registro técnicamente elaborado donde aparezcan: 1. Las personas afiliadas a partidos o entidades comunistas. 2. Las personas condenadas en sentencias firmes en conformidad con esta ley. 3. Los países que deben ser conceptuados dentro del bloque comunista. 4. Las agrupaciones, organizaciones, entidades o partidos de tendencia comunista... Artículo 20: El hecho de figurar entre las personas a las que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo anterior, constituye presunción de culpabilidad, salvo prueba en contrario.

susplicacia, creyendo que la intención de formar el frente era que el PGT quería dirigir un organismo político del cual la guerrilla sería su brazo armado.¹⁵

Por otro lado, el nuevo jefe de Estado inició una política de saneamiento económico contra la corrupción del régimen de Ydígoras. Como discurso oficial, el gobierno se hizo portador del proyecto desarrollista que preconizaban las agencias internacionales y del modelo de industrialización plasmado en la idea del Mercado Común Centroamericano. El gobierno además puso en marcha una política interventora y reguladora de las actividades económicas. Se establecieron, en unos casos, mecanismos de control sobre la producción agrícola (algodón, azúcar, granos básicos); en otros, sobre la siembra y producción (trigo), y la venta de exportación (café). También se forzó a que los caficultores se organizaran en una asociación nacional, a fin de que pudieran cumplir los compromisos internacionales.

En abril el nuevo gobierno emitió la Carta de Trabajo, con similares garantías a las que reconocía la Constitución de 1956. Peralta Azurdia se refirió a la fijación de salarios mínimos y la obligación patronal de pagar el aguinaldo, así como el establecimiento del impuesto sobre la renta, que afectó a menos del 1% de la población. Guatemala era el último país en América Latina en aplicar este impuesto, pero tanto la AGA como el CACIF se opusieron a estas medidas.

La situación en el campo siguió siendo crítica. A mediados de año el comisionado militar de La Esperanza, Izabal, ordenó a 200 familias desalojar la finca que trabajaban, pues la había comprado un finquero de apellido Padilla. Ante la negativa de los campesinos, los soldados quemaron sus casas y destruyeron los cultivos. Un año después la guerrilla asesinó en Quiriguá Viejo a los hermanos Padilla. Walter Withman, propietario de una importante plantación azucarera, ordenó despedir a cientos de familias que habían organizado un sindicato y creó su propio sindicato con el apoyo del coronel Pedro Cardona, administrador y comisionado militar de la finca.

El 19 de junio de 1963, por medio del Decreto 52, Peralta Azurdia ordenó revisar todas las transacciones relacionadas con las fincas nacionales realizadas por el gobierno de Ydígoras. En pocos días fueron recuperadas 16 de estas fincas. También anunció que, para demostrar la sinceridad de su gobierno, pondría a disposición del INTA *las extensas y magníficas tierras estatales de El Quiché e Izabal*.

Los proyectos de ampliación de la frontera agrícola comenzaron a tomar forma. En junio, el jefe de Estado asistió a una reunión de directores del Banco de Guatemala y de la Comisión de Planificación Económica para estudiar la propuesta de la F. M. Warren de la Costal Timber & Lumber Company, que pretendía invertir US\$ 100 millones en la explotación forestal de Petén. El proyecto se llamaba *Vitrina para la Democracia*. Al mismo tiempo se organizó la zona de colonización de Sebol-Chinajá, para establecer 25,000 familias, a un costo de Q64 millones. El proyecto se inició instalando 1,500 familias en Fray Bartolomé de las Casas.

15 Un documento del FGEI, escrito más de un año después, señala que el FUR fue concebido haciendo una imitación del Frente de Liberación Nacional (FLN), de Venezuela, que era el frente político de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). Según el FGEI, ese esquema no correspondía a las condiciones del país (FGEI, 1964).

El 15 de octubre el inspector general del ministerio de Trabajo advirtió a los algodoneros que debían construir casas para sus trabajadores, ya que un elevado número de ellos estaba obligado a dormir a la intemperie. El IGSS anunció que había registrado, entre julio y septiembre, cinco casos de muerte y 151 de intoxicación debido a envenenamiento por insecticidas en las plantaciones de algodón. El director del IGSS sostuvo que 325 fincas habían recibido permiso para fumigar sin la inspección legal necesaria.

Búsqueda de otra institucionalidad

En 1964 empezaron los preparativos para un nuevo pacto de institucionalización del régimen político. El 5 de febrero el gobierno y la triple alianza (DC-PR-MLN) fijaron las reglas y requisitos para la constitución de los partidos políticos. Establecieron que para inscribir un partido el mínimo sería de 50,000 afiliados depurados, de los que un 20% deberían ser alfabetos.

En ese mismo año se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente, en las que participó una planilla única. Los partidos que habían apoyado el golpe de Peralta Azurdía (PR, MLN y el PID, en formación) se distribuyeron las candidaturas. El abstencionismo fue cercano al 70%, y sólo participaron 333,643 votantes;¹⁶ en la capital, de los 81,401 electores, 25,463 anulaban sus boletas.

El 6 de julio se instaló la directiva de la Asamblea con Vicente Díaz Samayoa (presidente), Héctor Menéndez de la Riva, Leonel López Rivera y el mayor Manuel de Jesús Girón Tánchez, en nombre del gobierno militar; Manuel Villacorta Vielman, fue en representación del MLN; Mario Fuentes Peruccini y Marco Antonio Villamar Contreras, estuvieron por el PR. Los diputados Jorge Skinner Klee y Carlos Teodoro Recinos presentaron un proyecto de legislación laboral, apoyado por la AGA, tratando de evitar que los derechos laborales tuvieran rango constitucional. En septiembre se formalizó el Partido Institucional Democrático (PID), con el patrocinio del gobierno militar. Entre sus fundadores estaban Menéndez de la Riva, López Rivera, José Trinidad Uclés y Víctor Aguilar de León. Cinco meses después presentaron nóminas con 54,665 afiliados. El Ejército se sintió más cómodo con este aliado que con el MLN.

En 1964 se creó también la URD, con Héctor Zachrison, Manuel Colom, Alfredo Balsells, César Augusto Toledo Peñate, Adolfo Mijangos, Rolando Collado, Jorge Mario García Laguardia y Francisco Villagrán Kramer, entre otros. Un año después el gobierno militar expulsó del país a sus principales dirigentes. La DC sufrió una escisión por su apoyo al régimen de Peralta Azurdía. Larry Andrade, Herbert Quirín y otros apoyaron al gobierno, en contra de René de León, Carlos Gehlert Mata y José Miguel Gaitán. La DC presentó su nómina de afiliados con 57,000 firmas, pero el Registro Electoral la redujo a 49,275, y el partido no quedó inscrito. Tampoco logró inscribirse el Partido Social Guatemalteco, del mayor Jorge Lucas Caballeros, pues en la lista aparecían 734 personas *sospechosas de ser comunistas*.

16 En las elecciones presidenciales de 1958 habían participado 492.273 electores.

En ese año el Ejército impulsó un plan de alfabetización, y se crearon el Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Banco del Ejército. Surgieron otros dos grupos paramilitares, la Juventud Nacionalista y la Resistencia Popular Secreta.

Situación socioeconómica y laboral

Durante el gobierno de Peralta Azurdia se levantó el segundo Censo Agropecuario que reflejaba que las condiciones en el campo no habían mejorado desde 1950. La cantidad de tierra por propietario de parcela había bajado de 1.3 hectáreas a 0.8 hectáreas y casi el 98% de los campesinos solamente tenían 37.4% de la superficie cultivable, en tanto que el 62.6% de la superficie cultivable quedaba en manos del 2.1% de los finqueros

El gobierno decidió investigar la situación de 89 fincas nacionales que fueron vendidas por Ydígoras, mientras el director del FYDEP (el departamento del gobierno responsable de la colonización de Petén) coronel Romeo Samayoa, anunció la intención de crear 125 grandes fincas, de 22.5 caballerías (1,008 hectáreas) cada una.

De acuerdo con el Censo sólo el 35% de la población en edad escolar recibía alguna instrucción, lo que significaba para los estratos de ingresos más bajos que sólo el 8% de los niños tenían acceso a la educación. La situación fiscal no era menos dramática. Las recaudaciones de impuestos del Gobierno ascendían apenas al 7% del PIB, y los impuestos directos representaban sólo el 11% de los ingresos tributarios.

El gobierno continuó su política desarrollista con la aprobación del primer Plan de Desarrollo de Guatemala (1965-69), que contemplaba la colonización agraria masiva de las tierras nacionales situadas en la región norte del país. En junio de 1965, Philip Murphy, presidente de la Murphy Pacific Co. de California llegó al país para finalizar la inversión de US\$30 millones destinados a la colonización del norte del país. Derivado de ello se formó la Compañía Impulsadora del Norte, para Petén y Alta Verapaz.

La situación laboral siguió siendo conflictiva. Los sindicalistas ferrocarrileros denunciaron la detención sin orden judicial de numerosos dirigentes acusados de comunistas. La empresa constructora INDAUCO cerró temporalmente y despidió a todos los trabajadores para evitar la demandas laborales. En agosto, la UFCO suspendió la producción en Tiquisate y 2,500 trabajadores fueron despedidos. Los empleados intentaron comprar las tierras de la Compañía, pero el administrador, Ted Holcombe, argumentó que las tierras ya habían sido vendidas a antiguos empleados (aunque esos antiguos empleados eran el propio Holcombe, su hijo y su yerno).

Los dirigentes socialcristianos de la finca Concepción intentaron revitalizar el sindicato, pero fracasaron ante la violenta reacción de los empresarios y la policía. Meses después 17 trabajadores fueron detenidos acusados de portar propaganda comunista. Mientras, el 18 de abril, la prensa denunció el reclutamiento forzoso de 123 campesinos de San Juan Sacatepéquez. El reclutamiento, por orden del ministerio de la Defensa,

había sido llevado a cabo por los comisionados militares y sus auxiliares. En la costa sur los algodoneros se quejaban de la falta de 5,000 trabajadores y el riesgo de que la cosecha de 70,000 quintales se perdiera. El Ejército empezó a reclutar forzosamente a campesinos de San Marcos para que trabajaran en las plantaciones de algodón. Lo mismo sucedió en otros departamentos por órdenes de los Gobernadores.¹⁷

En 1965, el año en que se promulgó la nueva Constitución, los conflictos laborales en la costa sur se militarizaron. Los sindicatos de las plantaciones fueron considerados una amenaza comunista y muchos dirigentes fueron encarcelados, *como una medida preventiva*. El gobierno envió a policías secretos a trabajar entre los campesinos con el fin de identificar y capturar a los líderes de las organizaciones. Pero cuando la policía encontró excesivamente difícil esa misión, el jefe de Estado promulgó el Decreto 30 que ordenaba al Ejército asumir las obligaciones de la Policía Nacional en las fincas. Esta ley declaraba que cualquier ayuda requerida por los finqueros les sería proporcionada, y que las personas que agitaban a los campesinos debían ser reportadas al Ejército. Sin embargo, la extensión de las organizaciones de trabajadores era limitada. Un informe de 1965 de la Organización Internacional del Trabajo mencionaba que sólo existían 16 sindicatos campesinos en Guatemala.

Los empresarios se mantuvieron activos durante el debate de la nueva Constitución. El CACIF pidió que no se incluyera en el nuevo cuerpo jurídico la obligación de reparto de utilidades de las empresas entre los trabajadores, ni la reinstalación forzosa de los despedidos sin razón; tampoco la indemnización universal o el aumento de los días de vacaciones. Esas demandas patronales fueron efectivamente atendidas por la Asamblea. Mientras tanto, el Consejo Agrícola Nacional siguió advirtiendo que las expropiaciones y distribuciones de tierras privadas provocarían convulsiones políticas. En 1965 se aprobó un nuevo Código de Minería que le reconoció a la empresa Exmibal la ventaja de las industrias de transformación.

El calendario de la institucionalización política siguió avanzando. El 15 de septiembre de 1965 fue promulgada la nueva Constitución; a la vez, se fijó el 5 de mayo de 1966 como la fecha para celebrar las elecciones presidenciales. Entonces cada partido comenzó a adelantar a su candidato presidencial. El PR, cuyos diputados habían renunciado en la Constituyente y roto el pacto de la Tripartita, anunció a Mario Méndez Montenegro. El MLN

17 En 1965-66 el número aproximado de trabajadores agrícolas estacionales era de 200,000 a 250,000, lo cual significa que había casi un millón de personas dependientes de las actividades agroexportadoras. Esas cifras no incluían a los arrendatarios y aparceros que vivían en las plantaciones. El Consejo Nacional del Algodón estimaba que se requería de 300,000 a 400,000 trabajadores para la cosecha sólo de algodón, sin contar el café y otras actividades agrícolas. Ya que no siempre acudían suficientes trabajadores, los finqueros recurrieron algunas veces al gobierno y solicitaron la ayuda del Ejército o de algún otro cuerpo de seguridad para encontrar la mano de obra necesaria.

se pronunció por el jefe del Estado Mayor del Ejército, coronel Miguel Ángel Ponciano, con lo que fracturó el proyecto militar. Ponciano y el MLN montaron su campaña electoral prometiendo una colaboración más estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, y acabar con la guerrilla. El PID presentó la candidatura del coronel Juan de Dios Aguilar, y la DC se inclinó por el hasta entonces ministro de Economía, el mayor Jorge Lucas Caballeros. Sin embargo, Peralta Azurdía instruyó para que se atrasara la inscripción de la DC, dejándola fuera de la contienda electoral.

El 26 de octubre se reformó la Ley Electoral. Además, se redujo el período presidencial a cuatro años; se creó la figura del Vicepresidente; se otorgó nuevamente el voto a los analfabetos, fijándose en 50,000 el número de afiliados para inscribir un partido.

La Constitución del 65

El tenso ambiente político existente limitó el espacio para la discusión de la nueva Constitución. Varios constituyentes, como Mauro Monterroso, se quejaron de que cada vez que presentaban sus mociones se les inhibía acusándolos de comunistas.

La Carta Magna mantuvo la separación de poderes y una estructura similar a la anterior del Organismo Judicial. En materia de garantías retomó varias de la Constitución de 1945 e incorporó las garantías sociales, dándoles un carácter conciliatorio. Pero a la vez facilitó la suspensión de ciertas garantías según diferentes estados (de sitio, de alarma). Por primera vez contempló un sistema de control a través de la Corte de Constitucionalidad (artículos 262-265). Se limitó la competencia de los tribunales militares, salvo en los casos en que civiles encabezaran actos armados contra el orden establecido (que era el caso de los guerrilleros). Las garantías constitucionales se limitaron frente al artículo 49, inciso 2, que decía: *Toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia, es punible. La ley determinará lo relativo a esta clase de delitos.*

8. El gobierno de Méndez Montenegro

Las elecciones del 6 de marzo de 1966 fueron ganadas por el candidato del PR, el abogado Julio César Méndez Montenegro con el 43.9% de la votación. Al no obtener mayoría absoluta, el Congreso tuvo que elegir al presidente en lo que se dio en llamar desde entonces, hasta que fue derogada la Constitución de 1965, elecciones secundarias. De ahí provino un signo de debilidad del nuevo gobierno, que se acentuó cuando el centro del debate pasó a ser si a la Constituyente o al Congreso le correspondía esa elección.

Sin embargo la candidatura de Méndez Montenegro, un destacado abogado y profesor universitario, y el *slogan* promovido por el PR, de que haría *el tercer gobierno de la revolución*, levantó expectativas entre la

población.¹⁸ Este fue un período intenso en la política de Guatemala. En el seno de las FAR, que había adoptado un cese al fuego unilateral, esperando la realización de reformas profundas de corte democrático, se abrió el dilema de la vigencia de la lucha armada. De hecho en ese entonces se discutió por primera vez la viabilidad de una solución negociada al conflicto. Pero las redadas lanzadas por el Ejército desde cuatro días antes de las elecciones en contra de dirigentes de las organizaciones guerrilleras, anunciaban que Peralta Azurdía y los comandantes de las zonas militares habían decidido aplicar una salida militar al conflicto armado, lo que traería consecuencias trágicas para la sociedad en los siguientes años.

El caso de los 28

Las capturas, torturas y posteriores asesinatos de dirigentes y miembros del PGT, las FAR y el MR-13 de Noviembre, ocurridas los días 3, 4 y 5 de marzo de 1966, fueron el inicio de una escalada de violencia que marcaría la segunda mitad de los años 60. Aunque estas desapariciones forzadas entraron en la historia como el *caso de los 28* (pues fue el número que manejó la guerrilla), en realidad no fueron menos de 32 las personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente; algunas nunca constaron en los listados de denuncias.

El día 3 fueron capturados cinco miembros del PGT, entre ellos Leonardo Castillo Flores (miembro de su Comisión Política); además unos catorce militantes y colaboradores del MR-13, y Francisco Amado Granados (Rudy, de la dirección *trecista*). El día 4, en Retalhuleu, fueron desaparecidos Leonardo García Benavente y Humberto Pineda (del PGT); el día 5 fue Víctor Manuel Gutiérrez (fundador y dirigente del PGT desde 1949). Dentro del grupo también estaban Iris Yon Cerna (pariente de Yon Sosa), una mujer mexicana, Eunice Campirán de Aguilar (que había llegado al país para inquirir sobre su esposo David Aguilar Mora, miembro del grupo trotskista del MR-13), Víctor Manuel Palacios, Raúl Alfaro (PGT) y Fernando Arce Berhens, entre otros. Luis Turcios Lima (comandante de las FAR), Bernardo Alvarado Monzón (secretario del PGT), *Gabriel Salazar* (secretario de la JPT) y Julio César Macías (segundo de las FAR) estuvieron a punto de caer en la redada. Todos los capturados, según una versión conocida, habían sido seleccionados de unas listas entregadas a la inteligencia por la embajada de los Estados Unidos.¹⁹ El golpe para la guerrilla fue contundente, especialmente para el MR-13.

18 Julio César Méndez había sido llamado por el PR después de la súbita y nunca aclarada muerte de su hermano Mario, quien fue proclamado candidato presidencial en la convención del partido. Julio César tenía vínculos muy fuertes con el movimiento octubrista, pues había formado parte del grupo de catorce estudiantes universitarios que a la medianoche del 19 de octubre de 1944 ingresó a la Guardia de Honor junto con el capitán Jacobo Árbenz, un hecho decisivo para el movimiento que lograría la renuncia de Ponce Vaides.

19 Esta es la versión que sostuvo en entrevista personal Julio César Macías, que en ese entonces era dirigente de las FAR, y que fue ratificada en su libro *La guerrilla fue mi camino*. Macías (1997) afirma que la información se le dio, mientras permanecía secuestrado por el EGP, el ex-ministro de Gobernación Roberto Herrera Ibarra. El funcionario habría afirmado, además, que un miembro del PGT desplazado de los órganos de dirección en 1965 fue quien confeccionó ese listado.



Representantes de familiares de 180 desaparecidos demandan a las autoridades que investiguen.
Foto Revista Crónica

Ningún recurso de exhibición personal dio resultado. Entre el 3 y 4 de mayo un comando de las FAR secuestró al Vicepresidente del Congreso, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Secretario de Información del gobierno, poniendo un ultimátum para la exhibición de los desaparecidos (no su liberación), señalando a la vez los lugares en los que supuestamente los mantenían: cárcel de la Guardia de Hacienda, cárcel de la Policía Nacional, algunos cuarteles militares y una prisión de la Policía Judicial (*El Imparcial*, 7/5/66). El 10 de mayo el cardenal Mario Casariego también pidió a Peralta Azurdia la liberación de los detenidos, pero éste declaró a la prensa que *el gobierno ya había dicho todo lo que tenía que decir*. El 19 de mayo, la Corte Suprema declaró haber tramitado más de 200 recursos de exhibición personal, pero las autoridades encargadas de presentar a los detenidos siempre los negaron, lo cual ya no es nuestra culpa (*El Imparcial*, 20/5/66).

Hasta antes de esta redada sólo las bases campesinas de la guerrilla en oriente habían sufrido una política de terror sistemático. En adelante, la dirigencia izquierdista padecería esta misma persecución.²⁰ Por el contexto en que ocurría, el mensaje del Ejército era claro para los partidos políticos: la lucha contra la guerrilla es a muerte. Unas semanas atrás, el PGT y las FAR habían decidido apoyar a Méndez Montenegro. Después de las elecciones los contactos

20 Dirigentes notorios como Bernardo Alvarado Monzón (1963), Alejandro Sacha (1964) y Alfredo Guerra Borges (1965) y otras decenas de militantes y guerrilleros habían sido capturados y mantenidos en diversas prisiones del país y el régimen les había respetado la vida.

entre el presidente y las FAR continuaron, pero sin resultados.²¹ Para el PR el dilema era: negociar con las FAR o soportar la presión del Ejército y del Partido Institucional Democrático (PID). El mensaje para los recién electos gobernantes fue que si se inclinaban por la negociación no se les entregaría el poder.

El 4 de julio el nuevo jefe del Departamento Judicial de la Policía Nacional aseguró que el gobierno había erradicado la tortura y cualquier abuso de autoridad. Unos días después un agente de la Policía Judicial y un ex-agente de la Policía Nacional, que habían desertado, aseguraron que *los 28 habían sido asesinados hace mucho, unos por órdenes del coronel Rafael Arriaga Bosque* (nombrado ministro de la Defensa por Méndez Montenegro). (*El Gráfico*, 19/7/66.) Torturados, posteriormente asesinados, los detenidos fueron llevados al aeropuerto de la capital en bolsas plásticas, de lo que se deduce que fueron tirados al océano Pacífico. El hecho causó gran indignación en la sociedad. En un editorial de *El Gráfico* del 17 de julio, el periodista Mario Carpio Nicolle sintetizó el clima social que se vivía:

Las cárceles de todo el país enviaban sus informes con el resultado de que 'no había detenidos políticos'. ¿Cómo los podía haber si todos estaban bien muertos? ¿Por qué implantó el Estado de Sitio (el gobierno) en todo el país? Porque el Estado de Sitio no fue otra cosa que el sitio que puso el gobierno al escándalo que crecía como una avalancha que ya nadie contenía... El gobierno sólo se defendía, no de sus enemigos armados, ni de conspiraciones terribles, se defendía de un enemigo más inquietante: de ese escándalo de 28 ciudadanos asesinados, atrocemente asesinados, con tal lujo de crueldad que la imaginación más enfermiza no podía concebir.

El 18 y 19 de julio familiares de los detenidos denunciaron ante el Ministerio de Gobernación y el Juzgado Quinto de Primera Instancia el asesinato de los 28, incluyendo una acusación en contra de los ex-jefes de la Policía Judicial Alberto Barrios y José María Moreira, del ex-director de la Policía Nacional, Luis González Salaverría, del ex-director y ex-tercer jefe de la Guardia de Hacienda, el coronel Luis Coronado Urrutia y el capitán Justo Rodríguez.²² El gobierno, el Congreso, la Corte Suprema y el Ejército se comprometieron a investigar el crimen múltiple, pero éste quedó en la impunidad.

21 Se planificó un encuentro en la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos, pero no se llevó a cabo. El presidente electo, acompañado de Emilio Arenales Catalán (futuro canciller), Alberto Méndez (sobrino suyo y dirigente del PR), además de oficiales del Estado Mayor Presidencial, asistieron al lugar, pero Méndez Montenegro no llegó a entrar al salón indicado para la reunión. Turcios tampoco ingresó. En cualquier caso, el mandatario continuó enviando mensajes a la dirigencia guerrillera en los que decía que las presiones de los militares podrían impedir su elección en el Congreso, o que si salía electo sería derrocado, por tanto, que no existían posibilidades de negociación con las FAR.

22 Raúl Díaz, quien se identifica como sobreviviente de los 28, sindicó también al oficial Rudy Solares Caravantes, jefe de operaciones de la campaña antiguerrillera, de haber comandado el grupo de tortura y asesinato (Cáceres, 1980).

Con fecha 28 de abril la Asamblea Constituyente, que estaba a punto de disolverse, decretó una extraña amnistía para *todos los miembros del Ejército y de las policías del Estado, así como para sus superiores jerárquicos por todos los hechos o actos tipificables como delitos que, a partir del 3 de julio de 1954 hubieren realizado para reprimir o prevenir actividades subversivas de cualquier orden, actividades tendientes a atacar, vulnerar o destruir el sistema de gobierno en que se ha basado la vida institucional de la nación, y actividades conexas con las expresadas*. El gobierno admitía haber realizado una labor represiva para defender el modelo de Estado creado en 1954.

El pacto con el Ejército

El 4 de mayo de 1966 el presidente electo Julio César Méndez Montenegro firmó un pacto con el Ejército, que no sólo resolvió el dilema del PR frente a la negociación con las FAR, sino que le dio autonomía a las fuerzas armadas para ejecutar un plan militar contra la guerrilla. Cuando el Congreso decidió la elección del nuevo gobernante, el pacto ya estaba firmado. El rumor de la existencia del pacto se negó durante los siguientes dos meses, porque nadie pudo dar a conocer el texto.

Aunque se han hecho circular distintas versiones de ese pacto, todas coinciden en los puntos esenciales.²³ Por medio del pacto *el Ejército de Guatemala garantiza la entrega del Poder Público a los licenciados Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas... y garantiza igualmente la permanencia de dichas personas en el ejercicio de sus cargos durante el período constitucional. Las garantías a que se refiere esta cláusula quedan sujetas a que se observen las condiciones que se consignan en este documento*.

Las condiciones eran: 1. El cumplimiento estricto de los artículos 27, 49 (párrafo segundo) y 64 de la Constitución, que señalan que *toda acción comunista y contra la actual democracia es punible*. 2. La garantía de todos los bienes de los funcionarios civiles y militares del gobierno de Peralta Azurdía (la amnistía había excluido la protección de los bienes conseguidos irregularmente por acciones de *vendetta* política o contrainsurgentes). 3. La garantía de plena autonomía del Ejército. (Por ejemplo, la decisión de nombrar al ministro de la Defensa o al jefe del Estado Mayor del Ejército se hizo en base a propuestas del propio alto mando militar.)

Varios años después Méndez Montenegro aseguró que el pacto simplemente reiteró las percepciones de la Constitución del 65 y que su único compromiso fue aceptar que el nombramiento del mando del Ejército se hiciera en base a una lista elaborada por los militares (Vinegrad, 1988). Sin embargo, Clemente Marroquín escribía en *La Hora* pocas semanas después de la firma de los compromisos, cuando aún eran secretos: *Hacemos la advertencia de que difícilmente el gobierno militar hará entrega del poder al PR y que posiblemente exigirá muchas condiciones, entre otras, no tocar al Ejército en su organización*

23 El diario *La Hora*, cuyo director era el entonces vicepresidente Clemente Marroquín Rojas, uno de los suscriptores del pacto, publicó una versión el 26 y 27 de noviembre de 1973. La versión a la que en este texto se hace alusión es la que dieron a conocer Gabriel Aguilera y Jorge Romero Imery en: *Dialéctica del terror en Guatemala* (Aguilera, 1981).

y desenvolvimiento. Esto es, que habrá un Estado militar dentro de un Estado civil (La Hora 15/4/66).

Como fuere, la firma del pacto marcó un hito en las relaciones civiles-militares. No era la primera vez que los militares aseguraban su autonomía antes de aceptar a un gobierno civil, ni sería la última. Pero el hecho de que el presidente civil firmara un pacto clandestino con el mando militar, saliendo de las estructuras institucionales y jurídicas, en el contexto en que las políticas de Estado comenzaban a girar en torno a la contrainsurgencia, alentó la creación de un formidable poder oculto que daría su sello a los métodos de la política de seguridad nacional. Este fue el punto de partida del surgimiento de unas estructuras estatales clandestinas de terror político que acabarían volviendo ineficiente el sistema de justicia y la propia capacidad de arbitraje de los conflictos por parte del Estado.

Hasta entonces, la violencia institucional se había manifestado a través de la acción represiva regular de los cuerpos de seguridad del Estado (el Ejército y la Policía). Aunque hubo acciones ilegales y legislación desencajada del ordenamiento del Estado de Derecho, fue hasta ese momento que los cuerpos de seguridad actuaron como una entidad paralela de la institucionalidad civil, con creciente autonomía operativa.

El nuevo aparato militar

Durante los tres años del gobierno militar de Peralta Azurdía la colaboración del Ejército guatemalteco con los planes contrainsurgentes de los Estados Unidos no fluyó como esperaron los empresarios locales, ni como lo demandaba Washington. Se llegó incluso a cierta polémica pública. Cuando la prensa reprodujo las declaraciones de un senador estadounidense en el sentido de que su país intervendría en Guatemala si la colaboración no mejoraba, Peralta replicó que *no somos la República Dominicana, el gobierno guatemalteco puede manejar cualquier subversión por su propia cuenta* (Melville, 1975).

Ahora bien, mientras los métodos de represión aplicados durante el gobierno militar seguían siendo los tradicionales, notorios cambios en la estructura del Ejército se fueron ejecutando durante este nuevo período con la injerencia de los Estados Unidos. El número de efectivos militares se duplicó; se formaron unidades especiales de contrainsurgencia dentro del esquema regular; se creó la Policía Militar Ambulante especialmente para las áreas rurales; la Policía Nacional y el Ejército se integraron bajo una estructura militar de comando. Se organizó una red de comunicación moderna que se extendió a toda Centroamérica²⁴ y se estableció la agencia presidencial de seguridad (Oficina Gubernamental de Telecomunicaciones)²⁵ para coordinar los recursos del órgano de inteligencia militar y policial.

24 El 14 de diciembre de 1963 se organizó en la ciudad de Guatemala y con el apoyo de los Estados Unidos, el Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA). Sus objetivos eran coordinar las operaciones militares y policiales contra el comunismo y establecer un servicio unificado de inteligencia en la región.

25 Posteriormente fue conocida como la Policía Regional de Telecomunicaciones o La Regional. Véanse los capítulos: *La inteligencia de la violencia* y *La estructura militar de la contrainsurgencia* en el Tomo II de este Informe.

El cambio doctrinario contrainsurgente se fue asimilando más lentamente, pero fue decisivo. Había dos preceptos clave de la contrainsurgencia: el primero, que no debería estar regida por leyes, reglas de guerra o consideraciones morales; el segundo, que el terror de la guerrilla sólo podía ser combatido con el uso libre del contra-terror (McClintock, 1987).

Después de 1963 la asistencia militar de los Estados Unidos sirvió principalmente para fortalecer las unidades especializadas en contrainsurgencia, que estaban concebidas como fuerzas auxiliares permanentes del ejército regular. La asistencia se canalizó a través del Programa de Asistencia Militar (MAP), cuya importancia creció después del levantamiento militar de 1960. Bajo el MAP se ejecutaron los planes de entrenamiento en contra de operaciones guerrilleras, tácticas de unidades pequeñas y control de rebeliones; se reemplazó el armamento y se mejoraron las comunicaciones y el transporte del Ejército guatemalteco. El entrenamiento se proporcionó a través de asesores, equipos ambulantes y en las escuelas en Panamá y los Estados Unidos.²⁶

El esfuerzo se concentró en cuatro brigadas: Mariscal Zavala y Guardia de Honor en la ciudad de Guatemala, Brigada general Manuel Lisandro Barillas en Quetzaltenango, y la Brigada Capitán General Rafael Carrera en Zacapa, donde estaba la plaza fuerte de la guerrilla.²⁷ Ya para 1966 estaban preparadas para entrar en acción la primera compañía aérea, las tropas formadas según el modelo Rangers, la primera compañía de Kaibiles (organizada según el modelo de los Boínas Verdes) y una fuerza conocida como Destacamento C-T (contra-terror), calcada de los equipos C-T empleados en Vietnam.

El MAP proveyó aviones y entrenamiento a la Fuerza Aérea de Guatemala. Entre 1963 y 1966 se organizó un escuadrón de transporte aéreo y dos escuadrones especiales de guerra aérea con aviones de entrenamiento T-33 y bombarderos B-26 para apoyo terrestre, así como helicópteros C-47 para transporte de tropas (McClintock, 1987).

Al final del período los principales cambios ocurridos en el Ejército eran en organización, y no tanto en equipo o entrenamiento. Al ejército regular se le sumaron 8,000 elementos, más 1,000 miembros de la PMA y 9,000 comisionados militares. La fuerza armada alcanzó la capacidad para estructurar un aparato de inteligencia y de control rural, dos elementos clave para desarrollar la guerra contrainsurgente.

El Ejército no quería competencia y boicoteó los planes para fortalecer la Policía Nacional y su aparato de inteligencia, hasta que la asistencia estadounidense para los órganos civiles de seguridad comenzó a disminuir en importancia y éstos quedaron bajo control militar. El aparato de inteligencia

26 Más de dos tercios de la asistencia total durante el período de Peralta Azurdia fueron empleados en asesoría y entrenamiento en las escuelas militares estadounidenses.

27 En la base militar de Zacapa se creó, con asesoría estadounidense, un comando encargado de integrar las fuerzas de seguridad militar y policial para combatir a la guerrilla en la Sierra de las Minas. Un informe de la CIA de 1966 evaluaba que su planteamiento metodológico era bastante efectivo.

presidencial mantuvo sus comunicaciones con la base estadounidense asentada en Panamá y con sus similares de Centroamérica. El Ejército intentó sacarlo de la Casa Presidencial para evitar que los gobernantes lo usaran para sus intereses políticos particulares, pero La Regional, ya bajo el dominio de los presidentes militares en los años 70, se mantuvo como brazo estratégico del Ejecutivo y llevó a cabo una campaña de terror político en coordinación con los otros aparatos de inteligencia militar.

Los grupos paramilitares

La organización y actividades de fuerzas paramilitares marcaron la política de contrainsurgencia en los años 60. El factor decisivo de la derrota de la guerrilla fue el apoyo de los comisionados militares en las operaciones militares regulares. Los comisionados, definidos por el ministro de la Defensa del gobierno civil, Rafael Arriaga Bosque, como *los ojos y oídos del Ejército*, recibieron entrenamiento y armas, y se les encargó la seguridad local con el propósito de destruir la infraestructura guerrillera; además cumplieron un papel en la adquisición de inteligencia (informaban sobre la presencia insurgente, de organizadores políticos y extranjeros). Trabajaron también junto al Ejército en operaciones militares. De ser 300 en todo el país, los comisionados se multiplicaron por 30, aunque la densidad fue mayor en las áreas conflictivas del oriente. Ahora estaban, como una inmensa red de control poblacional, en todos los centros: ciudades, pueblos, aldeas, caseríos y fincas.

En octubre de 1966 la *Revista Militar* del Ejército reprodujo un artículo de la *Military Review* de los Estados Unidos. Ahí se abordó la importancia de las organizaciones paramilitares en la estrategia contrainsurgente. Se recomendaba que las fuerzas contra guerrilla estuvieran formadas por gente de las localidades que tuvieran una motivación especial para luchar, para así tener la misma ventaja táctica de movilización que la guerrilla, pero entrenándolos mejor y dotándolos de equipo superior.

El espacio de poder local para los comisionados se amplió. Con el decreto 283 del 27 de octubre de 1964 consiguieron el derecho de portar armas sin licencia, y a la vez se les dio ese derecho a los finqueros y sus administradores, equiparándolos a la categoría de agentes de seguridad (artículo 26 del decreto 283 y artículo 154 del Código Penal) y recibieron un sueldo. En 1965 se nombraron 9,000 comisionados (incluyendo finqueros, industriales, guardaespaldas y universitarios) en todo el país, aunque sólo en Jutiapa fueron activados 971 comisionados, es decir, uno por cada 50 hombres adultos en ese departamento. Los carnet que los comisionados recibieron les daba un poder ilimitado para detener e interrogar a sospechosos y no tardaron en cometer abusos contra la población.

Los comisionados contra la población

(Testimonios)

A pesar de que llegaron enmascarados para hacer lo que hicieron con mi papá, conocimos a B.G. De apodo le llamaban 'el muerte bañado', uno de los comisionados. Él ahora (1996) hace lo mismo, pero en lo que se llaman los grupos paramilitares. Caso 6556, Izabal, años 60.

Cuando la guerrilla aquí se extendió -porque es cierto que anduvieron por aquí- uno no podía tener realmente nada, porque los comisionados toda cosa le hacían a uno; que si uno traía cosas para comer, que para la guerrilla jalaba, le decían los comisionados militares a uno. Cualquier cosa fue sospechosa. Caso 6458, Izabal, 1963.

Ellos fueron los jefes de comisionados, se reunían para hacer masacres a los lugares, iban a hacer averías. Pero de esos no queda uno vivo. Caso 5458, Izabal, 1963.

En ese año, el mismo comisionado y el auxiliar mataron a este señor ahí en el cementerio. Ese día, el pobre señor que andaba vendiendo leña sólo para conseguir su maíz para la familia, llevaba leña adonde unos señores. Lo metieron dentro y no lo dejaron salir hasta que cayó la noche. Entonces lo sacaron y lo mataron. Fueron a tirar su cuerpo así fuera de la aldea y lo echaron en un costal. Caso 1780, Jocotán, Chiquimula, 1967.

La adaptación del sistema de comisionados a una función contrainsurgente fue más marcado e inmediato en la costa sur y el oriente, y particularmente en el nororiente donde se concentraban las actividades guerrilleras. Los comisionados y sus auxiliares pasaron a constituir la cúspide de la pirámide de poder local e identificaban sus funciones con la protección de finqueros y comerciantes. Quienes se sumaron a este sistema fueron en particular pequeños y medianos propietarios agrícolas y los militantes de partidos derechistas en los pequeños poblados. La afinidad ideológica anticomunista entre el gobierno militar y las elites rurales facilitó la descentralización del sistema de seguridad a través de los comisionados. El Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en particular, ofreció los prospectos para los cargos de comisionados, aunque su lealtad principal fue con el Ejército.

Además del sistema de comisionados, el Ejército extendió su capacidad operativa a través de grupos clandestinos que se denominaron escuadrones de la muerte y que actuaron tanto en la ciudad como en las zonas rurales. Mario Sandoval Alarcón, líder del MLN, sostiene que los escuadrones *surgieron para enfrentar a la guerrilla en sus mismos términos, en una guerra sucia que no se regía por códigos militares (el Periódico 20/4/97)*. Sandoval afirma que esos grupos estaban apoyados desde el Cuartel General del Ejército, bajo el mando del coronel Rafael Arreaga Bosque, pero que había otros altos mandos comprometidos, como el coronel Manuel Sosa Ávila y el comandante de la base

militar de Zacapa, coronel Carlos Arana Osorio. Los escuadrones *eran militares que se hacían pasar por civiles, aunque hubo organizaciones que también actuaron en forma paralela al Ejército apoyados por el MLN*, confirma el influyente liberacionista. Entre las primeras estaba la Mano Blanca, dirigida desde el Cuartel General, y entre las segundas la Nueva Organización Anticomunista (NOA), que recibía lineamientos del MLN a través de su líder Raúl Lorenzana, mientras otros sectores civiles (finqueros conservadores) organizaron los recursos para el financiamiento y logística del grupo. Además, cada cuerpo policial formó su propio escuadrón de la muerte.

Las actividades de los escuadrones ampliaron el margen político de acción del Ejército frente a la guerrilla, pues a la vez que le propiciaban golpes clandestinamente a las organizaciones insurgentes y su dirigencia, nutrían su capacidad de inteligencia y gozaban de mayor libertad y legitimidad para avanzar sus posiciones estratégicas. El ministro de Gobernación, Héctor Mansilla Pinto, insistió que la violencia que se vivía en esos años era producto de *luchas intestinas entre las extremas*.

Los primeros grupos clandestinos surgieron entre 1960 y 1962, pero la mayoría operó en el momento en que el Ejército lanzó la fulminante campaña contrainsurgente en el nororiente y la capital, entre 1967 y 1968. Entre los escuadrones de la muerte más notorios está la Mano Blanca, la NOA y el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG). El propósito de estos grupos era eliminar físicamente a los supuestos integrantes, colaboradores o simpatizantes de la guerrilla o partidos aliados y a la vez inspirar temor entre la población. Sus amenazas ordinariamente eran públicas, a través de boletines de prensa, panfletos y listados distribuidos profusamente en las calles (pegaban carteles que incluían fotografías de los amenazados) y en lugares específicos como las sedes de los sindicatos y la Universidad de San Carlos. Uno de los escuadrones expresó así sus objetivos, en un volante que llevaba como título *CADEG cumple y no falla*:

Agrupaciones anticomunistas de Guatemala y los pelotones de ajusticiamiento diseminados en todo el país: deben buscar hasta encontrar donde se hallan tamaños traidores castro-comunistas, quienes deben pagar con su vida el crimen de lesa patria cometido al pretender regresar al país, y sin piedad alguna tienen que morir como perros rabiosos y sus inmundos cadáveres no deben ser cobijados por la tierra bendita de Guatemala, sino deben servir para hartazgo de las aves de rapiña.

Las víctimas lo vivieron así:

A los cinco días cabales de haberlo matado a él, balearon a un mi cuñado, y ese mismo día que balearon a mi cuñado, mataron a otros dos amigos, al papá y al hijo... No sabemos decir porqué ellos mataban como que era un deporte. A mi hermano lo balearon por gusto... Y las personas que lo hicieron son personas conocidas, un grupo que le llamaban allá Mano Blanca, dirigido por un señor Mario Sánchez que todavía vive. Yo conozco bien los nombres de las personas... fuimos de la misma edad, conocidos, y

hasta uno de ellos es primo hermano de mi esposa. Ellos están ahí tranquilos, sin que nada les haya pasado hasta la fecha (1996)... así siguieron haciendo más víctimas por otros lados... eso se ha quedado en el olvido, se quedó como que nada pasó. Caso 7346, Zacapa, 1968.

En marzo de 1966, siendo dirigente de la Federación Central de Trabajadores de Guatemala, fui amenazado públicamente por los grupos anticomunistas, MANO, NOA y CADEG. Me dejaron quince días para que abandonara el país. Caso 5060, Ciudad de Guatemala, 1966.

La política del terror ya no dejó espacios para los recursos legales. La exhibición personal, muchas veces la medida para salvar la vida de los detenidos o secuestrados, dejó de funcionar. El sistema penal, o sea el derecho estatal de sancionar, quedó postrado ante un sistema penal subterráneo cuyo fundamento fue la impunidad garantizada desde los poderes públicos. Una escalada irrefrenable de terror había empezado en Guatemala. En una sola semana, del 27 de marzo al 1 de abril de 1967, se reportaron 43 secuestros y trece cadáveres fueron localizados en un sólo día. El 12 de abril ocurrieron cinco secuestros y se hallaron otros doce cuerpos con señales de tortura.

Es difícil determinar el número de víctimas. *Studentische Zeitung* habló de 20,000 muertos hasta 1973; otras fuentes estiman que 8,000 personas murieron entre 1966 y 1968 (Jonas, 1991). El Comité de Defensa de los Derechos Humanos, en un informe presentado en 1968 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detalló los nombres y circunstancias de la muerte de 719 personas y el secuestro de otras 252, violaciones que ocurrieron entre julio de 1966 y octubre de 1968 como resultado de las acciones de los escuadrones.

La escalada de violencia

Entre el 1 de julio y octubre de 1966, o sea en los primeros cien días del gobierno de Méndez Montenegro el clima político se mantuvo en un *impasse*. Parecía que el gobierno civil se abría hacia una posición más tolerante. Las FAR, entre tanto, no atacaron cuarteles ni tropas militares, sólo llevó a cabo acciones de propaganda armada a través de la ocupación de comunidades. La guerrilla parecía relajarse. En las visitas a los centros poblados propiciaban actividades sociales (juegos de fútbol, entre otras).

Pero las presiones no tardaron en llegar. Un memorándum del vicepresidente Clemente Marroquín Rojas, despachado en agosto, urgía a los jefes militares a tomar la iniciativa. *La cosa no puede seguir así*, decía: *no pueden existir dos ejércitos*. En septiembre repitió el llamado a que el Ejército actuara (IC 519 Guatemala, años 60).²⁸ Y a partir de ese mismo mes, Méndez Montenegro incorporó en su discurso la explicación de que la violencia, que comenzaba a arreciar, se debía

28 Sin embargo, antes de ganar las elecciones, Marroquín Rojas había insistido en sus editoriales del diario *La Hora* que para lograr la paz en el país debía pactarse con los guerrilleros, aunque al mismo tiempo también advertía que *debe oírseles* (a los guerrilleros), *que si lo que proponen es aceptable y digno de ser considerado puede discutirse y en caso contrario, hacerles la guerra a muerte* (citado en El Gráfico, 3/3/66).

a la lucha entre las extremas (de izquierda y derecha). En julio se había decretado una amnistía para favorecer a los guerrilleros, con vigencia desde 1960. El presidente hizo llamados a los insurgentes para que se incorporaran a la vida civil, o de lo contrario serían aplastados. El PR apoyó esa línea gubernamental.

La guerrilla respondió a través de sus máximos dirigentes, Bernardo Alvarado Monzón (PGT) y Luis Turcios Lima (FAR). En una conferencia de prensa realizada en la capital fijaron su postura: declararon un cese al fuego unilateral, y lo mantendrían si el gobierno civil desplazaba a los liberacionistas de posiciones de poder y controlaba al Ejército. La fuerza armada no se inmutó. El coronel Arriaga Bosque dijo que el Ejército se mantenía vigilante y era respetuoso de la Constitución. En apariencia nada se movía, pero el 2 de octubre Turcios Lima murió en un misterioso accidente de tránsito y al día siguiente el Ejército lanzó la ofensiva en oriente.

Una estructura guerrillera que comprendía a unos 300 combatientes y cerca de 5,000 bases de apoyo quedó desarticulada entre octubre de 1966 y agosto de 1967 (Figuroa, 1996). En marzo de 1967 el poeta Otto René Castillo y Nora Paiz fueron capturados exhaustos tras una larga caminata y luego torturados y asesinados por miembros de la Zona Militar de Zacapa. La madre de Nora Paz (quien era hija de un coronel del Ejército) identificó restos calcinados de su hija. En las afueras de Río Hondo, Zacapa, cien hombres fueron asesinados, donde aún permanece un cementerio clandestino.

El plan estratégico de contrainsurgencia estaba cuidadosamente diseñado con la asesoría estadounidense. El coronel Weber era el jefe del programa de asistencia militar de los Estados Unidos en Guatemala y responsable de la promoción de la doctrina contrainsurgente. Por esos días circuló entre la oficialidad un documento traducido del inglés titulado *La guía para la planificación de la contrainsurgencia*, que trazaba las líneas de la estrategia y sus objetivos.

El plan tenía tres fases: la preparación, la limpieza y el mantenimiento. Los cambios ocurridos entre 1963 y 1966 muestran con claridad la primera fase. En ella se contemplaba la promulgación de legislación de emergencia, la adscripción de población civil (comisionados) y un sistema de control de identificación (cédula de vecindad); asimismo, el entrenamiento de unidades convencionales del Ejército y la Policía para operaciones de contrainsurgencia; la creación y entrenamiento de grupos paramilitares, que incluso realizarían acciones de ofensiva limitada bajo la coordinación del Ejército, y finalmente la estructuración del sistema nacional de inteligencia (McClintock, 1987).

En la segunda fase las acciones ofensivas serían lanzadas con el propósito de desplazar a la guerrillas de zonas específicas. Las fuerzas de seguridad, en combinación con las fuerzas paramilitares, desalojarían o eliminarían a las fuerzas insurgentes y sus bases de apoyo. En la tercera fase los grupos paramilitares (comisionados) deberían ser institucionalizados, manteniendo lazos de comunicación directa con las autoridades centrales. Efectivamente los comisionados continuaron, durante las siguientes dos décadas, realizando funciones de inteligencia para el Ejército²⁹ y participando en actividades de propaganda y demostraciones de apoyo a las autoridades.

29 Esto incluía registro de los movimientos de población y visitas en las comunidades, de líderes y organizaciones sociales, así como el ingreso de medicinas, alimentos y otros bienes.

9. La guerrilla

El FGEI y el MR-13

Inicialmente el grupo que constituyó la Guerrilla Edgar Ibarra (GEI) estuvo compuesto por 21 hombres, entre campesinos de la zona, estudiantes y ex-militares. El comandante del frente era Luis Augusto Turcios Lima, secundado por Rigoberto Molina (*Rigo*), un pequeño agricultor de las verapaces de habla q'ekchi'. El comisario político era Ricardo Ramírez (*Rolando*). Turcios, que provenía del MR-13, se seguía considerando miembro de los *trecistas*; Molina era del PGT y sobreviviente de la frustrada guerrilla de Concuá en 1962, mientras Ramírez era un cuadro político de cierta importancia en el PGT, de mucha confianza para los cubanos por su antigua relación con el *Ché* Guevara.

Las primeras actividades del grupo guerrillero fueron la exploración del terreno, la construcción de escondites para guardar víveres y armamento, y esporádicos contactos con los campesinos de la región.³⁰ Fueron meses en que la



Fuerzas del Ejército y la Policía asaltan un refugio guerrillero cerca de la colonia Jardines de la Asunción, en la capital (23 abril 1971). Foto Revista Crónica

30 Antes de partir a la Sierra de las Minas, Turcios comisionó a Julio César Macías para contactar a un grupo de achés que en Rabinal actuaban por sí mismos a nombre del MR-13. El dirigente era un ex-contratista y comerciante, Emilio Román López (*Pascual*) se convertiría en una de los guerrilleros de más arraigo y prestigio en las comunidades. Pascual, junto con Eulogio Xitumul (*Socorro*), *Chepe*, *Braulio*, *Sotero* y *René*, todos achés de Rabinal, formaron parte del grupo fundador del FGEI. Con ellos estuvieron, además de Luis Turcios y Julio César Macías, *Daniel*, *Lupe*, *Felipe* y *Mito*, originarios de Escuintla; Jorge Soto, Mario Lemus (*Efígenio*), Rigoberto Molina (*Rigo*), que era de Alta Verapaz, Ricardo Ramírez (*Rolando*) y Roberto Turcios (hermano menor de Luis Turcios).

guerrilla se implantó en la zona y logró conocer su área de operaciones y de refugio. El 30 de junio de 1964 la GEI realizó la primera acción importante. A pocos minutos de la base militar de Zacapa, los rebeldes tomaron Río Hondo (800 habitantes). El 17 de octubre, la GEI realizó la segunda acción militar. Tomó por asalto Panzós, un pueblo fluvial de 2,000 habitantes, en Alta Verapaz, a 140 kilómetros de Río Hondo. En el trayecto la columna guerrillera realizó actividades de propaganda armada y requisó armas en una finca del ex-candidato del MDN, Miguel Ortiz Passarelli. Los insurgentes redujeron a la pequeña guarnición militar compuesta por nueve soldados y un cabo; convocaron a un mitin en la plaza central y uno de ellos se dirigió a la población en q'ekchí'. El mitin se prolongó hasta la medianoche.

La guerrilla emprendió la retirada a la montaña. Tres días después, el día 20, el Ejército cayó sorpresivamente a las seis de la mañana sobre el campamento rebelde, y éstos huyeron desordenadamente. En la persecución fue muerto el insurgente Vicente de La Rosa. Según la GEI él fue la única baja que sufrieron. El Ejército informó a la prensa que había movilizó fuerzas del Infantería, la marina y la aviación, y que había dado muerte a *tres facciosos*.

Después del incidente, las acciones guerrilleras continuaron. En noviembre la GEI tomó la aldea Santa Rosalía de Mármol, en Zacapa; en la aldea Petón, cerca de Río Hondo, emboscó a una patrulla militar, causando tres bajas. Entre septiembre y noviembre, el Ejército lanzó un cerco, sin resultados. Las emboscadas continuaron en La Cajeta, La Ceibita (tres bajas militares); también las tomas de poblados (aldea de Cabañas, en diciembre), la ocupación de cuarteles de la policía (San Agustín Acasaguastlán), los *ajusticiamientos* (tres en la aldea El Jute, tres en la aldea San Jorge, los hermanos Del Busto en la aldea Jones) y los hostigamientos (en la montaña El Lobo, tres bajas). Turcios también planificó secuestros en la capital con el propósito de lograr financiamiento para las FAR.

La GEI se transformó en el Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI) y más tarde en el Regional de Oriente, que comprendía El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y parte de Izabal; con el traslado de los rabinales a Baja Verapaz, se convirtió en Regional de Nororiente. Con posterioridad la dirección de las FAR decidió constituir la Regional de Las Verapaces, con Rabinal-Cubulco como eje vertebral, a cargo de Emilio Román López.

El MR-13, entre tanto, había establecido con premura en marzo una guerrilla cerca de Puerto Barrios, con 30 hombres, ex-soldados, ex-sargentos, campesinos de la zona y obreros portuarios. Estaba a cargo del ex-subteniente ranger, Rodolfo Chacón. Los campesinos recibían entrenamiento durante tres semanas y luego se les enviaba de regreso a sus lugares de origen por falta de armas.³¹ La guerrilla estableció un campamento fijo en un sitio

31 La escuela del frente estuvo dirigida por Chacón, con el apoyo de Estanislao de León, ex-dirigente de Puerto Barrios y miembro del PGT. A este frente fueron destinados también los dirigentes estudiantiles Julio Edgar Ibarra, Rodolfo Payeras, Francisco José Macías y Chilano Ordóñez (*Camilo Sánchez*), entre otros.

agreste de difícil acceso, pero uno de los combatientes fue hecho prisionero por el Ejército, cuando visitaba su casa en la capital; lo torturaron y mostró el campamento. A pesar de los esfuerzos ulteriores que el capturado hizo para alertar a sus compañeros, el Ejército desató un ataque feroz. Murieron 23 guerrilleros, solamente sobrevivieron tres. De las dos guerrillas que formarían el primer frente, sólo quedó una bajo el mando de Marco Antonio Yon Sosa.

Yon Sosa tenía mucha simpatía entre la población de Izabal, de donde era originario. Sus combatientes permanentes eran pocos, pero crecía con fuerzas irregulares en el momento de realizar un operativo. Los campamentos eran visitados por los pobladores, que los alimentaban, les daban información y vituallas. Esta guerrilla se dedicaba más a la propaganda y la organización que al combate. Varios de los choques con el Ejército eran defensivos, aunque llevaron a cabo acciones de *ajusticiamiento*. Así, el administrador de la finca Alsacia, Arturo González, fue muerto por tratar de expulsar violentamente a los campesinos de siete aldeas, que se habían establecido hacía tiempo en los terrenos de la finca. También fue asesinado un individuo apodado *El Charrasqueado*, bajo la acusación de haber dado muerte a varios campesinos en tiempos de la Liberación. La misma suerte siguió el caporal de la Dirección de Caminos en Izabal, Leopoldo Vargas, acusado de maltrato a los trabajadores.

El 27 de agosto de 1964, el MR-13 chocó accidentalmente con un pelotón del Ejército en la aldea Guacamayo, cuando los militares acampaban en el lugar. Según Yon Sosa, el Ejército tuvo 18 muertos, mientras los rebeldes perdieron a dos hombres. Otras acciones de este frente ocurrieron en Mixco (Izabal), donde se enfrentaron durante dos horas a una patrulla militar, y un mayor del Ejército habría sido herido. En total la guerrilla tuvo, en 30 meses de lucha, 17 muertos y tres heridos graves, en tanto habrían infligido 142 bajas a las tropas oficiales (Yon Sosa, 1964).

Finalmente, el llamado segundo frente, al mando del ex-subteniente Luis Trejo Esquivel y secundado por el también ex-subteniente Bernal Hernández, se estableció en Zacapa, en las montañas de Las Granadillas, en febrero de 1963. El comisario político era Guillermo Paz Cárcamo. Este frente guerrillero sufrió tempranamente la división interna que encabezó Bernal Hernández, quien más tarde acuerparía al coronel Carlos Arana Osorio en la campaña contrainsurgente. Tras un bombardeo del Ejército contra el campamento, la guerrilla se dividió en dos grupos. Hernández y su gente abandonaron la montaña, luego de esconder sus armas. Trejo desmovilizó a sus fuerzas y se trasladó a la capital para organizar las FAR urbanas, a pesar de que el PGT exigió su destitución, a lo que Yon Sosa se opuso.³²

32 En la capital, Trejo mató accidentalmente a un compañero suyo, estudiante de Economía, miembro de la JPT. Aunque el cadáver fue abandonado y reportado por sus compañeros como muerto por la Policía, Trejo mismo informó de lo ocurrido. Esta vez algunos miembros del PGT pidieron su fusilamiento. La sentencia quedó en suspenso, mientras se le envió al FGEI sin grado ni cargo. Allí murió en un enfrentamiento.

En 1964 también se registraron dos acciones guerrilleras que causaron gran impacto público. Fueron asesinados los coroneles Arturo Oliva Ortiz y Porfirio del Cid. El primero fue ametrallado en la capital el 24 de enero, y el segundo en Izabal. A Oliva se le atribuían más de 30 muertes en Izabal, mientras a Del Cid, que había estado al mando de las tropas que destruyeron la guerrilla de Concuá, se le culpaba de haber fusilado a siete insurgentes después de haberlos capturado vivos.

En la capital actuaba un grupo operativo, de no más de 30 elementos, conocido como Los Bravos, que se desarrolló a partir de militantes de la JPT y nuevos reclutas. Su jefe era José María (*Chema*) Ortiz Vides. La mayoría del grupo eran hijos de obreros, empleados y artesanos. Habían participado en las jornadas de marzo y abril de 1962, y realizaban operativos y golpes de mano audaces.

En resumen, el componente principal en el teatro de operaciones del FGEI era la movilidad y la propaganda armada, que revelaba la impotencia de las autoridades. A los coroneles no les preocupaba el ajusticiamiento de algún comisionado militar o capataz de finca, pero sí les molestaba encararse a una publicidad que sembrara la duda acerca de la habilidad del gobierno para garantizar al país el orden público.

Ante la complicidad de los habitantes y la adscripción de reclutas,³³ los destacamentos militares comenzaron a reprimir, a veces con matanzas de inocentes. El círculo se fue cerrando: la guerrilla ejecutaba a los símbolos de la seguridad del Estado y a los supuestos *orejas* del Ejército, mientras la población era castigada por los militares y los grupos paramilitares. Así se fue polarizando el entorno político de las Minas, mientras los campesinos entraban en la escala de los enfrentamientos.

Luchas internas

En medio de un panorama político crecientemente confuso, las divisiones comenzaron a aflorar en el seno de las FAR. Francisco Amado Granados, un comerciante que ya tenía tiempo de pertenecer al MR-13, por razones familiares había entrado en contacto en 1963 con un grupo trotskista mexicano perteneciente al Partido Obrero Revolucionario (POR), afiliado a la llamada *tendencia posadista* de la IV Internacional. Desde entonces, ese grupo comenzó a apoyar a la guerrilla del MR-13 con abastecimientos y armas, y luego con varios cuadros políticos que se integraron al grupo de Yon Sosa. Esos cuadros fueron David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Felipe Galván y José María Hoyos, mexicanos; un matrimonio argentino, José Fernández Bruno y María Teresa Confreta de Fernández, y Adolfo Gilly, también argentino.

El contingente fue importante para el MR-13, pues le dio una perspectiva y una fundamentación política de la cual había carecido. Así, el hecho de que

33 En las escuelas de entrenamiento militar, dirigidas por el ex-capitán Rolando Herrera, hubo hasta 90 campesinos en un curso de 15 días.

varios cuadros trotskistas se incorporaran a la guerrilla y al trabajo clandestino en la ciudad, y que construyeran una red de abastecimiento, fue altamente valorado por el MR-13, especialmente por Yon Sosa.

Las disputas entre trotskistas y marxistas-leninistas se desataron cuando Gilly acusó al PGT de tender un cerco de abastecimientos al MR-13 y controlar su red. En realidad la relación entre el PGT y el MR-13 obedecía a factores más complejos. Existía una mutua desconfianza y reservas derivadas de prejuicios anticomunistas y anti-militares. En una temprana entrevista periodística, Yon Sosa se deslindó del comunismo: (El objetivo del movimiento) *es puramente nacionalista*, afirmó. *Esto lo sabe muy bien el gobierno*. El PGT, por su parte, iba en la práctica mucho más rezagado que en sus resoluciones y documentos. Entre 1963 y 1964 los comunistas no se definían plenamente sobre asuntos como su estructura interna, hábitos de su militancia y la cuestión del movimiento guerrillero, cuyo escenario era el ámbito rural y en consecuencia su base era campesina, mientras que su doctrina hablaba de la clase obrera como la clase dirigente de la revolución. Además, su estrategia de revolución por etapas, la búsqueda de colaboración con sectores empresariales y su deseo de mantener simultáneamente varios frentes -políticos y militares- le acarrearba continuos roces con sus aliados del MR-13.

Por todo ello el movimiento trotskista se ganó la confianza de Yon Sosa. Así, se operó en el seno del MR-13 un paso de las posiciones nacionalistas a la línea marxista de corte trotskista. En junio de 1964 los trotskistas comenzaron la divulgación de una revista llamada *Revolución Socialista*, que durante los siguientes 18 meses alcanzaron a publicarse 20 números. El primer número presentó claramente la concepción de la lucha armada, de las guerrillas y de la revolución que ahora tenía el MR-13.

Sobre la propuesta del FGEI de convertir la lucha guerrillera en guerra del pueblo, *Revolución Socialista* replicaba que era una concepción *formal, burocrática y militarista*, y *lleva en el fondo la subestimación de las masas, su utilización y postergación de su intervención directa*. Los pocos vínculos del FGEI con el PGT, a la altura de septiembre de 1964, eran mensajes escritos entre los jefes guerrilleros y los responsables de la dirección militar del partido, Mario Silva Jonama (*Samuel*), Carlos René Valle (*Neto*) y Joaquín Noval (*Juan Ché*), así como otros cuadros medios. La alimentación de los guerrilleros se lograba mediante la compra de víveres a los campesinos de la región. Pero lo más relevante era que el movimiento guerrillero carecía de una dirección política y un mando militar únicos, pese a que formalmente integraban las FAR.

Esta ausencia de dirección influía, a su vez, en que el movimiento guerrillero estuviera privado de un programa general y un concepto homogéneo sobre los principales problemas políticos, las alianzas, el papel de la guerrilla y los objetivos estratégicos. Por esa razón, ante la publicación de *Revolución Socialista*, y ante el vacío que dejaba el PGT, el FGEI discutió esos problemas y a la altura de septiembre elaboró un documento en el que fijó su posición. El texto, *Carta al mando de las FAR, Dirección del*

Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, Comité Central del PGT y Movimiento 12 de Abril (FGEI, 1964) fijaba sus posiciones y reconocía que las cuatro organizaciones eran heterogéneas y por tanto sólo había posibilidades de dirección conjunta.³⁴

El documento del FGEI fue presentado en diciembre de ese año al MR-13 en una reunión realizada en el campamento Las Orquídeas, en la Sierra de las Minas.³⁵ Gilly presentó un documento para su aprobación, denominado *Declaración de la Sierra de las Minas*, en que reforzaba el planteamiento del MR-13 acerca de la revolución socialista en Guatemala. Turcios aprobó el documento, pero ya en el frente guerrillero fue criticado por su débil defensa de la declaración del FGEI que él llevó a Las Orquídeas. Entonces pidió una rediscusión, pero el MR-13 hizo circular profusamente la declaración, con la firma de Turcios incluida.

La difusión del documento impactó fuertemente a Turcios. A mediados de febrero de 1965 se trasladó a la capital a fin de aclarar su participación en la reunión de Las Orquídeas y conversar con Yon Sosa para reconsiderar lo aprobado. Yon Sosa le había dicho que no apoyaría nada en lo que él (Turcios) no estuviera de acuerdo. El 6 de marzo Turcios dio a conocer la Carta abierta a la Dirección Nacional del MR-13, en la que renunciaba a ese movimiento y señalaba que la declaración había sido publicada inconsultamente.³⁶ La ruptura de las FAR fue inevitable, y ocurrió sin mayores sobresaltos, pues cada grupo guerrillero siguió operando autónomamente como hasta entonces. A lo sumo, algunos miembros de uno y otro grupo, que realizaban actividades en lugares donde no estaba su organización original, regresaron.

34 El FGEI se deslindaba del PGT y del MR-13 en asuntos doctrinarios y estratégicos. Definía tres etapas de la lucha armada: defensiva estratégica, equilibrio de fuerza y ofensiva general. Precisaba que se vivía la primera etapa, en la que *las formas fundamentales serán paramilitares*. El documento además tuvo una declaración que es importante destacar: *La guerrilla... debe reflejar la composición étnica de nuestro pueblo. No debe existir ningún tipo de discriminación racial, expresiones que serán combatidas y en aquellos casos que lo ameriten, sancionadas. Es en la guerrilla, la primera organización en que los indios guatemaltecos encontrarán una completa igualdad de posibilidades para su desarrollo, que los prepare para más tarde dirigir, como les corresponde, los destinos de su pueblo.* (Palabras textuales que habría dicho Turcios, según carta de Román a Liz -Antonio Fernández Izaguirre- del 13 de febrero de 1965.) El FGEI, pues, se inspiraba en las concepciones castristas y guevaristas; en su visión general de la lucha armada, asumía los principios de la guerra revolucionaria chino-vietnamita de Mao Tsé-tung y Nguyen Giap. No obstante, no rompía con el dogma de la época que señalaba la dirección de la clase obrera.

35 Habrían estado presentes catorce personas. Por el FGEI, Luis Turcios (*Herbert*), Fidel Rexcaco Xitimul (*Socorro Sical*), Mario Lemus (*Efigenio*) y Emilio López Román (*Pascual*). Por el MR-13, Marco Antonio Yon Sosa (*Sergio*), José María Ríos de Hoyos (*Evaristo*), Ismael, Tamagás y Montes. Por el frente urbano, Francisco Amado Granados (*Rudy*), el ex-teniente coronel Agustín Vicente Loarca, David Aguilar Mora y Adolfo Gilly.

36 *En la carta, Turcios da su versión de lo sucedido; En la discusión de diciembre con ustedes, en donde debía de haber planteado lo expuesto en el documento (del FGEI) no tuve la claridad para hacerlo, a pesar de haber sido yo uno de sus principales impulsores. El parcial desconocimiento, por falta de análisis, del modo de aplicar las formas organizativas de la Guerra del Pueblo en las condiciones en que se tiene que desarrollar en Guatemala, me hizo caer en una actitud conformista al aceptar como correcto formas organizativas tales como centrales de masas, como medio para organizar e impulsar la lucha armada* (Turcios, 1965).

Las segundas FAR

Ricardo Ramírez (*Rolando*) llegó de la montaña a la capital a finales de 1964. Además de buscar atención médica, tenía el propósito de contactar al Comité Central del PGT para exponerle los puntos de vista del FGEI contenidos en la carta de octubre. Pocos días después llegó Julio César Macías, con quien también algunos miembros del PGT discutieron el documento. Mario Silva Jonama le escribió a Turcios a finales de enero de 1965 sobre esos encuentros:

Escuchamos extensamente a Rolando... y se advirtió mucho mayor coincidencia que la que inicialmente suponía... en cuanto a los planteamientos de fondo... (y que encontramos de interés y sobre todo elaborados y planteados con altura y fundamentación) queremos el documento y en un plazo relativamente corto les haremos llegar la opinión que tenga (el Comité Central)... reconocemos a la luz de toda una revisión de cosas, el error de no haber hecho y haber dejado de hacer durante un período importante, y también hemos explicado que nuestra posición en problemas importantes está mucho más madurada de lo que creían por las caricaturas que en el último tiempo recibía de Rudy (Francisco Amado Granados, trotskista del MR-13).

El FGEI daba un plazo de 30 días para estructurar un frente único capaz de dirigir el esfuerzo armado. La difusión de la *Declaración de la Sierra de las Minas* había precipitado los acontecimientos. La renuncia de Turcios del MR-13 produjo la ruptura con Yon Soza. El incidente, por otra parte, acercó a Turcios y al FGEI al PGT. Además, en diciembre de 1964 había concluido la Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina, en La Habana, con una condena al *fraccionalismo* en el interior de los partidos comunistas. Así, los miembros del FGEI que provenían del PGT y tenían una influencia decisiva en la guerrilla, no quisieron quedar en la situación de fraccionalistas.

En marzo de 1965 se reorganizaron las FAR con la integración de una nueva dirección a la que se denominó Centro Provisional de Dirección Revolucionaria (CPDR). Los grupos que participaron en la constitución de estas segundas FAR fueron el FGEI, el PGT, la JPT y representantes de las llamadas zonas de resistencia.³⁷ El MR-12 de Abril, que había participado en la formación de las primeras FAR, comunicó su decisión de retirarse temporalmente de las FAR para dedicarse a superar sus deficiencias organizativas. La nueva dirección se formaba según el lineamiento propuesto por Turcios en su carta-renuncia al MR-13. El coordinador del CPDR fue *Gabriel Salazar* o *El Indio* (Fernando Hernández), secretario general de la JPT. A partir de entonces las FAR operaron con cierta iniciativa política y militar. El MR-13 actuaba principalmente en Izabal y en la capital, mientras las FAR mantenían actividad en varias regiones del país.

37 Se denominaron zonas de resistencia a los núcleos urbanos o suburbanos en los que operaban comandos guerrilleros. La zona de resistencia que alcanzó mayor desarrollo fue la que correspondía a la ciudad de Guatemala.

Partiendo de la Sierra de las Minas, el FGEI contaba con cerca de 100 combatientes esparcidos en el nororiente del país. La columna guerrillera madre estaba compuesta por unos 30 guerrilleros, entre quienes estaban Luis Turcios, el comandante; Julio César Macías (*César Montes*), Rolando Herrera (*Arnoldo*), Rodolfo Payeras (*Chano*), Mirna Paiz Cárcamo (*Rosamaría*),³⁸ Rocael Muñoz (*Danilo*), el *Abuelo*, *Rocael*, *Andrócles*, Salvador Orellana (*El Gallo Giro*), *Manuel*, *Rogelio*, *Pedro*, Jorge Soto (*Pablo Monsanto*), *Marcelino*, *Benedicto* y *La Chancha*, entre otros. La guerrilla rural de las FAR realizaba sus operaciones en El Progreso, Chiquimula y fundamentalmente en Zacapa. Extendía su vertiente norte de la Sierra de las Minas, buscando establecerse en Alta Verapaz a lo largo de la cuenca del Polochic.³⁹

El segundo frente militar en importancia de las FAR era el frente urbano de la capital, donde operaba la Resistencia. Este grupo se componía de unos 60 hombres que actuaban como comandos urbanos. Estaban bajo el mando de José María Ortiz Vides, conocido como *Chema Vides*, con Arnoldo Vásquez (*Fuguché*) y Percy Jacobs (*Canción o Ramiro Díaz*) y otros, como lugartenientes. El regional de occidente estaba integrado por unos 30 combatientes bien armados, y era dirigido por Leonardo Castillo Johnson, miembro de la JPT; el regional del sur tenía unos 25 hombres; el regional del norte otros 25, y el de Santa Rosa, un pequeño grupo. A partir de 1966 el FGEI se convirtió en el Regional Nororiental.

En total serían unos 300 el número de efectivos de las FAR en el momento de su mayor expansión (1965-66). A éstos deben agregarse la militancia del PGT y de la JPT, que a finales de 1964 contaban con 860 y 350 militantes, más 170 candidatos a militantes. Si a ellos se sumaban algunas docenas de guerrilleros bajo el mando de Yon Sosa, y unos 300 colaboradores, se tiene que en total el movimiento guerrillero llegó a contar con unos 2,000 efectivos, de los cuales entre 350 y 400 eran combatientes armados. Esa era la fuerza que se enfrentaba a unos 15,000 hombres del Ejército y las policías.

Entre 1965 y el primer semestre de 1966 el movimiento guerrillero logró mantener la iniciativa militar y política. El hecho de que el régimen militar de Enrique Peralta Azurdía gobernara la mayor parte del tiempo bajo estado de sitio, proporcionaba a los guerrilleros una excelente justificación para su lucha y despertaba, además, no pocas simpatías entre la población. La actividad del FGEI se concentró en la propaganda armada, que consistía en la ocupación de aldeas y pequeños poblados de la zona para hacer proselitismo con la población. Pero además, la guerrilla daba muerte a muchos individuos acusados de ser agentes del Ejército, de la policía o bien que eran señalados de participar en detenciones y torturas. La mayoría eran comisionados militares. En particular destacan en estas acciones los casos de los muertos en la aldea San Jorge, en Zacapa⁴⁰ y de los

38 La primera mujer de la historia que se incorporó a la guerrilla de la montaña.

39 Los planes para 1965 del FGEI eran expandirse así: *César Montes* se mantendría en la Sierra; *Rigo* (Rigoberto Molina) organizaría la guerrilla de la cuenca del Polochic y se extendería lo más al occidente que pudiera, y finalmente Turcios bajaría al llano oriental, principalmente en Zacapa, con el fin de accionar militarmente sobre la zona militar establecida en el departamento.

40 En un reportaje de Mario Menéndez sobre la guerrilla guatemalteca en la revista *Sucesos* (No. 1715, 26/3/66) de México, fueron publicadas varias fotografías de este *ajusticiamiento* que el fotógrafo Mario Moya captó en el acto.

hermanos Inocencio y Humberto del Busto, propietarios de un aserradero cerca de la aldea Jones, que tras colaborar con la guerrilla hicieron planes con el Ejército para tenderles una emboscada. La guerrilla también mató, en la aldea El Jute, a Abraham del Cid, Samuel Morales y Alfredo Paiz, de la G-2, acusados de torturadores.

Auge y ocaso

A fines de febrero de 1966, el PGT realizó una conferencia nacional (a la que Turcios no fue invitado) en la que renovó a su dirección incorporando a miembros del FGEI y decidió apoyar la candidatura de Méndez Montenegro. Dos días después se iniciarían las redadas contra los dirigentes de la insurgencia, que dieron origen al *caso de los 28*. La primacía en la conferencia del PGT de las posiciones que promovían la lucha armada fue también un intento de la llamada dirección histórica (encabezada por Bernardo Alvarado Monzón) de ponerse a la cabeza del movimiento guerrillero influyendo sobre la joven corriente izquierdista, de la que ya se estaban deslindando, desde Cuba, dos influyentes personajes, Ricardo Ramírez y Antonio Fernández Izaguirre. Como producto de esa decisión quedó desplazada la corriente conservadora -que defendía la identidad de un partido comunista bolchevique- cuya figura más notable era Víctor Manuel Gutiérrez.

No obstante, los hechos que se sucedieron en los siguientes siete meses (2 de marzo a 2 de octubre) marcaron el eclipse de la guerrilla. Las FAR respondieron en mayo al golpe de principios de marzo con acciones armadas, como el secuestro de tres altos funcionarios, cuyo costo político tuvo que pagar el régimen. El 17 de mayo la guerrilla efectuó su operación más espectacular al aniquilar en Sunzapote a una patrulla entera del Ejército comandada por el capitán José Dolores Amézquita. Frente al secuestro de Héctor Menéndez de la Riva, por parte de la guerrilla, el gobierno propuso un canje con el jefe del regional central de las FAR, Ortiz Vides, que había sido capturado por las fuerzas de seguridad. Pero el canje no se pudo efectuar debido a que Menéndez se escapó.

A mediados de julio, el presidente Méndez Montenegro promovió una amnistía para la guerrilla con vigencia a partir de 1960. El 28 de julio los dirigentes de las FAR dieron una conferencia de prensa en la capital en la que rechazaron la amnistía y dijeron con claridad que la guerrilla perseguía la toma del poder. Días antes, Yon Sosa, en una conferencia de prensa celebrada en Izabal también había rechazado la oferta gubernamental. Los siguientes tres meses fueron de expectativa. La guerrilla cesó sus acciones ofensivas y el Ejército se mantuvo vigilante, mientras bajo el mayor de los sigilos preparaba su ofensiva estratégica.

La muerte de Turcios fue decisiva para las FAR. El 10 de octubre se anunció la decisión de la Comisión Política del PGT de nombrar a *César Montes* como comandante de las FAR, y éste tuvo salir de la montaña a la ciudad, dejando a *Camilo Sánchez* encargado del FGEI. *Sánchez* y *Pablo Monsanto* decidieron la toma de San Agustín Acasaguastlán, que fue muy publicitado por la prensa. Pero ya la ofensiva del Ejército había dado inicio el 3 de octubre, al día siguiente de la desaparición de Turcios.

Después de la toma del poblado los guerrilleros perdieron contacto, se quedaron divididos en pequeñas patrullas y se dispersaron. El primer grupo que cayó en la ofensiva del Ejército estaba comandado por *La Chancha*. Simbólicamente el

Ejército recuperó la *Browning* 30 que la guerrilla había capturado en el operativo de Sunzapote. Las operaciones militares se incrementaron en Zacapa, Chiquimula y Puerto Barrios. Entre octubre de 1966 y mayo de 1967 el FGEI fue aniquilado. En marzo fue asesinado un carismático líder estudiantil y miembro de las FAR, Mario Botzoc, y en abril el jefe de la resistencia urbana, Arnaldo Vásquez Rivera.

Camilo Sánchez le encargó a Carlos López que llevara a quince guerrilleros a la Sierra de Las Minas, pero éstos no lograron contactarlos. Entonces se desmovilizaron, pero en la retirada la mayoría fueron capturados. Al conocer la decisión, *Montes* pidió cuentas a *Sánchez*. Una división de hecho venía ocurriendo en la guerrilla.

En julio de 1967 *César Montes* decidió participar en la reedición de la Tricontinental que se celebraría en agosto en Cuba, con el fin de asegurarse el apoyo vietnamita. Turcios había asistido en enero a la reunión anterior, en la que fue nombrado vicepresidente junto con el delegado vietnamita. En Cuba permanecía un grupo de unos 100 guerrilleros (aunque el núcleo principal era de unos 40) recibiendo entrenamiento militar. Este grupo intentó, sin éxito, retener a Turcios. Un plan de alcance continental se fraguaba en Cuba en el que Ricardo Ramírez, el hombre de confianza de Fidel Castro, estaba inserto. El plan consistía en crear tres focos de conflicto en América Latina (Bolivia, Venezuela y Guatemala) para generar una crisis militar semejante a la de Vietnam.

César Montes fue invitado a Vietnam donde permaneció unas seis semanas. Entretanto, el plan de incendio de las Américas naufragaba. En octubre el *Ché* Guevara moría en la selva boliviana; el desembarco de la guerrilla venezolana fue detectado y el patrullaje constante de la marina estadounidense sobre el Caribe contuvo los planes de movilización del grupo de insurgentes guatemaltecos que permanecía en Cuba. Pero ya en ese momento para los cubanos era claro que las FAR se habían derrumbado.

La ofensiva del Ejército obligó a las FAR a concentrarse en la capital. En una reunión celebrada a finales de 1967, los principales jefes guerrilleros (*Camilo Sánchez, Pablo Monsanto, Feliciano Argueta y Socorro Sical*) decidieron separarse del PGT y unirse al MR-13. *Camilo Sánchez* tomó el mando de las FAR. Semanas antes, el grupo de Cuba había enviado un documento de líneas estratégicas elaborado por Ricardo Ramírez y *El Indio Hernández*, pero *Camilo* rechazó el documento. Los jefes guerrilleros interpretaban que el grupo de Cuba tenía intenciones de desplazarlos de los cargos. El mensajero del grupo de Cuba, Percy Jacobs se unió a *Camilo* y *Monsanto* y les rebeló el plan del desembarco.

La idea de *Camilo* era concentrar a los combatientes e irse a Petén para reorganizar la guerrilla. Pero el plan se retrasó. El rompimiento con el PGT se hizo público el 10 de enero de 1968 a través de un documento firmado por *Camilo Sánchez, el capitán Pablo Monsanto, Percy Jacobs* y *Socorro Sical*; aunque estaba fechado en la Sierra de las Minas, había sido redactado en la capital. En febrero *Camilo* tomó contacto con Yon Sosa, cuya guerrilla no se había recuperado tras las redadas de marzo de 1966; además, en noviembre de ese año habían sido expulsados los trotskistas y la ofensiva del Ejército había barrido el frente.

Camilo, Alejandro Sacha, María del Rosario y Yon Sosa se reunieron a la orilla del lago Atitlán con el propósito de fusionar el MR-13 y las FAR. Ahí le presentaron a Yon Sosa un cuadro falso de las FAR (relataron que tenían 300 combatientes en

oriente) y le pidieron que fuera el comandante. María del Rosario protestó por el engaño. En cualquier caso la relación no duró más de tres meses. Yon Sosa se percató de la situación y la fusión no llegó a materializarse. Socorro Sical, de las FAR, decidió unirse a Yon Sosa. El PGT, mientras tanto, había decidido en marzo de 1968 crear las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR-Revolucionarias).

La ofensiva del Ejército siguió a la guerrilla en la capital, donde se emplearon profusamente los escuadrones de la muerte. El PGT se reagrupó y decidió no ir al enfrentamiento. Sin embargo, en enero de 1968 Rogelia Cruz fue capturada, y su cuerpo violado y torturado apareció en la costa sur. Leonardo Castillo Johnson, su compañero, destacado jefe militar del PGT, reaccionó enfurecido y desató una ola de acciones militares en la capital que tuvieron como secuela, en pocas horas, la muerte de un grupo de asesores militares estadounidenses que estaban arribando al país; el atentado contra el liberacionista Manuel Villacorta Vielman; la muerte de Alfonso Alejos y un ataque con granadas contra el Cuartel General. Esta cadena de acciones concluyó con la muerte de Castillo Johnson en la calle Martí, cuando intentaba escapar de una feroz persecución policiaca. A finales de ese mes fue capturado otro miembro del Comité Central del PGT, el dirigente magisterial Rafael Tishler. Luego aparecieron seis cadáveres en una supuesta casa de seguridad. Los comunistas decidieron replegarse para realizar un balance de la situación.

Camilo Sánchez, reducido a la capital, mantuvo una actividad militar constante. Pero una madrugada de agosto de 1968, en la zona 11, el comandante de las FAR fue capturado. Entonces, en un intento por rescatarlo, un comando guerrillero quiso secuestrar al embajador de los Estados Unidos, Gordon Mein, pero en el operativo mataron al diplomático. Las FAR siguieron con el plan de *Camilo* de concentrarse en Petén y en enero de 1969 lanzaron la consigna *todo para el frente*.⁴¹ A mediados de 1968, el capitán *Pablo Monsanto* había sido enviado a reconocer la zona y sus recomendaciones reforzaban el plan inicial de asentarse en Petén, en la región comprendida entre los ríos La Pasión y Salinas.⁴² Durante febrero, marzo y abril, 24 escogidos guerrilleros de las FAR buscaron la constitución de su zona de operaciones, pero subestimaron el terreno y se perdieron. El hambre y las enfermedades les forzaron a ocupar militarmente el campamento Las Tortugas en Rubelsanto, Alta Verapaz, el 4 de octubre de 1969. El Ejército ubicó al contingente guerrillero en las cercanías de la finca San Luis Ixcán a donde había llegado el 28 de noviembre y al siguiente día lanzó una compañía de paracaidistas para aniquilarlos. Los combatientes se dividieron en patrullas bajo el acuerdo de reagruparse en Chinajá, Petén, pero esa fue la ocasión para que varios desertaran.⁴³

41 En realidad el plan de *Camilo* estaba inspirado en la teoría de Regis Debray de unificar todos los esfuerzos dispersos para formar una guerrilla madre en una zona remota fuera del alcance del Ejército.

42 Otro líder guerrillero, *Néstor Valle* (Nery de León Lecardé), intentó sin éxito establecer la guerrilla en Rabinal. Su campamento fue descubierto por el Ejército mientras los alzados dormían.

43 Durante esa marcha ocurrió el primer fusilamiento dentro de la guerrilla. En medio de la desmoralización un combatiente conocido como *El Aguila* fue ejecutado bajo la acusación de haberse comido azúcar de la provisión.

Monsanto, Alejandro Sacha y otros regresaron a la capital en diciembre de 1969, salieron a México pero retornaron de nuevo en 1970. En la capital nuevas promociones de guerrilleros, salidos de los centros educativos de secundaria (Aqueche, Normal y Central), mantenían las estructuras de las FAR. En 1970 se levantó de nuevo el dilema electoral para la guerrilla. El PGT llamó a votar nulo o no votar. Las FAR en cambio decidieron convocar el voto popular en favor del general Carlos Arana Osorio, el comandante militar que le había provocado la derrota a la guerrilla en el oriente, para *exacerbar las contradicciones* en la sociedad y acelerar el paso de la lucha armada.

En febrero de 1970 *Monsanto* y Percy Jacobs secuestraron al canciller Alberto Fuentes Mohr y lograron la liberación de su compañero Vicente Girón Calvillo, capturado por las fuerzas de seguridad. A los quince días, las FAR secuestraron a Holly, asesor laboral de la embajada de los Estados Unidos, y pidieron la liberación de otros dos militantes. Dos semanas después fue secuestrado el embajador alemán Karl Von Spretti y la guerrilla buscó canjearlo por otros quince detenidos. Pero esta vez el gobierno endureció su postura. Afirmó que los detenidos no estaban en su poder, en tanto las fuerzas de seguridad desplegaron un plan preventivo para el cuerpo diplomático y así impidieron que la guerrilla consumara su próximo paso: el secuestro del embajador de Israel. En abril las FAR negociaron con el gobierno de Alemania un rescate para la liberación del diplomático, pero antes de la entrega de los US\$700,000 acordados, Von Spretti apareció sorpresivamente asesinado.

No tardó en desatarse fuertes contradicciones en el seno de las FAR. Entre julio y agosto ocurrió una fractura importante. Percy Jacobs (responsable del secuestro de Gordon Mein), *Sustos* y Arévalo Bocaletti rompieron con *Pablo Monsanto*, a quien responsabilizaron por el fracaso de la implantación guerrillera en Petén. *Monsanto* aseguró que el fondo de la riña era el control del dinero. Los disidentes salieron hacia El Salvador y después se asentaron en México. Ahí trataron de establecerse pero fueron detectados por los cuerpos de seguridad. Los tres ex-guerrilleros (más un muchacho de 17 años que fue capturado casualmente debido a una relación familiar con uno de los implicados) aparecieron ejecutados en San Marcos. El coronel Máximo Zepeda Carrascosa era el cónsul guatemalteco en Tapachula. Landa Castañeda, ex-miembro de las FAR implicado en el asesinato de Von Spretti, fue también muerto en El Salvador.

El 1 de julio de 1970 Arana asumió la presidencia y en enero de 1971 desató una fuerte ola de terror. Decretó un estado de sitio, cerró las vías de acceso de la ciudad y llevó a cabo un cateo casa por casa. En esos días fue asesinado el dirigente político Adolfo Mijangos López, y Alfonso Bauer Paiz sufrió un atentado. El PGT, que estaba reconstruyendo su JPT, sufrió duros golpes.⁴⁴ El Ejército desató una cacería contra el cerebro de los comunistas que supuestamente había elaborado un plan militar. Quince militantes fueron capturados hasta que las fuerzas de seguridad llegaron a su objetivo: Marco

44 El PGT había celebrado su IV Congreso en diciembre de 1969 y elaborado su estrategia de *guerra popular prolongada* y su *programa de la revolución*. A la vez, rehabilitó a ex-miembros del Comité Central que fueron desplazados en la Conferencia de 1966, entre ellos José Manuel Fortuny, quien ingresó clandestinamente al país.

Antonio Leoni, un joven militante, responsable militar del PGT, quien fue capturado en la 18 calle de la zona 1.

Las FAR pasaron a la defensiva en la ciudad, aunque todavía realizaban algunas acciones punitivas, como el asesinato del periodista Isidoro Zarco, de *Prensa Libre*. El grupo de Cuba rompió sus contactos con ellos desde 1969 y decidió formar otra organización. El MR-13 agonizaba tras la sangría de cuadros sufrida en los últimos años. En esas condiciones Yon Sosa intentó levantar sus estructuras. Junto con *El Indio* Hernández y el *Coche* Vides realizaron un par de acciones militares de poca trascendencia en la ciudad. Posteriormente intentó contactar al grupo de Cuba que estaba llegando a Chiapas, pero fue capturado junto con Socorro Sical por el Ejército mexicano.⁴⁵ A pesar de que Yon Sosa se identificó con su rango militar y entregó su arma y dinero, a quien con el tiempo llegaría a ser el general Casillas, la vida no le fue perdonada. Con la muerte de Yon Sosa terminó el MR-13. Hacia 1973 ya han sido asesinados sus últimos dirigentes, Luis Molina Loza (1971) y Thelma Gracioso (1973).

A pesar del clima de persecución política el movimiento popular se reactivó en medio del estado de sitio. Eso animó al PGT a realizar un reajuste táctico, un viraje que trataba de poner más atención a los grupos sociales y relegaba los planes militares. Pero el 28 de septiembre de 1972 la policía capturó en una casa de reuniones a seis miembros de la dirección histórica de ese partido: Bernardo Alvarado Monzón, Carlos Alvarado Jerez, Mario Silva Jonama, Carlos René Valle y Valle, Carlos Hernández y Hugo Barrios Klee. Con ellos también fue detenida Fantina Hernández, encargada de la vivienda. De ese golpe el PGT ya no se recuperaría. En diciembre de 1974 fue asesinado el nuevo secretario, Huberto Alvarado. Así se cerró el ciclo de la guerra de los años 60.

10. La Iglesia Católica

En los años 60 la Iglesia católica estaba absorbida por su propio crecimiento. Pero a la vez aparecían señales de un cambio que tendría un profundo impacto en esta década. En 1959 el Papa Juan XXIII había anunciado la celebración de un concilio ecuménico, que se celebró en cuatro sesiones entre 1962 y 1965, que fue concluido por el Papa Pablo VI.⁴⁶ El Concilio Vaticano II fue pastoral, es decir, se preocupó más por los contenidos y métodos del mensaje evangélico en el mundo contemporáneo. Fue novedosa *la vuelta y recuperación de la sagrada Escritura*, como fuente de la reflexión teológica; y la definición de la Iglesia como *pueblo de Dios*. La Iglesia se reconciliaba con el mundo de la modernidad europeo. Pablo VI dijo en la apertura de la segunda sesión conciliar:

Que lo sepa el mundo: la Iglesia lo mira con profunda comprensión, con sincera admiración y con sincero propósito, no de conquistarlo, sino de

45 Otra versión sostiene que Yon Sosa buscaba alcanzar al frente guerrillero de las FAR en Petén pero se desvió de su ruta.

46 Al arzobispo Rossell y Arellano le tocó asistir a las primeras sesiones, hasta su muerte en 1964, cuando le sucedió Mario Casariego.

servirlo; no de despreciarlo, sino de valorizarlo; no de condenarlo sino de confortarlo y salvarlo. Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, acercarse, comprender, penetrar, servir y evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla; por decirlo así, de alcanzarla en su rápido y continuo cambio.

Cuando la Iglesia latinoamericana, en Medellín (1968) hizo su lectura del Concilio acudió sistemáticamente a las ciencias sociales para disponer de una explicación racional de las causas estructurales de la pobreza y subrayó el acompañamiento con los pobres, la renovación del sentido comunitario de las iglesias locales, la implementación de una pastoral de conjunto y el impulso de la lucha por la justicia y la paz. Esta corriente pastoral se iría consolidando en los siguientes años y avalaría muchos de los compromisos posteriores de sacerdotes, religiosas y laicos con los movimientos revolucionarios; y en el continente llegaría a sistematizarse en la Teología de la Liberación. A pesar de que Mario Casariego aseguró que *voté contra cada punto de Medellín*, estas propuestas fueron penetrando en Guatemala (Bendaña, 1996). Ahora bien,

los planteamientos teóricos de la Teología de la Liberación eran desconocidos para muchos de los agentes de pastoral, formados en contextos eclesiales anticomunistas y teológicos pre-conciliares, y ya después con grandes dificultades para emprender de forma sistemática nuevos estudios teológicos a causa de la sobrecarga de sus trabajos pastorales. Será la realidad, la experiencia y práctica de la fe de los pobres la fuente en la que beben su espiritualidad y compromiso los agentes de pastoral... (Aunque) los documentos de Medellín son la referencia de estos agentes y la fuente inspiradora de su actuación. (REMHI, Presencia y Acción de la Iglesia en el Conflicto Armado, Versión 1.1, 1997. Mimeo.)

Dos temas preocupaban especialmente a los obispos en esos años, según se desprende de sus cartas conjuntas: el régimen de propiedad de la tierra y la violencia política, que se tornó más aguda durante el régimen de Méndez Montenegro. Una carta pastoral del episcopado guatemalteco en pleno fechada el 15 de agosto de 1962 y titulada *Sobre los problemas sociales y el peligro del comunismo en Guatemala*, se refiere a los problemas estructurales del país:

No podemos menos de hablaros de la enorme desproporción que existe en nuestro arcaico régimen de propiedad latifundista, raíz de tantos males, que, erigido en sistema, pervierte la función social de la propiedad y desconoce el derecho que todo guatemalteco, como todo hombre, tiene a poseer su propia tierra y a gozar directamente de sus frutos... (de esta realidad) no culpamos a nadie... cuyas causas remotas proceden de generaciones atrás.

El primer pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), que había sido creada en 1964, sobre la violencia, fue un mensaje del 9 de mayo de 1967 en el que aún no hubo alusión de responsabilidades:

No podemos permanecer indiferentes mientras poblaciones enteras son diezmadas, sobre todo en la región noroeste del país; mientras cada día aumenta el número de huérfanos y viudas -víctimas inocentes de misteriosas luchas y venganzas- o cuando son ya muchos los hombres arrancados violentamente de sus hogares por incógnitos secuestradores y son detenidos en lugares ignorados, o vilmente asesinados, apareciendo luego sus cadáveres horriblemente destrozados y profanados... Nos sentimos profundamente preocupados al constatar que el clima reinante de inseguridad ahonda más y más los graves problemas morales, sociales y económicos de nuestra Guatemala... Callar ante tanta injusticia, crimen y desolación, sería faltar al más sagrado de nuestros deberes...

En esos años continuó la afluencia de clero extranjero iniciada en la década anterior y la descentralización de la Iglesia con la creación de diócesis: Huehuetenango (prelatura en 1961, diócesis en 1968), El Quiché (1967), Izabal (administración apostólica en 1968) y Escuintla (prelatura en 1969). El número de sacerdotes creció de 346 en 1959 a 608 en 1970. Los Padres Maryknoll fueron a trabajar a Huehuetenango; los Misioneros del Sagrado Corazón se centraron en El Quiché; los Misioneros del Inmaculado Corazón de María en Escuintla; los Dominicos se ubicaron en Las Verapaces; los Franciscanos, los Carmelitas, los Capuchinos, los Jesuitas y el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) cubrieron otras áreas y actividades en el país. Diferentes comunidades religiosas femeninas iniciaron también diversas actividades misioneras en muchas parroquias. La tensión entre sacerdotes locales y extranjeros siguió creciendo. En 1969 algunos sacerdotes guatemaltecos decidieron organizarse en la Confederación de Sacerdotes Diocesanos de Guatemala (COSDEGUA). El movimiento creado para fortalecer la formación de los sacerdotes perdió fuerza y desapareció. Gran parte de sus energías se concentraron en pedir la destitución del Cardenal Casariego. Ya en junio de 1961 se había fundado la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA), que tuvo un apreciable impacto en el desarrollo de la Iglesia en las siguientes tres décadas.

En el clero se manifestaron tres corrientes: la sacramentalista, la que se centró en los movimientos y la desarrollista. La sacramentalista entendía la práctica pastoral privilegiando la administración de sacramentos; la centrada en los movimientos se basaba en las actividades de apostolado seglar, especialmente los Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar Cristiano. La corriente desarrollista buscaba salidas a las necesidades inmediatas de la gente a través del cooperativismo, las ligas campesinas, los comités promejoramiento, la construcción de escuelas e infraestructura básica. A veces daban ayuda asistencial temporal a través de Cáritas y Catholic Relief Services.

En muchos pueblos y aldeas los miembros de la Acción Católica Rural fueron quienes respondieron a la oferta de la pastoral desarrollista. Eran campesinos que con frecuencia alcanzaron un nivel económico y social ligeramente superior al de la mayoría de la población, y practicaron la revolución verde, a través de la utilización del abono químico, o bien eran comerciantes que se dirigían a los campesinos con mayor fuerza adquisitiva. La Democracia Cristiana (DC), partido creado por católicos cercanos a Rossell en 1956, llevó la bandera desarrollista influyendo sobre cooperativas, ligas campesinas y Acción

Católica, y las politizó. Por oposición, las cofradías optaron por el MLN y el PID. Pero ya en esos años los Padres Melville, sacerdotes de la Sociedad de los Maryknoll, que habían llegado al país en 1957, y trabajaban en la formación de grupos de jóvenes, decidieron apoyar la lucha armada.

Marian Peter (Marjorie Melville) y Thomas Melville decidieron involucrarse en la guerrilla. El Padre Thomas, que estaba organizando cooperativas en Huehuetenango y Quetzaltenango, y se alteró cuando asesinaron a unos indígenas que él había formado. La Hermana Marian Peter estaba organizando un proyecto de trabajo entre los indígenas que se llamaba Cráter. A través del Cráter los estudiantes de los colegios urbanos de clases acomodadas (Monte María, Liceo Javier, Liceo Guatemala) aumentaban su conciencia sobre la realidad alrededor de ellos. Por medio de los estudiantes bien concientizados, la Hermana Peter estableció contactos con el guerrillero Turcios Lima. En 1968 alguien informó al entonces Arzobispo de Guatemala (Cardenal Mario Casariego) sobre las actividades del Cráter. Inmediatamente el Arzobispo informó al gobierno. Como resultado de esto, a los religiosos extranjeros y a los estudiantes involucrados con el Cráter se les ordenó salir del país. Muchos de los estudiantes politizados fueron reprimidos. Luego de este incidente se sospechó de todos los Maryknoll en que venían a Guatemala. IC 0143, Guatemala, 1967-68.

Desde 1965 los jesuitas y los Maryknoll organizaron cursillos de capacitación social en las áreas rurales, en los que participaban estudiantes avanzados, junto con sacerdotes y religiosas. A raíz de esos cursillo es que nace el Cráter. En esos cursillos trataban de conciliar el marxismo y el cristianismo.

Por el año 1967 rebeldes armados comenzaban a aparecer, sin previa notificación, asistiendo a los cursillos. Afuera de los cursillos platicaban con los participantes privadamente. Ocasionalmente se dirigían al grupo entero. A través de los cursillos se estableció un proceso de integración entre los estudiantes de las ciudades y los campesinos. Los estudiantes trajeron el instrumento de análisis marxista a los indígenas-campesinos, que interpretaban su situación a la luz de la fe cristiana. Cuando llegó la crisis a los cursillos, las FAR se acercaron a los dirigentes de los cursillos, proponiendo la integración de los participantes en el movimiento revolucionario. En un rancho en Escuintla unos dirigentes de las FAR e integrantes de los cursillo llegaron a un consenso para establecer un Frente Revolucionario Cristiano; este frente invitaría a la comunidad cristiana indígena a la revolución. Los cursillos de capacitación social explican la polarización de algunos clérigos y religiosas. IC 0143, Guatemala, 1967.

Estos son los tiempos de la Alianza para el Progreso, que impulsaba el gobierno de los Estados Unidos, también de los grandes proyectos de ampliación de la frontera agrícola en el norte de Huehuetenango y El Quiché (Ixcán y la Zona Reina) y del auge cooperativista e introducción de nuevos cultivos en El

Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Petén.⁴⁷ La colonización del Ixcán Grande fue entregada por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) a los Maryknoll, que recibió un gran impulso con el trabajo del Padre Guillermo Woods.

A la par de los proyectos agrícolas se impulsaron otras acciones de promoción en salud y educación con participación de religiosas. Surgieron las escuelas radiofónicas con el fin de promover la alfabetización apoyadas desde emisoras de la Iglesia: radio Chortí en Jocotán, radio Mam en Cabricán, radio Nahualá, radio Atitlán en Santiago Atitlán, radio Colomba, radio Quiché y posteriormente radio Tezulutlán en Cobán. En el área de salud muchas parroquias crearon dispensarios, mientras grupos de religiosas trabajaban a través de los promotores de salud rural. La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) nació en esos años como expresión de los esfuerzos de comunidades de religiosas y sacerdotes.

A finales de esta década la Iglesia aparecía en el mapa nacional comprometida en el desarrollo social de los campesinos y las poblaciones marginales.



47 Luis Gurriarán, español misionero del Sagrado Corazón, promovió cooperativas de ahorro y préstamo en Joyabaj, Chiniqúe, Zacualpa, Chicamán, Uspantán y Sacapulas. En 1964, cuando se aprobó la personería jurídica de la primera de esas cooperativas, varios sectores atacaron a través de la prensa *el intento de introducir el sistema comunista de Árbenz y modelos extanjeros de organización ajenos a los indígenas*. Gurriarán fue expulsado del país y varios dirigentes cooperativistas fueron secuestrados.

Capítulo Tercero

Los Gobiernos Militares de los Años 70

Primera Parte:

El Proyecto Militar

Desde el gobierno militar de Peralta Azurdia, el Ejército apareció como la institución capaz de dominar la vida política del país. A partir de la gestión del general Carlos Arana Osorio (1970-74) la fuerza armada se instaló en el gobierno con un proyecto de desarrollo a mediano plazo, por lo que tuvo que recurrir al fraude electoral para mantener la programación de las inversiones, dada la debilidad interna de las alianzas políticas que representaban intereses económicos contrapuestos.

Así se abrió un nuevo ciclo de crecimiento económico que, al igual que al comienzo de los años 60, amplió las oportunidades para los grupos empresariales. Al mismo tiempo, para mitigar las tensiones sociales, los militares permitieron un cierto dinamismo del movimiento popular, especialmente en el período 1974-78, que rápidamente, ante la imposibilidad de conseguir reformas reales por los cauces establecidos, se aproximó a un nuevo movimiento insurgente, llegando a cuestionar la totalidad del sistema y aspirando, después del triunfo de la Revolución Sandinista (1979), a lograrlo por medios insurreccionales.

El sector industrial, que siguió disfrutando de las ventajas proteccionistas creadas en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA), a pesar de que ya funcionaba de hecho como socio minoritario de grupos transnacionales, fue acentuando su intolerancia frente al movimiento sindical y al final del período terminaría conduciendo a la dirigencia empresarial a alianzas secretas con el Ejército para destruir violentamente las dirigencias y organizaciones de trabajadores.

Las nuevas oportunidades que ofrecía el mercado internacional para los productos de exportación, el aumento de la productividad estimulada por la introducción y rápida generalización en los años 60 de los fertilizantes, y el avance de la frontera agrícola con los programas de colonización, hizo subir el valor de las tierras consideradas anteriormente como marginales, cultivadas por comunidades indígenas. Grandes empresarios agrícolas o militares convertidos en empresarios iniciaron un despojo sistemático de tierras comunales y serían seguidos por innumerables pequeños y medianos empresarios (especialmente ladinos del oriente o clase media de los núcleos urbanos del interior) que intentaron apoderarse de unas tierras que habían adquirido un nuevo valor.

1. El gobierno de Arana

El general Arana formó un gobierno de coalición con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y el Partido Institucional Democrático (PID), a pesar de que entre ambos partidos existían fuertes diferencias en la forma de conducir la política económica.¹ Pero ambos coincidían en la necesidad de apoyar a un gobierno fuerte, presidido por un militar, que pusiera punto final a las actividades de la guerrilla.

Esta alianza de las dos corrientes dentro del sector empresarial duró, sin embargo, poco. Aunque en las elecciones municipales de 1972 la coalición MLN-PID logró el 74% de las alcaldías, en 1973 Arana se distanció del MLN y procedió a eliminar a los principales dirigentes de la Mano Blanca, considerado el escuadrón de la muerte de los emelenistas (Handy, 1984). A pesar de ello la alianza se renovó en las elecciones de 1974.

Estados de sitio y violencia política

En su mensaje de toma de posesión, el 1 de julio de 1970, Arana subrayó que la *acción pacificadora* (de su gobierno) *estaba enmarcada dentro de la ley, que ningún derecho será menoscabado ni limitadas las garantías que establece la Constitución* (Arana, 1970). Esa garantía, junto con otras que establecía la Constitución, acabaron el 13 de noviembre cuando se decretó un estado de sitio que se prolongó por un año. El gobierno lo justificó con la muerte de cuatro agentes de la Policía Militar Ambulante (PMA) en ataques guerrilleros, mientras preparaba una ofensiva contra la guerrilla urbana.

La Constitución había abierto muchas puertas para suspender las garantías individuales a través de los distintos estados de emergencia (artículos 143 a 155), dejando los detalles a la Ley de Orden Público decretada por la misma Asamblea Constituyente. Pero quedaba una limitación de tiempo. La Constitución y la Ley de Orden Público determinaron un plazo máximo de 30 días para cualquier estado de emergencia, obligando al Poder Ejecutivo a prolongarlo con otro decreto que tenía que ser aprobado por el Congreso. Arana entonces declaró un estado de guerra civil, para ajustar el estado de sitio al estado de guerra, que era el único de los estados de emergencia que no tenía necesidad de ser renovado cada 30 días.²

En noviembre el mensaje del gobernante ya se oía distinto: *Ustedes sacrificaron unos quetzales y un día para emitir su voto, eligieron a Arana y a Cáceres Lenhoff y les dieron un mandato: pacificar al país y terminar la ola*

- 1 Básicamente el MLN defendía una política de libre empresa no intervencionista, mientras el PID era partidario de que el Estado jugara un papel activo en el apoyo y promoción de los nuevos grupos económicos, que habían surgido precisamente aprovechando el intervencionismo estatal.
- 2 Lo que pasó inadvertido con el decreto gubernativo 4-70 del 11 de diciembre de 1970 fue que, por primera vez, el Estado admitía que había una lucha armada en la sociedad, corriendo el riesgo de que la guerrilla tuviera argumentos para que se aplicara el derecho humanitario internacional.

de criminalidad y de crímenes. No les pusieron condiciones ni les dijeron cómo... acatando el clamor público se decretó el Estado de Sitio y el Toque de Queda... ¿y qué pasa? Lluven las protestas, las críticas y las peticiones para que se ponga en libertad a todos... El gobierno que ustedes eligieron va a cumplir, cueste y pese a quien le pese, aun cuando tenga que recurrir a medidas muy drásticas para salvar al país (La Nación, 21/11/70).

Las medidas eran verdaderamente drásticas. Se reinició la ola de terror político y se profundizó la autonomía del Ejército, cuyo presupuesto se duplicó en 1970.³ La censura de prensa incluyó la prohibición de publicaciones de despachos internacionales con noticias de acciones subversivas en otros países. El toque de queda vedaba incluso la circulación de ambulancias y bomberos. Y los cateos domiciliarios alcanzaron tal magnitud que se llegó a cercar la capital impidiendo la salida de personas durante dos días, mientras se realizaba el gigantesco operativo de registro. No está clara la motivación precisa para tal movilización, pero un informe de inteligencia militar de 1971 advertía que el grupo de guerrilleros que había permanecido



Cementerio clandestino en la zona 12 de la capital (13 abril 1973). Foto Revista Crónica

3 Además, con el decreto 40-71 del 4 de mayo de 1971, que dio origen al Banco del Ejército, se crearon las bases para la autonomía financiera de la institución armada.

en Cuba durante varios años estaba ya en territorio mexicano presto para ingresar por la zona de Chiapas e implantarse en la zona norte de Huehuetenango y El Quiché. La inteligencia militar suponía que esa guerrilla, a cuya cabeza identificaba a *César Montes*, establecería contactos con el PGT.

Pero la acometida tomó otro giro social. Las fuerzas de seguridad agarraron a jóvenes con el pelo largo para raparlos y a las mujeres jóvenes que usaban minifalda les marcaban las piernas con un sello de hule. Las fiestas quedaron prohibidas durante ese año. La sociedad vivió una suerte de paralización. Mario Sandoval Alarcón, que fungió como presidente del Congreso durante todo el período de Arana, sostiene que *dimos todo nuestro apoyo al presidente y en 16 meses acabamos con la guerrilla (el Periódico, 20/4/97)*.

Uno de los pocos estudios sobre la violencia de esa época lo llevó a cabo Gabriel Aguilera en base a una revisión hemerográfica de tres periódicos, que fue completada con una encuesta de campo y pruebas parciales en base a siete diarios. El estudio dio como resultados 724 asesinatos y 562 secuestros/desapariciones en todo el país entre 1970 y 1974; 857 cadáveres fueron encontrados con señales de tortura. Los secuestros y asesinatos se concentraron en la capital, sobre todo en los primeros años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Guatemala: Hechos de violencia registrados en la capital como porcentaje del resto del país. Años 1970-74

Hechos	1970	1971	1972	1973	1974
Asesinatos	33.5	45.7	16.1	21.4	27.9
Secuestros	65.8	79.4	57.7	59.0	66.7
Cadáveres encontrados	34.8	23.5	22.2	24.7	31.1

Fuente: REMHI en base a Aguilera, 1981.

La violencia política tenía como objetivo destruir la infraestructura guerrillera en la capital, donde particularmente las FAR realizaron en 1970 y 1971 acciones muy notorias. Pero también en los centros urbanos del interior se vivió el clima de terror.

Lo mataban y lo dejaban tirado embrocado debajo de un palo de nance; tenía dos balazos, uno en la espalda y el tiro de gracia; tenía las manos para atrás bien amarradas con lazos. También presentaba golpes y señales de haber sido torturado... Caso 244, Coatepeque, Quetzaltenango, 1972.

Los recursos de exhibición personal

El sistema de justicia se vio imposibilitado de proteger a la ciudadanía de las ilegalidades en que incurrían las fuerzas de seguridad. Los recursos de exhibición funcionaron sólo cuando había una decisión del Ejército de entregar a los secuestrados o reconocerlos como prisioneros. A veces los operadores de la justicia querían hacer su trabajo, pero el espacio era reducido.

Eran una burla. En la mayoría de las veces no dieron resultado los recursos. Llegaba uno a los cuarteles o a los centros de detención y escondían a los presos o los sacaban a pasear mientras se acababa la diligencia. Es la manera en que se burlaban de la función del Organismo Judicial... IC, 097, Guatemala, 1972.

Recorriamos todas las instalaciones sin encontrar a las personas y teníamos que declarar el recurso sin lugar. No teníamos equipo, y daba lo mismo, pues habían infidencias. Ya se sabía lo que íbamos a hacer y entonces siempre los ocultaban (a los detenidos). Recuerdo que una de las veces que practicamos una exhibición personal en la zona militar de Quetzaltenango, el jefe de la zona, el general Romeo Lucas García, nos pasó las instalaciones para que viéramos que no había nadie... IC 079, Quetzaltenango, 1973.

En tiempos de Arana nosotros exigíamos la exhibición personal del arqueólogo (Carlos) Navarrete, y cuando estábamos con los jueces viendo en la policía donde estaba escondido, no lo localizamos y después, a los pocos días, lo tiraron al (río) Suchiate (frontera con México) desnudo... IC 087, Guatemala, 1972.

Los espacios eran ahora más estrechos que en los años sesenta.

Muchos jueces del oriente no estaban de acuerdo con la política de las desapariciones. Salvaron la vida de muchos compañeros a través de la exhibición personal. César Montes, Zacapa, años 60.

Gran parte de las desapariciones forzadas ocurrieron a plena luz del día, poniendo en evidencia la libertad con que actuaban los hechores. De acuerdo con un informe del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas sobre la violencia bajo los gobiernos de Méndez Montenegro y Arana, el 45% de las desapariciones forzadas en que se supo la hora en que ocurrió, sucedieron entre seis de la mañana y seis de la tarde.

La represión selectiva cobró varias víctimas. El 14 de enero de 1971 fue asesinado Adolfo Mijangos López, diputado demócrata cristiano. El 20 de enero fue muerto el líder campesino Tereso de Jesús Oliva. También en ese mes perdió la vida el catedrático de la Universidad de San Carlos, Julio Camey Herrera y fue ametrallado el abogado Alfonso Bauer Paiz. Mijangos, Camey y Bauer formaban parte de una comisión investigadora del contrato del Estado con la empresa EXMIBAL. En septiembre fue capturada la Comisión Política del PGT. En octubre fue asesinado el líder estudiantil Manuel Cordero Quezada, lo que motivó una gran campaña de denuncia del Frente Contra la Violencia. Muchos de estos crímenes fueron atribuidos a los escuadrones MANO, Ojo por Ojo y NOA (*New York Times*, 13/6/71). En mayo de 1973 fueron asesinados unos comuneros de Santa María Xalapán y su abogado Gregorio Fuentes. En ese mismo mes se produjo una ocupación de tierras por las comunidades indígenas de Sansirisay, El Progreso, que fue sangrientamente sofocada por Efraín Ríos Montt.

Las organizaciones populares

Bajo las limitaciones políticas descritas, el movimiento laboral continuó organizándose. Desde luego, tenían más espacio las corrientes que habían colaborado con el gobierno del PR o que estaban vinculadas a los partidos legales. En enero de 1970 se constituyó la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, la Central de Trabajadores Federados y la Federación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas. En agosto se celebró el IV Congreso del Movimiento Campesino Organizado, convocado por los sindicatos cristianos (Jiménez, 1985). En 1973 se creó la Confederación Nacional Campesina y surgió el Consejo Nacional de Consulta Sindical, integrado por FASGUA, CNT, FTG y FESEBS.

Las necesidades de mano obra en las plantaciones agrícolas crecía. Las fincas de café empleaban hasta 200,000 trabajadores permanentes; las algodonerías a unos 300,000 temporales y las bananeras a unos 4,000 asalariados permanentes. Sin embargo, sólo el 2% de la población económicamente activa estaba sindicalizada.

También comenzaron a gestarse nuevos movimientos vinculados con la Iglesia católica y el mundo indígena, que a finales de esta década adquirirían un inusitado auge. En 1970 el sacerdote español Luis Gurriarán inició la colonización de la Zona Reina, entre los ríos Ixcán y Chixoy. En 1971 se creó la Asociación Indígena pro-Cultura Maya-Quiché. En 1972 se organizó el primer seminario indígena en Quetzaltenango, con representantes de todo el país, y surgió el grupo de jesuitas conocido como la Comunidad de la zona cinco, Centro de Información y Acción Social (CIAS).

Situación económica

Durante el gobierno de Arana las tendencias del comercio internacional continuaron favoreciendo el crecimiento de la actividad económica empresarial. La tasa anual de crecimiento del PIB estuvo por encima del 5%. En esos años se produjo un repunte de las exportaciones de azúcar, que alcanzaron su punto más alto en 1974, año en que se liberaron las cuotas de venta en los Estados Unidos. El algodón tuvo una vigorosa recuperación de precios tras la caída de los años 60.

El gobierno siguió una línea de intervencionismo económico, que se reflejó en el Plan Nacional de Desarrollo 1970-74 y en el protagonismo de la Secretaría General de Planificación Económica, que logró atraer fuertes flujos crediticios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. En 1972 se comenzó a crear el Sector Público Agrícola (DIGESA, BANDESA, INDECA, FYDEP) y los campesinos lograron acceder al crédito a través del sistema cooperativo. El 23 de mayo de 1972 el gobierno nacionalizó la Empresa Eléctrica de Guatemala y en 1973 creó el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI).

Esta política permitió un sorprendente aumento de la inversión bruta interna, que en 1973-74 fue del 38%, basada principalmente en un aumento del capital fijo privado y también público. Pero al mismo tiempo, el dinamismo económico provocó una apreciable inflación que debilitó la demanda efectiva de los sectores asalariados.

Alianzas de poder

Para poder crear un grupo económico de poder dentro del empresariado, el general Arana se alió a través de exiliados cubanos con grupos emergentes del sur de los Estados Unidos, protegidos del presidente Nixon. También estrechó intereses con el grupo Somoza de Nicaragua, y varias familias que habían perdido su tradicional poder financiero se unieron al plan aranista. Finalmente, numerosos mandos y oficiales del Ejército recibieron tierras que se estaban colonizando en Petén a través del FYDEP.

El surgimiento de esta alianza provocó choques con otros grupos empresariales, como el que encabezaba la familia Castillo y la familia Novella. Estas desaveniencias se reflejaron en la entente MLN-PID, el primero más cercano a los intereses tradicionales de las familias de empresarios, y el segundo identificado con el proyecto militar. Los antiguos hacendados se oponían al protagonismo económico de los generales, y también dentro de la cúpula militar surgieron discrepancias que se reflejaron en los partidos. Los Skinner Klee y los García Granados se aliaron a los militares en negocios de extracción de níquel, petróleo y en asuntos financieros a través del Banco Santander. En 1971 el empresario Manuel Ayau fundó la Universidad Francisco Marroquín para formar a las nuevas elites y disminuir la influencia excesivamente intervencionista del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), financiado por AID.

En 1973 los sectores agrícolas descontentos con el poder de la Asociación General de Agricultores (AGA), formaron la Cámara del Agro, con la intención de aglutinar a las numerosas asociaciones que estaban surgiendo en todo el país. También nuevos sectores, como los avicultores y los cardamomeros crearon sus propias asociaciones. Al final del período surgieron desaveniencias entre distintos sectores económicos (productores de carne y leche, algodón y textiles, trigo y pan, cañeros y ganaderos) que buscaban resolver sus disputas de mercado acudiendo a la intervención del Estado.

Los diferentes intereses económicos enfrentados terminaron por dividir el bloque político que Arana había logrado construir y debilitaron la base para su sucesor, el general Kjell Laugerud García.

El Plan de desarrollo 1971-75

Con el plan de desarrollo puesto en marcha por el gobierno de Arana para el quinquenio 1971-75, el énfasis se fue a los servicios de extensión y crédito a los pequeños agricultores, las facilidades de mercadeo de productos agrícolas, la promoción artesanal y del turismo. En segundo lugar se ubicaron los programas destinados a la infraestructura, educación y salud. En tercer lugar, los programas destinados a la colonización o redistribución de tierra y asistencia social. Se propuso por primera vez una estrategia de regionalización de la inversión pública y la necesidad de fomentar la concentración de la población en centros urbanos para facilitar el suministro de servicios.

Llama la atención en el plan la desproporción entre metas y medios creados para alcanzarlas: para los programas de extensión agrícola se emplearon 400 agentes, y sólo el 10% de los créditos planeados para maíz, trigo y frijol se llegaron a otorgar, a pesar de estar considerados entre las prioridades. Hacia 1973, sólo las mitad de los municipios contaba con un puesto de salud, sólo el 20% de la población rural asistía a la escuela, a pesar de que la poderosa figura de Arana había convocado a los finqueros de todo el país para que habilitaran las escuelas que por ley debían funcionar en sus propiedades. En 1972, de 3,526 fincas sólo 894 habían cumplido y apenas el 17% contaban con maestro titulado.

En infraestructura, las obras principales fueron la construcción de caminos en la costa sur y aquéllos que conectaran al altiplano occidental con la costa. Expresamente se rechazaron los caminos de penetración en el norte del altiplano en base a criterios de costo-beneficio. También recibieron un tratamiento preferencial los proyectos de irrigación en el oriente, pero no estuvieron dirigidos a las pequeñas propiedades. Los programas de Desarrollo de la Comunidad que llegaron a la población de escasos recursos, a pesar de un alto componente de gastos administrativos, tan sólo recibieron la asignación de Q1.0 millón. La colonización y ampliación de la frontera agrícola no se consideraron prioritarias en el plan.

A pesar de la reforma del Estado impulsada por Arana a fin de mejorar los índices de ejecución de los programas públicos, no se lograron los resultados esperados. Además, en 1973-74 ocurrió el primer shock petrolero que produjo niveles de inflación sin precedentes, a tal punto que los avances logrados en la productividad agrícola gracias al uso extendido de los fertilizantes químicos, retrocedieron frente al brusco incremento de los precios, en especial de los componentes importados.

2. El gobierno de Laugerud

El 5 de marzo de 1974 se realizaron las elecciones y en votación de segundo grado el Congreso eligió presidente al ex-ministro de la Defensa de Arana, el general Kjell Laugerud. La oposición encabezada por la Democracia Cristiana (DC) que había promovido, en una amplia alianza que incluyó a

socialdemócratas y comunistas, la candidatura del general Ríos Montt, denunció un fraude electoral. La coalición MLN-PID se mantenía con fragilidad después de que Arana impuso la candidatura de Laugerud y el MLN envió a su líder, Mario Sandoval, para ocupar la vicepresidencia. Pero un año después esa coalición se rompió al no encontrar un acuerdo para el control del Congreso.⁴

En febrero de 1976, cuando Guatemala sufrió el terremoto, volvió a surgir la lucha entre el MLN y el PID, esta vez por el control del Comité de Reconstrucción Nacional (CRN). Laugerud salió derrotado y no pudo impulsar un plan al estilo del que Somoza implementó tras el terremoto de Managua en 1972. De todos modos en el período posterremoto se produjo un importante crecimiento económico que, manejado por el Estado, favoreció especialmente a los políticos y empresarios del PID y del aranismo, y excluyó al MLN. Pero los proyectos de inversión de mediano plazo exigían continuidad de los grupos políticos en el poder, más allá de los períodos electorales. Surgió entonces una nueva alianza PID-PR-aranistas para las elecciones de 1978 que presentó como candidatos al general Romeo Lucas, ministro de la Defensa de Laugerud y ejecutivo de la Franja Transversal del Norte (FTN), y a Francisco Villagrán Kramer, un abogado internacionalista miembro del Partido Revolucionario.

Impulso a la inversión

En abril de 1975 el ministro de Economía, Eduardo Palomo Escobar, anunció que existían posibilidades de explotar petróleo en Rubelsalto, Chisec. Un año antes Rudy Weisenberg había obtenido los derechos y contrató a la compañía Shenango. Paralelamente avanzaba la colonización de tierras en la FTN, donde los grupos económicos emergentes esperaban iniciar grandes proyectos agropecuarios. Así, se iban consolidando las fortunas de un nuevo grupo económico surgido bajo el gobierno de Arana y que buscaba áreas de expansión en las que no entraba en choque directo con los grupos tradicionales.

La economía se vio dotada de liquidez proveniente de la ayuda posterremoto y de los buenos precios del café. Las finanzas públicas se vieron fortalecidas ya que la estructura impositiva estaba pensada para unos precios inferiores de las exportaciones. En 1976 el PIB alcanzó un crecimiento del 7.6%, incentivado por el auge de la construcción. En 1977 el crecimiento alcanzó el 7.4%, pero el rebrote inflacionario golpeó el poder adquisitivo de la población asalariada. Los salarios mínimos que habían sido revisados en enero de 1975 quedaban ampliamente superados.

El gobierno continuó el esquema de planificación elaborando el Plan Nacional de Desarrollo 1975-79. En el mundo empresarial surgió un grupo de dirigentes gremiales que permanecerían al frente de las cámaras hasta 1983. En tanto, la organización corporativa comenzó a perder fuerza y se desencadenaron de manera inaudita fenómenos de gansterismo empresarial. La violencia dirigida contra intereses rivales en negocios vinculados con varios partidos políticos llegó a ser común en la segunda mitad de los años 70. *La violencia fue resultado*

4 El MLN propuso para la presidencia del Congreso a Héctor Aragón Quiñónez, representante de los cafetaleros, mientras el PID presentó la candidatura de Donaldo Álvarez Ruiz.

de una mayor centralización del poder económico y de la tendencia a que la oportunidad económica fuera vinculada estrechamente con la influencia política y militar (Handy, 1984).

En mayo de 1976 Arana mandó a secuestrar a Olga de Novella en su pelea con el monopolio del cemento, imponiendo posteriormente un precio oficial del producto que pretendía hacer fracasar a los fabricantes tradicionales (IC 036, Guatemala, 1976). También en 1976 el empresario Jorge Köng Vielman, socio de Arana, fue acusado de asesinar en un restaurante de la zona 9 a los hermanos Leonel Enrique y José Arturo Paiz Masselli, miembros de una destacada familia empresarial; Köng fue absuelto por la Corte Suprema dos años después. En esa dinámica influyó también que la guerrilla comenzara a situar entre sus objetivos el secuestro o asesinato de destacados empresarios y los atentados contra las empresas de agroexportación.

El Plan de desarrollo 1975-79

El segundo plan de desarrollo 1975-79 retomó las preocupaciones del anterior en cuanto a dar énfasis a la eliminación de la extrema pobreza y a reducir la dispersión global de los ingresos. Se propuso como meta asegurar un ingreso mínimo vital familiar, pues mientras más bajo fuera éste menos discutible y más imperativa sería su prioridad absoluta. Los instrumentos para lograrlo eran la política tributaria y el gasto público. Éste orientado a los servicios que beneficiarían a los grupos más pobres: ampliación de los servicios de salud, educación, asistencia social y capacitación.

Se planteó asimismo la necesidad de introducir cambios sustanciales tanto en la distribución regional de la inversión, como del tipo de proyectos y sus criterios de evaluación. Se consideraron como prioritarias las áreas deprimidas en donde los proyectos se aprobarían atendiendo a los beneficios adicionales que tuvieran en materia redistributiva.

Las metas de este segundo plan se vieron relegadas por la ocurrencia del terremoto del 4 de febrero de 1976, que según los cálculos de la época había significado pérdidas materiales estimadas en Q2,000 millones. Se decidió adoptar como estrategia la compatibilización del programa de rehabilitación y reconstrucción dentro de este plan de desarrollo. Al no contar el Estado con los recursos necesarios, se emitieron los Bonos de Reconstrucción Nacional por un monto máximo de Q 122 millones, se amplió el Presupuesto de la Nación en Q190.2 millones y se contrataron préstamos con el exterior por Q115.2 millones.

Dos años más tarde se había dotado de techo mínimo a 252,154 familias, construido 740 escuelas de carácter permanente, reparado centros de salud, edificios administrativos, puentes, carreteras y mercados. *Lo que constituye hasta hoy el esfuerzo más vasto en materia de realizaciones, explicable si se considera este período como uno de distensión, que no ha vuelto a replicarse (REMHI, Evolución de las políticas sociales, 1996. Mimeo).*

Lo más relevante de este proceso fueron los proyectos desarrollados por las ONG, lo que se atribuyó a su alto contenido social, la autonomía en la administración de los fondos, la eficiencia en la ejecución del trabajo, la participación de las comunidades y la coordinación con el Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) (Balcárcel, 1978). El punto más débil del proceso

de reconstrucción fue la coordinación entre las 184 unidades que formaban el gobierno central y de éstas con las entidades descentralizadas.

El terremoto aceleró el ritmo de emigración rural a la capital lo que agravó las condiciones de vivienda de miles de pobladores que se asentaron en terrenos baldíos.

Las luchas populares

La lucha campesina fue progresivamente aumentando en 1974, aunque la Confederación Nacional Campesina hizo un llamamiento a los maestros en huelga para que desistieran. Pero ya en junio hubo fuertes movimientos laborales en las fincas bananeras y en los ingenios. Las tendencias se fueron radicalizando, y en septiembre de 1976 el director de la Policía Nacional declaró que la mayoría de quemas de cañaverales en la costa sur eran obra de grupos campesinos espontáneos.

Los problemas derivados de la posesión de la tierra no tardaron en estallar en Sebol, Alta Verapaz, en abril de 1975; en Santa María Xalapán, en junio de 1977, y en Santo Domingo Suchitepéquez, en julio del mismo año. Éstas y otras movilizaciones dieron contexto al surgimiento del Comité de Unidad Campesina (CUC), que publicó su primer comunicado en *El Gráfico* el 19 de noviembre de 1978. Ya en la marcha del 1 de mayo de 1977 habían participado por primera vez un grupo de indígenas del altiplano y de la costa sur organizados secretamente. La participación se repitió en la marcha conmemorativa del 20 de octubre y fue preparativa de la gran marcha de apoyo a los mineros de Ixtahuacán en noviembre (Arias, 1985).

El 8 de junio, el CUC difundió por todas las radios regionales comunicados de denuncia en distintos idiomas mayas de la masacre de Panzós, ocurrida una semana antes. A raíz de esto se multiplicaron las adhesiones de las ligas campesinas y cooperativas. Para entonces las luchas en el campo habían llegado a un alto grado de radicalismo.

También el movimiento sindical y popular urbano adquirió un fuerte impulso en el período 1976-78. Durante el gobierno de Laugerud se registraron 119 huelgas y paros en los que se involucraron más de 100,000 obreros y originaron más de un millón de días no trabajados. Desde luchas espontáneas acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hasta movilizaciones masivas de impacto nacional: la efervescencia prendió un amplio espectro de manifestaciones reivindicativas.

Para 1976 ya estaba funcionando el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) que propuso la unidad de acción con los pobladores y estudiantes. En marzo de 1977 se produjo la ruptura de la CNT con la CLAT, hecho que tendría un importante peso en la radicalización de esa central sindical; en abril se creó el Frente Organizado de Sindicatos de Amatlán (FOSA), y en diciembre se formó el Comité de Emergencia de Trabajadores del Estado (CETE).

La radicalización parecía estar muy relacionada con el resultado adverso de varias de las luchas emprendidas. En los primeros meses de 1977 los conflictos laborales adquirieron una mayor tensión. En marzo, el CNUS denunció un plan del CACIF contra el movimiento sindical, acordado con las autoridades del gobierno. Los líderes sindicales afirmaron que los atentados contra los sindicalistas de la Coca-Cola eran el primer paso de ese plan. *La Nación* del 31 de mayo recogió esa

denuncia, y ocho días después fue asesinado el abogado laboralista Mario López Larrave. La violencia en el campo también estaba recrudeciendo, particularmente en el norte de El Quiché, donde ya se habían registrado algunos asesinatos desde 1975.⁵

El año 1978 representó el mayor repunte de las luchas sindicales. En diversas empresas los trabajadores lograron mejoras salariales. Simultáneamente diversos sectores de los empleados públicos fueron añadiendo sus demandas, y sus luchas en el movimiento fueron adquiriendo progresivamente mayor convergencia y unidad, incorporando a sectores religiosos, estudiantiles y de pobladores. En la protesta por la masacre de Panzós, ocurrida el 29 de mayo, se movilizaron más de 100,000. Frente a esa situación el sector empresarial reaccionó con mayor intransigencia y violencia. Ese año se registraron 879 casos de asesinatos y desapariciones forzadas (Figuroa, 1991).

La organización indígena

Durante los años 70 el movimiento indígena continuó su crecimiento. Los cambios económicos y sociales ocurridos en las comunidades facilitaron el acceso a estudios secundarios y superiores de un grupo de jóvenes indígenas. Un pionero de este movimiento fue don Adrián Inés Chávez con sus obras lingüísticas, filosóficas y pedagógicas sobre el Popol-Wuh y la cosmovisión maya.

En muchos pueblos surgieron grupos y asociaciones preocupados por la defensa de la cultura e idiomas mayas. Estaban integrados por estudiantes y jóvenes profesionales, promotores sociales y otros líderes. Había grupos o asociaciones en Quetzaltenango, donde se fundó el Comité Cívico Xeljú; en Totonicapán, Huehuetenango, Tecpán, Comalapa, Santa Cruz del Quiché y otros. En Cobán se fundó el grupo Cabracán, que trató de profundizar en la religión maya.

Estas diferentes organizaciones indígenas influyeron en la discusión sobre la participación en la elección de las reinas indígenas para el Festival Folklórico de Cobán y lograron apoyar a varias candidatas en su intento de denuncia de la opresión étnica. Las incursiones en la política se dieron a través de Xeljú, Patinamit, el Frente Indígena Nacional (FIN) y la elección de diputados indígenas en el Congreso.

Entre estas iniciativas fue creándose una Coordinadora de Organizaciones Indígenas, que realizó encuentros y seminarios en Cobán, Sololá, Tecpán y Quetzaltenango. Sectores de la Iglesia católica habían apoyado este movimiento desde tiempos de Rossell, cuando se creó el Instituto Indígena Santiago y el Socorro (ver en el Capítulo primero de este Tomo el apartado Protagonismo de la Iglesia). Posteriormente se fundó el Centro Indígena en la zona 8 de la capital, para estudiantes universitarios. Éste pretendía ser un lugar de encuentros y reuniones para facilitar el intercambio de experiencias de jóvenes

5 El 7 de julio de 1975 paracaidistas del Ejército secuestraron a 30 personas en la comunidad de Xalbal, Ixcán Grande, como represalia por el asesinato del finquero José Luis Arenas, ocurrida en junio a manos de la guerrilla.

indígenas en un ambiente hostil como la capital. Desde el centro también se atendía con programas de alfabetización y formación general a las jóvenes indígenas que realizaban trabajos domésticos en la ciudad.

En Quetzaltenango un grupo de jóvenes profesionales indígenas impulsaban actividades culturales; ahí el P. Tomás García iniciaba su búsqueda de una liturgia inculturada. En Chimaltenango el P. Ronald Burke, junto con el P. José Serech y otros misioneros CICM, formaron el centro PROMIKA, que ofrecía cursos de formación a catequistas y líderes indígenas. En Chichicastenango el P. Tonino desarrollaba una importante labor. En La Verapaz el P. Esteban Haeseijn CICM fue promotor, a la par del profesor Andrés Cuz Mucú, en el estudio e investigación del idioma q'eqchi' y su uso en la liturgia y la catequesis. En el Centro San Benito funcionaba un proyecto lingüístico y se ofreció en coordinación con la Universidad Rafael Landívar un curso de antropología aplicada.

En varias diócesis y parroquias se instalaron emisoras radiales. Se realizaron encuentros de Pastoral Indígena en 1973 en Cobán y un curso de formación de un mes en 1974 en Guatemala. Por otro lado, algunas congregaciones religiosas, parroquias y ONG, como IDESAC, apoyaron el surgimiento de las ligas campesinas, las cooperativas y luego el CUC. Un sector de estudiantes y profesionales indígenas subrayaba la necesidad de estudiar e incluir en los análisis sociales el colonialismo interno, la discriminación del indígena, no en oposición al análisis clasista, sino como complemento. La guerrilla, en cambio, no fue tan sensible a estos enfoques:

El EGP asumió planteamientos básicos de la Teología de la Liberación e incorporó instancias de reflexión crítica, como el Comité Pro-Justicia y Paz, asimismo promovió instancias como los Comités Revolucionarios Vicente Menchú. Pero, ¿por qué no tuvo la misma apertura frente al movimiento indígena? O como decía un documento de estudio de MAYAS: ¿Por qué se juntó a Marx con Cristo, pero no con Tojil? ¿Será que la hegemonía era su objetivo principal? Ya entre los cristianos y campesinos la había logrado, lo que provocó crítica e inconformidad y la posterior salida de un grupo significativo de ellos. Los que insistían en incluir las reivindicaciones indígenas y en combatir el colonialismo interno, fueron acusados de culturalistas y promotores de una línea divisionista. Según la visión de los ideólogos de la lucha de clases, con el triunfo de la revolución se resolvería la cuestión étnica. Para fines propagandísticos la guerrilla utilizaba los elementos típicos indígenas, sobre todo en el exterior. Hacía solicitudes de ayuda en nombre de la población indígena o grupos, pero canalizaba los fondos hacia sus estructuras. Esta instrumentación alejó a muchos líderes indígenas del CUC. (REMHI: Movimiento indígena y conflicto armado, 1997. Mimeo.)

ORPA fue la organización que levantó el tema en sus primeros documentos, en lo que puede considerarse elaboraciones rudimentarias sobre el racismo en Guatemala. También se preocupó de formar e incorporar a los puestos de mando militar a jóvenes indígenas.

3. Otras tendencias del período

Intolerancia del sector empresarial

Surgió en esta época una franja de dirigentes gremiales que permanecerían al frente de las cámaras prácticamente hasta 1983, lo cual implicó la marginación de otros grupos empresariales. Entonces, aumentaron las peleas entre el nuevo y el viejo empresariado (representados en el PID y el MLN, respectivamente), que debilitaron al bloque político que Arana había logrado crear.

A pesar de que se estaba desarrollando un nuevo ciclo de auge económico (con tasas de crecimiento del PIB superiores al 7% en 1977 y 1978), los grupos empresariales no desarrollaron mecanismos de concertación que pudieran calmar las expectativas que esta situación creaba en los trabajadores. Los algodoneros y los nuevos empresarios que se vincularon con los negocios del gobierno fueron el grupo que más prosperó, aunque el sector industrial siguió disfrutando las ventajas proteccionistas creadas en el marco del MCCA. Estos nuevos grupos empresariales manifestaron una acentuada intolerancia frente a las reivindicaciones de los trabajadores, lo cual al final del período terminaría conduciendo a una parte de los empresarios a alianzas con el Ejército para destruir violentamente a las dirigencias y organizaciones laborales.

Los nuevos despojos de tierras

La revaloración de las tierras generó un nuevo ciclo de despojo (similar, aunque de menor intensidad, al ocurrido con la Reforma Liberal) que se tradujo desde la mitad del decenio en un aumento inusitado de la violencia contra las comunidades campesinas, superior incluso al ciclo de violencia contra los beneficiados por la reforma agraria. Detrás de muchos de los hechos de violencia de 1980-82, estuvo actuando este ciclo de despojo de las tierras campesinas.

El deterioro del sistema electoral

El Ejército se instaló directamente en el gobierno desde 1970 con un proyecto de desarrollo económico de mediano plazo, por lo que tuvo que recurrir al fraude electoral para mantener la programación de las inversiones, dada la debilidad interna de las alianzas políticas, que representaban intereses económicos empresariales contrapuestos. De esta manera, desde 1970, con la elección del general Carlos Arana, se fue repitiendo un mismo esquema de sucesión del poder, mediante el cual el ministro de la Defensa pasaba a convertirse en candidato presidencial con el triunfo garantizado. Todo ello manteniendo la formalidad electoral establecida en la Constitución de 1965.

Este juego fue deteriorando la credibilidad del sistema electoral, como se reflejó en la escasa participación en las elecciones presidenciales de 1978. Al mismo tiempo los partidos opositores, especialmente la DC y la socialdemocracia, al verificar su exclusión del grupo político en el poder, buscaron aumentar su influencia en el movimiento popular.⁶

6 En la XIII Convención Nacional de la DC, celebrada el 13 de octubre de 1974, se acordó colaborar con los sectores progresistas del gobierno, pasar a una oposición constructiva y

Irrupción del movimiento indígena

El acelerado crecimiento económico de los años 60 se había alejado de las expectativas de mejoramiento de la población. En el caso de la población indígena la frustración se vivía en un doble sentido. Se sumó a la desigual relación con el mundo ladino, el surgimiento de un sector indígena comercial pujante que reforzaba el impulso de la concentración de tierras y, a la vez, el control del mercado de insumos.

Por otro lado, frente a los efectos del terremoto de 1976, se produjo una crisis de liderazgo en el medio rural. El Comité de Reconstrucción Nacional no logró controlar a las organizaciones populares y crecieron nuevas formas organizativas vinculadas a la Iglesia católica y a las instituciones de desarrollo, que pronto se aproximaron a la guerrilla o fueron infiltradas por ésta. El temporal respiro para la economía campesina del altiplano, logrado bajo el gobierno de Arana con el abaratamiento del transporte y la introducción de fertilizantes, se había venido abajo con la crisis energética iniciada en 1973 (ECA, 1978).

El terremoto fue una verdadera prueba de fuego para las comunidades y los centros regionales indígenas, ya que de la noche a la mañana se vieron efectivamente obligados a ejercer todas las responsabilidades políticas y sociales, así como a solucionar las inmensas necesidades surgidas a raíz de la catástrofe, con un mínimo de recursos e incomunicados con la cabecera departamental y la capital, en algunos casos, por varias semanas. A diferencia de los viejos líderes nombrados por los poderes políticos externos, los nuevos líderes eran elegidos por su comunidad, con funciones específicas. Y su desempeño fue magnífico. Entre tanto, el gobierno central desbordado por la magnitud del desastre toleró el hecho de que las comunidades tomaran la iniciativa y se constituyeran prácticamente en poderes locales, negociando directamente con las agencias internacionales la ayuda que recibirían del exterior.

Crecimiento del movimiento popular

El desarrollo del movimiento laboral urbano, impulsado por un ciclo de crecimiento económico e inflacionario, siguió estrellándose con la intolerancia de sectores empresariales. El aumento de la presión sobre la tierra inició bajo este gobierno una etapa de despojos violentos, que no tardaron en derivar en masacres campesinas. Al mismo tiempo, el desarrollo del movimiento popular, que el gobierno había tolerado especialmente en el período 1974-78, para reducir las tensiones sociales ante la imposibilidad de conseguir reformas, se aproximó al nuevo movimiento insurgente, llegando a cuestionar la totalidad del sistema y aspirando, sobre todo después del triunfo sandinista, a lograrlo por medio insurrecciones.

La nueva guerrilla, que se había iniciado con la década, buscó pronto puntos de contacto con la lucha social que se agudizaba en el campo y en la ciudad. Esta situación llevó a un sector mayoritario de la dirigencia empresarial a establecer un

centrar la oposición en el MLN. Ante los escasos resultados, en 1976 se decidió poner en marcha la maquinaria política popular, y finalmente en 1978 propusieron como candidato presidencial al general Ricardo Peralta Méndez, apoyado por un Frente de Unidad Nacional.

pacto con la cúpula militar en el gobierno para desarticular el movimiento popular, considerado un brazo más de la insurgencia. La alianza desató la peor ola de represión contra las organizaciones populares en la historia del país.

Desarrollo de la nueva guerrilla

La guerrilla se reorganizó entre 1969 y 1975 partiendo de un esfuerzo para superar sus errores de fase anterior. En parte ello fue posible por el defectuoso manejo contrainsurgente de esa época. Sin duda, las operaciones tácticas y el evento electoral de 1966 fueron fundamentales en la anterior derrota guerrillera, pero ello no se acompañó de una reforma de la sociedad. Es decir, ninguna acción se tomó buscando eliminar el caldo de cultivo que había propiciado el prendimiento de los rebeldes. Por el contrario, el Estado mantuvo la exacerbación represiva, de suerte que miles de guatemaltecos continuaron siendo víctimas de ella cuando prácticamente no había guerra.

La oportunidad de una transición propiciada por la elección de un presidente civil no se aprovechó en la medida en que ni los militares ni el gobierno del PR tuvieron la voluntad para ello. Tampoco se produjeron cambios en las estructuras sociales, que continuaron produciendo desigualdades, pese a la relativa bonanza económica. En definitiva, el régimen político estaba más interesado en el uso del aparato estatal para sus propios fines económicos y el mantenimiento del poder por medios extralegales, que en el destino nacional (Aguilera, 1986).

Ya para 1976 la lucha guerrillera había logrado rearticularse en varias zonas del país. La Organización del Pueblo en Armas (ORPA) estaba culminando en el altiplano de San Marcos su etapa de preparación para la guerra; las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) iniciaban un debate interno que les llevaría a adoptar la política de frentes guerrilleros. Un tercer grupo, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), extendía un nuevo tipo de acción guerrillera, en tanto que el Ejército oficial le lanzaba la primera operación contrainsurgente en el norte de El Quiché. Al comienzo del mandato de Lucas destacaba especialmente la actividad del EGP.⁷

Desarrollo de la contrainsurgencia

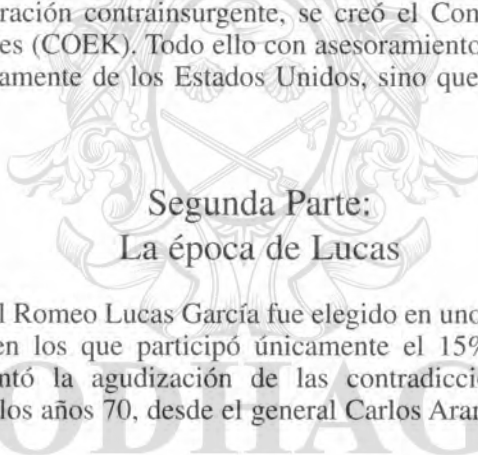
La doctrina contrainsurgente se adaptó a una prolongación indefinida del conflicto. Durante los años 70, a pesar de la relativa calma de la guerrilla, el Ejército fue adecuando y perfilando una estrategia contrainsurgente que, a pesar de que seguía basándose en los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, incorporó las experiencias de más de diez años de lucha antiguerrillera. La Acción Cívica se elevó a nivel de Estado Mayor; la inteligencia y contrainteligencia se desarrolló con una proyección de mediano

7 El 16 de enero de 1978 el EGP emboscó una patrulla del Ejército en la cooperativa Los Ángeles, Ixcán, y en ese mismo mes secuestró a Roberto Herrera Ibarquien. El 18 de enero emboscaron a la policía en San Bernardino, Suchitepéquez, acción en la que murieron miembros de la Dirección Nacional de esa organización, entre ellos Clemencia Paiz. En mayo secuestraron al cónsul salvadoreño, general Eugenio Vides Casanova, y en ese mismo mes intentaron tomar el caserío El Cacao de San Pedro Pinula, Jalapa.

plazo, aunque con aparatos que fueron controlados, al igual que en la época de las dictaduras liberales, desde la Presidencia. La base del trabajo de inteligencia fue concebir que la lucha contrainsurgente iba a ser cíclica en la historia de Guatemala. Por tanto, intentaba golpear a las organizaciones en su etapa de surgimiento o recomposición, sin apresurarse, buscando ante todo acumular información.

Además, se introdujeron varias innovaciones tácticas que serían empleadas a fondo en las campañas contraguerrilleras de 1980-81. Así, históricamente, la estructura de dislocación de fuerzas del Ejército respondía más que nada al control administrativo del país. De 1976, aproximadamente, a 1982, con el resurgir de la lucha guerrillera en el altiplano occidental, se comenzó a implementar el modelo contrainsurgente de Brigadas, Puestos de Comando Avanzado y Bases de Patrulla, correlativo a la ampliación de las áreas de influencia guerrilleras, aunque la estructura anterior de Zonas Militares continuaría vigente formalmente.⁸

El Ejército adoptó el Galil israelita como mejor arma de combate antiguerrillera en la montaña y se dotó de helicópteros Bell, aviones Pilatus adaptados para combate, y aviones de abastecimiento israelitas Aravá. En este proceso de preparación contrainsurgente, se creó el Comando Especial de la Escuela de Kaibiles (COEK). Todo ello con asesoramiento internacional que ya no provino directamente de los Estados Unidos, sino que de Israel, Taiwan y Argentina.



Segunda Parte:

La época de Lucas

El general Romeo Lucas García fue elegido en unos comicios señalados de fraudulentos en los que participó únicamente el 15% del electorado. Su gobierno representó la agudización de las contradicciones que se venían gestando durante los años 70, desde el general Carlos Arana.

8 Ese modelo incorpora las tres ramas a las operaciones antiguerrilleras y adopta una estructura territorial y operacional adecuada a las fuerzas insurgentes (ver Capítulo cuarto de este Tomo, El gobierno de Ríos Montt, y del Tomo II de este Informe: La estructura militar contrainsurgente). El mando y la coordinación se centralizan, así como la cooperación de las armas y sus servicios. Las brigadas se establecen atendiendo a la configuración de los frentes guerrilleros; éstas corresponden a un batallón de infantería reforzado con unidades de artillería, blindados y eventualmente aviones y helicópteros, sus fuerzas fluctúan entre 800 y 1,500 efectivos; se dislocan, simplifican sus estructuras y gozan de autonomía operacional táctica (Gramajo, 1995). Por ejemplo, la zona militar de Huehuetenango, fue convertida en un sistema de instalaciones modernas, fortificadas, con pistas de aterrizaje de cazabombarderos y comunicaciones ágiles.

En 1981, el Ejército estaba organizado en diez brigadas especiales antiguerrilleras: Mariscal Zavala, Guardia de Honor, Huehuetenango, Quetzaltenango, Cobán, Poptún, Puerto Barrios, Puerto San José, Zacapa y Jutiapa. Las brigadas dislocadas en áreas de operaciones utilizaban un sistema de puestos de avanzada y bases de patrullas, correspondientes a los niveles táctico y operativo.

1. La violencia política

Las tendencias del período le imprimieron al gobierno del general Lucas una dinámica de extrema violencia y exacerbación de las contradicciones políticas. En 1979 se registraron 1,371 casos de asesinatos y secuestros políticos; en 1980 hubo 2,264 casos, y en 1981 se llegó a los 3,426 casos (Figueroa, 1991). Fue como el estallido de una serie de perversiones políticas que habían venido madurando en los períodos anteriores. En la memoria del pueblo guatemalteco estos años perduran como una de las etapas más negras de su historia: *la época de Lucas*.

Algunos de los componentes más negativos de la tradición del Estado y la sociedad, como el mito de la violencia, la impunidad, el racismo, la corrupción, terminaron por dominar la escena de la vida sociopolítica diaria. Como secuencia trágica, el país entró en una espiral de violencia que marcaría la siguiente década.

Crímenes en el claro

El presidente Lucas asumió el gobierno en julio de 1978. Entre ese mes y octubre siguiente el espacio político que se había abierto en el régimen anterior se fue cerrando rápidamente. Como secuela de las jornadas populares de octubre de ese año contra el aumento de la tarifa del transporte urbano, comenzaron los primeros atentados y circularon listas de condenados a muerte, marcando el inicio de una nueva ola de represión. En los seis últimos meses de 1978 fueron encontrados 500 cadáveres, de los cuales 200 presentaban señales de tortura (Amnistía, 1980).



Alberto Fuentes Mohr, asesinado el 25 de enero de 1979.

Esta tercera ola de terror (que se inició en 1978), tiene dos momentos. El primero, que duró aproximadamente hasta 1980, estuvo enfocado hacia la destrucción del movimiento popular y, por tanto, se dirigió a la aniquilación sindicatos, movimientos de pobladores, asociaciones estudiantiles de secundaria y universitarias. El terrorismo fue una respuesta tajante a las luchas abiertas y legales, las cuales llegaron a su clímax en las jornadas de octubre de 1978, y destruyó el avance popular observado en los años 70 (Figuroa, 1991). El gobierno presentó los actos de represión, al igual que en la etapa de Méndez Montenegro, como acciones de las dos extremas, que el gobierno *de centro izquierda* pretendía combatir.⁹

Probablemente la decisión de recurrir nuevamente al terror estatal se confirmó durante las jornadas contra el aumento del transporte público en octubre de 1978. Pero también se produjeron crímenes que venían arrastrados de la violencia desatada en los últimos meses del gobierno anterior. Así se puede citar el asesinato, el 30 de junio, a pocas horas de la toma de posesión de Lucas García, del padre Hermógenes López, párroco de San José Pinula, considerado como el inicio de la escalada de crímenes contra la Iglesia católica. O el asesinato, el 29 de junio, de José Alberto Alvarado, líder de la CNT, preludio de la campaña que se avecinaba sobre la dirigencia del movimiento sindical. En el campo, la represión estuvo muy vinculada con los desalojos de tierras y con las operaciones contrainsurgentes del Ejército.

Las protestas contra el aumento del transporte público fueron reprimidas con el saldo de 1,500 capturados, 300 heridos y 40 muertos. El gobierno canceló la Asociación de Telegrafistas y Radiotelegrafistas y la de Empleados de Correos; además, el 4 de octubre la policía ocupó los locales de Correos y detuvo a 400 trabajadores. La violencia tuvo en 1978 como ejemplos más representativos los asesinatos de Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, realizado al medio día del 20 de octubre en pleno centro de la capital; de los abogados Santiago López Aguilar, Jesús Marroquín y del dirigente sindical de la Coca-Cola, Pedro Quevedo. La ola de violencia política fue creciendo a lo largo de 1979. Los dos dirigentes más destacados de la oposición socialdemócrata cayeron abatidos. El 25 de enero fue asesinado Alberto Fuentes Mohr, dirigente del PSD, y el 22 de marzo, Manuel Colom Argueta, líder del FUR, ambos en zonas céntricas de la capital, a plena luz del día y con un notable despliegue operativo, que incluyó hasta helicópteros (ver recuadro).

9 En 1978 surgieron organizaciones anticomunistas clandestinas como el Comité de Padres de Familia Organizados, la Unidad Pro-Libertad Nacional contra la Agresión Comunista y los Oficiales jóvenes. El 18 de octubre reapareció el ESA publicando una lista de 38 personas condenadas a muerte.

Manuel Colom Argueta

Dos semanas antes de ser asesinado, el dirigente político Manuel Colom Argueta había declarado a la prensa: *En este momento lo difícil es lograr que no me maten, ya que las técnicas de la ultraderecha para sostenerse en el poder han cambiado... han enarbolado la bandera del crimen jugando al asesinato político, ya eliminaron a (Alberto) Fuentes Mohr y no está lejano el día en lo que hagan conmigo. El asesinato político ahora lo realizan a plena luz del día (La Hora 9/3/79).*

Pocos días antes su agrupación, el Frente Unido de la Revolución (FUR), había sido finalmente inscrito como partido en el Consejo Electoral. Así, Colom Argueta, que había ganado prestigio como alcalde capitalino (1970-74), se perfilaba como el líder más carismático de la oposición para las elecciones de 1982. Incluso en una reunión celebrada en enero de 1979 en San Marcos había recibido el apoyo de las bases y dirigentes intermedios de varios otros partidos, como la DC, el PR e incluso MLN. También era visto por el recién formado Frente Democrático contra la Represión (FDCR), donde se agrupaba la mayoría de las organizaciones populares, como el aliado que podría encabezar una coalición muy amplia de oposición.

El asesinato de Colom Argueta se produjo el 22 de marzo de 1979 en la 5 Calle y 4 Avenida de la Zona 9, a las 10:30 horas. Unos quince hombres armados que viajaban en tres vehículos y dos motocicletas participaron en el operativo, en el que también murieron sus dos guardaespaldas, Héctor Barillas y Emilio Rodríguez. Los atacantes interceptaron al líder político a la altura de la 6 Avenida y 5 Calle; él intentó huir pero fue alcanzado a dos escasas cuadras. Desde uno de los vehículos atacaron a la víctima con ráfagas de ametralladora por el lado derecho, mientras por el otro flanco los motociclistas completaban el cerco. Un testigo presencial asegura que uno de los tripulantes de la moto, un hombre joven y corpulento, descendió portando una subametralladora y *remató* a Manuel Colom.

Cuando yo llegué todavía él estaba vivo... vi hacia atrás y vi un baño de sangre en el carro... creí que era (sangre) de los otros muchachos (los guardaespaldas)... pero no, era la sangre de él. Fueron 48 ó 58 balazos, todos expansivos... entonces se vació.

Dios quiso que muriera así, porque no creo que él murió como un perro, como dijeron los del CACIF. Cuando a Manuel se le ofreció un carro blindado dijo '¿por qué? ¿con qué derecho? si el pueblo se atraviesa a pie... todos tenemos que morir de una manera o de otra, lo importante es saber porqué morir', me dijo. 'Pues sí, tenés razón', le dije. Caso 419, Guatemala, 1979.

Ese mismo día el presidente Lucas y el vicepresidente Francisco Villagrán Kramer emitieron un comunicado acusando del asesinato a enemigos del gobierno. Aludieron, a manera de defensa o para desarmar a la oposición, que el FUR *estaba haciendo llegar al presidente Lucas, por intermedio del vicepresidente Villagrán Kramer, un valioso documento en el*

que sugiere soluciones para estimular el diálogo entre las fuerzas de izquierda democrática y el gobierno, para fortalecer el compromiso de la paz. El directorio del FUR acusó de *cínica* la declaración oficial y aclaró que el documento era una declaración emitida un año antes.

El asesinato de Colom Argueta causó una profunda conmoción en la sociedad. Virtualmente no hubo organización o institución que no se pronunciara públicamente, desde el propio Ejército y el ministro de Gobernación, todos los partidos políticos, hasta las insurgentes FAR, que aseguraron que si en quince días el gobierno no capturaba a los asesinos, esa agrupación daría a conocer los nombres de los responsables (*Impacto*, 25/3/79).

Un informe preliminar de la policía del 24 de marzo señaló que los asesinos utilizaron escopetas 12 y 16. No obstante en el lugar fueron encontrados casquillos de armas 9mm y .45mm. El atentado pudo haber movilizado hasta 300 elementos. Un día antes, el 21 de marzo, fueron retirados todos los agentes de la policía destacados en la zona 9 y en su lugar fueron asignados miembros del Sexto Cuerpo de la Policía Nacional, a cargo de Pedro García Arredondo. Cerca de las oficinas de Colom varias personas identificaron al *Chino* Lima, interrogador de la Policía Judicial,¹⁰ en compañía de *El Gringón* (supuestamente vinculado con la CIA). A la misma hora del atentado, a varias cuadras, fue visto el cubano-estadounidense de apellido Fuscolo quien, de acuerdo con testimonios, era parte del grupo operativo.

Mientras se ejecutaba el atentado sobrevoló el área, a baja altura, un helicóptero en el que viajaban dos oficiales del Ejército; *aunque esto no pudo ser confirmado, las versiones indican que se trataba de los generales Spiegler y Cancinos* (*Síntesis del Caso Colom Argueta*, Guatemala julio de 1995. Mimeo). La noche de la velación de Manuel Colom, Jorge Torres Ocampo, del MLN y enemistado con Mario Sandoval, afirmó que en la ruta de Vista Hermosa, zona 15, a la zona 9 hubo un operativo ese día 22. Él, alarmado, se comunicó con Donald Álvarez, quien le aseguró que el operativo no estaba dirigido contra su persona.

Días antes de ser asesinado, Colom le confió a su familia que *también* (Carlos) Arana y Mario Sandoval ya se alinearon, lo que implicaba que estaban al tanto de los planes para eliminarlo. Manuel Colom había decidido no salir del país; pensaba que era consecuente con la memoria de su amigo Adolfo Mijangos, asesinado a principios de los años 70, denunciando la corrupción de las altas esferas políticas y empresariales.

Meme le atribuía a Mario Sandoval el asesinato directo de Fito (Mijangos)... Fito y Meme estuvieron vigilados por un cubano, que decían que era de la CIA, que había venido en tiempos de Ydígoras, y que Mario Sandoval había traído para vigilar a Fito... También Manuel decía

10 Ver Capítulo *Las estructuras militares contrainsurgentes*, en el parágrafo Policía Judicial, Tomo II de este Informe.

que los industriales eran los dominantes en ese momento de matanzas: 'Ellos están manejando los escuadrones de la muerte', eso lo dijo Manuel. Caso 419, Guatemala, 1979.

Todos los indicios apuntan a que el alto mando militar se involucró en la decisión de asesinar a Colom Argueta. Pero al parecer hubo entre ellos incertidumbre sobre el impacto político que tendría dada la creciente popularidad del líder del FUR.

Hubo un sondeo entre oficiales (del Ejército), gente como los capitanes dijeron que no convenía que lo mataran... pero la cúpula lo odiaba ¿Spiegler?, Cancinos... Manuel mencionaba mucho a un Callejas... Lo odiaban porque eran de la misma clase de Arana, los que se empezaron a enriquecer... Meme empezó a denunciar la descarada unión de la política con el negocio, y que el sector privado estaba en colaboración con la institución castrense en los grandes negocios. Caso 419, Guatemala, 1979

Tras el asesinato de Manuel Colom sus hermanos comenzaron a sufrir persecución. Por un campo pagado publicado en julio en los diarios en el que sindicaban a altos funcionarios militares del gobierno, el Ministerio Público llevó a juicio a los hermanos Guillermo y Luisa (Lulú) Colom, y un juez les motivó auto de prisión por desacato. Finalmente el caso quedó sobreesido en diciembre, pero el constante acoso y amenazas obligaron a Guillermo Colom a asilarse en la Embajada de Venezuela, donde permaneció más de dos meses antes de poder exiliarse. El ambiente de tensión se mantuvo sobre toda la familia Colom desde los días posteriores del asesinato.

A los ocho días de muerto Meme recibo una llamada... alguien me dice que sabe quienes son los asesinos de Manuel, y que si le entregaba una cantidad de dinero para irse del país, él me daba los apodos, los nombres y los retratos... entonces le digo que me llame el jueves. Colocamos un aparato que consiguió Guillermo y nos dijeron: 'tiene que registrar la llamada, si no registra es que viene del Cuartel General'. Cuando llamaron usamos los teléfonos secundarios para oír y la máquina nos registró a nosotros. La llamada venía del Cuartel General. Caso 419, Guatemala, 1979.

También la violencia derivó hacia operaciones de *limpieza social* (en los primeros seis meses de 1979 fueron asesinadas 1,224 personas señaladas de criminalidad común) y de lucha de mafias. Según denunciaba Amnistía Internacional en mayo de 1979, habían sido secuestrados trece grandes empresarios. Pero la represión se centró especialmente en continuar descabezando al movimiento popular. En estas acciones se entremezclaban detenciones policiales, a solicitud de los empresarios, con amenazas de las organizaciones paramilitares o crímenes y secuestros de dirigentes realizados muchas veces a plena luz del día y ante testigos.

En el medio rural cabe destacar que el 17 de marzo de 1979 comenzó el desalojo violento de los campesinos de la región de Chixoy, Baja Verapaz, donde se iba a construir la presa hidroeléctrica. El 11 de octubre, 200 campesinos de la finca El Izotal de Sacatepéquez y los trabajadores de la fábrica Hilados y Tejidos San Antonio de Chimaltenango ocuparon la iglesia El Calvario. En estos incidentes secuestraron al dirigente campesino Miguel Archila Martínez, quien apareció asesinado en Santa Catarina Pinula. Ambos hechos presagiaban las tragedias que comenzarían a generalizarse en los dos años siguientes, especialmente en las zonas donde se registraba actividad guerrillera.

La ola de represión se prolongó durante 1980 y fue tomando un carácter masivo, que terminó de desarticular las organizaciones sindicales urbanas, cada vez más radicalizadas. Significativamente, el 1 mayo fueron secuestradas 32 personas en el Parque Centenario. En los actos conmemorativos del día del Trabajo, el CNUS llamó a *derrocar el régimen luquista e instaurar un gobierno revolucionario, democrático y popular*. Poco después, el 21 de junio, fueron secuestrados 27 dirigentes de la CNT. Nuevamente el 24 de agosto la policía militar secuestró y desapareció a 17 dirigentes y asesores sindicales de la CNT de las empresas Incasa, Cidasa y Kern's en Emaús, Palín, Escuintla. Con estos golpes, quedó efectivamente descabezada una parte importante del movimiento sindical, que hacía apenas unos años se había alejado de la tutela de la DC. En total, durante 1980 fueron asesinados 110 dirigentes sindicales.

El 31 de enero de 1980, la policía quemó vivas a 39 personas en la embajada de España (ver siguiente recuadro), y en el segundo semestre de ese año se iniciaron las campañas de asesinatos selectivos de líderes comunitarios en el área rural, al tiempo que se producía una rápida radicalización de las organizaciones campesinas. En julio comenzó la ofensiva del Ejército sobre el área Ixil, con la destrucción total de la aldea Cocop, en Nebaj. Poco después, el 20 de agosto, el Ejército fusiló a 60 hombres en la plaza del pueblo de San Juan Cotzal luego que la guerrilla atacó el destacamento militar.

El inicio de la escalada La masacre de la Embajada de España

El 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos de El Quiché, realizaron una toma pacífica de la Embajada de España en Guatemala. Su objetivo era llamar la atención sobre la violencia en esa región y pedir apoyo internacional para una investigación y exhumación de siete campesinos asesinados en Chajul por el Ejército.¹¹ Al cabo de cuatro horas en una acción extremadamente violenta, las fuerzas de seguridad destruyeron la sede diplomática y quemaron a 39 personas. Esa masacre fue el inicio de una escalada hacia la violencia masiva ejecutada por el Ejército en las zonas rurales entre 1980 y 1983. La masacre de

11 En diciembre de 1979 fueron encontrados siete cadáveres en Chajul de un grupo de nueve campesinos (los otros dos lograron escapar) que habían sido secuestrados en septiembre en Chicamán, cerca de Uspantán. La violencia contra los campesinos en el norte de El Quiché estaba recrudeciendo en esos meses.

la Embajada de España significó el cierre de las posibilidades de lucha pacífica para de los movimientos populares.

Los antecedentes

El 28 de enero de 1980 tres destacados juristas guatemaltecos (el ex-vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff, el ex-canciller Carlos Molina Orantes y el magistrado Mario Aguirre Godoy) solicitaron una audiencia con el Embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal. Su secretaria sugirió la entrevista para el jueves 31 de enero a las 11:00 horas, dado que el diplomático se encontraba fuera de la capital.

Mientras tanto, de manera clandestina, miembros de la dirección del EGP responsables del trabajo de masas venían preparando el llamado *Plan de la Subida*, que consistía en la ocupación, por parte de un grupo de campesinos quichés, de la Embajada de Canadá, ubicada en el 5o. piso del edificio Etisa en la zona 9. Sin embargo en la víspera, por razones no establecidas, el grupo encargado de la planificación decidió cambiar el objetivo.

La toma

Los tres abogados asistieron puntualmente a la cita a la embajada española, ubicada en una amplia casa residencial de dos niveles a pocas cuadras de la sede canadiense. A las 11:10 tres campesinos ingresaron a la misión -que carecía de vigilancia- e inmediatamente se les sumó una veintena; cerraron las puertas y advirtieron que se trataba de una ocupación pacífica. Entre el grupo se encontraba el líder del CUC Vicente Menchú.

Los ocupantes le pidieron al embajador Cajal que sirviera como intermediario ante el gobierno de Guatemala para que se autorizara la exhumación de los siete cadáveres en Chajul, y añadieron que tenían alguna otra petición, la que harían saber en un momento oportuno. Cajal les aseguró que haría la gestión y les conminó a que se retiraran para evitar la presencia policial y eventuales acciones violentas. Los ocupantes respondieron que contemplaban la salida de algunas personas, en especial de las mujeres, pero pidieron antes entrar en contacto con el presidente de la Cruz Roja Guatemalteca, Augusto Bauer Arzú.

A las 13:30, cuando ya los ocupantes habían desplegado banderas y pancartas en los tejados, Cajal solicitó permiso para llamar telefónicamente a las autoridades a fin de evitar la intervención policial. No logró contactar al canciller Rafael Castillo Valdez, sólo al vicecanciller Alfonso Alonso Lima. En ese momento estaba llegando masivamente la policía, tanto de uniforme como de civil, fuertemente armada.

Cajal: *La Embajada ha sido ocupada por gentes que dicen ser campesinos de El Quiché.*

Alonso Lima: *¿Pero son o no son campesinos?*

Cajal: *Pues mire usted, no estoy en condiciones de verificarlo, yo lo que le pido es que traslade al señor ministro y a las autoridades competentes mi*

ruego de que la policía se retire, porque creo que esto será una medida de prudencia que contribuirá a aliviar la tensión y evitará mayores problemas.

Cajal también trató de hablar con Donald Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación, pero la secretaria le informó que estaba en reunión. El embajador le insistió que era una llamada urgente debido a que la sede diplomática había sido ocupada. Ella dijo que era imposible que el ministro se pusiera al teléfono. Cajal solicitó al viceministro como interlocutor, pero la secretaria respondió que no estaba y añadió que el oficial mayor del Ministerio se pondría en contacto con la Embajada. Ésto nunca ocurrió. Ninguna autoridad guatemalteca se comunicó. Sí lo hicieron el embajador español en Costa Rica, la esposa de Cajal y algunos periodistas, a quienes los ocupantes les contestaron.¹² En un momento determinado la policía cortó el teléfono desde afuera.

El asalto

Los acontecimientos empezaron a precipitarse porque la policía inició la invasión. Uno de los ocupantes insistía a través de un megáfono en forma nerviosa y excitada que la policía debía retirarse. El propio embajador hizo lo mismo en dos ocasiones, sin que sus exigencias encontraran eco. Unos 300 hombres pertenecientes al Cuerpo de Detectives (Policía Judicial), el Comando Seis (SWAT), la G-2 y la Policía Nacional irrumpieron en el jardín y la planta baja, y subieron al piso superior esgrimiendo ametralladoras, fusiles, revólveres y pistolas. Desde las gradas Cáceres, Molina y Cajal, repetidas veces, trataron de convencer a la policía que se retirase, aludiendo a la violación de los principios jurídicos internacionales y señalando que la ocupación de los campesinos era pacífica. Pero la policía fue tomando una actitud cada vez más agresiva.

Los ocupantes y su rehenes se refugiaron en el despacho del embajador. Con hachas y picos los policías rompieron parte de la puerta. Cajal y el secretario de la embajada Ruiz del Árbol hicieron nuevos esfuerzos por negociar. Las peticiones de los ocupantes en ese momento se limitaban a que ingresaran Augusto Bauer y los periodistas para garantizar que no iban a ser ejecutados al abandonar la sede, y que se les facilitaran autobuses de la Cruz Roja para ser trasladados a la Universidad de San Carlos, donde los campesinos se habían instalado desde hacía varios días.

La policía se negó a aceptar cualquiera de las condiciones. Cuando se les solicitaba un plazo razonable para negociar, respondían: *De acuerdo... tienen dos minutos*. Los ocupantes blandieron *cócteles molotov*. Uno de ellos lanzó una *molotov* que no estalló. Otro tiró un fósforo que Cajal apagó con el pie, sin que sufriera represalias. Cuando la policía derribó la puerta, todos

12 A las 14:00 (hora de Guatemala) el canciller español Marcelino Oreja logró por fin comunicarse con su homólogo Castillo Valdez y le requirió enérgicamente que la policía no interviniera en la sede. El ministro guatemalteco prometió que atendería la petición y se trasladaría al lugar de los hechos, pero no lo hizo.

retrocedieron unos pasos. Súbitamente se produjo una llamarada en la puerta y a continuación una leve detonación amortiguada.

Uno de los ocupantes que tenía sujeto a Cajal empuñando un revólver (eran visibles ya tres o cuatro revólveres entre los ocupantes) le llevó al lado opuesto de la puerta. En ese momento Cajal decidió atravesar la barrera de fuego; forcejeó con la persona que lo sujetaba hasta zafarse y pegando un salto en medio de detonaciones fue a parar a la sala de recepción. Con la ropa ardiendo salió hasta el jardín, donde un grupo de policías quiso rematarlo, pero por la intervención de Odette Arzú, de la Cruz Roja, y la mediación física de otros españoles, logró salvarse.

A las 15:20 se vio salir un espeso humo negro del despacho del embajador y luego llamas. Se oyeron gritos desesperados de las personas atrapadas, pero todo concluyó en tres minutos. Varios testigos presenciales, entre ellos Jaime Fuentes, de la misión española de cooperación técnica de trabajo, aseguran haber visto entrar en dirección a las gradas que conducían al segundo piso a un policía gordo y de baja estatura con un extraño artefacto colgado en la cintura. En la revista *Cambio 16* del 17 de febrero de 1980 aparece una fotografía a color de este policía portando el artefacto: *Se trata de un lanzador de niebla paralizante e irritante de la piel y en especial de los ojos, que puede causar grandes daños si se aplica en cantidad y a pequeña distancia.* Su procedencia parece ser israelita.

Técnicos consultados, tras analizar las condiciones de construcción del inmueble, la localización de la oficina del embajador y otras circunstancias, consideran que la habitación, aunque pequeña, tenía suficientes corrientes de aire por estar la puerta de entrada destrozada y rotos los vidrios de las ventanas. De ser solamente gasolina el elemento causante del incendio, la combustión hubiera sido mucho más lenta, propiciando la salida masiva e inmediata de los encerrados en la habitación. La persona que estuvo examinando y recogiendo las muestras señaló que la postura petrificada de los cadáveres (algunos estaban sentados), su posición frontal, la rigidez de movimiento en que les sorprendió la muerte, la no carencia de oxígeno en el cuarto (que descarta la asfixia) y el hecho de que varios de ellos no presentaran quemaduras mortales (hay abundante información fotográfica al respecto) lleva a la conclusión de que no es posible que la gasolina de cócteles molotov haya terminado con todas las vidas.

Después de la matanza

Hubo un superviviente, el campesino uspanteco Gregorio Yujá, que fue trasladado al hospital Herrera Llerandi. Él era un testigo de primera línea de todo lo ocurrido. A las 8:20 del 1 de febrero los dos policías que vigilaban el hospital se retiraron discretamente a la parte posterior del edificio. Las habitaciones de Cajal y Yujá quedaron sin vigilancia. El embajador de Costa Rica, Mario Esquivel, que salía del hospital, vio que un grupo de 20 hombres armados, vestidos de civil, con guayaberas y sombreros de petate penetraron al sanatorio. Con Cajal se encontraban tres visitantes. Los hombres secuestraron a Yujá y su cadáver apareció 48 horas después en el campus de la Universidad

de San Carlos. En su cuerpo se halló una nota que decía que la misma suerte correría Cajal.

Media hora después de ocurrido el secuestro los dos policías volvieron a ocupar su lugar en la habitación del embajador español, pero dos del grupo de plagiarios de Yujá los contactaron y tomaron su puesto. A las 8:30 el canciller tenía programada una reunión en la Nunciatura con el cuerpo diplomático para dar la versión del gobierno sobre lo ocurrido. El embajador costarricense asistió tarde y les informó de lo que había visto. Entonces el cuerpo diplomático decidió iniciar turnos personales de vigilancia en la habitación de Cajal.

El 4 de febrero el presidente Lucas escribió una carta al presidente español Adolfo Suárez, que fue entregada por medio de Modesto Sánchez, español, vicepresidente de Celulosas de Guatemala. En la misiva se anunciaba una exhaustiva investigación para clarificar lo ocurrido, pero no se hizo referencia al asalto ni se reconoció siquiera precipitación en la actuación de las fuerzas de seguridad. Al contrario, en una declaración en la televisión, Lucas García declaraba: *...Nosotros también nos sentimos damnificados por la intervención del embajador (Cajal) y también tenemos que cobrar indemnización por el daño que causó a los eminentes hombres que allí también perecieron.*¹³

Las relaciones diplomáticas entre los dos países quedaron rotas. Con posterioridad el gobierno español emitió una declaración que aún no ha sido satisfecha: *...la necesidad total y absoluta de que el Gobierno de Guatemala, en el más breve plazo posible, repare todos los daños morales y materiales causados a las vidas y haciendas de todas y cada una de las personas fallecidas, así como supervivientes y familiares afectados.* Los vínculos diplomáticos se restablecieron bajo el gobierno de Mejía Vítores, tras una declaración oficial de que se había violado el Convenio de Viena y las normas diplomáticas internacionales. El gobierno militar se comprometió a indemnizar a la viuda del secretario de la embajada, pero el gobierno español no mantuvo ninguna de sus demandas sobre las otras víctimas guatemaltecas.

La violencia represiva continuó hasta finales de 1980, cuando fueron secuestradas la periodista Irma Flaquer (ver siguiente recuadro) y la poeta Alaíde Foppa, en la capital; y prosiguió en 1981 afectando también a otros sectores como los estudiantes, especialmente a los dirigentes del FERG y FRENTE, y a la Iglesia católica, hasta el punto de motivar el cierre temporal de la diócesis de El Quiché. El 4 de junio fue asesinado en Chajul el Padre José María Gran Cirera y su sacristán Domingo Batz. El 10 de julio fue asesinado el párroco de Joyabaj, Faustino Villanueva. El 20 de julio fue cerrada la diócesis y en agosto una parte de los religiosos decidieron abandonar el país y formar la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE). Todavía el 15 de febrero de 1981 fue asesinado el Padre Juan Alonso, tras su captura en la región de Usulután.

13 El gobierno de Lucas y varios sectores acusaron a Cajal de tener vínculos con el EGP y el CUC, lo que Cajal considera una calumnia para desprestigiarlo.

Irma Flaquer

A las 19:00 horas del 16 de octubre de 1980, la periodista y psicóloga Irma Flaquer y su hijo Fernando Valle sufrieron un atentado provocado por hombres desconocidos en la Avenida del Cementerio y 14 Calle Zona 3 de la capital. Fernando Valle murió en un hospital cuatro horas después a causa de las heridas de bala, e Irma Flaquer no volvió a aparecer tras ser secuestrada violentamente por los agresores, mientras pedía auxilio para que fuera atendido su hijo herido que permanecía en el vehículo en que ambos se conducían.

El asesinato de Irma Flaquer generó gran conmoción en la sociedad, pues era una periodista muy conocida de *La Hora* y *La Nación*, donde por varios años escribió la columna *Lo que otros callan*. Desde entonces, aún más controversial, ha sido la identificación de los responsables intelectuales. Una investigación especial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó que la autoría era del Ejército, basándose en los testimonios de su ex-esposo y otros familiares.

Donaldo Álvarez le advirtió, días antes de su secuestro, que tenía que salir del país, porque habían personas que le querían hacer daño. Caso 6529, Guatemala, 1980.

Donaldo era amigo de la familia desde la infancia. Nos habíamos distanciado últimamente... y más después cuando no atendió las peticiones de la familia para dar con el paradero de ella. Él sabía que Irma sería víctima de las fuerzas de seguridad.¹⁴ Ya antes le había advertido a ella de amenazas, pero esta vez dio a entender que el asunto venía de más arriba, ni él podía intervenir... El montaje del atentado, la prepotencia con que se actuó¹⁵ y las amenazas posteriores que sufrió la familia, incluyendo la localización telefónica en Israel de otro hijo de Irma, que era muy difícil de localizar... todos estos son elementos que nos ayudan a concluir que fue el Ejército el que la secuestró y mató a Fernando. IC 301, Guatemala, 1980.

Sin embargo REMHI conoció una versión totalmente contradictoria. Ésta la conoció la investigadora de la SIP pero tuvo que desestimar la hipótesis por falta de fuentes directas que la sustentaran. La información que REMHI conoció proviene de dos fuentes distintas que coinciden en que la decisión de secuestrar y matar a Irma Flaquer fue de la Dirección Nacional de las FAR. Esa

- 14 Además de sus escritos periodísticos, por los cuales había varias veces recibido amenazas graves (incluso un atentado con granada en 1968 que destruyó su vehículo), Irma Flaquer era activista de los derechos humanos al promover la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual había renunciado semanas antes de su secuestro aduciendo que nadie quería trabajar en ella por ser *una actividad inútil y suicida*.
- 15 Un testigo presencial del hecho, Fernando Oliva, resultó herido de una pierna y fue atendido en el hospital, pero un segundo testigo accidental fue perseguido y asesinado a 700 metros del lugar (*Diario La Tarde*, 17/10/80).

versión también la sostuvo en una columna escrita en *Siglo Veintiuno* en 1997 y en el programa de televisión *Libre Encuentro*, el ex-miembro de las FAR Danilo Rodríguez. Su argumentación se resume así: Irma Flaquer se aprestaba a abandonar el país porque se temía por su vida. Rodríguez conocía la ruta de su salida. Tiempo después en México él se enteró por militantes de las FAR que la decisión de eliminarla había sido tomada por la dirección de las FAR.

Las otras versiones internas de la guerrilla sostienen que:

Irma Flaquer era colaboradora... trabajaba con un compañero de la dirección, cuñado de Monsanto, que estaba a cargo del trabajo de inteligencia de la organización. Este compañero fue asesinado misteriosamente y su muerte se vinculó con Irma Flaquer, con quien él había tenido un contacto la noche anterior... su cuerpo apareció en Pamplona (zona 13 de la capital) y mostraba signos de haber sido lanzado desde una gran altura. La sospecha recayó sobre Irma Flaquer... se dijo, sin pruebas, que era una doble agente y que había entregado a nuestro compañero al enemigo. Por eso se decidió montar el operativo. Se le quería pensar para que cantara... Sé que se le tuvo esa noche bajo interrogatorio... se le torturó psicológicamente, se le dijo que si hablaba le entregarían a su hijo sano... se le hizo creer que la organización también había capturado al hijo. Este fue un reporte interno oficial que yo recibí de la dirección... IC 314, Guatemala, 1980.

En la Tripartita (antecedente de la URNG, integrada por el EGP, FAR y PGT-Núcleo de Dirección) el delegado de las FAR informó oficialmente en Nicaragua a finales de 1980 que la dirección de esa organización había ajusticiado a Irma Flaquer por ser agente infiltrada del enemigo en el seno de la organización. IC 327, Guatemala, 1980.

Ciertamente Irma Flaquer como crítica pública del gobierno de Lucas pudo haber sido considerada enemiga y por tanto probable blanco de la represión. Ahora, la presencia en la cabeza del ministerio de Gobernación de un amigo con raíces en su familia también era un elemento que valía como advertencia. Pero por otro lado, si los supuestos vínculos de Flaquer con las FAR ya habían trascendido a la inteligencia militar, la autoridad de Donaldo Álvarez pudo haber quedado desplazada. Todos los hechos posteriores al secuestro muestran el *modus operandi* típico de los casos cuya responsabilidad es atribuible a las fuerzas de seguridad. Lo que rompe el patrón son los testimonios internos de la guerrilla recogidos por REMHI, cuya solidez estimamos alta. Una tercera hipótesis sería entonces que el secuestro fue producto de una operación de infiltración de inteligencia militar manipulando relaciones y acontecimientos e induciendo a las propias FAR a adoptar ciertas decisiones sin que tuvieran efectivamente control sobre ellas. Como fuere, hasta ahora ambas fuerzas sindicadas han negado la autoría sin señalar al otro.

Las ofensivas contrainsurgentes

Con las masacres en el área Ixil, el Ejército iniciaba en 1981 una amplia ofensiva contrainsurgente, concebida y ejecutada desde el Estado Mayor General (EMG), y al margen de los intereses e intrigas que paralizaban al Ministerio de la Defensa y a la mayoría de los altos mandos militares.

Según relata Mario Payeras, *la ofensiva antiguerrillera, en realidad había sido preparada... con meses de antelación. Lo que ahora vivíamos era su letal apogeo. En silencio, según la naturaleza del verdadero secreto, el adversario montó pieza por pieza la maquinaria de su aparato de inteligencia... Ningún dato, por pequeño que sea, carece de valor, pues es parte de un conjunto complejo y coherente. Sólo una vez que el conjunto se conoce entra a cortar el mecanismo* (Payeras, 1991).

Efectivamente, colocando sobre el mapa los sangrientos sucesos del período enero de 1981 a marzo de 1982, ordenados cronológicamente, es posible reconstruir la lógica de aquel baño de sangre.

Los tres primeros meses del año nos muestran una ofensiva del Ejército en las zonas del nororiente de Chimaltenango y sur de El Quiché, como respuesta a las acciones de propaganda armada que la guerrilla había desarrollado, que por primera vez arrojaban saldos estremecedores de víctimas. Es probable que estas campañas militares, dirigidas contra determinadas comunidades seleccionadas por su afinidad a la guerrilla, estuvieran ejecutadas por las autoridades de la Zona Militar, a diferencia de las que se desarrollaron a partir de junio, planificadas y ejecutadas directamente por el EMG. Sin embargo, esta primera campaña militar contra la población de Chimaltenango sólo fue preludio de la auténtica ofensiva que se desataría el 1 de octubre.

Una situación similar se observó en Alta y Baja Verapaz, donde se registraron hechos aislados de violencia en los que no se percibía mayor secuencia, por lo que era presumible que respondieran a la rutina represiva de la comandancia de la Zona Militar correspondiente.

La inercia de masacres se fue prolongando, adquiriendo cada vez un carácter más dramático. Por ejemplo, en El Quiché y en el noreste de Chimaltenango, el 9 de abril fueron baleados y degollados 14 campesinos en la aldea Choabajito de San Martín Jilotepeque; el 16 de mayo fue asesinado en Patzún, Chimaltenango, el sacerdote Carlos Gálvez Galindo; el 12 de agosto fueron asesinadas más de mil personas en dos aldeas de San Sebastián Lemoa, El Quiché. En Baja Verapaz, de enero a agosto, fueron asesinadas 25 personas en Rabinal. También en Ixcán, Huehuetenango, Petén y en la costa sur¹⁶ hubo una tendencia de campañas represivas ejecutadas por el mando de la Zona Militar, en muchas ocasiones con la colaboración de bandas paramilitares.

16 A pesar de que la costa sur estuvo tradicionalmente militarizada, especialmente por la PMA, al iniciarse en 1976 la actividad del EGP (históricamente las FAR habían mantenido presencia en la región oriental de la costa) se instalaron cuatro destacamentos. Entre 1980 y 1982 se establecieron otros cuatro en la Colonia Popular de Escuintla, en la Democracia y Sipacate. La base militar de Santa Lucía Cotzumalguapa sirvió como centro operativo coordinador de toda la represión en la parte oriental de la costa. La parte occidental, bajo la presencia de ORPA, estaría a cargo del puesto de avanzada de Santa Ana Berlín. La represión se agudizó después de la huelga de trabajadores de las fincas en enero de 1980. En esta etapa todavía actuó el ESA amenazando a los dirigentes sindicales.

Sin embargo fue hasta junio cuando el EMG, dirigido por el general Benedicto Lucas García, hermano del presidente, comenzó a aplicar una escalada ofensiva contra la guerrilla que mantuvo una coherencia estratégica a mediano plazo. Hay que tener en cuenta que las campañas anteriores no habían detenido las acciones insurgentes; por otro lado, varios aparatos de seguridad se encontraban en franca crisis. La D-2 había sufrido un fuerte golpe con el asesinato del general Cancinos. La Regional de Telecomunicaciones, órgano de seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP) en manos del entonces coronel Manuel Callejas, estaba inmersa ya en las conspiraciones que aseguraran el triunfo del candidato presidencial oficial en las elecciones de 1982. Finalmente, la Policía Judicial, que encabezó en cierta medida la campaña de aniquilamiento del movimiento popular, había llegado a un alto grado de corrupción y degeneración.

La ofensiva se inició con una campaña para desarticular la retaguardia de la guerrilla en la ciudad a partir de unidades operacionales de inteligencia dirigidas por el EMP. Éstas primero dieron golpes aislados a determinados militantes o estructuras para completar el cuadro de información y posteriormente, el 8 de julio de 1981, desencadenaron una campaña donde combinaron los objetivos militares con la búsqueda de información y las operaciones psicológicas. Las unidades operacionales, fuertemente *compartimentadas* y dependientes de un mando operativo del más alto nivel (el Jefe de EMG), lanzaron una intensa campaña de propaganda y guerra psicológica. Dejaron trampas sueltas y se apoyaron en la información de la empresa privada y otros organismos del Estado. Tomaron como punto de partida el Censo de Población y Vivienda elaborado en 1980 y, después de rastrear la ciudad, se lanzaron a desbaratar las casas de seguridad de la guerrilla, especialmente de la ORPA y el EGP.

La ofensiva contra la ORPA se inició con el ataque a una residencia en Vista Hermosa el 9 de julio de 1981. El 10 de julio el Ejército destruyó otro reducto de esa organización en la colonia el Carmen, al sur de la ciudad. El 18 de julio el Ejército destruyó la casa donde el EGP había juramentado a su primera columna militar en la ciudad (Payeras, 1987). El 19 de julio el Ejército desmanteló una casa de seguridad de la ORPA en la zona 14, donde murió el comandante *Antonio*, de la dirección de esa organización. El 13 de agosto fue descubierta otra casa del EGP en la zona 11, y una más en Santa María Cauqué, con abundante material de guerra y un empresario secuestrado. En esta campaña, que duró seis semanas, el Ejército aniquiló a unos 50 guerrilleros.

El Ejército mantuvo la presión militar en San Marcos, El Quiché, Petén¹⁷ y Alta Verapaz, para evitar la cooperación entre las distintas organizaciones o frentes de una misma organización. El 1 de octubre de 1981 inició una gran ofensiva contra el Frente Augusto César Sandino (FACS), que en julio de ese año había desarrollado

17 La primera masacre en Petén se produjo en 1980 en El Limón, Santa Ana, provocando huidas masivas de población. En ese año el Ejército instaló siete puestos avanzados y 21 destacamentos fijos en el departamento, con 5.000 efectivos. En junio, el Ejército desató una campaña contra las principales bases de apoyo de las FAR en Sayaxché, San Francisco, El Chal, Dolores, Palestina, Los Chorros y las cooperativas más alejadas del Usumacinta. El desplazamiento de población se inició en 1981 en el área fronteriza con Belice, y para diciembre la gente de las cooperativas, como La Técnica, Bethel, El Arbolito y Palestina, se internaron en la selva por orientación de las FAR. Se estima en 1981 un éxodo de 3,000 campesinos a México, quedando abandonadas siete cooperativas.

acciones espectaculares en el altiplano central con apoyo masivo de la población, donde se habían refugiado muchos activistas huidos de la capital unos meses antes.

Bajo la dirección en el mismo teatro de operaciones del general Benedicto Lucas, entre Tecpán y Los Encuentros, el Ejército desplegó sus puestos de avanzada de la noche a la mañana y comenzó a arrasarlo todo cercano a la carretera Panamericana. Mientras, por parte de la guerrilla, únicamente las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) y un pelotón de unidad militar permanente intentaban esporádicos hostigamientos al Ejército. De esta manera comenzaron a generalizarse las masacres, de acuerdo al grado de vinculación con la guerrilla según la abundante información que el Ejército había acumulado.

Territorialmente la campaña abarcó un área de 4,000 kilómetros cuadrados, afectando a 36 municipios y tres cabeceras en los departamentos de Chimaltenango, Sololá, El Quiché y Sacatepéquez. Participaron cinco brigadas con 2,000 efectivos de las tres armas bajo el mando único del jefe de EMG, el cual creó un Comando de Operaciones Conjuntas para centralizar el mando de las armas, fuerzas y servicios. Involucró a fuerzas de las Zonas Militares de Guatemala, Cobán, Salamá, Huehuetenango y los puestos avanzados de Santa Cruz del Quiché y Santiago Atitlán. También diversificó y descentralizó la retaguardia, que ya no dependía de la capital. El comando central de la Brigada se instaló en la Escuela La Alameda de Chimaltenango, marginando el control del Ministerio de la Defensa.

La operación tuvo una alta movilidad y diversidad de operaciones. La táctica fue mantener la iniciativa, responder a los ataques con agresividad y buscar el contacto con el enemigo en lugar del control del territorio. Las acciones se ejecutaron sorpresivamente sin planificaciones divulgadas. También buscaron operaciones de cerco a las fuerzas guerrilleras para desarrollar golpes de *yunque y martillo*, utilizando obstáculos naturales como el río Motagua, y cercos tácticos con maniobras de atracción de las unidades guerrilleras, fijación en un lugar y envolvimiento para lograr su aniquilación.

A pesar de la complejidad militar de esta operación, la parte operacional (no la preparatoria) duró sólo tres semanas, a partir de noviembre. Pero los efectos de esta primera gran ofensiva estratégica los sufrió especialmente la población, ya que en la zona de operaciones la guerrilla acababa de iniciar su implantación y apenas tenía algunos pelotones de fuerzas militares regulares. La importancia estratégica para el Ejército no residía en descabezar unidades militares guerrilleras, sino en cortar definitivamente el corredor natural que representaba el altiplano central como pasillo entre las zonas más montañosas y la capital del país.

Aparte de las víctimas civiles de esta ofensiva, el Ejército siguió centrando su atención en eliminar las bases de apoyo de la guerrilla en aquellas zonas que eran escenario directo del enfrentamiento militar, o donde sabía que la guerrilla había logrado crear fuertes bases de apoyo. En este sentido, tanto la campaña de asesinatos individuales como la de crímenes colectivos continuó en otras zonas del país, cada vez más dirigidas centralizadamente por el EMG del Ejército, pero bajo la responsabilidad operativa del Comandante de la Zona Militar, quien imprimió en cada región una determinada dinámica a la ola represiva.

Posteriormente, en los primeros meses de 1982, el Ejército dirigió su ofensiva al altiplano noroccidental y Las Verapaces, concentrando sus fuerzas en objetivos sucesivos, pero sin disminuir la presión en las áreas ya controladas, recurriendo para ello a las PAC. Así, en enero de 1982 se produjo una campaña del Ejército contra la ORPA en San Marcos, a raíz de la cual se registró la masacre de la aldea Sacuchum, de San Pedro Sacatepéquez, adonde llegaron, el 1 de enero, 1,000 soldados y rodearon la aldea, matando a 47 personas. También en esos mismos días se produjo la masacre de El Tablero, después de un enfrentamiento, que duró cinco horas, de la guerrilla con unos 1,500 soldados llegados de Santa Ana Berlín y de San Marcos.

2. Una época de cambios e incertidumbre

La trágica secuencia de hechos criminales relatada se desarrolló en un contexto extremadamente complejo en el que se combinaron fenómenos emergentes en la sociedad —como el protagonismo del movimiento indígena-campesino o la expectativa generalizada de un cambio revolucionario— con la decadencia de la *democracia de vitrina*, la corrupción y exacerbación de ambiciones en sectores del aparato burocrático y del sector empresarial. Si se ha de intentar desentrañar el comportamiento de los distintos protagonistas de este dramático escenario, tal vez convenga analizar en primer lugar el contexto internacional en el que se produjo, para después pasar a analizar a los dos principales protagonistas (Ejército y guerrilla) y finalmente ir situando en su lugar a los distintos actores.

La llegada del general Romeo Lucas García a la presidencia en 1978 se produjo en un ambiente especialmente agitado en Centroamérica. Ese mismo año en Honduras se registró un golpe de Estado que instaló a una Junta Militar en el gobierno, mientras que en Nicaragua el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro y la toma del Palacio Nacional por el FSLN aceleraron rápidamente la tensión de la guerra revolucionaria, colocándola en primer lugar de las noticias mundiales. Pero fue en 1979 cuando ocurrieron una serie de hechos que incidirían con fuerza en la realidad guatemalteca: en julio el Frente Sandinista logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y tomar el poder; en octubre, en El Salvador, se produjo un golpe de Estado de un sector militar que instauró una Junta Militar Revolucionaria, la cual prometió cambios como la reforma agraria; también ese mismo año se celebró en Puebla la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, la cual se pronunció de manera favorable a la mayoría de los postulados de la Teología de la Liberación. Estos hechos crearon una fuerte expectativa en aquellos sectores políticos y populares que pensaban que en esa coyuntura era razonable forzar un cambio radical de las estructuras de poder en el país.

El contexto internacional fue especialmente negativo para el gobierno del general Lucas. Así, en septiembre de 1979 Amnistía Internacional organizó una campaña contra los crímenes en Guatemala, afirmándose que en los últimos 16 meses los asesinatos, secuestros y torturas habían costado la vida de 2,000 personas. En febrero se creó el Frente Democrático Contra la Represión,

agrupando a 150 organizaciones. El 30 de marzo el presidente Lucas protestó por la decisión de los Estados Unidos de suspender una ayuda militar de US\$ 200,000. Aparte de estos hechos, hay que considerar un fenómeno que no trascendió en los análisis de la época: la valoración que tanto la Unión Soviética como Cuba hacían respecto a la debilidad del gobierno de los Estados Unidos, lo cual, en un marco geoestratégico más complejo, les movió a orientar y apoyar a los movimientos revolucionarios para acelerar sus estrategias de toma del poder.

Este análisis resultó excesivamente optimista, especialmente después de que en las elecciones estadounidenses de noviembre de 1980 ganara la presidencia el republicano Ronald Reagan. Este hecho fue inmediatamente percibido por los sectores de poder en Guatemala. Una muestra significativa fue la visita, en diciembre, de Roberto Alejos y Manuel Ayau al recién electo presidente Ronald Reagan, para discutir los lineamientos de la nueva administración hacia Guatemala. Los empresarios guatemaltecos habían aportado a la campaña de Reagan US\$ 2 millones (Marroquín/Escoto, 1993).

Sin embargo, ello no contribuyó inmediatamente a clarificar el escenario internacional, que pasó a oscilar entre el *triumfalismo* de quienes no percibían los cambios que se estaban produciendo, y la incertidumbre de aquellos que sentían llegar señales confusas. Las relaciones de los militares con los Estados Unidos eran contradictorias, desde que en 1977 el gobierno de James Carter decidiera suspender la ayuda militar a Guatemala debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, pero también por presiones del gobierno inglés, debido al reclamo guatemalteco sobre la soberanía de Belice.

De todas maneras el gobierno de Lucas asumió el costo internacional, como se evidenció en la masacre de la embajada de España. En la región, el clima seguía adverso para el gobierno luquista. En El Salvador, la Democracia Cristiana se integró a la Junta Revolucionaria y Napoleón Duarte fue nombrado Presidente; se anunció un plan de reforma agraria y la nacionalización de la banca. En Honduras la Junta Militar trasladó el poder a la Asamblea Constituyente. El afianzamiento de la revolución sandinista y la ofensiva de los grupos insurgentes en El Salvador influyeron notablemente en las expectativas de los distintos sectores guatemaltecos, agudizando de esta manera el carácter del enfrentamiento.

Los principales acontecimientos internacionales de 1981 aumentaron estas tensiones. En agosto de ese año, Washington emitió el primer *Travel Advisory*, y unos meses más tarde, en medio de la ofensiva guerrillera y la contraofensiva militar dirigida por Benedicto Lucas, Inglaterra reconoció la independencia de Belice, aumentando el aislamiento del gobierno. También en ese año la política exterior de los Estados Unidos comenzó a recuperar la iniciativa, buscando controlar la crisis política en Centroamérica. El Ejército guatemalteco tuvo evidencias desde diciembre de 1980 de que las organizaciones guerrilleras estaban aproximando sus posiciones tácticas con asesoría de los gobiernos cubano y sandinista, creando la llamada *Tripartita*, preludio de lo que en febrero de 1982 sería la URNG.

Pero fue en 1982 cuando el desenfado con que el régimen percibía los cambios internacionales se vio tocado, después del comunicado franco-mexicano que urgía una salida negociada al conflicto salvadoreño y otorgaba

reconocimiento al FMLN-FDR. Sólo entonces los militares guatemaltecos comprendieron que la situación internacional y regional podría llegar a convertirse en una presión considerable sobre el manejo del conflicto interno, y que deberían hacer concesiones en aquellos puntos que los liberaran de las presiones diplomáticas internacionales. Significativamente el Ejército se negó a involucrarse directamente en los planes militares regionales de la administración Reagan. Para entonces, los militares ya habían elaborado su propia estrategia.

3. La estrategia contrainsurgente

A pesar de la relativa calma de las organizaciones insurgentes en el período 1970-76, el Ejército nunca perdió de vista el horizonte de la recomposición de la guerrilla. Como analizaba uno de los protagonistas insurgentes: *El Ejército... adecuó su estructura orgánica y operacional a la guerra irregular, preparando fuerzas especiales y habituándolas al terreno. Elaboró un plan conjunto que vinculaba las cuestiones políticas y las militares, al concebir al movimiento guerrillero y al movimiento de masas como un todo, incluyendo a la oposición democrática, y previendo los costos... de la represión generalizada, dentro de una escala de prioridades impuesta por el auge revolucionario. Diseñó una estrategia de dimensión nacional... y la articuló por fases, sin dispersarse... El Ejército basó su acción en el arma de la inteligencia, decidiendo con base en ella el genocidio, el escarmiento o el involucramiento de la población como virtual aliada suya en el área rural, mediante el terror. Con la misma arma explotó las debilidades conspirativas del movimiento revolucionario, capturando vivos a muchos de sus militantes... para -a partir de la tortura y de diversos métodos de inteligencia para el trabajo con prisioneros- lograr su colaboración en diversas formas (Payeras, 1991).*

El Ejército continuó con un intento de programa de modernización, reorganización y reequipamiento para la guerra interna, incluyendo en ello el redesplice territorial. También profundizó la discusión teórica sobre la seguridad nacional, y al contrario de la etapa anterior, la influencia extranjera fue relativamente menor o, en todo caso, provino de los ejércitos de Israel y de Argentina (Aguilera, 1986).

El gobierno de Lucas, empero, impuso su propio ritmo a este proceso. Si bien el trabajo contrainsurgente se centró en desarticular las organizaciones democráticas y populares urbanas y contener los brotes de rebeldía campesina, en estos objetivos se entremezclaban intereses propios del grupo militar que disfrutaba el control del aparato estatal y sus socios en la empresa privada. Uno de los casos más notorios fue el del coronel Héctor Montalbán y su familia, que supervisaban y autorizaban los préstamos para los proyectos de la administración pública a través del EMP (IC, 132, Guatemala, años 80).

Mientras la lucha guerrillera golpeaba especialmente al sector empresarial con secuestros, extorsiones y asesinatos, la alianza empresarios-Ejército se amplió a la colaboración directa en operaciones militares. Una

muestra significativa de ese respaldo fue la carta que un grupo de empresarios de origen español le envió al presidente Lucas inmediatamente después de la masacre de la embajada de España, acusando al embajador de aquel país de comunista y ser responsable de lo sucedido. Pero fue en los meses previos a mayo de 1980 cuando el CACIF, junto con el EMG, organizaron con grandes recursos *El Plan de los Mil Días*, una gigantesca campaña anticomunista cuyo objetivo era crear un clima que justificara la escalada de la brutal represión que se avecinaba.

Cabe destacar, como principal éxito de esta colaboración, además de la total desarticulación de la oposición política legal, del movimiento sindical y otras manifestaciones del movimiento popular, los fuertes golpes que sufrió el Frente Luis Turcios Lima del EGP, establecido en la costa sur, la zona de interés de los empresarios agroexportadores. Así, a mediados de 1980 el Ejército había desarticulado el frente de la costa sur aniquilando a unos 80 dirigentes fundamentales sin afectar al resto de la población civil.

Desde el segundo semestre de 1980, el EMG había elaborado su propio plan contrainsurgente en el campo. En las primeras etapas de represión selectiva recurrió a comisionados militares, informantes y autoridades locales, muchos de los cuales tenían sus propios intereses económicos aprovechando las tierras de los indígenas. Cuando se inició la represión selectiva en el campo, numerosos empresarios agrícolas que ocupaban cargos de comisionado militar o tenían sus propios equipos de seguridad, colaboraron con el Ejército en el asesinato de líderes campesinos, especialmente en las áreas conflictivas. Entre éstos, nuestros declarantes nombran insistentemente a Gustavo Anzueto Vielman. *Él prestaba sus avionetas para que fueran artilladas y fueran usadas en los bombardeos... (Además) llegaba a los cuarteles, nos exigía que actuáramos con mano dura... se creía con autoridad quizás por ser el hijo de Roderico Anzueto, el jefe de la policía política de Ubico.* IC 307, Guatemala, años 80.

Esta política de represión selectiva, en la que se entremezclaban intereses y prioridades de los grupos en el poder, no dejó de crear sus propias contradicciones en el Ejército, especialmente ante el avance de las acciones de los grupos guerrilleros. De esta manera, cuando en 1980 el EGP asesinó al general Cancinos, jefe del EMG, la mayoría de los altos oficiales y jefes pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas dentro del Ejército (Gramajo, 1995), ya que a Cancinos le atribuían el asesinato de los dirigentes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr. También cuando en septiembre de 1980 fue asesinado Julio Segura, secretario de Planificación Económica y figura presidencial de un sector del Ejército, crecieron los rumores de golpe de Estado.

Sin embargo en esa precisa coyuntura se produjo una recomposición del mando estratégico del Ejército. Los aparatos de seguridad e inteligencia se reorganizaron desde el EMG, tanto los de la D-2 como los de la Regional de Telecomunicaciones, dependiente del EMP. Destacan como figuras clave de este proceso los coroneles Francisco Menaldo Ortega y Manuel Antonio Callejas y Callejas, jefe de la Regional de Telecomunicaciones en tiempos de Lucas. Este grupo de oficiales, al que se suma José Luis Fernández Ligorria,

estuvo implicado según los testimonios recogidos por REMHI, en actos de violencia vinculados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en la época de Lucas, y fue responsable directo de las operaciones contrainsurgentes en la ciudad capital en 1981.

La estrategia del Ejército en la capital abarcó aspectos distintos. En un primer momento se dirigió contra la dirigencia del movimiento popular, apoyándose en el director de la Policía, general Germán Chupina Barahona y en sus subalternos Manuel de Jesús Valiente Téllez y Pedro García Arredondo, y con amplia colaboración del sector empresarial. Esta campaña se desarrolló recurriendo al terror exhibido, como recurso disuasivo y desmoralizante, e incluyó a dirigentes políticos socialdemócratas. Pero fue en 1981 cuando el Ejército diseñó y llevó a cabo una campaña represiva que realmente tuvo una orientación estratégica contrainsurgente: descabezar la dirigencia revolucionaria en la ciudad y de paso desbaratar la infraestructura logística que se estaba acumulando aceleradamente en la perspectiva de una gran ofensiva guerrillera.

Posteriormente el Ejército golpeó a los diversos frentes guerrilleros de acuerdo a una prioridad estratégica. Esta estrategia le permitió superar la dispersión que la táctica guerrillera pretendía imponerle y concentrar sus golpes en ofensivas escalonadas contra los diversos frentes guerrilleros. Aunque se preocupó de mantener la presión militar sobre los frentes de ORPA y FAR, concentró sus ofensivas en los principales reductos del EGP.

Estos ajustes estratégicos no se produjeron sin tensiones en el alto mando militar. Ciertos oficiales medios se quejaban en privado de los robos de los altos jefes en las compras de armas. Según las informaciones de la oficialidad descontenta, la guerrilla había abatido en los primeros cuatro meses del año 1981 a 23 oficiales y 250 soldados. Además, en septiembre de ese año el vicepresidente del gobierno Francisco Villagrán Kramer, presentó su renuncia, acentuando aun más la imagen de inviabilidad del modelo de gobierno que pretendía continuar en las elecciones de 1982.

De hecho, una parte de la oficialidad estaba viviendo momentos decisivos para la continuidad del orden vigente, como refleja esta cita de uno de los protagonistas de la época. *En... julio de 1981, los terroristas se proponían declarar como 'territorio liberado', una porción del suelo patrio, para darle categoría de beligerantes a sus miembros, con lo cual tendrían acceso a los foros internacionales y al reconocimiento por parte de los principales países del bloque totalitario... Sus primeras acciones estuvieron encaminadas a eliminar el poder local mediante el asesinato, secuestro y desaparición de alcaldes auxiliares, alcaldes municipales y comisionados militares, quemando 25 alcaldías; afectar a la economía nacional mediante la quema de fincas, asaltos, asesinatos y destrucción de cultivos; destruir la infraestructura de carreteras* (Cnel. Terraza Pinot, 1987).

Fue así como, en los últimos meses del gobierno de Lucas, el EMG diseñó una estrategia contrainsurgente que alcanzaría su integralidad después del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982.

El escenario de la confrontación

La estrategia del Ejército se desprende de la naturaleza del desafío insurgente, en especial del EGP, sobre cuyas áreas de influencia se concentró la ofensiva contrainsurgente. Esta priorización del combate al EGP se debió a la combinación de varios factores:

- El EGP recibió el apoyo organizado de la población en dimensiones masivas, en un área estratégica geopolítica (frontera, nudo de comunicaciones) y geosocial (población indígena con reivindicaciones propias, débilmente integrada al Estado y con incidencia relevante en la economía de agroexportación por la vía del trabajo estacional). Por tanto, el control sobre la población implicaba control sobre el territorio y cuestionaba la capacidad del Estado para ejercer la función de gobierno.
- El involucramiento de la población le confería legitimidad al esfuerzo insurgente y, sumado al control territorial, podía conducir a que internacionalmente se le considerara como fuerza beligerante (lo que ocurrió en 1981 con el FMLN salvadoreño mediante la declaración franco-mexicana).
- El involucramiento de la población abría un riesgo de insurrección y complicaba al máximo la respuesta contrainsurgente, pues debía atacar a sectores muy numerosos y no solamente a fuerzas militares hostiles. La dinámica insurreccional cobró cuerpo a partir de 1981 como un desafío de corto plazo al poder del Estado, en un contexto internacional parcialmente desfavorable para éste.
- Lo que ocurría en los altiplanos se combinaba, de manera desigual, con la presencia del EGP en la costa sur y la ciudad de Guatemala. Esa presencia implicaba una variedad de formas de confrontación (políticas, ideológicas, paramilitares y diplomáticas) y vínculos con diversos sectores, especialmente con sectores de la Iglesia católica.

Este conjunto de factores conformó el escenario principal de la confrontación. En consecuencia, el Ejército diseñó y luego ajustó sobre la marcha su estrategia global. Según diversos documentos militares, el accionar en contra de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), fue ejecutado como dirección secundaria de la contrainsurgencia, cuidando que no dispersara las fuerzas de la dirección principal.

Asimismo esta prioridad se reflejó en los aspectos políticos de la contrainsurgencia. En efecto, la dinámica poblacional que se generó en las áreas del EGP mostró la insuficiencia de las acciones puramente militares y la necesidad de adecuar primero el aparato estatal para la atención inmediata de la población (Coordinadoras Interinstitucionales) y, luego, reconvertir el modelo político global (reencuentro institucional), como se verá en los siguientes capítulos.

La “tierra arrasada”

La ofensiva estratégica del Ejército contra las áreas del altiplano indígena integradas en la estrategia del EGP se inició el 1 de octubre de 1981. Comenzó en la zona que correspondía al Frente Augusto César Sandino (FACS), que en el segundo aniversario del triunfo sandinista en Nicaragua, había desarrollado acciones que ilustraban las dimensiones del fenómeno que ahí se producía. En efecto, para el 19 de julio el FACS orientó a su base social a que bloqueara la carretera Panamericana derribando árboles y colocando otros obstáculos a lo largo de un centenar de kilómetros, en una magnitud que no dejaba dudas acerca de la participación masiva de la población en tales acciones.

El Ejército, desde el comienzo de la ofensiva, atacó a la población. Entre Tecpán y Los Encuentros cerraban la carretera casi durante todo el día mientras la tropa incendiaba sistemáticamente las casas contiguas. Entretanto, la fuerza militar que el EGP tenía en la zona (un pelotón de unidad militar permanente y las FIL), intentaban esporádicos hostigamientos.

Lo que el Ejército encontró en el terreno acabó de confirmar la participación masiva de la población. Por ejemplo, constató que en un lapso breve (dos semanas a lo sumo), se habían construido muchísimas trampas consistentes en fosos de tres y más metros de profundidad sembrados de agudas estacas. Por orientación del EGP la gente construyó apresuradamente esas trampas como recurso de autodefensa, que resultó ineficaz, puesto que el Ejército, desplazándose tranquilamente sin asedio enemigo, detectaba fácilmente la tierra recién removida.

Al poco tiempo de iniciarse las acciones punitivas en la zona (todavía no se habían producido masacres) el Ejército, al parecer sin mucha convicción, procuró que la población acudiera a puestos militares con el objeto de obtener una identificación. Para ello, entre otros medios, se valieron de Emeterio Toj Medrano, fundador del CUC y líder ampliamente conocido en la zona, que estaba en sus manos. Desde un helicóptero Toj Medrano hablaba en k'iche', llamando a acudir al puesto militar de Chupol para obtener la credencial y enfatizando que los pobladores nada tenían que temer del Ejército. Algunos acudieron, pero la mayoría no lo hizo. Por una parte, los dirigentes del FACS rechazaron de plano esa posibilidad y, por la otra, se regaron rápidamente versiones según las cuales los militares habían capturado a gente que llegaba a los puestos o bien abusaban de las mujeres.

No obstante algunos dirigentes locales de la población habían planteado tímidamente la posibilidad de acceder a lo que el Ejército demandaba, replegar la escasa fuerza militar existente y sobre todo preservar la organización de forma clandestina.

La ofensiva militar en el sur de El Quiché fue incrementándose rápidamente. El Ejército penetró crecientemente en el territorio y se concentró en el ataque a una población que carecía de los medios para defenderse. Múltiples experiencias mostraron que el Ejército no se interesaba en perseguir o destruir la escasa fuerza militar existente la cual, por otra parte, casi no lo enfrentó. En cambio, arrasaba con viviendas y cultivos y expulsaba a decenas de miles de campesinos condenados a errar por la montaña buscando la sobrevivencia. Muy pronto, las masacres comenzaron a producirse.

A primera vista la represión fue totalmente indiscriminada, y de alguna manera sí lo era (niños, ancianos, mujeres, hombres, sin ningún distingo). Pero al analizar más despacio se comprobó que mientras determinadas aldeas eran arrasadas, en otras el castigo era puntual y en otras más el Ejército daba charlas, advertía y amenazaba pero no masacraba ni arrasaba. Este elemento mostró claramente que la fuerza armada contaba con información de inteligencia bastante precisa, pues su accionar estaba correlacionado con el nivel de profundidad y arraigo en el vínculo de la población con la insurgencia.

La represión del Ejército cambió radicalmente la correlación de fuerzas en el área mediante el desplazamiento forzoso, pero también debido a que existían núcleos de población favorables a ellos, que se habían mantenido agazapados mientras la guerrilla hegemonizó pero que, al contar con el apoyo oficial, se involucraron de manera especialmente beligerante en la represión. A ellos se agregaron quienes cambiaron rápidamente de bando, y aquellos otros que no tuvieron más remedio. De esa manera se conformó -al menos en la zona de referencia- la base de lo que posteriormente serían las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

La ofensiva a que se hace referencia fue inicialmente dirigida por el general Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y hermano del Presidente. Benedicto Lucas señaló que *tres meses más y hubiera sido demasiado tarde*.¹⁸ Asimismo, reiteraba constantemente que la culpa de la situación (además de la *delincuencia subversiva*), le correspondía a los gobiernos y sus funcionarios que habían mantenido al campo en total abandono, permanecían en sus oficinas citadinas, a diferencia de los militares que se *empapaban de la realidad sobre el terreno*.

Los actos y las declaraciones de Benedicto Lucas fueron el preludio de un golpe de Estado que no fue encabezado por él. No obstante, sus conceptos ilustran la forma como distintos oficiales fueron tomando conciencia de la situación que se vivía: pobreza y abandono, ineficacia gubernamental, politización y corrupción del Ejército. La concurrencia de tales fenómenos, sumada al aislamiento internacional, hizo pensar a no pocos oficiales que la guerrilla podía triunfar, a pesar que la ofensiva desatada por el Ejército constituía un paseo desde el punto de vista militar y un espantoso holocausto para la población de las llamadas *áreas en conflicto*.¹⁹

A la conflictividad interna propia de las regiones se fue agregando una situación en la que comenzaron a desarrollarse las contradicciones en el seno de la población, todo lo contrario de la estrategia que teóricamente la guerrilla había definido, según la cual se trataba de unir a diferentes sectores y capas sociales en

18 Benedicto Lucas hizo gala también del nivel de información del cual disponía el Ejército. Cuando el EGP inició acciones militares en el oriente del país, el general informó a la prensa con todo detalle quiénes eran los que allí actuaban y de dónde habían salido. *Con esas acciones tratan de dispersarnos, pero sólo nos confirman que estamos golpeando en la dirección indicada*, señaló el Jefe del Estado Mayor.

19 Sobre la estrategia de masacres y la tierra arrasada se abunda en el Tomo II de este Informe, *Mecanismos del horror*. Lo que aquí interesa no es reconstruir sus terribles formas sino aportar elementos acerca de la estrategia global y otros aspectos que permitan evaluar la conducta del Ejército durante los años clave de la contraingurgencia.

una lucha común frente al *enemigo principal*, que ha sido la esencia de las llamadas *guerras populares*.

Quizá la debilidad fundamental del EGP en los momentos álgidos de la confrontación fue la de no haber construido un sistema de mando y dirección efectivo. Aunque se crearon organismos que en teoría debían fungir como Estados Mayores, estos organismos carecían del recurso elemental para operar: las comunicaciones. Asimismo, la dirección histórica del EGP nunca le puso mayor atención a lograr la unidad de pensamiento; antes bien, en la práctica se impuso un criterio de culto a la espontaneidad, siempre y cuando se 'echara punta'.

Como reflejo de la ausencia real de unidad de mando, se desarrolló dentro del EGP una tendencia a la que se llamó frentismo. Esta tendencia derivó de definir la autonomía operacional táctica de los diferentes frentes, lo que en la práctica dio lugar a que esos frentes compitieran entre sí procurando atraer hacia ellos los recursos logísticos y volcándose a un activismo en el que subyacía también la disputa por la jerarquía. El EGP, por lo menos en esos momentos, no logró construir una jerarquía bien estructurada y menos la disciplina necesaria para que funcionara. IC, 147 Guatemala, años 80.

En síntesis, aún antes de que el Ejército se hiciera presente en las zonas con todo su poder, ya se había generado una situación de divisiones internas entre la población que constituyó la base para la posterior formación de las PAC. Núcleos apreciables de población estaban dispuestos a organizarse junto al Ejército. La labor de las sectas protestantes también jugó un papel importante en este momento.

Ardían en llamas los ranchos en Chupol... Todo era un relajó. La gente salió huyendo como pudo. Ya pasados los días, mientras caminábamos buscando un lugar seguro para escondernos, encontramos a varios pastores de las sectas reunidos con grupos de gente a quienes les decían: 'Ustedes hay provocado la ira de Dios al desafiar a la autoridad, al dar comida y protección a los guerrilleros comunistas. La segunda venida del Señor está cerca... ésta es sólo una señal, la última oportunidad para que se arrepientan de todos sus pecados'. IC 138, Chimaltenango, años 80.

La ofensiva militar del Ejército produjo el fenómeno de los desplazados internos. Verdaderos ríos de población que se quedaron en el monte, sin tener a dónde regresar ni dónde sembrar; erraron sobreviviendo de mil maneras, y este drama humano también consolidó la recuperación del territorio por el Ejército y le trasladó a la guerrilla la enorme tarea de responder en alguna medida a las necesidades de defensa y sobrevivencia de esa población.

Después de que el Ejército golpeó de forma avasalladora a la población en las áreas del altiplano central donde se implantó el EGP, pasó al noroccidental y a la región de las Verapaces bajo la modalidad de concentrar sus fuerzas en objetivos sucesivos, pero sin disminuir la presión sobre las áreas en las cuales ya

habían obtenido el resultado de desarticular el vínculo entre la población y las fuerzas insurgentes. En las áreas recuperadas se mantuvo presencia de tropas, pero junto con ello se organizaron rápidamente las PAC. Con la implantación de las PAC el Ejército logró un objetivo estratégico de primer orden: construir un poder local afín a las fuerzas armadas y supeditado a ellas.

4. La estrategia insurgente

La inminente conquista del poder: esa era la perspectiva que alentaba la guerrilla, especialmente la organización más activa, el EGP, desde comienzos de 1981. A partir de 1976 el EGP entró en una rápida escalada de accionar militar en tanto la ORPA, primero, y las FAR, después, articularon sus respectivos frentes guerrilleros en el nororiente y noroccidente del país.²⁰ A partir de 1978 la guerrilla adoptó el concepto de la *Guerra Revolucionaria Popular*, llegando a crear una formidable base de apoyo social. A la par de las estructuras militares, existían los movimientos populares.

Cuando la primera fuerza militar regular del EGP incursionó en la parte sur de El Quiché, una alta proporción de la población ya la estaba esperando. Lejos de repetir el ciclo previo de ganarse a la gente y organizarla, los cuadros y combatientes se vieron crecientemente sorprendidos por la acogida multitudinaria y por la rapidez con la cual la población se organizaba de acuerdo al modelo propuesto por la guerrilla. En ello tenía que ver el trabajo previo de organización comunitaria de los años 70, en el que sectores de la Iglesia católica, como se señala en la página 128 de este Tomo III, desempeñaron un papel relevante:

20 Las FAR consideraron Petén como retaguardia para crear un frente guerrillero en Alta Verapaz. En 1969 decidieron instalarse en Petén, a partir de la aldea Nueva Libertad. En 1970 comenzaron a organizar a la población de las cooperativas de los ríos Usumacinta y La Pasión, así como de la aldea Las Cruces y La Libertad, caseríos del río Subín hacia Sayaxché, y en los tramos de Flores a Poptún y Melchor de Mencos. En 1971 realizaron las primeras acciones militares, que se suspendieron al morir los capitanes guerrilleros Androcles Hernández y Lucio Ramírez, y cuando decidieron la organización en el occidente del país. Es hasta 1979-80 que las FAR crearon el primer frente guerrillero, presionadas por el desarrollo de las otras organizaciones insurgentes. Se formó el Frente Feliciano Argueta en la parte centro-sur de Petén, con proyección de bajar hacia Alta Verapaz; el Frente Lucio Ramírez en la zona de La Libertad-Sayaxché; el Frente Mardoqueo Guerra en la zona del río Salinas-Petexbatún, que en sus mejores momentos tuvo de 400 a 500 hombres. En 1981 estaban iniciando los combates de hostigamiento, ajusticiamiento y sabotaje, pero para entonces ya la base social había sido dispersada por el Ejército. El origen de la ORPA está en el Regional de Occidente de las FAR donde, con el trabajo del PGT, se creó a comienzos de los años 70 una estructura militar en la que predominaba el llamado ajusticiamiento. Posteriormente las FAR trajeron cuadros de México para revitalizar el frente, pero a partir de 15 combatientes se inició un proceso de distanciamiento que culminó con la ruptura en 1973. Militantes de la bocacosta se internaron en el Tajumulco para crear un frente guerrillero en la Sierra Madre, y se inició la construcción de un frente en la capital, especialmente entre estudiantes y profesionales (ver Capítulo cuarto: *El gobierno de Ríos Montt*, de este mismo Tomo).

A través de la Acción Católica y de un conjunto de iniciativas impulsadas por los párrocos y por católicos comprometidos, muchos de los cuales habían desarrollado posiciones contestatarias frente a la jerarquía tradicional encabezada por el Cardenal Mario Casariego, la labor de concientización se desarrolló bajo los principios del bien común y la dignidad de la persona humana... por ello, desde el inicio, se combinaron las reivindicaciones socioeconómicas con las de tipo étnico... en distintas experiencias se pudo comprobar que la población respondía ante todo al tema de la dignidad de la persona humana, evidenciando con ello su alta sensibilidad frente a las concepciones discriminatorias contra los indígenas. IC 143, Guatemala, años 80.

En el segundo semestre de 1978 el clima de violencia guerrillera entró en una notable escalada. Vale la pena destacar como hechos significativos que el 14 de junio un grupo del PGT (PGT-PC) emboscó un camión de la PMA matando a 18 efectivos. El 8 de julio, el EGP distribuyó volantes en San Rafael, Huehuetenango, iniciando así un nuevo frente guerrillero. En agosto, el PGT-PC emboscó un convoy militar en Zunil, Quetzaltenango. El 16 de septiembre el EGP mató al embajador de Nicaragua, general Edmundo Meneses Cantarero. En tanto, la guerra en las montañas del área Ixil pasaba ya a una etapa de lucha por el control del poder local.

En 1979 la lucha guerrillera se fue extendiendo por todo el país, con el surgimiento de nuevos grupos que golpeaban al sector empresarial agrícola. El EGP consideró que su implantación fue suficiente y decidió pasar a la *guerra de guerrillas generalizada*, es decir la ofensiva contra las fuerzas (militares y económicas) de su enemigo. Se llamó a articular el movimiento popular en torno a la lucha armada, obtener la alianza de las fuerzas democráticas, lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias y conseguir el reconocimiento internacional. Según *Rolando Morán*, se trató de atacar el poder local, ejecutar a los cuadros enemigos, pero no de operaciones militares en forma.

A mediados de este año, como se dijo, surgió el frente del EGP Comandante Ernesto *Ché* Guevara en Huehuetenango. El 9 de junio el EGP mató al general Cancinos. En agosto las FAR secuestraron al vicescanciller Alfonso Alonso Lima y lo liberaron después de que el gobierno publicó un manifiesto público. El 18 de septiembre apareció públicamente la ORPA, después de ocupar la finca Mujulia, en Quetzaltenango. El 7 de octubre una unidad del Frente Otto René Castillo del EGP, secuestró a Jorge Raúl García Granados. En ese mismo mes las FAR secuestraron a Elizabeth Lippmann. Pero el escenario de guerra irregular más abierta se desarrolló en el área Ixil, al norte de El Quiché.

En 1980 la guerra se extendió a casi todo el país, dando la sensación de que el Ejército era incapaz de controlar la situación. La actividad guerrillera se intensificó en la ciudad capital, destacando los atentados contra altos mandos militares. En el medio rural las organizaciones guerrilleras pasaron rápidamente a formas más fuertes de propaganda armada, como la ocupación de poblaciones y toma de carreteras, siendo cada vez más frecuentes los enfrentamientos con el Ejército. En el área Ixil, el EGP llegó a organizar una columna guerrillera regular

(19 de Enero) y a proponerse la ocupación y destrucción de instalaciones permanentes del Ejército. Eso provocó la inmediata respuesta de la fuerza armada, que ubicó aquella región como el área donde el EGP podía declarar un territorio liberado.²¹

En otras áreas del país, también el EGP intentó crear frentes guerrilleros, aprovechando el levantamiento espontáneo de los campesinos indígenas. Pero en realidad los insurgentes enfrentaban un desborde que les impedía articular un verdadero plan militar estratégico. Apenas en el primer semestre de 1980 una patrulla guerrillera inició su labor de asentamiento en el río Pixcayá, el lindero que separa los departamentos de Guatemala y Chimaltenango, asentándose inicialmente en la zona de Cruz Blanca; la patrulla guerrillera penetró en pocas semanas a las pobladas aldeas del sur de San Martín Jilotepeque y Comalapa, organizando en secreto su red de bases de apoyo, relata uno de los protagonistas de aquellos hechos, el comandante *Benedicto*, Mario Payeras. En Huehuetenango, la costa sur y la bocacosta los frentes vivían también fases preparatorias.

“La guerra del pueblo”

En esta escalada militar el EGP colocaba el involucramiento de los campesinos indígenas en un lugar central de su estrategia. Y por tanto, estaba consciente que la población era el blanco de los ataques del Ejército:

En las zonas en que la guerrilla ha eliminado el poder local (el Ejército) tiene la dificultad para aumentar o reponer sus efectivos. El Ejército... sabe que cuando una unidad guerrillera opera en un lugar la población la apoya, la alimenta, la esconde y la guía. En consecuencia, el Ejército considera enemigos a todos los habitantes de la región y reprime buscando intimidar mediante el terror. Ante la incorporación masiva de la población del altiplano a la guerra, el Ejército ha recurrido a la masacre como forma de represión... busca descargar su ira contra la población. Pero ésta... organiza la autodefensa... se preparan sistemas de aviso y alarma que funcionan al detectar la aproximación del Ejército; se colocan trampas en su camino, se construyen refugios y escondites para personas, animales y alimentos, se fabrican armas populares. La autodefensa... ha frenado en alguna medida la saña represiva en las regiones en que más firmemente está arraigada la organización revolucionaria. Pero el Ejército ha logrado golpear a la población en otras zonas, donde la organización del pueblo es aún incipiente, imponiendo un costo muy elevado a la liberación. (EGP, 1981).

21 De hecho el Ejército logró trastocar la estrategia guerrillera, al dejar ésta sin resguardo su retaguardia en la sierra de Chajul, donde las fuerzas oficiales lanzaron rudos ataques. Un golpe estratégico al EGP ocurrió el 5 de diciembre de 1980 cuando murió en un enfrentamiento con el Ejército en Chajul el comandante *Mariano* (Willy Cruz), principal dirigente del Frente Ho Chi Minh. Con él cayó vital información sobre los planes y los frentes de influencia guerrillera.



Jóvenes campesinos reciben entrenamiento de la guerrilla con armas de madera. Foto D. Bazy.

Parte de la población indígena comenzó a colaborar activamente en grandes operativos militares. Cuando la guerrilla ocupó los poblados de Chichicastenango y Sololá, la población cortó hilos telegráficos, bloqueó todas las carreteras con tachuelas, barricadas, árboles caídos y otros objetos por decenas de kilómetros en ambas direcciones a manera de impedir que el Ejército pudiera dirigirse por tierra hacia los lugares ocupados, y una vez concluida la toma, recibió masivamente como héroes a los protagonistas en Los Encuentros, distribuyendo tamales y chuchitos, tocando marimbas y gritando *Hasta la victoria siempre* y organizando una fiesta popular que paralizó el tráfico por varias horas (Arias 1985).

El año 1981 fue el punto más alto del *triumfalismo guerrillero*. En varias zonas del altiplano donde las organizaciones guerrilleras o el CUC no habían llegado aún, la población se organizó espontáneamente. Una de las consecuencias negativas de esto fue que algunos dirigentes regionales del CUC que por diversos motivos se habían separado o alejado, pasaron a capitalizar el espontaneísmo y a servirse de la efervescencia revolucionaria para fines propios. Dirigentes regionales de la organización campesina pasaron de la noche a la mañana a ser *dirección de frentes guerrilleros*, sin la preparación ni los vínculos de las organizaciones insurgentes. Lo que esa actitud ocasionó fue que el Ejército desató una feroz represión sobre esas zonas, que golpeó duramente a la población civil y alentó la deslealtad de los dirigentes, quienes se erigieron en caciques del lugar, adoptando un comportamiento bandoleril –violación de mujeres, asaltos, usufructo de dinero que llegaba a sus manos por conducto de la solidaridad- (Arias, 1985).

Esta política tuvo otras lecturas. *Un ejército necesita reclutas. Así que la guerrilla adoptó la estrategia de atraerlos haciendo a la gente participantes de facto en las actividades guerrilleras. Esto los pondría (a los pobladores) automáticamente en oposición a los militares... La represalia masiva que seguía a cualquier actividad guerrillera fue deliberadamente dirigida, no a la guerrilla, sino a la población civil cercana a cualquier lugar donde la guerrilla hubiera operado....La intención clara era, no sólo hacer que la gente rechazara cualquier relación con la guerrilla, sino hacer que... la misma guerrilla se abstuviera de actuar antes de hacer correr a la gente el riesgo de sufrir tanto barbarismo. La guerrilla...y el Ejército... habían desarrollado una estrategia de guerra que fue considerablemente más segura y probablemente tan efectiva como enfrentarse directamente en el conflicto armado (Morrisey, 1989).*

Tal vez, uno de los aspectos más siniestros de esta ofensiva guerrillera fue la campaña de *destrucción del poder local*, que significó el asesinato de muchos miembros en las comunidades rurales. Parte de ellos efectivamente colaboraban con el Ejército o con las bandas paramilitares, ya que en las elecciones de 1978 el MLN ganó en muchos de los municipios. Sólo en septiembre, el EGP se atribuyó la muerte de 97 colaboradores del Ejército en diferentes localidades del país. Las ejecuciones que la guerrilla, pero en particular el EGP, llevó a cabo en 1981 se resumen así:

Fecha	Lugar	Víctimas	Cargos
14-01	Sta Lucía Cotzumalguapa	01	Alcalde MLN
3-02	Sta. Ana Huista, Huehue	01	Comisionado Militar
9-02	Amatitlán, Guatemala	01	Confidencial
21-02	Huehuetenango	01	Contratista
21-02	Huehuetenango	03	Comisionados Militares
24-02	La Estancia, Sta Cruz, Quiché	04	Colaboradores Ejército
26-02	Sn Pedro Jocopilas, Quiché	02	Colaboradores Ejército
3-03	Chaculá, Huehuetenango	01	Administrador finca
5-03	Estancia de la Virgen, Chimal.	01	Comisionado Militar
6-03	San Juan Comalapa, Chimal.	01	Comisionado Militar
6-03	San Juan Comalapa. Chimal.	02	Confidenciales
6-03	La Gomera, Escuintla	01	Confidencial
8-03	San José Poaquil, Chimal.	01	Alcalde
2-05	Mangales, Mazatenango	01	Confidencial
7-05	Sn Pedro Jocopilas, Quiché	01	Confidencial
10-05	Tzanicababaj, Quiché	02	Confidenciales
13-05	Amatitlán, Guatemala	01	Confidencial
15-05	Tiquisate, Escuintla	01	Confidencial
21-05	Santa Ana Huista, Huehue.	01	Alcalde
21-05	Santa Ana Huista, Huehue.	01	Telegrafista
28-06	Cotzal, Quiché	02	Confidenciales
29-08	Choabajito, Sn Martín Jilotep.	04	Colaboradores Ejército
7-09	Barillas, Huehuetenango	02	Comisionados Militares
12-09	Patzité, Quiché	05	Vecinos (en quema de Mun.)
14-09	El Quetzal, San Marcos	01	Comisionado Militar

18-09	San José El Idolo, Suchi.	01	Administrador finca
20-09	Coatepeque, Quetzaltenango	01	Concejal, finquero
22-09	Zona 6, capital	01	Judicial
23-09	Sn Juan Comalapa, Chimal.	01	Transportista MLN
1-10	San Idelfonso Ixtahuacán, Hue	02	Personas desconocidas
15-10	San Juan Ixcay, Huehue.	01	Alcalde
2-11	San Andrés Semetabaj, Qui.	nd	"Poder local"
16-11	Zacualpa, Quiché		
	Tecpán, Chimaltenango	06	Colaboradores Ejército
22-11	El Chal, Petén	06	"Enemigos del pueblo"
24-11	Sn Bartolomé Jocot., Quiché	02	Alcalde y guardaespald.
26-11	Sta Cruz Balanyá, Chimal.	02	Alcalde y esposa
13-12	Plaza de Nebaj, Quiché	01	"El principal de principales"
17-12	La Perla, Chajul, Quiché	01	Guía del Ejército
30-12	Tzuncab, Sacapulas, Quiché	03	Comisionados Militares

Fuente: REMHI en base al *Informador Guerrillero* del EGP, 1981.

A finales de 1981 se podía estimar que la guerrilla contaba con 6,000 hombres en armas y una base de apoyo de 276,000 personas, accionando en 16 de los 22 departamentos. Pero cuando se desató la contraofensiva del Ejército, no hubo coordinación entre las distintas organizaciones guerrilleras, que no compartían la visión táctica del EGP. El Ejército concentró a sus efectivos contra diversos frentes guerrilleros consecutivamente, y al menos las dos organizaciones más fuertes militarmente, el EGP y la ORPA, no articularon una respuesta coherente.

"Pobres contra ricos"

La integración de las PAC fue un proceso que mostró las limitaciones de la labor insurgente. Al desarrollarse el vertiginoso levantamiento de poblaciones rurales e indígenas se dio una falsa apariencia de homogeneidad. Sin embargo, aún en los momentos de mayor euforia, existían importantes núcleos de población local ocultos por la hegemonía insurgente, que esperaban la oportunidad de cambiar de bando.

El EGP, procurando simplificar su mensaje a manera de hacerlo didáctico, instauró y divulgó la concepción de que la lucha era entre ricos y pobres. Para la población indígena del área rural la imagen del rico no era la del gran empresario capitalino, al que no siempre conocían. Por otro lado, el área rural indígena distaba de ser homogénea en lo socioeconómico y sociocultural; entre la población indígena existían multitud de conflictos. Desde el punto de vista sociogeográfico dichos conflictos se expresaban en contradicciones entre las aldeas y caseríos y los cascos urbanos. La expresión *los indios del monte* -dicha por otros indígenas- ilustra la situación.

Además de estos conflictos, en varios frentes del EGP -principalmente el FACS- se dio la orientación de *ajusticiar* a los comisionados militares; estos comisionados, por aquella época, no tenían una tradición represiva, eran campesinos como los demás y por supuesto con amplios vínculos familiares.

Además, en el área del FACS, y en otras áreas del EGP, ocurrieron ocupaciones de cabeceras municipales. Por una parte, la guerrilla dio la orientación de incendiar los edificios municipales, lo cual impactó negativamente a importantes grupos de población. Por otra parte, en varias de estas ocupaciones de cabeceras la situación se desbordó: la población que se sumaba espontáneamente a los destacamentos guerrilleros -provista de hachas y machetes-, procedió al saqueo de comercios e incluso, en un caso ocurrido en la cabecera de Joyabaj, los insurgentes dinamitaron el acueducto que surtía de agua a la población.

La organización de masas, sobre todo en el altiplano central, era de reciente formación, hecha al calor del clima insurreccional; los adherentes carecían de formación sobre la estrategia a aplicar la cual, además, estaba poco definida y precisada; no se habían organizado líneas de mando efectivas, las orientaciones se recibían de manera muy general y la población las aplicaba según su entender y en el marco de la euforia y radicalismo del momento. Así por ejemplo, la táctica de bloquear las carreteras y aprovechar la concentración de vehículos para hacer propaganda en favor de la revolución, en muchos casos derivó en saqueo a los conductores y pasajeros. (REMHI, Insurgencia y contrainsurgencia, conceptos y elementos de análisis, octubre 1995. Mimeo.)

En menor medida ocurrió también que la población armada o determinados jefes militares insurgentes aprovecharon la situación para saldar cuentas personales. En algunos casos no fue meramente personal sino represalias frente a otras aldeas, lo cual condujo a matanzas y a reclutamiento forzoso. La situación de desbordamiento, de proliferación de gente armada, hizo que la población en general buscara armas allí donde se las dieran, lo cual también favoreció al Ejército. Todo ello dispersó aún más las fuerzas militares de la guerrilla quedando en una situación en la cual le era imposible pensar en golpes contundentes contra el Ejército.

5. Socios interesados

A pesar de la inestabilidad política, en los primeros años del período de Lucas se intensificó el movimiento de capitales observado desde el inicio de la década. Como ya se describió, el modelo de gobierno impuesto por el grupo militar heredero de Arana hubiera resultado inviable de no asociarse con una parte del sector empresarial.²² A los empresarios también les interesaba la

22 En este período, aparte de las distintas directivas de las cámaras, destacaron en el mundo empresarial Miguel Ángel Ponciano Castillo, algodonero, presidente de la Cámara del Agro y militante del MLN; Roberto Castañeda, presidente de la AGA; Teodoro Plocharsky, cafetalero y entusiasta colaborador del Ejército en sus campañas contra las comunidades campesinas; David Ordóñez, empresario avícola; Fernando Andrade Díaz-Durán, abogado y entonces político del MLN, vinculado a la Cámara del Agro y ANACAFÉ; Herbert Fischer Saravia, presidente de la Cámara de Industria, vinculado al negocio de la venta de carros.

Encuentran la inspiración para su práctica eclesial y social en la lectura simultánea de la Biblia y de las realidades socioeconómicas y políticas que se desarrollan en el país. Esto las diferencia de los grupos carismáticos, que hacen su entrada en el escenario a partir de 1973 y que se limitan estrictamente a la primera de las lecturas de la Biblia, sin contrastarla con el contexto social. (REMHI, La Iglesia guatemalteca en la segunda mitad del siglo XX, 1996. Mimeo).

Los centros de formación

En esta etapa se multiplicaron los centros de formación de líderes cristianos (catequistas, delegados de la Palabra, coordinadores, animadores de la fe). Así nacieron el Centro de Capacitación Campesina en Quetzaltenango, Casa de Emaús en Escuintla, Campo de Dios y Centro Apostólico en Izabal, Centro de Desarrollo Integral en Huehuetenango, Centro de Formación en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Centro San Benito en Cobán, entre otros.

Son distintos los nombres, pero son conocidos los programas que se desarrollan... Hay unas constantes que se dan en todos ellos: tareas de concientización, conocimiento y análisis de la realidad nacional, conciencia social, lectura de la Biblia a la luz de la realidad, animación y organización comunitaria, evangelización liberadora, comunidades eclesiales de base... además de capacitación propia para cada trabajo, fuera éste agrícola, cooperativista, educativo, de salud o específicamente religioso. Estos centros fueron el corazón de la renovación de las comunidades y espacios de formación cristiana y capacitación social. Miles de campesinos tanto indígenas como ladinos participaron en cursos, encuentros, jornadas de trabajo. (REMHI, Presencia y acción de la Iglesia en el conflicto armado, 1997. Mimeo).

Sacerdotes y religiosas trabajaron fuertemente en estos centros, que fueron apoyados además por los obispos que veían en esta estructura eclesial un camino para la evangelización y formación de las comunidades cristianas. Desde 1977 hasta 1980 hubo una reunión anual de quienes trabajaban en esos centros promovida por la Conferencia Episcopal.

Una experiencia significativa a nivel nacional fue el Centro de Adiestramiento de Promotores Sociales (CAPS), auspiciado por la Universidad Rafael Landívar. El programa desarrolló cientos de laboratorios vivenciales, capacitó líderes campesinos, promovió la organización social y la animación comunitaria.

La preocupación de la Iglesia en esos años se dirigió también hacia los pueblos indígenas. En 1971 el obispo Juan Gerardi promovió en la diócesis de La Verapaz un Encuentro de Pastoral Indígena, que fue seguido en diversos lugares de occidente. Sacerdotes indígenas junto con otros extranjeros tradujeron y difundieron la Biblia en idiomas mayas. En Chimaltenango surgió el Programa Misionero Kaqchiquel (PROMIKA), como una colaboración entre la diócesis de San Francisco (los Estados Unidos) y la de Sololá. Promovieron sobre todo entre los jóvenes la lectura y escritura del kaqchiquel. De ahí saldrían futuros líderes e intelectuales indígenas.

Las Cartas Pastorales²⁶

La CEG hizo públicos desde finales de los años 60 y principios de los 70 varios pronunciamientos coyunturales que privilegiaron circunstancias de participación electoral. Por ejemplo, en el mensaje del 28 de mayo de 1969 los obispos reconocían que el cristiano debía participar con su voto, *porque para el cristiano la actividad política (es) como uno de los principales medios para la ordenación justa de la sociedad, no es algo marginal al ejercicio de su fe, sino más bien se convierte en un deber que pesa sobre su propia conciencia.*

Esta preocupación por una sociedad más participativa y democrática, que se desprende de estos mensajes, no se logra plasmar en estructuras duraderas. Por ello, los obispos en otro mensaje del 5 de febrero de 1971, califican de un *caos de intranquilidad y de dolor* la situación nacional, *verdadera hora especialmente trágica en la que vive Guatemala.* Más aún, reconocen y denuncian que cada *sangre derramada en esta lucha insana conmueve en sí misma los corazones; los daños son incalculables: la supresión malhadada de valores humanos y patrióticos, y las míseras consecuencias que nos muestran en todos nuestros horizontes, hogares destrozados, viudas y huérfanos en doloroso desamparo, la inseguridad en todos los caminos, la angustia en todos los ánimos.*

La descripción tiene como escenario inmediato el conflicto armado en el oriente del país. En su denuncia, los obispos no llegaron a señalar la fuente de esa violencia. Es más, la condena ante las violaciones y abusos se diluyó en múltiples señalamientos de violencia, el anonimato del sujeto del denunciante y ante la diferente gravedad de los hechos que se declaran:

Como cristianos rechazamos y condenamos la violencia en todas sus formas: la violencia de quienes explotan y oprimen a otros hombres, impidiéndoles realizarse plenamente; la violencia de los que imponen el terror con la fuerza bruta o con amenazas de toda índole; la violencia organizada, de cualquier ideología, cuyos funestos métodos son el sabotaje, el secuestro, el robo y el asesinato alevoso; la violencia del que abusa de la cátedra, del mitin político o sindical para sembrar odios; la violencia que se genera, ya en la misma infancia, por medio del cine, de ciertos programas de televisión, de publicaciones periódicas etc.

Pasaron tres años antes de que la CEG se pronunciara en contra de la violencia de una forma enérgica. Nuevamente en una coyuntura electoral, en un comunicado de prensa del 20 de marzo de 1974, los obispos reconocieron el agravamiento de la situación de violencia. Manifestaron: *Desde hace tiempo venimos sufriendo profundamente al ver el cúmulo de crímenes en todo orden y de la violencia que ha ensangrentado a nuestra querida patria Guatemala. Reafirmamos con el Papa Pablo VI: 'la violencia no es ni cristiana ni evangélica', y nos aleja cada vez más de la verdadera paz.* Un estudioso de la documentación de la CEG de aquellos años señala que:

26 Todos los documentos de la CEG emitidos entre 1956 y 1997 están recogidos en un sólo volumen: CEG, *Al servicio de la vida, la justicia y la paz*, Guatemala 1997.

Una lectura atenta de algunos documentos, nos permite analizar las distintas redacciones y las diversas manos que se entrelazan en su redacción. Esto muestra que en sus pronunciamientos los obispos no se revelan unánimes, e indirectamente reflejan las distintas posiciones y tendencias que se aprecian en el interior del Episcopado y que, en casos, son perceptibles en otros pronunciamientos públicas de la realidad cotidiana. IC 151, Guatemala, años 70.

Esta apreciación se confirmaría con la falta de unanimidad de la CEG en la firma de uno de sus documentos más trascendentales, como es el mensaje *Unidos en la Esperanza* del 25 de julio de 1976.

“Unidos en la Esperanza”

La CEG se encontraba en un forcejeo con el cardenal Casariego. Varias veces la Conferencia quiso dar pasos en la línea conciliar y de Medellín, pero quedaba frenada por el veto del arzobispo. Él prefería arreglar cada conflicto Iglesia-Estado mediante la intercesión personal ante las autoridades gubernamentales.

Las tensiones entre los obispos llegaron a su culminación con motivo de las declaraciones en torno al terremoto del 4 de febrero de 1976. Casariego lo interpretaba como un castigo de Dios. En un mensaje por radio dirigido a los damnificados, dijo que *Dios había puesto el dedo sobre Guatemala y ojalá no fuera a poner la mano.*

La CEG publicó la carta pastoral *Unidos en la Esperanza* en ausencia del cardenal, quien estaba de viaje. Los obispos además de reconocer la solidaridad que se dio en los días después del terremoto, *el valor humano y cristiano de nuestro pueblo, especialmente el más sencillo y abandonado*, señalan la situación material en que vive la población, que se evidenció con el sismo:

Guatemala vive bajo el signo del subdesarrollo y de la dependencia que aparta a nuestros hermanos no sólo del goce de los bienes materiales, sino de su propia realización como seres humanos... Vivimos realmente en una situación de pecado, que nos afecta a todos... Las llamadas clases altas, formadas por los que detentan la riqueza y el poder han ido cediendo paulatinamente al avance de la inmoralidad, al deseo inmoderado de lucro, a la búsqueda insaciable del placer. Es increíble la bajeza y la decadencia moral que se descubren en muchos de estos sectores de nuestra sociedad... Es aquí donde con mayor claridad y dramatismo aparece la injusticia que vive nuestra patria... Este grave problema de la tenencia de la tierra agrícola y urbana, está en la base de toda nuestra situación de injusticia... ha creado y mantiene un clima de tensión, inseguridad, de miedo, de represión en nuestro país... Guatemala vive desde hace largos años bajo el signo del temor y de la angustia... La represión no se hace esperar y hemos entrado... en lo que se ha dado en llamar la terrible ‘espiral de la violencia’, a la opresión responde la subversión, a la subversión la represión y así, poco a poco, el clima se hace más exasperante y el baño de sangre que padece nuestra patria es de características insufribles.

Esta carta pastoral fue sin duda el hecho más relevante en estos años, pues los obispos denunciaron las condiciones sociales y expresaron su opción preferencial por los pobres, pero además reflejaron una corriente de aproximación a los movimientos populares que venían gestándose desde varios años atrás. Rápidamente se produjeron versiones populares que, junto con el original de la carta, circularon profusamente entre agentes de pastoral para la formación de catequistas, delegados de la palabra, animadores de comunidades y demás líderes sociales.²⁷

El 4 de mayo de 1977 la CEG respondió a las acusaciones de Mario Sandoval Alarcón, líder del MLN, de que la Iglesia era vehículo del comunismo internacional. La polémica sobre los espacios eclesiales continuó durante los siguientes meses. En una nueva coyuntura electoral, febrero de 1978, los obispos fijaron en definitiva su posición. En el documento *Fe y Política* tomaron postura por una verdadera participación democrática que *necesitan los ciudadanos para construir en todos los sectores el necesario bien común que beneficie a todos*.

La polarización política

El acercamiento entre la Democracia Cristiana (DC) y la Acción Católica (AC), como también su opción coincidente por proyectos reformistas, entraron en crisis a mediados de los años 70 debido al *shock* petrolero, el encarecimiento del abono químico y las expectativas frustradas en 1974, cuando al candidato de la DC a la Presidencia, el general Ríos Montt, se le arrebató la victoria. La postura no beligerante de los demócrata cristianos decepcionó a los miembros de la AC, quienes se fueron radicalizando y buscando otras opciones de participación política.

En el área Ixil y norte de la diócesis de El Quiché las acciones militares del Ejército entre 1975 y 1976 ya estaban cobrando las primeras víctimas entre la AC. El 19 de marzo de 1976 fueron secuestrados el presidente de la AC de Nebaj, los directivos de la AC de Cotzal y los directivos juveniles y adultos de la AC de Chajul. De noviembre de 1976 a diciembre de 1977, 143 directivos y catequistas de la AC del área Ixil y del Ixcán fueron secuestrados y asesinados.

Indudablemente un sector de la Iglesia católica inspirado por la Teología de la Liberación, que promovió la llamada *pastoral liberadora*, se convirtió en uno de los más fuertes componentes del auge del movimiento revolucionario al final de los años 70. La Guatemala indígena de esa época parecía ofrecer el terreno y los ingredientes favorables para un encuentro entre el mesianismo guevarista y la religiosidad popular que no se había observado en la década anterior (Le Bot, 1996). Con frecuencia fue un sector de la población ya trabajado por militantes

27 Durante los siguientes cinco años se realizaron en Guatemala unos cursos como extensión del Instituto Pastoral Latinoamericano (IPLA), con sede en Quito, Ecuador, dirigido a promover reflexiones y actuaciones pastorales a partir de las orientaciones de los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) en Medellín. Participaron teólogos y pastoralistas como Raúl Vidales, Segundo Galilea y José Marins. Los cursos, llamados Mini-IPLA, eran de seis semanas y estaban destinados a agentes de pastoral y laicos de Centroamérica. Muchos sacerdotes y religiosas que comenzaban a trabajar en los años 60 y 70 participaron en estos cursos que iban en la línea de una pastoral liberadora.

revolucionarios el que dio el impulso inicial de aproximación a la guerrilla. Algunos pastores evangélicos también fueron inducidos a radicalizarse del mismo modo que si hubieran participado en las tareas de desarrollo: bajo la presión de una parte de su grey y por efectos de una dinámica ya puesta en movimiento. Después, su adhesión tuvo un efecto de acarreo y ampliación.

La cuestiones del cambio social fueron analizadas bajo un punto de vista claramente religioso, y las acciones de los habitantes de las aldeas se legitimaron más en términos del profeta Isaías que en términos de Marx. Los catequistas utilizaron el discurso de la teología de la liberación, invitando a la creación del 'Reino de Dios en este mundo'. De no haber sido por los catequistas, las organizaciones revolucionarias sencillamente no habrían podido reclutar un número significativo de q'eqchi'es. Su papel fue decisivo, no sólo como líderes en las aldeas, sino también porque pudieron traducir la doctrina de la revolución política en términos localmente inteligibles. El análisis de clase de la guerrilla fue reformulado en un ideología de la comunidad. Los catequistas hablaban de comunidad en contraposición a terratenientes particulares, o de comunidad frente a comerciantes y ladinos locales, o de comunidad como contrapuesta a los representantes locales del Ejército. Nunca encontré a nadie que ni siquiera pensase que estaba luchando contra 'la clase gobernante de Guatemala' o contra 'el Estado' (Wilson, 1998).

En el paso del movimiento social a la lucha armada, las relaciones entre los responsables de las parroquias y sus fieles no funcionaron de acuerdo a un sólo esquema y en un único sentido. No por ello deja de ser cierto que fueron un punto de unión. Entre el grupo de guerrilleros dirigido por revolucionarios profesionales y las comunidades indígenas, la religión fue una de las mediaciones principales. Permitió a la guerrilla dar un salto cualitativo a partir de 1976 .

El movimiento indígena no era sino débil y ocasionalmente milenarista antes de que en él se injertara la Teología de la Liberación.

Ciertamente (el movimiento indígena) trataba de edificar un mundo mejor, pero por acumulación de transformaciones parciales y progresivas del mundo presente. No aguardaba o pedía una destrucción apocalíptica o revolucionaria de éste. Era claro y totalmente pragmático en cuanto a los medios del cambio (escuelas, cooperativas, abonos, poder municipal) y sus fines. Antes de cambiar el mundo, se trataba, para los indios modernistas, de cambiar la sociedad, o más modestamente aún, su situación en esa sociedad. La Teología de la Liberación introdujo una radicalidad, predicó unas rupturas y acentuó la concepción religiosa de la revolución hasta tal punto que pareciera justificado considerarla como el esbozo de un milenarismo nuevo (Le Bot, 1996).

Sin embargo, otros observadores señalan que aparte de reivindicaciones económicas, el tema del respeto a la dignidad humana fue el que más prendió entre la población indígena campesina en el discurso de la iglesia progresista.

Esto no era sino reflejo de una fuerte corriente de conciencia social que había venido tomando forma en el interior de la Iglesia católica, especialmente después de que a principios de los años 70 los jesuitas Ricardo Falla, César Jerez, Juan Hernández Pico, Carlos Cabarrús, Ricardo Bendaña, Fernando Hoyos y Enrique Corral fundaron el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) en la zona 5 de la capital, confluyendo el trabajo que ellos estaban realizando en la capital y sur de El Quiché y Chimaltenango, con la actividad de los sacerdotes del Corazón de María en el norte de El Quiché y los sacerdotes belgas y suizos que estaban en la costa sur.²⁸ Este movimiento fue evolucionando hacia la constitución del CUC en la costa sur y el altiplano.

La alfabetización, formación, organización y estudios antropológicos del Centro sugería una organización campesina. Por medio de los estudios e investigaciones en que participaban también otros sacerdotes y esfuerzos organizativos del CIAS, poco a poco, se estableció la fundación del CUC... La formación de las bases de los campesinos, a partir de la composición de pequeños grupos y la selección de líderes fueron importantes para el nacimiento del CUC. (REMHI, La vida religiosa en el fuego del conflicto armado en Guatemala, 1997. Mimeo).²⁹

Gran parte de los procesos de reflexión que se desarrollaron en las zonas rurales durante los años 70 tuvo lugar en un contexto religioso. La Iglesia poseía la red de comunicación más extensa para poder llegar a las áreas más remotas y la religión jugaba un papel muy importante en la vida de los indígenas. A medida que los campesinos fueron descubriendo la vinculación de sus problemas concretos con el sistema económico y político, sintieron la necesidad de crear una organización propia (Fernández, 1988). La mediación religiosa se dio de hecho en la transición que muchos indígenas hicieron hacia un compromiso directamente político.

A fines de diciembre de 1977 se creó el Comité Justicia y Paz de Guatemala. El 29 de mayo de 1978 se produjo la masacre de 100 campesinos q'eqchi'es en el parque municipal de Panzós. El 3 de junio, el recién fundado Comité se pronunciaba:

28 El CIAS se dedicaba al análisis social, la investigación y la formación. Establecieron tres puntos de apoyo: El Quiché, Chimaltenango (Comalapa, San Martín, San Andrés Itzapa) y Escuintla (cabecera y Santa Lucía Cotzumalguapa). El Centro se distinguía por su método de la formación de la gente, pero fue rechazado por algunos agentes de pastoral en el sur de El Quiché. En San Martín, el párroco resintió esa actividad. En Escuintla hubo una mayor interpenetración con los agentes de pastoral.

29 El surgimiento del CUC sin embargo es fruto de un largo y proceso complejo social en el altiplano indígena. El embrión fue un proceso comunitario de campesinos que se unieron a nivel local en grupos de reflexión. Una de sus bases originales estuvo en el sur de El Quiché (en particular la aldea La Estancia en Santa Cruz del Quiché) y comenzó a emerger a partir de las comunidades cristianas de base y de las ligas campesinas. Ellos conectaron con procesos similares que se estaban dando en algunas comunidades de Chimaltenango y de la costa sur. En este contexto comenzó en 1973 el proceso impulsado por los jesuitas y un grupo de estudiantes capitalinos.

Porque Jesucristo nos enseñó a compadecernos de la multitud y a darle junto con el pan de su Palabra de fe, de esperanza y de dignidad, el pan que sacia el hambre corporal. El desarrollo de la historia humana nos ha hecho entender... que no se trata de dar como regalo, sino de vivir del fruto del trabajo compartido con igualdad y justicia... Nos pronunciamos porque hoy aquí en Guatemala, Panzós demuestra que se está dispuesto a matar para impedir esa justicia y esa igualdad.

Poco después, con motivo de la masacre de la embajada de España, cientos de cristianos decidieron incorporarse a las organizaciones guerrilleras y también lo hizo un grupo de sacerdotes que habían participado en el proceso anterior.

La brutal represión desatada contra la Iglesia católica fue un elemento que catalizó esta radicalización. La persecución contra la Iglesia se inició con el asesinato del padre Hermógenes López en San José Pinula el 30 de junio de 1978, a pocas horas de la toma de posesión de Lucas. El P. Hermógenes, definido por quienes lo conocieron como *un auténtico pastor*, estaba alejado de los movimientos políticos pero era muy cercano a la gente. Se ganó la enemistad de los militares por sus protestas contra el servicio militar forzoso.

La campaña de represión selectiva contra la Iglesia se encarnizó especialmente en 1980. El 1 mayo fue asesinado el párroco de Tiquisate, Conrado de la Cruz; 12 de mayo fue el Padre Walter Voodeckers, párroco de Santa Lucía Cotzumalguapa. En noviembre, el gobierno negó la entrada al país del presidente de la CEG y obispo de El Quiché, Juan Gerardi. En junio las autoridades eclesiales habían decidido cerrar esa diócesis.

Cierre de la Diócesis de El Quiché

La tensión militar en el norte de El Quiché se extendió al resto de la diócesis tras la masacre en la Embajada de España, el 31 de enero de 1980. En marzo, supuestos escuadrones de la muerte colgaron de las rejas de radio Quiché los cadáveres mutilados de dos catequistas. En mayo, trece mujeres fueron asesinadas en la plaza de Nebaj. A través de comunicados públicos la Diócesis acusó directamente al Ejército. Pocos días después varios dirigentes y maestros de la zona Ixil fueron muertos; de nuevo la Diócesis denunció el hecho.

Así fue creciendo la tirantez entre las autoridades militares y el obispo Juan Gerardi, quien varias veces fue llamado a la zona militar. Gerardi les planteó a los oficiales: *Ustedes son los que asesinan, ustedes son los enemigos del pueblo. Nosotros tenemos que estar con el pueblo, por lo tanto, estamos al lado opuesto de ustedes. Mientras ustedes no cambien, no puede haber diálogo, no se puede establecer un puente de comunicación, no puede haber acuerdos entre nosotros y ustedes.*

A partir de mayo el Ejército decidió atacar directamente a los agentes de pastoral. El día 8 por la noche, un grupo de soldados rodeó el convento de Uspantán, donde se encontraban Padres y Hermanas, y lanzaron bombas y granadas en el patio interior de la parroquia. A los pocos días rodearon

nuevamente el convento y lanzaron ráfagas de metralla. Los agentes de pastoral resultaron ilesos y decidieron salir de inmediato. Así quedó desmantelada la zona de Uspantán, Chicamán y Cunén.

El 4 de junio, tras el cambio del comandante del destacamento militar de Chajul, fue asesinado el P. José María Gran, junto con su acompañante Domingo Batz, al regresar de una gira pastoral por las aldeas. Varios agentes de pastoral, entre ellos el P. Javier Gurriarán, salieron del área Ixil. El 10 de julio mataron al P. Faustino Villanueva, párroco de Joyabaj, en su propio despacho parroquial. Así quedó neutralizada la zona de Joyabaj-Zacualpa-San Andrés y Canillá. El 19 de julio las fuerzas armadas prepararon varios atentados contra el Párroco de la Zona Reina-Ixcán Chiquito, Luis Gurriarán; persiguieron a otros sacerdotes, como el de Chiché, y organizaron una emboscada contra el obispo Juan Gerardi cuando se dirigía a officiar misa en San Antonio Ilotenango, acompañado de unas religiosas. El obispo se salvó del ataque gracias a que fue advertido por los propios vecinos.

Gerardi, entonces, llamó a todos los agentes de pastoral a concentrarse en la capital para reflexionar sobre la situación y tomar una decisión. *La decisión fue tremenda, difícil, dolorosa: cerrar la diócesis. No había otra alternativa. Después de largas deliberaciones ésta es la decisión propuesta por el obispo y apoyada por los agentes de pastoral. Fue una decisión para salvar la vida. La mayor parte de los agentes de pastoral estaban amenazados de muerte, sus nombres habían sido publicados en las listas de los grupos paramilitares.* (IC 183, El Quiché, años 80). Unos meses más tarde, algunos de los que quedaron más cerca se animaron a regresar, pero corrieron una suerte fatal. El 15 de febrero de 1981 fue asesinado en Uspantán el Padre Juan Alonso.

La Diócesis y el obispo se encontraron solos ante esta decisión. *Se nos culpó como causantes de la gravedad de la situación, incluso dentro de la misma Iglesia.* (IC 156, El Quiché, años 80). Gerardi fue delegado por la CEG para asistir al Sínodo entregar al Papa un informe sobre la situación, pero al regresar no le fue permitido ingresar al país. Tuvo que permanecer varios años exiliado en Costa Rica. Solamente un sacerdote se quedó en la diócesis, el Padre Axel Mencos, originario de Joyabaj, quien dio acompañamiento pastoral a las comunidades, no obstante las constantes presiones que sobre él ejercían los militares. Torturaron a personas capturadas por el Ejército en la ventana de su casa y le amenazaron de diversas formas. El Ejército ocupó las instalaciones de la Iglesia y las convirtió en cuartel y centro de detención en los que se desarrollaron sesiones de tortura. En varios conventos y casas parroquiales fueron localizados posteriormente cementerios clandestinos.

También en 1981 la Iglesia católica continuó sufriendo la represión. El 16 de mayo fue asesinado el P. Carlos Gálvez Galindo, párroco de Tecpán, Chimaltenango. El 8 de junio fue detenido el jesuita Luis Eduardo Pellecer Faena, colaborador del EGP. El 1 de julio fue ametrallado el sacerdote franciscano Tulio Maruzo, en Quiriguá, Izabal. El 25 de julio aparecieron los

cadáveres de los misioneros laicos Raúl Joseph Leger (canadiense) y Ángel Martínez Rodrigo (español). El 27 de julio fue asesinado el sacerdote estadounidense Francisco Stanley Rother, en la casa parroquial de Santiago Atitlán, Sololá. También en julio fue asesinado el pastor evangélico Félix Moxón Chutá.³⁰ El 2 de agosto fue secuestrado en la capital el jesuita español Carlos Pérez Alonzo. El 19 de noviembre fueron secuestradas en Panajachel las monjas dominicas Jean Reiner y Hellen Lavalley, pero reaparecieron una semana después en Retalhuleu.

La CEG publicó un comunicado de prensa con fecha 6 de agosto de 1981 en el que señalaba la grave situación por la que estaba atravesando a causa de la persecución y la violencia desatada contra los sacerdotes y catequistas, que hasta ese momento había cobrado la vida de doce sacerdotes, siete de ellos solamente entre enero y julio de ese año.

Tenemos que ser muy claros al expresar a todos los que se precian de ser católicos, que la situación de Guatemala ha llegado a tal grado, que exige una definición categórica de cada uno de nosotros... Es inconcebible que haya católicos que asisten a misa y aun se acercan a recibir el Cuerpo de Cristo y luego permanecen indiferentes cuando se asesina a sus sacerdotes o se tortura y masacra a sus hermanos. Algunos incluso aprueban estos hechos y unen sus voces a los que denigran a... la Santa Iglesia. No podemos menos de manifestar también nuestra preocupación constante por la vida y la integridad física de nuestros sacerdotes, religiosos y catequistas, porque... a causa... de las campañas de desprestigio contra la Iglesia y por la impunidad con que se han cometido los sacrílegos crímenes, cualquier persona, aun por asuntos sin importancia, se siente autorizada y animada a proferir amenazas y hasta llevarlas a la práctica contra los miembros del clero y de las comunidades religiosas.

Pero la ola represiva continuó durante los primeros meses de 1982. El 2 de enero fue herido a tiros el Padre Horacio Benedetti, párroco de San Antonio Suchitepéquez. El 4 de enero fueron secuestrados los sacerdotes Pablo Schildermans y Roberto Paredes Calderón, en Nueva Concepción, Escuintla; tres días después fueron dejados libres. El 5 de enero fue asesinado el religioso Venancio Aguilar Villanueva. El 6 de enero fue desaparecida la religiosa bethlemita Victoria de la Roca, en Esquipulas, Chiquimula. El 19 de enero fue también desaparecido el religioso belga Sergio Berten. El 20 de enero fue asesinado en la capital el dominico guatemalteco Carlos Ramiro Morales López, dirigente del grupo guerrillero MRP-Ixim. El 13 de febrero fue asesinado en Huehuetenango James Alfred Miller, hermano de La Salle. Parecía el preludio de una campaña que en el período siguiente adquiriría un carácter casi de guerra religiosa, aunque ya no se atentara contra la vida de los religiosos.

30 Un año antes, el 8 de julio, habían sido asesinados los líderes evangélicos Marco Antonio Cacao Muñoz y Roberto Ortiz Morales.

La Iglesia en el conflicto. Diferentes voces

'La Iglesia apoyó a la guerrilla', me dice el militar. 'No -le aclaro- simplemente estaba contra la injusticia'. IC 065, Guatemala.

¿Fue utilizada la gente? La gente se lo debe responder a ustedes de REMHI. IC 38, Guatemala, años 70 y 80.

El papel de la Iglesia en la época de recrudescimiento del conflicto a principios de los años 80 es todavía punto álgido de debate. Después de oír tantos testimonios extraemos las siguientes conclusiones: Desde los años 60, pero sobre todo en los 70, la Iglesia fue un motor de cambio social y económico en las comunidades el cual llevaba una dirección progresiva que chocó con la rigidez del sistema y, por otro lado, también provocó conflictos intracomunitarios. El marco de acción pastoral provenía del Concilio Vaticano II y de las reuniones del CELAM en Medellín y Puebla.

Este fue el tiempo del auge guerrillero, que algunos agentes de pastoral vieron como una opción liberadora. Más allá, el crecimiento inusitado de la guerrilla en las comunidades indígenas difícilmente hubiera ocurrido sin el trabajo de sensibilización, capacitación y organización que muchas diócesis, parroquias y congregaciones habían emprendido desde tiempo atrás. El cierre de los espacios políticos electorales en 1974 y 1978; los violentos despojos y el difícil acceso a la tierra por parte de los campesinos; la inviabilidad del modelo desarrollista para las comunidades; la percepción de amenaza que veían los grupos de poder en la energía que irradiaban las organizaciones de base, y el bloqueo sistemático a la aspiración de muchos indígenas de ganar su derecho de ciudadanía, fueron factores que nutrieron la tesis guerrillera de la *inviabilidad de las formas pacíficas de lucha*. La radicalidad que adquirió la dinámica social entre 1979 y 1981 no dejó espacios para opciones. *No había espacios para tercerismos*, expresa el obispo Gerardi.

Algunos sacerdotes y religiosas abrazaron abiertamente la opción revolucionaria y otros, también una minoría pero menos militante, se inclinaron por el Ejército, incluso trasladando listados de catequistas y sacerdotes sospechosos de colaborar con la guerrilla. Eso ocurrió, por lo menos, en la capital, Izabal, Petén y Chimaltenango. Pero estaban aquellos cuya opción era la gente, no las ideologías ni los intereses políticos. También ellos fueron víctimas y pagaron con su vida la lealtad hacia las comunidades.

Hubo quienes abandonaron a la gente de distintas formas. Hubo quienes entregaron listas de catequistas y otros revolucionarios. Están los que encubrieron o legitimaron el accionar del Ejército. También los que se quedaron, como Axel y Melchor... o Falla que representó el apoyo de la Iglesia a las CPR. IC 069, Guatemala, años 80.

Ahora bien, la cercanía general de la Iglesia con las comunidades y la promoción de distintas formas de organización de base despertó la sospecha del Ejército y de aquellos sectores que hubieran preferido una Iglesia tradicional, más clerical e identificada con los grupos de poder, como la que se levantó en los años 50 en una cruzada contra el comunismo.

Mi papá era de la costumbre... se puso católico para no ser acusado de comunista... eso fue en los tiempos de la reforma agraria con Árbenz... yo crecí en el catolicismo y me acusaron de comunista por estar reclamando un pedazo de tierra para cultivar... eso fue en los tiempos de la gran violencia o sea de la calamidad, como nos decía mi mamá... IC 489, La Estancia, El Quiché.

O lo interpretaron como un desafío:

La diócesis de El Quiché denuncia la violencia en el norte... El Ejército ve el gesto como una confrontación. IC 072, El Quiché.

El compromiso personal o de grupo que algunos agentes de pastoral hicieron con los movimientos guerrilleros o populares, le confirmó al Ejército que la Iglesia formaba parte del plan rebelde. Este diálogo entre un obispo y un general del Ejército en 1980 ilustra la percepción mutua de ambos actores:

'General, ametrallar las casas de la gente es delito', le dije. 'No sólo se mata con balas, también con ideas', me respondió. Le dije al general Mendoza Palomo: 'ustedes hacen la guerrilla.' '¿Por qué no nos ayudan?' -me preguntó. 'No puedo poner la diócesis a su servicio. Yo no tendría agua bendita para bendecir lo que ustedes hacen.' Eso fue en el Palacio dos días después sería la toma de la Embajada de España. Obispo Juan Gerardi.

La represión contra los sacerdotes y religiosas fue selectiva, pero a la vez ideologizada, sobre todo en El Quiché. En las comunidades fue donde más sufrieron los miembros de la Iglesia, pues ser católico y, peor, catequista era sinónimo de subversivo. Muchos catequistas enterraban su Biblia por miedo a ser identificados y perseguidos.

'El programa de radio del obispo (en El Quiché) nos está chingando', decían los militares. En Nebaj amenazaron al P. Lanz y éste se fue a la guerrilla. Mataron al P. Gran y pusieron banderas del EGP en su maleta. IC 107, Guatemala, años 80.

A la Iglesia como un todo el Ejército y varios grupos de poder la percibieron como enemiga del sistema y autora intelectual de la estrategia revolucionaria.

En esa época ellos decían que la Iglesia estaba haciendo las cosas mal, ya no estaba predicando el evangelio sino que también metiéndose algo en la política, por el hecho de motivar a la gente a trabajar unidos... Ellos empezaron a criticarnos, a decirnos que ya estábamos en el comunismo. Caso 10671, Los Amates, Izabal, 1981.

Pero obviamente era un error analizar a una Iglesia monocroma inexistente.

Un P. salesiano entraba en la zona militar como en su casa, pero otros salesianos recogieron refugiados. Un catequista era comisionado militar y un jefe de patrulla era quien traducía al Padre. IC 021, Guatemala, años 80.

La vieja idea de que había que influir a la escala más alta de la sociedad para sensibilizar a las elites y que éstas provocarían cambios desde arriba, estuvo siempre presente en la educación religiosa de los jóvenes de los sectores acomodados.

Los del Cráter son los maryknoll. Tenían clases en el Monte María, hicieron como los del Belga en Operación Uspantán o los salesianos en Operación Carchá; una promoción con sentido social con los alumnos, pero se oponen algunos papás que son militares y finqueros... Por allí pasan el Xolón Porras, Rodil Peralta, Stein, Yolanda Colom... IC 107, Guatemala, años 60 a 80.

También la Iglesia, como todas las comunidades víctimas, fue culpabilizada por el Ejército, grupos empresariales, sectas neopentecostales y sectores conservadores, por el grave saldo de vidas y las violaciones ocurridas durante el conflicto. La Iglesia vivió el mismo síndrome del vencido de las víctimas.

La represión fue por culpa del aprendizaje de la Iglesia. La Palabra de Dios trae muchos problemas. Caso 2170, Sawachil.

Y registró muchas bajas: 20 sacerdotes y religiosas asesinados y secuestrados entre 1980 y marzo de 1982; hasta septiembre de 1981, 91 sacerdotes (15% del total) y 78 religiosas que abandonaron el país a causa de amenazas; ocho casas de formación de religiosas fueron cerradas; dos casas parroquiales destruidas; 30 centros de capacitación clausurados; 70 parroquias quedaron sin sacerdotes; dos emisoras católicas fueron cerradas y otras cinco autocensuradas; ocho colegios católicos quedaron sujetos a investigación y control policíaco; innumerables catequistas y delegados fueron asesinados y perseguidos, sus casas y cosechas quemadas. La Biblia fue considerada subversiva y quemada por el Ejército; acercarse a un oratorio era un peligro inminente de ser *fichado* (Saravia/Otero, 1997)

Desde luego, ver a la Iglesia como el gran enemigo era también una concepción maniquea orientada a neutralizarla globalmente sembrando el terror, obligando a un repliegue del que el Ejército y sus aliados esperaban que salieran fortalecidos los sectores más conservadores.

El obispo nos dice: 'les han cerrado esa radio porque era cosa del diablo'. IC 022, años 80.

¿Hasta qué punto la gente era objeto o sujeto? Ambas posturas parecen caricaturizar un hecho social muy complejo. En las comunidades subsistían las dos tendencias: la búsqueda por el cambio que implicaba el riesgo, y el miedo ante lo nuevo como una actitud que se aferra a las verdades consumadas y es agresiva cuando tiene la oportunidad de pasar a la ofensiva. ¿Dónde se traza la frontera entre el movimiento político y el movimiento social cuando ambos se necesitan pero también se alejan? (y a veces profundamente).

Fue la gente que quería una postura más radical, nos jalaron. La fuerza campesina se traspasa al movimiento revolucionario. Convocamos a que se organicen. La mayoría son del CUC. Hay presencia de universitarios, casi todos de arquitectura, en la reforma del movimiento cristiano que apoyará al CUC. El proyecto central está más en la zona 5, en los curas de la costa y en los MSC de El Quiché. Trabajábamos más como grupos cristianos que como Iglesia... Nosotros estábamos en ese momento en un organismo de masas del EGP, nuestra lucha era de masas, no guerrillera. Para el 1 de mayo (1981) se pensó la consigna de la ofensiva militar para el derrocamiento de Lucas, fue precipitado. IC 037, Guatemala, años 70 y 80.

Como se dijo, la experiencia más grande de las comunidades era construir su ciudadanía: ganar la sensación real de ser personas con obligaciones pero también con derechos, como todos los demás, incluidos los ladinos y los poderosos.

Yo me atreví a hablar en una asamblea que los señores comisionados estaban violando el artículo 57 de la Constitución, que decía que ninguna autoridad tenía permiso de entrar en el hogar ajeno si el dueño no lo permitía, a no ser que fuera con una orden competente, pero nunca antes de las seis (de la mañana) ni después de las seis (de la tarde)... Entonces dijeron que yo tenía un libro político, ahí fue el comienzo que nos comenzaron a malinformar llevando partes al destacamento militar. Caso 10671, Los Amates, Izabal, 1981.

De la persecución política nunca o casi nunca se desasoció el estigma de la religión. De ahí el siguiente paso: la conversión forzada o inducida por el más fuerte, y siempre la resistencia de más de alguno.

Nos dijo el comisionado: 'si usted no acepta hacerse de la iglesia (Nazarena) viene la violencia por ustedes otra vez'. Acepté porque era de soñarlo a él noche a noche. Me dijo mi hija grande, la de 13 años: 'mire mamá, si usted sigue a esa religión, váyase, yo hasta aquí llevo, yo más no la sigo a usted porque papá no nos dejó allá, él aquí nos dejó en la iglesia. Los que entregaron a los catequistas se hicieron después evangélicos, nosotros venimos aquí a verles la cara a ellos y ellos a nosotros...' Sólo un mes estuve allí, por el miedo, por la amenaza que nos hicieron. Nos quedamos sin saber qué vamos a hacer... Caso 5303, Santa Inés Chivac, Salamá, Baja Verapaz, 1982.

Como en nuestra comunidad ya no hay ningún señor que quisiera ser catequista, ya no hay ningún señor que lleve la palabra de Dios, que les da miedo. Toda la gente se fueron al Nazareno, ya no somos bastantes los católicos. Caso 5057, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, 1982.

Nosotros antes somos católicos, pero ya ahorita ya no. Soy evangélica. Por la tristeza me entregué al evangelio. Si no ya me iba a morir. Si ya no comía yo. La tristeza. Caso 3609, Macalajau, Uspantán, El Quiché, 1981.

Se fueron a otra religión, ya no volvieron y dijeron: vamos a otra religión porque así no nos matan, aquí no morimos, no pasamos sufrimiento. Y allí se quedaron. Caso 2221, El Mul, San Miguel Acatán, Huehuetenango.

En cada diócesis y parroquia la acción de los agentes de pastoral respondió a los contextos sociales en que vivían y según sus propios principios.

La Verapaz

En el año 82 la gente preguntaba en una reunión de catequistas: me voy o no me voy (a la guerrilla) IC 027, Alta Verapaz, 1980.

La Hermana Gloria conectaba a la gente, pero decía que no conviene hablar de armas... ella se encargaba de la formación de los catequistas trabajando en Chisec, desde la parroquia de Cobán. Los de San Cristóbal (Verapaz) estaban metidos... nosotros decíamos: si alguien quiere ir (a la guerrilla) está bueno. Se cometieron muchos errores forzando a la gente a organizarse. IC 029, Alta Verapaz, años 80.

Nosotros en la parroquia, en la pila del bautismo, teníamos fotos del P. Walter, Conrado, Guillermo Woods, Hermógenes, Mons. Romero, para recordar qué compromiso contiene el bautismo. IC 026, Guatemala, 1980.

Rabinal

Hacían reunión en una capilla católica y los catequistas obligaron que todos los hombres se metieran ahí, y entonces llegó el hermano más grande de mi finado papá y le llegó a decir: tenés que entrar con nosotros y nos tenés que dar ayuda a ese grupo para mantenerlo y nos tenés que dar unas tres o cuatro gallinas semanales, porque si no las das te vamos a venir a matar acá a tu casa. Los de ese grupo después se fueron a la montaña, lo dejaron todo. Caso 5082, Rabinal, 1981.

Los de la Colonia (Pacux), donde nos refugiamos huyendo de nuestra aldea, decían 'hay que tirar esos niños con las monjas'. Sor Gregoria fue a traerlos... el P. Melchor dio su vida por nosotros. Caso 7463, Chichupac, Rabinal, 1981.

En 1979-80 todavía como que había ya una voz por ahí que decía que había que hacer una limpieza. ¿Qué limpieza? -se preguntaba- más que todo se empieza con los catequistas y los del comité. Caso 5027, Rabinal, 1980.

Las Conchas

La diócesis de La Verapaz recibió y alojó en el convento de Catedral a varias familias q'eqhies que salieron de la montaña después de hasta seis años de permanecer escondidos.

Cuando recibí el papel que supuestamente venía de los que estaban en la montaña y pedían ayuda, recé mucho. Tal vez era una trampa de los militares. Decíamos, tal vez es mentira, es peligroso... IC 093, Cobán, 1987.

Gracias a la diócesis de Verapaz, a la madre Rosario, a Myrna Mack... nos salvaron. La Madre dormía en el convento con nosotros, cuando llegaba el Ejército ella miraba que no pasara nada. IC 077, Las Conchas, 1987.

Chimaltenango

Apoyado por los curas me tiré al CUC. La sospecha cayó sobre mí y otros catequistas: yo era también guerrillero. IC 027, Chimaltenango, 1981.

Fernando Hoyos y Enrique (Corral), sacerdotes muchachos, nos envían como Jesús a los doce: vaya usted a conseguir otro compañero. Creamos el sindicato, no hay local, sólo una imagen del Corazón de Jesús bajo un árbol. Como Jesús encontró a los doce discípulos, así se usó para organizar a la gente: que Jesús no esté solo, que tenga compañeros... vienen de todas partes, de Petén, Izabal... Saber si sabe la Iglesia porque aquellos sacerdotes hicieron eso... La Iglesia quiere que se levanten, que progresen los indígenas, por eso lo hacen. IC 048, Chimaltenango, 1981.

A mí (en la huida) me nombraron Padre clandestino, en total hice doce bautismos y catorce matrimonios. Después cuando la gente se rindió y supo que a mí me nombraron Padre clandestino, se puso el Padre conmigo enojado, me llamó: ¿no ganó usted, no te pagaron? Nada, nada. Se calmó un poco el Padre... Entonces hay que traer los datos... IC 015, Chimaltenango, 1982.

Sacerdotes y religiosas víctimas³¹

P. Conrado de la Cruz

El Padre Conrado de la Cruz (filipino) pertenecía a la Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM). En Guatemala trabajó en San Cristóbal, Verapaz, en el puerto de San José y a partir de 1979 en Tiquisate (Escuintla). *Ahí quiso experimentar lo que sufrían los trabajadores en las fincas algodoneras y en algunas ocasiones fue a trabajar como peón... Esto le hizo tomar posturas más comprometidas con los grupos populares... especialmente con el CUC (REMHI: Casos de sacerdotes y religiosas víctimas, P. Conrado, 1996. Mimeo).*

La radicalización del P. Conrado lo llevó a vincularse con el EGP a través del CUC. En el mimeógrafo de la parroquia de Tiquisate se imprimieron no sólo material del CUC sino propaganda de la guerrilla, y esto fue controlado por el Ejército.

El 1 mayo de 1980 el Padre fue a la capital para participar en la manifestación del Día del Trabajo. Lo acompañaba Herlindo Cifuentes, sacristán de la parroquia y un hermano de éste, menor de edad. Al finalizar la manifestación en el Parque Central, los tres bajaron por la 6 Calle hasta la 8 Avenida esquina, frente a la farmacia Lourdes. Ahí se pusieron a conversar con conocidos que participaron en la marcha. Llevaban algunos de los papeles que se habían repartido en el desfile. Un jeep verde, Toyota (los que utilizaban los judiciales) se detuvo frente a ellos y descendieron seis hombres fuertemente armados, obligando al P. Conrado y al sacristán a subir al vehículo. Ese día secuestraron a muchas personas.

No hubo respuesta oficial sobre el paradero del P. Conrado, a pesar de las exigencias de los CICM y la CEG. Doce sacerdotes CICM salieron del país. Un sacerdote que tenía como feligrés al general Germán Chupina, director de la Policía Nacional, al preguntar por el P. Conrado recibió como respuesta: *ese curita que andaba con papeles subversivos.*

P. Walter Voordeckers

El P. Walter Voordeckers (belga) también pertenecía a la CICM. En Guatemala trabajó en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa. *El proceso de evangelización que varios de los religiosos venían realizando en la prelatura se orientaba a una pastoral liberadora y el P. Walter estaba en esa línea (Id., Caso P. Voordeckers, CICM).*

31 El resumen de doce casos que se presenta a continuación no es exhaustivo. Estos son los casos que pudieron ser documentados por los Animadores de REMHI.

Ya en 1974 y 1976 empezaron a ejercer control militar sobre las reuniones de catequistas en la parroquia de Escuintla y en la del puerto de San José, especialmente cuando Benedicto Lucas García fue comandante de la Base de Paracaidistas. El CUC inició su trabajo en la zona en 1978 y muchos de sus dirigentes eran catequistas. Algunos sacerdotes les prestaban sus locales. El equipo parroquial de Santa Lucía Cotz. se encargó de la formación de los dirigentes y pidieron ayuda a los jesuitas de la zona 5. Fernando Hoyos y Eduardo Pellecer Faena se encargaron de ese trabajo. El P. Walter apoyó estas labores y en sus homilías denunciaba constantemente las injusticias que se cometían contra los campesinos en las fincas.

Cuando ocurrió la huelga de trabajadores de las fincas, en febrero de 1980, el P. Walter estaba en Bélgica, pero el Ejército comenzó a ver con hostilidad a todo el equipo pastoral y los finqueros buscaron tomar represalias. Un testigo afirma que el comandante de la base militar de Santa Lucía Cotz., un coronel, dijo en una reunión que el P. Walter era un político y que personalmente lo iría a matar.

El lunes 12 de mayo de 1980, a las 7:00 horas, desconocidos que viajaban en una camioneta verde y crema se ubicaron cerca del convento. A eso de las 9:00 el P. Walter fue al correo. Cuando venía de regreso, quince minutos después, los desconocidos salieron de un comedor y trataron de sujetarlo. El P. Walter se les escapó y huyó hacia el convento, pero otro hombre que estaba en la esquina se le acercó y le disparó a pocos metros de distancia. Le hizo siete disparos y le quiso acertar el *tiro de gracia*, pero falló. El P. Walter fue trasladado al IGSS y esa tarde falleció.

P. José María Gran Cirera

El P. José María Gran (español) pertenecía a la Congregación del Sagrado Corazón (MSC). En 1975 fue enviado a Guatemala y destinado a El Quiché. Permaneció en Santa Cruz tres años y se dedicó a la formación de jóvenes. En 1978 fue trasladado a Zacualpa cuando la violencia, que ya venía golpeando a los catequistas del norte de El Quiché desde 1975, comenzó a arreciar en esa zona, donde los MSC con el apoyo de los jesuitas realizaban una activa formación de catequistas.

El P. Gran fue asignado a Chajul en agosto de 1978, una zona que comenzaba a vivir una férrea militarización del Ejército. *Gran era solidario con los pobres, pero no estaba convencido de la opción armada como sí lo estaban otros de sus compañeros; tampoco estaba metido con las organizaciones populares, aun cuando no se oponía al trabajo que hacían en la zona norte* (Id. Caso P. Gran).

Dos semanas antes de ser asesinado por el Ejército, el jefe del destacamento militar de Chajul llamó al P. Gran y le dijo que estaba molesto porque él (Gran) estaba pasando la información de los comunicados en los que la diócesis denunciaba la represión en la zona norte. El P. Gran le respondió que él informaba en la reuniones diocesanas del trabajo pastoral de su parroquia y de lo que en ella ocurría, pero que eso no significaba que en los comunicados se alentara la subversión. El militar acusó que los sacerdotes estaban levantando a la población enseñándoles de la Biblia solamente a los *profetas vengativos*, y no

lo que dice San Pablo de obedecer a las autoridades. Y le advirtió al P. Gran: aténgase a las consecuencias.

La mayor parte de los campesinos muertos en la embajada de España son del CUC del norte de El Quiché. El Ejército acusa a los MSC (Misioneros del Sagrado Corazón) de estar apoyando, por ser Padres de la Acción Católica. Crece la tensión y existe preocupación por los agentes de pastoral que están organizados, ellos tienen más riesgo: los Gurriarán (Nebaj e Ixcán), Mackena (Zacualpa), Lanz (Radio Quiché) y los misioneros españoles del Instituto de Misiones Extranjeras que están en Uspantán. Los Padres Gran y Villanueva no estaban metidos, sólo apoyaban a la gente. Agravó la cosa que muchos guerrilleros provenían de la misma Iglesia. IC 072, El Quiché, 1981.

En la última semana de mayo de 1980 el P. Gran tenía programada una gira por varias aldeas de Chajul. Viajó acompañado por el sacristán Domingo Batz y dos religiosos maristas españoles; éstos visitarían aldeas diferentes, pero debían reunirse los cuatro el 3 de junio por la noche en la aldea Bitziquichúm. Los maristas se retrasaron y no llegaron esa noche. En la mañana del día 4 el P. Gran celebró misa y se dirigió con Domingo Batz a la aldea Xeixobitz. Los testimonios indican que el Ejército había ocupado el camino y un día antes un helicóptero sobrevoló el lugar. El P. Gran viajaba en caballo y a eso de las 11:00 una patrulla militar, que los aguardaba en un camino bastante solitario, les disparó a ambos por la espalda; al caer de sus monturas los remataron.

Ese día en el destacamento militar se dio un aviso a la municipalidad de que había dos cadáveres no identificados en el camino y que enviaran a los bomberos a buscarlos. Los maristas que habían tratado de alcanzar al P. Gran y al sacristán, encontraron los cuerpos tirados en una cuneta, sus maletines habían sido registrados y los autores dejaron dispersa propaganda guerrillera.

P. Faustino Villanueva

El P. Faustino Villanueva (español) pertenecía a la congregación de Misioneros del Sagrado Corazón (MSC). En 1959 fue enviado a Guatemala y sirvió en Sacapulas, Joyabaj, Santa Cruz y luego en Cotzal, El Quiché. *Era de carácter sereno y muy reflexivo. Era sensible a la brutal realidad que vivían los campesinos, pero buscaba soluciones por medios conciliadores. Era muy párroco. Visitaba enfermos, traía enfermos en su carro* (Id. Caso P. Villanueva).

En enero de 1973 fue enviado nuevamente a Joyabaj, tras colaborar en Santa Cruz en la formación de las cooperativas y la radio Quiché. En Joyabaj permaneció hasta 1978 cuando pidió ir a Nicaragua, país que vivía los momentos difíciles de la insurrección sandinista. Su salud se vio afectada y decidió viajar a España, pero en 1980 volvió a Joyabaj. Para entonces en toda la zona norte de El Quiché se sufría una violencia desenfadada. El 4 de junio había sido asesinado el P. Gran y los MSC se reunieron en la capital para evaluar la situación que estaban viviendo. Acordaron crear equipos de dos o tres para atender a las parroquias. El día 10 el P. Villanueva regresó a Joyabaj. No se le consideraba una persona que corriera un alto riesgo.

El 10 de julio de 1980 al mediodía dos personas desconocidas que se conducían en una moto llegaron a Joyabaj. Hicieron compras en la farmacia y se dirigieron a una aldea cerca de Pasaguay donde preguntaron por un hombre de nombre Manuel Hernández. *Tenían pinta de judiciales*, afirman los testigos.

A las 20:30 los dos hombres tocaron la puerta del convento. La cocinera les abrió y pidieron hablar con el Padre. Él aceptó recibirlos, salió a saludarlos y los llevó a su despacho. Uno entró, el otro se quedó esperando en la puerta, luego decidió también entrar. Minutos después se escuchó un disparo. La cocinera vio cómo los dos hombres escapaban, tomaron su moto y se dirigieron rumbo a Santa Cruz. El sacerdote quedó gravemente herido, recibió auxilio de los vecinos pero murió antes de que lo pudieran trasladar al hospital de Santa Cruz. Su muerte no tenía una conexión política directa. Era una señal de que la Iglesia, como diócesis, era considerada enemiga por el Ejército. Nueve días después ocurriría el intento de emboscada contra el obispo Gerardi y el 21 de julio se cerraría la diócesis. La población de Joyabaj, que no pudo tener el cuerpo del P. Faustino para enterrarlo, guardó su sangre en el altar mayor de la iglesia.

P. Juan Alonso Fernández

El P. Juan Alonso (español) era miembro de los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC). Fue enviado a Guatemala en 1960 y su primer destino fue San Andrés Sajcabajá. En 1962 pidió ir como voluntario a Indonesia donde permaneció hasta 1965. *Era un hombre muy religioso, con profunda espiritualidad, conservador y poco abierto a nuevas ideas sobre el ser de la Iglesia. Le preocupaba el tema de la costumbre (espiritualidad maya) y combatía sus prácticas... Era valiente, siempre pedía estar en los puestos más difíciles de la misión. Era un misionero en el sentido más clásico. Dedicaba mucho esfuerzo a la construcción de templos e instalaciones* (Id. Caso P. Juan Alonso).

En 1966 pidió ir a la Zona Reina, la más inaccesible de El Quiché, y fundó la parroquia en Lancetillo. Visitaba las aldeas dispersas viajando largas distancias a caballo. En esa región permaneció trece años. Él no compartía la línea de sus compañeros del MSC de apoyar a las organizaciones populares ni guerrilleras. Para evitar confrontaciones, en 1978 pidió ir a Petén donde el obispo Estrada Peteau le confió la parroquia de San Andrés.

Cuando fueron asesinados los Padres Gran y Villanueva, Alonso se ofreció para atender la región Ixil, convencido de que no era posible dejar sola a la gente cuando el conflicto era más fuerte. Se sentía muy seguro porque siempre expresaba su forma conservadora de pensar. En enero de 1981 se trasladó a El Quiché, cuya diócesis había tenido que ser cerrada cinco meses antes, para coordinar con el obispo Víctor Hugo Martínez y otros sacerdotes el plan de atención a las comunidades. Volvió a Petén unos días y el 10 de febrero reingresó en motocicleta vía San Cristóbal Verapaz y Uspantán. Viajó ese mismo día a Nebaj y durmió en Chichicastenango.

El día 13 fue a Uspantán, donde sorpresivamente fue citado por el jefe del Destacamento militar, quien lo acusó de ser simpatizante de la guerrilla. Negó las acusaciones, pero la detención se prolongó hasta altas horas de la noche. Al día siguiente celebró misa en Chicamán y regresó a Uspantán. El domingo 15 a las

15:00 salió de Uspantán rumbo a Cunén, pero fue detenido por hombres enmascarados y fuertemente armados a la altura de La Barranca. En el barranco los esperaban unos soldados de uniforme. Ahí lo golpearon salvajemente. Un testigo asegura haber visto cómo al P. Alonso lo sentaban en una piedra y le hacían tres disparos en la cabeza. Su cadáver fue recogido en Uspantán. *Los oficiales asignados a Uspantán estaban mentalmente enfermos... La Compañía de Paracaidistas del Puerto de San José estaba agregada a esa zona bajo el mando del teniente Mario Antonio Samayoá* (IC 054, Uspantán, El Quiché, 1981).

P. Tulio Maruzo

El P. Tulio Marcelo Maruzo (italiano) pertenecía a la Orden de los Franciscanos. Llegó a Guatemala en diciembre de 1960 para trabajar en Izabal (que en ese entonces pertenecía a la diócesis de Zacapa) y fue nombrado coadjutor de la parroquia de Puerto Barrios. En 1963 fue enviado a Entre Ríos donde visitó aldeas y creó oratorios dándole prioridad al trabajo sacramental. En esa parroquia permaneció hasta 1968. *Era un hombre apostólico, muy querido por la gente* (Id. Caso P. Maruzo).

En los años 60 Izabal era un área crítica del conflicto armado por la presencia del frente guerrillero que comandaba Marco Antonio Yon Sosa, el creciente papel de control poblacional que el Ejército le asignaba a los comisionados y la presencia cada vez más notoria de los militares. En febrero de 1968 se creó la Administración Apostólica de Izabal y el nuevo obispo, Gerardo Flores, le pidió al P. Maruzo crear la estructura parroquial en las 40 aldeas de Morales. El proceso de organización comunitaria creció en torno al tema del acceso a la tierra con el importante apoyo de los claretianos en El Estor y las carmelitas en Bananera. En los años 70 las organizaciones populares formaron sólidas bases en el departamento, principalmente en las fincas bananeras.

El P. Tulio conocía bien la situación de los campesinos. Era un hombre de formación tradicional pero abierto. No participaba directamente en los cursos de formación pero de alguna manera daba su apoyo. *Tenía una gran bondad y sencillez, poseía una gran espiritualidad y era paciente: podía pasar una mañana entera escuchando a un campesino* (Id. Caso P. Maruzo).

En 1977 el obispo Luis Estrada Peteau fue nombrado para sustituir a Gerardo Flores. Entre tanto subía la tensión política en la diócesis y varios sacerdotes eran acusados a través de volantes que propalaban en las calles. El nuevo obispo, cuya visión de la cristiandad era distinta a la línea que aquellos traían, aconsejó a los Padres a que hablaran en la base militar. A los delegados de la palabra se le acusó también de guerrilleros y comunistas. Las agresiones no tardaron en llegar. El 8 de agosto de 1980 atacaron con granadas el centro de formación donde vivían seis religiosas canadienses, la parroquia que atendía el P. Carlos Herrera y la casa de un laico que formaba parte del equipo pastoral. Sólo hubo daños materiales, pero en enero de 1981 el P. Chris Newman, claretiano que atendía Río Dulce, fue detenido por el Ejército y el obispo Estrada logró liberarlo. En los días posteriores varios sacerdotes y religiosas salieron del país.

El P. Tulio fue destinado a Quiriguá en mayo de 1980 sin que haya sido objeto de amenazas. A fines de junio visitó las aldeas de las montañas entre

Quiriguá y Los Amates atendiendo un llamado de las comunidades que tenían problemas por el reclutamiento militar forzoso. Los jóvenes se habían escondido y los comisionados allanaron sus casas. El Padre llegó, escuchó a la gente y fue a hablar al destacamento. No logró liberar a los muchachos y causó malestar entre los militares. El 1 de julio tras dejar en sus casas a cursillistas de Los Amates que vivían en las fincas bananeras, hombres armados lo interceptaron y asesinaron, junto con su piloto Obdulio Navarro. Por el estado de su ropa parece que hubo forcejeos con los agresores. Un testigo aseguró haber oído a un militar ebrio decir: *lástima que lo mataron porque ese cura sabía mucho*, refiriéndose a que el P. tulio era el gran confidente de los campesinos. En un taller de REMHI celebrado en Petén en enero de 1996, un Animador encontró a un agente de pastoral al que conoció en Izabal y después de 16 años sin verse lo primero que le dijo con lágrimas en los ojos fue: *Mataron al Padre Tulio por defender a los campesinos*.

P. Stanley Rother

El P. Francisco Stanley Rother (estadounidense) era párroco de Santiago Atitlán desde 1978, donde desarrolló una intensa actividad pastoral con grupos juveniles y en la formación de catequistas. A principios de los años 80 Santiago se había convertido en un lugar de fuerte control del Ejército en respuesta a la expansión del área de influencia de la ORPA hacia el corredor volcánico. La población, sobre todo los jóvenes, comenzaron a sufrir acoso, las reuniones de los grupos fueron vistas con sospecha y la actividad pastoral ya no se desarrolló con normalidad.

El P. Rother denunció estos hechos en el propio pueblo frente a los militares.

Se hizo un cabildo abierto y el Padre fue a declarar todos los problemas... Acusó al Ejército de sacar a los muchachos de la iglesia para llevarlos al servicio y de muchas cosas en Santiago. ¿Quién fue el que secuestró a Gaspar Culán? preguntó el Padre Francisco. Declaró todo. Se levantó el comandante y le dice: ¿Usted vio? Y el Padre que decía no hay necesidad de un testigo, seguro que son sus ejércitos; antes de venir (los militares) aquí no hay secuestros, no hay matanzas. IC 055, Santiago Atitlán, 1981.

En enero de 1981 fue secuestrado el catequista Diego Quic. El P. Rother informó a la Acción Católica que habían sido miembros del Ejército los responsables del plagio y también se lo comunicó al obispo Angélico Melotto en Sololá. El obispo le solicitó al P. Rother que no regresara a Santiago porque temía por su vida. Entonces se le pidió al P. Pedro Bocel que temporalmente atendiera esa parroquia, pero dadas las condiciones de inseguridad no fue posible. El trabajo de catequesis y los oficios fueron coordinados por dos monjas y algunos seminaristas que asistían a celebrar la Palabra.

Tres meses después el P. Rother decidió regresar, pero en el pueblo habían ocurrido ciertas transformaciones: el Ejército controlaba directamente la Iglesia y las oficinas parroquiales. Cuando el sacerdote quiso invitar a los catequistas para continuar los cursos (que se celebraban a las 19:00) para la preparación de

contrayentes, éstos se negaron y sugirieron que se pidiera permiso en el destacamento militar, *para que no piensen mal de lo que estamos haciendo*, dijeron.

Al día siguiente el P. Rother y miembros de la directiva de Acción Católica visitaron el destacamento, donde fueron rodeados por los soldados, y presentaron la petición; el comandante militar dio el permiso. La idea de ir al destacamento, dice uno de los declarantes, era pedir únicamente el permiso para las reuniones, sin embargo el Padre también reclamó que el Ejército había violentado las puertas de la radio. El 25 de julio en la noche hubo una reunión para celebrar a todos los contrayentes, a la que el Padre asistió, y dijo a los asistentes que deseaba celebrar misa al día siguiente. La noche del día 26 avisó que iría a donar sangre para una persona que se encontraba grave en el hospital. A las 5:00 del día siguiente las hermanas avisaron a los catequistas que el P. Rother había sido asesinado en la casa parroquial.

Le decía al P. Francisco que estaba en peligro, que se marchara, pero me decía: 'aquí me tengo que morir con ustedes'. Puro mártir, como Jesús. Tal vez pensó que por ser norteamericano los Estados Unidos lo iban a defender. Decía que no tenía miedo, ellos (los catequistas) van a morir; yo no. Él quiso volver a abrir la radio por la utilidad que tenía, pero ya le mataron. IC 049, Santiago Atitlán, Sololá, años 70 y 80.

P. Carlos Pérez Alonso

El P. Carlos Pérez Alonso (español) pertenecía a la Compañía de Jesús y servía como capellán del Hospital Militar. Fue capturado el 2 de agosto de 1981 a las 11:00 en la 12 Avenida de la zona 10 en la capital, saliendo de celebrar misa en ese hospital.

Informaciones no confirmadas sostienen que en el secuestro participaron dos carros con seis personas fuertemente armadas y que el P. Pérez Alonso fue introducido en uno de esos vehículos. Afirman también que fue llevado a una finca llamada San Miguel, cerca de la laguna del Pino, y ahí fue sometido a interrogatorio y torturas en las que falleció.

Tratándose de una personas al margen de las actuaciones políticas hubo mucha especulación sobre el móvil de su secuestro. Ciertamente, como se ha visto, la comunidad jesuita de la zona 5 tenía un papel central en el proceso de organización social que se había dado desde mediados de los años 70 y que dio origen al CUC; esa comunidad era la *masa gris* de este sector de la Iglesia comprometido con los cambios sociales. Menos de dos meses antes del secuestro del P. Pérez Alonso, había sido detenido el también jesuita Luis Eduardo Pellecer Faena, aunque el Ejército no lo presentó públicamente sino hasta el 30 de septiembre (ver Capítulo *Los mecanismos del horror* en el Tomo II de este Informe). Quiere decir que el secuestro de Pérez Alonso ocurrió mientras la D-2 tenía en su poder a Pellecer. Datos no confirmados indican que Pérez Alonso pudo haber encontrado a Pellecer en el Hospital Militar reponiéndose de las probables torturas y que su secuestro fue para evitar que hablara sobre ese hecho.

Como fuere, en cierto momento el Ejército supuso que el jesuita español representaba un riesgo para sus planes. El 4 de agosto de 1981 el general

Mendoza Palomo le expresó confidencialmente a un allegado suyo que Pérez Alonso había sido secuestrado porque *era un doble agente*. Otra fuente militar le confió a un miembro de la jerarquía católica que efectivamente el Ejército lo había secuestrado. El general Benedicto Lucas García preguntado sobre el paradero del secuestrado respondió: *lo mejor que pueden hacer es rezar una oración por él*, confirmando de nuevo la autoría castrense del plagio y el probable deceso del P. Pérez Alonso.

Según fuentes calificadas el Ejército pudo haber creído que el jesuita era un doble agente debido a que tenía acceso al Hospital Militar, a varios cuarteles y a la casa del Ministro de la Defensa; él tenía una excelente memoria numérica y *a veces ingenuamente repetía matrículas de algunos carros utilizados por oficiales del Ejército*, señala una de las fuentes. En algunos reductos guerrilleros localizados por la fuerza armada en las semanas anteriores al secuestro, según los diarios, fueron halladas placas de carros oficiales y croquis de cuarteles e instalaciones militares; luego que el propio Pellecer fue capturado, oficiales de inteligencia militar registraron su oficina y encontraron en ella un listado de placas de oficiales del Ejército y también el nombre de Carlos Pérez Alonso. Nada de esto ha sido corroborado, pero indicaría cómo la inteligencia pudo haber formulado la hipótesis del doble agente. Para quienes conocieron al P. Pérez Alonso la suposición es *absurda, no encaja para nada con la personalidad de Carlos*.

Hna. Victoria de la Roca

La Hermana Victoria (Blanca Carlota)³² de la Roca Aldana (guatemalteca) pertenecía a la Congregación de las hermanas Bethlemitas. Se formó en varios países de Centroamérica e hizo sus votos perpetuos en Costa Rica el 25 de enero de 1971. Fue destinada a Quetzaltenango durante varios años y más tarde trasladada a Nicaragua; ahí vivía cuando ocurrió la revolución sandinista en 1979.

Era muy alegre y cercana a los jóvenes. Se preocupó por inculcarles el sentido social y logró que trabajaran en pequeñas obras de beneficio comunitario (Id. Caso Hna. Victoria de la Roca). En 1980 fue enviada a Esquipulas, Chiquimula, donde las bethlemitas tenían una casa de misiones. Ahí se encargó de la catequesis y de la pastoral juvenil; visitaba mucho las aldeas.

En Esquipulas los comisionados militares habían logrado infundir un sentimiento de terror frente al comunismo. Varios testimonios se refieren a la familia Pacheco como la máxima autoridad de los comisionados, que ejercían su poder de manera violenta convirtiendo su propia residencia en centro de detención y de tortura. El jefe de los comisionados era David Pacheco.

En ese ambiente, el hecho de que la Hna. Victoria hubiese estado en Nicaragua no era bien visto. Entre los comisionados corrió el rumor de que la religiosa tenía nexos con la guerrilla. En la madrugada del 6 de enero de 1982 varios hombres armados entraron por la parte de atrás del convento y llegaron

32 Su nombre de pila era Blanca Carlota, pero tomó el de Victoria (por su madre) cuando hizo sus votos perpetuos en su congregación religiosa. Esta era una práctica acostumbrada en las Órdenes y Congregaciones hasta hace unos 30 años, como un signo de renuncia al mundo y un estilo de vida diferente.

hasta la puerta principal, donde la Hna. Beatriz, la superiora, fue a abrir. Los hombres preguntaron por unas armas, dijeron que habían detenido a un camión de verduras que llevaba armas escondidas y sus ocupantes confesaron que a ellas se las habían entregado. Efectivamente una semana antes en un camión les dejaron verduras a las hermanas, y la Hna. Victoria los atendió por ser la ecónoma de la casa. Ella les afirmó a los hombres que no había armas, pero éstos la golpearon y la secuestraron. Al salir, el grupo prendió fuego al garage, pero las hermanas lograron controlarlo. La estación de la policía se encontraba a media cuadra del convento, y a pesar del escándalo los agentes llegaron hasta ya entrada la mañana.

Varios testimonios coinciden en que la Hna. Victoria fue llevada a la zona militar de Zacapa, donde fue torturada. Un declarante afirma que el responsable del secuestro fue el capitán Marcos Pérez Fuentes, quien lo habría confesado a personas de su confianza. El general Benedicto Lucas dijo a la prensa el 9 de enero que la Hna. Victoria era guerrillera. La Congregación bethlemita hizo esfuerzos por localizarla y la superiora generala habló con el general Lucas, pero él le advirtió que no siguiera investigando si quería que la Congregación continuara en el país. Un testigo asegura que la Hna. Victoria fue trasladada al Hospital Militar en la capital para tratar de recuperarla; una de las enfermeras que la atendió sostiene que por las torturas y la falta de tratamiento de un cáncer que ella padecía, no pudieron salvarle la vida. No se llegó a establecer qué pasó con su cuerpo.

P. Carlos Morales

El P. Carlos Ramiro Morales López (guatemalteco) pertenecía a la Orden de Predicadores (Dominicos). Se formó en Costa Rica en los primeros años de los 70, donde trabajó con los indígenas de Chirripó en Cartago; posteriormente fue enviado a Panamá, donde realizó una experiencia pastoral en el barrio marginado Las Cumbres. Se ordenó en 1976 y en 1977 fue asignado a la parroquia de San Mateo Apóstol en Salamá, Baja Verapaz. En 1978 creó un seminario menor en San Jerónimo, destinado a la promoción de vocaciones para la diócesis de La Verapaz.

Pocos meses más tarde *dos personas comenzaron a llegar a la parroquia de Salamá y establecieron contacto con el P. Carlos. Eran miembros del grupo de Edgar Palma Lau, una disidencia de ORPA (MRP-Ixim). Para mucha gente era extraño ver llegara esa gente de fuera. Era evidente el compromiso de Carlos con esas personas... en esas reuniones analizaban la realidad... le daban instrucciones de combate o de qué hacer en caso de persecución. Adoptaron seudónimos y llegaron a entregarle una pistola para defenderse. Él decidió esconderla, pues no le agradó la idea de tener un arma... Carlos era incapaz de usarla.* (Id. Caso P. Morales).

A través de su trabajo pastoral el P. Carlos involucró a algunos delegados de Salamá y Rabinal que eran más sensibles y de confianza. Algunos de ellos fueron asesinados posteriormente. En 1979 el P. Gregorio Barreales, miembro de la comunidad, fue expulsado del país a raíz de un conflicto con el gobernador departamental. El ambiente hostil de las autoridades contra la iglesia afectó el ánimo del P. Carlos.

El obispo Gerardo Flores fue informado de las actividades del P. Carlos, en especial de las reuniones con Palma Lau, y lo cuestionó. Estaba preocupado por la seguridad de la parroquia, el destino del seminario y la actitud contestataria en lo eclesial del P. Carlos. Consultó con los miembros de la comunidad de Salamá sobre la conveniencia de que el sacerdote saliera de la diócesis y, en base a ello, a fines de 1980, le pidió abandonar La Verapaz.

Gente cercana le aconsejó al P. Carlos viajar fuera del país, pero él no aceptó. En marzo de 1981 dejó La Verapaz, se trasladó a la capital y se comprometió aún más con el grupo guerrillero MRP-Ixim. Explicó su situación a sus superiores y pidió su excomunión para vivir fuera de la comunidad. Entonces se fue involucrando en tareas de alta responsabilidad en el MPR-Ixim y pasó a tener una vida clandestina.

El 20 de enero de 1982 a las 10:00 horas el Ejército y la Policía realizaron un operativo para dismantelar una casa de seguridad de la guerrilla en la 9 Calle 33-72 Zona 7, Tikal II, en la capital. La casa pertenecía al MRP-Ixim. El combate duró unas dos horas, y cuando finalmente los militares lograron entrar encontraron el cadáver de Edgar Palma Lau (comandante *Pascual*) con una ametralladora; Palma Lau había cubierto la retirada de sus compañeros. El Ejército también encontró armas y cédulas de vecindad. No hay confirmación, pero sí indicios de que Carlos Morales fue uno de los que escapó; él junto con otro militante del grupo guerrillero estuvieron huyendo el resto de la tarde. A las 17:30 ambos entraron nerviosos a la abarrotería Mary, en la esquina de la 1 Avenida y 2 Calle de la zona 2 (por el periférico). Al salir, desde un picop, hombres armados les dispararon y ambos murieron inmediatamente. El rostro de Carlos Morales estaba desfigurado por los impactos de bala. Fue enterrado el 21 de enero.

P. Andrés Lanz

El P. Andrés Lanz Andueza (español nacionalizado guatemalteco) pertenecía a la Congregación del Sagrado Corazón y había sido enviado a Guatemala desde principios de los años 60. Trabajó en diferentes parroquias de El Quiché, como Sacapulas, Chicamán, Chichicastenango y Santa Cruz. Realizó un profundo trabajo pastoral, fundó y orientó a numerosas comunidades cristianas; además impulsó la organización de la radió Quiché.

Desde 1969 el P. Lanz comenzó a ser objeto de amenazas de muerte, las que volvieron a principios de los años 80, y fueron más constantes tras el asesinato de varios sacerdotes en la diócesis y la persecución contra la Iglesia. Entonces decidió salir de Guatemala pero pronto quiso regresar y lo hizo, a mediados de junio de 1981, cambiando su identidad. Volvió al país con un pasaporte guatemalteco bajo el nombre de Juan García.

El 11 de septiembre de 1982, el P. Lanz visitó en la zona 11 de la capital a la familia Samayoa Morales, originaria de El Quiché. En la casa se encontraban la señora Graciela Morales Herrera, funcionaria de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos y sus hijos José Ramiro (20), Gloria Iris (18) y Astrid Maritza (16), una joven trabajadora doméstica y su hijo de cuatro años. Esa la noche elementos armados allanaron la vivienda y secuestraron a todas las personas. Utilizaron un camión y vaciaron enteramente la casa. La noticia del

secuestro fue dada a conocer el día 13. Y hasta la fecha no ha sido posible establecer el paradero de ninguna de las personas mencionadas.

P. Augusto Rafael Ramírez Monasterio

El P. Ramírez Monasterio (guatemalteco) era franciscano. Se formó en España y fue ordenado como sacerdote en junio de 1967. *Era una persona de trato amable, interesado en el trabajo vocacional y en la formación de los estudiantes franciscanos; animó el grupo juvenil de la parroquia, creó una orquesta juvenil y trabajó con el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Colaboraba con parroquias de Sacatepéquez* (Id. Caso P. Ramírez Monasterio).

En Parramos (Sacatepéquez), en agosto de 1983, recibió la confesión de un campesino, Fidel Coroy, quien era catequista y había estado involucrado en el CUC y el EGP. Al enterarse que Coroy no tenía papeles, el sacerdote le sugirió acompañarlo para regularizar su situación. El P. Ramírez Monasterio visitó al alcalde de Parramos, Gilberto Gómez, a quien le explicó la situación y le pidió la extensión de una amnistía para Coroy. Pero Gómez, quien había sido miembro de la Policía Judicial, comisionado militar y era sindicado de varios asesinatos, trasladó su versión de los hechos al destacamento militar.

Un día después Ramírez Monasterio llegó acompañado de Coroy a firmar los papeles a la oficina de Gómez, pero al salir cuatro policías los detuvieron y los llevaron a la subestación. Coroy llevaba consigo otra cédula (*la cédula de los guerrilleros*, como la llamaba él), que fue encontrada por los agentes. Éstos interrogaron extensamente a ambos. Coroy fue encerrado en una cárcel y el P. Ramírez Monasterio fue mantenido en el despacho del jefe policial. Éste le dijo que no los iban a matar, pero que los interrogarían en el destacamento militar.

Ocho soldados los llevaron al destacamento, golpearon al sacerdote y lo vendaron. Al llegar lo amarraron, lo interrogaron y lo siguieron golpeando varias veces. A Coroy lo introdujeron en un pozo, él gritó que tenía una carta de amnistía y se la quitaron. En la madrugada llegó un capitán, los interrogó y pidió nombres de supuestos guerrilleros. El oficial expresó que la Iglesia apoyó a la guerrilla y por eso Coroy se había ido a combatir. Al P. Ramírez Monasterio lo liberaron a las 5:00, a Coroy hasta las 12:00. A partir de aquel día el sacerdote fue vigilado y sus compañeros de orden recibieron amenazas de muerte. Ellos (los militares) *sabían que el Padre no era guerrillero, pero yo para no comprometerlo más dejé de visitarlo*, expresa Coroy.

El lunes 7 de noviembre de 1983, el P. Augusto fue a la capital a visitar a su familia. Cuando retornaba, al final de la tarde, fue interceptado en el periférico. No se logró establecer cómo ocurrió la captura. Su cadáver, sin documentos de identificación, fue abandonado en Ciudad San Cristóbal el día 8 a las 16:00. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala y señales de tortura; parecía que había sido arrastrado 150 metros en el vehículo, por las huellas de sangre en el camino. La versión de la Policía fue que una patrulla había sido atacada a tiros desde un picop amarillo y que los agentes localizaron el vehículo abandonado, con perforaciones de bala. Ese mismo día el jefe de Estado, Mejía Víctores, denunció ante la prensa que los religiosos apoyaban a la guerrilla y prueba de ello era que 19 catequistas se habían entregado en un campamento del Ejército. Sobre la muerte del sacerdote, sin embargo, acusó a la subversión. Pero para Coroy, *al Padre lo mataron por ayudar a un campesino*.

9. El final de Lucas

La alianza entre los partidos PID-PR y los aranistas que llevó al general Lucas al poder se fue desintegrando rápidamente, y murió cuando en 1981 el vicepresidente Francisco Villagrán Kramer presentó su renuncia y se unió a la oposición al gobierno. En cualquier caso, el mismo triunfo del general Lucas había mostrado claramente la fragilidad del sistema político electoral, que no pudo contrarrestarse con la llamada *apertura democrática* que permitió la inscripción de nuevos partidos, entre ellos el Partido Nacional Renovador (PNR), Frente Unido Nacional (FUN) y la Central Auténtica Nacionalista (CAN). Era un intento de recuperar legitimidad buscando el fin del dominio político de los cuatro partidos tradicionales.

En 1981 volvió a desatarse la carrera por la sucesión presidencial en un panorama claramente tenso, en que la institucionalidad se encontraba seriamente en entredicho. Desde septiembre, el general Aníbal Guevara, ministro de la Defensa de Lucas, había iniciado su campaña apoyado por el PR, PID y FUN, eligiendo al ex-alcalde de la capital (y vinculado con el general Arana) Ramiro Ponce Monroy, como compañero para la vicepresidencia. Se trataba una vez más de la fórmula de continuismo para mantener los negocios del alto mando militar y sus socios empresarios. Pero para entonces este grupo estaba ya aislado en el mundo empresarial y militar. Gustavo Anzueto Vielman se presentó como candidato presidencial por el CAN, con el apoyo del general Arana y los licenciados Ernesto Berger y Danilo Parrinello. También el ex ministro de Finanzas, el coronel Hugo Tulio Búcaro, anunció su candidatura presidencial y dijo contar con el apoyo de Lucas.

Por su parte, el EMG, al margen de los aparatos de seguridad del Estado, había terminado de elaborar su propio programa contrainsurgente, que dejaba de lado la alianza entre los empresarios y el gobierno establecida dos años antes. De esta manera, al conocerse el nuevo fraude electoral que daba la Presidencia al general Aníbal Guevara, el Ejército decidió, en medio de una crisis institucional innegable, romper el formalismo y dar un golpe de Estado el 23 marzo de 1982 que permitiera, en primer lugar, culminar la ofensiva contrainsurgente, y en segundo lugar redefinir un marco institucional acorde con esa estrategia.



ODHAG

Capítulo Cuarto

El gobierno de Ríos Montt

1. Un giro dramático en la historia

El 7 de marzo de 1982 se celebraron elecciones presidenciales en las que el general Aníbal Guevara se proclamó vencedor. Sin embargo el 23 de marzo 950 miembros del Ejército llevaron a cabo un golpe de Estado, nombraron un triunvirato presidido por el general Efraín Ríos Montt y formado por el general Horacio Maldonado Schaad (comandante de la Guardia de Honor y próximo al MLN) y el coronel Francisco Luis Gordillo (jefe de las brigadas de Izabal y Quetzaltenango en 1981). La DC y el MLN apoyaron públicamente al nuevo régimen. La causa determinante del golpe de Estado había sido la profunda crisis generada en la alianza de los sectores militar y empresarial que dominó la vida política en los años 70.

El gobierno militar derogó inmediatamente la Constitución y promulgó el Estatuto Fundamental del Gobierno (decreto-ley 24-82), además de cesar a 50 funcionarios civiles acusados de corrupción. El 5 de abril el Estado Mayor Especial del Ejército presentó al Consejo de Ministros el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD). El 9 junio el general Ríos Montt separó de sus cargos a los triunviros, y se proclamó Presidente de la República. Ríos Montt se rodeó de una Junta Asesora formada por seis oficiales jóvenes, de los trece que apoyaron el golpe,¹ y promulgó la Ley de Organizaciones Políticas, colocando a los partidos tradicionales en situación de comités pro-formación de partido. Como resultado de esta medida, de 1982 a 1985, se crearon 32 nuevos partidos políticos.

Ya para entonces se había iniciado en el medio rural una serie de masacres de población sospechosa de colaborar con la guerrilla y se iba configurando un marco legal para el nuevo régimen. El 15 de abril se emitió el decreto 9-82 que prohibía la divulgación de noticias referidas a violencia política. El 1 de junio el gobierno militar emitió un decreto de amnistía para delitos políticos. El 16 de junio, por acuerdo gubernativo (31-82), el Presidente dio posesión a 324 alcaldes municipales, recomendados por las zonas militares. El 1 de julio se instauró el estado de sitio (decreto 44-82) y se autorizó la integración a las zonas militares y destacamentos a ex-soldados originarios del lugar. El 15 de

1 Entre los oficiales que encabezaron el golpe y ocuparon cargos de asesores de Ríos Montt, están: el coronel Manuel Argueta Villalta (jefe del EMP de Ríos Montt), el capitán Mario Augusto Rivas, el teniente coronel Mario Enríquez, el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, el teniente Héctor Mauricio López Bonilla, el coronel Guido Fernando Abdala y el coronel Ricardo Méndez Ruiz (nombrado ministro de Gobernación).

septiembre se instaló el Consejo de Estado, como un órgano consultivo donde participaron políticos, tecnócratas y algunas personas públicas nombradas por el gobierno.²

A comienzos de 1983 se decretaron las leyes para regular la inscripción de partidos, el registro de ciudadanos y los eventos electorales, y se fijó el 23 de marzo de 1984 para la convocatoria a elecciones constituyentes (pero Ríos Montt no estableció fecha para los comicios presidenciales). El 28 de noviembre varias organizaciones protestantes, con ocasión del centenario del ingreso de las iglesias evangélicas a Guatemala, organizaron una marcha multitudinaria de 175,000 personas que concluyó en el Campo Marte de la capital, presidida por Ríos Montt y Jorge Serrano.

Sin embargo, en 1983 se produjo un acelerado deterioro de la imagen política del gobernante en el que influyó su sectarismo religioso. Pero el elemento decisivo fue su enfrentamiento con el sector empresarial, que provocó inicialmente protestas, como la carta en marzo de ese año del general retirado Guillermo Echeverría Vielman pidiendo que el Ejército se retirara del gobierno, y finalmente el golpe de Estado del 8 de agosto.

La empresa privada comenzó a presionar abiertamente al gobierno desde marzo y abril de 1983, demandando medidas de libre comercio y la devaluación del quetzal, y oponiéndose a cualquier reforma tributaria. Los empresarios exigieron, además, garantías de que el proyecto militar no iba a afectar temas como el de una reforma agraria, provocando con ello el fracaso del ministro de Agricultura, Leopoldo Sandoval, y su proyecto de *banco de tierras* financiado por la AID (Figueroa, 1991). Los agroexportadores estaban atemorizados con el experimento reformista salvadoreño del gobierno de Napoleón Duarte y se identificaban con la postura radical del líder derechista Roberto D'Abuisson, quien además tenía estrechos vínculos con grupos conservadores en Guatemala.

En definitiva, el gobierno de Ríos Montt no pudo superar la contradicción entre su visión política restauradora y el estrecho espíritu económico-corporativo de los empresarios. La propuesta de reforma tributaria del gobierno militar, agudizó el enfrentamiento con los industriales y los comerciantes, a quienes la ley de valoración aduanera y la ley sobre el impuesto selectivo al consumo les obstaculizaba la evasión de impuestos.

Los 17 meses de gobierno ríosmontista demostraron las limitaciones para el intento de nuevas fórmulas de gobernabilidad. El gobierno osciló entre los diversos sectores empresariales, según fuera la medida política o económica que pretendía implantar. Al final, no había logrado quedar bien con ninguno de los grupos. Por ello el golpe encabezado por el general Mejía Víctores puede verse como una reestabilización en la que el nuevo equipo gobernante trató de recuperar el apoyo empresarial, atemperando las medidas que generaron recelos (Figueroa, 1991).

2 La Comisión Política del Consejo de Estado estuvo formada por Jorge Serrano, como presidente, César Augusto Toledo Peñate, Oscar Clemente Marroquín y Carlos Armando Soto. Ellos elaboraron los anteproyectos de Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley de Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas.

2. Malos socios

A pesar de la resistencia empresarial a la política económica del gobierno de Ríos Montt, algunos hombres de negocios jugaron un papel protagónico en aquellos momentos y se enorgullecen de que, a diferencia de los salvadoreños, ellos nunca abandonaron el país (aunque sí colocaron en resguardo internacional sus capitales) y apoyaron al Ejército en la lucha antisubversiva.³

Ríos Montt, enfrentado a una aguda crisis económica, buscó el apoyo de las cámaras empresariales dándoles los ministerios de Economía y Agricultura.⁴ En marzo de 1982 el gobierno anunció el Plan Económico a Corto Plazo que ofrecía estímulos fiscales a la agroexportación, restricción de importaciones y reducción del déficit fiscal. En junio se estableció un fondo de garantía de créditos por Q10 millones, pero ante la falta de un compromiso empresarial de apoyo al gobierno, el Presidente actuó en más de una ocasión como portavoz de los resentimientos antiempresariales que existían en algunos círculos militares. En el mismo junio, Ríos Montt lanzó severas amenazas a los comerciantes para que no elevaran los precios.

La desconfianza se fue ahondando. En julio, en una reunión con unos 300 empresarios, los ministros de Economía y Agricultura tuvieron que asegurar que jamás se iniciaría una reforma agraria *al estilo de la que fue establecida en El Salvador*. El 5 de agosto Leonel Sisniega Otero, entonces importante dirigente del MLN junto a Federico Ortiz Sáenz de Tejada y Oscar Valdizón Valdez intentaron sin éxito un golpe de Estado.⁵

Las relaciones con el sector empresarial siguieron un curso de presiones y concesiones. En septiembre el gobierno modificó la Ley de Incentivos a la Exportación concediendo estímulos fiscales y permitiendo la importación de materia prima para la maquila. En octubre Ríos Montt, a través del ministro de Finanzas, coronel Leonardo Figueroa Villate, pretendió establecer, en acuerdo con catorce empresarios *representativos de la iniciativa privada*⁶ una propuesta de Acción Conjunta Concertada, que pedía a los hombres de negocios repatriar US\$ 300 millones hasta 1983, contribuir financieramente al plan para erradicar a la insurgencia con US\$ 195 millones (dinero que estaría bajo control de los empresarios) y aceptar el Decreto 502-82 sobre régimen de esencialidades e

-
- 3 Entre ellos están, por ejemplo, el agroexportador y comerciante Juan Maegli, Gustavo Anzueto Vielman y Teodoro Plocharsky. Por otro lado, algunos grandes y medianos finqueros aprovecharon la ola de violencia a su favor. A pedido de algunos propietarios fueron ocupadas por el Ejército varias fincas en Cahabón, Senahú, Panzós y Lanquín. De hecho, las fuerzas armadas desplegaron un amplio operativo militar en esos municipios desde octubre de 1982 hasta el segundo semestre de 1983, con cauda de varias poblaciones masacradas.
 - 4 En Economía nombró a Julio Matheu y en Agricultura a Otto Martínez, pero al morir éste en un accidente, lo sustituyó por Leopoldo Sandoval, un técnico que había sido director del INTA en 1968 y tenía publicado un libro reformista sobre el tema de la tierra.
 - 5 También fueron señalados de participar en el intento de golpe políticos que estuvieron vinculados al general Arana como Rigoberto Orellana, Gonzalo Orellana, Mario Sánchez, Rigoberto Robles, Enrique Guerra Aldana y Arnoldo Vargas.
 - 6 Entre ellos, Francisco Reyes, Miguel Torrebiarte, Juan Maegli, Mario Granai, Ernesto Rodríguez Briones, José Toledo y Carlos Springmuhl.

impuestos progresivos a las importaciones. A cambio, el gobierno se ofrecía a aumentar la lucha contrainsurgente, no impulsar una reforma agraria, conceder líneas de crédito especial, no generar más empleo estatal y poner a la venta las empresas públicas de ferrocarriles (FEGUA) y la naviera (FLOMERCA). Los empresarios rechazaron el *impuesto de guerra*, aunque las cámaras ofrecieron US\$ 60 millones. Tampoco se realizó la repatriación de capitales, ya que el gobierno no aceptó la devaluación monetaria que exigían los empresarios.

Además de la reforma tributaria, el tema de la tierra fue un permanente fantasma que rondó las críticas relaciones entre el gobierno y las cámaras empresariales. Cuando en noviembre de 1982 la AID entregó al ministro de Agricultura el estudio *Tierra y Trabajo en Guatemala* (o *libro verde*), proponiendo la creación de un banco de tierras, la continuación de los planes de colonización y la formación de empresas de desarrollo agrícola⁷ (AID, 1982), surgió una fuerte campaña de presión empresarial. En enero de 1983 Mario Sandoval Alarcón, líder histórico del MLN, envió un memorándum a Ríos Montt advirtiéndole contra los intentos de reforma agraria. El gobernante replicó acusando a los empresarios de estar pagando impuesto de guerra a la insurgencia y de negarse a mejorar los salarios en el campo.

Las diferencias por el tema de la tierra llevaron otra vez a una confrontación por la política económica. A principios de 1983 se anunció el arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar el desempeño de la economía. La misión constató que se habían reducido las pérdidas de reservas brutas de divisas, de US\$ 197.8 millones en 1981 a US\$10.9 millones en 1982, y que el déficit fiscal disminuyó del 7.5% del PIB en 1981 al 4.6% en 1982. El 20 de febrero Ríos Montt rechazó las demandas empresariales de erogación del control de cambios, acusando a los empresarios de tener fuera del país US\$ 1,000 millones. En marzo se confirmó un crédito del FMI por US\$ 125 millones a desembolsarse en 1983 y 1984, a cambio de un programa de ajuste estructural y la promoción del comercio exterior.

Días después, en su habitual alocución dominical del 17 de marzo, Ríos Montt anunció la implantación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), del 10%, a partir del 1 de julio, además de la disminución de impuestos a la exportación, la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y una revaluación de los impuestos aduaneros, entre otras medidas.

Esto precipitó el deterioro del clima político. Un grupo empresarial, vinculado a las cámaras de Comercio e Industria y a centros de investigación de la Universidad Francisco Marroquín, lanzó una campaña de ataque contra la política económica del gobierno militar. Jorge Serrano, presidente del Consejo de Estado, intentó evadir el golpe responsabilizando al presidente del Banco de Guatemala, Jorge González del Valle, y acusándolo de las medidas restrictivas en materia de divisas.

7 El nombre oficial de estas unidades fue Empresas Campesinas Asociativas (ECA), cuyo concepto fue retomado en la política agraria del gobierno de Vinicio Cerezo y en el propio Acuerdo sobre aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria firmado por el Gobierno de la República y la URNG el 6 de mayo de 1996, en el marco de la negociación política del conflicto armado.

Pero la promulgación del paquete tributario también introdujo divisiones en el mundo empresarial. Federico Polá, presidente de la Cámara de Comercio, se había mostrado de acuerdo con el IVA siempre que se suprimieran el impuesto sobre la renta, los de exportación y el del timbre fiscal (*El Gráfico*, 13/4/83). El Consejo Nacional del Algodón y la Asociación de Caficultores del Oriente decidieron salirse del CACIF, al mismo tiempo que la Cámara del Agro y ANACAFE se distanciaban de esa entidad. Pero, pasada la tormenta, el bloque empresarial se recompuso internamente. En junio renunció el ministro de Economía, Julio Matheu, y el Consejo de Estado, nombrado por el propio Ríos Montt, rechazó las medidas de reforma tributaria. Aún en esas condiciones, el 11 de julio el gobierno promulgó siete de los nueve decretos de la reforma fiscal. Para ese momento un grupo de empresarios ya apoyaban a Leonel Sisniega Otero y Danilo Roca, un político salido de las filas del PR, a fin de que, por medio de sus contactos con el Ejército y utilizando el telenoticiero *Aquí el Mundo*, de Mario David García, impulsaran un golpe de Estado. Éste, efectivamente, se produjo un mes después.

3. La nueva contrainsurgencia

Los jóvenes oficiales que apoyaron el golpe de Ríos Montt desplazaron en el Ejército al Alto Mando vinculado con el general Lucas García, a los integrados al Estado Mayor Presidencial y a varios miembros de la comunidad de inteligencia militar conocida como *La Cofradía*.⁸ En marzo de 1983 se reestructuró el EMG mediante el decreto 28-83 constituyéndose como Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) con una Inspectoría General, la sub Jefatura del Estado Mayor y las direcciones de Personal (D-1), Inteligencia (D-2), Operaciones (D-3), Logística (D-4) y Asuntos Civiles (D-5). Estas medidas también desplazaron a las promociones que estaban llegando a las últimas etapas de su carrera militar,

8 *La Cofradía* fue creada tras el asesinato en junio de 1979 del jefe del Estado Mayor General del Ejército, general David Cancinos. Su líder fue el general Manuel Antonio Callejas y Callejas, jefe de la inteligencia militar en tiempos de Lucas, y mantuvo un dominio completo sobre las fuerzas de seguridad. En efecto este grupo, desde la D-2, constituía un sistema de control del Ejército, de cada uno de los oficiales y del resto de los aparatos de seguridad. La comunidad consistía en una hermandad interna de la inteligencia a la que eran adheridos los elementos probados de la D-2 y la contrainteligencia que además pasaban por una suerte de ceremonia de iniciación. La adhesión era vitalicia. Los integrantes ocupaban puestos clave en el Estado Mayor General, en el Estado Mayor Presidencial, las aduanas y migración. Entre los miembros más notorios estaban los generales Francisco Ortega Menaldo, Carlos Enrique Pineda Carranza, Marco Antonio González Taracena y Héctor Montalván; los coroneles Romeo Guevara Reyes, César Augusto Cabrera, Juan Oliva Blanco, Salán Sánchez y el teniente coronel Juan Oliva Carrera. Todos ellos señalados por distintos organismos de tener responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de que con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, *la Cofradía* perdió su poder omnímodo, mantuvo una influencia notable sobre los aparatos de inteligencia hasta 1996. En 1988, Callejas fue rehabilitado en medio de una turbulencia política que amenazaba al gobierno de Vinicio Cerezo; con Callejas volvió buena parte de su equipo. A partir de mayo de 1993 y hasta principios de 1996 los cofrades sufrieron una serie de desplazamientos.

creando inquietud sobre su futuro; un elemento que también incidiría en el rápido desgaste del gobierno de Ríos Montt.

Sin embargo, este equipo militar fue capaz de aplicar una estrategia anti-subversiva integral que combinaba aspectos militares, políticos, psicosociales y antropológicos. Así lo reconocerían posteriormente:

El grado de pacificación alcanzado fue producto del estudio y análisis de los emplazamientos tácticos del enemigo y de su estrategia general, lo cual ha sido objeto de un seguimiento constante para determinar sus puntos fuertes y sus debilidades, así como para prevenir cualquier sorpresa que pudiera instrumentar...La labor de las unidades de asuntos civiles, se fundamenta en principios científicos y doctrinarios de la antropología y de la sociología misma, recurriendo al apoyo de las ciencias sociales para poder comprender las grandes discrepancias que en nuestra nacionalidad se agudizan de una aldea a otra, de una comunidad indígena a otra vecina y que, en conjunto, hacen un mosaico entreverado de pasiones, intereses, objetivos y procedimientos, los cuales habían sido muy bien explotados por los dirigentes terroristas para enmascarar los verdaderos objetivos y propósitos de su agresión. (Cnel. Enríquez, 1987.)



Volante del ejército invita a la población Ixil a la reconciliación. (Foto D. Bazy).

Durante 1982 el Ejército lanzó el Plan de Campaña Victoria 82 contra los frentes guerrilleros del noroccidente y norte del país involucrando a las dos terceras partes de sus efectivos. La ofensiva que se dirigió en particular contra la población civil (en su mayoría campesina-indígena), desarticuló las bases de apoyo social de los rebeldes, provocando decenas de miles de víctimas e inmensos desplazamientos de la población, tal como se documenta en el Tomo II de este Informe. Aunque la fuerza estratégica insurgente no fue en sí severamente golpeada, perdió su base de sustentación y se replegó a los puntos iniciales de implantación.

Posteriormente el Ejército condujo otras ofensivas dirigidas a los restantes frentes guerrilleros, que no tuvieron el mismo éxito, pero que junto con las iniciales significaron el restablecimiento del control y la autoridad estatal en la mayor parte del territorio nacional⁹ (Aguilera, 1986). Fue un esfuerzo totalizador, planificado social y geográficamente, orientado a modificar cualitativamente las características que hacen de la montaña el plano estratégico más propicio para la acumulación de fuerzas, tratando de romper el factor principal en el que se asienta la estrategia insurgente (Payeras, 1991).

Las ofensivas se caracterizaron por su brutalidad, buscando la eliminación del enemigo y de sus bases de apoyo. En el Anexo H del Plan de Campaña Victoria 82 el Ejército dice:

Existe subversión, porque un pequeño grupo de personas la apoyaron, y un gran número de personas la toleran, ya sea por temor o porque existen causas que la generan. La guerra se debe combatir en todos los campos... La mente de la población es el principal objetivo.

La estrategia militar propuesta buscaba impedir

El acceso de los subversivos a la población que constituye su base de Apoyo Político Social; rescatar a los individuos de las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) neutralizando o eliminando a quienes no se quieran integrar a la vida normal; aniquilar a los Comités Clandestinos Locales (CCL); y eliminar a las Unidades Militares Permanentes (UPM). La táctica se describió así: Engañarlos: la subversión debe combatirse con sus propios métodos y técnicas (siempre debe tenerse en ejecución un plan de desinformación); encontrarlos: el mayor problema siempre fue encontrar a las unidades militares guerrilleras, las que por sus sistemas propios de combatir, permanecen escondidas (utilice inteligencia local y saturar el área de

9 Es importante el énfasis en la misión que el Ejército le confería a estas operaciones militares: *Conducirán operaciones de seguridad, desarrollo, contrasubversivas y de guerra ideológica... una vez conseguida la seguridad, el Ejército penetra en la población con el incentivo del desarrollo, para corregir las vulnerabilidades que presentó nuestra sociedad por el abandono que ha vivido y que la subversión ha explotado en forma muy eficiente, pues ésta tenía ya doce años de buen trabajo político en la región, por lo que se hacía necesario contrarrestarlo en la misma forma y por eso fue que entramos en la era de las operaciones ideológicas militares y desarrollistas que han dado hasta ahora muy buen resultado (Ejército de Guatemala, 1985).*

patrullas); atacarlos: cuando haya logrado encontrar una fuerza guerrillera, mantenga el contacto a toda costa e informe inmediatamente para que la unidad superior apoye la operación y se logre la aniquilación del enemigo localizado; aniquilarlos: la destrucción de las fuerzas guerrilleras es la misión. El control del terreno es un medio para cumplir esta misión, pero nunca un fin u objetivo final (Ejército de Guatemala, EMG, 1982).

La estrategia reflejada en los planes de campaña, además de las operaciones contrainsurgentes,¹⁰ comprendía otras de impacto en la población tales como:

- La presencia militar en todo el país *para proporcionar seguridad y confianza a la población*, creando nuevas zonas militares en todos los departamentos y haciendo coincidir las jurisdicciones militares con las administrativas, en un concepto de regionalización.
- *Brindar protección a las fuentes de producción* para prevenir el sabotaje en las fincas de algodón y caña de azúcar, durante la época de la cosecha.
- El control de los trabajadores extraordinarios que del altiplano se trasladaban a la costa sur.
- La conducción conjunta de operaciones militares y operaciones psicológicas.

El concepto de contrainsurgencia desarrollista adquirió una notable importancia en el discurso oficial, llegando incluso a sobreponerse al discurso anticomunista. Así, uno de los documentos tácticos del Ejército afirmaba:

Se ha comprobado que sólo con operaciones militares o policiales no se erradica definitivamente la acción subversiva... por estas razones, no sólo debemos atacar a la subversión en su brazo armado, sino concurrentemente debemos combatirla en sus orígenes para evitar que las deficiencias existentes en el desarrollo socioeconómico sean la bandera que utilice el comunismo para la obtención del poder. (Ejército de Guatemala, 1982b).

Sin embargo, Ricardo Falla escribe:

El factor psicosocial, definido por el Ejército en marzo de 1982 como uno de los cuatro elementos necesarios para el logro de la pacificación, reconocía la necesidad de integración de los grupos indígenas a la nacionalidad

10 Las modalidades operativas de campaña del Ejército en aquella época contemplaban estos tipos de unidades:

- Grupo (también llamado escuadra): con 20-25 efectivos al mando de un cabo o especialista; armados con fusiles Galil y granadas personales ARGESS.
- Pelotón: 40-50 efectivos al mando de un subteniente; provistos de lanzagranadas M-79 con 16 granadas.
- Compañía: 120-160 efectivos al mando de un teniente; dotados de ametralladora MAG o M-60 de 7.62mm y un mortero de 60mm.

Los oficiales de Estado Mayor o de Plana Mayor de Campaña eran tenientes coroneles, mayores y capitanes. El comandante de zona militar normalmente tenía el rango de coronel. En sus operaciones el Ejército se desplazaba a nivel de compañía, apoyado por cañones de 57.75mm. y 105mm. Contaba con medios aéreos como: aviones A-37B, PC-7 Pilatus y Aravá; helicópteros: UH-1H Huey, Bell Jet Ranger, Iroquí; avionetas: Cessna y Piper.

guatemalteca. Pero la respuesta que dio el Ejército al enfrentamiento no fue psicosocial, sino militar exclusivamente. Esta respuesta militar, por la deficiencia del elemento psicosocial, fue precisamente una discriminación que llegó al extremo, es decir a la muerte del despreciado e infravalorado (Falla, 1990).

Uno de los tópicos que el Ejército usaría posteriormente fue la necesidad, en aras de salvaguardar la supervivencia del Estado, de quitar el agua al pez. Pero este discurso se contradijo con las mismas orientaciones tácticas, que consideraban a la población de extensas áreas como parte de los objetivos militares. Así lo refleja el siguiente texto:

Las organizaciones terroristas han basado su estrategia de guerra en el principio de que `el pez es al agua, como la población fue a la guerrilla` (sic). Los delincuentes terroristas enarbolan sus banderas para ofrecer la tierra de los ricos a los pobres, la de los ladinos para los indígenas; aunando a esto la creencia de algunos sacerdotes influenciados por la Teología de la Liberación. La situación fue tal que poblaciones enteras se alzaron en armas y muchas se fueron a las montañas, engañadas, con esperanza de cambios y con la idea de lograr mejores perspectivas de vida al ganar la guerra revolucionaria. El tiempo fue transcurriendo y el involucramiento de la población con la subversión fue de tal grado que ya no pudieron regresar a sus lugares de origen (Ejército de Guatemala, 1990).

También varios declarantes de REMHI, que estuvieron vinculados al Ejército, insisten en que las masacres que se produjeron en estas ofensivas no fueron actos incontrolados de las tropas. Tanto la ofensiva de octubre de 1981 en Chimaltenango, que fue dirigida personalmente por el general Benedicto Lucas, jefe del EMG, como el resto de ofensivas, tuvieron este mismo grado de centralización.¹¹ Como analizaría posteriormente el equipo de trabajo de la antropóloga Myrna Mack:

A través de testimonios de supervivientes y entrevistas con personas que no fueron víctimas directas de las masacres, se ha logrado establecer que habían criterios para llevarlas a cabo... En la planificación y ejecución de las masacres se contempló el factor sorpresa. Los ejecutores llegaron en horas o días en que la población no habría esperado un acontecimiento de carácter fulminante y desgarrador: Las horas de la madrugada; rutas inusuales; días como los domingos que significan concentración de personas de uno o varios poblados para realizar distintas actividades, fueron elementos tomados en cuenta para rodear a la población. La búsqueda de determinadas personas; la concentración general de la población en un punto; la clasificación y concentración según sexo en determinadas instalaciones (hombres en el juzgado y mujeres en la iglesia, por ejemplo); la matanza misma; la violación de mujeres; la quema de la aldea después de

11 Una cronología de las masacres cometidas entre 1980 y 1983 se presenta como anexo del capítulo primero del Tomo II, *Mecanismos del horror*, de este informe.

la masacre; la estancia relativamente corta de los ejecutores y otros rasgos más, han aparecido como constantes en los relatos (Avancso, 1992).

En aquella época Allan Nairn publicó un reportaje en *New Republic* que ilustraba sobre el terreno esa planificación.

La planificación de las masacres

El sargento Miguel Raymundo, que estaba custodiando (en Nebaj en abril de 1982) a un grupo de 161 sospechosos de colaborar con la guerrilla (el cual incluía a 79 niños y 42 mujeres), dijo: 'El problema fue que casi toda la gente de la aldea fue guerrillera'. De acuerdo a los archivos de este campamento militar, estos campesinos habían sido recogidos en acciones del Ejército en las aldeas de Vijolom, Salquil Grande, Tujolom, Parramós Chiquito, Palob, Vixaj, Quejchis y Xepium. El sargento José Ángel, que comanda una unidad de 40 hombres, con base en La Perla, explica el procedimiento: 'Antes de ir a la aldea, hablamos con los soldados acerca de lo que deben hacer ellos y qué no deben hacer. Todos ellos lo discuten, por lo tanto van preparados. Primero lo coordinamos, nos preguntamos, '¿cuál es nuestra misión?'.

De acuerdo a José Ángel, 'una patrulla entra al pueblo desde un lado, y por el otro entran otras patrullas. Nosotros entramos antes del amanecer porque todo el mundo está durmiendo. Si viniéramos de día se asustarían, verían que fue el Ejército y huirían, porque saben que el Ejército viene por ellos'. El Ejército sabe qué hacer frente a tal comportamiento... Miguel Raymundo citó tres casos en los cuales la población de aldeas huyó en masa: Todas las aldeas de estos alrededores como Salquil, Palop o aquí en Sumal, tienen un vigilante con un silbato, hay un aldeano que vigila el camino. Si los soldados vienen él toca el silbato ¡fue una señal, todos salen corriendo!'.

Para los soldados, el matar civiles desarmados que están huyendo se ha convertido en una rutina. Yo le pregunté a Felipe, el cabo de Nebaj, que cómo reaccionan los habitantes cuando llegaron las tropas.

—Ellos huyen de sus casas. Huyen hacia la montaña.

—¿Qué hacen ustedes?

—Capturamos a algunos vivos, y otros no los podemos capturar vivos. Cuando ellos salen corriendo hacia la montaña, nos obligan a matarlos.

—¿Por qué?

—Porque ellos pueden ser guerrilleros. Si ellos no corren, el Ejército no los va a matar, más bien los protege...

—Entre aquellos que ustedes tienen que matar, ¿qué clase de gente es: hombres o mujeres?

—Algunas veces hombres, otras veces mujeres.

—¿En qué aldeas ha sucedido eso?

—Ha sucedido en una serie de aldeas. En Acul, Salquil, Sumal Chiquito, Sumal Grande.

—En esas aldeas, ¿cuánta gente mataron ustedes?

—No muchas, unas cuantas.

—¿Más de diez, más de veinte, más de cien?

—Oh, no. Cerca de veinte.

—¿En cada aldea?

—Sí, por supuesto. Eso no fue mucho. Muchos más de esos fueron capturados vivos.

De acuerdo al relato del soldado y sobrevivientes, el Ejército sigue un procedimiento paso a paso después de penetrar en una aldea. Primero, explicó el sargento José Ángel, 'nosotros entramos a la aldea y sacamos a la gente de sus casas y registramos las casas'. Entre los artículos que los soldados buscan por ser sospechosos fueron grandes cantidades de granos o frijoles. El Ejército toma lo que puede usar y quema el resto. Después, dice él, 'se les pregunta a los informadores quienes son en esa aldea los que están haciendo cosas fuera de la ley, y así es como usted logró identificar a los colaboradores de la guerrilla. Se les interroga, se les hace decir la verdad. ¿Con quién han estado hablando? ¿Quiénes han estado llegando a la aldea a hablar con ellos?. Los interrogatorios generalmente se hacen en la plaza de la aldea, delante de toda la población.' Le pregunto a José Ángel cómo interroga a la gente. Él me explica: 'Los golpeo para hacerles decir la verdad. Les causo daño'.

—¿Con qué métodos?

—Con este, así (enrolla sus manos alrededor del cuello e hizo un sonido como de estarse ahogando). Más o menos colgándoles.

—¿Con qué?.

—Con un lazo. Cada soldado tiene un lazo.

Algunos oficiales del Ejército dicen que aunque los helicópteros fueron ampliamente usados para bombardeos, fueron de una mayor importancia táctica para entradas por sorpresa. 'Cuando entras a pie, dice el teniente César Bonilla, oficial a cargo de la reubicación de los campesinos en el helipuerto de Nebaj, ellos te ven llegar, pero desde el aire les puedes atacar por sorpresa', e hizo con el fusil el sonido de una ametralladora. El mayor Tito Arias, comandante de la base de Nebaj, dijo a mediados de septiembre, que dos mil personas del área de Sumal Grande han huido a las montañas y que están siendo perseguidas por patrullas terrestres y por helicópteros. El sargento José Ángel dijo que frecuentemente su patrulla hace ese tipo de operaciones. Le pregunté al sargento qué hacen sus tropas cuando encontraban refugiados.

—Algunas veces no los encontramos. Los vemos pero no los podemos agarrar.

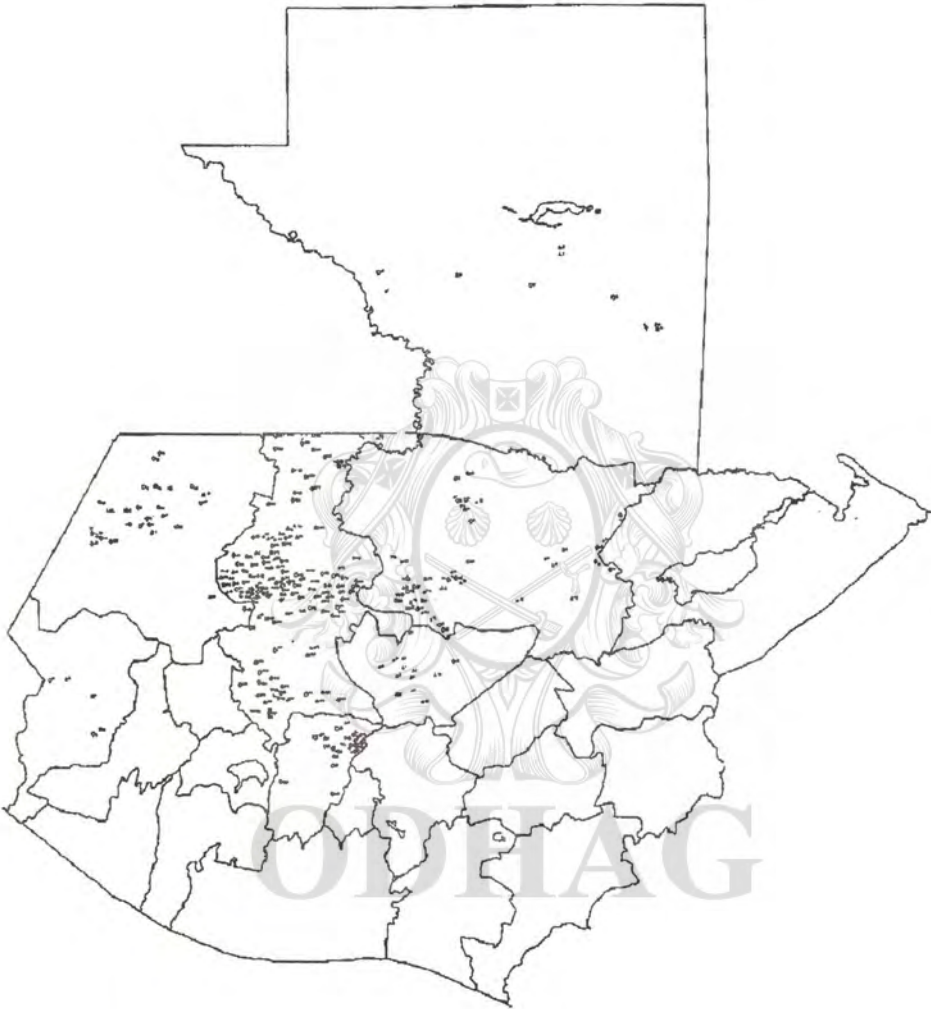
—Y si los encuentran ¿Qué hacen ustedes?.

—Oh, los matamos.

—¿Fueron poca gente, o aldeas enteras?

—No, aldeas enteras. Cuando nosotros entramos en las aldeas, matamos a algunos, pero el resto sale huyendo (Nairn, 1983).

Mapa No. 1 Masacres 1980-1983



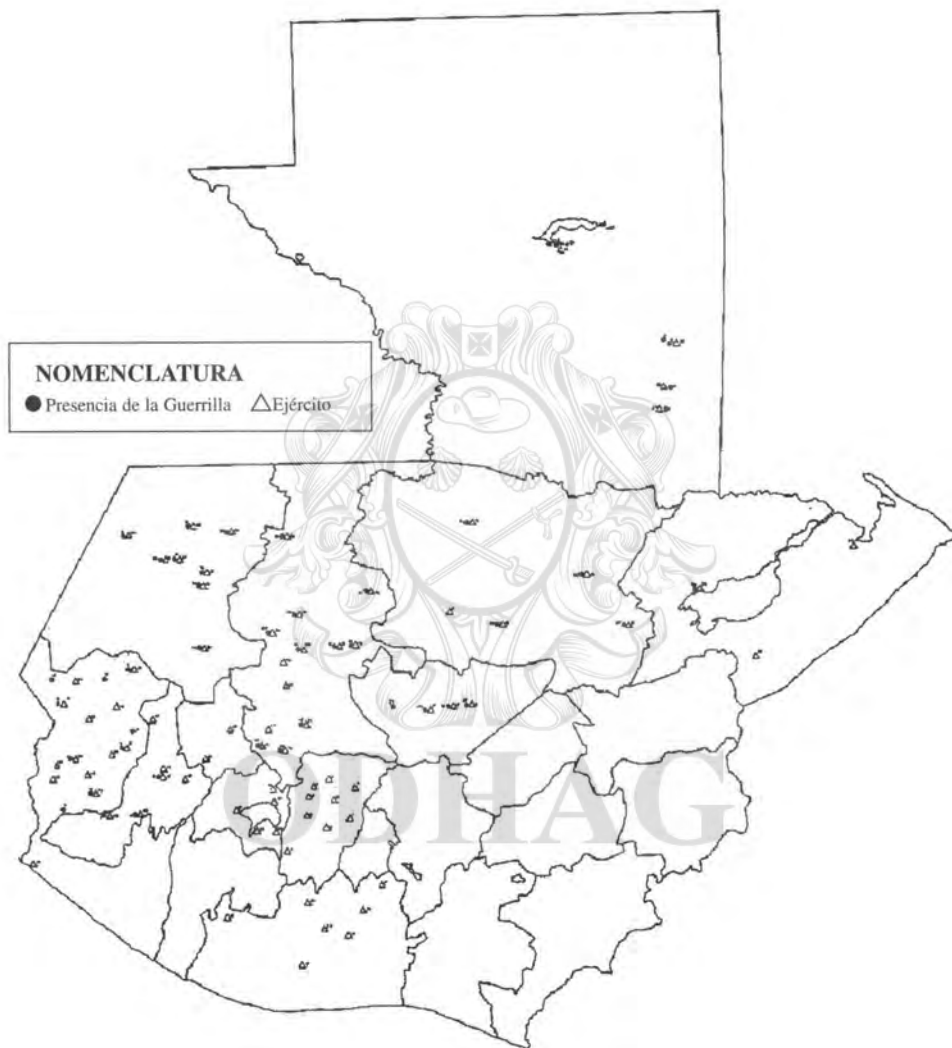
FUENTE: Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala, 1998.

Masacre.

Es un hecho complejo, en donde una comunidad aldea o pueblo es total o parcialmente destruido, sus siembras y viviendas quemadas y los animales y pertenencias robadas. Suceden distintos patrones de violación en el mismo hecho (mutilación de cadáveres, señales de tortura, violaciones sexuales, desapariciones, etc.). El número de víctimas puede ser elevado, pero no siempre, porque se incluyen comunidades que fueron destruidas cuando sus habitantes habían salido a refugiarse en las montañas para sobrevivir.

Mapa No. 2

Comunidades con presencia de Organizaciones Guerrilleras y del Ejército 1980-1983



FUENTE: Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala, 1998.

Presencia del Ejército.

Se refiere a la militarización del territorio y de la población a través de la presencia directa del ejército en las comunidades, con el establecimiento de destacamentos militares permanentes, temporales o móviles.

Presencia de la Guerrilla.

Se refiere a la militarización del territorio y de la población con presencia directa de las organizaciones guerrilleras en las comunidades, a través de organizaciones político-militar, campamentos guerrilleros, charlas esporádicas a la población o zonas de paso.

Mapa No. 3

Comunidades Organizadas en Patrullas de Autodefensa Civil -PAC- y con presencia del Ejército 1980-1983



FUENTE: Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala, 1998.

Presencia del Ejército.

Se refiere a la militarización del territorio y de la población a través de la presencia directa del ejército en las comunidades, con el establecimiento de destacamentos militares permanentes, temporales o móviles.

Presencia de Autodefensa Civil -PAC-

Se refiere a la militarización control de la población y el territorio a través de la organización de grupos civiles comunitarios que cumplen funciones de grupos paramilitares; siendo en un primer momento su función principal la "ofensiva antiguerrillera" y con el tiempo constituyéndose en el nuevo poder local comunitario.

4. Las ofensivas contrainsurgentes 1982-83¹²

En el área Ixil

Tal vez la ofensiva de mayor valor estratégico para el Ejército fue la que desencadenó contra el área Ixil, la zona donde en diciembre de 1980 el EGP había constituido su primera columna militar regular (*19 de Enero*), y donde existían mejores condiciones para que esta organización pudiera declarar un territorio liberado y exigir reconocimiento internacional como parte beligerante en una guerra interna. Apenas percibió el Ejército el alcance estratégico de esta región, reforzó la Zona Militar de Huehuetenango y la Zona Militar de El Quiché, y mantuvo a las unidades militares en una permanente campaña ofensiva.

Realmente la capacidad guerrillera estaba lejos de poder alcanzar los objetivos que el Ejército le atribuía.



Una trampa guerrillera en el norte de Chimaltenango. (Foto D. Bazy).

12 Las campañas militares de 1980 y 1981 están reseñadas en el Capítulo tercero, segunda parte: *La época de Lucas*.

Nuestro error había sido formar una columna a expensas de la mayor parte de los oficiales, combatientes y armas con que contábamos en el frente de la sierra (Ixil), y en haber enviado a esta fuerza a combatir en la selva. Durante semanas cruciales (en diciembre de 1980), el frente serrano quedó virtualmente inerte y el enemigo aprovechó las circunstancias. Pocos días después de que partiera la columna hacia el norte, el Ejército lanzó en el área Ixil una feroz campaña de exterminio que diezmó muchas de las bases de apoyo y puso a la defensiva a nuestras escasas fuerzas (Payeras, 1991).

Pero la masiva adhesión de la población Ixil a la causa guerrillera hacía temer cualquier levantamiento imprevisible. Por tanto el Ejército aprovechó en 1981 la llegada del verano para quemar aldeas alejadas de las cabeceras municipales, y en abril de 1981 comenzó a crear las primeras patrullas civiles en Uspantán, que luego extendería a lo largo de la frontera quiché con la zona Ixil (la barrera natural del Río Negro) y en el área ladina de Huehuetenango (Chiantla y Barillas), con una clara intencionalidad de aprovechar las contradicciones étnicas para sus propósitos contrainsurgentes.

Por su parte la guerrilla realizó el 28 junio un ataque de hostigamiento a gran escala contra el cuartel de Cotzal donde había una compañía de kaibiles. Según fuentes rebeldes, después de 20 minutos de enfrentamiento, murieron tres oficiales, 40 soldados y se registraron 30 heridos. Además la guerrilla mató a Juan Ramos Chamay y Domingo Rodríguez Chamay, acusados de orejas. En las siguientes semanas, siguiendo una táctica que ya había venido aplicando en los dos años anteriores, el Ejército ejecutó a 60 personas de Chajul, al igual que el 16 de abril había asesinado a otras 68 personas en Cocop, Nebaj, después de una emboscada de la guerrilla (Stoll, 1994). Esta acción guerrillera había dado inicio a una campaña de toma de poblaciones, emboscadas y hostigamientos a puestos de avanzada del Ejército.

El Ejército -que en 1981 tenía desplegada una Brigada con el puesto de mando en Nebaj, una compañía en Chajul, otra en Cotzal y otra más en Nebaj, además de dos pelotones en las fincas La Perla, dos en La Taña, uno en San Francisco, y otro en La Panchita, los lugares más remotos del área- inició inmediatamente acciones contra aquellas poblaciones que mostraban mayor apoyo a la guerrilla, y de *tierra arrasada* en las comunidades más próximas a las zonas de refugio de la guerrilla.

De este modo, en septiembre se registraron masacres en Xeucalbitz y Sumal, Nebaj, donde mataron a 35 personas y quemaron todo, decapitando públicamente a Gerónimo Pérez, el primer maestro bilingüe asesinado en Sumal Chiquito. La gente sobreviviente salió caminando para Sumal Grande. Ese mismo mes el Ejército realizó masacres de diez indígenas en Tzalbal, de 20 más en Palop y arrasó la aldea Río Azul. Nuevamente, el 24 octubre de 1981, 60 kaibiles llegaron a Palop y Kekchip y quemaron las casas. La gente se refugió en la montaña.

El 13 de diciembre de 1981 la guerrilla asesinó en la plaza de Nebaj a Sebastián Guzmán, Principal de Principales (Le Bot, 1996). Al día siguiente desató la mayor ofensiva contra el destacamento de Nebaj, que sólo cesó

cuando llegaron refuerzos y el propio general Benedicto Lucas en un helicóptero y amenazó con matar a toda la población. A partir de la visita de Lucas el 14 de diciembre se comenzó a organizar la patrulla civil con ladinos encuadrados en varios escuadrones, cada uno de 25 hombres, encargados de asesinar a los líderes opositores, dos o tres por noche, obligando a que los patrulleros se mancharan con sangre, y asesinando a los familiares si no hallaban a los sospechosos (Stoll, 1994).

Al momento de producirse el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, el Ejército calculaba que las Fuerza Irregulares Locales (FIL) en el área estaban integradas por 50,000 personas y que una población de 14,000 apoyaba al EGP en las montañas. Se inició entonces la campaña de *tierra arrasada*, que se llevó a cabo por los destacamentos de Nebaj, Cotzal, Chajul, Juil, Chel, La Perla y San Francisco, apoyados por los de Aguacatán, Sacapulas, Cunén y Uspantán. El destacamento de Nebaj arrasó las zonas de Acul, Tzabal, Salquil Grande, Sumal Grande y Sumal Chiquito, así como las aldeas próximas a Nebaj. Los destacamentos de Cotzal, Cunén, Uspantán y San Francisco destruyeron el noroeste de Cotzal; y el destacamento de Chajul arrasó las aldeas del noroeste del municipio. El cuerpo de paracaidistas acampado en la finca La Perla y las tropas kaibiles de Chel destruyeron el 3 de abril de 1982 la zona Chel-Amajchel.

Precisamente en ese momento, la dirección de la guerrilla atravesaba una profunda crisis:

Grupos de miembros de la DN (Dirección Nacional), que indistintamente convergieron en frentes de la montaña, en ciudades o en el exterior, funcionaron como núcleos autónomos de la DN, sin centralización, sin coordinación, muchas veces sin información entre sí. En febrero de 1982, un núcleo de la Dirección formado por el Comandante en Jefe y los miembros de la dirección de los Frentes Ché Guevara y Ho Chi Minh convocaron una reunión de la DN en la montaña. De junio a septiembre de 1982 el Comandante Benedicto (Mario Payeras) convocó una reunión ampliada de la DN del EGP. El grupo de la DN que estaba en la montaña desconoció esta reunión. Entre los acuerdos que se tomaron en la reunión presidida por Benedicto estaban responsabilizar a Camilo y Milton para trasladar los acuerdos al interior, así como un gran equipo militar destinados a los frentes del norte. Hasta noviembre de 1982 se restablece la dirección del EGP (EGP, 1984).

Por tanto, la mayoría de las acciones que se registraron como respuesta a las ofensivas militares, consistieron en hostigamientos y alguna emboscada, acciones más bien de contención o defensivas, sin que volvieran a repetirse los ambiciosos ataques del año anterior.

Mapa No. 4 Masacres en El Quiché 1980-1983



NOMENCLATURA

- ▲ Ejército Paramilitares
- Guerrilla
- Ejército
- ▽ Ejército Guerrilla
- ◇ Paramilitares

FUENTE: Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala, 1998.

NEBAJ

1. Cabecera Municipal
2. Acul
3. Bicalamá
4. Canaquil
5. Cocob
6. Chabuc, Xoloché, Tzalbal
7. Pexla Grande Pulay
8. Sacsiguan
9. Salquil Grande
10. Xecax
11. Xeiqium
12. Sumal Chiquito
13. Palob
14. Chortiz
15. Chuatuj
16. Bisan
17. Xeucaibitz
18. Vijolom
19. Ixtupil
20. Bibitz
21. Río Azúl
22. Cotzol
23. Parramos, Salquil
24. Tzalbal
25. Ramas Chiquitas
26. Xoloché
27. Xecoco, Tzalbal
28. Xexocom
29. Xonca
30. Santa Maria
31. Pulay
32. Sumal
33. Xeucaibitz

34. Bipecbalam
35. Bictoz

CHAJUL

1. Cabecera Municipal
2. Juá
3. Juil
4. Islá
5. San José Xiv
6. Shernal
7. Ilom
8. La Estrella Polar
9. Finca Covaadonga
10. Santa Clara

7. Finca San Francisco
8. Santa Avelina
9. Xeputul
10. Finca Buenos Aires

CUNEN

73. Cabecera Municipal
74. Xemanzana
75. Chituj

USPANTAN

76. El Caracol
77. Macalajau
78. Lancetillo
79. La Taña
80. San Miguel
81. Chimef
82. El Desengañado
83. Guacamayas
84. Agua Fría
85. La Laguna Danta
86. Rosario Monte
87. Llano Grande, Chicamán

SACAPULAS

88. Magdalena La Abundancia
89. Parraxut
90. Tzunumul

CHICHE

91. Cucabaj

92. La Puerta
93. Tultiche
94. Carrizal
95. Chupoj

SANTA CRUZ DEL QUICHE

96. Cucabaj, Lemoa
97. Chicabracan, Lemoa
98. Parnesabal
99. La Estancia
100. Panajxit

SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

10. Cantón Stanchoj

CHICHICANATE-NANGO

102. Cantón Patzibal
103. Chieua
104. Camanchaj
105. Chupol

SAN ANDRES SAJABAJA

106. Cantón de San Andrés Sajcabajá
107. Chilil

SAN PEDRO JOCOPILAS

108. Xoljuyub
109. Chiuucur

ZACUALPA

110. Piedras Blancas

111. Chixocol
112. San Antonio Sinache

SAN ANTONIO ILOTENANGO

113. Cantón Chikotón

JOYABAJ

114. Cantón Xeabaj

IXCAN

115. Trinitaria
116. Santa Clara
117. El Quetzal
118. San Alfonso
119. Kaibil Balam
120. Concepción
121. Cuarto Pueblo
122. Xalbal
123. Piedras Blancas
124. Chinatzaja
125. San Juan Ixcán
126. Santo Tomás
127. Santa Maria Tzejá

Txacal Tzé (Chacalté) (Una masacre de la guerrilla)

El contexto

En diciembre de 1981 aparecieron los primeros intentos de PAC en Uspantán. En ese mismo mes y en enero de 1982 la guerrilla atacó repetidamente la cabecera de Cotzal. En marzo se inauguró la primera aldea modelo Txacal Tze, formada por católicos carismáticos y evangélicos, y empezaron a actuar como fuerzas paramilitares. Eso provocó un éxodo de la población hacia los pueblos y las montañas, quedando abandonadas un gran número de aldeas.

La población de Txacal Tze dio grandes problemas a la guerrilla. Es cuando se empieza a pensar en acciones directas contra la aldea por parte de la guerrilla. Se tiene la idea que es una aldea *reaccionaria*. La dirección del frente (Ho Chi Minh) y la jefatura militar empiezan a planificar qué hacer, qué tipo de acción emprender que pudiera ser ejemplificante para todas las comunidades donde el Ejército hubiera implantado una mentalidad *reaccionaria* contra la guerrilla.

A principios de mayo se atrapó a un hombre de la aldea, de unos 20 ó 25 años. Se le trasladó a Secoch (Río Bravo), se le sometió a interrogatorio, y dio información sobre el tipo de armamento que había en la aldea. Se le propuso que hablara bajo la condición de guardar su vida; sin embargo, acabado el interrogatorio, se le ahorcó.

Durante todo mayo se enviaron comandos de reconocimiento a la aldea y sus alrededores, y una semana antes del operativo se concentraron las fuerzas en Secoch. En total eran unas 300 personas, incluyendo unas 100 Fuerza Irregulares Locales (FIL) y 150 de fuerzas regulares, el resto era personal de apoyo (correos, logística, abastos, cocineros). Se hicieron simulaciones de cómo tomar la aldea.

Los mandos

Las personas que formaban el mando militar del frente guerrillero eran: el capitán *Sandor*, que en 1985 fue expulsado por indisciplina; el capitán *Guayo* (que utiliza el nombre legal de Juan Lázaro Medina, pero su verdadero nombre es Pedro Marroquín), segundo en el mando y que desmovilizado en 1997; el capitán *Alfredo* (que se desmovilizó con el nombre de *Randal*); el capitán *Álvaro*, primer responsable (se retiró del EGP en 1988); el teniente *Oscar*, que fue expulsado del EGP en 1991, y el capitán *Carlos*, que desde 1983 se pasó con el Ejército.

En el mando político estaban el comisario político del frente, Rafael Enrique Sigüenza Vielman; *Mario*, un achí muerto de cáncer en Cuba; *Evaristo*, que desde 1993 está en México; *Guevara*; *Guayo*, que servía de enlace en las dos estructuras.

Cuando había que tomar decisiones de combates con el Ejército, era la Plana Mayor quien definía qué acciones se realizaban y cómo. En el caso de

la masacre de Txacal Tze la decisión primero se tomó a nivel militar y luego se discutió a nivel político. Parece que hubo mucha incertidumbre, reserva y recelo respecto de lo justo del operativo, pero nadie rechazó su participación. *Álvaro* y *Óscar* asistieron al operativo, mientras el resto de la Plana Mayor, *Alfredo*, *Sandor*, *Carlos* y *Guayo* se quedaron en la orilla. Fueron *Álvaro* y *Óscar* quienes lo iniciaron, como los responsables máximos. Eran dos unidades comando y cuatro pelotones. Los jefes de las unidades eran: *Iván Saquij*, que desapareció en 1984; *Roque* o *Juan José*, quien en 1983 se fue con el Ejército y en 1984 murió en combate contra la guerrilla. Los responsables de los pelotones eran: *Castillo*, *Oscar*, *Alvaro* y *Salomón*. El jefe del operativo era *Castillo* (de apellido Lima), cotzaleño, que fue muerto por el Ejército en combate en febrero de 1983. Los principales torturadores de gente eran *Roque*, *Iván*, *Patricio*, hermano de *Roque*, que desde 1983 está como G-2 en el área Ixil.

La ejecución

Las instrucciones finales se dieron en Secoch, durante la mañana del 13 de junio de 1982. Al mediodía se levantó la tropa y a través de senderos y con todas las medidas de seguridad avanzaron hasta un área a dos horas de camino de Txacal Tzé. Ahí durmieron. A las tres de la mañana del 14 de junio se dio la orden de levantada. Se hizo la distribución por pelotón y unidades. A las cinco de la mañana ya estaban cercadas todas las vías de acceso a la aldea. Para esas horas todos sabían a lo que iban. La orden era: todos los mayores de diez años deben morir. Se pensaba que había mucho armamento concentrado en la aldea y que hasta los niños tenían armas.

A los primeros disparos la gente fue sorprendida. La guerrilla les decía: si nos decís donde está el armamento te respetamos la vida. Al principio la gente respondió agresivamente con palos, machetes y piedras. Pero al oír los disparos les entró miedo. En un momento en que los disparos dejaron de sonar, una mujer salió de su casa. Los guerrilleros le dijeron: portate bien y no te haremos nada. La mujer llevaba un cuchillo y agredió a un guerrillero. Entonces los guerrilleros la torturaron, la patearon, la quemaron con cigarros y la violaron. Finalmente la mataron. Esto lo hicieron Patricio e Iván, quien la violó.

Venía un anciano de unos 80 años y dijo: no me maten. Los guerrilleros le dijeron: de acuerdo, pero al acercarse el anciano les tiró una granada. Los guerrilleros lo patearon, lo culatearon y finalmente lo descuartizaron. A un hombre que decían que era jefe reaccionario y que tenía armas en su casa, le prendieron fuego a su casa con él adentro.

La consigna era: no tiren, a puro machetazos muchá... Quemaron todas las casas. En el centro de la aldea quedaba una escuela que había sido transformada en una fortificación. Conforme el ataque avanzaba, la población más y mejor armada fue tomando posiciones en la escuela, y ahí se concentraron los reaccionarios. La guerrilla intentó acercarse, pero fueron atacados. Allí es donde se dio la mayor parte de bajas de la guerrilla. Los mandos decidieron reorganizarse y se replegaron. Entonces decidieron romper

el techo de la escuela, que era muy resistente, con piedras grandes. Una vez roto, lanzaron granadas y bombas al interior, y se dejaron de escuchar los disparos.

Una mujer joven le dijo a un guerrillero: no me mates y me vuelvo tu mujer. El guerrillero le golpeó la cabeza y la mató. Los más eufóricos y emborrachados eran los irregulares (FIL), que decían: con la guerrilla no se juega, hay que respetar la revolución.

La guerrilla recogió 20 granadas de mano, unas 3 minas; no se encontraron armas de guerra, sí habían escopetas calibre 12 y 22. No más de 25 ó 30 armas. Parece que sí encontraron en el depósito un fusil M-1. El ataque duró cuatro horas, aproximadamente. Terminó alrededor de las nueve de la mañana. Un guerrillero que participó y no quiere decir su nombre confiesa haber contado 125 muertos. En la aldea no quedó nada. Las FIL quemaron las casas, y la ropa en buen estado se la llevaron. Se llevaron el ganado y el maíz, y se repartió.

Después de la masacre

En el frente guerrillero no había Dirección Nacional del EGP. El EGP estaba sumido en una de sus crisis más profundas. Milton y Carlos (Fernando Hoyos) se habían ido del frente en enero de 1982. Carlos regresó en marzo a dar una vuelta y murió en julio, antes que sucediera la masacre. La mayoría de la Dirección estaba en México o en reuniones.

Nadie fue sancionado por la Dirección. Durante los primeros días hubo una cierta euforia colectiva en el frente, tanto en la población como en las unidades militares. Había la sensación de que habían cobrado lo que les debían. En agosto se realizó una asamblea que duró una semana. Se discutió la necesidad de haber hecho esa masacre y sus consecuencias. Rafael Sigüenza dijo que había sido una carnicería y que no estaba justificada. Pero de ahí surgió un pacto de no contar a nadie lo sucedido y de no reivindicar la acción. *Todos se volvieron mudos.* Hubo gente, no muchos, que se atrevieron a decir: *se pasaron*, y a cuestionar las justificaciones de la masacre. Los días posteriores algunos guerrilleros empezaron a tener contradicciones por lo sucedido y siguieron los cuestionamientos de que probablemente no fue lo mejor. IC 110, 091, 220 y 096, Txacal Tzé, 1982.

Por el contrario el Ejército, usando tropas especiales de paracaidistas y kaibiles, lanzó una verdadera campaña de *tierra arrasada* contra determinadas zonas del corredor entre las zonas Ixil e Ixcán (retaguardia de la guerrilla) y contra las áreas inaccesibles donde se asentaban las unidades militares del EGP en territorio Ixil. Por ejemplo, el 23 de marzo, 150 soldados llegaron a la finca La Estrella Polar, Chajul, y mataron a 150 hombres, 50 de ellos de Xaxmaxán. El 3 de abril, 100 soldados masacraron en la aldea de Chel, Chajul, a 92 personas y regresaron el 22, junto a patrulleros, para matar a otras 45 personas. En esos días se registraron masacres en Juá (trece personas), Bisich, Covadonga (34 personas), Caxixlá (diez personas) e Ilon (110 personas) (Avanco, 1992).

Estas acciones del Ejército fueron correspondidas por crímenes de la guerrilla contra aquella población acusada de colaborar con el Ejército. Por ejemplo, el 18 de mayo, un grupo armado pidió ayuda a los patrulleros de Batzul, en Chajul, para enfrentar a la guerrilla y cuando acudieron los ametrallaron muriendo 14 de ellos. Ese día también supuestos guerrilleros vestidos de soldados asesinaron a siete patrulleros en la aldea de Chichel (Stoll, 1994). El 6 de junio la guerrilla bajó de un bus a 13 líderes de la patrulla civil de Cotzal y a sus esposas, los mató uno a uno de un balazo en la cabeza y ordenó al conductor del bus pasar sobre sus cadáveres. *El Informador Guerrillero* del EGP describió esta acción como *ejecución de trece líderes de bandas paramilitares*. En julio de 1982 Amnistía Internacional reportaba que la guerrilla era la responsable de unas dos o tres masacres.

La violencia rural declinó a partir de julio de 1982, pero esto fue debido probablemente en mayor medida a la retirada y reagrupación de la URNG que a cualquier orden de Ríos Montt (Stoll, 1994). De octubre a diciembre, el Ejército concentró sus actividades en hostigar a la población escondida en la montaña y en destruir sus cosechas en las áreas de Cotzal y La perla, sin que por eso dejaran de producirse masacres ocasionales. El 1 de diciembre, 23 campesinos fueron asesinados en Sumal Chiquito, Nebaj, y el 22 de diciembre el capitán del destacamento militar de Cunén reunió a los patrulleros de la aldea Chiul y marcharon a la aldea Parraxtut, del municipio de Sacapulas, donde masacraron a 300 personas.

Por otro lado, el Ejército inició las labores de concentración forzada de la población capturada, comenzó a construir el campamento de La Pista, o Ak'tzumbal –antes llamado Xejalvinté–, para recibir a los desplazados, y en la finca La Perla concentró a unos 500 detenidos. En diciembre de 1982, 1,400 campesinos que se habían entregado al Ejército acampaban en refugios provisionales en la pista de aterrizaje de Nebaj (Stoll, 1994), y para esa fecha en total había 9,000 desplazados en Nebaj (Avanco, 1992).

En 1983 el Ejército concentró su ofensiva en preparar el terreno para construir una pista de Nebaj a Salquil. En esos meses, llegaron a Salquil patrulleros de San Nicolás, Las Majadas y Quintín Novillo (Chiantla, Huehuetenango) revueltos con militares, a matar a la gente escondida y a quemar las cosechas, muriendo como 150 personas (Mack, 1990). También fue arrasada la aldea de Tzabal y sus cantones Batzuchil, Tzjulche, Canaquil, Vicoxo, Corralcay, La Vega, Nepebalam, Xecoco, Majal, Janlay, Chuche, Xoloché, Vipacna, Tuchabuc. El Ejército perpetró masacres en otros lugares, como en Chajul y en Nebaj. Por su parte, la guerrilla realizó algunos crímenes contra colaboradores del Ejército en Chel y en Cotzal (Stoll, 1994).

Limpieza de frontera

En Huehuetenango

En 1979 el EGP hizo pública la creación del Frente Ernesto *Ché* Guevara en Huehuetenango, donde desde mediados de los años 70 había venido realizando labores de proselitismo, aprovechando la alta presencia de movimientos cristianos que realizaban acción pastoral. En su estrategia de asalto

del poder, la guerrilla pretendió en 1981 aislar totalmente a este departamento, donde estaba instalada la Dirección Nacional del EGP; además la zona disponía de corredores naturales con la región del Ixcán y el área Ixil.

Fue así como durante 1981 Huehuetenango se convirtió en centro de operaciones del Frente Ché Guevara, especialmente implantado en los municipios de San Miguel Acatán y San Rafael La Independencia. El EGP inició una campaña de *eliminación del poder local del enemigo*, asesinando a numerosos colaboradores del Ejército (ver el siguiente cuadro), para posteriormente pasar a hostigar a las unidades militares. También durante esta época el EGP logró numerosos apoyos, algunos de ellos masivos o colectivos, entre las comunidades más próximas a la frontera. En el resto del departamento, sin embargo, los grupos de extrema derecha como el MLN, tenían bastantes seguidores.

Fecha	Lugar	Víctimas	Cargos
02 Febrero 1981	Coyegual, Sta Ana Huiста	01	Comisionado militar
21 Febrero	Huehuetenango	01	Contratista
03 Marzo	Fincha Chaculá	01	Administrador
10 Mayo	Cantón Tzaminicabaj	02	"Agentes del Ejército"
21 Mayo	Santa Ana Huiста	02	Alcalde y telegrafista
07 Septiembre	San Ramón, Santa Cruz Barillas	02	Comisionados militares
01 Octubre	San Idelfonso Ixtahuacán	02	Civiles N.E.
15 Octubre	San Juan Ixcoy	01	Alcalde
13 Mayo 1982	Colotenango	01	"Paramilitar"
13 Mayo	San Idelfonso Ixtahuacán	01	"Paramilitar"
13 Mayo	San Andrés Cuilco	01	"Paramilitar"
18 Diciembre	Quixic, San Miguel Acatán	01	"Colaborador del Ejército"

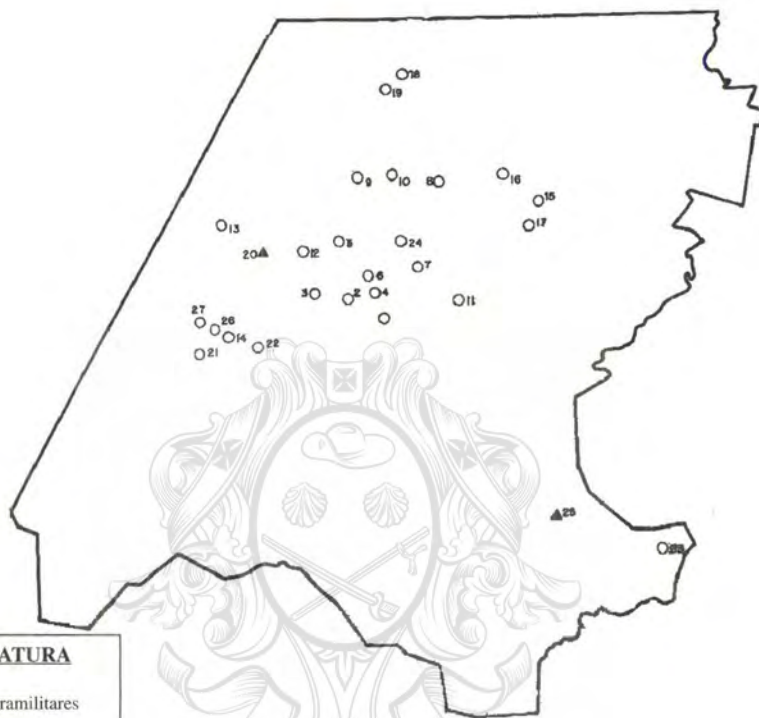
Fuente: REMHI en base al El Informador Guerrillero del EGP (varios números)

ODHAG

Mapa No. 5

Masacres en Huehuetenango

1980-1983



NOMENCLATURA

- ▲ Ejército Paramilitares
- Guerrilla
- Ejército
- △ Ejército Guerrilla
- ⊙ Paramilitares

FUENTE: Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala, 1998.

SAN MIGUEL ACATAN

1. Coyá
2. Pacalaj
3. Ticajo
4. San Miguel Acatán
5. Jom
6. Xocol

SAN MATEO IXTATAN

7. San Mateo Ixtatán
8. Yoltán
9. Sebec
10. Petanac

SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

11. Lajcholaj
12. Nueva Catarina
13. El Limonar
14. Tzisbaj

BARILLAS

15. El Quetzal

16. Cananá
 17. Puente Alto
- #### NENTON
18. San Francisco
 19. Yalambojoch
 20. Nubilá

AGUACATAN

- #### SAN ANTONIO HUISTA
21. Nojoyá
 22. Ojo de Agua
- #### AGUACATAN

23. Xenaxicul
- #### SAN SEBASTIAN COAT
24. San José Jocup
- #### CHIANTLA

25. San Nicolás
- #### SANTA ANA HUISTA

26. Buena Vista
27. Chamuchu

La campaña ofensiva del EGP se prolongó durante todo el gobierno de Ríos Montt. De hecho, Huehuetenango fue el departamento donde la guerrilla desplegó las mayores acciones ofensivas y posteriormente de contención del Ejército. Así, el 2 de junio de 1982, el EGP afirmaba haber privado a 27 de los 31 municipios de Huehuetenango de luz, teléfono, telégrafo y radio, y a 16 de ellos de comunicación terrestre. con la cabecera departamental.

Durante 1981 las fuerzas de la Zona Militar de Huehuetenango fueron empleadas especialmente en incursiones contra el occidente del área Ixil, y también realizaron acciones militares contra la población en aquellas zonas donde el EGP desarrollaba mayor actividad. En la cabecera departamental fueron asesinados dos religiosos. El 12 de febrero el religioso Clarence Dickinson, y un día después el hermano lasallista James Miller. Posteriormente comenzaron las campañas de masacres contra la población campesina.

Pero a mediados de junio, el Ejército anunció el inicio de una operación contrainsurgente en el norte de Huehuetenango con 3,000 soldados y 14 helicópteros. Esta contraofensiva comenzó en julio y no logró desactivar la acción guerrillera, a pesar de su alto costo en vidas humanas. El 13 de julio, en medio de esta ofensiva, muere el jesuita Fernando Hoyos (comandante *Carlos*), miembro de la Dirección Nacional del EGP, en las márgenes del río San Juan, a la altura de la aldea Chojzunil. Más tarde la guerrilla trasladó su cuartel general a las selvas del Ixcán y el teatro de operaciones militares guerrilleras se concentró en el área entre los ríos Ixcán y Xalbal (especialmente alrededor del cerro Cuache).

En Ixcán

Aunque desde 1979 se habían registrado algunos asesinatos selectivos del Ejército y el EGP y la masacre de San José La 20 (octubre 1980), llevada a cabo por los militares, el tiempo de las masacres en Ixcán empieza en 1982 en el Polígono 520 y posteriormente en Ixcán Grande. En un plano general, la ofensiva del Ejército de noviembre de 1981 sobre Chimaltenango y sur de El Quiché, llegó a mediados de diciembre al área Ixil, a finales de enero de 1982 a Chisec y en febrero a Ixcán.

Tras el golpe de Estado del 23 de marzo se agregaron las zonas militares de Cobán y Huehuetenango como puntos irradiadores del Ejército sobre Ixcán. Playa Grande era el punto de confluencia de todos ellos. *Allí donde había entrado el EGP hacía once años, se puede pensar que la ofensiva pretendía que, por último, saliera en retirada* (Falla, 1987 inédito).

A principios de febrero el Ejército comenzó a concentrar sus fuerzas en Ixcán. Era su retorno después de abandonar la región tres meses antes, el 17 de noviembre de 1981. Primero, toda la actividad de colonización en el Polígono 520 fue suspendida por orden militar. También sacaron a todos los maestros quince días antes de la ofensiva y a los trabajadores del sector público. *Al este del río Tzejá, ya la ofensiva de 1982 se empezaba entre el 5 y el 10 de febrero: volaban aravás, helicópteros, avionetas; se sentía que algo venía* (Falla, 1987 inédito).

En febrero ocurrieron las masacres del Ejército en la zona más cercana a Playa Grande: San Pablo, Trinitaria, Santa Clara, San Juan la Quince y El Quetzal. Luego vinieron las matanzas en Ixcán Grande (Falla, 1992).

El Ejército hizo su fuerte en Playa Grande desde donde se coordinaron las operaciones, incluyendo los refuerzos que llegaban de la capital, Petén, Huehuetenango, Cobán y el Oriente. Ahí entrenaban a los *destazadores*, especialistas de la inteligencia militar que se distinguieron por su crueldad en las maacres. Playa Grande, primero base militar y luego zona militar, era también el lugar de control para la población que entraba y salía de ese lado del Ixcán. Numerosos testimonios recopilados por REMHI hacen referencia a la estricta vigilancia sobre el aprovisionamiento y el transporte.

La guerrilla, en ese momento, aun no admitía la envergadura de los golpes recibidos. Entre febrero y marzo sostenían que la *guerra de guerrillas avanza incontenible* (EGP, *Informador Guerrillero*, 1982). Un balance de la URNG sobre 1982 afirmaba que la *ofensiva final y la Operación Victoria 82 han sido un rotundo fracaso*. Aunque reconocían que el Ejército *ha golpeado casi exclusivamente a la población civil, consideran que la coyuntura es particularmente favorable para desarrollar nuestra lucha hacia el triunfo, que es seguro, que está al alcance de nuestras capacidades...* (Documentos EGP, núm. 20)

Un análisis crítico posterior reconocería que la Dirección Nacional del EGP no acertó en su estrategia, con una *visión de corto plazo, cargada de triunfalismo. El rebasamiento consistió en la incapacidad de la organización de conservar la iniciativa estratégica, ante hechos como el desmantelamiento por el enemigo de tres frentes guerrilleros, de sus campañas de exterminio contra la base de apoyo, de la proliferación de patrullas civiles, de sus maniobras políticas y propagandísticas, de su concentración de fuerzas militares en las llamadas fuerzas de tarea...* (Opinión Política, 1985:3)

Las ofensivas en el corredor central

El Altiplano Central (o altiplano poblado) fue de hecho el primero que recibió una ofensiva del Ejército diseñada bajo el nuevo modelo de guerra contrainsurgente por el Estado Mayor General del Ejército. La mayoría de los modelos operativos de la misma sería aplicada en las sucesivas ofensivas que se desarrollaron bajo el gobierno de Ríos Montt.

El teatro militar comprendió el departamento de Chimaltenango, una parte de Sacatepéquez, la parte occidental de Baja Verapaz, el sur de El Quiché y el nororiente de Sololá. Además, el Frente Augusto César Sandino del EGP –que fue el que estuvo notoriamente presente en esta zona– también llegó a realizar algunas operaciones militares en Totonicapán.

Si bien en el presente análisis se considerara la zona de Baja Verapaz por aparte, hay que tener en cuenta que toda esta área geográfica constituye una sola unidad estratégica: un cinturón que enlaza los alejados frentes del norte, donde la guerrilla tenía planificado instalar sus *territorios liberados*, y la misma capital del país.

No fue de extrañar, por tanto, que durante 1981 y el primer trimestre de 1982 se registrara, especialmente en la zona de Chimaltenango, un sorprendente auge de la actividad guerrillera. El Frente Augusto César Sandino, se había creado precipitadamente a mediados de 1981, después de que el Ejército comenzara su ofensiva contra la guerrilla en la capital y numerosos militantes

del EGP tuvieran que huir. Así, este frente guerrillero surgió con gran cantidad de activistas urbanos, y sin contar con un trabajo previo de años como había sucedido en los frentes Ché Guevara y Ho Chi Minh.

En febrero-marzo de 1981 el Ejército lanzó su primera campaña militar contra el centro de Chimaltenango, en la cual murieron 1,500 campesinos (IGE, 1985). Posteriormente siguió una campaña de asesinatos selectivos o masacres contra aquellas comunidades que mostraban apoyo o simpatía por los insurgentes.

La guerrilla reaccionó con un violento plan de ejecuciones de supuestos colaboradores del Ejército y *representantes del poder local*, pasando después a realizar numerosas ocupaciones de aldeas, donde generalmente se producían *ajusticiamientos* y destrucción de municipalidades, y cortes de carreteras en los que participaba abiertamente la población encuadrada en las Fuerzas Irregulares Locales (FIL).

Para entonces la insurgencia ya había perdido, después de las ofensivas del Ejército en la capital, el aprovisionamiento de armas que le hubiera permitido equipar militarmente a esta población. En septiembre-octubre, el EGP y la ORPA conjugaron sus esfuerzos para controlar las tierras altas de Quiché, Sololá y Chimaltenango, a fin de cortar el acceso de la capital a las zonas indígenas. Pero este plan fue neutralizado definitivamente cuando el jefe de Estado Mayor, general Benedicto Lucas, dirigió la ocupación de Chupol, el lugar más estratégico del área, y anunció que rescataría a 3,000 familias secuestradas por la guerrilla (Le Bot, 1992).

La ofensiva militar, que se inició oficialmente el 1 de octubre, prácticamente desarticuló el Frente Augusto César Sandino. La guerrilla apenas rescató algunos pelotones de fuerzas militares regulares. A pesar de ello, tras la llegada del gobierno de Ríos Montt, la insurgencia continuó con una actividad militar limitada a determinados hostigamientos contra unidades del Ejército. Incluso, en agosto de 1982, las FAR implantaron su Frente guerrillero Tecún Umán, al mismo tiempo se que realizaban operaciones de unidades combinadas de varias organizaciones. Esta actividad militar se desarrolló especialmente en el área occidental de Chimaltenango.

El Ejército creó en junio de 1981 las primeras aldeas modelo en Chimaltenango y prosiguió una despiadada campaña de masacres contra las poblaciones que apoyaron a la guerrilla, o contra las poblaciones que se habían refugiado en la montaña. El 20 de marzo fueron asesinadas 13 personas en San Juan Comalapa; el 31 de marzo fueron muertas otras 19 personas y quemada la aldea Estancia La Virgen; el 15 de abril el Ejército mató a 14 campesinos de la aldea Agua Caliente, de San José Poaquil; el 26 de abril fueron quemadas vivas 20 personas en la aldea Chipiacul, Patzún (Falla, 1983; Amnistía, 1982); el 28 de abril fueron asesinados 13 campesinos en Varituc, San Martín Jilotepeque, y el 20 de octubre, 5,000 campesinos de San Martín Jilotepeque se entregaron al Ejército después de haber huido hasta el área del Motagua (3,000 fueron encerrados en la aldea Choatalum y el resto en un campamento en Las Lomas). Finalmente, el 5 de abril de 1983, después de una emboscada de la guerrilla, el Ejército fusiló a 60 campesinos de la aldea Agua Caliente, Chimaltenango.

Pachay Las Lomas

Pachay Las Lomas es una de las aldeas más golpeadas de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Los vecinos recuerdan que durante 16 meses, durante los gobiernos de Lucas y Ríos Montt, el Ejército entró 200 veces con el fin de intimidar, masacrar, destruir cosechas, quemar bosques y envenenar las aguas. El primer asalto militar fue en 1979, en la finca El Centeno, sede del Sindicato de Trabajadores Independientes Liga Campesina, donde fue confiscada la lista de actas de los asociados.

Durante 1980 las incursiones y violaciones continuaron y se agudizaron en 1981, hasta que el 20 de febrero de ese año cerca del 70% de una población estimada en 200 familias, se desplazaron de la comunidad y fueron destruidas casi la totalidad de las casas. Los ancianos, imposibilitados de movilizarse, no lograron desplazarse. La gran mayoría de habitantes huyeron hacia los barrancos y se refugiaron en los pocos bosques durante unos 18 meses. Unas pocas familias (once) buscaron refugio en San Martín y Chimaltenango.

Las condiciones de la población desplazada eran extremadamente precarias, sobre todo entre los niños y las mujeres que sufrieron severos síntomas de desnutrición y enfermedades graves. El Ejército entre tanto avanzó en la formación de las PAC y envió a los patrulleros a buscar a la población para invitarlos a regresar. La población consultó con los responsables de los frentes guerrilleros del EGP y las FAR que operan en la región, y la recomendación de estos últimos fue que *se rindieran*, pues ellos no tenían capacidad para protegerlos. El 20 de octubre de 1982 los responsables de los cinco parajes de Pachay decidieron organizar una caminata hacia Chimaltenango para que les reconociera como población civil. Otras comunidades se les unieron hasta que llegaron a sumar unas 4,000 personas.

ODHAG

Mapa No. 6
Masacres en Chimaltenango
1980-1983



NOMENCLATURA

- ▲ Ejército Paramilitares
- Guerrilla
- Ejército
- △ Ejército Guerrilla
- ⊙ Paramilitares

- CHIMALTENANGO
 SAN MARTIN JIL.
1. Sacalá, Las Lomas
 2. Pachay, Las Lomas
 3. Chipocolaj
 4. El Molino
 5. Santa Teresa, Chuatalum
 6. Chuabajito
 7. San José Las Canoas
 8. El Retiro Las Canoas
 9. Santa Anita Las Canoas
 10. Barituc
 11. Sargento
 12. Finca Catalán
 13. San Miguel, Chuatalum
 14. San José Las Rosas, Chuatalum
 15. Agua Caliente (Río Pixcayá)
 16. Río Paxcayá, Estancia la Virgen
 17. La Cumbre, Las Canoas
 18. Pacoj, Chijocon
ITZAPA
 19. Chimachoy
COMALAPA
 20. Xiquín Sinai
PATZUN
 21. Patzaj
PATZUN
 22. Chipiacul

FUENTE: Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Guatemala, 1998.

En Sololá

Para el EGP, Sololá y Totonicapán eran parte de la región de apoyo para el sur de El Quiché, a lo largo de la carretera Panamericana. Cierta población se incorporó al trabajo y estructuras organizativas comunitarias a partir de actividades de la Iglesia católica, de los catequistas y los miembros del CUC, sobre todo en Argueta y Santiago Atitlán en 1980. La demanda más sentida era la tierra.

Pero en Sololá convergieron varios grupos, además del EGP. Desde finales de 1979 la ORPA había establecido campamentos en Paraxot y Chuimango (bocacosta sololoteca) y en las faldas del volcán Atitlán. También ahí actuó el Movimiento Revolucionario Popular MRP-Ixim, que realizaba un trabajo de reclutamiento selectivo también en Totonicapán y Quetzaltenango. *El Ixim prosperó, pero cuando llegó el EGP fue cerrando el espacio, al grado que la última información que tuvimos de una persona de Chaquijyá es que el EGP mató ahí a todos los combatientes del Ixim.* (IC 207, Sololá, años 80.)

El EGP hizo trabajo de propaganda y organización en las comunidades. Estableció su primer campamento en Pujujil-La Fe, desplazándose entre esta comunidad, Chuchipacá (cerca de Chupol), Chichicastenango y Xepol, en El Quiché. *La gente tenía sed de actividades... pero el EGP no tenía ni armas ni capacidad para movilizarlos.* (IC 199, Sololá, años 80.) En casi todas las comunidades las FIL tenían como tarea la protección de la gente frente a las incursiones del Ejército y también apoyar a las fuerzas regulares de la guerrilla. *Las FIL eran encargadas de dar alimentación a los combatientes y de buscar armas. Y si no tenían, iban a asaltar carros para abastecer el frente (guerrillero)... no manejaban armas, sólo machetes.* (IC 203, El Progreso, Pujujil, años 80.)

La acción más notoria de la guerrilla fue la toma de la cabecera de Sololá el 28 de octubre de 1981, fiesta de San Simón, dirigida por Diego (Julio Iboy).¹³ *La toma de Sololá se realizó con dos objetivos: la recuperación de armamento de la Comandancia de Reservas -que fue sequeada- y extender la influencia del EGP en la región.* (IC 199, Sololá, años 80.) La guerrilla cortó la luz y a las cinco de la tarde inició el ataque. Los miembros de las FIL se movilizaron durante el día para llegar al pueblo y se diluyeron entre la multitud que asistió a la celebración religiosa. En el ataque a la estación de policía murieron cuatro agentes, los demás se rindieron. El EGP recogió todo el armamento y liberó a los presos. El gobernador murió en el tiroteo en plena calle, junto con un miembro de la corporación municipal.

Cuando ocurrió la toma, la represión del Ejército ya se estaba extendiendo. En febrero de 1981 el Ejército asesinó a catorce personas en el caserío Sachochol. En abril de 1981 tropas militares llegaron a La Fe, Pujujil II, en cuatro camiones procedentes del destacamento de Chupol, juntaron a la población en una casa y la bombardearon y ametrallaron; el saldo fue 46 muertos, entre mujeres, niños y hombres. A mediados de 1981 el Ejército ejecutó a cuatro pobladores en Pujujil y Tzaput, bajo la advertencia de que la gente no debía colaborar con la guerrilla.

Ya cuando el Ejército se había posesionado en Chupol y alrededores, estableció destacamentos en la región: en 1982 en Pixabaj, en Guineales; en 1983

13 Julio Iboy fue un líder natural de Sololá que estudió para sacerdote y trabajó en el Comité Pro-Justicia y Paz.

en El Encanto-Pujujil; en Panajachel y Santa Clara La Laguna. La violencia continuó. El 19 de marzo, el Ejército mató a tres miembros de una familia en Chaquijyá, y llevó sus cuerpos al destacamento de Los Encuentros. El 11 de junio de 1982 el Ejército asesinó a once personas en el caserío Buena Esperanza. En marzo de 1982, la guerrilla ejecutó a siete padres de familia en Los Encuentros, acusándolos de colaborar con el Ejército. En septiembre del mismo año, el EGP mató a 16 pobladores en Pujujil I, Chuacruz.

La relaciones entre las comunidades quedaron dañadas. Vecinos de Pujujil participaron en las acciones del EGP de limpieza de comisionados militares. (IC 199, Sololá, años 80.) A mediados de 1982, los comisionados, con el apoyo del Ejército, organizaron a las comunidades en PAC e iniciaron la identificación de los sospechosos de pertenecer a la guerrilla. En el cantón Pujujil I, el Ejército estableció una aldea modelo, que en la región se conoció como *la colonia*. En realidad fueron seis sectores en que se dividió la comunidad que fueron construidos entre septiembre de 1982 y febrero de 1983.

Relaciones interétnicas y de poder en la guerrilla

La complejidad de las relaciones interétnicas se puso de manifiesto en pleno conflicto armado. *Tal vez los kaqchikeles no querían que los quichés dirigieran sus estructuras, pero eran éstos los que tenían mayor disposición individual de integrarse a tiempo completo a la lucha. Los kaqchikeles son más comunitarios, mantienen más sus tradiciones y un mayor apego a la tierra y a la familia. No todos los padres aceptaban que sus hijos se incorporaran a tiempo completo, porque tenían que ayudar en el trabajo de la tierra.* (IC 199, Sololá, años 80.)

Otra dimensión ofrecían las relaciones entre indígenas y ladinos. *Los ladinos en Sololá son una porción minoritaria y habitan fundamentalmente en la cabecera, trabajando como empleados públicos. Cuando fue la toma de Sololá, la mayoría de los que llegaron eran indígenas y algunos de los comentarios de los ladinos eran: todos los indios son guerrilleros.* (IC 209, Sololá, años 80.)

Los mandos guerrilleros no estuvieron ajenos a estos avatares. *La toma de Sololá estuvo a punto de suspenderse porque en pleno preparativo surgió la discusión sobre quién debería dirigirla. Los indígenas estábamos opuestos a que los capitalinos vinieran de decirnos cómo hacerlo, no importaba que ellos fueran delegados de la Dirección Nacional. Éste era un asunto nuestro y nuestros líderes, que conocían el terreno, debían de comandarnos. Al final de arregló, pero fueron momentos de mucha tensión. En la zona Ixil ocurrió algo parecido. Incluso ahí un comandante ixil propuso un levantamiento indígena dentro de la guerrilla ante la insensibilidad de los ladinos que formaban la Dirección y sobre todo porque nos estaban llevando a un fracaso con un altísimo costo en vidas humanas, sobre todo indígenas. A este comandante se le disuadió. Decidimos que no era el momento, porque entonces sí... podíamos quedar en dos fuegos: el del Ejército y el de la guerrilla ladina.* (IC 217, ex-combatiente, años 80.)

La ofensiva en El Quiché y Las Verapaces

Aunque de hecho las ofensivas militares en estas dos zonas después de marzo de 1982 pueden considerarse como parte de la ofensiva global contra la zona del altiplano central, muestran claramente cómo la violencia fue pasando de asesinatos selectivos en 1980 y 1981, a matanzas masivas —en los últimos meses de 1981 y durante 1982— en las que el Ejército obligó a participar a una parte de la población.

En El Quiché

Como se reseñó en el capítulo tercero, desde la década de 1960 en El Quiché se desarrolló una intensa actividad de la Acción Católica, que en los años 70 se aproximó a las posiciones de la Teología de la Liberación; en esa atmósfera se creó el CUC. Estas últimas actividades fueron promovidas por el EGP, que logró una implantación si no tan amplia como en el área Ixil, sí bastante fuerte.

En los municipios del centro-sur de El Quiché los campesinos estaban atravesando en ese momento un agudo problema de escasez de tierras, debido al minifundio progresivo, al despojo de tierras comunales y a los bajos rendimientos de las cosechas. Esta situación se reflejaba en tensiones o enfrentamientos entre comunidades, o entre campesinos y nuevos propietarios que les habían despojado de sus tierras. El 4 de mayo de 1979, por ejemplo, 37 campesinos de Sachina, San Miguel Uspantán, denunciaron a los terratenientes Javier y Julio Castañeda de intentar apoderarse de sus tierras y obligarles a trabajos forzados (Amnistía, 1980).

En este ambiente, desde 1980, se inició una persecución contra los líderes de las comunidades, especialmente contra la Iglesia católica y los catequistas de aquellas comunidades donde con más fuerza se había implantado la organización campesina. Entre los casos más notables del período pueden mencionarse: el asesinato, el 19 de abril, de Juana Tum de Menchú; el ametrallamiento de la parroquia de Uspantán; y el 10 de julio, el crimen del párroco de Joyabaj, Faustino Villanueva. El 20 de julio fue cerrada la diócesis de El Quiché. Posteriormente, en 1981, la guerrilla lanzó una campaña de propaganda armada, hostigamiento al Ejército y asesinato de colaboradores de los militares, que provocó una reacción mucho más violenta por parte del Ejército.

El general Benedicto Lucas informaba en *Prensa Libre* del 21 de noviembre que estaban entrenando a 800 campesinos en Joyabaj y 1,000 en Rabinal. Para entonces el Ejército había lanzado ya su primera ofensiva contrainsurgente contra el Frente del EGP Augusto César Sandino, que incluía la parte sur de El Quiché.

A pesar de esta ofensiva, durante 1982 la actividad guerrillera continuó afectando a casi todo el departamento. El Ejército respondió con masacres masivas de comunidades campesinas especialmente del área central del departamento, recurriendo para ello en numerosas ocasiones a los mismos patrulleros civiles de comunidades vecinas.

Destacan en esta campaña las masacres continuas contra las aldeas de municipios como San Pedro Jocopilas y los asesinatos ejemplificantes y

selectivos en las cabeceras de El Quiché y Chichicastenango. Este breve recuento corresponde apenas a los meses de enero y marzo de 1982: el 5 de enero se produjo la masacre de San Bartolo Jacaltenango, donde asesinaron a 300 personas con la participación de patrulleros civiles de San Pedro Jocopilas (entre ellos Chús Barrios, Mincho Girón y Ernesto Girón, señalados de robar tierras a los de San Bartolo); el 22 de enero en el cantón Chiticun, de San Pedro Jocopilas, 40 soldados quemaron vivas a 19 personas, niños y mujeres; el 23 de enero tropa del Ejército violó y asesinó a tres jóvenes en el cantón San Pablo, de San Pedro Jocopilas; el 6 de marzo el Ejército asesinó a 200 personas en Zacualpa, según informó *Prensa Libre* el 11 de marzo; el 29 de marzo fueron asesinados cuatro campesinos en Santa Cruz del Quiché.

En Alta y Baja Verapaz

En las verapaces operó el Frente Guerrillero del EGP Marco Antonio Yon Sosa (MAYS), creado en 1981, y el Augusto César Sandino, especialmente en el área suroccidental. Las verapaces, sobre todo la zona suroccidental, eran consideradas por el EGP como un enclave logístico estratégico por estar radicado entre los frentes Augusto César Sandino (Chimaltenango), Ho Chi Minh (Quiché-Alta Verapaz) y el Frente de las FAR Panzós Heróico (oriente de Alta Verapaz e Izabal). Sin embargo, el surgimiento del MAYS y la intensa actividad que desplegó durante varios meses de 1981 y 1982 puede atribuirse a un intento de dispersar a las fuerzas del Ejército, que ya habían lanzado su primera ofensiva contra el Augusto César Sandino, así como a la consigna de *generalizar la guerra de guerrillas*.

De todas maneras, en esta zona la Iglesia católica también había desarrollado una intensa actividad desde comienzos de los años 70, que al final de esa década se aproximaría a las posiciones del CUC. Después, con el surgimiento del Frente Yon Sosa, varias comunidades se comprometieron con la lucha guerrillera, sobre todo en Baja Verapaz.

Durante 1980 la presencia de la guerrilla en el área no fue muy destacada. Sin embargo, en la zona se venían generando fuertes tensiones desde la segunda mitad de la década de 1970. Mientras en toda la zona norte de la región se registraban desalojos de comunidades campesinas por parte de finqueros, en la zona de Baja Verapaz, desde el 17 de marzo de 1979, comenzó el desalojo violento de los campesinos de Chixoy, donde se iba a construir una presa hidroeléctrica. Ese mismo año, se iniciaron las represalias individuales con el asesinato, el 13 de noviembre de 1979, de Pedro Chen, dirigente de la DC en la aldea Chiac, de Rabinal. Ese día *amaneció con todas las vías de acceso a Rabinal cortadas; vía El Chol, Cubulco, Salamá y Xococ*. (IC 0288, Cobán, años 80.)

Aunque ya se habían registrado algunos atentados previos, el comienzo de la actividad guerrillera en la zona norte puede fecharse el 12 de septiembre de 1981, cuando el EGP hizo explotar bombas en Cobán (Alta Verapaz), destruyendo la Comandancia de Reservas Militares, y en Salamá (Baja Verapaz) donde acabó con el edificio de Gobernación departamental; además cortó las carreteras entre Mixco Viejo y Granados y las de Granados con El Chol, Salamá y Rabinal.

La guerrilla también ocupó Rabinal. *Prensa Libre* informó, el 25 de septiembre, del asalto de 50 guerrilleros a Cubulco, en el que mataron al jefe policial y a cuatro agentes. Tres meses más tarde, el 21 de diciembre, la guerrilla destruyó las instalaciones de la finca San Isidro en Alta Verapaz (propiedad de Gonzalo Berger) y de otras fincas en Cobán (como Samac) y asesinó a varios finqueros. El 23 de diciembre, según los reportes de la guerrilla que no pudieron ser confirmados, se produjo la toma guerrillera de Purulhá, con la destrucción de las instalaciones gubernamentales. En esos momentos, los medios anunciaron la instalación de una fábrica de armamento y municiones del Ejército guatemalteco en Cobán.

Sin embargo, independientemente de la actividad guerrillera, la represión se mantuvo continua en la zona de Baja Verapaz. En total, de enero a agosto, fueron asesinadas 25 personas en Rabinal, y en agosto fueron asesinadas 36 personas en las aldeas de Xococ, Patixlán y Buena Vista, siempre en Rabinal, a manos de César Baldizón y su banda de judiciales (EAFG, 1995).

Fue a finales de 1981, después del surgimiento del Frente MAYS, cuando se iniciaron más abiertamente las masacres, involucrando sistemáticamente a los patrulleros civiles. Sólo en la jurisdicción de Rabinal se registraron, entre otros, los siguientes hechos: el 15 de septiembre, el comandante de la Zona Militar de Cobán, congregó a la población de Rabinal en el parque central y les amenazó; poco después el Ejército masacró entre 300 y 500 personas, que fueron arrojadas en el campo de aviación de Pacux (EAFG, 1995); entre el 9 y el 10 de septiembre asesinaron a otras 200 personas en varias comunidades de Rabinal; el 23 de septiembre fueron ahorcadas 15 personas en la aldea Panacal. *Prensa Libre* informó el 19 de septiembre de una matanza de 14 campesinos en la feria titular de San Miguel Chicaj y el 28 de septiembre se refirió al asesinato de 31 campesinos en Rabinal; en diciembre fueron asesinadas 51 personas en la comunidad La Ceiba y 104 en la aldea Panacal.

El 25 de marzo de 1981 se inició la represión en Alta Verapaz, con el asesinato a manos de los militares de los catequistas Cristóbal López y Mariano Xoc Palma, en la aldea Natilabaj. San Cristóbal Verapaz.

Después de la ofensiva de finales de 1981 sobre el sur de Quiché y norte de Chimaltenango, sobre la ruta Panamericana, el Ejército se dirigió, en enero de 1982, a la Sierra de Chuacús y después a la sierra de los Cuchumatanes. En enero se produjeron ataques guerrilleros en Rubelsalto, Chinajá y Yalpemech. El Ejército envió unidades de la Guardia Presidencial a estas áreas, al tiempo que comenzaron los ametrallamientos *en círculo* alrededor de las aldeas de Alta Verapaz, mientras el Frente Yon Sosa intensificaba sus acciones hasta agosto, cuando repentinamente cesó su actividad.

Por su parte el Ejército concentró su actividad en eliminar todo apoyo a la guerrilla en las comunidades de Rabinal, Río Negro y San Cristóbal Verapaz, las zonas geográficamente más estratégicas para la guerrilla. Así, entre septiembre de 1981 y agosto de 1983 fueron asesinadas entre 4 y 5 mil personas de Rabinal, de un total de 22,733 habitantes con que contaba este municipio (EAFG, 1995).

En lo que se refiere a Alta Verapaz, el Ejército aplicó el mismo patrón de masacres, en especial en las áreas cercanas a la presa hidroeléctrica Chixoy. En octubre los militares iniciaron una ola de masacres en los municipios de Cahabón,

Senahú, Panzós, San Cristóbal, Cobán y Chisec (Yalicar, Semuy, El Limón) y probablemente Lanquín, que duró hasta el segundo semestre de 1983. A pedido de los propietarios fueron ocupadas por el Ejército las fincas de Belén-Transval, El Plan, Tuzvil-pec, Esquipulas, Chicanee, Chivité, San Marcos, Chivité-Santa Rosa, situadas en el municipio de Cahabón; además, en ese mismo municipio, fueron arrasadas las aldeas Hacolol, San Pedro Chicaj, Tzibalpec, Chajbul, Chimoxan, Seabás, Secuamó, Semococh, Setzapec, Chiax, Sebalanté y Chiacax. En Senahú el Ejército ocupó varias fincas y aldeas. Durante 1982 fueron asesinadas 323 personas en las comunidades de Chichupac-Xebaj (104), Xesiguán (79), Pichec (60), Nimacabaj (54) y Coyajá (46), en Rabinal .

Hubo otros costos sociales de la guerra debido a diversas causas. La noche del 14 de enero de 1982 la guerrilla atacó el cuartel de la Policía Nacional en Cobán. La prensa reportó sobre un ataque guerrillero a la policía con saldo de siete guerrilleros muertos. *Testigos oculares indicaron sin embargo que se trataba de unos coheteros que regresaban de una fiesta en honor al Señor de Esquipulas y que bajo los efectos de licor no respetaron un rótulo que prohibía el paso. Fueron arrestados, golpeados y asesinados (IC 201, Cobán, años 80). Un testigo en San Cristóbal Verapaz señala que el día 7 de abril de 1982 una avioneta tiró gas sobre la aldea Rancho. Por lo menos dos niños, se sabe, murieron intoxicados (IC 0187, Cobán, años 80). En el Hospital Nacional de Cobán ocurrieron misteriosos secuestros y asesinatos de pacientes.*

En diciembre comenzaron a entregarse al Ejército grupos pequeños de desplazados en Alta Verapaz, y los llevaron a la finca La Esperanza. Desde 1980 habían huido más de 2,000 personas *buscando refugio en la montaña* y 100 poblaciones desaparecieron. En Chisec unas 5,000 personas que se refugiaron en la montaña para escapar de las masacres se entregaron finalmente al Ejército ante la imposibilidad de sobrevivir en la selva, y posteriormente fueron reubicadas en la cabecera de Chisec y en las aldeas modelo de Setzi y Seguachil. *Regresaron en condiciones de extrema debilidad, algunos padeciendo un paludismo grave que resultó fatal para las personas anémicas (IC 0187, Cobán, años 80). En la zona de San Cristóbal, San Pedro y San Juan, la gente se fue a Cobán donde surgió un cinturón de miseria, pues también llegaron pobladores de Rabinal y de El Quiché.*

El general Ríos Montt dio una orden de cortar todos los árboles en un margen de 50 metros a ambos lados de las principales carreteras del país para impedir ataques guerrilleros a los convoyes militares. *Aunque parece que fue una orden verbal, el comandante de la Zona Militar 21, con sede en Cobán, la asumió y la hizo llevar en toda Alta Verapaz, resultando en millones de árboles cortados al lado de carreteras asfaltadas y de terracería, como en la carretera de Cobán a Chisec, donde años después se pudo todavía observar los árboles de madera fina pudriéndose al lado de la carretera (IC 0187, Cobán, años 80).*

En 1983, los patrulleros de San Cristóbal, Tactic y Chamá, comenzaron a salir a cazar población escondida en la montaña. Los patrulleros de Salaqwín, vinculados con la Zona Militar de Playa Grande, destacaron en sus cacerías. El Ejército fijó tres lugares de concentración de población: Salaqwín, Las Conchas y la finca El Rosario. En Las Conchas el campamento funcionó hasta 1985, y allí se ubicó un campamento militar con 40 soldados de la zona militar de Playa Grande para recibir a la gente.

En San Marcos

El 18 de septiembre de 1979 apareció públicamente la ORPA,¹⁴ después de ocupar la finca Mujuliá, en Colomba Costa Cuca Quetzaltenango, y durante ese mismo año estableció sus frentes guerrilleros en el occidente y el centro de la Sierra Madre,¹⁵ desarrollando a partir de entonces una creciente actividad militar, a pesar de los golpes que sufrió en la capital en julio de 1981.

Durante esta etapa no se produjeron crímenes masivos contra la población en las zonas de influencia de ORPA. En esta situación influyó tanto el estilo de trabajo secreto y alejado de las *organizaciones de masas* que distinguía a ORPA, como el hecho de que el Ejército antepusiera dentro de sus objetivos estratégicos la neutralización del EGP. Sin embargo, las relaciones entre los campesinos y los finqueros de la zona fueron históricamente muy tensas. Por tanto, los propietarios agrícolas ordinariamente buscaron el apoyo y la protección del Ejército. Se sabe por testimonios de personas de las comunidades que, durante el conflicto, fue común la práctica de algunos jefes militares de recibir aportes mensuales en dinero para cuidar especialmente algunas fincas. En varias haciendas se instalaron destacamentos militares.

En (la finca) Los Cerros tuvo don Teddy un destacamento en un anexo que se llama África... Don Teddy prestaba sus camiones para el Ejército... iban a recoger campesinos de saber dónde y los traían ahí a matar... La gente quedó ahí enterrada y otros los llevaban directamente a Xela. Salían los camiones de noche... diez, onche de la noche, con todo ese gential amarrado... Me contaba un ayudante que una noche fueron a traer como a 40 campesinos entre niños, ancianos y jóvenes de una aldea y los llevaron y los mataron en los camiones de Teddy Plocharsky. (IC 010, San Marcos, años 80.)

En San Marcos el ejército llevó a cabo varias masacres y bombardeos, como se relata en el anexo del Tomo II de este Informe, en Sacuchum Dolores (San Pedro Sacatepéquez), Xolhuitz (Tajumulco), Bulaj (Tajumulco), Monte Cristo (Tajumulco) y El Tablero (San Pedro Sacatepéquez), entre otras, que tuvieron un fuerte efecto sobre el tejido social de las comunidades.

En Petén

Como se vio en el capítulo anterior, las FAR decidieron crear un frente guerrillero en el norte del país en 1980,¹⁶ iniciando rápidamente acciones militares,

14 La etapa de preparación, empero, había durado ocho años (1971-79) en los que el criterio de la ORPA fue evitar contactos militares con el Ejército. En ese período crearon sus frentes guerrilleros, construyeron la infraestructura logística en la capital y formaron a sus cuadros campesinos. Entre éstos, algunos llegaron a ocupar puestos de comandantes, como Luis Ixmatá (Pajapita), Javier Tambriz (Sololá) y Efraín Bámaca (El Tablero).

15 En el primer trimestre de 1982 se forman las primeras dos compañías, las que llegan a constituirse en los dos frentes, el Luis Ixmatá y el Javier Tambriz.

16 En realidad, las FAR habían considerado muy lejanamente en su estrategia el Petén como zona de combate. Más bien era una retaguardia para un previsible frente guerrillero en Alta Verapaz e incluso El Quiché. Después de la derrota de la GEI (ver Capítulo: *El conflicto en los años 60*), la comandancia de las FAR decidió reconstruir la guerrilla en Alta Verapaz. Se hicieron dos intentos de penetración a través de Concuá, pero fracasaron. Por eso optaron por llegar vía Petén.

aunque fue hasta finales de 1981 cuando realmente desplegaron una actividad bélica notoria, la cual empero fue modesta en relación a otros frentes guerrilleros.

En efecto, había sido la irrupción de los frentes guerrilleros del EGP y la ORPA lo que obligó a la Dirección Nacional de las FAR a revisar la línea estratégica acordada en 1970-71. Desde finales de 1970 las FAR decidieron organizar su primer frente guerrillero en Petén, pero éste se concretó hasta 1979-80 al constituirse la primera unidad entre EGP-FAR-PGT (Núcleo de Dirección).

Al principio se crearon unidades militares locales que posteriormente se integraron en tres frentes guerrilleros: el *Feliciano Argueta Rojas*, que operó en Dolores, Santa Ana y eventualmente en Poptún y San Francisco (principalmente sobre la carretera Flores-Poptún) y se proyectaba militarmente hacia San Juan, El Chal y Sabanetas; el *Lucio Ramírez*, que operaba sobre la carretera Flores-Sayaxché, Libertad-Naranjo y Subín-Bethel; y el Mardoqueo Guerra, que actuó en Sayaxché y norte de Chisec (Alta Verapaz), principalmente sobre la Franja Transversal del Norte y las márgenes de los ríos La Pasión y Salinas.

Cuando recrudescieron los combates, a partir de 1981, el Ejército ya había iniciado la represión contra las cooperativas, caseríos, parcelamientos y aldeas donde detectaba la presencia de las FAR. La presión del Ejército contra la población que podía apoyar a los guerrilleros se mantuvo creciente, pasando de asesinatos aislados –como cuando el 14 de marzo de 1979 apareció el cadáver de Samuel Sucul, líder campesino de San Luis Petén–, a las acciones masivas. En 1980 se efectuó la primera masacre en la aldea El Limón (Santa Ana),¹⁷ luego esta práctica se fue extendiendo. Durante mayo, junio y julio de 1981 el Ejército se centró en Petén, donde cometió masacres y obligó a la población a huir a México. A principios de 1982 la fuerza armada organizó las patrullas civiles, particularmente en las cabeceras municipales.

Esta presión se mantuvo durante los últimos meses del gobierno del general Lucas. Sin embargo, la llegada del gobierno de Ríos Montt y la generalización de la política de *tierra arrasada* tuvo también efectos devastadores en El Petén, como las masacres en las aldeas Palestina, Josefinos y Macanché, en marzo y abril de 1982.

En la capital, oriente y la costa

Aunque de hecho en 1980 y 1981 ya había quedado desarticulado el movimiento popular y sindical en la ciudad capital, tanto mediante asesinatos selectivos como por masacres colectivas de dirigentes sindicales, la actividad guerrillera aumentó notablemente en el primer semestre de 1981, al mismo tiempo que los comandos urbanos del EGP extendían su actividad hacia el oriente del país, la periferia urbana y las ciudades de la costa sur.

De enero a julio la unidad militar del EGP en la capital llevó a cabo 17 operaciones militares. Algunas de ellas fueron el atentado contra el hijo del expresidente general Carlos Arana; la colocación de una bomba en la embajada

17 De acuerdo a información recabada (IC 056, Petén, 1980) el primer bombardeo contra población civil en Petén no formó parte del plan contrainsurgente del Ejército: *Fue una reacción visceral del coronel Eduardo Wholers tras la emboscada que había sufrido el Ejército a manos de las FAR.*

salvadoreña; el ataque contra la garita policial en la salida de la ciudad hacia occidente; la destrucción de la Cámara de Comercio Norteamericana; un atentado contra la empresa Eastern Airlines. También, el 14 de enero el EGP mató al alcalde de Santa Lucía Cotzumagualpa, el emelenista José Ángel Ortega Melchor, amenazó a la familia Campollo por tener centros de detención y tortura en sus fincas Madre Tierra y Xatá, y a la familia Herrera por hacer lo mismo en el Ingenio Pantaleón. Otras acciones guerrilleras tuvieron lugar en las zonas de Amatitlán y Escuintla (EGP, 1981).

Sin embargo a partir de junio, luego de la captura por el Ejército del jesuita Luis Pellecer Faena, colaborador del EGP, y poco después de la muerte en un enfrentamiento de Mario Solórzano Foppa (responsable de propaganda del EGP), se inició la contraofensiva del Ejército que prácticamente descabezó la estructura guerrillera de las organizaciones EGP y ORPA en la capital. Más tarde, aunque hubo cierta actividad guerrillera en la ciudad, especialmente en la periferia y algunas acciones en la región oriental del país,¹⁸ la presencia de estas organizaciones se fue apagando, sobre todo cuando en octubre el gobierno inició cateos masivos en barriadas de la ciudad.

La represión se volvió mucho más selectiva y en buena medida estuvo dirigida contra las FAR y el PGT, que aún no habían sido golpeadas en sus estructuras capitalinas. Cabe destacar, dentro de estas acciones, el desaparecimiento de 15 activistas del FERG-educación media, de tres dirigentes sindicales de la USAC y de la asesora laboral Yolanda Urizar, entre muchas más.

La costa era una área estratégica de disputa donde conflúan todas las organizaciones guerrilleras y donde el Ejército concentró buena capacidad de fuego. Desde antes de la huelga de los trabajadores de las fincas, en febrero de 1980, en la zona existían destacamentos militares en Palín (uno) y Masagua (tres). En 1982 se estableció un destacamento en Sipacate, otro en La Gomera, en la Democracia y Tiquisate, lugares donde también hubo patrullas civiles. Pero donde se identifican los orígenes de la represión más dura fue en la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Después de la huelga de 1980 vino una gran represión. Comenzó en las fincas, con los rancheros, a los que mataron o hicieron desaparecer. También atacaron a los sindicatos; por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de Madre Tierra y el de Santa Ana fueron descabezados completamente (IC 017, Escuintla, años 80). Los finqueros tenían contratados cuerpos de seguridad, en buena medida integrados por la Policía Militar Ambulante (PMA).

En Quetzaltenango

Quetzaltenango venía sufriendo una violencia selectiva contra sindicalistas, maestros y estudiantes desde los años 70. En los años 80 la guerrilla realizó actividades de propaganda armada en todos los municipios. En la zona mam el Ejército llevó a cabo una campaña de secuestros y asesinatos, mientras que en la

18 A finales de diciembre de 1981 la guerrilla ejecutó acciones de hostigamiento en Chiquimula; en enero de 1982 se registraron enfrentamientos en Zacapa y San Juan La Ermita (Chiquimula), en Morales (Izabal) y San Antonio La Paz (El Progreso), hasta que el 21 de junio atacó el destacamento de la Guardia de Hacienda en Chiquimula.

zona quiché los principales promotores de la violencia fueron los comisionados militares y las PAC. En esta región del altiplano se hicieron temiblemente famosos nombres como el de Baltazar Tum y Pedro Coz, el primero jefe de las PAC en Santa Lucía La Reforma a quien se le sindicó la muerte de 60 catequistas. El asesinato de Tum exacerbó el ánimo del Ejército y aumentó el control militar en la zona. Coz vivía en San Pedro Jocopilas, El Quiché, pero con el respaldo del Ejército irradiaba su poder a la zona de Totonicapán

Bajo Ríos Montt el Ejército promovió la reestructuración del poder municipal. Seleccionó a dedo a los alcaldes, pero cuidando que tuvieran liderazgo en las comunidades. Después de posesionar a las autoridades promovió la formación de las PAC. Grupos de seis patrulleros encabezaban los operativos de búsqueda de la guerrilla entre los montes y barrancos. Para contrarrestar la probable simpatía de la población a los guerrilleros, el Ejército fue arrojando el terror. En Coatepeque las fuerzas armadas paseaban desnudos por la plaza pública a supuestos guerrilleros prisioneros, que mostraban señales de torturas, al tiempo que advertían a la población de las consecuencias de colaborar con la insurgencia. En Santa Lucía La Reforma también fueron torturados delante de la población personas detenidas por el Ejército. Sus cadáveres aparecían luego tirados a la orilla de las carreteras.

El Ejército además realizaba operativos en las comunidades y en las carreteras, donde detenía las camionetas y registraba a los pasajeros, portando listados de personas señaladas de colaborar con los grupos rebeldes. En ocasiones los soldados acompañaban a los hombres encapuchados que señalaban a los supuestos guerrilleros.

El 21 de noviembre de 1981 la guerrilla se había presentado a Santa Lucía La Reforma y con el fin de imposibilitar al Ejército la identificación de personas de la comunidad quemó el edificio municipal y destruyó el registro civil. Esa misma tarde, en presencia de la población, fusiló a cinco personas que a juicio de los vecinos había provocado daños a la comunidad. *La gente no durmió esa noche... para mantenerse en pie bebieron hasta agotar el licor de las cantinas... la gente sentía que había perdido algo... con la quema de la municipalidad se destruía el centro de la unidad civil de la localidad.* (IC 218, Quetzaltenango, años 80.)

En la zona mam las fuerzas oficiales ejecutaron masacres. En 1981, once personas de una misma familia, a quienes se les sindicaba de preparar alimentos para los guerrilleros, fueron asesinados en horas de la noche por hombres armados que se desplazaban en jeeps del Ejército. El hecho ocurrió en el caserío Los Alonzo, San Juan Ostuncalco, y se conoce como la masacre de Los Alonzo. En julio de 1981, en Zunil, elementos de la Policía Judicial secuestraron a diez personas vinculadas a la Iglesia católica y fueron asesinadas esa misma noche. Sus cadáveres aparecieron en las cercanías de un puente sobre el río Salamá, en El Palmar. En agosto de 1982, hombres que viajaban en un picop y con armas de grueso calibre detuvieron en la madrugada a un bus extraurbano que salía de San Juan Ostuncalco, bajaron a los trece pasajeros, jornaleros que se dirigían a trabajar a El Rincón. Luego de ordenarles ponerse boca-abajo los ametrallaron; murieron diez personas (REMHI, *Contexto del conflicto armado en la arquidiócesis de Los Altos*, 1997. Mimeo).

5. La URNG

Desde su recomposición a partir de 1975 y hasta la fase final de las negociaciones de paz, el movimiento guerrillero transitó varias etapas. Por una parte, evolucionó de la fase meramente organizativa, a una expresión consolidada en el territorio nacional. Por otra parte, fue un movimiento con recurrentes síntomas de división que, sin embargo, confluyó en una alianza estratégica el 7 de febrero de 1982: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Finalmente el conjunto de organizaciones evolucionaron del accionar exclusivamente militar (foquismo, frentismo) a la negociación política; del esfuerzo individual por transformar las estructuras políticas y económicas, al reconocimiento del Estado a través de la negociación para una salida política al conflicto armado. Es en este período que ocurrió un viraje estratégico ante la imposibilidad de hacer triunfar el proyecto militar revolucionario.

Pese a la preeminencia de los cuatro grupos que integran la URNG, siguieron subsistiendo pequeños agrupamientos que se separaron durante las últimas dos décadas.

Al inicio del período, en la segunda mitad de los años 70, se marcó una nueva etapa en el desarrollo organizativo y en la visión estratégica de la insurgencia. Se constituyeron cuatro proyectos separados, que confluyeron en la forma de la lucha armada: las (terceras) Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), desprendidas de las segundas FAR (PGT-FGEI); el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), nacido de la escisión de las segundas FAR; la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), originalmente llamada Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, también surgida de una ruptura del regional de Occidente de las FAR; y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que sufrió sucesivas fracturas durante esa década.

La mayoría de las organizaciones guerrilleras se fundaron por iniciativa de intelectuales de izquierda (clase media, profesionales y estudiantes universitarios), hasta que lograron implantarse en territorios rurales y crecer entre el campesinado indígena del altiplano y el noroccidente del país.

En sus programas plasmaron un proyecto de sustitución del Estado capitalista, si bien no todas las organizaciones sustentaban una línea marxista-leninista. Por último, la desaparición del campo socialista coincidió con la modificación del discurso político que pasó a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, imprimiéndole otro contenido a su quehacer. El último remezón del viraje lo ha constituido la participación en el esquema político formal, nuevamente por medio de vínculos con el movimiento popular.

El EGP

El EGP surgió a luz pública en junio de 1975 con el asesinato de Luis Arenas Barrera, *El Tigre* de Ixcán. Para cuando esta acción tuvo lugar habían transcurrido tres años desde que el EGP había iniciado su implantación en Ixcán, en terrenos de la cooperativa Ixcán Grande. Esta fase estuvo a cargo de una decena de sobrevivientes de la guerrilla de la década anterior, entre quienes se encontraban Ricardo Ramírez (*Rolando Morán*) y Mario Payeras (*Benedicto*). El

grupo, según narra Payeras en **Los días de la Selva**, ingresó a territorio guatemalteco desde México y tenía como misión asentar las bases para el ulterior desarrollo de lo que, en pocos años, llegaría a ser la más fuerte y conocida de las organizaciones guerrilleras en el período.

Con el surgimiento del EGP se marcó un viraje en la estrategia, concepción organizativa y relaciones con la población, a partir de lo que sería su línea de masas. El EGP rompió con el foquismo, cuyo fracaso como estrategia de organización militar asumían los nuevos grupos en ciernes, así como los ya existentes. *Aunque el movimiento guerrillero estuvo desorganizado desde 1968 hasta 1972, ya se había empezado el proceso de reorganización; en realidad, el reconocimiento de los errores de la estrategia del foco, marcó la primera etapa de ese proceso* (Jonas, 1994).

Además de criticar lo que consideraron los principales errores del foquismo y del militarismo en la experiencia de la década anterior, los precursores del EGP cuestionaron que dentro del análisis de clase de las FAR y del PGT hubiesen obviado la cuestión indígena. A partir del balance realizado de esa experiencia se gestó la estructuración de las nuevas expresiones armadas, en busca de la insurrección popular y la toma del poder político. *El foquismo fue sustituido por una estrategia de guerra popular prolongada, con fuerte influencia de la experiencia vietnamita* (Jonas, 1994).

En su declaración de octubre de 1979, publicada como condición para liberar a Jorge Raúl García Granados, el EGP reiteró el sentido de su visión estratégica y su objetivo en búsqueda de las masas indígenas y campesinas.

Los trabajadores en armas, organizados en el Ejército Guerrillero de los Pobres, proclamamos que el único camino para que los trabajadores y todo el pueblo tomemos el poder y hagamos los cambios revolucionarios que necesita nuestra Guatemala es la guerra popular revolucionaria. La guerra popular revolucionaria es el conjunto de las luchas políticas y militares que deben llevar a cabo las masas bajo la dirección de su vanguardia. Para derrotar al Ejército enemigo y demás cuerpos represivos de las clases dominantes apoyadas por el imperialismo; para construir a lo largo de esa lucha su propio poder político, militar y económico, lograr el derrumbe del poder enemigo y tomarlo en sus manos.

La guerra de guerrillas en el campo y en la ciudad era el método principal de lucha en la Guerra Popular Revolucionaria (GPR). Las luchas políticas de las masas en todas partes del país serían el complemento de la guerra de guerrillas. En las ciudades, en los pueblos y en muchas partes del campo la lucha revolucionaria armada de las masas tomaría formas insurreccionales. Pero era en las montañas donde esperaban hacerse fuertes para integrar las columnas principales del ejército guerrillero (Payeras, 1991).

Fue a partir de esta visión que la actividad organizativa del EGP durante su fase de implantación y generalización de la guerra de guerrillas se concentró en la incorporación de las masas indígenas del altiplano occidental y noroccidental del país, y en el desarrollo de la estructura funcional del frente urbano, como abastecedor de los frentes rurales. Esta labor constituía el cimiento de lo que

sería su concepción de la guerra: el frentismo, incorporado de la experiencia vietnamita. La crítica básica al foquismo de ausencia de incorporación de las masas, sería expresada en la búsqueda de las acciones que permitieran subsanarla. El frentismo, de acuerdo con lo que fue la experiencia vietnamita, implicaba estructurar a las fuerzas rebeldes en tres fases de desarrollo: 1. Los grupos armados (escuadras, en forma clandestina) que se dedicaban a realizar reconocimientos y evaluación del terreno y la comunidad, sin involucrarse en acciones militares, debían asegurarse la implantación en el terreno. 2. Los grupos guerrilleros propiamente dichos, que ejecutarían las acciones militares y de organización y 3. La fase superior o del pueblo en armas que conllevaba a la insurrección popular. Esto implicaba la construcción de poderes locales en los territorios liberados (Harnecker, 1982).¹⁹

Payeras resumió esta concepción en un balance crítico del modelo y explicó el origen de la masiva incorporación del campesinado indígena a la guerrilla.

El desarrollo se produce a través de etapas que se miden en relación a los factores estratégicos del proyecto: implantación generalización de la guerra de guerrillas disputa de masas, terreno y poder local... Durante la etapa de implantación en sus fases secreta y pública (1972-1979), el problema central fue el de la sobrevivencia y el desarrollo organizativo en secreto y esto dependía en lo fundamental de un objetivo que determinó a su vez el carácter y la duración de las distintas fases de la etapa: la vinculación en términos político-organizativos con las fuerzas motrices, con la base social del proyecto. En la montaña, desde el punto de vista orgánico, la incorporación del campesinado pobre se tradujo en la aparición de una nueva categoría político-militar: la base social de apoyo (Harnecker, 1982:302).

Este modelo aplicado por el EGP tuvo su expresión en los Comités Clandestinos Locales (CCL), base o núcleo de la participación social según la cual todo mundo tenía una tarea que desempeñar en la revolución. Según el esquema organizativo seguido, al formarse varios CCL se conformaba un distrito guerrillero; varios distritos integraban una región, y varias regiones constituían un frente guerrillero. En el período de su mayor auge organizativo, el EGP llegó a contar con siete frentes guerrilleros y abarcó casi un 80% del territorio nacional. Fuentes del Ejército estiman que esta organización llegó a contar en 1981 con aproximadamente 250,000 personas incorporadas en los frentes guerrilleros, ya fuera como combatientes armados o como integrantes de las bases de apoyo.

19 En la entrevista a Marta Harnecker, Morán responde a la pregunta de *¿cuál es el papel que deben jugar las masas en la guerra? Dice: por una parte tienen una función militar. Las masas forman y enriquecen los destacamentos guerrilleros, las masas se organizan y constituyen los grandes destacamentos paramilitares, las masas se organizan y constituyen también los grandes destacamentos de autodefensa del pueblo. Todas estas son las formas militares en que participan las masas en la guerra, Ellas participan también en la economía de guerra: producen para el Ejército popular, producen también para el sostenimiento de los organismos políticos clandestinos que no pueden sobrevivir sin esta aportación de las masas.*

Esta estructura, que demandaba la participación de la comunidad -algo que en términos de la guerra misma es conocido como la vietnamización del área- incluía entre otras cosas la fortificación del terreno por parte de los mismos habitantes de la zona. Una labor que es conocida en los anales del EGP como la autodefensa y en algunos casos como la autodefensa armada.

La autodefensa son los organismos que las masas constituyen para defender sus actividades y las acciones que les son propias, en condiciones en las que ya no se pueden amparar por ninguna legalidad; son los instrumentos de protección que usan las masas frente a un enemigo feroz... Por sus características los órganos de autodefensa son también el germen y el puente entre las masas y las fuerzas guerrilleras y las fuerzas regulares de la revolución; así comienzan las masas a tomar conciencia de su participación en la guerra. La defensa de las masas corre a cargo de los organismos de autodefensa, que son a la vez una selección político-militar y una cantera para fortalecer las filas de nuestras fuerzas guerrilleras y las fuerzas militares regulares revolucionarias (Harnecker, 1982).²⁰

En su esfuerzo por desarrollar la estrategia de GPR (mediante los frentes guerrilleros), el EGP impulsó simultáneamente la construcción de sus estructuras militares mediante un intenso trabajo de vinculación con organizaciones de masas existentes y la creación de expresiones organizativas.

Tres son los componentes fundamentales en la línea revolucionaria de la guerra popular: la estrategia militar, la línea de masas y la línea política internacional... La aplicación y desarrollo práctico de las tres orientaciones mencionadas, constituyen el factor que transformará la correlación de fuerzas que ahora es desfavorable para la revolución y el EGP (EGP, Línea de masas, s.f. Mimeo).

En ese sentido, cuatro fueron los objetivos principales que el EGP se trazó en su política de vinculación con las masas.

1. Engrosar las filas de las fuerzas armadas revolucionarias y superar en número a los efectivos del Ejército oficial; asegurarse que los efectivos militares y paramilitares a movilizar fuesen abrumadoramente superiores en número a los del enemigo. La gama de participación será inmensa, irá desde las columnas regulares las formaciones guerrilleras, las unidades paramilitares generalizadas, los grupos de sabotaje extensivos, los organismos de autodefensa y la acción insurreccional. (Ibid.)

20 Al explicar cómo operaba la autodefensa, Morán reiteraba que estos grupos estaban constituidos por los simpatizantes más cercanos al EGP. *Ellos tienen como función velar por la seguridad de la aldea, de los comités clandestinos locales, de la organización de sus dirigentes y de las mujeres de los guerrilleros que se han alzado. Según sean las condiciones, montan sistemas de vigilancia, de alarma y, en algunos casos, de defensa armada, que incluye emboscadas y trampas (Harnecker, 1982).*

2. La construcción de la base social y política. *Tiene que estar constituida por todo el pueblo, por todos los sectores populares que directa o indirectamente sufren la explotación y la opresión. El derrumbe del enemigo sólo es posible mediante el aislamiento político total y su derrota militar definitiva.* (Ibid.)
3. Construir la base económica material de la GPR. *“El triunfo de la GPR en nuestro país es concebible mediante la sustitución gradual del poder enemigo local por el Poder Revolucionario. Para que el poder local se consolide y mantenga, es necesario que esté no solamente respaldado por las masas, sino que estas participen directa y activamente en su ejercicio. No puede existir infraestructura ni estructura del poder local revolucionario, si no es con el concurso de toda la masa, puesto que no hay ninguna otra fuente de recursos para hacerlo funcionar.* (Ibid.)
4. Transformar la visión de la vida y el mundo. *Librar una lucha ideológica, para cuya victoria final, también es indispensable la participación de las masas. De otra manera la transformación necesaria para la construcción de la nueva sociedad podría producirse de una forma muy lenta, con lagunas y accidentes estancamientos y retrocesos. La necesidad de acelerar el proceso revolucionario torna indispensable la tarea de transformar la conciencia de las masas, liberándola de las concepciones reaccionarias provenientes de las clases explotadoras y contagiándola de los elementos de la ideología proletaria revolucionaria.* (Ibid.)

La concepción del EGP se basaba en que a las organizaciones de masas es posible imponerles cierto grado de disciplina, pues están en condiciones de asimilarlo y comprenderlo. Se les puede imponer, decía Rolando Morán, ciertas formas de organización que no son las normas libres que tienen las agrupaciones gremiales, sindicales y cooperativas.

Si bien estas organizaciones no están formadas por militantes, aceptan los principios de lucha del EGP. Así se explica que en Guatemala exista el CUC, el FERG (Frente Estudiantil Revolucionario Robin García), los Cristianos Revolucionarios, la Coordinadora de Pobladores y los Núcleos de Obreros Revolucionarios, en cuyos volantes lo que se plantea es el derrocamiento del gobierno y la toma del poder y a los que, sin embargo, el enemigo no puede golpear, porque forman parte de la masa, pero su organización es una organización compartimentada, clandestina... No se trata ya de un trabajo individual y aislado de agitación y organización revolucionaria clandestina en el seno de las masas... Esta es una nueva concepción del trabajo de masas. Ya no se trata de tener un grupo en un sindicato para que gane las elecciones y controle la directiva del sindicato y que considera que cuando esto se logra ese sindicato ya está bajo su influencia. A nosotros no nos importa fundamentalmente la directiva, lo que nos importa esencialmente son las bases y, entre ellas, los sectores más avanzados. Cuando nosotros decimos que tenemos un sindicato es porque las bases son nuestras, no porque necesariamente lo sea la directiva (Harnecker, 1982).

En este terreno fue decisiva su relación con el CUC, que llegó a incorporar a sus filas a decenas de miles de campesinos en el noroccidente del país y en la costa sur. Sin embargo, y contrario a su declarada filosofía de clandestinidad y compartimentación (EGP, *Los cinco principios*, s.f.), el EGP hizo públicos sus vínculos y contactos con esta organización campesina, no sólo en declaraciones de su comandante en jefe sino en documentos presuntamente confidenciales manejados por su dirección que llegaron a manos de los servicios de inteligencia del Ejército. *Si algo caracterizó, precisamente, no sólo en ese período sino posteriormente la conducta y la actitud de la dirección del EGP que, al igual que resto de organizaciones guerrilleras, fue el manejo liberal de los documentos y la información sobre organizaciones amplias que estos contenían.* (IC 217, Guatemala, años 80.)

En un análisis sobre los documentos que el Ejército presuntamente incautó al EGP a finales de 1982, la revista *Crónica* citó las declaraciones de un oficial militar: *Los miembros del EGP siempre han escrito muchos documentos* (*Crónica*, 259). Estos documentos, que casi en su totalidad llegaron a manos del Ejército, revelaban un compromiso entre las organizaciones populares de masas y la organización guerrillera. En muchos casos, tal y como se expresa en las citas aquí incluidas, se apreciaba a aquellas como una extensión de los agrupamientos que se consideraban vanguardia de la sociedad.

Por ejemplo, en la citada entrevista con Harnecker, Morán refiere:

Hay decenas de miles de indígenas de nuestra zona incorporados a los planteamientos del EGP, plenamente conscientes de que son nuestros planteamientos. El CUC, por ejemplo, organización campesina afín al EGP, es una organización muy querida por los campesinos indígenas... El CUC rebasa esquemas previos de organización... un grupo inicial del CUC se forma en una aldea, se trata de un comité secreto que desarrolla un trabajo de propaganda hasta que capta a la mayoría de la aldea y la incorpora al trabajo de masas del CUC. En el frente guerrillero 'Luis Turcios Lima' que se encuentra ubicado en la costa sur del país, tenemos ya algunas fuerzas guerrilleras regulares: ¿En qué se asientan esas fuerzas además de la geografía? Se asientan en que las aldeas de la región funcionan organismos de masas revolucionarios, hay asambleas locales del CUC que permiten el surgimiento de las fuerzas guerrilleras (Harnecker, 1982).

Un texto revelador es el informe de la Comisión de Trabajo Amplio de Masas (COTRAM), del EGP, de enero de 1981, que incluye un recuento numérico, un inventario, del estado de fuerzas del EGP en los distintos campos del movimiento social organizado.

Dos hechos fundamentales expresan, por una parte, la vinculación del TAM (Trabajo Amplio de Masas) con las necesidades de la guerra de guerrillas, y por la otra, la capacidad adquirida para participar significativamente en amplias movilizaciones de las masas trabajadoras. Ejemplo de lo primero es la solidaridad desarrollada con los campesinos

del Quiché, cuyo punto más álgido fue la ocupación de la Embajada de España; y de lo segundo, el papel jugado por MK (movimiento campesino, o CUC) en las luchas de la zafra en febrero del pasado año, las cuales constituyen sin duda la más amplia movilización del proletariado agrícola y campesinos pobres de la costa sur en toda su historia... También hay que considerar que a lo largo de esta primera fase se fueron sentando las bases de un desarrollo anómalo cuya manifestación ha sido que, junto a la actividad propia del TAM, se van impulsando desde la COTRAM formas de organización y de acción que corresponden a la actividad guerrillera clandestina. Este desarrollo anómalo se produce en relación directa con las deficiencias de la estructura clandestina de KT que no logra cumplir a cabalidad con sus funciones políticas y militares (EGP, COTRAM, El desarrollo del trabajo amplio de masas en la coyuntura actual, 1981).

Las agrupaciones de masas de la capital y otros cascos urbanos se convirtieron entonces en bases de apoyo propagandístico y logístico de los frentes guerrilleros, así como en semilleros para las estructuras militares clandestinas del EGP. El Frente Guerrillero Otto René Castillo, cuya formación corrió a cargo de Mario Payeras, introdujo la autodefensa armada en el quehacer de organizaciones gremiales. *La saña con la que muchos estudiantes fueron asesinados tiene que ver con la convicción que tenían los cuerpos represivos de que todos los miembros de los grupos legales estaban involucrados en la guerrilla o por lo menos ligados a ésta (IC 251, Guatemala, años 80).*

El documento de la COTRAM detalla establecimientos de secundaria y actividades del movimiento estudiantil, sindicatos, pobladores y se refiere a la labor entre los sectores religiosos (católicos y protestantes), incluyendo número de agentes de pastoral por departamento atendido, catequistas, así como parroquias y grupos.

Hacia 1981 el EGP se proponía profundizar la línea de masas creando un frente unitario de todas las agrupaciones que el EGP había penetrado o creado.

Para la nueva fase estratégica, en el marco de la generalización de la guerra de guerrillas, se contempla la necesidad de una mayor coordinación entre el Trabajo Amplio de Masas (TAM) y la guerra de guerrillas, la cual ya se está logrando, aunque debe profundizarse, y para ello el FP-31 es un instrumento orgánico necesario, sobre todo en lo que respecta a la contribución de la lucha de masas en la fijación y desgaste de las fuerzas enemigas, y en las acciones de las masas en apoyo de los planes de campaña de las fuerzas guerrilleras, incluyendo la lucha contra la represión en todas sus formas, desde la protesta hasta las formas más elevadas de autodefensa. (EGP COTRAM, s.f.)

Mientras en los centros urbanos el EGP agrupaba organizaciones gremiales cuyos miembros se ubicaban domiciliariamente en forma dispersa, en el campo el hilo de unidad lo daba el lazo comunitario. Allí el motor era las carencias de los habitantes de zonas rurales, en particular la tierra, y además el abandono y represión del aparato estatal y los finqueros. Tanto en los relatos de Payeras en **Los Días de la Selva**, como en las declaraciones de Morán a Harnecker, se

destaca el hecho del respaldo que la guerrilla obtuvo en importantes sectores de la población. Si bien no existían territorios totalmente liberados y bajo control de la guerrilla, sí hubo zonas íntegras en las que el Ejército no podía entrar a principios de los años 80.

Además el EGP logró una expresión magistral de la estrategia del frente guerrillero y de la maximización de la línea de masas, al tener bajo su influencia o control a comunidades enteras en su zona de operaciones. El éxito de su estrategia descansaba en la eficacia de su base de apoyo. Sin embargo, el andamiaje militar de esa organización no creció al mismo nivel que su apoyo social, y el desbalance resultó evidente cuando se generalizó la contraofensiva del Ejército. Las comunidades rurales se quedaron solas enfrentando el embate contrainsurgente, pues el ejército guerrillero no estaba en capacidad de proteger ni su estructura ni la base social de la zona en que se desenvolvía.

Ese impacto, aunado a las crecientes divergencias en torno a la conducción de la línea estratégica, terminó por generar la más importante escisión en el seno del EGP. Fue una fractura cuyo origen se remonta a principios de 1983, cuando uno de los miembros de la Dirección Nacional (DN), el comandante *Camilo* externó sus diferencias con el mando de esa organización. Un memorándum de la DN de esa fecha explica lo que a criterio de esa organización constituyó un acto de insubordinación de *Camilo* y *Milton*, a quien les secundaba *Armando*, que pudo conducir a una ruptura o fracción dentro del EGP.

El asesinato de *Camilo*, ocurrido en la ciudad capital el 8 de agosto de 1983 exacerbó la desconfianza interna. La información del Ejército afirmó que *Camilo* había muerto en una operación de ajusticiamiento dirigida por el EGP. Basó sus aseveraciones en un documento que supuestamente se habría encontrado entre las pertenencias del guerrillero asesinado, en el que se evidenciaban las divisiones en el EGP. En un comunicado interno trasladado a los cuadros de dirección intermedia se expuso el desmentido del EGP a la versión oficial: *Categorícamente le informamos a los miembros de la organización que la muerte de Camilo no fue obra de ningún compañero revolucionario miembro del EGP* (EGP, 15/8/83, Mimeo).

En el comunicado, además, se incluye una serie de explicaciones respecto de los orígenes de la crisis a que condujo la supuesta insubordinación de *Camilo*. Entre otros, el párrafo 6 afirma que:

En efecto, Camilo, Milton y Armando, en el proceso de deformación y desviaciones a que sus propias concepciones y prácticas los fueron conduciendo, violaron flagrantemente las medidas de seguridad, establecieron vínculos con el enemigo, supuestamente en calidad de contactos para información en favor del movimiento revolucionario, hicieron de la capital el centro de sus operaciones, persistieron en la realización de secuestros económicos sin tener la capacidad militar para hacerlos y continuaron en la grave práctica de la violación de la moral revolucionaria, conduciendo a sus incondicionales a la completa deformación y al abandono de todo principio y norma revolucionaria. En esas circunstancias, ellos y sus confundidos seguidores seguirán siendo presa fácil para el enemigo (EGP, 15/8/83, Mimeo).

Al igual que varios militantes del EGP, *Milton* no dio crédito a la información de la DN y se separó del EGP junto a un grupo de sus seguidores. La columna de *Milton* (Dirección Armada del Pueblo, DAP) fue paulatinamente desarticulada hasta que el grupo sobreviviente se fue al exilio. Sin embargo, las diferencias apenas estaban aflorando y harían crisis en enero de 1984 cuando *Benedicto* (Mario Payeras) y un importante grupo de militantes abandonarían el EGP luego de una intensa lucha interna por reencauzar la aplicación de la estrategia militar y política. El eje impulsor de la ruptura del grupo de *Benedicto* tomaba como punto de partida el balance que éste había elaborado sobre los resultados de la línea militar y de masas.

Con las debilidades manifiestas en el proyecto militar, el éxito alcanzado en la línea de masas resultó minimizado ante la acción contrainsurgente del Ejército. Mientras se aseguró un reacomodo en las otras áreas, la línea política internacional pasó a ocupar hacia mediados de los años 80 el plano dominante del esquema. La presencia en el exilio de un número importante de miembros del EGP, permitió la estructuración de un frente internacional sólido, disciplinado y altamente efectivo en la propaganda y la recaudación de fondos. A su vez, la línea de masas se trasladó a la búsqueda de la base social entre las comunidades de refugiados.

En la medida que la embestida militar del Ejército arrinconaba a las tropas rebeldes en la zona fronteriza (Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché), éstas buscaban refugio en los campamentos que inicialmente se habían establecido en la zona. Las constantes incursiones del Ejército a los campamentos de refugiados, so pretexto de perseguir a la guerrilla, dieron lugar a su traslado a zonas alejadas de la frontera. Sin embargo, el EGP no dejó de considerar a estos grupos como su base social y continuó buscando el contacto con ellos, al igual que lo hizo con las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), que habían sobrevivido por propia iniciativa en condiciones de persecución. Pero una vez más, en los documentos internos del EGP incautados por el Ejército en 1992 se hizo referencia a su relación con los refugiados y las CPR.

Desde 1980 el EGP se mantuvo en el proyecto unitario del movimiento guerrillero. En esa perspectiva, si bien adecuó los elementos generales de la estrategia de la unidad, conservó su identidad como grupo y la aplicación práctica de su estrategia. La línea de masas, en el fondo, volvió a ser la hegemónica sobre la militar y la diplomática. En el discurso de la negociación para la salida política del conflicto armado se partió de la consigna de que *el diálogo es lucha, no resignación*.

La ORPA

La Organización del Pueblo en Armas (ORPA), surgió de las filas de las FAR y, al igual que el EGP, como una crítica del *foquismo*. La raíz de ORPA se sitúa en la estructura de la Regional de Occidente de las FAR (FARO) desde donde externó sus desacuerdo con el contenido racista de la estrategia de las FAR, por la falta de inclusión de la cuestión indígena, habiendo concentrado sus esfuerzos en el altiplano occidental (Jonas, 1991).

La organización de la ORPA duró ocho años, a partir de 1971 cuando la crítica a la estrategia y a la política de *ajusticiamientos* de las FAR marcaba el

distanciamiento con la dirección. Los últimos intentos que realizó la comandancia de las FAR para evitar la ruptura, chocaron con la decisión del FARO de buscar otros caminos. A éstos les inquietaba la cita que el comandante en jefe de las FAR hacía a Gaspar Ilom, pues temían un encuentro violento.

Quienes iniciaron el proyecto de ORPA fueron Rodrigo Asturias (*Gaspar Ilom*), Luis Ixmatá, Javier Tambriz, Efraín Bámaca (*Everardo*), *Héctor, Raphael* y *Sergio*. Aunque distanciada ideológicamente del EGP (pues esta agrupación sustentaba una línea marxista, y la ORPA no) la organización formada por Asturias también se definía por la estrategia de la Guerra Popular Revolucionaria. Un proyecto basado en el desarrollo de la línea militar, de masas y la política internacional.

ORPA salió a luz pública el 18 de septiembre de 1979, cuando un comando guerrillero al mando de Raphael, ocupó la finca Mujuliá. Hacia 1975, esa organización ya había logrado consolidar su proyecto, tenía asegurada la sobrevivencia de sus fuerzas, mientras mantenía una política de evitar los enfrentamientos militares. La fase de preparación había sido larga y tenía dos resultados concretos: la consolidación de su pequeña fuerza militar (un pelotón) y de su trabajo con la resistencia campesina, que fue la vía mediante la cual ORPA aplicó su línea de masas. (IC 231, San Marcos, años 70.) Esta fue una de las características que le diferenció del EGP.

Desde un principio la ORPA desarrolló una política de evitar el involucramiento de las comunidades y de las organizaciones legales con los frentes militares.²¹ La labor de masas de ORPA en el campo se dirigió a construir las resistencias campesinas, un trabajo que estuvo esencialmente a cargo de Efraín Bámaca.

La fase de consolidación fue entre 1975 y 1979, cuando anunció públicamente su existencia. A partir de entonces su crecimiento sufrió un cambio sustancial. De una política selectiva de reclutamiento entre 1973 y 1978 (año en que considera que sus estructuras de cuadros están consolidadas) pasó a una masiva incorporación, especialmente en el campo donde creció entre los sectores indígenas. Sus principales zonas de asentamiento fueron entre el volcán Tacaná y el lago de Atitlán. (IC 229, San Marcos, años 70 y 80.)

En las zonas urbanas, sobre todo en la capital, donde construyó su retaguardia estratégica, la ORPA creció entre sectores acomodados, clase media alta, clase media y clase media popular. Lograron estructurar una fuerza de elite, y enviaron a su gente al exterior a recibir entrenamiento militar. En ese mismo período la ORPA avanzó en montar una infraestructura logística a través de un aparato grande. Todos los días había viajes a los frentes desde la ciudad, donde se asentaba su principal abastecimiento. Fue un mecanismo bastante seguro en sus inicios.

En esos años se produjo la primera división de ORPA. Edgar Palma Lau (*Chicho*, miembro de la Dirección Nacional), empezó a cuestionar lo que consideraba el autoritarismo y el personalismo de *Gaspar Ilom* en la conducción de la ORPA. La crítica se extendió a lo que algunos líderes consideraban era un papel preponderante de algunas comandantes mujeres.

21 Esta posición constituía una crítica a la línea de masas del EGP.

Se expresa una especie de maridaje por el cual las mujeres alcanzan posiciones de influencia muy grande, al extremo que cuadros mujeres de Dirección Nacional entablan relaciones de pareja con otros miembros de ese organismo. Esa situación dio lugar a que se tomaran decisiones a partir de 'berrinches' y se produjera un manejo antojadizo del aparato logístico, del trabajo político y se interfiriera en los mismos aparatos. (IC 231, ORPA, años 70 y 80.)

La suspensión de cuadros, la ortodoxia en el estilo de trabajo, la palabra del Comandante en Jefe convertida en ley, el peso de los cuadros que acapararon posiciones, estructuras, fondos y logística, entre otros, constituyeron las críticas tras año y medio de confrontaciones que culminó con la salida de Palma Lau entre 1977 y 1978 (IC 231, ORPA, años 70 y 80). En 1979 se iniciaron las pláticas para la formación de *La Tripartita*. Para esa época la guerrilla tenía ya una fuerza organizativa, incluso con apoyo de funcionarios públicos, y un aparato de inteligencia estructurado, aunque no se hablaba de operaciones militares de gran envergadura.

La logística estaba atrasada por problemas en El Salvador y controles en Honduras; pero, contrario a lo que se piensa, sus fuerzas militares en 1979 eran mínimas: no pasaba del pelotón. La organización que logró mejor articulación fue el EGP, pero su desarrollo también estaba limitado por el problema de la logística. *Ahí se comete el error estratégico. En 1979 ORPA sale a operar y el EGP incrementa sus acciones. Ambas enfocan su lucha contra Lucas García y creen que lo de Nicaragua será decisivo en el desenlace en Guatemala* (IC 231, ORPA, años 70 y 80). Las FAR empiezan a estructurar su fuerza en Petén, y las tres organizaciones deciden no incorporar al PGT a la coalición, ya que estaba muy dividido y sospechaban que el Ejército lo había infiltrado. Finalmente decidieron incorporar a la facción del PGT conocida como *Núcleo de Dirección y Conducción*.

Ante el éxito de las organizaciones y la facilidad de operar, se produjo una euforia y relajaron las medidas de seguridad. El trabajo organizativo de ORPA en la ciudad se saturó, y entre 1979 y 1980 creció su presencia organizativa, que no se reflejaba en la fuerza militar. Sus unidades estaban compuestas por 20 a 30 combatientes y los frentes no pasaban de 100 miembros, divididos en tres pelotones. Éstos tenían gran conocimiento del terreno, pero para operar dependían de zapadores y, por otro lado, basaban toda la logística en la ciudad.

En 1979 ORPA decidió concentrarse en la ciudad, pero eso recargó la infraestructura urbana. Los cuadros políticos comenzaron a trabajar en función de las necesidades de los frentes, y bajo presión fueron destinados a la fabricación de minas. Así, en una misma casa de trabajo organizativo comenzó a funcionar el aparato militar. Sin tener la fuerza militar apropiada decidieron lanzarse a la guerra.

El éxito de ORPA en el campo fue su penetración en las bases campesinas, gracias a los cuadros naturales del sector. Sin embargo, en otros niveles se desarrolló una actitud que hacía a los cuadros funcionar como una hermandad alrededor del Comandante en Jefe. *El culto a la personalidad es infalible* (IC 251, ORPA, años 70 y 80).

En esos años la estrategia del Ejército no fue tan efectiva, pero los jefes guerrilleros no sabían exactamente qué hacer. Entre 1979 y mediados de 1981 la euforia se apoderó de los dirigentes por la concentración de fuerzas que estaban logrando, aunque no eran fuerzas militares. Esa etapa de desarrollo no logró madurar, pero las acciones de los pelotones y escuadras generó triunfalismo. Efectivamente, entre las organizaciones guerrilleras la que más éxitos logró con fuerzas militares de elite fue la ORPA. La estrategia del Ejército consistió en neutralizar las estructuras de la guerrilla, e impedir su capacidad de articular nuevas. Así, la fuerza armada pudo resolver el problema táctico de impedir que se desarrollara la guerra.

La guerrilla, entretanto, siguió creciendo en sus aparatos. El frente urbano perdió su Fuerza de Operaciones Especiales y comenzó a girar en torno al aparato. Sus cuadros comenzaron a ser movilizados de la ciudad y se emplearon todos los medios (de 30 a 40 personas, carros, documentos, contactos) para los aparatos.

Insisten en apoyarse en gente que ya estaba en la capital y que se hace para atrás. Eso provoca que se empiece a dejar pistas al enemigo. Alquiler de casas fuera de lugar, violación de medidas de seguridad, casas con alquileres de Q600 (equivalentes a dólares)... Todo el mundo sale en su legalidad. En una casa tenían 30 gentes esperando salir. Ahí funcionaba el aparato y a la vez era la vivienda de un jefe de la organización. Empiezan movimientos masivos de descompartimentación de cuadros (IC 251, ORPA, años 70 y 80).

Entre 1980 y 1981 hubo un intento de desplazar del poder a las mujeres. Pero en ese momento ORPA comienza a perder sus recursos. *Se recibe el primer golpe, que trae una cadena de golpes en el 81... allí cae la casa de la zona 15. Tal era la casa de pantalla que los vecinos creyeron que se trataba de una casa clandestina de prostitutas (IC 231, ORPA, años 70 y 80).* Un campesino logró escapar, pero el resto murió en combate con el Ejército.

Juan Zea tenía a su cargo el proyecto logístico más grande de ORPA, y había renunciado del trabajo urbano, pero el Ejército lo mató dos días antes de que se fuera a la montaña. *Había decidido ir a despedirse de su mamá y tomó la Calzada Roosevelt, donde le tienden una emboscada (IC 251, ORPA, años 70 y 80).* Entonces los guerrilleros desmontaron la bodega logística, pero empezaron a tener cada vez mayor presión por el exceso de armas concentradas.

En la casa de seguridad de la ORPA de la zona 15 el Estado Mayor del Ejército encontró un informe de quienes habían dirigido la defensa, y dos días después sus organismos de inteligencia identificaron una casa de la zona 12 en la que los guerrilleros habían concentrado parte del equipo rescatado de la bodega logística. También capturaron a tres militantes.

El mando se paralizó, no supo qué hacer. La captura de cuadros y militantes de logística, organización política y militantes urbanos representaba un duro golpe... Raphael, por ejemplo, uno de los caídos, era un buen jefe militar que entendía la cuestión política. Él había construido

el frente urbano... no era tan allegado a Gaspar. El frente urbano era el soporte estratégico de lo demás (IC 231, ORPA, años 70 y 80).

Esos golpes sorprendieron también al EGP en medio de la euforia de la insurrección, con fuerzas guerrilleras que no tenían capacidad de defenderse. Sin embargo, lejos de que la ORPA ordenara un repliegue de su fuerza en la ciudad, se produjo el enfrentamiento hasta 1982. El único cuadro sobreviviente reestructuró el frente urbano con dos columnas de 75 integrantes cada una, las cuales ejecutaron operaciones simultáneamente. *Pero ese frente estaba ya infiltrado por el Ejército a través de dos militantes que llegaban del EGP y del PGT (IC 231, ORPA, años 70 y 80).* En 1984 el Ejército destruyó la estructura y capturó a casi a todos sus integrantes. Esto produjo la desarticulación de las dos columnas y la caída de aproximadamente 400 colaboradores. Las fuerzas oficiales mataron a los dos oficiales a cargo de las columnas y capturaron a muchos cuadros políticos y militares.

Con esos golpes desaparecieron la estructura política y la militar de elite. En ese mismo año, además de que el Ejército había logrado desarticular los frentes más importantes, se produjo la ruptura de *Nuestro Movimiento*, MRP-Ixim. A raíz de problemas internos por los que estaban atravesando las FAR, *Pablo Monsanto* intentó negociar la consolidación de un frente interno conjunto con la ORPA. Así es como se reunió con el comandante de la zona de Atitlán, *Pancho* (Pedro Pablo Palma Lau), quien baja a Chimaltenango. De más de 150 integrantes de las FAR, finalmente aparecieron ocho que intentaron incorporarse a la columna Javier Tambriz de la ORPA, y al no conseguirlo se unieron con el grupo PGT-Álamos.

Mientras tanto, *Pancho* continuó al frente del Javier Tambriz e inició un proceso de reacomodo de sus fuerzas; creció el número de integrantes y ampliaron su presencia territorial. Sin embargo, el progreso terminó cuando el sector político la ORPA decidió no continuar con la dinámica de la guerra (es decir con las operaciones militares) viendo el frente como columna vertebral, pero no como la única estructura. Se discutió que no se debía subordinar el trabajo organizativo y político a la dinámica militar, y se hizo hincapié en que se debía empezar a realizar trabajo con vistas a las elecciones de 1990 y desarrollar líderes comunitarios para neutralizar a los enemigos sin necesidad de que se enfrentaran militarmente.

La lucha militar fue siendo cada vez más baja. La dirigencia analizó que con los cambios en el escenario mundial, tarde o temprano la guerrilla tendría que entrar en el esquema político, y para ello debía preparar a sus cuadros y acostumbrarse a la institucionalidad. En consecuencia, se organizaron escuelas de formación. Una de las metas era cambiar el concepto de disputa del poder local por disputa del poder institucional. Al mismo tiempo se impulsó el trabajo entre las ONG respaldando a las dirigencias locales.

Ahora, frente a la imposibilidad de profundizar la discusión política, se produjo una nueva fragmentación entre 1988 y 1989, y como resultado varios cuadros políticos de mucho peso se desligaron de la ORPA. Hacia 1993 la persistencia de tales diferencias no resueltas y la imposibilidad de modificar lo que los militantes definían como el autoritarismo del Comandante en Jefe, derivaron en otro rompimiento interno que llevó al alejamiento temporal del

comandante *Santiago*, uno de los principales cuadros militares y comandante de la columna Javier Tambriz.

Si bien la ORPA había logrado el mejor nivel de formación militar con unidades de elite, no pudo sobrevivir a la esencia del foquismo, que criticó inicialmente. La embestida contrainsurgente le significó quedar reducida a dos columnas móviles, la Javier Tambriz y la Luis Ixmatá, sin conseguir crecer. Lejos de ello, entre 1990 y 1993, cuando se intentó formar el Frente Unitario de la URNG, la base de éste la integró a la Javier Tambriz que, en palabras de un declarante, *fue literalmente enviada al sacrificio y terminó diezmada por la contrainsurgencia* (IC 114, ORPA, años 80).

La crítica de los disidentes a los métodos de trabajo se dirigía esencialmente a los *ajusticiamientos* mediante degollamiento aplicado contra comisionados militares y espías del Ejército en Chimaltenango. Esta práctica enfrentó al dirigente de esa zona con la comandancia, que la rechazó.²² Sin embargo, el origen de ese método se remonta a los propios manuales de ORPA que ilustran los procedimientos al efectuar *prenses* (capturas y asesinatos) en casas y caminos. Asimismo, muestran cómo la comunidad puede llevar a cabo sabotajes, emboscadas y, lo que llaman *castigo a traidores 'orejas'*, ilustrado con fusilamiento (ORPA, sf. sn. Manual ilustrado con textos a mano).

No obstante, la ORPA se diferenció del EGP substancialmente en lo que se refiere a su relación con la comunidad, en tanto estructura social, y su involucramiento con la estructura militar. Mientras para el EGP constituían fuerza movilizadora en acciones paramilitares o de soporte militar, en ORPA representaban el núcleo de la resistencia.

Incorporada al proyecto de la URNG la ORPA mantuvo su estructura propia y actuó, al igual que las FAR y el EGP, con relativa autonomía en acciones tácticas en sus zonas de operaciones, San Marcos y parte de Sololá. En los años 90, su capacidad militar desarrollada mediante unidades de elite dejó de brillar al nivel de la década anterior. En cambio, gestó una alta capacidad diplomática y de negociación política, una característica atribuida al carácter de su Comandante en Jefe quien, según refirieron miembros de esa organización, recurre a la persuasión antes que a la confrontación abierta de las disidencias.

22 Una de los ejemplos de estos métodos de ajusticiamiento ocurrió en agosto de 1989 en las montañas de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, cuando una escuadra de la ORPA masacró a varios pobladores civiles, algunos de ellos comisionados militares, que los sorprendieron en la marcha. El mando militar -según los declarantes- fue consultado por radio antes de que se procediera a la muerte de los vecinos, y al confirmárseles que el número de ellos no pasaba de diez, les fue autorizada la matanza. Como se sabe, la guerrilla encontró en pequeños grupos a los pobladores. Cuando la comandancia se enteró de lo ocurrido ordenó enjuiciar al oficial responsable y su fusilamiento. Sus compañeros informaron la ejecución de la orden, pero simplemente le cambiaron de nombre (pseudónimo). Al final varios de ellos desertaron de la ORPA y comenzaron a ejecutar acciones de bandolerismo. Este episodio se conoce públicamente como la masacre del Aguacate y generó gran polémica porque en su momento nunca llegó a establecerse, a ciencia cierta, su autoría. El Ejército acusó, sin mucha convicción, a la ORPA, y la guerrilla señaló vehementemente a las fuerzas oficiales. Algunos informes de grupos de derechos humanos reforzaron esta tesis. Grupos de investigadores de la OEA no lograron llegar a una conclusión sólida. Las circunstancias en que estos hechos ocurrieron nos fueron narradas por testigos directos.

No obstante, es una persuasión basada en el culto a su calidad de Comandante en Jefe y no en la solución de los conflictos planteados por lo cual, tarde o temprano, un desacuerdo culmina en disidencia. Paradójicamente, fue la ORPA, con menor presencia aparente en el movimiento de masas, la que se mostró más permeable a la negociación política, aunque el secuestro de Olga de Novella, por parte de un comando bajo la responsabilidad del comandante Isaías, en agosto de 1996, en la plena recta final de las negociaciones, y el tratamiento del caso *Mincho* le acarreó un elevando costo político que incidió en su incorporación a la vida legal, como se verá en el capítulo noveno de este.

Las FAR

Hacia mediados de los años 70, las FAR, a diferencia del EGP y la ORPA, llevaban casi una década de experiencia organizada. Más que en fase de consolidación, estaban arribando a una etapa de definición y desarraigo. Así, centraron su atención en la construcción de los frentes de masas. Entre otras razones, esta determinación obedeció a las resoluciones emanadas de la tercera conferencia de las FAR, llevada a cabo en 1971. Durante el período que siguió al cónclave, las FAR dedicaron mucho de su esfuerzo a la infiltración de los sindicatos y asociaciones estudiantiles. El auge que el movimiento popular había alcanzado durante el gobierno de Kjell Laugerud, facilitó la inserción del movimiento guerrillero en amplios sectores sociales del país.

Sin embargo, en sus filas se mantuvo un concepto ortodoxo de foco guerrillero. Aunque las FAR logró cierto grado de influencia entre un sector de los trabajadores industriales, su fuerza se concentró en sectores de la clase media, incluido el campesinado rural en parte del altiplano, así como en el movimiento estudiantil de secundaria.

La práctica de control orgánico directo del movimiento popular influyó en el desarrollo del movimiento estudiantil. En 1974 el II Congreso Nacional de Estudiantes de Guatemala, marcó una pauta de la disgregación de este sector. El proyecto de resoluciones aprobado por el grupo promotor, fue sustituido por una declaración que fue leída en la clausura del evento. El señalamiento de esta anomalía que hicieron los participantes dio lugar a que personas armadas tomaran el local en que se realizaba la actividad y se rompiera la unidad entre las asociaciones estudiantiles. Un golpe a las FAR fue el enfrentamiento con la Policía de una de sus células urbanas en un asentamiento después del terremoto, pues uno de los participantes murió, mientras hubo un herido y varios capturados.

Estos hechos, además de divergencias internas en la dirección de las FAR, condujeron a la ruptura de una de sus corrientes. *A diferencia de lo acontecido en otras oportunidades, esta disidencia no fue castigada con ajusticiamiento, a pesar de que quien encabeza el movimiento era un miembro de alto nivel de dirección (Higinio)* (IC 101, FAR, años 70 y 80). La integración de este movimiento, autollamado *Minoría*, al PGT, marcó la ruptura de las pláticas de unidad que habían mantenido ambas agrupaciones.

El salida de este grupo, que significó para las FAR la pérdida de cuadros y dirigentes en el movimiento estudiantil y sindicatos, poco después del rompimiento de su regional de occidente (que dio lugar a la formación de ORPA), debilitó su estructura organizativa.

De esa cuenta, las FAR se reconcentraron de nuevo en sus fuerzas militares e intentaron hacia finales de los años 70 y principios de los 80 desarrollar el frente norte, en Petén. La mayoría de sus cuadros urbanos se instaló en esa zona. Pero de nuevo la disidencia política marcó a esa organización, y un intento por eliminar a su comandante *Pablo Monsanto*, culminó con la captura interna de los dirigentes del movimiento rebelde. No se ha comprobado, pero hay indicios de que uno de los líderes del intento de eliminación de *Monsanto*, fue objeto de secuestro y extorsión económica (IC 101, 168 y 173, FAR, años 70 y 80). *Por segunda ocasión, la ruptura no se pagó con la vida.* (IC 101, Guatemala, años 70 y 80) El frente norte de las FAR terminó mermado numéricamente y en su capacidad operativa, producto de este incidente.

Los hechos denunciados por los críticos, a saber, concentración excesiva del poder en el comandante, falta de una línea de dirección estratégica, no se resolvieron y, por el contrario, se fueron agudizando. En las resoluciones del pleno ampliado de las FAR, en 1983, se abordó esencialmente este hecho y se resolvió degradar y expulsar de la organización a algunos miembros, mientras que a otros se les dejó sin sus funciones de dirección. Pero, en todo caso, las resoluciones aprobaron como mandato, la concentración del poder en lo que se denominó la figura de la Comandancia en Jefe que, a su vez, era ocupada por el Comandante en Jefe. Es en este ente unidireccional en que descansó la conducción de las FAR. (FAR, *Resoluciones del Pleno Ampliado*, 1983). El pleno, además, resolvió reiterar su confianza en Monsanto. *Algo que implícitamente llevaba un mensaje a cualquier intento de disidencia* (IC 101, FAR, años 70 y 80).

Después de estas resoluciones el grupo armado que se quedó operando en el norte, se dedicó básicamente a la ocupación de tramos carreteros para realizar actividades de propaganda u obtención de recursos económicos, así como al derramamiento de petróleo en las márgenes de los ríos de esa región. El uso gubernamental de estos hechos como antipropaganda hacia el movimiento guerrillero, obligó finalmente a que las FAR abandonaran esa táctica.

Hacia mediados de los años 80, ya inmersas en el proyecto de la URNG, las FAR intentaron insertar un nuevo foco guerrillero en la zona suroriental del país, que no cuajó, a pesar de que se repitió en varias ocasiones. Aunque el desarrollo del frente interno fue relativamente limitado, el frente en el trabajo exterior creció con solidez. El empuje de la unidad guerrillera y la presencia de cuadros nacionales en el trabajo exterior permitieron a las FAR construir una importante estructura de soporte externo en el campo del trabajo de masas, principalmente en el sector sindical. Una nueva ruptura, esta vez con cuadros externos, amenazó la persistencia de este trabajo, aunque finalmente logró mantenerse. Danilo Rodríguez, quien había apoyado el trabajo de organización sindical, defecionó de las FAR y aunque permaneció un tiempo en el exilio, finalmente retornó para acogerse a la amnistía e incorporarse al trabajo político legal.

El acuerdo de concentración de la dirección permitió a *Monsanto* dirigir con mayor control el trabajo del frente externo y conducirlo en una única dirección. Si bien se apreciaron frentes en áreas distintas, su trabajo caminó en derredor a un sólo objetivo. La disciplina férrea de los integrantes de las FAR, en lo que se refiere al acatamiento de las disposiciones de su comandante,

contrastó con la actitud de miembros de otras organizaciones. La mística de obediencia se tornó prácticamente fundamentalista, en función de las direcciones planteadas por el Comandante (IC 168, FAR, años 80).

Ello se apreció en las llamadas corrientes en la URNG. Quien llevaba la voz cantante de la línea dura en la URNG resultó ser el comandante de las FAR. Una visión que contrasta con el esfuerzo orgánico que desde principios de los años 90 llevaba a cabo esa organización, precisamente al trasladar a Guatemala a casi toda su estructura del frente exterior. Y aunque se dio un paulatino retorno de los cuadros exteriores de las FAR, esto no redundó en un crecimiento notable de su fuerza en el movimiento popular, ni en el terreno militar. Sus fuerzas, en ambos frentes, se vieron mermadas en número y capacidad operativa. Su mística interna, en cambio, se reforzó.

Los PGT

Los años 70 iniciaron para el PGT con la génesis de la violación a su legalidad interna y con el intento de sobrevivir a la muerte de dos de sus secretarios generales.²³ Para esas fechas, según lo marcaban sus estatutos, debía haberse realizado un V Congreso del PGT. En lugar de ello, en 1972 el Comité Central aprobó un documento, conocido como el *Reajuste Táctico*, que intentaba precisar en correspondencia con la coyuntura, las acciones a desarrollar por la organización.

Las disputas internas, signadas por las divergencias en torno a la aplicación de la línea estratégica definida en el IV Congreso del PGT y alimentadas por los golpes recibidos, marcaron desde ese momento la tónica de las relaciones entre la dirección de esta organización.

Dos hechos marcaron también el sentido que tendría el desempeño del PGT. Por una parte, se concreta la disposición de la dirección por reestructurar a su estructura juvenil, la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT).²⁴ Y por otra, la muerte de *Juan Ché* en febrero de 1976. La muerte de *Juan Ché*, considerado

23 En 1972 fue capturada y asesinada la Comisión Política del PGT que encabezaba Bernardo Alvarado. En esa oportunidad, el hoy secretario general del PGT, *Carlos González*, se opuso a una acción que intentaba presionar para que los dirigentes del PGT fuesen liberados. (IC 107, PGT, años 70) La inamovilidad de ese momento contribuyó al desenlace que fue el asesinato de esos dirigentes, según la misma fuente. En 1974, Huberto Alvarado, quien asumió la secretaría general a la muerte de Bernardo Alvarado, fue también asesinado, después de haber sido capturado durante el cobro de un rescate por el secuestro de Venancio Botrán. Ambos golpes reavivaron las disputas internas en el CC por alcanzar la conducción del PGT. A la muerte de Huberto Alvarado asumió, por declinación de *Juan Che* (Joaquín Noval), *Carlos González*. Si bien Noval contaba con el respaldo del sector del PGT que se inclinaba por el pleno desempeño de la vía armada para la revolución, pensaba que su llegada exacerbaría las divergencias y, en aras de la unidad de su organización, rechazó la eventualidad de dirigirla. En lo único que se esforzó fue en unirse a otros sectores del CC para evitar que la secretaría la asumiera el dirigente *Mincho*, hacia quien en ese momento ya tenía prejuicios.

24 Se forma una comisión que reestructurará a la desaparecida JPT, disuelta durante los albores de la lucha armada por supuesta penetración del Trotskismo. En cinco o seis años la JPT logró desarrollar su estructura orgánica a nivel nacional y generar cuadros y dirigentes en todo el país.

como uno de los dirigentes más capacitados, debilitó a tal grado al PGT que en adelante sería incapaz de sobreponerse al más mínimo golpe. La reestructuración de la JPT, en un período de auge del movimiento popular, significó la formación de una nueva generación de relevo de la dirigencia del PGT.

A diferencia de la experiencia de los años 60, cuando el PGT desarrolló su estructura militar, en este período relegó el trabajo a una Comisión (la Comisión Militar, COMIL). El arraigo del PGT estuvo en las organizaciones sindicales en la costa sur y el occidente, la incipiente organización campesina en el norte (parte de El Quiché y las Verapaces),²⁵ organizaciones campesinas en el sur, sectores profesionales universitarios y de trabajadores agrícolas e industriales en las zonas urbanas del occidente, el sur del país y la capital.

De acuerdo con testimonios de ex miembros del PGT y la JPT, esta organización logró tener una estructura política que abarcaba gran parte del territorio nacional. Poseía infraestructura logística para desarrollar un trabajo militar en profundidad y crecía, especialmente entre 1975 y 1979, de manera casi geométrica entre el movimiento popular. Sin embargo esas potencialidades no se desarrollaron. Por el contrario, muchas fueron mermadas en el camino debido a la inmovilidad de su dirección. El rompimiento en 1978 de la COMIL dejó sin estructura militar al partido comunista.

Hacia 1979 se consumó el ingreso al PGT del grupo *Minoría* proveniente de las FAR y que estaba comandado por *Higinio*, quien fue incorporado a la dirección del PGT, igual que varios de los militantes, entre ellos Jorge Herrera, que pasó a atender el trabajo sindical.²⁶

La COMIL se alió a otra disidencia inmediata llamada Núcleo de Dirección y Conducción del PGT, encabezada por *Mario Sánchez*. Al romperse esa alianza, *Sánchez* fue incorporado a la comandancia de la URNG. Un intento del Núcleo por construir su base militar fracasó por la captura de sus miembros en la frontera con México.²⁷ Esto debilitó al grupo hasta marcar su virtual desaparición. La COMIL, entretanto, fue prácticamente aniquilada a raíz de la captura de *Miguel*, ocurrida poco después de su rompimiento con el PGT. Fuentes del PGT señalan que la colaboración de *Miguel* le permitió al Ejército la captura de varias decenas de militantes y dirigentes del PGT.²⁸

En 1983 el PGT decidió disolver a la JPT como un recurso para sobrevivir a la crisis. Pero esta decisión acabó liquidando a una de sus organizaciones y precipitó la crisis. En octubre de 1983 fueron asesinados en la 10 calle de la

25 En el momento de su auge organizativo, el EGP logró crecer también entre sectores de El Quiché y las Verapaces que habían estado ligados al PGT. Incluso hacia mediados de los 80, se vinculó a la organización del PGT en el sur del país.

26 Desde 1986 Jorge Herrera apareció vinculado a los organismos de seguridad. En ese período, en que se hizo llamar *Rafael Hernández*, fungió como enlace entre el EMP y la CEAR e intentó impulsar un programa de readaptación de refugiados. A partir de 1993 Herrera sustituyó al Luis Eduardo Pellecer Faena como asesor del EMP. Fue condecorado con la Monja Blanca por servicios prestados al Ejército.

27 Incluso la esposa y la hija de *Mario Sánchez* viajaban con el grupo y fueron desaparecidas.

28 Una información no confirmada precisa que *Miguel* fue ametrallado durante el gobierno de Vinicio Cerezo por un presunto comando del PGT, a inmediaciones del estadio olímpico. Una nota del gobierno de Cerezo reconoció su muerte como *una gran pérdida*. Laboraba como jefe de seguridad del BANVI.

zona 1 *Remigio* y *Silverio*, dos miembros de la Comisión Política (el primero de hecho fungía como secretario general en ausencia de *Carlos González*). Esto precipitó una nueva disidencia que tuvo lugar en 1984 con el rompimiento del PGT- 6 de enero. Este grupo desconoció la dirección del PGT y se asignó la tarea de convocar al V Congreso. Pero una nueva ofensiva se venía sobre todas esas estructuras. *Salvador*, uno de los participantes en la reunión de la ruptura, fue capturado en el retorno a su casa. La mayoría de cuadros del PGT se refugiaron en México y quienes permanecieron sosteniendo el trabajo lo hicieron en condiciones de seguridad muy precarias. El PGT-6 de enero buscó puntos de coincidencia con el contingente que dirigía Mario Payeras, Octubre Revolucionario, pero finalmente, en 1990, ambos grupos decidieron disolverse. Más adelante el PGT sobreviviría gracias a la presencia de *Carlos González* como miembro de la dirección de la URNG.

6. La Iglesia en la mira

Con la llegada del gobierno militar de Ríos Montt, la persecución contra sacerdotes de la Iglesia menguó, aunque entonces la actividad represiva se ensañó con los activistas de Acción Católica y los catequistas. Así, en diciembre, en la aldea Tabil de Santa Cruz del Quiché, el Ejército obligó a los patrulleros a asesinar a cinco activista de Acción Católica, y el 4 de ese mismo mes los militares llegaron al cantón Santabal de San Pedro Jocopilas, en busca de cuatro activistas de Acción Católica, y al no hallarlos mató a seis mujeres.

La ofensiva contra la Iglesia católica, con la llegada al poder de Ríos Montt, anciano de la Iglesia del Verbo, adquirió otro carácter. En marzo de 1983 la visita del Papa fue saludada con seis fusilamientos y actos de agravio del presidente a la máxima autoridad católica. Nuevamente, en abril, se registraron actos de sabotaje contra las celebraciones de Semana Santa, hasta que el 7 de junio la Conferencia Episcopal publicó la carta pastoral *Confirmados en la Fe*, condenando el régimen.

La llegada de Ríos Montt y el *boom* de las sectas neopentecostales tuvo una especial connotación en la ofensiva contrainsurgente. Por ejemplo, con el golpe de Ríos Montt comenzó a actuar en el área Ixil la Iglesia del Verbo, filial guatemalteca de la iglesia fundamentalista Gospel Outreach, con sede en Eureka, California, Estados Unidos. La Iglesia del Verbo, para canalizar estas ayudas, creó la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (FUNDAPI), con sede en 16 calle 1-45 de la Zona 10, la cual editó documentos de divulgación desde enero de 1983.²⁹

29 FUNDAPI, según sus propias publicaciones, se hizo responsable directamente de la construcción de pistas de aterrizaje en Chajul y Cotzal, y también de dar alimentos a viudas, huérfanos y refugiados. Asimismo, solicitó US\$3 millones a cristianos de los Estados Unidos para atender 50,000 familias que necesitaban medio millón de láminas de zinc. FUNDAPI, junto con el Instituto Lingüístico de Verano, comenzó a alfabetizar en ixil en Chajul, Nebaj y Cotzal a unas 5,000 personas cada año. El costo anual de su proyecto de alfabetización era de US\$360,000, de los cuales US\$260,000 serían para salarios de los promotores ixiles.

Entre los ancianos de la Iglesia del Verbo vinculados a este programa estaban, entre otros, Harris Whitbeck, misionero del verbo y militar especializado en contrainsurgencia; Alfredo Kalschmidt, delegado para Alta Verapaz desde su sede en Chisec; Jesse Camey, responsable del Programa de Ayuda a Áreas en Conflicto (PAAC); Rolando Lavidalle Guzmán, encargado de relaciones públicas y enlace entre la Secretaría de Bienestar Social y el PAAC; Ray Elliot hijo, responsable de PAAC para Nebaj; George Hughes, responsable de la construcción de las pistas de aterrizaje en el área Ixil.

De acuerdo con un investigador presente en la zona en enero de 1983, *Gospel Outreach* envió materiales por valor de US\$1.5 millones a Nebaj. El pastor Wilbur Waacker, que fue el líder del grupo de acción en Guatemala, me dijo que el material que se envió incluía 100,000 libras de vegetales, 20 toneladas de maíz, equipo para un laboratorio dental e implementos agrícolas. También enviaron cientos de láminas galvanizadas para los techos, palos de metal y otros materiales para construir casas a prueba de guerrilla (Colby, 1983).

Buscando entre las cenizas

Tras una visita del obispo de La Verapaz, Gerardo Flores, a las parroquias de la diócesis entre el 10 y el 17 de mayo de 1982 se hacían las siguientes descripciones.³⁰

- En algunas parroquias (Rabinal, Chisec, Raxruha, San Cristóbal) hay aldeas que han quedado sin habitantes. Otras cuentan con un número muy alto de viudas y huérfanos; no hay hombres ni jóvenes. En algunas hubo también destrucción de los templos y ermitas (Cobán, San Cristóbal). Otras viven bajo una tensión casi insostenible, porque han sido acusadas públicamente de que *todos son guerrilleros*. El quehacer pastoral está paralizado. Varias parroquias (Salamá, Rabinal, Calvario Cobán, San Cristóbal) han perdido a muchos de sus catequistas o delegados porque han sido asesinados, han tenido que esconderse o han dejado sus funciones. En varias aldeas los católicos han tenido que enterrar sus biblias, libros de canto y sus cuadros.
- Otras parroquias o parte de sus comunidades (Panzós, Senahú, La Tinta, Telemán, Tamahú, Purulhá, Cubulco, Chamelco, San Marcos Cobán) no han experimentado la violencia a gran escala, pero viven un clima de miedo, tensión y desconfianza causados por algunos secuestros, amenazas, acusaciones, rumores, prohibiciones y restricciones de actividades religiosas, o por la imposición de las PAC se ha provocado el alejamiento de los catequistas y el desánimo de la comunidad.
- Hay sin embargo otras parroquias que casi no han conocido hechos de violencia y donde todo está tranquilo (San Jerónimo, Catedral Cobán,

30 Resumen del Informe *Sobre la situación de las parroquias, sus comunidades y sus catequistas o delegados*, s.f.

Boloncó, Chahal, Las Casas, Tukurú). Estas desarrollan sus actividades con normalidad, incluyendo visitas a aldeas, cursillos, reuniones y celebraciones. Igual situación se da en aquellas parroquias donde se afirma que ha vuelto la tranquilidad (Raxruhá, Campur) o donde solamente en las últimas semanas han ocurrido hechos violentos (Tactic, Carchá).

Los ataques ya no se concentran en los sacerdotes o religiosas, sino en los catequistas que son más vulnerables: *todos los catequistas están con la guerrilla*. Las organizaciones revolucionarias tratan de penetrar en reuniones y celebraciones manipulándolas políticamente. En La Tinta y Telemán ha habido un aumento de catequistas descontrolado: *a veces confiamos en ellos sin saber quienes son*. Se señala que hay un aumento del espiritismo y la brujería y que las comunidades van a las celebraciones cuando hay un conjunto musical.

El protestantismo

- En el Polochic su influencia es muy fuerte, por ejemplo en Tamahú se fueron dos catequistas con toda su gente.
- En Chahal hacen muchas visitas a domicilio y cinco catequistas *se han pasado al evangelio*.
- En Boloncó muchos se pasan por el ataque fuerte de los protestantes.
- En Cobán unas señoras evangélicas invitan a muchas señoras católicas *importantes* a reuniones tipo carismático.

La cosa se pone peor cuando se mezclan conflictos de tipo político con tensiones religiosas. Por ejemplo en el cruce en Playa Grande, se causa muchos problemas a los católicos mientras que dejan pasar sin más a los evangélicos. Los protestantes muchas veces escapan de la represión (Rabinal) o son los que provocan las primeras dificultades por sus denuncias falsas o buscan puestos públicos (comisionados) para imponerse sobre la mayoría católica (Cobán). Un caso extremo es el de Salaqvim (Cobán) donde el comisionado utilizó su poder para ganar feligreses: daba la inscripción militar solamente a los que pasaban a la Iglesia Nazarena. Él es responsable de la muerte de un catequistas y del secuestro de un grupo de diez personas. Está también la imposición de una nueva tarjeta de identificación personal con la mención de la religión que profesa el portador.

Ayuda a las víctimas

- Rabinal. Sin ninguna duda es la parroquia más afectada. Ha podido organizar y sistematizar la ayuda gracias a su anterior experiencia con el programa nutricional infantil y médico-social. Los grupos organizados por el Ejército ven mal la ayuda y hasta amenazan y persiguen a las viudas. Por consiguiente la ayuda debe hacerse con precaución y hasta secretividad.
- San Cristóbal. Ante el asesinato de los dos maestros hubo alguna iniciativa de la gente de recaudar dinero para sus familias. Las Madres están dando alguna ayuda que hasta ahora ha sido un poco desorganizada.

- Tactic. Quiere ayudar a San Cristóbal con víveres.
- Polochic. Se ayuda a algunos refugiados de otra parte dándoles trabajo. Hay unas once familias que reciben ayuda. El maíz y otra ayuda recolectada se ha mandado a otras partes.
- Carchá. Se repartió gran cantidad de leche en todas las aldeas y escuelas.
- Chamelco. Como en Carchá, hay refugiados de otros lugares que han sido recibidos e integrados en las comunidades, pero se notan ciertos temores por la presencia de ellos.
- Catedral de Cobán. Poca estabilidad de los refugiados.
- Calvario. Se está ayudando a unas 110 familias con medicinas, ropa, dinero y comida. Hay muchos grupos que han pedido ayuda pero no se les ha podido atender debido al clima de violencia.
- San Antonio Las Cuevas. Hay unas 150 familias refugiadas, tienen comida pero sus alberges son precarios: a veces hasta ocho familias en una sola casa. Necesitan láminas y casas. El INTA está distribuyendo lotes entre ellos.
- Raxruhá. Hay unas 200 familias refugiadas, entre ellas unas 50 viudas con niños. El INTA ya les dio lotes. La parroquia ha ayudado con medicinas, comida y el terreno de la Iglesia para sembrar milpa.



ODHAG



ODHAG

Capítulo Quinto

El gobierno de Mejía Vítores

1. El reencuentro institucional

El 8 de agosto de 1983 se produjo el golpe que depuso a Ríos Montt y colocó como jefe de Estado al ministro de la Defensa, general Oscar Humberto Mejía Vítores. La asonada apenas encontró oposición. Se resistió la Guardia Presidencial, con un saldo de cinco muertos y 30 heridos, y un grupo de oficiales jóvenes transmitió por la radio un comunicado acusando a Mejía Vítores de ser responsable de la represión en los 17 meses anteriores.

La proclama golpista la encabezaba el general Mario López Fuentes, como jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero además iba calzada por todos los comandantes de zonas militares y de guarniciones de importancia en el país, un grupo que pasaría posteriormente a seguir controlando colegiadamente la situación política a través del llamado *Consejo de comandantes*.¹ El nuevo régimen militar se apresuró a formar un gobierno predominantemente civil; Fernando Andrade Díaz-Durán, un influyente político conservador y empresario financiero, cercano a los generales Rodolfo Lobos Zamora y Héctor Nuila Hub, se convirtió en la figura clave de la transición política. De hecho, el golpe no implicó una ruptura con el proceso iniciado en 1982, sino acaso una vía menos radical, lo que sin embargo no evitó confrontaciones con los empresarios y los partidos, ni el peligro de inestabilidad política.

En las zonas rurales, una vez superada la etapa más aguda de las campañas contrainsurgentes, quedó la infraestructura parcialmente destruida, la producción desorganizada, y cientos de miles de víctimas que requerían programas de emergencia que el Estado no estaba en capacidad de garantizar. El esquema de aldeas modelo y polos de desarrollo ni siquiera llegó a cubrir las necesidades mínimas de sobrevivencia de las personas internadas en estos proyectos, y las ayudas internacionales que pudieron canalizar —por ejemplo al controlar los fondos del Programa Mundial de Alimentos, o las donaciones para desarrollo rural de la AID— resultaron insuficientes.

Con el golpe de estado de 1983 el Ejército intentó especialmente restablecer la estabilidad interna de la institución, que había sido conmovida por

1 El primer resultado del golpe de agosto de 1983 fue que se institucionalizó el Consejo de Comandantes, compuesto por 28 coroneles, jefes de las unidades militares del país, precisamente unos meses después de que se crearon las 23 zonas militares, ampliando el número de coroneles con mando de tropa. El Consejo, que firmó la proclama del golpe y otorgó a Mejía Vítores el título de Jefe de Estado, nunca fue reconocido oficialmente pero funcionó como efectivo mecanismo de consulta y presión del Ejército durante toda la etapa del gobierno de Vinicio Cerezo (1986-91).

los *jóvenes oficiales* que impulsaron el golpe del 23 de marzo de 1982 (Sarti, 1983; Gramajo, 1995).

2. Recomposición política

Apenas instaurado el gobierno de Mejía Vítores se volcó a reencauzar el proceso de institucionalización del régimen. El 19 de enero de 1984 fue emitida la Ley Electoral Específica para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente; el 1 de julio de 1984 se celebraron elecciones constituyentes en las que sólo cinco partidos -de las 33 organizaciones inscritas- pudieron completar los 88 candidatos a diputado. El sello de haber votado quedaba impreso en la cédula de vecindad, por lo que la población se sintió coaccionada para asistir a las urnas, pero de todas maneras se registraron 460,000 votos nulos o blancos (23% frente al 16% que logró la DC, el partido que mayor cantidad de votos alcanzó) y la abstención respecto a la población en edad de votar fue del 56% (*Inforpress*, 1985).² En cualquier caso, a partir de estas elecciones apareció una correlación de fuerzas renovada en el mapa partidista, en la cual destacaban la Democracia Cristiana (DC) y la Unión del Centro Nacional (UCN).

Así, mientras se desarrollaba un proceso de elaboración constitucional fuertemente controlado por el Ejército, se funcionaba por consenso. La presidencia de la Asamblea se organizó de manera rotativa entre las tres fuerzas mayoritarias. El régimen militar fue creando un marco institucional para cobijar los aspectos esenciales de su política contrainsurgente y desarrollista. Por ejemplo, dentro del plan de campaña *Reencuentro Institucional* 1984, el gobierno emitió el Decreto-Ley 111-84, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que ponía bajo control militar a todas las dependencias de la administración pública.

Gracias a la labor del canciller Fernando Andrade, los militares reconstruyeron sus relaciones con las organizaciones políticas, dando prioridad a aquellas que representaban corrientes centristas y que no cuestionaban la esencia de su política contrainsurgente. Aunque en los primeros momentos algunos partidos afirmaron que la Asamblea era soberana, y que dado el caso podía modificar la Corte Suprema de Justicia (lo cual fue objetado por el jefe de Estado), el comportamiento de los que participaron en la Constituyente resultó satisfactorio para el Ejército. El gobierno militar pudo comprobar en el proceso constituyente que el esquema político resultaba confiable, y completó éste después de lograr el regreso del Partido Socialista Democrático (PSD), tras una entrevista de Mejía Vítores con el dirigente socialdemócrata Mario Solórzano en Costa Rica en 1985.

El Ejército logró incluir los aspectos centrales de su política contrainsurgente, como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y las

2 Se inscribieron en el padrón 2.554.002 ciudadanos, o sea, un 80% de los guatemaltecos adultos. El gobierno dictó una instrucción al Registro Electoral para que permitiera la inscripción provisional de todos los partidos que lo solicitaran. Así fue como participaron 17 partidos y tres comités cívicos. Votaron el 78% de los inscritos.

Coordinadoras Interinstitucionales, que fueron incorporadas a un proyecto de regionalización. En esos trámites jugó un papel importante el secretario del Jefe del Estado, coronel de aviación y abogado Manuel de Jesús Girón Tánchez, al frente de un equipo de abogados, que actuó como representante de la jefatura de Estado y consultor de la Asamblea Constituyente.³

El proceso de normalización institucional prosiguió durante 1985 con la culminación de los debates constitucionales y la preparación de las elecciones legislativas. Más difícil resultó enfrentar la crisis económica. En medio de una fuerte recesión y un vertiginoso crecimiento del endeudamiento interno y externo, los militares buscaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiera estabilizar la situación financiera de Guatemala, sin que esto impidiera suspender el programa de reformas desarrollistas que complementaba sus ofensivas contrainsurgentes.

Los ingresos reales disminuyeron consistentemente y las autoridades decidieron compensar esta baja con contrataciones de deuda externa y por momentos con la emisión de moneda sin respaldo.⁴ La inyección de dinero fresco permitió mantener durante el período 1980-84 una de las tasas de inflación más bajas de América Latina. El banco central atendió los requerimientos de crédito de sus clientes tradicionales; éstos tomaban los dólares, pero en vez de invertirlos productivamente, los colocaron en sus cuentas en el exterior. Cuando requerían liquidez convertían parte del crédito a quetzales en un mercado paralelo que les permitía ganancias automáticas del 30% y el 50%. Otra parte del financiamiento se destinó a sostener el esfuerzo de la guerra contrainsurgente (Gutiérrez, 1995).

La recaudación tributaria siguió cayendo del 10.2% del PIB en 1978 al 5.3% en 1984, siendo uno de los más bajos del mundo; el 83% de los ingresos tributarios provino de impuestos indirectos. (*Inforpress*, 632). Apenas llegado al gobierno, Mejía Víctores rebajó el IVA del 10% al 7%. Los empresarios, empero, continuaron oponiéndose a cualquier reforma tributaria, exigiendo medidas de estabilización monetaria, libre comercio y privatización del sector público, y achacando la crisis financiera del Estado a los gastos excesivos y la corrupción de *los gobiernos militares*.

3 Un documento distribuido por la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia en 1985, afirmaba refiriéndose a la nueva Constitución: *Precursores de esta legislación emergente, fueron muchos de los Decretos, Acuerdos y Ordenanzas que el Gobierno transitorio ha emitido en su trayecto administrativo. Algo de ello debió servir de buen ejemplo a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente... pero particularmente los que tienen afinidad directa con la seguridad y el desarrollo del país: Polos de Desarrollo, Coordinadoras Interinstitucionales y las Patrullas de Autodefensa Civil*. Además, en algunas ocasiones acudió a la Asamblea el mismo Jefe de Estado para presionar por la aprobación de determinados artículos.

4 Inicialmente el régimen recurrió a las emisiones de bonos de estabilización en 1983 y 1984 por US\$500 millones, buscando controlar el gasto público, especialmente el de inversión, a fin de evitar déficit fiscales que deberían ser financiados en forma inflacionaria. La deuda externa se incrementó de US\$1,491 millones en 1982 a US\$2,380 millones en 1984. En 1983 el PIB decreció un 2.7% y el PIB por habitante se contrajo un 5.4%; cayó la producción de consumo interno y el balance comercial fue deficitario en US\$225 millones. En 1984 el PIB creció 0.6%, pero el producto por habitante siguió siendo negativo (2.8%). La inversión privada se recuperó, gracias a la compra de maquinaria e insumos (previando escasez de divisas), pero la inversión pública se redujo en un 25%.

Las posiciones empresariales contaron pronto con plataformas políticas y publicitarias –a través de partidos como el CAN y de institutos como el CIEN, el noticiero *Aquí el Mundo* y la Universidad Francisco Marroquín–, hasta provocar en 1985 una crisis institucional en la que, después de reunir al Consejo de Comandantes, el jefe de Estado cesó al ministro de Finanzas, coronel Leonardo Figueroa, y convocó a un Diálogo Nacional con los empresarios y los partidos políticos. El Banco de Guatemala recuperó, gracias al diálogo, el control del mercado de divisas, a cambio de garantizar a los exportadores un porcentaje de sus divisas para importación al cambio oficial en paridad con el dólar, y comprometerse a reducir el presupuesto de inversión en Q100 millones (Aitkenhead, 1989).

Unos meses después el país atravesaba una crisis por escasez de combustible y medicinas, ya que el gobierno debía comprar los dólares para su importación en el mercado paralelo, a un promedio de tres quetzales por dólar, en tanto se veía obligado a garantizar a los importadores privados dólares a la par con el quetzal. El tema más significativo de la crisis gobierno militar-empresarios era la fuga de divisas por la exportación de café, que controlaban directamente en un 30% los propios grandes finqueros, subfacturando y dejando fuera del país una parte de los beneficios. Al mismo tiempo pedían crédito para insumos a la banca central y lo convertían en divisas al cambio oficial. Posteriormente pagaban el crédito en quetzales y cambiaban sus divisas en el mercado negro. Debido a este mecanismo, la banca central anunció en 1984 pérdidas cambiarias de US\$180 millones. De todas maneras, en agosto, Eduardo González, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, amenazó con que no se exportaría la cuota oficial de café si el gobierno no autorizaba el libre manejo de divisas. Como respuesta, el gobierno canceló las casas de cambio (*Inforpress*, 655).

Esta crisis, ocurrida semanas antes de que se abriera el proceso de elecciones presidenciales, mostró hasta qué punto el gobierno militar era incapaz de manejar la situación financiera del Estado. Además, evidenció los contratiempos del modelo desarrollista-contrainsurgente, cuando las presiones financieras internacionales y del sector empresarial exigían una reducción del déficit fiscal, cerrando además las vías del financiamiento externo e interno. En el marco de estas contrariedades se desarrolló el proceso de normalización institucional, influyendo también en la presentación que el Ejército hizo de sus campañas contrainsurgentes.

3. Vuelven los viejos oficiales

El punto de partida para el análisis del Ejército durante el gobierno de Mejía Vítores se puede situar en los planes de campaña *Reencuentro Institucional 1984* y *Estabilidad Nacional 1985*, mediante los cuales el Ejército programó el proceso de transición política de un gobierno militar *de facto* a un gobierno civil democráticamente electo.

El Ejército centró su actividad en un relativo control de las fincas agroexportadoras en la bocacosta y las vías de comunicación en Petén. Únicamente

en el área Ixil avanzaron sus posiciones en Nebaj, hacia la montaña de Sumal. En general su acción fue de respuesta, intentando golpear a las unidades guerrilleras que realizaban acciones de propaganda política o de hostigamiento.

A pesar del notable incremento del número de efectivos militares en el período 1983-84 y del redislocamiento de sus efectivos en 22 zonas militares que cubrían prácticamente todo el país, el Ejército no mostró una iniciativa ofensiva, excepto algunas infructuosas operaciones en el suroccidente (Ilom, 1985). El mayor esfuerzo logístico y operativo se centró en consolidar el control de la población y poner en marcha algunos de los muchos proyectos desarrollistas, entre ellos los Polos de Desarrollo. Como después reconocería el general Héctor Alejandro Gramajo, las funciones de desarrollo civil y de control institucional distraían a los jefes del Ejército de sus funciones militares (Gramajo, 1995). Esta estrategia militar no correspondió con el cambio de estrategia de la URNG, que convirtió sus unidades permanentes en fuerzas militares que no dependían del apoyo de la población, en tanto el Ejército seguía ejerciendo toda la presión en el control poblacional como forma de *quitar el agua para que se muera el pez* (Payeras, 1991).

Con el golpe de Estado también se desplazaron las decisiones de poder a las promociones que estaban llegando a las últimas etapas de su carrera. Por tanto no es de extrañar que al frente del golpe de Estado que derrocó a Ríos Montt estuvieran los generales Oscar Humberto Mejía Víctores, Rodolfo Lobos Zamora, Jaime Hernández Méndez, Héctor Mario López Fuentes, Cesar Augusto Cáceres Rojas y Héctor Alejandro Gramajo –más influidos por el discurso desarrollista–, junto a otros como Pablo Nuila Hub o Manuel Antonio Callejas, ambos miembros de *La Cofradía*, que habían sido desplazados por el golpe del 23 de marzo.

El primer resultado del movimiento que dio origen al golpe de agosto de 1983 fue que institucionalizó el *Consejo de Comandantes*. En cuanto a los 28 coroneles que firmaron la proclama del golpe de Estado de 1983, pronto se subdividirían en distintos grupos que pasarían a controlar la cúpula militar prácticamente hasta 1993; detrás de muchas de las tensiones internas que sacudieron al Ejército en los últimos diez años, aparecerá la presión de estos coroneles por llegar a los más altos cargos del Ejército.

El gobierno de Mejía Víctores anunció que restablecía la *unidad granítica del Ejército* mediante la promulgación del Decreto-Ley 149-83 (Ley Constitutiva del Ejército), que normaba la escala jerárquica y establecía edades límites y tiempo de servicio para los diversos rangos. Esta ley pretendió crear unas *reglas de juego* internas aceptadas por toda la oficialidad para regular el acceso al alto mando y preparar una fase de fuerte crecimiento del Ejército, que se dio en 1984 y 1985.

Con la aplicación de esta ley –redactada por los comandantes de las unidades en la capital (Cuartel General, Mariscal Zavala, Guardia de Honor, Estado Mayor General) (Gramajo, 1995)– fueron dados de baja doce generales y 25 coroneles. En cualquier caso, de 1983 a 1985 se reorganizó la cúpula militar que recibiría al gobierno civil y ocuparía los puestos del alto mando hasta 1993. Como declaró el coronel Edgar D'Jalma Domínguez, entonces vocero del Ejército: *cada militar tendrá su oportunidad, y no hay porqué estar manteniendo a una generación que ya tuvo la suya.*

La segunda gran contradicción del Ejército fue generada por la misma estructura diseñada al calor de las ofensivas contrainsurgentes. El paso de ocho brigadas militares a 23 Zonas Militares generaba altos gastos de funcionamiento y promocionaba un alto número de jefes militares que presionaban por llegar a la cúpula del alto mando, en tanto que las operaciones contrainsurgentes ofensivas recaían en las unidades especiales (Guardia de Honor, Paracaidistas).

El intento de controlar militarmente el funcionamiento de la administración pública, definido en noviembre de 1984 al establecerse el sistema de Coordinadoras Interinstitucionales y crearse la Sección de Asuntos Civiles en el Estado Mayor de la Defensa, terminó resultando infuncional y distrajo a los comandantes de zona militar de sus objetivos militares (Gramajo, 1995).

Ceder el gobierno a los civiles de manera que el Ejército volviera sobre sí mismo para resolver sus propias contradicciones internas, siempre que se garantizara el poder militar sobre la sociedad civil y la continuidad del programa contrainsurgente, fue la salida más razonable, aceptada formalmente por el conjunto de los oficiales. El propio canciller Andrade declaró: *los militares han llegado a la conclusión de que para poder controlar su propia institución, les conviene estar fuera del gobierno*. De esta forma el Ejército llegó a abordar el momento de la transición política, después de que Vinicio Cerezo, candidato de la DC, ganó las elecciones presidenciales, y su partido la mayoría en el Congreso y en las alcaldías del país.

4. Las presiones internacionales

Ya desde los tiempos de Ríos Montt, en 1982, el Ejército se vino resistiendo a involucrarse directamente en algunos de los planes militares regionales de la administración de Ronald Reagan. Además de una histórica desconfianza surgida desde 1977, el comportamiento de los Estados Unidos en la Guerra de las Malvinas y el desplome en 1983 del régimen militar argentino, mostró a los militares guatemaltecos cómo la alianza de Washington con los países latinoamericanos, y especialmente con los gobiernos militares, era relativa y no estratégica.

También las presiones de los Estados Unidos sobre los ejércitos de Honduras y El Salvador en 1982-83 para que dieran paso a gobiernos civiles, fueron una señal clara para el Ejército guatemalteco de que la ayuda de los Estados Unidos implicaba condiciones políticas. Durante estos años, los militares guatemaltecos redefinieron sus prioridades y su concepto del *interés nacional*, estableciendo una cierta autonomía de los planes regionales estadounidenses, pero entendiendo también que el reconocimiento internacional resultaba una pieza fundamental para lograr la legitimidad del proceso de recondicionamiento del sistema de gobernabilidad del país (Gutiérrez, 1989).

Además, después del comunicado franco-mexicano urgiendo a una salida negociada al conflicto salvadoreño y otorgando reconocimiento al FMLN-FDR, y los acuerdos para llegar a una paz en Centroamérica aprobados por los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela (Grupo de Contadora), los militares guatemaltecos comprendieron que la situación internacional y

regional podría llegar a convertirse en una presión considerable sobre el manejo del conflicto interno y que deberían hacer concesiones en aquellos puntos que los liberaran de las presiones diplomáticas internacionales. Significativamente, el 7 de agosto, en vísperas del golpe de Estado, el ministro de la Defensa, general Mejía Vítores, se había entrevistado en un portaaviones con el general Paul Gorman, jefe del Comando Sur.

Otro tipo de presiones provinieron de los organismos financieros multilaterales, especialmente del FMI, con el cual el gobierno de facto de Mejía Vítores había iniciado desde 1983 negociaciones para lograr un crédito de US\$125 millones como apoyo a la balanza de pagos, pues la deuda externa del país se había más que duplicado en el último cuatrienio, mientras que la deuda interna se incrementaba velozmente con emisiones de US\$500 millones en bonos de estabilización en 1983 y 1984 (*Inforpress*, 1985). Sin embargo el FMI exigía la aplicación de una reforma fiscal y la apertura comercial, que el gobierno militar no logró concertar con el sector empresarial. Debido a ello, el Fondo llegó a suspender en 1984 el desembolso de un crédito de US\$120 millones. A partir de entonces, el cumplimiento de un *proceso de transición política* para entregar el gobierno a los civiles pasó a ser también una de las presiones indirectas de los organismos financieros internacionales.

Finalmente el gobierno de los Estados Unidos, después de la presentación en 1984 del Informe Kissinger, diseñó en 1985 la Iniciativa para la Democracia, la Paz y el Desarrollo en Centroamérica, un plan integral para la región en el cual se combinaban los gobiernos civiles democráticamente electos, con el impulso del libre comercio y la aplicación de otras medidas de estabilización económica, incluido un plan de ayuda de US\$8,000 millones para cinco años. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que ofrecía ventajas para los exportadores no tradicionales, era la primera concreción de este proyecto (Escoto-Marroquín, 1993). Un sector de los empresarios ya estaba al corriente de este proyecto y presionaba activamente sobre el proceso de transición política. Las exportaciones no tradicionales crecieron en un 30% en 1984, especialmente aquellas enmarcadas en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (*Inforpress*, 1985).

5. Siempre demócratas

Durante este período un sector empresarial fue paulatinamente asumiendo el papel formal de defensor a ultranza de la transición democrática. Puede afirmarse con seguridad que durante los dos años y medio de gobierno *de facto*, y en especial durante el último año del gobierno del general Mejía Vítores, se desarrolló una suerte de deseo genérico de restablecer el marco constitucional y un régimen de derecho, tanto en el empresario como en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la preocupación por el retorno a la institucionalidad o por la construcción de una sociedad democrática no fueron temas prioritarios en el discurso público (declaraciones a los medios de comunicación, campos pagados, documentos etc.) de las organizaciones representativas del sector.

Más bien, éste estuvo dominado por tres temas recurrentes: 1. La responsabilidad casi exclusiva en el plano nacional del gobierno-Estado en la

crisis económica y por consiguiente la necesidad de liberalización total de la economía; 2. La oposición a una reforma tributaria, y 3. La libertad individual y la propiedad privada irrestricta como pilares de la sociedad.

La defensa de la libre empresa fue asumida con más beligerancia por el sector que la defensa de la democracia o la institucionalidad, como se refleja en el siguiente texto: *Después de un período de relativa tranquilidad, que se ha logrado en parte por la acción del Ejército y cuando se siente cierta seguridad personal, tan necesaria para la reactivación económica del país y su institucionalización, esta situación de esperanza se desvanece ante el atentado a la propiedad privada que propugnan estos grupos políticos al abrir la puerta a futuros legisladores, para que interesada y demagógicamente la eliminen en provecho de tendencias filocomunistas.* (Campo pagado de la Unión Nacional Agropecuaria con motivo de la elaboración de la Constitución, en *El Gráfico* 20/1/85).

Mientras, en el interior del sector empresarial se iban conformando fuertes transformaciones. En 1983, el Registro Mercantil contabilizó una quiebra industrial cada tres días y de 1980 a 1990 la mano de obra industrial pasó del 25% de la PEA a sólo el 14%. Ya de 1977 a 1983 habían cerrado sus puertas 418 establecimientos industriales, con lo cual la cifra de éstos se redujo a 1,910 —y únicamente el 12% contaba con más de 50 empleados. Para el caso de la capital, la cifra era de 1,109 de los cuales sólo el 16% sobrepasaban los 50 trabajadores (Robles, 1985). En 1985, según fuentes financieras, la capacidad industrial instalada estaba operando en un 50% por falta de divisas, falta de capital de trabajo y la caída del mercado centroamericano. La crisis afectaba a la pequeña empresa de textiles, calzado, alimentación y construcción, pero también CAVISA tenía cerrados tres hornos de los cuatro que poseía. Por otro lado, en 1983, los tres bancos más grandes acaparaban el 23% de las operaciones financieras.

Simultáneamente fueron surgiendo otras iniciativas empresariales: en 1984 entró en vigor la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, y en julio de ese año el ex-ministro de Economía, Julio Matheu, asistió a una reunión de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe para impulsar y coordinar la aplicación del programa, vista hasta entonces con indiferencia o reservas por la mayoría de los empresarios (Ortego, 1986). En 1985 el BID otorgó a Guatemala US\$70 millones para reactivación industrial, que se acumularon a otros US\$60 millones en 1983. La AID aprobó US\$1.5 millones para el programa Coordinación para el Desarrollo del Sector Privado (Marroquín-Escoto, 1993).

Estos cambios, unidos a otros políticos regionales (como el hecho de que el sector empresarial salvadoreño se reagrupara en torno a ANEP y ARENA, entrando Alfredo Cristiani y otros representantes del gran empresariado en la directiva de ARENA), permitieron a los empresarios guatemaltecos hallar fuerzas para oponerse a la política desarrollista del Ejército y les dieron esperanzas para enfrentar la aplicación de un programa de estabilización, por lo menos hasta que se hubiera producido una nueva conformación de los grupos hegemónicos en su sector. En 1983 la directiva del CACIF se amplió con la aparición de su consejo de directores, convirtiéndose en un órgano colegiado más abierto, y en los puestos directivos siguió teniendo especial importancia el

sector cafetalero (Antonio Aycinena, José Luis Ralda, Ladislao Feldmar, Carlos Mirón, Ronald Dent). Sin embargo en 1984 surgieron nuevos organismos empresariales, como FUNDESA y la Cámara de Libre Empresa, que representaban nuevas aspiraciones del sector.⁵

El sector empresarial comenzó a jugar un papel activo en el proceso de transición política a partir de la discusión de la nueva Constitución Política. El 25 de julio de 1984 la Asociación de Amigos del País invitó a los diputados constituyentes de la DC a exponer en el Hotel Camino Real sus planes de trabajo, y el 8 de agosto hizo lo mismo con los de la UCN (*El Gráfico*, 26/7/84 y 9/8/84). También el 1 de noviembre las Cámaras de Comercio e Industria se pronunciaron por continuar con el proceso de democratización y pronto definieron sus propios objetivos en el proceso constitucional. El Centro de Investigación Económica Nacional (CIEN), cercano a la Universidad Francisco Marroquín, se pronunció contra la función social de la propiedad privada (*Inforpress*, 621), y la Cámara de Comercio hizo lo mismo, afirmando que este concepto vulnera los derechos fundamentales del hombre, porque permite que el Estado juzgue la eficiencia y utilidad con que se usa la propiedad privada (*El Gráfico*, 7/12/84).

Buscando un eco populista a sus propuestas, la Cámara de Industria afirmó: *La propiedad privada no se refiere sólo a los grandes capitales. También tu parcela, tu casa, tu vehículo, todas tus cosas, son propiedad privada* (*Prensa Libre*, 15/1/85). Esta campaña tomó un carácter tan beligerante, que la Asociación de Ganaderos del Sur Occidente de Guatemala, en carta publicada en *Prensa Libre* el 10 de enero de 1985, afirmaba: *Pediremos y exigiremos al jefe de Estado que disuelva la Asamblea Constituyente, por ser ineptos e incapaces algunos de sus integrantes, que con mala fe quieren dejar en la Constitución de la República la puerta abierta para una futura guerra civil en el país*. Fue una posición tan extremista que obligó a la Asociación de Amigos del País a adoptar una postura conciliadora (*Prensa Libre*, 12/6/85).

El segundo tema de batalla de los empresarios en 1985 fue el de las medidas económicas que el gobierno, presionado por el FMI, intentaba aplicar. El CACIF exigió al gobierno, el 2 de enero, que se definiera en materia económica y se asumiera como responsable del proceso inflacionario. Aunque el ministro de Economía, Leonel Hernández, sostuvo que los empresarios no podían hablar en nombre del pueblo, el ministro de Agricultura, Rodolfo Perdomo, y el gerente de la Corporación Financiera Nacional (CORFINA) fueron sustituidos; a éste cargo llegó Carlos Molina Woolford, cercano a la Universidad Francisco Marroquín. (*Inforpress*, 623).

Ese mismo mes el gobierno militar inició una ronda de conversaciones con el CACIF para que aceptara la Ley de Protección al Consumidor. Fue en ese

5 También la Asociación de Gerentes renovó iniciativas y llegaron a la cúpula empresarial nuevos líderes industriales como Juan Luis Bosch Gutiérrez y Jaime Arimany; Alejandro Botrán asumió la presidencia del CACIF y aumentó la influencia de Álvaro Castillo Monge. También surgieron otras caras nuevas como Marco Augusto García Noriega (finanzas), Peter Lamport (comercio) y Edgar Heinemann. El consejo de directores se amplió con Eduardo González (financiero, fundador de la Cámara de Exportación), Fraternal Villa y Lionel Toriello.

momento cuando aparecieron con fuerza el equipo de economistas neoliberales de la Universidad Francisco Marroquín, encabezados por Juan Carlos Simons, que se apoyaban en la coalición MLN-CAN y que influían en el CACIF, aunque no lo controlaran. Ellos hablaban de medidas monetarias y de privatizar 17 empresas estatales. En ese momento subió a la Presidencia del CACIF Adolfo Botrán, que defendía este programa neoliberal frente a la *corrupción del Estado militar*, y exigía la inmediata devaluación y la reducción del gasto público. Fue entonces cuando se produjo la fuerte crisis institucional entre el gobierno militar y el sector empresarial.

6. Crisis y contrainsurgencia

La crisis económica que se prolongó durante el gobierno de Mejía Víctores tuvo un tremendo impacto social. En 1983 una cuarta parte de los trabajadores que estaban afiliados al seguro social (IGSS) en 1980 ya no figuraron en las estadísticas (lo cual suponía que 32,400 trabajadores pasaron al desempleo o subempleo), y de 1982 a 1983 más de un 20% de la masa salarial dejó de circular. El sector agrícola fue el más golpeado, donde solamente fueron ocupados el 53.5% de los trabajadores de 1980. También en la construcción más de un tercio de los trabajadores no fueron empleados. En la industria la disminución fue del 6.4% y solamente en el sector terciario de comercio y servicios se crearon 10,300 nuevas plazas de 1980 a 1983. En 1983 el sector servicios representaba el 53% del PIB, frente al 28% de agricultura y el 15% de industria. El desempleo abierto pasó del 4.7 al 10.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) entre 1982 y 1984 (*Inforpress*, 1985) y en 1985 según datos de la Secretaría General de Planificación Económica, el subempleo y el desempleo afectaban al 45.5% de la PEA (Aitkenhead, 1989).

La formación de capital privado decreció en un 18.5% y el consumo privado en un 11.6% respecto a 1980. El sector público experimentó una ligera reducción del 0.4% en los gastos corrientes, pero creó 500 nuevos empleos, llegando a 97,100 plazas. Como consecuencia de los desequilibrios cambiarios, la inflación se disparó hasta un 40% en 1985, aunque extraoficialmente ésta se estimaba en 14% y la degradación de los salarios nominales en un 2.4% .

En tanto, el proceso organizativo de los sectores populares estuvo prácticamente paralizado y sólo en abril de 1983 se constituyó la CUSG con la FTG, FECETRAG, FENSIGUA, FENETRAM y varios sindicatos campesinos. La CUSG se afilió a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), y sus máximos dirigentes fueron Juan Francisco Alfaro Mijangos, miembro del Consejo de Estado de Ríos Montt, y Adolfo Hernández, acusado de intentar dividir a la clasista CNT en los años 70 (UASP, 1988). El presidente Ríos Montt y su ministro de Trabajo, Otto Palma Figueroa, asistieron a la constitución de la CUSG (*Prensa Libre*, 2/5/83).

Durante 1984, fruto de la represión selectiva que aplicó el régimen militar, desaparecieron los sindicatos de Pantaleón, Embotelladora Centroamericana, San Bernardino, Agrícola Molino Central, Tejidos Universales y Aliansa. Fue hasta en febrero de 1985 cuando surgió UNSITRAGUA, formada por varios

sindicatos sobrevivientes que habían pertenecido a FASGUA, CNT y FTG. También las luchas sociales fueron escasas.⁶



Conferencia de prensa GAM. Rosario Godoy (de pie) fue asesinada en 1985. (Foto Revista Crónica).

La fuerte represión que continuó sufriendo el movimiento sindical, y en general las organizaciones populares, se justificó por el desarrollo de la guerra. Sin embargo, la presencia de ésta en la ciudad fue simbólica, destacando únicamente en octubre de 1983 los secuestros de Marta Elena Ríos Montt de Rivas, de Celeste Aída Mejía Víctores y del empresario periodístico Pedro Julio García. Estos hechos fueron el detonante de una nueva ola de represión selectiva que se prolongaría por dos años.

Precisamente con el golpe de Estado de 1983 regresaron al control del aparato de inteligencia contrainsurgente los oficiales que lo manejaron en 1981, el año en que el Ejército destruyó las estructuras de las organizaciones EGP y

6 El 1 de marzo reinició operaciones la planta de la Coca-Cola, después de firmar un convenio con los trabajadores de la nueva directiva formada por Antonio Guirola Batres (ex-ministro de Economía y gerente de Continental Motors), Enrique Claverie Delgado y Carlos Porras. Esta fue una de las pocas luchas reivindicativas que pudo, con la solidaridad internacional, mantenerse en el período; había iniciado más de un año antes, el 17 de febrero de 1984 (Albizurez, 1996). También a finales de julio la FECETRAG, la FESEBS, la CUSG y el sindicato de la GINSA exigieron al gobierno decretar un aumento de salarios. En septiembre estallaron las protestas populares contra el aumento del precio del transporte público y una huelga del magisterio que obligó al gobierno a anunciar un aumento de Q50 para los empleados públicos.

ORPA en la ciudad. Así, muchos de estos crímenes respondieron a campañas secretas del Ejército contra algunas organizaciones clandestinas (como el PGT) que aún no habían sido tan duramente golpeadas en la ola represiva de 1981-82, o contra elementos aislados de las organizaciones que fueron desmanteladas en la capital. En muchas otras ocasiones, sencillamente se centraron en dirigentes sindicales históricos a los que se les suponía la simpatía con las organizaciones revolucionarias.

La campaña de represión selectiva prosiguió en 1984, en momentos en que se iniciaba el período Constituyente. El 16 de febrero el ministro de Gobernación reconoció la existencia de 117 presos políticos y según el CNUS sólo en la semana del 2 al 8 de febrero se produjeron 33 asesinatos y 588 detenciones (CNUS, 1984).

También en 1985, cuando el proceso de transición política entraba en su fase final, se siguió registrando esta ola de represión contra el movimiento sindical y popular. Entre noviembre de 1984 y agosto de 1985 hubo 835 casos de asesinatos, muchos de ellos con evidencia de torturas, 390 casos de detención-desaparición y 175 violaciones a la integridad de las personas (Justicia y paz, 1986).

Sin embargo, el surgimiento del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) –su denuncia pública y el rápido reconocimiento internacional que logró– introdujo un elemento imprevisto en los planes contrainsurgentes, ya que estas acusaciones limitaban la impunidad con que habían actuado las fuerzas de seguridad y aumentaban el costo político de sus acciones. Como ejemplo, el 9 de septiembre de 1985 fue secuestrado por militares el joven Luis Fernando de la Roca Elías (*Prensa Libre*, 18/11/85), quienes llegaron a mostrárselo a su madre esposado y sangrando. Pero la madre presentó una denuncia pública en la prensa acusando al Ejército y señalando el número de placas de los vehículos que habían participado en la acción.⁷

Al contrario que los anteriores ciclos represivos contra el movimiento sindical y popular desde 1954, en esta ocasión no hubo un interés especial del sector empresarial en la ola de crímenes contra dirigentes sindicales. Los empresarios estaban más bien interesados en disputar con el Ejército su hegemonía social. Sin embargo, en el medio rural pudo establecerse una vinculación –muy indirecta por cierto– entre el sector empresarial y la ofensivas contrainsurgentes.

En 1983 el Ejército desarrolló una ofensiva contrainsurgente en Quetzaltenango y San Marcos dirigida por el coronel Héctor Alejandro Gramajo para satisfacer las presiones de los empresarios (Gramajo, 1995). Por lo demás, la evolución de la situación militar no se ajustó a las expectativas del Ejército, que a pesar de que su Plan de Campaña *Firmeza 83* fijaba como objetivos aislar a la población de la guerrilla, organizar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los Comandos Jurisdiccionales (Ejército de Guatemala, 1990), tuvo que centrar sus ofensivas en capturar a la población que sobrevivía en las montañas en áreas de influencia guerrillera.

7 Se determinó durante dos años consecutivos, a través del trámite de solvencia y pago de calcomanías en el Ministerio de Finanzas, que las placas pertenecían al Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Por ejemplo, en octubre, el Ejército lanzó una ofensiva contra la población al norte del Ixcán, mató a cuatro personas y obligó a varios cientos a refugiarse en México (REMHI, *La guerra en Ixcán*, 1997. Mimeo). También en el área Ixil el Ejército fue repoblando con sobrevivientes las aldeas próximas a las cabeceras municipales: Salquil, Tzalbal, Acul, Pulay, Xolcuay, Juil, y concentró en Xejalvinté, cerca de la pista militar, a los que no pudo retornar. Simultáneamente, el Ejército desarrolló toda una legislación para amparar la política de re inserción forzada.⁸

El 18 de octubre se emitió el Acuerdo Gubernativo 771-83 por el cual se creaba la Comisión Nacional de Desarrollo de las áreas Acul, Salquil, Amajchel, Tzalbal, Río Azul, Actzumbal, y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande (*Diario de Centroamérica*, 10/12/83). Paralelamente los desplazados en la montaña reconstruían las comunidades de Xecoyeu, Santa Clara, Amajchel y Cabá en el área Ixil, y las de Cuarto Pueblo, Los Ángeles y Mayalán en el Ixcán.

En 1983 se registraron 82 masacres con 957 muertos: 24 en El Quiché y 16 en Alta Verapaz con 588 víctimas; en Quetzaltenango seis con 51 víctimas; en San Marcos doce con 77 muertos; en Izabal una con 30 víctimas, entre otras. San Marcos y Quetzaltenango sufrieron una campaña de terror selectivo, al igual que Sacatepéquez, Totonicapán, Retalhuleu, Jutiapa y Chiquimula. El terror masivo produjo 957 víctimas, y el selectivo 1,695 (Figueroa, 1991). Destacaron algunos casos en los que esta violencia fue represalia directa por las bajas sufridas en combate por el Ejército. Eso ocurrió, por ejemplo, el 5 de abril, cuando después de una emboscada de la guerrilla, el Ejército fusiló a 60 campesinos de la aldea Agua Caliente, Chimaltenango. Pero la mayoría de las víctimas en Alta Verapaz, Ixcán y el área Ixil tuvieron que ver con los planes militares para capturar a la población dispersa en la montaña.

Las ofensivas contrainsurgentes de 1981 hasta 1983 no habían logrado el objetivo previsto por el Ejército en las campañas *Victoria 82* y *Fortaleza 83*, definido como *búsqueda y destrucción de las unidades militares subversivas, incluyendo sus campamentos y puestos de mando*. Las unidades militares de la guerrilla permanecieron básicamente intactas en esos años, y la URNG logró consolidar frentes guerrilleros estables en cuatro zonas del país, especialmente la bocacosta, Chimaltenango, Ixil-Ixcán y Petén.

Así analizaba esta coyuntura una de las organizaciones guerrilleras:

8 El 12 de septiembre de 1984 el gobierno emitió el Acuerdo Gubernativo 801-84 que establecía de máxima prioridad la asistencia básica a los desplazados dentro del Plan de Polos de Desarrollo. El 26 de noviembre la Jefatura de Estado emitió el Decreto-ley 111-84 que creó el Sistema Nacional de Coordinación Interinstitucional. El 1 de marzo se inició la construcción de la aldea modelo Tzalbal para 315 familias, y con el trabajo forzado de 900 personas las obras finalizaron el 30 de abril (Ejército de Guatemala: 1985a). El 1 de marzo empezó la construcción de la aldea modelo Juil-Chacalté (Chajul) para 123 familias, y con el trabajo obligado de 800 personas las obras concluyeron el 30 de mayo. Otras aldeas modelo construidas fueron: Pulay, Ojo de Agua (Cotzal), Salquil (Nebaj), Bichibalá (Cotzal) y Santa Avelina. En 1984, el Ejército había reconstruido doce aldeas en el área Ixil. Entre 1982 y 1984, dio asistencia a unas 42,000 personas en la misma área.

Ante la necesidad impuesta por la movilización y la dificultad militar, asediados prácticamente por el enemigo en amplias zonas territoriales, el EGP tomó la decisión de crear las Fuerzas Militares Regulares y el Estado Mayor, en base a las unidades militares dispersas. Una fuerza militar de carácter permanente con toda su estructura interna, rangos y jefaturas. La contraofensiva lanzada por la dictadura... impulsó la transición hacia el despliegue de la guerra revolucionaria propiamente dicha y de hecho a plantearse la guerra a largo plazo, cuya fase inicial consistió en la defensa, el mantenimiento y fortalecimiento de la áreas revolucionarias ya instaladas... La consigna fundamental es 'resistir, desarrollarnos y avanzar' (EGP, 1983).

Esta fue una actitud defensiva tomada por el EGP sobre la marcha. Se creó también la Comisión Ejecutiva de la Dirección Nacional, que incluía al Jefe del Estado Mayor y al responsable de la Comisión Nacional de Organización.

El mismo Ejército percibió este cambio, como se afirma en el Plan de Campaña *Reencuentro Institucional* 84:

Enterado el Alto Mando del Ejército de la situación creada por la fuerzas subversivas en todo el territorio y de la exposición que presentaba cada Comando, se interpreta un efectivo control de la situación enemiga, ya que el accionar de los grupos subversivos se considera en relativo repliegue y una nueva fase de reorganización político-militar y de bases de apoyo (Ejército de Guatemala, 1990).

La guerrilla modificó en los años 1983 a 1985 su planteamiento táctico, pasando de un criterio de ofensiva generalizada apoyada en la movilización popular en 1981, a una estrategia defensiva en 1982 y 1983, y de desgaste del Ejército y recuperación de apoyos populares en 1984-85. Esta vez se basaba en unidades militares permanentes con sus correspondientes estructuras de mando y apoyo logístico.

Mientras tanto, en 1984 se restableció la comunicación entre las organizaciones de la URNG y ésta avanzó en sus *planteamientos unitarios* estratégicos. Un registro parcial de su actividad muestra que pasaron de 160 acciones en 1983, a 120 en 1984, y a 180 acciones sólo de enero a mayo de 1985 (*Inforpress*, 1985). A finales de ese año, probablemente por motivos propagandísticos por coincidir con el proceso de elecciones presidenciales, la URNG mostró una mayor actividad que denotaba la ampliación del área de acción de sus frentes guerrilleros, pasando a una etapa de recuperación parcial de bases sociales.

En los cinco primeros meses de 1984, la guerrilla reivindicó 1,340 acciones militares aunque la prensa sólo recogió 73 (*Inforpress* 14/3/85). Pese a que el Ejército anunció a finales de 1984 haber *reducido la guerrilla a grupos de delinquentes sin articulación*, durante ese año se reforzaron los frentes guerrilleros en Petén, el occidente de la Sierra Madre y el área Ixil. El EGP envió columnas de penetración al sur de El Quiché y Huehuetenango, y la ORPA comenzó a desarrollar estructuras en la costa sur y Atilán, al mismo tiempo que en octubre se

registraban movimientos militares en Santa Rosa, a raíz de noticias sobre presencia guerrillera de las FAR (*Inforpress*, 628).

Ese año el repunte de la guerra fue recogido por la prensa. En abril se registraron grandes operaciones de contrainsurgencia en Suchitepéquez y Sololá a raíz de una acción de la ORPA en Chicacao, Suchitepéquez (*Inforpress*, 628). *Prensa Libre* informó el 8 de agosto de 27 muertos, 22 de ellos guerrilleros, en un combate en las fincas El Trapiche y Montealegre, aldea Tocache, San Pablo, San Marcos. También en agosto 10,000 PAC, Policía de Hacienda y Ejército lanzaron una ofensiva contra la ORPA en San Pablo y Malacatán, San Marcos, y en Quetzaltenango (*Inforpress*, 628). El 15 de julio *El Gráfico* informó de la muerte del capitán Adolfo Homero Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, en Petén, y el 21 de julio de un subteniente y doce soldados en una emboscada en Los Angeles, Ixcán.

En cualquier caso el Ejército logró avanzar en el control de algunas áreas, y reconstruyó doce aldeas en la zona Ixil; asimismo, se inició la construcción de la carretera Nebaj-Tzalbal-Salquil. El general Mejía Vítores inauguró la aldea modelo de Acul, con sobrevivientes de Chuatuj, Xexuxcap (k'iches`), Acul y Río Azul. Según el Ejército ya estaba bajo su control esta población desplazada: en Nebaj, 2,700 (400 viudas y 87 huérfanos); en Chajul, 891 (185 viudas y 27 huérfanos.); en Cotzal, 261 (40 viudas y 28 huérfanos) y en La Perla 1,282.

Por otro lado, la población desplazada en la montaña se asentó en el área de Amajchel. La violencia masiva continuó. En los tres primeros meses de 1984 se registraron quince masacres con 296 muertos, destacando los bombardeos masivos de áreas pobladas por campesinos refugiados. También durante este año, producto de los ataques del Ejército guatemalteco y del consiguiente desplazamiento de los campamentos de refugiados en México, miles de ellos se regresaron al país y aumentó la población de las CPR en el Ixcán (REMHI, *La guerra en Ixcán*, 1997. Mimeo). También el 4 de diciembre el jefe de Estado inauguró la primera fase del Polo de Desarrollo de Chacaj, Nentón, Huehuetenango (*Inforpress*, 621), destinado precisamente a recibir a los refugiados que regresaran a Guatemala.

La misma tónica ascendente tuvo la guerra en 1985, a pesar del tenor optimista del Plan de Campaña de los militares para ese año. La directiva del Plan de Campaña Estabilidad Nacional 85 establecía que:

Los ataques del enemigo, materializados con emboscadas, hostigamientos, registros en algunas carreteras y los robos en poblados y fincas, hacen suponer un relativo control militar por parte de nuestras fuerzas y un repliegue de la subversión para revisar su reorganización y abastecimiento. Por tanto, su objetivo fue reducir al mínimo, desarticular o eliminar las acciones subversivas, activas o latentes en todo el territorio nacional, tratando de alcanzar de una manera definitiva las metas de paz y estabilidad que deben imperar en un régimen eminentemente democrático. (Ejército de Guatemala, 1990).

Para ello el Ejército se siguió apoyando en la realización de operaciones militares centralizadas, aumentando la capacidad operacional de las unidades de Reservas Militares y las patrullas civiles.

En febrero, el Ejército rindió homenaje póstumo a 41 soldados caídos en combate en los dos primeros meses del año (*Inforpress*, 631). Según un reportaje de *The New York Times* del 27 de julio, más de 60 campesinos habían sido desaparecidos o asesinados en Patzún, Chimaltenango, en aquel año, y se habían registrado más de 40 ataques guerrilleros (*Inforpress*, 652). En septiembre la URNG lanzó una campaña militar coordinada y reapareció la actividad en nuevas zonas. Por ejemplo, el 25 de octubre una columna de 200 guerrilleros atacó Purulhá, Baja Verapaz, y realizó un mitin contra las elecciones, diciendo ser del EGP. Los vecinos afirmaron que los guerrilleros ocuparon ocho poblaciones (*La Hora*, 25 octubre). Especial efecto en la prensa tuvo la actividad de la ORPA en zonas de alta producción agroexportadora, sobre todo después de que, el 25 de enero, la guerrilla destruyera la municipalidad de Santiago Atitlán (*El Gráfico*, 2/12/85).

Nuevamente el 27 de julio se conoció que más de 2,000 soldados participaban en una operación contrainsurgente en la costa sur occidental, después de los ataques al puesto de Santa Ana Berlín (*Inforpress*, 652) y el 14 de octubre *La Hora* informó de la acción de más de 100 guerrilleros contra la finca Perú en San Marcos y en las fincas Chipilín y Jalisco de Patulul, Suchitepéquez.

En 1985, la represión comenzó a aumentar en áreas donde la guerrilla extendía su presencia, como Chimaltenango y el sur de El Quiché. En la zona Ixil, el 11 de enero, el Ejército movilizó tropas hacia Xexocom y Xe'uk'alvitz en Nebaj. La campaña, que duró hasta el 6 de febrero, causó 16 muertos entre la población civil; hubo 167 capturados. Por esas fechas se terminó la carretera a Salquil Grande en medio de constantes ataques de la guerrilla que cobraron 25 muertos y 70 heridos en las filas castrenses.

7. La población recuperada

Si algo puede distinguir al gobierno del general Mejía Vítores dentro de la estrategia contrainsurgente del Ejército, es su esfuerzo por llevar a cabo un proyecto integral de reintegración forzada de la población sobreviviente de las masacres aplicadas durante las campañas militares de *tierra arrasada* de la época del general Ríos Montt.

La situación de las víctimas sobrevivientes de las campanas militares se convirtió de pronto en un problema imprevisto. Así, por ejemplo, en septiembre de 1983, un informe gubernamental señalaba que en Nebaj habían 3,000 personas confinadas en el campamento de Las Violetas; 3,500 desplazados en el campamento de La Pista, y que en la finca La Perla de Chajul recibieron a unas 1,000 familias de desplazados. Incapaz de mantener la aldea de Salquil con la población retenida en ella, el Ejército trasladó en 1983 a sus habitantes a un lugar llamado Xejalvinté, situado a un lado de la pista aérea militar en Nebaj; ahí creó el primer campamento de desplazados llamado Ajtxumb'al. Posteriormente fundó el campamento de Río Azul y comenzó a hablar de las aldeas modelo. Surgió así, en diciembre de 1983, Acul con desplazados k'iches' de Chatuj y Xexucap, vecinos de Acul y refugiados de Río Azul; el 12 de octubre de 1983 se inició la reconstrucción de Acul con 1,500 personas de varias comunidades,

seleccionadas entre los 12,000 desplazados que el Ejército estimaba que había en Nebaj, y se finalizaron los trabajos el 22 de diciembre. Esta aldea concentró a 450 familias que antes vivían en 17 comunidades distintas de Nebaj (Ejército de Guatemala, 1985a).

Las características de esta reinserción contrainsurgente fueron analizadas posteriormente: con el asentamiento de la población retornada bajo nuevos patrones de ubicación, organización interna, trabajo, movilización y prácticas sociales. Así se empezó a efectuar la configuración de estas poblaciones para hacer posible el control requerido, que sería el primer paso para un desarrollo ulterior. Una especialista del Ejército que participó en este proyecto valoraba así su impacto social:

Por desgracia todo fue obligado: nadie quería trabajar en la construcción y entonces se les concientizó... tomó tiempo pero al mes comenzaron a trabajar. Y como fue obligado, se corrió la bola de que era un campo de concentración... la gente de alrededor llegó a trabajar en la construcción de Acul, sino no se habría terminado en tres meses (septiembre a diciembre de 1983) (Mack, 1990).

El Ejército hacía esta evaluación, más bien desencantada:

Experiencias pasadas como los Polos de Desarrollo, nos han dejado escuela de que de seguirse trabajando con el ímpetu con que se iniciaron éstos, se hubiese minimizado el conflicto, pero desafortunadamente los momentos políticos hicieron que aquel proyecto se paralizara pues de los 20 polos planificados, sólo se realizaron nueve y de las etapas Emergencia, Seguimiento y Consolidación, se cumplieron en algunas y en otras se crearon expectativas, y esto vino a crear decepción entre los habitantes, causa aprovechada por la subversión para volver a incorporar gente en las comunidades en resistencia (Ejército de Guatemala, 1990).

Simultáneamente la población desplazada que se refugió en la montaña, cerca de sus aldeas, comenzó a crear asentamientos propios, fuera del control del Ejército, y así en 1983 los desplazados en la montaña reconstruyeron las comunidades de Xecoyeu, Santa Clara, Amajchel y Cabá, en el municipio de Chajul.

Después de estas primeras experiencias, el 26 de junio de 1984, el gobierno de Mejía Vítores emitió el Decreto Ley 65-84 por el que se creó el polo de desarrollo Triángulo Ixil, abarcando el municipio de Nebaj, las aldeas Acul, Tzabal, Juil-Chacalté, Río Azul, Pulay, Xolcuay, Ojo de Agua, Santa Avelina, Bichibalá, Salquil-Palob, Atzumbal, Juá-Illom, Chel, Xemal-Xeputul, Chiché, San Felipe Chenlá y Xix (Ejército de Guatemala, 1985a), y el 12 de septiembre el gobierno emitió el Acuerdo Gubernativo 801-84 estableciendo de máxima prioridad la asistencia básica a desplazados dentro del Plan de Polos de Desarrollo.

Al mismo tiempo, el 26 de noviembre la Jefatura de Estado emitió el Decreto Ley 111-84 creando el Sistema Nacional de Coordinación

Interinstitucional mediante el cual se pretendía poner toda la administración del Estado bajo el control de las zonas militares. Finalmente, se generalizó el recurso de las PAC en la mayor parte del territorio nacional, no solamente como mecanismo preventivo frente a la insurgencia, sino para reforzar el sometimiento de la población civil a la autoridad militar.



Capítulo Sexto

El gobierno de Vinicio Cerezo

Primera Parte

La transición (1986-87)

La Democracia Cristiana (DC) ganó con el 67% de los votos las elecciones de 1985. Durante su campaña, el candidato Vinicio Cerezo manejó con prudencia los tópicos de la situación militar. Fueron frecuentes sus referencias a la *violencia del pasado*, pero se cuidó mucho de hacer señalamientos concretos contra el Ejército. Sin embargo, frente a las presiones del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) prometió crear una comisión para determinar el paradero de los desaparecidos. También dijo que realizaría un referéndum aldea por aldea sobre el futuro de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Aseguró que las Coordinadoras Interinstitucionales pasarían a control civil, y que controlaría la Inteligencia Militar (D-2) y al Estado Mayor Presidencial (EMP) nombrando a personas de su confianza. Además anunció que haría desaparecer el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional, creado por el régimen de Ríos Montt y acusado de violaciones de los derechos humanos.

Estas declaraciones fueron matizadas por el Ejército, que de todas maneras se preocupó por mostrarse respetuoso con el proceso político. El general Rodolfo Lobos Zamora, jefe de EMDN saliente, declaró: *estamos preparados para gobernar, pero no conviene al Ejército el manejo de las funciones del gobierno, porque eso desgasta* (*Prensa Libre*, 11/12/85). Mejía Víctores aceptó en diciembre de 1985 que el futuro Presidente sería quien decidiría sobre las PAC y las Coordinadoras Interinstitucionales, además del futuro del Consejo de Comandantes. No obstante, en aquella época llamaron la atención las declaraciones del coronel D'Jalma Domínguez (antiguo vocero del Ejército y separado de éste por faltas disciplinarias), quien aseguró que la institución armada impondría sus condiciones al nuevo gobierno.

En cualquier caso, Cerezo sabía que él no había sido la única opción considerada por el Consejo de Comandantes. Durante la campaña electoral trascendió el apoyo indirecto que el general Pablo Nuila Hub y el canciller Fernando Andrade estaban prestando a la candidatura presidencial de Jorge Carpio y a su partido Unión de Centro Nacional (UCN).

En la campaña electoral todos los partidos renunciaron a emprender reformas estructurales del tipo de la reforma agraria o fiscal,¹ y a excepción de la DC todos los partidos criticaron las medidas fiscales del gobierno militar y apoyaron un programa económico neoliberal. Antes de las elecciones los

1 La DC afirmó hacerlo para no desestabilizar el proceso democrático.

sectores más modernos de los empresarios se mostraban confiados en un posible triunfo de la DC. Al afirmar que *nadie va a matar la gallina de los huevos de oro* expresaban su convencimiento de que la cúspide demócrata-cristiana coincidía con ellos en el peso que los empresarios habrían de tener en un futuro desarrollo económico. Por supuesto se trataba solamente de un sector de los empresarios, pero eran los que habían jugado un papel determinante en la unificación y definición de objetivos del sector. El resto parecía más unificado en torno a las medidas concretas que se pudieran aplicar, que en la capacidad política de la DC para lograr el crecimiento económico que ellos esperaban.

Todo parecía señalar que la experiencia de los últimos gobiernos militares, en los que tuvieron que sufrir la arbitrariedad de medidas económicas parciales o timoratas, les había enseñado las ventajas de la concertación. Aunque muchos preferirían un partido en el gobierno más moldeable a sus objetivos, se habían convencido de que ya tenían la fuerza suficiente para imponer su enfoque económico a cualquier formación política. En ese sentido no le daban un cheque en blanco a la DC (Ortego, 1986).

Algunos sectores del empresariado vieron las elecciones de 1985 como una especie de termómetro que les permitiría conocer mejor las perspectivas para la estabilidad a mediano y largo plazo, y medir las posibilidades de que sus postulados económicos se aceptaran como parte del nuevo consenso social. Este apoyo (a la democracia) tomó, por un lado, la tradicional forma de contribuciones económicas (a los partidos políticos); por otro lado, y de manera consciente con sus esfuerzos por mejorar su propia imagen y renovar su capacidad dirigente frente al conjunto de la sociedad, algunas organizaciones gremiales asumieron el papel de educación cívica tanto en relación a la nueva Constitución como al proceso electoral. En el sector empresarial se compartía un desprecio profundo por todos los partidos políticos y por la gran mayoría de sus dirigentes. En general, consideraban que ninguno de los partidos representaba sus intereses, y que la actividad política partidista estaba divorciada de los problemas reales de la población, plagada de corrupción e intereses creados, y con poca posibilidad de aportar soluciones.

1. La concertación

Las relaciones entre la DC y el Ejército ya se habían desarrollado en los últimos meses de 1985 en el marco del Diálogo Nacional convocado por el régimen militar. Después del triunfo de Vinicio Cerezo, éstas aumentaron. Trascendió en la prensa que el nuevo presidente y el general Mejía Vítores tuvieron por lo menos dos reuniones, antes de enero de 1986, para tratar los temas centrales para el Ejército. También se produjeron en esos días presiones y amenazas de los cuerpos de seguridad para frenar el alcance de los cambios que el nuevo presidente pretendiera introducir.

Así, el 12 de diciembre, el mismo día en que Cerezo anunció que disolvería el DIT, fue brutalmente torturada y asesinada Beatriz Barrios Marroquín, una maestra que ya había sido secuestrada y que estaba negociando su salida del país a través de la embajada de Canadá. Este crimen rompió un acuerdo no formal

entre el régimen militar y el cuerpo diplomático de proteger a los perseguidos políticos, y aunque acarreó protestas diplomáticas, sirvió como amenaza y desafío frente a las promesas de Cerezo de acabar con la impunidad de los cuerpos de seguridad.

Existían, de todas maneras, antecedentes de las posibilidades de entendimiento entre el nuevo gobierno y el Ejército. La DC ya había iniciado una aproximación a los militares en la década de 1970. Desde que en 1974 comprobaron que un triunfo electoral no les permitiría asumir el gobierno, iniciaron una estrategia de aproximación a los núcleos de poder real. En aquella ocasión la alianza establecida para acceder al gobierno fue con sectores del Ejército. Esta postura fue expresada en los ensayos *El Ejército una alternativa*, de Vinicio Cerezo, y *La DC y su posición ante el Ejército de Guatemala*, de Danilo Barillas. Según el especialista en temas militares, Alfonso Yurrita, las corrientes socialcristianas influyeron en la llamada *filosofía desarrollista* del Ejército elaborada a partir de 1982 (Yurrita, 1988).

En cualquier caso, el triunfo en las elecciones de 1985 de otras opciones de centro más influenciadas por la corriente neoliberal empresarial (como UCN o el MLN-CAN), habría representado una amenaza para la política desarrollista del Ejército. Después del enfrentamiento del CACIF con el gobierno militar en abril de 1985, la DC se había mostrado como la corriente más apropiada para continuar con la política militar desarrollista; también estaba en mejores condiciones para lograr financiamientos internacionales y servir de mediadora con las agencias financieras no gubernamentales.

El 3 de enero de 1986, antes de tomar posesión de la Presidencia de la República, Cerezo se reunió con el Consejo de Comandantes para presentar a los funcionarios que había elegido (Gramajo, 1995). Como ministro de la Defensa escogió al general Jaime Hernández Méndez, un militar que había jugado un papel clave en el golpe contra Ríos Montt y al que sólo le quedaba un año de servicio activo en el Ejército. Como jefe de Estado Mayor de la Defensa (EMD) eligió al general Alejandro Gramajo, vinculado con las corrientes desarrollistas y al que había conocido en el tiempo en que éste estuvo como agregado militar en Washington. Gramajo, a su vez, escogió como subjefe del EMD al coronel Manuel Antonio Callejas, el líder de *La Cofradía*, pero unido a Gramajo por lealtad a lo largo de la carrera militar. Cerezo designó al coronel Roberto Mata Gálvez como jefe de su Estado Mayor Presidencial (EMP), otro militar desarrollista que había desempeñado cargos importantes al frente de la campaña contrainsurgente, aunque como subjefe del EMP fue designado el coronel José Edgar Rolando Solís, un militar de inteligencia, también miembro de *La Cofradía*. Al frente de la D-2 quedó el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, quien había ocupado puestos administrativos y de Estado Mayor en la época del general Lucas.

Aunque el general Gramajo asegura que en un primer momento no introdujeron cambios o rotaciones importantes en los comandos militares, otros militares destacados en los últimos tiempos, como el general López Fuentes o el general Lobos Zamora, fueron destinados a puestos diplomáticos. Y militares con prestigio en la comunidad de inteligencia, como Nuila Hub, fueron desplazados a dirigir bases en el interior de la república. En cualquier caso,

Gramajo no era el oficial con mayores méritos para ocupar el puesto de jefe del EMD, y el nombramiento de Jaime Hernández, protagonista del golpe de 1983, como ministro –a pesar de que en un año debería pasar a retiro– significó un reconocimiento al grupo de poder instaurado en 1983.

Los militares más conocidos por su actividad desarrollista en el Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) fueron promovidos a cargos en el Estado Mayor de la Defensa o en el gobierno: Eduardo Wholers fue nombrado director de Asuntos Civiles; el general Fuentes Corado, director del CRN; el coronel Mario Paiz Bolaños, jefe del Estado Mayor Vicepresidencial; el coronel Francisco Castellanos Góngora, director de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP), y el coronel Julio Caballeros, director de la Policía Nacional. El nuevo papel de los jefes de los estados mayores Presidencial y Vicepresidencial, los llevó al poco tiempo a controlar toda la actividad pública y de despacho del presidente y del vicepresidente.

Simultáneamente, el régimen militar terminó de asegurar su futuro legalmente. El 10 de enero de 1986 fueron publicados 16 decretos-ley, de un total de 40 emitidos en esas fechas. Los más conocidos fueron el 8-86, que establecía la amnistía para todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos durante el período 1982-86, y el decreto 25-86, que modificaba nuevamente la Ley Constitutiva del Ejército. Dentro de este paquete también fueron promulgados decretos-ley menos publicitados pero de gran significado, como el 43-86, que establecía el Consejo de Seguridad Nacional, y otros que asignaron pensiones vitalicias y hereditarias para funcionarios del régimen militar, o bien que modificaron el régimen patrimonial del Comisariato del Ejército. También se incluyó el reconocimiento legal de las PAC convirtiéndolas en Comités de Defensa Civil; se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural, y se autorizó el contrato para supervisión de exportaciones con la firma francesa SGS.

Algunos comentaristas atribuyeron esta *lluvia de decretos* a un *convenio oral* entre el nuevo Presidente y el Ejército (*Inforpress*, 1987). Cerezo afirmó que el futuro Congreso tendría atribución para derogarlos, pero estos decretos estaban amparados por un artículo transitorio de la Asamblea Constituyente, como manifestó el Ejército cuando el GAM y algunos diputados intentaron derogar el decreto 8-86.

El 17 de enero, tres días después de la toma de posesión del nuevo Presidente, se volvió a reunir el Consejo de Comandantes con su Alto Mando entrante, para que el jefe del EMD les expusiera los nuevos lineamientos (Gramajo, 1995). En esta ocasión el general Gramajo insistió en el profesionalismo y la apoliticidad de la institución, y presentó el Plan de Campaña Consolidación 86; hizo advertencias contra la corrupción y habló de una *doctrina centralizada* en materia de seguridad.²

2 Desde la década de 1970 el Ejército aplicó una doctrina de decisión centralizada y ejecución descentralizada, la que dejaba en manos de los mandos intermedios la selección de víctimas o la aplicación arbitraria de medidas represivas. El énfasis de Gramajo en la doctrina centralizada bien puede referirse a un mayor control de las actividades represivas.

Los primeros meses del nuevo gobierno civil se caracterizaron por una intensa labor de aproximación al Ejército. Según relata Gramajo, de marzo a mayo el presidente se reunió numerosas veces con oficiales y mandos en el Centro de Estudios Militares (CEM), para explicarles la concepción democratacristiana de los objetivos nacionales y el Plan de Reorganización Económico Social (PRES) que estaba preparando. Ante la opinión pública defendió indirectamente sus compromisos con el Ejército, al afirmar: *Les recuerdo que he recibido el gobierno, pero no el poder.*

En esta etapa el mandatario paralizó una iniciativa del Congreso que pretendía revisar el Decreto Ley 8-86 y crear una Comisión de Investigación del Pasado, que pedía el GAM. También introdujo varios recortes en las atribuciones del Procurador de Derechos Humanos, cuya ley se estaba discutiendo en el Congreso. A pesar de todo, en los primeros meses del nuevo gobierno, el tema militar no pareció ocupar la principal atención del gobernante, concentrándose en negociar con los empresarios un Programa de Reordenamiento Económico y Social que debería satisfacer las inquietudes de los sectores desarrollistas del Ejército.

Según relata el general Gramajo, uno de los primeros trabajos conjuntos con el presidente fue presentarle el Plan de Campaña *Consolidación 86*. Uno de los propósitos de este plan era redefinir una doctrina integral de seguridad: la Estabilidad Nacional. *En Guatemala, la política es la continuación de la guerra por otros medios* fue la frase con que el mismo presidente resumió esta nueva concepción. En cuanto a los medios, Gramajo señala que se propusieron involucrar a organismos civiles, e incluso internacionales, en la atención a la población civil afectada por el conflicto armado, especialmente mediante ACNUR, la creación de la Comisión Especial de Atención a Refugiados (CEAR) y el Ministerio de Desarrollo, así como el traslado de las Coordinadoras Interinstitucionales a los nuevos gobernadores civiles. Al mismo tiempo se anunció que las Patrullas de Autodefensa Civil, que pasaban a llamarse Comités Voluntarios, no deberían incrementarse durante 1986.³

2. Los primeros acuerdos

En junio el Presidente anunció en una rueda de prensa que estaba elaborando un concepto de seguridad nacional, de acuerdo con la nueva situación democrática. En esos días la oficina de prensa de la embajada de los Estados Unidos distribuyó un discurso de Elliot Abrams, subsecretario de Estado, ante el Colegio Interamericano de Defensa: *Hoy aprendemos una lección nueva; además del nexo entre la seguridad y el desarrollo, hay un segundo nexo, éste entre la seguridad y la democracia.* Unas semanas después el

3 En febrero de 1986, el vocero del Ejército, capitán de navío Juan Fernando Cifuentes, declaró que las PAC ya integraban a un millón de hombres. En mayo, Cerezo dijo que haría un referéndum sobre el futuro de las PAC, pero en septiembre Gramajo declaró que las PAC son dirigidas estratégicamente y técnicamente por el Ejército, y en noviembre enfatizó: *En ningún momento se ha contemplado la disolución de las PAC sino, por el contrario, se están fortaleciendo en todo el país* (Prensa Libre 1/11/86).

recién nombrado director de la Policía Nacional, coronel Julio Caballeros, reconoció que existía una coordinación entre la policía y el Ejército, ya que aquella era la *primera línea de combate a la subversión*.

El tema que con más fuerza se reflejó ante la opinión pública referido a la cooperación entre el mandatario y el Ejército, fue la respuesta a aquellas presiones que exigían el esclarecimiento de la violencia y el juicio y castigo de los responsables. La primera propuesta del presidente fue que las organizaciones de derechos humanos recurrieran a los procedimientos legales. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cerezo había promovido a Edmundo Vásquez Martínez, quien gozaba de prestigio y consideración en la sociedad, aunque para el Ejército, incluso para los más moderados, era considerado comunista. El Juzgado Noveno fue encargado de tramitar los recursos de exhibición personal y se le otorgaron al juez Olegario Labé, facultades para ejercer la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, este mecanismo se agotó en pocos meses, según pudo apreciar una Comisión Internacional de Juristas que visitó el país en julio.⁴ Otra iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, el crear un Registro Único de Detenidos, también fracasaría poco después por falta de colaboración del Ejecutivo (WOLA, 1989).

En marzo, cuando el GAM logró influir a algunos diputados para que revisaran el Decreto-Ley 8-86 y lanzó una campaña internacional contra el nombramiento del general Rodolfo Lobos Zamora como embajador en Panamá, la postura de Cerezo fue más agresiva, respondiendo al grupo humanitario: *Ustedes son masoquistas... los desaparecidos eran guerrilleros*. A partir de entonces fue el propio Ejército a través del ministro de la Defensa o mediante campos pagados (*Prensa Libre* 26/6/86) el que atacó al GAM, acusándolo de estar pagado por intereses antipatrióticos. Finalmente el Presidente, en vísperas de una gira por Europa, anunció la creación de una comisión encargada de determinar la desaparición legal de los casos que se les presentaran para establecer su *muerte presunta* y gestionar ayudas económicas para los familiares. Esta posición radicalizó el enfrentamiento con el GAM, que llegó a ocupar el Palacio Nacional. En este contexto hubo campañas de presión psicológica contra el GAM y sus dirigentes, anunciando escisiones en el grupo y atacando el honor de Nineth Montenegro.

También en el desarrollo de los planes de guerra, el Ejército recibió el apoyo del presidente Cerezo, una vez que le fue presentado el Plan de Campaña *Consolidación 86*. Según relata Gramajo, en 1986 se priorizó a las unidades de apoyo de servicios, terminándose de equipar el Hospital Militar y completándose unidades de transporte. La principal ayuda para este reequipamiento se logró en los Estados Unidos, a donde viajó el general Gramajo en octubre. Asimismo se

4 En su informe relatan con detalles el caso del joven Luis Fernando de la Roca, ocurrido en 1985: El juez (Labé) requirió sobre los propietarios de las placas del vehículo que había sido identificado en un secuestro, y el registro de este organismo ratificó que los automóviles pertenecían al Ministerio de la Defensa. El juez instó a éste para que informara quiénes utilizaban el vehículo el día del secuestro y la respuesta fue que había sido sustraído en fechas y por personas no precisadas. Al solicitar prueba judicial de esta afirmación, se comprobó que no existía denuncia de sustracción ante ninguna autoridad militar o civil. Ya no se prosiguieron las averiguaciones judiciales.

reestructuraron las zonas militares mediante el Acuerdo Gubernativo 431-86, que suprimió cinco zonas militares y las agrupó con sus vecinas (*Inforpress*, 1987).

Durante 1986 el Ejército limitó sus operaciones a lo que Gramajo llamaría *Reconocimiento en Fuerza*: cortas operaciones de incursión en zonas controladas por la guerrilla, concentrando gran cantidad de efectivos en áreas pequeñas para evitar bajas. Estas campañas, que se desplegaron en los meses de abril-mayo y octubre-diciembre, no impidieron que la actividad de la guerrilla del primer semestre alcanzara en el segundo semestre un desarrollo similar al de 1985. La actitud prudente del Ejército no evitó que sufriera ataques contundentes, como la destrucción de un pelotón completo en noviembre. Las dificultades económicas parecieron haber limitado la capacidad ofensiva del Ejército, como deja entender Gramajo cuando señala, por ejemplo, que en Petén, zona de actividad de las FAR, se concretaron a proteger las vías de comunicación fundamentales. Sin embargo estas operaciones militares, especialmente en el área Ixil, comenzaron a arrojar un alto número de civiles capturados, según reflejó la prensa en los últimos meses del año.

Precisamente en la atención a la población desplazada por la guerra fue donde más claramente se mostró la colaboración del gobierno civil. Ya desde abril se produjeron los primeros casos de retorno de desplazados, que buscaron la protección de la Iglesia católica en Izabal y La Verapaz. En ambos casos el Ejército secuestró y asesinó a algunos de los retornados, con la correspondiente protesta de la Iglesia, que el presidente no atendió (Mack, 1990). En mayo y noviembre aparecieron informaciones sobre campesinos del área Ixil que se entregaban al Ejército (*Prensa Libre* 28/5/86 y 15/11/86, *El Gráfico* 8/6/86), y en diciembre el diputado Dimas de León denunció que miles de ixiles se estaban muriendo de hambre. En este ambiente de denuncias, el gobierno creó en septiembre la CEAR, integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo y el CRN, que inmediatamente comenzó a gestionar fondos de ACNUR para atender a estos grupos. En cuanto a los Polos de Desarrollo, el Ejército ya no tenía interés en mantenerlos bajo su administración, de manera que arregló su traslado al Ministerio de Desarrollo.

El segundo tema de concertación para respaldar la línea del Ejército, fue la negativa del presidente Cerezo a dialogar con la guerrilla. Inicialmente la URNG, en declaraciones del comandante *Pablo Monsanto*, ofreció un *compás de espera* para no entorpecer al gobierno en el cumplimiento de sus promesas electorales. Este paréntesis fue efectivamente reconocido por el propio Gramajo (Gramajo, 1995). Sin embargo ya desde su campaña electoral, lo único que Cerezo había adelantado era la promesa de una amnistía (misma que el Ejército estaba preparando con su Decreto Ley 8-86) y la amenaza de aplicar todo el peso de la ley a quienes no la aceptaran.

En mayo la URNG presentó una propuesta global de depuración y reestructuración de los cuerpos de seguridad, que fue respondida por el Presidente en su discurso del Día del Ejército, advirtiendo que no había más diálogo que acogerse a la amnistía. En octubre la URNG hizo pública una *Carta Abierta* donde proponía un diálogo al más alto nivel y según Gramajo, en noviembre de 1986, la guerrilla se acercó a la embajada de Guatemala en España para proponer conversaciones, que fueron aprobadas por el alto mando. Pero

para finales de año la guerrilla ya se mostraba *decepcionada* de las expectativas ofrecidas por Cerezo y había restablecido su nivel de operaciones.

En lo que se refiere a los acuerdos previos con el sector empresarial, la formación del gobierno demócrata cristiano estuvo determinada por criterios partidistas, aunque en algunos puestos clave se colocó a personajes que tenían claras vías de acercamiento con el sector empresarial, como el ministro de Finanzas, Rodolfo Paiz Andrade (miembro de una poderosa familia comercial); Lizardo Sosa, ministro de Economía (a quien los empresarios ya conocían a través de la Junta Monetaria); y Eduardo Goyzueta, ministro de Comunicaciones (que había sido presidente de la Cámara de Construcción). Pero el personaje más confiable para el sector empresarial, que la DC colocó al frente del Banco de Guatemala, fue Federico Linares, economista, ejecutivo de la financiera FIASA, vinculada con la familia Castillo.

Lo primero que el gobierno negoció con el sector empresarial fue un Plan de Estabilización Económica en el que los empresarios ofrecían apoyar determinadas medidas populistas con un impuesto especial a la exportación, a cambio de contrapartidas. Así, en abril, el Congreso aprobó la Ley de Régimen Cambiario Especial, el Impuesto Extraordinario a la Exportación, la Ley de Derechos Arancelarios, la Suspensión de los Certificados de Abono Tributario a la Exportación, el Impuesto Extraordinario de GUATEL y la modificación al Presupuesto del Estado (incremento del 36%).

El 1 de mayo entró en vigor el Programa de Reordenamiento Económico y Social (PRES) que proponía Q100 millones para crear 400,000 puestos de empleo emergente; subía el encaje bancario para reducir el crédito de corto plazo y fijaba la tasa de interés en relación a la inflación; establecía un impuesto global y decreciente del 30% para las exportaciones; también mantenía el mercado de divisas controlado, pero se establecían tres tipos de cambio que permitían que los agroexportadores recibieran las divisas a 2.5 por 1, compensando así los impuestos extraordinarios. Además incluía otras medidas propuestas por el FMI y que el anterior gobierno militar no quiso aplicar por su carácter antipopular, como el aumento de las tarifas telefónicas y la liberación del precio de productos básicos (aunque luego se fijaron *precios tope*). Finalmente aconsejaba un aumento salarial entre el 10% y el 25%, frente a una inflación prevista del 30%.

Ya en abril el CACIF había publicado sus *Observaciones y recomendaciones del sector privado al Proyecto de Reordenamiento Económico y Social* (PRES), en las que solicitaba un sólo tipo de cambio y una amnistía cambiaria para aquellos exportadores que aún no habían ingresado sus divisas (se estimaban unos US\$100 millones). Por otro lado criticaba el crecimiento excesivo del gobierno y la fijación de impuestos especiales a la exportación (proponían limitar el impuesto especial a Q500 millones); solicitaba la venta en pública subasta de los activos ociosos del Estado y criticaba la contratación de la empresa SGS para supervisar el comercio exterior, así como el tope de cartera establecido al sistema bancario.

El CACIF también había negociado con el gobierno las reformas al presupuesto del Estado antes de que éstas fueran sometidas a la aprobación del Congreso. Cuando se publicó el PRES, Peter Lamport, presidente del CACIF, afirmó: *El plan del gobierno quiere quedar bien con todo el mundo. Sin*

embargo, a pesar de la reacción furiosa de los algodoneros, que perdieron la protección que disfrutaban, la reacción de la Cámara de Exportación fue comprensiva. También Álvaro Castillo Monge, presidente de la Cámara de Industria, apoyó las medidas monetarias del gobierno, incluidas la subida de las tasas de interés y la restricción del crédito bancario, ya que se trataba de medidas selectivas que afectaban al sector empresarial según su poder o su influencia en el sistema financiero. Los agroexportadores señalaron que ellos se autofinanciaban y que los perjudicados serían los industriales no exportadores y no financieros.

En general los empresarios se mostraron satisfechos de esta negociación global, más fácil que las que tenían que mantener con el gobierno militar, aunque se reservaron el derecho de crítica por las muestras *socializantes* de la DC y de presión para dismantelar el sector público (Campo pagado en *Prensa Libre* 21/3/86).

De hecho el CACIF se comprometió a aportar al gobierno Q500 millones en ese año, el 50% a cuenta del Impuesto sobre la Renta. Finalmente de unos ingresos especiales por impuestos a la exportación previstos en Q460 millones, en 1986 sólo se recaudaron Q213 millones. El propio Presidente se atrevió a pedir más colaboración, al afirmar en mayo ante la Cámara de Industria: *Si ustedes no se arriesgan a invertir más, con criterios modernos y de eficacia productiva, el Estado no va a tener capacidad de satisfacer las necesidades y continuaremos con presupuestos deficitarios y problemas socioeconómicos que llevarán a la inestabilidad política. Entonces, nosotros (el gobierno) tendremos que invertir aunque no queramos y suplir esa falta de iniciativa privada.*⁵

Como contrapartida se habían concedido ventajas extraordinarias en la adjudicación de divisas a las empresas de exportación agrícola no tradicional, por lo que finqueros tradicionales montaron pequeñas empresas de baja inversión, pero con altas utilidades por el diferencial cambiario y la subfacturación. También el sector financiero, solamente con la cesión de operaciones cambiarias, obtuvo beneficios por Q15 millones. Prácticamente el PRES propuso el sistema financiero privado para reciclar o limpiar capitales que habían huido del país en años anteriores. Así se recapitalizaron bancos como el Inmobiliario y el del Quetzal, señalándose en algunas ocasiones que existían grupos militares detrás de estas operaciones (Lobos Zamora y Lucas García), repatriando capitales; y surgieron otros bancos, como el Banco Promotor, con capital agroexportador. Como secuela se produjo una gran monetarización provocada por las ventajas del tipo de cambio a los agroexportadores, la cual comenzó a provocar tensiones inflacionarias en los siguientes años.

Si bien el balance económico de los dos primeros años de gobierno demócrata cristiano resultó aceptable, el sector empresarial fue el único beneficiado ya que los contenidos populistas o *desarrollistas* del PRES no llegaron a ejecutarse, a pesar del aumento del presupuesto público. Ahora bien,

5 En 1986 la economía ya no continuó bajando, pero tampoco creció, básicamente influida por el estancamiento de la inversión privada. El déficit público se ensanchó. El PRES logró estabilizar durante ese año el tipo de cambio y la inflación, pero era claro que se trataba de un programa de corto plazo.

en 1986 el gobierno sólo ejecutó el 30% del gasto social programado, debido a las presiones monetarias que le impuso el Banco de Guatemala.

Por eso para cumplir con el compromiso de asignar el 8% del presupuesto a las municipalidades, el gobierno tuvo que recurrir a la emisión de bonos; y ante la falta de recursos el Ministerio de Finanzas se convirtió en el eje de la política de inversión pública, dejando de lado a los organismos técnicos como la Secretaría General de Planificación. En resumen, si bien el PRES logró estabilizar las variables monetarias, no fue capaz de ejecutar sus compromisos de inversión social. El balance de ejecución global presupuestaria en 1986 fue del 58%, destacando el 100% en Defensa y el 25 % en Educación y Salud; estos últimos representaron apenas un 2.5% del PIB, un porcentaje similar al de 1960. El Ministerio de Desarrollo no fue dotado de los suficientes recursos, hasta el punto de que a mediados de 1987 contaba con sólo 700 promotores frente a 2,000 de la S-5 del Ejército.

3. Las primeras tensiones

Pronto el gobierno reaccionó frente a esta situación y en 1987 comenzó a producir giros en su política, lo que provocó la consecuente respuesta empresarial. El 19 de marzo el presidente hizo público su *Memorándum a todos los guatemaltecos*, en el que exponía el Plan de Reorganización Nacional (PRN) para 1987. Éste incluía extensas reformas estructurales para revertir la deuda social del Estado con su población.

Ese mismo mes el gobierno anunció una campaña de entrega de fincas estatales y UNAGRO pidió la destitución del ministro de Agricultura, Rodolfo Estrada. De todas maneras se crearon dos comisiones mixtas sector privado-gobierno: una para revisar las tarifas eléctricas (que fracasó cuando el gobierno rechazó hablar de la privatización del subsector), y otra para facilitar las exportaciones (que se rompió cuando el gobierno renunció a suspender el contrato con la SGS). No obstante, el 15 de abril, el presidente del Banco de Guatemala, Federico Linares, anunció la unificación cambiaria y la limitación del crédito al sector público (dos peticiones del sector privado), lo que se revirtió contra el cumplimiento del anunciado PRN al limitar recursos. Al unificar el tipo de cambio por debajo de su valor real se favoreció a los importadores, y simultáneamente el sistema financiero amplió el crédito para que los empresarios compraran dólares baratos. Con ello se incrementó el déficit comercial a US\$170 millones.⁶

Como respuesta el gobierno comenzó a analizar la posibilidad de una reforma tributaria revisando la base imponible, estableciendo un IVA diferenciado y aumentando el impuesto a determinadas importaciones. El Presidente inició nuevas negociaciones con el sector privado en dos puntos:

6 De hecho fue la ayuda financiera de la AID -que ya en 1986 había condicionado el desembolso de US\$56 millones al cumplimiento por el gobierno de 14 medidas de política económica- que permitió mantener esta subvaluación del dólar y aumentar la capacidad de compra del país en los Estados Unidos.

reforma tributaria y papel del Estado en la economía, al tiempo que solicitaba al CACIF Q100 millones para detener el déficit fiscal. En mayo se integró la Comisión Bilateral gobierno-CACIF para discutir la reforma tributaria y, a comienzos de junio, ésta estableció la agenda de discusión y comenzó a trabajar hasta que en agosto el sector privado pidió una moratoria de 60 días para conocer a fondo los proyectos de reforma fiscal. Pero a inicios de septiembre los anteproyectos fueron enviados al Congreso para su aprobación junto a la Ley de Control de Precios y Congelamiento de Alquileres.

El gobierno había presentado su programa de readecuación tributaria para evitar que el déficit fiscal alcanzara el 4.9% del PIB previsto. Pretendía reducir el gasto público en Q60 millones y lograr una recaudación en 1987 de Q400 millones adicionales. Sin embargo el ministro de Finanzas afirmaba que la deuda social era muy grande y que no se podía perder el tiempo en discusiones.

También el Ejército presionaba al gobierno para que se aplicara cuanto antes la reforma tributaria y se pusiera en ejecución el PRN.⁷

Por otro lado se habían producido cambios en el gobierno: Rodolfo Paiz desplazó a los otros miembros del gabinete económico y preparó sus reformas tributarias al margen de la negociación. Paiz lanzó la campaña de la *deuda social* y pretendió aumentar la recaudación en Q170 millones. Las tensiones políticas generadas llevaron a la renuncia del presidente del Banco de Guatemala, Federico Linares. Su lugar lo ocupó José Miguel Gaitán, un técnico desarrollista que no merecía la confianza de los empresarios. También salió de Comunicaciones Eduardo Goyzueta, y en su lugar entró el empresario Mario López Estrada, vinculado con la estructura partidista de la DC. López Estrada llevó a la dirección de GUATEL a Francis Ramírez, esposo de la ministra de Asuntos Específicos de la Presidencia, Sara Mishán.

En marzo se creó por acuerdo gubernativo el Departamento de Control Administrativo de la Presidencia (DECAP), bajo la dirección del coronel Hugo Morán Carranza, quien desde el ministerio de Finanzas había tenido que ver con el control de las evasiones de impuestos de algunos empresarios, entre ellos Carlos Whitman. En este contexto fue que se desencadenó el primer gran enfrentamiento público de la cúspide del sector empresarial con el gobierno: las huelgas empresariales de septiembre de 1987, que pusieron punto final a la etapa de concertación y permitieron salir a la escena pública a la nueva fuerza de choque del sector empresarial.

4. Ruidos en los cuarteles

A pesar de la profunda colaboración del nuevo gobierno civil en los aspectos centrales de la agenda contrainsurgente del Ejército, desde el primer

7 En agosto de 1987 el Alto Mando presentó en el Consejo Empresarial, ante un nutrido público, una amplia exposición sobre el desarrollo integral de la contrainsurgencia. El foro, denominado *27 años de lucha por la libertad*, concluía con que los bajos salarios y el mal trato de los trabajadores era un caldo de cultivo de la subversión, y llamaba a los empresarios a un compromiso patriótico para atender los graves déficits sociales que aquejaban al país, entre ellos, aceptar una reforma tributaria.

año comenzaron a perfilarse contradicciones. Con motivo de las primeras movilizaciones sociales de empleados públicos en la ciudad y de campesinos que pedían tierras en la costa, los medios de comunicación comenzaron a hablar de descontento militar (*Prensa Libre* 20/4/87).

Según relata Gramajo, las primeras protestas militares se centraban en el *revanchismo* de los funcionarios civiles que habían llegado al gobierno y que actuaban con espíritu antimilitarista. Cita el caso de los cónsules en ciudades fronterizas de México, que fueron rotados, y los atrasos del Banco de Guatemala en los desembolsos del presupuesto militar, pero hace especial énfasis en la descordinación de la política de seguridad, aunque es probable que también estuviera pensando en muchos oficiales activos y en retiro que ocupaban importantes puestos en la administración pública y que fueron desplazados por funcionarios de confianza del partido en el gobierno.

En mayo de aquel mismo año algunos observadores advertían sobre el peligro de que se gestara en el Ejército una *camarilla* de altos mandos demasiado próximos al Presidente, con lo cual se rompería la tranquilidad institucional lograda por Mejía Víctores. El surgimiento de esta *camarilla* fue de hecho anunciado por Cerezo al advertir que nombraría a oficiales de su confianza. Pero, por otro lado era inevitable, dado el control militar sobre el poder Ejecutivo ejercido desde los estados mayores presidencial y vicepresidencial, así como el involucramiento de Cerezo junto al jefe del EMD para explicar su política a los altos oficiales.

La política desarrollista generó críticas en los medios militares, pues se estancó por incapacidad administrativa, las presiones del sector empresarial y las contradicciones entre el Ministerio de Desarrollo (dirigido por René de León Schlotter) y otras dependencias como la Vicepresidencia (a cargo de Roberto Carpio Nicolle). Aunque el ministro de Desarrollo intentó atraer a las ONG para que apoyaran sus programas, provocando una escisión entre éstas al crearse COINDE y salirse de ASINDES, los apoyos logrados no fueron significativos.

El Ejército continuó dando toda la importancia a su Sección de Asuntos Civiles, hasta el punto que en 1986 el Estado Mayor publicó su documento de doctrina. El general Eduardo Wholers, director de la S-5 del EMD, señaló que julio de 1987 había sido fijada como fecha límite para probar la capacidad del gobierno. Esta misma Sección de Asuntos Civiles hizo circular a finales de ese año un documento titulado *Análisis de las causales que hacen inoperante la estrategia global del gobierno*.

La lucha contra la corrupción que anunció el Presidente en los primeros meses de mandato también generó recelos y suspicacias en las filas del Ejército, ya que las alusiones a la corrupción del pasado bien podían ser atribuidas al Ejército (por ejemplo con las presiones del CACIF para que el gobierno destituyera al coronel Solares, director de la zona de libre comercio, ZOLIC). En este terreno algunos sucesos quedaron oscurecidos dentro de las luchas internas de los organismos de seguridad, como el cese fulminante del director del CRN, general Fuentes Corado, después de que comprobaran irregularidades en la distribución del alimentos del Programa Mundial de Alimentos, o los asesinatos del teniente Mazariegos (destinado a GUATEL) y del capitán de aviación Galich, presentados por Cerezo como *víctimas de la lucha contra la corrupción*.

Además en el primer año de gobierno civil no se resolvieron satisfactoriamente los problemas logísticos del Ejército. Como había dicho Gramajo, el EMD tuvo problemas para lograr agilizar los desembolsos del Banco de Guatemala, y aunque su viaje a Washington en octubre le reportó la promesa de una ayuda de US\$9 millones para *equipo no letal*, ésta suma era inferior a lo que el ministro de Gobernación había logrado para reequipar a la Policía Nacional.

También la política exterior de *neutralidad activa*, anunciada en la reunión de presidentes centroamericanos de Esquipulas, provocó desconcierto en las filas militares, pues en ese momento el ministro de la Defensa era presidente del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA). Los militares vieron con recelo las iniciativas de los políticos en materia exterior, especialmente el intento de condena al régimen racista de Sudáfrica (que tenía como fin ganar apoyos en la cumbre de los países No Alineados y las declaraciones de una comisión de diputados que visitó Nicaragua). Para calmar las inquietudes en el Ejército y marcar los límites a los políticos, el alto mando militar se reunió a puerta cerrada con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

La política de seguridad del nuevo gobierno civil provocó malestar en las filas militares. La disolución del DIT no pareció representar mayor problema para las estructuras de seguridad, que reincorporaron a los cuadros más importantes en la recién creada Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos (BIEN). Tampoco en materia de garantías ciudadanas representó un avance, como explica el informe de una comisión de juristas, antes citada, cuando afirma que los jueces sólo tomaban conocimiento de los datos del archivo del ex-DIT por certificación emitida por la policía, sin que existiera control judicial de dichos archivos (Comisión Internacional, 1986).

Aunque el Partido Socialista Democrático (PSD) denunció 60 asesinatos políticos en los primeros 24 días de Cerezo, fue hasta después de abril, al producirse las primeras protestas populares, cuando el Ejército se quejó de que faltaba una *política integral de seguridad y presión al gobierno civil para que restableciera el desfase que se había producido en la comunidad de inteligencia* (Gramajo 1995). Al mismo tiempo el ministro de la Defensa denunció que la subversión se estaba infiltrando en los movimientos sociales en la capital y en Izabal, así como en el movimiento campesino que reclamaba tierras.

Tuvieron lugar entonces los nombramientos del coronel Julio Caballeros como director de la Policía Nacional, del coronel Ricardo Pinto como subdirector y del capitán Clodoveo Domínguez como director de Migración. Ya entonces se habían producido algunos hechos represivos que más parecían atribuibles a la autonomía de los comandantes de zona militar (supuestamente anulada por la *doctrina centralizada*), como los secuestros de desplazados-retornados en Alta Verapaz e Izabal y los secuestros realizados por militares en Palín y Escuintla.

Finalmente en junio apareció el artículo *La Burocracia de la Muerte*, escrito por Alan Nairn y Jean-Marie Simon, en la revista *New Republic*. En él se describía la estructura de seguridad de la D-2 y del EMP, y se denunciaba la vinculación del general Edgar Godoy, director de inteligencia, con *La Cofradía*. El artículo se refería a un acuerdo entre Cerezo y el Ejército para cambiar los

métodos de la represión con el fin de disminuir el costo político de la violencia. En cualquier caso, las prioridades de la seguridad en este primer año parecieron centrarse en renovar sus métodos y estructuras, y actualizar sus bases de datos. La campaña psicológica contra el GAM fue lo más significativo, junto a determinados casos de violencia en el interior que mostraron cómo los comandantes de zona no acataban la *doctrina centralizada*.

5. La fuerza de la nueva derecha empresarial

Con el arribo del nuevo gobierno también llegaron al control de los órganos de decisión empresarial nuevos grupos, justamente cuando la coyuntura económica y política regional e internacional parecía favorecer el desarrollo y la mayor fuerza del sector empresarial guatemalteco.⁸ Los sectores económicos favorecidos por las medidas monetarias del gobierno se reactivaron inmediatamente. Así durante 1987 creció el cultivo de los productos no tradicionales de exportación; también el azúcar y el algodón, gracias a los precios logrados para el mercado interno en negociaciones con el ministro de Economía,⁹ y en el caso del café porque se legalizó su exportación.

Igualmente se dio un incremento de la producción industrial y la producción de granos, estimulados por la liberalización de los precios tope. El sector de la construcción creció en un 20%, según el CACIF, y los ingresos por turismo triplicaron los de 1986. El CACIF anunció una repatriación de capitales de US\$200 millones, y las exportaciones no tradicionales crecieron en un 53%. Finalmente, el sector financiero vio también aumentado su proceso de concentración, ya que si en 1983 los tres bancos más grandes acaparaban el 23% de las operaciones financieras, en 1987 esa proporción había subido al 39% (Marroquín/Escoto, 1993).

Todos estos elementos influyeron para que el sector empresarial organizado adoptara una posición cada vez más beligerante contra el gobierno. Ya en marzo de 1986 el Consejo Nacional del Algodón y la UNAGRO se opusieron a las propuestas para diversificar el área dedicada al cultivo del algodón, que estaba básicamente ociosa. En abril se registraron presiones del CACIF para que el gobierno cesara al coronel director de ZOLIC. En julio se inició una campaña de CACIF contra la contratación de la empresa supervisora del comercio

8 En 1986 se recuperaron los precios internacionales del café, bajó la cotización del petróleo y disminuyeron las tasas de interés. Además en enero entró en vigor el Convenio sobre el nuevo Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. La AID destinó US\$10 millones para el programa de desarrollo de la empresa privada y las exportaciones de Guatemala a los Estados Unidos, bajo un régimen arancelario favorable (la Iniciativa de la Cuenca del Caribe), se triplicaron. Los empresarios salvadoreños hicieron causa común con los guatemaltecos, al negarse a apoyar los planes contrainsurgentes de la Fuerza Armada de El Salvador, que les pedían compartir los costos de la guerra. Por último, en agosto de 1987, aparece la revista *Crónica*, de Francisco Pérez de Antón, un español radicado en Guatemala, asesor del grupo empresarial Gutiérrez-Bosch.

9 El sector azucarero logró, además, negociar directamente un aumento de la cuota de exportación en los Estados Unidos.

internacional SGS, la cual motivó que en septiembre se interrumpiera el diálogo gobierno-CACIF con motivo de la renovación del contrato a esa empresa. Finalmente en diciembre la Cámara de Comercio de Guatemala y sus filiales en la república iniciaron una campaña contra la aprobación del próximo presupuesto público. A esta campaña se sumó el CACIF y la Cámara de Industria pidiendo un recorte de Q750 millones.

Pero fue en 1987, con la llegada de Juan Luis Bosch y Víctor Suárez a la Cámara de Industria, y de Edgar Heinemann a la Cámara de Comercio, cuando se impuso una línea más dura en el sector empresarial. En agosto el CACIF inició su campaña contra la reforma tributaria que pretendía aplicar el gobierno, con las consignas *Cuando el gobierno crece, el país se empobrece, y La solución no es cubrir el déficit, es no crearlo*, con lo cual empezó una guerra de desgaste propagandístico contra el gobierno. El 11 de septiembre el CACIF convocó al primer paro empresarial de medio día a nivel nacional, y una semana después aceptó participar en una comisión que estudiaría la reforma tributaria, a la vez que rechazaba cualquier intento de golpe o de alterar el orden constitucional. Pero ese mismo día 18, el CACIF convocó un segundo paro empresarial de un día con carácter regional. La Comisión Mediadora se instaló oficialmente el 27 de septiembre, aunque en ese mismo día el *Diario de Centroamérica* publicó la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

Como respuesta el 7, 8 y 9 de octubre los empresarios, especialmente la Cámara de Comercio, llamaron a movilizaciones populares y huelgas de todos los productores contra el paquete tributario del gobierno. Juan Carlos Simons, diputado del MLN, vinculó los nuevos impuestos con el diálogo con la guerrilla que se había celebrado en Madrid y denunció que a los oficiales les pagaban en dólares: *El Ejército está dividido*, afirmó. Por su parte, el ministro de la Defensa, general Gramajo, se declaró contra la *derecha desestabilizadora* que pretendía que el Ejército le hiciera el *trabajo sucio*. Por fin el 15 de octubre se creó una Comisión de Lujo integrada por José Pivaral, Juan Luis Bosch y Gustavo Anzueto, entre otros, para discutir la aplicación de las leyes ya aprobadas. Se comprometieron a abandonar la *guerra ideológica* y se centraron en la discusión del Código Tributario y de Comisiones Técnicas que revisarían cada uno de los tributos. La batalla contra los impuestos resultó finalmente negativa para el sector empresarial, ya que éstos fueron definitivamente aprobados.

En la lucha contra los impuestos se desataron fuerzas incontroladas dentro del sector empresarial, que no tardarían en poner en riesgo los difíciles compromisos de la transición institucional. Víctor Suárez, vicepresidente de la Cámara de Industria, declaró al periódico español *La Vanguardia* que la parte patronal había recibido ofertas de altos militares para dar un golpe de Estado; el general Gramajo confirmaría posteriormente que estaba al corriente de estas conversaciones. Asimismo en noviembre se inició una campaña de prensa de la derecha contra la línea de Gramajo en el Ministerio de Defensa dirigida por el columnista *Edmundo Dantés* (Danilo Roca) y el diputado Juan Carlos Simons del MLN.

6. Una batalla sin ganadores

Esta primera batalla desataría un proceso desestabilizador que se manifestó con fuerza en 1988 y 1989. Como apunta un analista:

Ni bajo la égida de los militares, ni después, resultó viable un acuerdo de gobernabilidad con las cámaras empresariales y las familias pudientes con mayor influencia. En el fondo había una disputa de hegemonía que subrayaba las rivalidades y encontraba escasos puntos de coincidencia. Cuando estas coincidencias se localizaban, únicamente permitían acuerdos circunstanciales muy específicos, que correspondían a intereses familiares o gremiales que no daban lugar a continuidad ni a ser generalizados. Los militares varias veces reclamaron que ellos habían expuesto sus fuerzas para salvar los capitales y que el esfuerzo de los hombres de negocios para 'salvar al país del comunismo' había sido poco significativo. Ahora —argumentaron— lo que correspondía era que 'alrededor de la fuerza moral que representa el Ejército' los empresarios se integraran al proyecto de nación cumpliendo su papel: ayudar a estabilizar el sistema invirtiendo sus capitales, participando en los programas sociales, pagando impuestos, reconociendo mejores salarios y dando mejor trato a la fuerza laboral. Ordinariamente los empresarios respondieron que el Ejército carecía de fuerza moral para tales exigencias y reclamaron el enriquecimiento ilícito de la mayoría de los oficiales, la corrupción y la descomposición de los aparatos del Estado, donde la influencia castrense era considerable. Tampoco la clase política tuvo capacidad para servir de intermediaria entre empresarios y militares. Los demócrata cristianos trataron de emplear con la élite económica la táctica de 'divide y vencerás', utilizando justamente la lógica de ganancia empresarial, pero los logros inmediatos no les permitieron acumular alguna fuerza apreciable. Cuando el sector privado en su conjunto vio que sus intereses globales podían verse amenazados, reaccionaron al unísono y las disensiones tuvieron un impacto externo limitado (Gutiérrez, 1995).

Por otro lado las declaraciones del general Gramajo en respuesta a las provocaciones de Juan Carlos Simons no tenían precedente en la historia reciente del país, al menos en unos términos tan claros, y las circunstancias en que fueron expresadas reflejaron más que una actitud institucional del Ejército, un apoyo del ministro de la Defensa al gobierno, como el mismo Gramajo reconoció. Esto efectivamente resultó arriesgado, pues desde la época del gobierno del presidente Carlos Arana, 1970-74, existían fuertes lazos entre un sector empresarial agrícola y altos mandos militares, que se sintieron provocados por las declaraciones del general.

La incapacidad de negociación del empresariado tuvo una manifestación más clara, aunque no tan publicitada en el marco de las relaciones laborales. De hecho, en 1986 se produjo un promedio de dos actividades reivindicativas por mes, a pesar de que de acuerdo a UNSITRAGUA el 50% de la PEA de la capital se movía en el sector informal urbano, y según un estudio de la embajada de los

Estados Unidos, unos 300 de los 650 sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo (incluyendo también federaciones y confederaciones) ya no eran activos (USIS, 1986).

El nuevo gobierno fue recibido con una ola de invasiones de terrenos en las áreas marginales de la capital en enero, y durante todo el año afrontó reivindicaciones de los empleados públicos y de campesinos que demandaban tierras. También algunos trabajadores de la empresa privada, como los de las bananeras, organizaron fuertes movimientos reivindicativos en aquel primer año de gobierno civil. En materia organizativa, el movimiento sindical y popular registró un rápido renacer.¹⁰

Esta reactivación de las actividades sindicales, especialmente entre los trabajadores de la administración pública, fue enfrentado por el gobierno con violencia en algunas ocasiones. En enero Edgar Flores, secretario general de la FENATRAM, anunció que en menos de un mes los nuevos alcaldes de la DC habían despedido a 800 trabajadores y anunció medidas de hecho; mientras la CUSG denunciaba despidos masivos en Puerto Barrios, Izabal y Retalhuleu. El 23 de septiembre la policía ocupó las instalaciones de la Empresa Eléctrica, cuyos empleados se encontraban en huelga, y en noviembre de produjeron nuevos despidos en la municipalidad capitalina.

Por su parte el sector empresarial se limitó a presentar al Congreso, en mayo de 1986, un proyecto de revisión de la Ley de Bonificación y Ley de Compensación por Tiempo Servido. El 15 de julio la UNAGRO se pronunció contra las concentraciones de campesinos. Como respuesta inmediata a estas demandas empresariales, el ministro de Trabajo organizó en junio el Primer Encuentro Sindical, en el que planteó la revisión del Código de Trabajo y de la Ley de Servicio Civil, que impedía las luchas sindicales de los burócratas.

Al 30 de junio sólo 165 empresas habían aceptado el aumento salarial solicitado por el gobierno. Además, a lo largo de 1986 el sector empresarial se mostró especialmente intransigente frente a las demandas laborales en sus empresas, produciéndose numerosos despidos. En 1987 decreció la ola reivindicativa en su extensión, pero aumentó la fuerza de las protestas de los trabajadores de la administración pública y el movimiento de ocupaciones de tierras,¹¹ mientras descendía el movimiento reivindicativo en la empresa privada.

Por otro lado, la represión selectiva contra el movimiento popular no desapareció con la llegada del gobierno civil: el 15 de mayo fue asesinado el pastor Nicolás Chuy Cumes y el 2 de junio el GAM denunció la desaparición de 120 personas en los primeros seis meses del año. La situación no mejoró en

10 En febrero, la CUSG, UNSITRAGUA, FESEBS y el STINDE firmaron un pacto de Unidad de Acción; en marzo se constituyó la CGTG; en abril surgió la Federación Nacional Sindical de Trabajadores del Estado; en mayo, la Coordinadora de Sindicatos de Trabajadores del Estado. También resurgió el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y se formó la Asociación Nacional de Educadores de Enseñanza Media. CUSG afirmaba agrupar a 216,000 afiliados. Pero al mismo tiempo, seis sindicatos tradicionalmente fuertes de la empresa privada desaparecieron.

11 En los primeros meses del año se registraron ocupaciones de fincas en Alta Verapaz, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla. Las demandas se extendieron, durante las siguientes semanas, a San Marcos, Santa Rosa, El Quiché, Quetzaltenango y Chiquimula.

1987: los asesinatos y desapariciones de sindicalistas, profesionales y estudiantes continuaron; para el caso, sólo en abril fueron asesinados cuatro médicos en la capital.

En la mayoría de casos la represión pareció obedecer a intereses contrainsurgentes, aunque el presidente Cerezo los justificó el 20 de marzo de 1987, atribuyéndolos a la delincuencia común y afirmando que *hasta ahora no se ha atacado a ningún dirigente sindical o político*. Sin embargo cabe destacar la violencia inmediata que se usó contra el movimiento pro-tierras. En marzo la Policía Nacional desalojó con violencia a invasores de fincas y detuvo e interrogó a sus dirigentes. Rafael Flores, dirigente campesino en San Marcos, denunció que el Ejército y patrulleros amenazaban a los campesinos que participaban en el movimiento pro-tierras. También en marzo fueron desalojados violentamente por la policía 300 campesinos que invadieron tierras en Chicacao, Suchitepéquez.

Efectivamente fue en el campo, en aquellas zonas donde la URNG aumentó su presión militar, donde la represión estuvo más acentuada, especialmente en zonas de Suchitepéquez, San Marcos y Quetzaltenango. Como respuesta a los movimientos reivindicativos por tierras y a la permanente presencia de la ORPA, se produjo una cadena de asesinatos. También en Izabal, donde se habían registrado luchas sindicales, y en oriente y en la costa sur, donde estaba extendiéndose la presencia guerrillera, se dejó notar la represión, en especial en Chiquimula.

En el área Ixil el Ejército también concentró sus esfuerzos contrainsurgentes en 1986, de manera que entre abril y mayo se entregaron a los militares dos grupos de campesinos, uno de 22 personas procedente de las aldeas Sumal y Vicalamá, y otro de 86 procedente de Batzumal. Otros grupos de campesinos se entregaron a las autoridades militares en Nebaj, Chajul y municipios vecinos en los meses siguientes. Y el mismo patrón se mantuvo a lo largo de la mayor parte de 1987.

Fue en septiembre cuando el Ejército lanzó su ofensiva *Fin de Año* para capturar a la población que sobrevivía en las zonas de presencia guerrillera. El 17 de septiembre patrulleros de la finca La Perla y los destacamentos de Chel, Juil y Chajul, apoyados por tropas de Barillas, lanzaron una ofensiva contra la zona de Amajchel, y el día 22 las tropas de Nebaj se dirigieron hacia Batzumal y Xecampanavitz. El 24 de septiembre el Ejército bombardeó desde sus cuarteles áreas de Sumal y Salquil, y el día 26 desde Chajul, Cotzal y Uspantán inició la campaña contra el área de refugio de Putul. El 29 de septiembre el Ejército de Nebaj llegó a Xeucalvitz; el 15 de octubre la tropa de Santa Clara se replegó a Amajchel y desde allí rastreó durante los meses de octubre y noviembre, bombardeando y capturando a mucha gente, y creando las bases de patrullas de Amajchel y Cabá.

Después de esta campaña militar, el 14 de noviembre, el general Gramajo declaró que 90 familias pedían semanalmente la protección del Ejército en el área Ixil, y se inició la construcción acelerada de las aldeas modelo en Xebitz, Janlay, Parramos Grande y Chiquito, Palob, Vicalamá, Xepium, Vijolón, Cotzol, Sumal Chiquito e Ixtupil. En total, durante 1987, el Ejército afirmó haber recuperado a 2,000 desplazados, de un total estimado de 7,000.

En julio de 1986 el Ejército realizó algunas incursiones buscando Comunidades de Población en Resistencia (Falla, 1994). Pero fue en septiembre de

1987 cuando se inició la ofensiva del Ejército que duró hasta marzo de 1988. Según la URNG en esta ofensiva el Ejército tuvo 500 bajas y la guerrilla 30, en tanto que dos personas de la población civil murieron y dos fueron heridas en bombardeos. Los bombardeos formaron parte importante de la ofensiva y, pasada ésta, el Ejército se concentró en los seis destacamentos que rodeaban las CPR en el Ixcán y se limitó a patrullajes defensivos alrededor de sus puestos.

Igualmente en Alta Verapaz se produjo un retorno de desplazados que buscaron la protección de la Iglesia, motivo por el cual el Ejército, en connivencia con alguno de los grandes finqueros de la zona, mató a varios de aquéllos. El 26 de abril, después de que alrededor de 80 personas se reubicaran en la aldea Sepur-Zarco, fue secuestrado el encargado de la finca El Petexte de El Estor, Waldemar Duarte; el 16 de junio, desapareció Francisco Coó, uno de los desplazados de Sepur-Zarco, y el 18 de junio el Ejército se llevó a siete de los desplazados como guías a la montaña y ya no aparecieron. De julio a octubre, tan sólo en las zonas de Chisec y San Cristóbal, unos 281 desplazados que bajaron de las montañas pidieron protección a la Iglesia.

A partir de la llegada del general Gramajo al Ministerio de la Defensa, comenzó a perfilarse una nueva estrategia en el Ejército, que sufriría un desplazamiento después del intento de golpe de Estado de mayo 1989 y se debilitaría al dejar el cargo en mayo de 1990, hasta ser reemplazada con la llegada del nuevo gobierno en 1991. No obstante, la línea definida por Gramajo incorporó a elementos y cuadros militares que resurgieron en mayo de 1993, y finalmente fueron los que encararon los procesos de negociación sobre el futuro del Ejército desde 1994 hasta su culminación en septiembre de 1996.

Si en 1986 lo más destacado fue el proceso mediante el cual el gobierno civil se adaptó a las condiciones de los militares, durante 1987 el elemento dominante fue el nuevo equipo militar y su discurso, hasta que en mayo de 1988 sufrió la primera confrontación con un intento de golpe de Estado. En esta etapa los dos factores determinantes fueron la conformación de un nuevo grupo en la cúpula militar y su relación con el otro factor de poder, los empresarios.

Durante esta etapa el gobierno civil aún disfrutó de un considerable margen de confianza, dentro de lo que se llegó a llamar *la democracia vigilada*. Las actuaciones represivas se subordinaron fundamentalmente a los objetivos militares, aunque ya aparecieron los primeros síntomas de líneas de actuación represiva autónomas.

7. El poder de El Sindicato

El término de *el Sindicato* –usado por el mismo Gramajo para referirse a los oficiales que entendieron y apoyaron su doctrina de Estabilidad Nacional– fue creado por los miembros de la Cofradía, para designar al grupo de militares comprometidos con las actividades de inteligencia en la época de Lucas García (ver Capítulo tercero) dirigido especialmente a los miembros de la promoción 73 y 74, entre la cuales tuvo bastante apoyo la corriente reformista militar que apoyó el golpe de Estado de 1982.

Claro que en *el Sindicato* también se agruparon muchos otros altos oficiales especialmente distinguidos por sus conceptos de desarrollismo y por defender la

necesidad de *derrotar políticamente* a la guerrilla. Ambos movimientos, *la Cofradía* y *el Sindicato*, que catalizaron en ese momento las diferencias fundamentales dentro del Ejército, reflejan un fenómeno difícil de entender como agrupaciones estables, menos aún en términos de esquemas ideológicos. Se trata de grupos unidos por fidelidades variables, surgidas a lo largo de una carrera en la que la competencia y la lealtad entre compañeros de promoción se entremezclaban y cambiaban según las oportunidades que les ofrecía la coyuntura.

Si por un lado el espíritu corporativo y los privilegios de grupo unían a todo el Ejército frente a las presiones o desafíos externos, también la propia dinámica excluyente y competitiva de la carrera militar favorecía el surgimiento de estos grupos internos de lealtad. El fuerte crecimiento de las estructuras de mando del Ejército, ocurrido a comienzos de la década de 1980, al calor de la etapa más dura de la guerra contrainsurgente, presionó aún más en este sentido. De hecho, con la nueva Ley Constitutiva del Ejército, un alto número de coroneles tendría que pasar a retiro apenas cumplidos los 50 años y sin haber tenido oportunidad de llegar al Alto Mando.

También los distintos tipos de formación que recibían los militares parecen haber influido en el surgimiento de los dos grupos. Según un reportaje de la revista *Crónica*, que reflejaba el punto de vista de los militares más próximos a Gramajo, los oficiales de *el Sindicato* estaban especialmente influenciados por las teorías de la Guerra de Baja Intensidad y el desarrollismo, elaboradas por el Ejército de los Estados Unidos y puestas nuevamente en boga durante el conflicto con los sandinistas; mientras que los oficiales de la *Cofradía* eran de la *escuela de Taiwan*, más preocupados por aplicar mecanismos de control social e inteligencia de seguridad. Pero por encima de ideologías, la complicidad generada por el trabajo de inteligencia del Estado, pareció ser el principal elemento que cohesionó a los miembros de *la Cofradía*, en tanto que los miembros de *el Sindicato* se definirían más por su *no pertenencia* a aquélla.

Adicionalmente, desde el momento en que el general Gramajo comenzó a promover a un grupo de altos oficiales fieles a su programa, aquellos que se sentían desplazados comenzaron a agitar el *derecho histórico* del grupo de 28 coroneles que conformaron el Consejo de Comandantes que apoyó el golpe de Estado de agosto de 1983. En cualquier caso, al llegar al Ministerio de la Defensa, Gramajo promovió el rápido ascenso de un grupo de altos oficiales,¹² la mayoría de ellos partícipes de la ideología *desarrollista* de la época de Ríos Montt, que el mismo Gramajo había contribuido a perfilar desde su puesto como subdirector del CEM en 1982. Incluso algunos como el coronel Mario Enríquez o el capitán

12 Entre ellos el general Arturo de la Cruz (viceministro de la Defensa), el general Roberto Mata Gálvez (jefe del EMP), el general Juan Bolaños Chávez (comandante de la Guardia de Honor y subjefe del Estado Mayor de la Defensa), el general Otto Erick Ponce (comandante del Cuartel General e Inspector General del Ejército), el general Luis Enrique Mendoza (comandante de Mariscal Zavala), el general Juan José Marroquín (comandante de la brigada de paracaidistas), el coronel Jaime Rabanales Reyes (comandante de la Zona Militar de El Quiché, comandante de la fuerza de tarea Kaibil y director del Centro de Estudios Militares, en 1987), el general Raúl Molina Bedoya (comandante de la Zona Militar de Huehuetenango, en 1987), el general Eduardo Wholers (comandante de la Fuerza Aérea) y el general Mario Enríquez (director del D-5).

Mauricio López Bonilla, habían estado abiertamente comprometidos con la junta que gobernó con Ríos Montt. De entre ellos, el coronel Juan José Marroquín, luego ascendido a general, fue quien rápidamente se perfiló como sucesor de Gramajo.

Ahora bien, en su política de ascensos al generalato, Gramajo tuvo que respetar el poder del Consejo de Comandantes que había derrocado a Ríos Montt y elegir de entre éstos a quienes parecían identificarse con la doctrina de la Estabilidad Nacional, como Otto Erick Ponce o Leonel Bolaños, colocando a otros como Pablo Nuila Hub a puestos de prestigio como el CEM, pero sin influencia en el Estado Mayor de la Defensa.

Gramajo quiso dar a *el Sindicato* un carácter personalista, haciéndolo girar alrededor de su liderazgo. Los esfuerzos por desarrollar una Tesis de la Estabilidad Nacional¹³ que renovara la doctrina militar caminaron en este sentido. Todo parece indicar que un factor que ayudó a Gramajo a consolidar su influencia fue el desconcierto que creaba en la alta oficialidad la convivencia con un gobierno civil, aunque también encontró desde los primeros meses de su mandato liderazgos rivales y corrientes de opinión que se aferraban a los viejos esquemas. Por ello tuvo que proceder cautelosamente, midiendo la correlación de fuerzas y colocando a su gente sin desestabilizar la unidad del Ejército, ni amenazar las expectativas de promoción de otros oficiales.

Su primera maniobra fue lograr que llegara a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa el general Manuel Antonio Callejas, el oficial con mayor liderazgo en *la Cofradía*.¹⁴ Pero también tuvo que promocionar a otros militares abiertamente hostiles a su línea de dirección, como los generales Pablo Nuila (nombrado director del CEM), José Luis Díaz Muñoz (en Mariscal Zavala), Julio César Ruano (director de la PMA), o el coronel Byron Disrael Lima, jefe de Inteligencia en 1985 (nombrado comandante de la zona militar de Poptún, en Petén), quienes a lo largo de este período fueron ascendidos y degradados en el Ejército.¹⁵

13 La tesis de la Estabilidad de Gramajo proponía una organización de la sociedad por factores de poder (político, económico, social, militar y geográfico) que se articulaban en torno al liderazgo del factor militar para proponer un proyecto de nación basado en pactos de las elites que debían ser legitimados mediante el libre juego político. La tesis entonces se basaba en el control de la violencia política y tenía como premisa la desactivación del conflicto armado interno. El centro ESTNA, formado en 1989, sería el laboratorio en el que esta articulación ideológica empezaría.

14 La presencia de Callejas, que no correspondía a la línea de Gramajo, era una garantía para controlar los levantamientos e intentos de golpes de Estado, como se vio en 1988 y 1989, pues este oficial realmente controlaba la inteligencia y contrainteligencia militar. Pero Callejas no tenía el consenso inicial del Consejo de Comandantes para ser promovido a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa. Desde las estructuras de la DC, el coronel Castellanos Góngora, suegro del secretario de organización de ese partido, Demetrio Moliviatis, maniobró para que en el alto cargo fuera nombrado el coronel Edilberto Letona. Pero Letona fue objeto de una especie de chantaje preparado por *la Cofradía*, quienes presentaron pruebas contra su honor personal al Consejo de Comandantes, provocando su inmediata renuncia y autoexilio en Houston. A los pocos meses, Callejas fue finalmente promovido.

15 Nuila fue nombrado agregado militar en Ecuador en noviembre de 1987 y dado de baja en 1988; Díaz Muñoz fue destinado a la embajada de Colombia en la misma fecha y se suicidó días antes del intento de golpe de Estado de mayo de 1988; Ruano pasó a retiro en noviembre de 1987, y Lima también fue dado de baja en 1988.

Aparte de los altos oficiales que promocionó con su ascenso –la mayoría de los cuales había formado parte del Consejo de Comandantes bajo Mejía Vítores y pasado por las zonas militares contrainsurgentes– y con los cuales más que una afinidad de pensamiento le unía el interés de grupo, el general Gramajo creó su propio equipo de trabajo en el Ministerio de la Defensa y colocó otros oficiales afines en otras dependencias del Estado.

Fue este grupo (compuesto por oficiales de distinta jerarquía) el que diseñó la nueva estrategia militar en las áreas de seguridad interna, relaciones internacionales y política institucional dentro del Ejército.¹⁶ El mismo Gramajo insinúa que el poder de este grupo fue bastante fuerte en campos como las conversaciones con la URNG, las negociaciones internacionales en materia de derechos humanos, o los límites de la *doctrina centralizada* de seguridad interna, que se referían directamente a la política del ministerio. Incluso Gramajo señala que las apreciaciones de coyuntura que le facilitaba la Dirección de Información de la Defensa (el coronel Letona Hora) eran definitivas en su gestión, y que esta Dirección jugó un papel determinante en convencer a los comandantes de no apoyar el golpe de 1988. También pudo haber jugado un papel importante la contrainteligencia militar, centralizada en el Estado Mayor del ministro de la Defensa (el general Callejas).

A pesar de todo lo anterior, sería superficial pensar que este balance favorable al ministro de la Defensa representaba el poder absoluto del grupo de el *Sindicato*. Aparte de que tuvo que establecer una alianza en el Alto Mando con el general Callejas, el mismo Gramajo relata cómo desde el comienzo sufrió la hostilidad y las intrigas no solamente de los altos oficiales desplazados, sino especialmente de los aparatos de inteligencia del mismo Ejército. La D-2 del EMDN estuvo en este período en manos de los coroneles Edgar Godoy Gaitán y Francisco Ortega Menaldo, dos altos oficiales de *la Cofradía*. Además es muy probable que otros de sus colaboradores –Hugo Morán Carranza, Julio Caballeros– formaran parte o estuvieran comprometidos con *la Cofradía*, como era efectivamente el caso de Mario Mérida.

En cualquier caso, es indudable que Gramajo logró en 17 meses conformar un cuerpo de mando que iba más allá de su período como ministro, lo cual le permitía también trazar una estrategia y crear unos intereses a mediano plazo.

8. La Doctrina de la Estabilidad Nacional

La nueva política de seguridad nacional que había anunciado el presidente Vinicio Cerezo en junio de 1986, la fue perfilando el general Gramajo a lo largo de 1987 y 1988. Su primera intervención pública fue en abril de 1987, en la lección inaugural ante la X promoción del curso de Comando y Estado Mayor en el Centro de Estudios Militares (Gramajo, 1987). En síntesis, Gramajo vino a recordar el papel del Ejército en la sociedad como defensor y garante de *unos objetivos nacionales*, que únicamente definió alrededor de la democracia (*la*

16 En este grupo estaban el coronel Roberto Letona Hora, el teniente coronel Mario Mérida, el mayor Luis Fernández Ligorria, el capitán López Bonilla, el coronel Hugo Morán y el coronel Julio Caballeros.

forma de vida que han elegido nuestros ciudadanos) y la civilización occidental (cuyos fundamentos residen en la política arquitectónica griega, el derecho romano y el cristianismo). Esta defensa global de los valores democráticos quedó matizada cuando advirtió que *el pluralismo algunas veces ha entorpecido el desarrollo normal de la sociedad, y también se refirió al subdesarrollo político de Guatemala, en el cual el modelo político adoptado no es el ideal.*

Mucho más definido quedó el papel de las fuerzas armadas como garantía de la supervivencia del Estado. Debemos ser la reserva moral de la nación, advirtió Gramajo. Sin embargo, el ministro de la Defensa matizó la función desarrollista del Ejército al afirmar: *En algún momento histórico para Guatemala, la institución armada ha tenido que apartarse de su función natural... de esta manera ha jugado un papel decisivo en el desarrollo político y económico del país.*

Dentro del plan Fortaleza 87, la renovación de la formación académica era uno de los objetivos prioritarios. El mismo Gramajo definió el dilema central de este esfuerzo como el intento por responder una pregunta: *¿Es el Ejército anticomunista, o pro democrático?* (Gramajo, 1995). Con el propósito de definir un fundamento institucional que sustituyera al *anticomunismo*, Gramajo relata cómo organizó el seminario para mandos y altos oficiales denominado *Proyecto Libertario*, en el que se volvía a insistir en las razones que justificaron el golpe de Estado de 1982.¹⁷

El seminario mostraba que el Ejército entendía al gobierno civil como un instrumento para la continuidad de su política contrainsurgente global, aconsejaba *mantener la seguridad como fundamento de la estabilidad nacional, y advertía que la situación interna del país permite establecer que la estrategia militar está siendo ejecutada, pero podría verse afectada si los grupos de presión logran subvertir el frente interno.*¹⁸ Finalmente el seminario recalca que el Ejército, *además de ser el creador del proceso de democratización, es el que con su posición y actividad impulsa que ésta se siga afianzando* e insistía en que lo que se buscaba no era un cambio de objetivos y principios básicos, sino un cambio de actitud (Gramajo, 1995).

Simultáneamente Gramajo hizo un esfuerzo para hacer llegar su nuevo pensamiento militar a otros sectores de la sociedad. En mayo de 1987, en una intervención ante la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, hizo pública su tesis -a la que Cerezo se había referido- de que el Ejército de Guatemala iba a revertir a Clausewitz convirtiendo la política en la continuación

17 Las conclusiones de dicho seminario volvían a subrayar en el alto grado de subdesarrollo político, por consiguiente *se confronta una crisis de identidad ideológica nacional, del cual se deriva el peligro de que grupos de presión o al margen de la ley pudieran promover un cambio violento que ponga en peligro el cumplimiento de nuestra misión básica, como lo es el garantizar el objetivo general permanente de la supervivencia del Estado.*

18 Uno de los grupos de trabajo del seminario precisó más *la debilidad de la sociedad democrática al afirmar que por falta de conciencia cívica, el sector social aún no puede participar de la responsabilidad compartida* (de defender la democracia). En cuando al sector económico, *existe motivación, pero sus grupos más conservadores priorizan sus intereses financieros.* Por sector social se entendían los sindicatos y otro tipo de organizaciones populares.

de la guerra. Señaló también que las funciones del Ejército en desarrollo correspondían al gobierno civil. Pero fue la ya citada actividad llamada *Foro empresarial 27 años de lucha por la libertad* la de mayor relevancia, aunque estuviera organizada en agosto de 1987 por una entidad *modernizante* de escasa audiencia en medios económicos: el Consejo Empresarial.¹⁹

Finalmente, en 1988, el Estado Mayor de la Defensa Nacional publicó un documento titulado *La Tesis de la Estabilidad Nacional*, en el que este objetivo nacional aparecía definido así:

Son todas las medidas en los campos social, económico, militar y político, que el gobierno ejecuta para generar en los habitantes un estado psicológico propicio para buscar su bienestar, que disponga a Guatemala para un grado superior de desarrollo, que con el tiempo traerá la completa seguridad, a pesar de las acciones contrarias de los oponentes del Estado.

Asimismo, el concepto de seguridad interna quedaba descrito como

El complejo de acciones realizadas por el Estado, en el marco de la seguridad nacional y en el ámbito del país, con el objetivo de destruir o neutralizar los antagonismos o presiones, de cualquier origen, forma o naturaleza, que se oponen o pueden oponerse a la conquista y mantenimiento de los objetivos nacionales.

El nuevo concepto de Estabilidad Nacional y la forma en que fue presentado, tanto dentro del Ejército como fuera de la institución, pronto generó una corriente de oposición dentro de la fuerza armada que terminaría en el intento de golpe de Estado de 1988.

9. La Ofensiva de Fin de Año

El plan de campaña *Fortaleza 87* tenía previsto un componente *hacia afuera* que se concretó a partir de septiembre, cuando el Ejército concentró unidades

19 En ese foro el Ejército centró sus intervenciones en justificar ante los empresarios y la opinión pública su política desarrollista y explicar sus campañas contrainsurgentes, invitando a otros sectores sociales a compartir sus responsabilidades dentro de la concepción de un conflicto integral. El coronel Juan Leonel Bolaños, jefe del EMDN, explicó las características de esta estrategia integral y cómo la articulación de los factores de poder de naturaleza política, económica y psicosocial, permitían el uso limitado del poder militar para mantener la estabilidad nacional, vinculando ésta expresamente con el Programa de Reordenamiento Nacional definido por el gobierno demócrata cristiano. El jefe del D-5, Mario Enríquez, justificó todo el programa desarrollista, poniéndolo como un ejemplo de integración de todos los sectores sociales en la lucha contrainsurgente, e hizo énfasis en defender las PAC. Gramajo insistió en agradecer a todos los civiles que colaboraron con el Ejército en las épocas más difíciles, funcionarios y empresarios, y habló de la deuda social, una bandera de la DC que resultaba especialmente ofensiva para el sector empresarial.

especiales y tropas de varias zonas militares en la llamada *Ofensiva Fin de Año* contra los frentes guerrilleros del EGP y la ORPA.²⁰

El Ejército había venido realizando los preparativos necesarios. Ya durante 1986, al llegar Gramajo a la jefatura del EMDN, introdujo la táctica de *Reconocimiento en fuerza* (Gramajo, 1995), que permitió al Estado Mayor acumular información sobre las estructuras guerrilleras. Asimismo introdujo, en 1988, ciertas reformas institucionales que le permitieran un mejor manejo de sus fuerzas: trasladó la zona militar de Poptún a Flores para poder contener la expansión de las FAR, creó la zona militar en Escuintla, y agrupó las de Suchitepéquez, Sololá, Sacatepéquez y Chimaltenango para contener a la ORPA.

Además en 1988 reforzó el sistema de las PAC, incorporándolas a los beneficios del Instituto de Previsión Militar, y en marzo organizó una masiva campaña de reclutamiento entre desempleados de la costa sur llamada *Amistad 87*. También los bombardeos que la Iglesia Guatemalteca en el Exilio denunció durante el mes de febrero en el norte de El Quiché, Huehuetenango, Sololá, Suchitepéquez, Petén y San Marcos, podrían haber estado relacionados con el entrenamiento de estas fuerzas que después se usarían intensivamente durante la *Ofensiva*.

En abril resultó llamativo el uso que el Ejército hizo de varios helicópteros Chinook, cedidos por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, para trasladar tropa que reforzó la zona militar de Playa Grande. Un mes más tarde el Ejército lanzó incursiones contra los frentes guerrilleros en el área Ixil, que se acompañaron con un masivo reclutamiento de patrulleros.

La *Ofensiva de Fin de Año* en el norte del país movilizó a unos 3,500 soldados, en una combinación de los batallones de cada zona militar involucrada, más el empleo de tropas especiales. El mando centralizado en la jefatura de la Fuerza de Tarea Kaibil Balam, que recaía en el coronel Jaime Rabanales, permitió unificar el esfuerzo militar en objetivos precisos, que permitieron al Ejército instalar puestos de patrulla avanzados en áreas que anteriormente controlaban los frentes guerrilleros.²¹

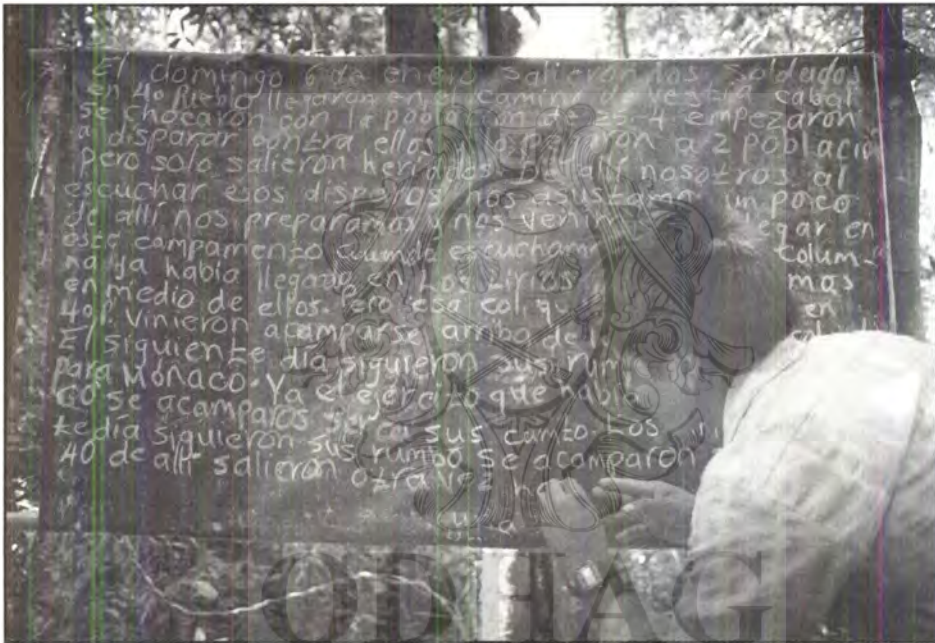
Sin embargo los efectos de la *Ofensiva de Fin de Año* se sintieron más sobre la población desplazada que sobre las unidades militares guerrilleras, que apenas experimentaron bajas. Tampoco el Ejército logró dismantelar infraestructura propia de las agrupaciones militares guerrilleras, aunque sí desorganizó la producción campesina en la que se apoyaban.²² Inicialmente, tanto la *Ofensiva*

20 La guerrilla vino describiendo desde 1983 las campañas del Ejército contra sus frentes como ofensivas, aunque se tratara de operaciones militares de corta duración, que involucraban únicamente a compañías de las zonas militares. Sin embargo, es probable que hasta septiembre de 1987 el Ejército lanzara propiamente una ofensiva, creando una fuerza de tarea que unificó batallones de tropas regulares y especiales, e involucró fuerte apoyo artillero y aéreo. A diferencia de la guerra en El Salvador, donde el FMLN y la Fuerza Armada buscaban el desgaste rápido del contrario mediante arriesgadas y audaces ofensivas, en Guatemala después de las ofensivas de 1981, 1982 y 1983, el conflicto entró en un ritmo lento que buscaba evitar el máximo desgaste de las propias fuerzas.

21 Principalmente los puestos de avanzada de Vicalamá, Amajchel y Cabá en el área Ixil, y los de Mayalán y Tercer Pueblo en Ixcán, todos los cuales se asentaron en lugares que estaban habitados hasta entonces por población desplazada.

22 El mayor Ríos, jefe del destacamento de Mayalán en marzo de 1988, declaró que la finalidad de la ofensiva no era el choque directo con las unidades guerrilleras (aunque no lo descartaba), sino impedir que la población que trabajaba para la guerrilla pudiera sembrar.

como los preparativos que acarreó, preveían golpes efectivos contra las estructuras militares guerrilleras, y un esfuerzo de aquel tipo también obligaba a presentar resultados militares que no se lograron. Las unidades guerrillas maniobraron en un terreno que dominaban, rehuendo el combate en inferioridad de condiciones y buscando el desgaste de las columnas militares que penetraban en sus frentes, esperando a que se acabaran sus provisiones logísticas para atacar. El Ejército no pudo controlar los *santuarios* de la guerrilla, en el cerro Sumal del área Ixil o el cerro Cuache y la zona fronteriza en el área del Ixcán, y tuvo un aumento sensible de sus pérdidas humanas, como por ejemplo la que reportó el 8 de noviembre de 1987 al reconocer 26 bajas en una emboscada en el área Ixil.



Un miembro de las CPR-Ixcán describe las incursiones del Ejército en sus comunidades.

(Foto D. Bazy).

En lo que se refiere a la Ofensiva en el área de la ORPA en Chimaltenango-Sololá, que tuvo menor intensidad que la del norte de Quiché, el efecto fue que esta organización guerrillera aumentó en octubre su actividad más al occidente, en Retalhuleu, Suchitepéquez y Sololá, llegando, el 11 de noviembre, a ocupar Santiago Atitlán.

Las ofensivas militares se complicaron, además, cuando en noviembre el Congreso de los Estados Unidos no aprobó la ayuda solicitada de US\$10 millones, lo cual motivó viajes a Washington del presidente Cerezo y el canciller Alfonso Cabrera para lograr desbloquearla.

Sin embargo el esfuerzo militar logró algunos objetivos de mediano plazo. En enero de 1988 Gramajo anunció el Plan de Campaña *Unidad 88*, destinado a *convertir la ventaja militar en ventaja política e impedir que la guerrilla haga*

contacto con la población. Se disolvieron las Fuerzas de Tarea y el peso de la ofensiva recayó sobre las unidades especiales de Paracaidistas, Guardia de Honor y kaibiles, encargadas de mantener los puestos de avanzada que se habían logrado en 1987, mientras que las tropas de las zonas militares se encargaban del control de la población.

Además de impedir el contacto con la población y de capturar al mayor número posible de desplazados, el esfuerzo militar se dirigió a *quebrar la moral de combate de los guerrilleros*, en palabras del mismo Gramajo. En los primeros meses de 1988 la CEAR ya estaba plenamente activa reconstruyendo las cooperativas campesinas en el área del Ixcán, y atendiendo la masiva llegada de población desplazada en el área Ixil. En marzo se creó una Comisión Multisectorial (muy similar a las anteriores Coordinadoras Interinstitucionales) para atender la reconstrucción del área Ixil, dentro de un modelo de *replamamiento bajo control* que ya venía ensayando el Ejército desde 1984 en Playa Grande.

En febrero de 1988 la ORPA desató una ofensiva militar en el área de Patzún, donde hasta entonces no se había registrado actividad guerrillera especial, en tanto que las FAR aumentaron sus tomas de poblaciones y carreteras en Petén. El EGP centró sus esfuerzos en extender sus frentes guerrilleros más al sur de donde había llegado la Ofensiva de *Fin de Año*, y en reconstruir sus redes logísticas, haciéndolas autónomas de la población desplazada.

10. La neutralidad Activa

A comienzos de 1987 Cerezo explicó a sus correligionarios el sentido de la neutralidad activa: *nuestra amenaza no está en Nicaragua, sino en las montañas. Hay que manejar el conflicto regional de manera que nos favorezca en nuestra situación interna.* Hasta ese momento la política exterior del gobierno civil no era sino una continuación de la emprendida por los gobiernos militares. Sin embargo, unos meses después, al aprobar los presidentes centroamericanos el Plan de Paz del presidente Oscar Arias, el gobierno guatemalteco comenzó a perder el control de la situación.

En el Foro Empresarial, el general Gramajo afirmó: *Nosotros los militares no hacemos política exterior, o no la dirigimos. Nuestro objetivo es eliminar al oponente, o quebrar su moral de combate, y en este sentido todos los países salimos ganando con el Tratado de Esquipulas, así que aunque va a ser cuesta arriba, vale la pena seguir adelante.* El ministro de la Defensa se refería a una serie de mecanismos que el Plan de Paz establecía, entre otros el diálogo con las fuerzas insurgentes. Ya para entonces, el Ministerio de la Defensa había iniciado el trabajo en el frente exterior y un equipo de oficiales estaba delineando una estrategia para neutralizar la actividad propagandística de los grupos guerrilleros y hacer que los mecanismos previstos por Esquipulas se revirtieran en su contra, como preveía el Plan de Campaña *Fortaleza* 87.

Concretamente Gramajo había establecido relaciones en Washington con el despacho del abogado liberal Paul Ritchler, el mismo que asesoraba al gobierno sandinista. Por parte del gobierno la cancillería fue entregada al *hombre fuerte*

de la DC, Alfonso Cabrera, quien incorporó a personajes de la confianza del Ejército, como Ariel Rivera y Antonio Arenales Forno, enviando a otros como José Luis Chea y Francisco Villagrán hijo a Ginebra y Washington.

La insistencia en que en Guatemala no existía un conflicto interno de las dimensiones de los de El Salvador o Nicaragua, se convirtió en la postura defensiva del gobierno y el Ejército, y aunque se creó una Comisión de Verificación del cumplimiento de los compromisos de paz, Cerezo confiaba en que su mediación acerca de los sandinistas neutralizaría cualquier presión de los grupos guerrilleros. Efectivamente en la cumbre de presidentes celebrada en Costa Rica en enero de 1988 se presionó definitivamente la Comisión de Verificación Internacional. Por lo demás el gobierno se limitó a cumplir formalmente los compromisos, promulgando en noviembre un nuevo decreto de amnistía (que se usó como elemento propagandístico en la Ofensiva de *Fin de Año*), instalando la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y llevando a cabo una reunión con la URNG en octubre en Madrid, España.

Por su parte la URNG aumentó considerablemente su actividad político diplomática. El 7 de febrero de 1987 reiteró su ofrecimiento de diálogo con propuestas para humanizar el conflicto. Igualmente en las conversaciones de octubre sugirió un alto al fuego y el establecimiento de zonas desmilitarizadas, como un paso previo a iniciar conversaciones de paz. La Comandancia guerrillera, además, envió una carta a los presidentes centroamericanos en julio de 1987, apoyando sus gestiones por la paz y publicó en octubre una *Carta por la Salvación Nacional*, dirigida a crear un gran frente de fuerzas populares y políticas democráticas, en el que la URNG se incorporaría como una fuerza más. Esta propuesta tuvo una cierta acogida en algunos medios de comunicación.

Durante 1988 la URNG siguió insistiendo en sus propuestas de cese al fuego, creación de zonas desmilitarizadas e inicio de un diálogo político con el gobierno. Por otro lado, sus iniciativas políticas se centraron en aquellas instituciones que como la Iglesia católica, la CNR o el presidente Oscar Arias de Costa Rica habían expresado su voluntad mediadora. Finalmente una delegación de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) visitó el país en abril de 1988 y la URNG propuso formalmente una tregua durante la Semana Santa de aquel año.

Frente a estas iniciativas el Ejército elaboró una estrategia defensiva, consistente en apearse a la legalidad de la Constitución de 1985 y defender la estrategia de *no reconocer a los subversivos bajo ningún concepto de beligerancia como parte involucrada en un conflicto interno*. Esta postura la expuso el Alto Mando del Ejército a la CNR en una reunión celebrada en febrero de 1988. En cualquier caso el Ejército logró que durante 1987 y 1988 que el conflicto interno en Guatemala no fuera considerado dentro de la agenda del proceso de paz centroamericano.

11. El mensaje y otras técnicas

La actividad represiva del Ejército tuvo en esta etapa dos manifestaciones. Una relacionada con el desarrollo de la guerra y otra destinada a amedrentar a

las organizaciones populares o a activistas de los grupos guerrilleros que regresaban al país, en lo que la investigadora Susane Jonas llamó la *técnica del mensaje* (Jonas, 1994).

Viendo en perspectiva la trayectoria de violaciones de los derechos humanos en el período de enero 1987 a mayo 1988, llama la atención en primer lugar la larga lista de secuestros y asesinatos con tortura contra campesinos de las zonas de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá y Chimaltenango, llevadas a cabo por grupos uniformados. Por tratarse de una zona de expansión de los frentes guerrilleros de la ORPA, es fácil suponer que se trató de crímenes contra supuestos colaboradores de la guerrilla. La ausencia total de capturas y entrega a los tribunales de justicia, hace pensar que la política seguida por las autoridades militares en las zonas de conflicto fue la de secuestrar y desaparecer a los sospechosos de colaborar con la guerrilla. Esta situación fue claramente percibida en comunidades como Santiago Atitlán.

Otra de las características de la política represiva controlada por el Estado fue seguir usando en la capital a las fuerzas de la Policía Nacional para llevar a cabo actos intimidatorios contra las organizaciones del movimiento popular, buscando la manera de que pudieran ser atribuidas a la delincuencia común u otros tipos de violencia, forma de represión que se centró en cuadros medios y activistas anónimos, que no alcanzaban resonancia internacional. Cuando el presidente fue cuestionado en marzo de 1987 sobre el aumento de las violaciones a los derechos humanos, lo atribuyó a la delincuencia común.

Mientras la Policía Nacional era equipada con ayudas de los gobiernos de Alemania, Venezuela, los Estados Unidos y España, sus elementos, controlados por oficiales de la D-2, eran usados para realizar el *trabajo sucio* de la contrainteligencia (WOLA, 1989).²³ Existen sin embargo suficientes indicios de que esta situación provocó contradicciones sobre la política de seguridad. El desarrollo y la modernización de los cuerpos policiales, publicitado por el ministro de Gobernación, Juan José Rodil Peralta, fue usado por los grupos desestabilizadores dentro del Ejército. En diciembre de 1987 el columnista Danilo Roca aseguraba que el gobierno estaba creando un super cuerpo de seguridad presidencial, dirigido por Rodil Peralta, que podía convertirse en un desafío al Ejército. Aunque esta denuncia podría no tener más fundamento que el propósito de inquietar a los militares, el incidente de la *Pánel Blanca* en marzo de 1987, reflejó una lucha interna por el control de los cuerpos de seguridad del Estado.

23 El caso más evidente del involucramiento de la Policía Nacional en actividades de represión política se conoció el 25 de enero de 1987 cuando fueron asesinadas por miembros del Quinto Cuerpo dos mujeres de la familia Raxjal Sisimit, desplazados internos de San José Poaquil que residían en Guatemala, y que el mismo Cerezo insinuó que podría tratarse de guerrilleros. Por otro lado, si bien el año anterior se había producido la desarticulación del DIT, muchos de sus oficiales y cuadros pasaron a trabajar en el nuevo cuerpo de elite policial, BIEN, como fue el caso de Noel de Jesús Beteta, que fue asignado a dirigir el grupo antisequestradores del BIEN en mayo de 1987. Posteriormente cuando el 23 de octubre aparecieron los cadáveres de dos estudiantes del CUNOC en Quetzaltenango y fueron detenidos dos jefes de la Policía Nacional en aquella ciudad, ambos con antecedentes delictivos contra los derechos humanos, ya quedó claro el uso de la PN en la política represiva.

De hecho tanto el presidente Vinicio Cerezo en sus declaraciones a los congresistas demócratas Christopher Dodd y John Kerry, como el ministro Alejandro Gramajo en su libro **De la guerra... a la guerra**, declararon que en aquellos momentos no habían logrado un control absoluto de los cuerpos de seguridad del Estado. Es más, las corrientes de opinión derechistas contrarias al gobierno contaron en todo momento con información sobre personas sospechosas de ser comunistas que sirvieron para producir un efecto de intimidación contra cualquier movimiento opositor, y especialmente contra activistas que pretendieran regresar al país.

El gobierno, sin embargo, logró presentarse como una *víctima* asediada por extremistas de ambos bandos que seguían recurriendo a la violencia, y así consiguió que en marzo de 1987 la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidiera retirar el observador para Guatemala y sustituirlo por un asesor. También el informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en Guatemala durante 1987 reconoció avances en el control de la violencia oficial. Para ello, además de cumplir formalmente los compromisos de Esquipulas II, el gobierno nombró al Procurador de Derechos Humanos e intentó neutralizar al GAM reconociendo a un grupo disidente y aprobando una Ley de Asistencia para Viudas y Huérfanos, con el propósito de restar audiencia al grupo. Sin embargo esta política entró en dificultades cuando el GAM inició en 1988 una campaña para descubrir cementerios clandestinos, lo cual provocó una reacción violenta de los patrulleros civiles presuntamente implicados en las matanzas, que se sintieron traicionados por el Ejército. Otro tanto sucedió con los patrulleros que habían repoblado áreas del Ixcán, a donde ahora regresaban los refugiados reclamando sus propiedades.

Precisamente fue en el tema de los refugiados donde con más claridad se percibió la actitud defensiva del gobierno. Aunque en enero de 1987 el presidente aceptó el retorno libre de los refugiados en una reunión con delegados de ACNUR, el comandante de Huehuetenango impuso arbitrariamente la firma de un acta de amnistía para los retornados, lo cual provocó que la Iglesia católica estimara que aún no habían condiciones para el retorno.

Esta posición dura del Ejército se reafirmó en un documento elaborado por el coronel Molina Bedoya, en el cual aconsejaba el no retorno o el internamiento de los retornados en campos especiales. El mismo Gramajo, en el foro 27 años de lucha por la libertad, reconoció que este tema fue analizado en el Estado Mayor y que éste aconsejó que no se autorizara el retorno en tanto no se lograra *cierto trabajo de acondicionamiento psicológico*. En cualquier caso, tanto en el tema de los refugiados como en el de la población desplazada, el punto de vista oficial fue que se trataba de bases de apoyo a la guerrilla que el Ejército estaba logrando conquistar. Simultáneamente la presidencia logró que comenzaran a fluir fondos asistenciales para esta población, creó la CEAR pero sin lograr que los mandos militares dejaran de tratar a los desplazados como prisioneros de guerra (Mack, 1990).

12. La deuda social

Uno de los elementos llamativos de la nueva política militar fue la relación que intentó establecer con el sector empresarial, el segundo factor de poder en el

país. Para entender cómo evolucionó esta situación es imprescindible recordar el precedente inmediato: la crisis de abril de 1985, cuando el sector empresarial derrotó el intento del gobierno militar de imponer una reforma tributaria. Si bien durante 1986 el gobierno civil logró llegar a unos acuerdos de concertación con el sector empresarial, éste se mantenía a la defensiva, como se demostró aquel año con la campaña que organizaron para que el gobierno no renovara el contrato con la compañía auditora SGS, que supervisaba el comercio exterior.

Pero en 1987 con la llegada a los puestos directivos del CACIF de un grupo de empresarios agresivos y totalmente compenetrados con las tesis neoliberales, el enfrentamiento empresarios- gobierno fue tomando cuerpo, hasta que en octubre de 1988, con motivo de la presentación en el Congreso de un proyecto de ley para reformar el Impuesto sobre la Renta, el CACIF convocó un paro empresarial (Aitkenhead, 1989). El Ejército había tomado partido en esta pelea, y el general Gramajo había identificado prácticamente la doctrina de Estabilidad Nacional con los objetivos del Plan de Reordenamiento Nacional del partido en el gobierno.

Hay que tener presente que dentro de los conceptos militares de lucha integral contrainsurgente y del desarrollismo del Estado, la colaboración del sector empresarial resultaba imprescindible. Esta colaboración la había solicitado Gramajo a través de sus discursos, pero también el nuevo gobierno había realizado advertencias a algunos empresarios, tanto a través del control de la compañía SGS como desde el Departamento de Control Administrativo, que dirigía el coronel Hugo Morán Carranza.

La respuesta del sector empresarial llegó en boca del diputado Juan Carlos Simons, quien empezó hablando de corrupción en el Ejército y denunció que a los oficiales les pagaban en dólares. El ministro de la Defensa replicó desde el puesto de mando de la Ofensiva de Fin de Año: *La derecha desestabilizadora quiere que el Ejército les haga el trabajo*. Esto motivó que Simons afirmara: *el Ejército está dividido*.

Cuando en febrero de 1988 la Conferencia Episcopal publicó su carta pastoral *El clamor por la tierra* y la Democracia Cristiana ganó abrumadoramente las elecciones municipales frente a una coalición de todos los grupos de extrema derecha, el descontento de una parte del sector empresarial se canalizó hacia el grupo de militares que ya estaban conspirando contra el gobierno.

El balance de este *traspiés* de Gramajo resultó absolutamente desfavorable para el ministro de la Defensa: por un lado el gobierno no pasó la prueba ante los militares desarrollistas, ya que demostró no ser capaz de manejar las relaciones con el sector empresarial; por otro lado los sectores más conservadores del Ejército sintieron que el ministro de la Defensa se había involucrado más de lo debido con el programa político de la DC. El hecho de que algunas reuniones de la Junta de Comandantes terminaran realizándose en la residencia presidencial de la Finca de Santo Tomás, y el permanente control que el jefe del EMP ejercía sobre la actividad gubernamental, terminaron revirtiéndose contra el ministro de la Defensa, que fue acusado de colocar la institución al servicio del partido en el gobierno.

13. El *coup de force*

Si el elemento anterior tuvo considerable importancia en las intrigas que desembocaron en el intento de golpe de Estado de mayo de 1988, no fue el único que influyó. La instalación de *el Sindicato* en la cúpula del poder militar generó desde el primer momento reacciones de aquellos militares que se sentían desplazados, como se vio ya en la misma designación del jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. La formulación de la tesis de la Estabilidad Nacional suponía un cambio de actitud y de discurso, y fue vista con desconfianza por aquellos oficiales que se sentían más seguros con un discurso anticomunista sin ambigüedades; la tesis de la Estabilidad Nacional dejaba muchos interrogantes sin respuesta.

Hay que tener presente que, por ejemplo, en aquella época circularon entre los oficiales videos sobre los juicios al alto mando del Ejército argentino. La *democracia vigilada* de Guatemala podía volverse impredecible en un contexto geoestratégico que se mostraba sumamente cambiante, como reflejaron los Acuerdos de Esquipulas. Así los *Oficiales de la Montaña*, en uno de sus primeros comunicados, se quejaban de que el gobierno había traicionado a aliados como Israel o Taiwan y atacaba a los Estados Unidos. Otro sector del Ejército, más preocupado por el futuro de la estrategia desarrollista, veía cómo el gobierno civil era incapaz de continuar proyectos como los Polos de Desarrollo o las Coordinadoras Interinstitucionales.

Finalmente Gramajo se rodeó en su Estado Mayor del Ministerio de un grupo de oficiales que, al igual que sucedió en tiempos de Rfos Montt, sustituían en la toma de decisiones a los comandantes de las unidades militares. El rápido ascenso de algunos coroneles desarrollistas al generalato fue fácilmente utilizado por los mandos desplazados para denunciar a la *camarilla* del nuevo ministro, que rompía la institucionalidad jerárquica.

Gramajo tenía que consolidar su liderazgo entre los jóvenes oficiales, y es posible que la Ofensiva de *Fin de Año* persiguiera este objetivo. Pero los errores de la misma y sus pobres resultados terminaron revirtiéndose contra él. En este sentido el logro de suficiente apoyo logístico era clave, después de más de cinco años en que el Ejército había visto limitada su capacidad ofensiva por falta de recursos. Pero también en este terreno fracasaron las previsiones del ministro de la Defensa, al no aprobar el gobierno de los Estados Unidos la ayuda prevista, lo cual creó, ya iniciada la ofensiva, serios problemas logísticos.

Precisamente los nuevos contratos de aprovisionamiento gestionados por el ministro Gramajo y el jefe del EMP, coronel Roberto Mata, fueron otro argumento manejado por los *Oficiales de la Montaña*.²⁴ Cuando en 1988 el ministro anunció la compra de 20,000 fusiles M-16 de fabricación estadounidense perjudicó, además, los intereses del grupo de empresarios y

24 La propaganda de los *Oficiales de la Montaña* apareció públicamente unos meses antes del intento de golpe de Estado. Según el mismo Gramajo, esta propaganda fue elaborada por los civiles Gustavo Anzueto, Danilo Roca, Mario David García, Mario Castejón y Hugo Arce, y los exmilitares Edgar D'jalma Domínguez, Luis Vielman García y dos tenientes (Gramajo, 1995).

militares que habían participado en los contratos de compra del fusil israelita Galil. También la compra de helicópteros Bell a una empresa poco confiable, en la que participaban mercenarios estadounidenses y oficiales del EMP, dio más argumentos a los oficiales descontentos. La llegada de Mata Gálvez al Cuartel General, zona militar responsable de la logística de todo el Ejército, terminó de abonar este descontento.

Gramajo consolidó su grupo de oficiales lanzando amenazas a los grupos rivales. Ya en su discurso de abril de 1987 en el CEM, advirtió que *nuestra institución armada no puede ser jamás democrática, y que la renovación militar exigirá revisar las estructuras disciplinarias y de ascensos y requerirá un liderazgo profesional*. Llegó incluso a amenazar a los miembros de la *Cofradía*, porque *cada día se alejan más las posibilidades de avance en el Ejército basado en el conocimiento de personalidades, tanto civiles como militares, mucho menos en la pertenencia a grupos o amistades personales*. Un año más tarde el documento que exponía la Tesis de la Estabilidad Nacional criticaba la Doctrina de la Seguridad Nacional, al recordar que en el pasado reciente *varios funcionarios y políticos de poca altura abusaron del término seguridad nacional y en su nombre se quiso justificar ineptitud, inmadurez política, egoísmo y abusos de toda clase, por lo cual por razones psicológicas, es necesario cambiar actitudes y conceptos relacionados con el término seguridad nacional*.

La primera manifestación de esta lucha interna fue la drástica expulsión, en junio de 1987, de dos oficiales que estaban cursando estudios en el CEM. Tanto el teniente coronel Nájera Avendaño como el mayor Adolfo Díaz pertenecían a la D-2 y habían influido en el cese del coronel Roberto Letona Hora en febrero, e intentaron conspirar contra el nombramiento de Callejas. Nuevamente, en octubre de ese año, volvió a percibirse descontento militar cuando apareció por primera vez un comunicado de los *Oficiales de la Montaña*, acusando al grupo de Gramajo de corrupto. Pero fue un mes más tarde, con motivo de nuevos ascensos y traslados, cuando Gramajo tuvo que enfrentar el primer conato de rebeldía militar, que se saldó con la caída de los generales Pablo Nuila Hub y José Luis Díaz, ambos de la misma promoción que Gramajo. Ya entonces, en algunos círculos militares se hablaba del *modelo panameño*, en el sentido de forzar la renuncia del presidente para colocar en su lugar al vicepresidente Roberto Carpio y a un militar como segundo al mando.

Estas corrientes de descontento se acrecentaron en 1988, especialmente en abril, cuando el ministro de la Defensa ya sabía que se estaba tramando una conspiración militar y advirtió a algunos militares, como el coronel Byron Israel o el general Nuila Hub (Gramajo, 1995). En ese mes el general Díaz Muñoz se suicidó en circunstancias nunca esclarecidas, precisamente unos días antes del intento de golpe de Estado. Un golpe que según la mayoría de los analistas no pretendía derrocar al gobierno civil sino que era un *coup de force* para imponer un *cambio de rumbo*. Aunque Gramajo pudo controlar fácilmente el levantamiento, apoyado por Callejas y el grupo de altos oficiales ascendidos, y salió de hecho consolidado, a partir de aquél momento la *democracia vigilada* pasaría a ser una *democracia bajo control*.



ODHAG

Segunda parte

La conspiración (1988-89)

El gobierno inició 1988 intentando recuperar nuevamente el tiempo perdido. El Presidente llamó a este año *el de las realizaciones* y retomó la agenda de reformas del Plan de Reordenamiento Nacional. Así, emprendió una actividad febril, con reuniones de gabinete cada diez días y en febrero se aprobó la Ley de Consejos de Desarrollo en vísperas de celebrarse las elecciones municipales.¹

Dentro de esta campaña populista, en febrero el gobierno firmó un pacto con la UASP y rompió las conversaciones con el CACIF. El pacto incluía un incremento de la tarifa de energía en un 40% para uso comercial e industrial, un aumento salarial de Q50 en el sector privado y la revisión de salarios mínimos. Por otro lado, confiado en su victoria del año anterior con el tema de la reforma tributaria, el gobierno se aproximó a sectores empresariales de la Cámara de la Libre Empresa, la Gremial de Exportadores no Tradicionales y otros aislados pero influyentes, apoyado indirectamente por el nuevo embajador de los Estados Unidos, James Michel, quien en un discurso en el Club de Rotarios se pronunció por la reforma fiscal y contra las injusticias sociales, con intención de dividir la resistencia del sector.

La Conferencia Episcopal apoyó este giro del gobierno y el 29 de febrero de 1988 publicó su carta pastoral *El clamor por la tierra*. También el Ejército definió su política de Estabilidad Nacional, según la cual entendía al gobierno civil como un instrumento para la continuidad de su política contrainsurgente global.

1. Los golpes

Esta secuencia de medidas fue crispando los ánimos de los sectores empresariales más radicales, y cuando la DC en las elecciones municipales ganó abrumadoramente frente a una coalición de todos los grupos de derecha, el descontento de una parte del sector empresarial se canalizó hacia el grupo de militares que ya estaban conspirando contra el gobierno. Así, el 11 de mayo se produjo un intento de golpe de Estado que inició el camino de la

1 La ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural fue concebida como sustituto de las Coordinadoras Interinstitucionales del gobierno de Mejía Víctores. Sin embargo, en el proceso de su elaboración durante 1986 y 1987, en el Ejército perdieron fuerza las tesis desarrollistas. Cuando finalmente fue aprobada la ley, resultó más un instrumento de regionalización y descentralización. En su elaboración tuvieron participación instituciones como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la cooperación gubernamental alemana. La ley fue objetada por grupos neoliberales que propugnaban por la reducción del Estado, y por partidos de oposición que la veían como un mecanismo de participación popular y de las ONG en los planes de inversión social que la DC tenía previsto implementar. En la medida en que después de 1989 el partido de gobierno dejó de lado sus propósitos desarrollistas y de inversión social, los Consejos de Desarrollo perdieron fuerza y fueron dejados de lado.

desestabilización del gobierno demócrata cristiano. En este intento golpista aparecieron vinculados los empresarios Edgar Heinemann (Cámara de Comercio), Edgar Alvarado Pinetta (UNAGRO), Gustavo Anzueto Vielman y Juan Luis Bosch; además, otros grupos de empresarios contrataron el transporte de golpistas desde Jutiapa y Retalhuleu. El ministro de la Defensa, general Gramajo, atacó a estos empresarios, pero sin nombrarlos: se refirió a una *fracción agraria feudal*, denunció que recaudaron Q3 millones para financiar el golpe y advirtió que ya era la tercera vez que los empresarios habían financiado con Q30,000 por empresa intentos desestabilizadores (*Crónica*, 19/5/88).

El intento de golpe de Estado de 1988 tuvo unos efectos inmediatos. El gobierno priorizó los gastos relacionados con la política contrainsurgente e intentó avanzar en realizaciones desarrollistas relacionadas con la guerra. Así, el Ministerio de Finanzas cortó los desembolsos de inversión cuando sólo se había ejecutado el 14% del presupuesto, y el Banco de Guatemala limitó el crédito al sector público a Q35 millones. El Presidente ordenó transferir al Ministerio de Defensa US\$30 millones de fondos confidenciales, para la compra apresurada de los helicópteros Bell y fusiles M-16, creando un problema de liquidez en el Banco de Guatemala. También el gobierno comenzó a priorizar mediante transferencias presupuestarias a favor del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, que era el ejecutor indirecto de los proyectos militares, especialmente en las áreas donde se había desarrollado la Ofensiva de Fin de Año. Como resultado, durante 1988, el Ejército absorbió Q22.3 millones de los fondos confidenciales de la presidencia, y trasferencias de otros ministerios hasta ampliar en Q31 millones sus gastos de funcionamiento y en Q11 millones los de inversión.

El gobierno de los Estados Unidos entregó un desembolso de urgencia de US\$75 millones para estabilizar la situación financiera, ya que trascendieron informaciones sobre una nueva fuga de capitales, aunque según medios empresariales esto se debía al alza del tipo de interés en los mercados internacionales. A pesar de todas estas medidas, el gobierno no logró definir y menos aplicar un plan de estabilización económica.²

En 1989 el partido en el gobierno inició la campaña para las elecciones presidenciales de 1990 y se convirtió en una maquinaria de aprovechamiento

2 En julio, las reservas de divisas presentaban un saldo negativo de US\$75 millones y los bonos emitidos en 1983, que vencían en esa fecha, no fueron renegociados por el sector privado, lo que obligó a la banca central a comprarlos por Q100 millones, y otros Q80 millones fueron canjeados por deudas fiscales. Ya el 22 de junio la Junta Monetaria había establecido el tipo de cambio único de Q2.70 : US\$1.0 y elevado en dos puntos las tasas de interés (16% para préstamos y 13% para depósitos). También el 15 de junio el gobierno había liberado el precio del azúcar y permitido el alza de productos como trigo, harina, pastas, grasas, margarina y carnes. Así, mientras los ministros de Economía y Finanzas preparaban planes de desarrollo llamados *Jaguar 2,000* y *Guatemala 2,002*, el gobierno paralizaba todo el programa de inversión. En agosto se celebró una reunión de la Junta de Comandantes con el equipo de gobierno para ejercer una presión institucional. Poco después el ministro de Economía, Lizardo Sosa, pasaba a la Secretaría de Planificación y luego al Banco de Guatemala, y se creaba un tercer viceministerio de Desarrollo, que ponía a un militar en el control de los Consejos de Desarrollo.

de los recursos gubernamentales. Se creó una *argolla* alrededor del candidato presidencial Alfonso Cabrera, formada por Demetrio Moliviatis, Gustavo Figueroa, Mario Valenzuela, Marciano Castillo, Francis Ramírez (director de GUATEL), Nery Samayoa (presidente del INTA), César Augusto Hidalgo (director de Caminos). También los gobernadores departamentales se colocaron en función de la campaña electoral. Lizardo Sosa pasó a la presidencia de la banca central y Oscar Pineda al Ministerio de Economía, desde donde continuó favoreciendo determinados intereses empresariales en el mercado interno, como los de los lecheros o los azucareros. Sin embargo, nuevamente el 9 de mayo se producía un intento de golpe de Estado en el cual los oficiales rebeldes ocuparon edificios como la Radio TGW, la Policía Nacional, el Hotel Cortijo Reforma (frente al domicilio del ministro de la Defensa) y el Canal 5 de televisión, y desde las instalaciones de la Fuerza Aérea intentaron ocupar el cuartel Mariscal Zavala y la Casa Crema. En su comunicado, los golpistas atacaban al gobierno corrupto de la DC que pretendía perpetuarse en el poder siendo insumiso con las autoridades judiciales, y pedían el cese del ministro de la Defensa y el de Gobernación.

Este nuevo golpe terminó por desmoronar la capacidad de control del gobierno, que quedó en manos de los militares. En agosto el EMP aumentó el control sobre el presidente, al denunciar un supuesto complot para acabar con su vida, el *Plan Manila*. Para entonces la ola de represión y criminalidad alcanzaba a toda la sociedad³ y el gobierno se veía sumido en una falta de credibilidad por las acusaciones de corrupción. El Procurador de los Derechos Humanos presentó su renuncia el 11 de octubre y ese mes el presidente Cerezo reconoció que habían grupos desestabilizadores responsables de la violencia política, que extraían información de la inteligencia del Estado. En octubre, en una reunión con el embajador James Michel, Gramajo acusó al MLN de organizar una campaña desestabilizadora terrorista, con el apoyo de la extrema derecha de El Salvador y de los contras nicaragüenses, y Cerezo afirmó que los finqueros estaban comprando armas a los antisandinistas para apoyar el terrorismo. Pero finalmente, ante la ola de violencia, Gramajo declaró que el Ejército estaba analizando hasta donde era capaz el gobierno civil de controlar la situación, pero que no intervendría. Puede decirse que ya para entonces el gobierno había perdido incluso sus mejores aliados dentro del Ejército.

Pero, además, había perdido el control de la situación económica. En marzo, el gobierno presentó en el Club de París un nuevo Plan de Estabilización que restringía más el crédito y sometió a consulta su Plan 500 días (*Multiplificando el Desarrollo, una estrategia guatemalteca*). Aunque en mayo el Congreso aprobó la Ley de Maquila cuando ya se habían instalado en el país 32 empresas coreanas, y el Diario Oficial publicó el Acuerdo Gubernativo para integrar y desarrollar el Fondo de Inversión Social, en junio cayeron los precios internacionales del café, lo que provocó pérdidas estimadas en Q110 millones. Poco después se firmaba

3 Sólo en junio fueron asesinados doce funcionarios que habían sido nombrados en Migración, el Registro de la Propiedad, GUATEL, Aduanas, o bien que eran agentes de la inteligencia militar, entre los oficiales estaba el piloto aviador personal del presidente Cerezo.

un convenio con el Banco Mundial por US\$120 millones con el propósito de invertirlos en un Fondo Social de Inversiones, pero éste quedaba paralizado meses después cuando el Banco Mundial congeló los desembolsos por resultar Guatemala insolvente con sus acreedores. Entonces el gobierno, ante la falta de liquidez, decidió el 20 de agosto una nueva devaluación y liberar las tasas de interés, y aunque la AID aportó una donación de Q75 millones, la administración congeló el pago del 8% constitucional a las municipalidades del occidente ya que Finanzas bloqueaba los desembolsos. El déficit fiscal era de Q945 millones y el gobierno intentaba controlar la adjudicación de divisas asignando US\$77 millones para importaciones y US\$30 millones para turismo. Salió del Ministerio de Finanzas Rodolfo Paiz y asumió el viceministro Francisco Pinto, en momentos en que este Ministerio ya no tenía recursos para pagar la planilla de empleados públicos. El gobierno pasó de la iliquidez financiera a la insolvencia, tanto por la caída de los precios del café como por una huelga tributaria de los empresarios. En 1989 la tributación generada por exportaciones había sido de US\$58.4 millones, frente a US\$102.8 millones en 1988.

Finalmente, en noviembre fue liberado el tipo de cambio. La crisis fiscal fue la que obligó al gobierno a tomar esta medida para ganarse apoyo de algunos empresarios y del FMI. También fueron liberadas las tasas de interés, aunque los 22 bancos llegaron a un acuerdo de caballeros para no moverlas (en el mercado negro de divisas se cobraban tasas de interés mensual del 50%, y en sólo una semana la banca privada trasladó al mercado negro US\$7 millones). Finalmente, el Banco de Guatemala con apoyo de la AID puso a disposición de los industriales US\$10 millones al cambio de referencia (promedio). De todas maneras, durante 1989 el PIB creció moderadamente (3.8%) gracias al consumo privado, ya que las inversiones pública y privada cayeron en un 4.6%, y salieron del país US\$41 millones; además, se produjo una inflación del 21%.

2. La guerra sucia

En el transcurso de dos años, de mayo de 1988 a mayo de 1990, el proyecto de Estabilidad Nacional promovido por el general Gramajo fue influido por presiones internas y externas hasta terminar convirtiéndose en una versión más sofisticada de la Doctrina de Seguridad Nacional. En tanto, con el pase a retiro de Gramajo, el Ejército entró en una etapa de desconcierto y falta de liderazgo, que lo colocó a la defensiva frente a las presiones externas a la institución. Esta actitud defensiva se transformó en mayor violencia institucional y control social.

Una de las frases preferidas de Gramajo en la época en que comenzó a publicitar su nueva tesis sobre la Estabilidad Nacional, era la de que para el Ejército *la política era la continuación de la guerra*. Detrás de esta afirmación estaba la apreciación, repetida varias veces por los jefes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, de que el Ejército había ganado la batalla puramente militar contra la guerrilla, en las ofensivas de 1981 a 1983, y que ahora la función del Ejército era simplemente mantener una *presión operacional* sobre

los grupos subversivos, de manera que, nuevamente en palabras de Gramajo, se lograra *quebrar su voluntad de luchar*.⁴

En 1986 la situación militar mostraba cómo la guerrilla había logrado entre 1983 y 1985 reconstruir unidades permanentes militares con un alto poder de fuego, capacidad logística y destreza para maniobrar en las zonas de sus frentes guerrilleros. Además, el análisis del desarrollo de la guerra en los años 1987-1990 ponía de manifiesto un repunte de la capacidad ofensiva de estas unidades guerrilleras y su extensión a nuevas zonas del país, llegando en el último año a aproximarse a la capital y a influir considerablemente en la producción agroexportadora.⁵

-
- 4 Sin embargo, estas afirmaciones se contradecían con las apreciaciones de los últimos planes de campaña del Ejército. En el Plan de Campaña Estabilidad 1985 se definía el objetivo de *reducir al mínimo, desarticular o eliminar las acciones subversivas... tratando de alcanzar de manera definitiva las metas de paz y estabilidad*. Pero en el Plan de Campaña Fortaleza 1987 se reconocía que *las acciones terroristas buscan distraer al Ejército sobre otros objetivos cuando éste presiona sobre áreas estratégicas sensibles, dando la impresión de que sus organizaciones están en capacidad de operar en cualquier lugar*. En el Plan de Campaña Unidad 1988 la evaluación era: *El accionar de los grupos terroristas a lo largo de 1987 pretendía crear la sensación de que habían llegado a la fase de equilibrio, lo cual se puso de manifiesto con los enfrentamientos a las unidades del Ejército... la ocupación de poblaciones... así como el relativo control de algunas porciones de terreno. Esto obliga a ejercer una acción global y simultánea a lo largo de 1988... lo cual será posible si se logra ejercer un control militar efectivo sobre la totalidad del territorio, con el apoyo de los Comités Voluntarios de Autodefensa Civil y la acción del gobierno encaminada a subsanar las necesidades más ingentes de la población*. Ya en el Plan de Campaña Fortalecimiento Institucional 1989, se afirma: *En el aspecto militar, la ausencia de líderes, las derrotas sufridas y la presión militar continuada ha llevado a los terroristas a un grado de desesperación tal que nuevamente... están recurriendo al terror como recurso para tener vigencia*. Y en el Plan de Campaña Avance 1990 se evalúa así la situación: *Los terroristas... han incrementado sus actos de repercusión política para... entorpecer el sistema democrático, pretendiendo restarle credibilidad, especialmente en el orden internacional... a fin de que sean reconocidos... y sea propicio favorecer un diálogo con el gobierno. Ante esta situación que se prevé para 1990... mantener la presión operacional integral... y contrarrestar la campaña de desinformación*.
- 5 En las zonas Ixil y del Ixcán, el Ejército tuvo que mantener sus puestos de avanzada con un alto costo de sus mejores tropas. Si bien la fuerza armada logró capturar o recoger a un alto número de campesinos desplazados que convivían con las unidades guerrilleras, otra parte importante de la población aumentó su organización, convirtiéndose en las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). En el caso de los frentes de ORPA en San Marcos y Suchitupéquez-Sololá, las ofensivas del Ejército no lograron asentar puestos estables de tropas en aquellas áreas. Ambos grupos ampliaron sus áreas de acción gracias al trabajo de las columnas de penetración desde 1984 en el sur de El Quiché, norte de Chimaltenango, norte de Alta Verapaz, parte montañosa de Escuintla y Santa Rosa, sur de Chimaltenango y Sacatepéquez, sur de Quetzaltenango, norte y sur de Huehuetenango. Esta estrategia guerrillera afectó el plan de dislocación del Ejército, que desde 1983 se había acostumbrado a concentrar el esfuerzo militar en pocas áreas delimitadas. En junio de 1987 el Ejército tuvo que lanzar fuertes campañas de reclutamiento militar y extender la organización de las PAC en Chimaltenango, Petén, Santa Rosa y Retalhuleu. En septiembre de 1988 la guerrilla inició atentados en la capital, pero no logró la apertura de un frente urbano, probablemente para no interferir con el desarrollo de las organizaciones populares que la URNG estaba impulsando, que permanecían bajo la mira de la inteligencia militar. Durante 1989, la guerrilla desarrolló su actividad militar en toda la carretera del Pacífico. Las emboscadas a tropas del Ejército cobraron la vida de algunos altos oficiales y pérdida de naves aéreas. En marzo de 1989 el Ejército solicitó ayuda de transporte a la fuerza armada estadounidense, y se vio obligado a retirarse a los puestos de avanzada

Frente a este desarrollo de las operaciones guerrilleras, la tesis de la *guerra política* pronto devino en una suerte de coartada para encubrir una política de abierta represión contra aquellos sectores de la población sospechosos de apoyar directa o indirectamente a las fuerzas guerrilleras.⁶ De hecho en esta etapa, ante el desarrollo político y militar de las fuerzas guerrilleras, el Ejército pareció poner más énfasis en las operaciones preventivas de inteligencia que en campañas ofensivas militares.⁷

Dentro del capítulo de la *guerra política* Gramajo puso especial énfasis en mostrar cómo a raíz de la Ofensiva de *Fin de Año*, habían logrado recuperar a miles de campesinos ixiles *colaboradores de la guerrilla*. El presidente Cerezo fue más lejos al afirmar que desde 1987 a 1988 *se habían acogido a la amnistía 4,500 guerrilleros* (Prensa Libre 4/8/88), haciendo alusión a la población desplazada del área Ixil. Desde 1988 el Ejército mantuvo una presión constante contra la población desplazada, usando tropas elites reforzadas con apoyo aéreo, pero especialmente empleando masivamente patrulleros civiles, según denunció la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE, 1990). Aunque la Comisión Multisectorial para el área Ixil fue el único caso de proyecto desarrollista contrainsurgente que el gobierno demócrata cristiano pudo realizar, hasta el punto de que en 1990 se habían restablecido la mayoría de las comunidades alrededor de las áreas de refugio de la población desplazada, el flujo de población entregada bajó drásticamente de 4,000 personas en 1988, a 683 en 1989 (Mack, 1989). En 1990 Gramajo reconocía públicamente que existían aldeas errantes de campesinos en el área Ixil, y representantes de las CPR viajaban a Europa para lograr su reconocimiento internacional.

Por otro lado, el análisis de las violaciones de los derechos humanos indica cómo a partir del primer intento de golpe en mayo de 1988, pero especialmente a partir de la *presión institucional* del 10 de agosto de ese año, el gobierno civil adoptó una actitud de abierta complicidad con las actuaciones represivas del Ejército. La *guerra política* devino en *guerra psicológica* para pasar inmediatamente a convertirse en *guerra sucia*, que en 1989 ya parecía escapar al control del gobierno y convertirse en un elemento desestabilizador. En áreas como San Marcos-Quetzaltenango-Retalhuleu y Suchitupéquez-Sololá, donde desde 1986 se había

en Cabá (Chajul) y Barranca de Gálvez (San Marcos), y suspender la ofensiva en el cerro Balanjuyú. Desde marzo de 1989 las tres organizaciones guerrilleras comenzaron a coordinar campañas militares, y a partir de octubre iniciaron una ofensiva contra la infraestructura económica, en abierta provocación al sector empresarial.

- 6 En el primer trimestre de 1991 el general Gramajo declaró a Jenniffer Schirmer, y fue publicado en la *Harvard International Review* (Vol. XVIII, No. 3): *No estamos renunciando al uso de la fuerza. Si la tenemos que usar, la usaremos, pero de una manera sofisticada. Usted no necesita matar a todo el mundo para hacer bien el trabajo. Se pueden utilizar medios más sofisticados. No vamos a volver a la época de las grandes masacres. Hemos creado una estrategia menos costosa, más humanitaria, para que sea compatible con el sistema democrático.*
- 7 Las directivas de los citados planes de campaña de 1986 y 1987 del Ejército se refieren al despliegue de funciones de inteligencia social y el énfasis en la inteligencia militar *para mantener la seguridad como fundamento de la estabilidad nacional, pues los terroristas... abusando del sistema, intentarán penetrar en el gobierno y las organizaciones de masas... sindicatos, estudiantes, religiosos... tomando como blanco principal al Ejército... inculpándolo de supuestos delitos pasados y violación de derechos humanos, con el propósito de desprestigiarlo y... obligarlo a disminuir la presión operativa.*

detectado una persistente campaña de secuestro y asesinato de campesinos como parte de las campañas militares contrainsurgentes bajo la responsabilidad y *ejecución descentralizada*⁸ del comandante de la Zona Militar, éstas se siguieron produciendo, ampliándose a Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango y Santa Rosa, en la medida en que se fueron extendiendo los frentes guerrilleros.⁹ Otro tipo de agresiones contra los derechos humanos se dieron en la zona del sur de El Quiché, norte de Chimaltenango y oriente de Sololá, donde surgió un movimiento muy fuerte contra las PAC, dirigido por GAM, CERJ y CONAVIGUA. En estos casos se evidenció también la participación del Ejército adocrinando a patrulleros y comisionados militares, o interviniendo directamente en los secuestros.

En la ciudad la represión se manifestó en el secuestro y asesinato de dirigentes no muy conocidos, pero que destacaban en las protestas ciudadanas que se realizaron especialmente en junio de 1989 y 1990. La Asociación de Estudiantes Universitarios, los líderes magisteriales y algunos sindicalistas de empresas en conflicto fueron las víctimas. En muchos de estos casos, la Policía Nacional estuvo implicada en los secuestros. También se dieron campañas de intimidación y guerra psicológica, como las amenazas del ex-guerrillero Ángel Reyes Melgar o las del *Jaguar Justiciero*.¹⁰ Además, por temporadas, se produjeron olas de atentados indiscriminados junto a otros que tenían una clara intencionalidad intimidatoria contra algunos aspectos de la política del gobierno.¹¹

8 La estrategia de decisión centralizada y ejecución descentralizada, empleada por el Ejército desde los años 70, que fue analizada a profundidad por Joaquín Noval en el artículo *El Estado y la violencia* (Noval, 1977), permitía que los centros de decisión política en materia de seguridad únicamente trazaran las orientaciones generales, dejando que los órganos operativos seleccionaran a las víctimas y los métodos para proceder. El intento de Gramajo de centralizar las decisiones de represión política, para introducir un control, fue rechazado por los comandantes de campo.

9 En muchos de los casos, los familiares denunciaron abiertamente a hombres uniformados como responsables, en otros localizaron en la Zona Militar los vehículos usados en el secuestro. En San Marcos, la ola de asesinatos alcanzó a militares del Partido Socialista Democrático y de la DC, y se fue agravando hasta el punto que en noviembre de 1989 la prensa denunció una huida masiva de campesinos a México. En Suchitepéquez aparecieron los cadáveres de personas secuestradas en la capital o en otros departamentos. Otras ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en Petén y Huehuetenango, entre marzo de 1989 y febrero de 1990.

10 El 20 de enero de 1989 llegó al país el ex-guerrillero Ángel Reyes Melgar, denunciando a las organizaciones de derechos humanos como brazo político de la guerrilla. El 27 de febrero publicó un campo pagado acusando al CUC de formar parte de la URNG. Posteriormente el GAM anunció que lo demandaría por participar en 1985 en el asesinato de sus dirigentes, y Reyes desapareció. El *Jaguar Justiciero* tuvo otras características. Desde noviembre de 1988 se había detectado una campaña de asesinatos contra líderes de las maras en los barrios marginales de la ciudad. Pero en enero de 1989 aparecieron pintas del *Jaguar Justiciero* en Jutiapa y cadáveres de desconocidos con amenazas contra los políticos comunistas y corruptos. El 4 de marzo la AEU denunció haber recibido amenazas de este grupo; el 15 de marzo éste se atribuyó el asesinato de cinco jóvenes miembros de maras; el 10 de abril aparecieron otros dos cadáveres de ex-convictos. Poco después el grupo desapareció.

11 Entre éstos, el atentado contra el semanario *La Época* el 11 de junio de 1988; las bombas en julio contra la compañía Mexicana de Aviación y contra el delegado de *Prensa Latina*; a principios de 1989, el atentado contra el jefe de Tránsito de la Policía, en mayo contra el viceministro de Gobernación, y en agosto contra la sede del GAM y las Brigadas Internacionales de Paz.

Estos atentados, y los asesinatos del político demócrata-cristiano Danilo Barillas y el empresario Ramiro Castillo Love, fueron aprovechados por el presidente Cerezo para seguir presentándose como *víctima* de la violencia desestabilizadora de las fuerzas extremistas de ambos signos; incluso intentó detener al dirigente derechista Lionel Sisniega Otero como prueba de que enfrentaba por igual las presiones de ambos lados. También en octubre y noviembre de 1989 el Presidente habló de una campaña desestabilizadora centroamericana, en la que estaba participando la extrema derecha salvadoreña. El argumento volvió a ser usado cuando en enero de 1990 fueron asesinados los dirigentes socialdemócratas Héctor Oquelí Colindres (salvadoreño) e Hilda Flores (guatemalteca). Sin embargo, estas afirmaciones terminaron apareciendo como exculpatorias de la responsabilidad del gobierno en una política de violencia bien perfilada desde el alto mando militar.

3. Diplomacia y terrorismo

Una muestra de cómo el Ejército puso al gobierno civil al servicio de su política contrainsurgente se reflejó en la política exterior.¹² El gobierno presentó en Ginebra su informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 1989, logrando que prorrogara el mandato del experto asesor. El Ministerio de la Defensa envió al coronel Roberto Letona Hora y al capitán Mauricio López Bonilla a Ginebra. El *Diario de Centroamérica* anunció el 11 de abril condecoraciones para el coronel Francisco Ortega Menaldo, el mayor Edgar Ricardo Bustamante Figueroa y el capitán Mauricio López Bonilla por haber elaborado el informe del gobierno sobre derechos humanos; en esa fecha, Ortega Menaldo era el director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. También el Plan de Campaña *Avance 90* se proponía contrarrestar las campañas de desinformación internas y externas.

La importancia de este trabajo diplomático se debe considerar a la luz del interés del Ejército en despejar las presiones internacionales para poder manejar con más libertad los aspectos de seguridad interna. Fue en el terreno de la seguridad del Estado donde con más fuerza el Ejército llegó a controlar y usar para garantizar su impunidad tanto a la Policía Nacional como los recursos del Archivo (EMP). El control que el Ejército podía ejercer anteriormente sobre la Policía Nacional a través del director coronel Julio Caballeros (un oficial de inteligencia que también trabajó en el Archivo), y que se había evidenciado a finales de 1987 cuando elementos del Quinto Cuerpo participaron en el secuestro de la familia Rajal Sisimit dirigido desde la Zona Militar de Chimaltenango, se reforzó notablemente con estos cambios, que se produjeron poco después del intento de golpe de 1988, pero quedó consolidado al crearse en agosto el Sistema

12 El canciller Ariel Rivera, en uno de los seminarios del Centro ESTNA, expresó: *El conflicto interno responde a una situación de guerra total del Estado contra sus enemigos. El servicio exterior es una parte más del Estado que debe integrarse con el resto de sus brazos, especialmente el militar, en la lucha contra los elementos antisistema... Esto se puede llevar a cabo mediante la diplomacia preventiva y también mediante la colaboración de inteligencia.*

de Protección Civil (SIPROCI), que colocó todas las fuerzas de seguridad interna bajo el control del EMP.¹³

A partir de entonces se hizo más evidente el uso de elementos de la Policía Nacional para realizar crímenes relacionados con la lucha contrainsurgente. Por ejemplo, el 17 de agosto fueron secuestrados en la capital por policías los hermanos Arroyo Donis, cuyos cadáveres aparecieron en Suchitepéquez. Simultáneamente, el gobierno comenzó a adoptar una postura más activa para encubrir o justificar esta situación. Así, en octubre, unas semanas antes de que se produjera un espectacular aumento de la violencia, el ministro de la Defensa, el jefe de EMDN, el ministro de Gobernación, y el candidato Alfonso Cabrera se reunieron con los diputados del Congreso para explicarles la política contrainsurgente.

La *militarización* de la Policía Nacional y su control desde el Estado Mayor Presidencial a través de los mecanismos del SIPROCI originó fuertes presiones internas que terminaron de estallar con la participación del ex-jefe de la policía Ángel Aníbal Guevara Reyes y varios agentes del DIC en el intento de golpe de Estado de 1989, una de cuyas reivindicaciones era la renuncia del ministro de Gobernación. Fue en este período que surgió el *Jaguar Justiciero* y una campaña de atentados intimidatorios contra organizaciones populares y personalidades democráticas. Después de la intentona golpista, se produjeron importantes cambios: llegaron a la dirección de la Policía Nacional el coronel Giovanni Valerio Cárdenas, miembro de la Inteligencia Militar en el gobierno del general Romeo Lucas, y como viceministro de Gobernación el ex-general Carlos Augusto Morales sustituyó a Julio Rivera Clavería. El 22 de septiembre también fueron relevados los mandos del Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC), y a comienzos de octubre salió definitivamente Roberto Valle Valdizán del Ministerio de Gobernación y llegó el general Morales Villatoro.

Estos cambios coincidieron con un aumento inusitado de la violencia política, a partir de agosto de 1989. Para entonces ya había trascendido el control del EMP sobre la Policía Nacional, al punto de que el diputado Jorge Skinner Klee lo denunció (*El Gráfico* 3/8/89). Lo mismo afirmó el ex-ministro de Gobernación Juan José Rodil, el 17 de septiembre, y los familiares del derechista Leonel Sisniega Otero, quienes incluso señalaron la existencia de una cárcel clandestina en El Archivo del EMP. En esas fechas, el presidente declaró a una delegación internacional que *hay grupos desestabilizadores responsables de la violencia política que extraen información de inteligencia del Estado*.

En diciembre, con el secuestro y torturas contra la monja Dianna Ortiz, se evidenció la relación instrumental entre la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado. Lo mismo se descubrió cuando la Comisión de la Verdad para El Salvador investigó el asesinato del salvadoreño Héctor Oquelí.¹⁴ Los secuestros y posterior

13 La creación del SIPROCI en agosto de 1989 representó un intento de controlar a través del EMP y su Archivo al resto de instituciones de inteligencia, pero es muy probable que después de las negociaciones del golpe de Estado de 1989, el EMDN y su Dirección de Inteligencia llegaran a establecer algún tipo de coordinación con el Archivo, poniéndolo a trabajar bajo las orientaciones del EMDN.

14 En su informe, la Comisión establece cómo policías guatemaltecos intervinieron en el secuestro, dejando numerosas evidencias de su participación, aunque posteriormente fue el Ejército el encargado de llevar a cabo los interrogatorios y ordenar el asesinato.

liberación del estudiante Piedrasanta y la profesora Carmen Valenzuela revelaron también la subordinación de los mecanismos de seguridad civiles a los militares. Poco después la Universidad de Harvard suspendió el programa de ayuda técnica a la Policía Nacional, convencida de que en esta institución *no existía voluntad política* de combatir la violencia. Para entonces, el presidente Cerezo se había enfrentado públicamente con el embajador de los Estados Unidos por sus denuncias sobre la complicidad oficial en las violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, tanto Cerezo como el ministro de la Defensa siguieron presentándose como víctimas de campañas desestabilizadoras que recurrían a la violencia política para desacreditar al gobierno. Dejando de lado estos argumentos, lo que nunca pudo establecerse es el origen de estas campañas, que se prolongarían en años sucesivos. Las evidencias que apuntan al DSP (Archivo) del EMP, no han logrado aclarar los mecanismos de cómo estas dependencias, dirigidas por el general Edgar Godoy, anterior director de la D-2, se coordinaron con la dirección de Inteligencia, que estuvo a cargo del coronel Francisco Ortega Menaldo, y con el equipo de trabajo del Estado Mayor del Ministro, que estaba dirigido por el coronel Cabrera, quien pasaría después a sustituir a Ortega en la Dirección de Inteligencia. En su libro **De la guerra... a la guerra**, Gramajo deja entrever que siempre se vio entorpecido por los servicios de inteligencia, tanto del EMP como del EMDN, haciendo alusión a la rivalidad entre la *Cofradía y el Sindicato*. Entonces es posible que existiera en algunas etapas una interferencia entre los planes operativos de la D-2 del EMDN y los del Archivo del EMP, como de hecho sucedería años después.

4. El nuevo escenario internacional

A pesar de los esfuerzos del equipo de militares del Estado Mayor del ministro Gramajo, la coyuntura internacional evolucionó de manera desfavorable para el Ejército guatemalteco. En las relaciones con los Estados Unidos, la política de Estabilidad Nacional logró importantes apoyos en 1988. Después de que Gramajo viajara a Estados Unidos tras el intento de golpe de Estado invitado por la *American University*, el mismo secretario de Estado George Schultz viajó a Guatemala a entregar una ayuda especial de US\$75 millones para apoyo a la balanza de pagos. Fue esa también la mejor época del equipo internacional del ministro de la Defensa, como se demostró en el caso de la masacre de El Aguacate (ejecutada según los testimonios recabados por REMHI por una columna de ORPA) y en la promesa del presidente Reagan de proponer una ayuda militar de US\$9 millones para 1989 y 1990.

Pero con la llegada del presidente George Bush, Centroamérica perdió importancia en la geoestrategia de Estados Unidos,¹⁵ y después poco a poco fueron cambiando los parámetros de este país respecto a sus antiguos aliados en el istmo. La campaña estadounidense contra el general panameño Manuel

15 El documento Santa Fe II, redactado por un grupo de asesores republicanos, establecía a México, Brasil, Colombia, Panamá y Cuba como las prioridades de la política de los Estados Unidos hacia América Latina.

Antonio Noriega –quien mantenía buenas relaciones con el Ejército guatemalteco y excelentes con el embajador de Guatemala en Panamá, el general Rodolfo Lobos Zamora–, causó especial alarma en medios militares. El mismo Cerezo enfrentó las críticas en materia de derechos humanos de la administración estadounidense en febrero de 1989 y, nuevamente, cuando meses después Washington restableció el *Travel Advisory*. En esas fechas, sin embargo, se produjeron numerosos intercambios militares, probablemente condicionados a la esperada ayuda militar.

La llegada del nuevo embajador Thomas Strook pareció ser la señal de un giro importante en estas relaciones. Pero, en febrero de 1990 el Departamento de Estado hizo público su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, y el embajador insistió en que no se podían esperar buenas relaciones en el futuro con un gobierno que no respetaba ni hacía respetar los derechos humanos. El presidente Cerezo respondió agresivamente y el embajador fue llamado a consultas. Cuando Gramajo dejó el Ministerio, para cursar estudios de administración pública en la Universidad de Harvard, las relaciones entre ambos países atravesaban un momento complicado.

Tampoco la evolución de la diplomacia centroamericana favoreció las previsiones del Ejército guatemalteco. El protagonismo del presidente Oscar Arias de Costa Rica en el impulso de una solución política negociada a los conflictos centroamericanos fue inmediatamente aprovechado por la URNG, que se definió como partidaria de buscar una solución política negociada al conflicto guatemalteco y maniobró utilizando la rivalidad del mandatario costarricense con el guatemalteco. Así, fue Arias quien el 29 de agosto de 1988 promovió la primera reunión de la URNG con la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) en Costa Rica. Si bien por entonces el gobierno y la misma CNR mantenían la postura de no reconocer el estatus de parte beligerante en los grupos guerrilleros, la URNG pidió participar en el Diálogo Nacional, colocando al gobierno a la defensiva. Poco a poco, la URNG fue ganando audiencia dentro y fuera del país. Así, en diciembre de 1988 el obispo Rodolfo Quezada se ofreció para mediar por la suerte de un soldado prisionero de la guerrilla, que ésta había utilizado como presión para que implícitamente se reconociera su beligerancia interna. También en febrero de 1989 la URNG aprovechó la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en Venezuela para colocar al gobierno guatemalteco a la defensiva.¹⁶

Por otro lado, después del cambio de presidente en los Estados Unidos, el Acuerdo de Esquipulas II adquirió un nuevo impulso, que fue cerrando el margen de maniobra del gobierno guatemalteco para evitar el diálogo con la guerrilla. Los días 17 y 18 de febrero de 1989 se celebró la cumbre de presidentes en El Salvador, en la que el Frente Sandinista se comprometió a convocar a elecciones anticipadas y la contra nicaragüense aceptó participar. En septiembre, cuando ya había triunfado ARENA en las elecciones presidenciales salvadoreñas, se celebró la cumbre de presidentes centroamericanos en Tela, Honduras, en la que el presidente Arias hizo llegar a sus colegas una solicitud de diálogo de la URNG.

16 Una descripción detallada de las negociaciones de paz y el ambiente político de estos años se encuentra en el capítulo octavo de este mismo tomo.

Sin embargo, ante la gravedad de la situación en El Salvador, Cerezo logró un consenso regional para dejar en segundo lugar el caso de Guatemala, y así no desestabilizar la *delicada* situación del gobierno guatemalteco.

Pero la URNG fue avanzando con iniciativas de mayor alcance, y previendo el papel que las Naciones Unidas iban a jugar en la solución de los conflictos nicaragüense y salvadoreño (como ya lo había hecho en el de Angola) iniciaron la comunicación con el secretario general de la ONU, adelantándole su disposición al diálogo. Gramajo viajó a Washington a finales de septiembre de 1989 y probablemente percibió que se precipitaban cambios importantes en el contexto regional, porque en octubre se reunió con representantes de la Iglesia Luterana de Noruega para informarles que el Ejército estaba dispuesto a dialogar con la guerrilla. La ofensiva guerrillera salvadoreña sobre la capital del país, con el propósito de internacionalizar el conflicto y forzar una solución negociada favorable para la guerrilla, se convirtió en un componente de los análisis estratégicos del Ejército, aun cuando la URNG no pudiera desplegar una iniciativa de aquella magnitud.

El Ejército intentó retomar la iniciativa política con un discurso agresivo, afirmando que la guerrilla se había quedado sin banderas ideológicas con el desplome del socialismo, y que su futuro era el terrorismo. Pero de hecho, la tendencia que se imponía, incluso en los Estados Unidos, era la de buscar rápidas salidas negociadas a los conflictos centroamericanos. La condena a la ofensiva del FMLN en noviembre de 1989, apoyada por todos los presidentes centroamericanos —incluido el sandinista Daniel Ortega—, y la pérdida del FSLN en las elecciones de febrero de 1990, dieron más impulso a esta tendencia.

Fue en medio de aquellas presiones que el presidente Cerezo declaró públicamente estar dispuesto a una solución negociada al conflicto y la URNG pidió inmediatamente una reunión al más alto nivel en la capital o en algún lugar de sus frentes. Sin embargo, lo que se dio fue el encuentro de Oslo en marzo de 1990, entre una delegación de la CNR y la comandancia de la URNG. Allí se estableció un prolongado procedimiento de conversaciones previas con distintos sectores de la sociedad guatemalteca, con la participación de un representante del secretario de la ONU como testigo y del obispo Quezada Toruño como conciliador.

Los acuerdos de Oslo reflejaban la presión internacional sobre las partes para que dieran pasos efectivos y muestras confiables de su voluntad de solucionar el conflicto mediante la negociación política. Sin embargo ambos fijaron puntos de partida y metas a las conversaciones que les permitían ganar tiempo, a la espera de un desgaste acelerado de la parte contraria. El gobierno estableció el límite en la legalidad institucional marcada por la Constitución de 1985, y su meta era crear condiciones para una rendición honorable de la guerrilla. El límite de la guerrilla era no entregar las armas en tanto no se llegara a un acuerdo efectivo, y su meta era modificar la institucionalidad mediante una reforma constitucional o una Asamblea Constituyente.

Tal y como se desarrolló, el proceso dejó totalmente a la defensiva al Ejército. Finalmente la *neutralidad activa* no había logrado evitar el reconocimiento internacional de la guerrilla y las presiones para una solución negociada a la guerra. Por otro lado, los Estados Unidos demostraban una vez más ser un aliado no confiable. Colocando frente a este panorama internacional

el aumento de la violencia interna, resultaba profética la afirmación que un coronel retirado lanzara en 1986: *en la medida en que internacionalmente el gobierno gane espacios, se podrá ir aflojando la pita en el control interno.*

5. El derrumbe de la Estabilidad

Sin embargo, los mayores fracasos del proyecto militar de Estabilidad Nacional se dieron en el terreno de las alianzas internas. Como el mismo general Gramajo señala en su libro **De la guerra... a la guerra**, la mayor decepción que le representó el intento de golpe de Estado de 1988 fue comprobar el alto grado de complicidad del sector empresarial en el mismo. El propio Gramajo pudo comprobar rápidamente cómo su discurso de *guerra integral* involucrando a todos los sectores de la sociedad en la aplicación de la política contrainsurgente no era atendido por el sector empresarial (Jonas, 1994).

El primer efecto económico del golpe de mayo de 1988 fue una masiva salida de capitales, que debilitó las finanzas del Estado. El ministro de la Defensa emprendió una campaña para ganarse la confianza de las organizaciones empresariales, llegándose en el primer semestre de 1989 a una reunión de la cúpula del CACIF con el Estado Mayor de la Defensa Nacional, en la que no se lograron mayores entendimientos. Mientras tanto, avanzaba a marchas aceleradas la aplicación de un Plan de Ajuste Estructural de la economía, que implicaba una serie de medidas neoliberales, entre ellas la privatización del sector público, que eran incompatibles con cualquier planteamiento desarrollista.

A mediados de 1989, cuando el proyecto de la Democracia Cristiana se debilitó y el gobierno únicamente buscaba socios en el sector empresarial para incorporarlos a las ventajas de la aplicación del programa económico, Gramajo había renunciado a lograr el respaldo del sector empresarial, y se conformaba con intentar apoyos personales de algunos líderes empresariales influyentes, que a mediano plazo pudieran ir madurando una alianza.¹⁷ Pero el asesinato de Castillo Love, en agosto de 1989, cortó también estas expectativas.

Durante 1989 el Ejército puso especial atención en ganarse la consideración de los empresarios, demostrando que estaban defendiendo la economía de agroexportación frente a los atentados de la guerrilla. Pero a finales de ese año el mismo Gramajo observó que esta política no producía resultados inmediatos, y anunció que tanto ellos como la guerrilla habían avanzado, lo cual suponía una amenaza para toda la producción exportadora de la bocacosta. Pero en 1990, con

17 En agosto de 1989 Cerezo anunció que era un hecho la privatización de Aviateca, y poco después se concedió la telefonía celular a empresas privadas. En noviembre el banco central liberó el tipo de cambio y el control de divisas, y aumentó las tasas de interés. Esta coyuntura que abría oportunidades a nuevos grupos especialmente de capital financiero, fue aprovechada por los políticos y funcionarios del gobierno para lograr un efectivo acercamiento con empresarios ambiciosos. Gramajo sólo logró acercar a su proyecto de Centro ESTNA a Carlos Porras, concesionario de la Coca-Cola, y a Ramiro Castillo Love, del grupo Castillo-Banco Industrial, aunque él también cita a Juan Luis Bosch, del grupo Multiversión-Pollo Campero.

el surgimiento público del Grupo Pirámide como expresión de la cúpula empresarial, ésta se centró en lograr una candidatura presidencial que les diera directamente el control del Ejecutivo, y perdió cualquier interés en escuchar las propuestas del Ejército como grupo de poder.

En cuanto a la alianza con el gobierno demócrata cristiano, casi inmediatamente después del intento de golpe de 1988 el ministro de la Defensa fue tomando distancias. La presión que ejerció la Junta de Comandantes en la reunión del 10 de agosto de aquel año obligó a Gramajo a definirse sobre su papel, aclarando si representaba a la institución militar ante el gobierno civil, o al presidente Cerezo frente al Ejército. El resultado fue que Gramajo resultó ser cada vez más el representante de las posiciones de la Junta de Comandantes ante el Presidente, quien a su vez fue acomodando sus decisiones a los límites que le marcaban los 23 comandantes de Zonas Militares y jefes de unidades estratégicas.

Aunque en septiembre de 1988 Cerezo inauguró el proyecto de reconstrucción del área Ixil, y en diciembre recorrió en una gira las bases militares del país, en 1989, según Gramajo, *los analistas del EMDN pensaban que el Presidente había abandonado sus planes y prioridades. La DC perdió la iniciativa política y podía perder el control en beneficio de los insurgentes*. Durante el primer semestre del año Gramajo fue aumentando sus señales de distanciamiento del gobierno y se centró en consolidar su proyecto de Estabilidad Nacional por medio de alianzas políticas que tuvieran una perspectiva más a mediano plazo.

Gramajo asegura que en 1989 revisó su Tesis de la Estabilidad Nacional, se distanció del gobierno, buscó apoyos en las fuerzas sociales y se concentró en fortalecer el marco institucional; asimismo intentó despolitizar su gestión como ministro, alejándose de asuntos coyunturales (Gramajo, 1995). Este giro coincidió con la etapa de mayor actividad del Centro ESTNA, creado en septiembre de 1988. Si bien el ESTNA no lograría convertirse en un *tanque de pensamiento* similar a otros ya existentes en el país como ASIES, sí consiguió, en 1989 y 1990, ampliar los círculos de influencia del Ejército en algunos sectores profesionales, y reagrupar a aquéllos que anteriormente colaboraban con la política desarrollista del Ejército —como ciertos grupos cooperativistas o incluso indígenas—. Si bien algunas de sus actividades como el seminario sobre *El Desafío de las relaciones cívico-militares en Centroamérica*, convocado en agosto de 1989 con la American University y el mismo ASIES, logró atraer a personalidades socialdemócratas centroamericanas, junto a militares de El Salvador y Honduras, la rápida evolución de los acontecimientos internacionales y el deterioro de la situación interna pronto arrinconaron los débiles planteamientos del ESTNA. Por otro lado, según relata el mismo Gramajo, el eje en el proyecto de la Estabilidad Nacional se desplazó, ya en una posición a la defensiva, hacia el control de las instancias e instituciones sobre las que legalmente se apoyaba el régimen democrático, especialmente el sistema judicial y constitucional.

En cuanto al componente desarrollista del proyecto militar, si bien hasta 1988 aún se mantuvo con una cierta expectativa, a partir de 1989 la política de desarrollo del gobierno quedó totalmente desplazada por la aplicación de un plan de ajuste estructural de la economía. El Plan *500 Días* terminó convirtiéndose en una herramienta electoral, que además ya resultaba inaplicable por la crisis financiera del Estado.

6. El Ejército pierde liderazgo

Gramajo insiste en afirmar que su posición dentro del Ejército resultó fortalecida con el fracaso del intento de golpe de Estado de 1988. Incluso el mismo día del golpe se habló en el Palacio Nacional de la *teoría de la vacuna*, según la cual el mismo Gramajo y el general Callejas, jefe del EMDN, dejaron avanzar los planes conspirativos para poder golpear a sus principales líderes y unificar definitivamente a la cúpula militar. Sin embargo, los actos de rebeldía se sucedieron en las semanas posteriores al 11 de mayo de 1988, por ejemplo en el Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aérea, donde además de las maniobras conspirativas de su jefe, existía un malestar generalizado por la política de compras del ministro.¹⁸

Pero fue después de la amenazadora reunión de la Junta de Comandantes, mientras el gabinete de gobierno también estaba reunido y helicópteros sobrevolaban el centro de la ciudad y se mantenían tropas alerta en el Cuartel General, cuando cambió definitivamente la correlación de fuerzas, al recuperar la Junta de Comandantes el carácter de órgano corporativo del Ejército frente al ministro y el gobierno. Se mantuvo la institucionalidad del proceso democrático, a cambio de un mayor control del Ejército sobre éste. A partir de este momento, la política de derechos humanos y las relaciones internacionales se endurecieron considerablemente.

En 1989 la situación política del gobierno continuó deteriorándose. El país entró en una situación preelectoral, definida por tres elementos: la candidatura oficialista de Alfonso Cabrera, que intentó involucrar a algunos altos oficiales –como el general Roberto Mata o el coronel Carlos Santizo Franco–; la candidatura del general Ríos Montt, que causó un fuerte impacto en los sectores militares convencidos de que el sistema político era demasiado corrupto y poco confiable; y la posición del sector empresarial, dispuesto a financiar una candidatura propia a través del Grupo Pirámide.

Paralelamente, el desarrollo de la lucha contrainsurgente empezó a ser visiblemente negativo –tanto por los cambios en la política regional e internacional como por el desarrollo militar y político de la URNG–, la evolución de la economía del país obligaba a arrinconar los proyectos desarrollistas y hacía prever estallidos sociales. En tanto, el presidente mantenía un relativo control de la situación gracias a la lealtad del jefe del EMP y del

18 La compra de equipo militar y el aumento del presupuesto de Defensa fue una de las cartas de Gramajo para lograr unificar a la institución. Sin embargo esta maniobra resultó controvertida. Por una parte, la ayuda de los Estados Unidos disminuyó a causa de las críticas por violaciones de los derechos humanos. Por otra, las asignaciones del presupuesto público y las transferencias sufrieron problemas de flujo de caja; además, la Ofensiva de Fin de Año había acumulado gastos extras por Q9 millones. Ante esa situación se recurrió al EMP para financiar las compras del Ejército, con cargo a los fondos confidenciales de la Presidencia. Ello generó inmediatamente acusaciones de corrupción en la compra de helicópteros Bell y Sikorsky, aviones de transporte italianos y de fusiles M-16. En el período 1985-89 el Ejército realizó compras de equipo por US\$175 millones, desplazando a los antiguos proveedores israelitas, como David Markus Katz, que estaban asociados a los generales Rodolfo Lobos Zamora y Pablo Nuila Hub.

ministro de la Defensa. Gramajo siguió consolidando posiciones en la Junta de Comandantes, promoviendo a jefes de su confianza como el coronel Jaime Rabanales, ascendido a general en abril, o el general Molina Bedoya, que llegó al viceministerio al pasar a retiro el general Arturo de la Cruz. También desplazó al general Wholers de la Fuerza Aérea y colocó en su lugar al general Humberto Ángeles. Pero el liderazgo de Gramajo, como representante de los oficiales que en 1983 restablecieron la institucionalidad militar, y como ideólogo de la Estabilidad Nacional, se había debilitado al verse comprometido con un gobierno que perdió la confianza del Ejército y fracasó en sus acercamientos con los sectores empresariales. En esta coyuntura se produjo la segunda intentona golpista el 9 de mayo de 1989, que involucró a altos mandos del Ejército y que agrupó a un mayor número de oficiales.¹⁹

Según Gramajo, el golpe buscaba neutralizar al ministro y al Estado Mayor de la Defensa. En apariencia, no pretendió romper la legalidad institucional, sino provocar cambios en la cúpula militar. Sin embargo es previsible que para entonces la Junta de Comandantes se sintiera lo suficientemente sólida como para no necesitar de cambios escandalosos en las alturas, y el intento de golpe no tuvo mayor acogida en las distintas dependencias militares del interior del país. La situación la aprovechó nuevamente Gramajo para provocar una fuerte rotación de los mandos militares, que probablemente tuvo consenso en la Junta de Comandantes, reunida en los días inmediatamente posteriores al golpe.

A partir de entonces la situación interna en el Ejército se movió en torno a la sucesión de Gramajo, ya que en junio de 1990 le llegaría su retiro y unos meses antes, en diciembre de 1989, también pasaría a retiro el jefe de EMDN; por eso quien sustituyera a éste sería el probable ministro de la Defensa. El elegido fue el general Juan Leonel Bolaños Chávez, el oficial que había presidido el tribunal militar que condenó a los golpistas de mayo, hombre de la confianza de Gramajo y comprometido con la difusión de la Tesis de la Estabilidad Nacional, desde su posición de subjefe del EMDN. Bolaños era un oficial de escritorio, sin méritos en operaciones, que introdujo el sistema de cómputo en los procedimientos administrativos y de inteligencia del Ejército, dedicado al estudio y propuestas de modificaciones a la Ley Constitutiva del Ejército, el Código Militar y la ley de servicio militar. Aunque respetado, carecía de liderazgo entre la alta oficialidad. Era previsible, además, que su mandato no durara más de ocho meses, hasta que tomara posesión el nuevo presidente en enero de 1991.

19 El golpe involucró a tropas del Cuartel General, el Agrupamiento Táctico y la Guardia de Honor, siendo controlados por la Brigada Mariscal Zavala, el general Raúl Ángeles Juárez (comandante de la Fuerza Aérea) y los jefes de Estado Mayor del ministro, coroneles Luis Miranda Trejo y César Augusto Cabrera. Los generales Mata Gálvez y Juan José Marroquín tuvieron un papel ambiguo, igual que el general Manuel Antonio Callejas, quien intentó actuar como mediador con los sublevados. Otros muchos oficiales se vieron involucrados en la intentona golpista: el coronel Francisco Castellanos Góngora (director del FYDEP), el mayor Byron Humberto Barrientos (sub-director de la Guardia de Hacienda), el capitán Romeo Guevara Reyes (ex-director de la Policía Nacional), el coronel Julio Padilla Gómez (jefe del Agrupamiento Táctico), los coroneles César Ramón Quiñónez, Raúl Dehesa Oliva y Juan Gálvez del Cid, entre otros.

Por otro lado el general Juan José Marroquín, al frente de la jefatura del EMDN, el general Mata Gálvez como jefe, y detrás de ellos los quince generales ascendidos durante el mandato de Gramajo (casi todos firmantes de la proclama del Consejo de Comandantes que destituyó a Ríos Montt) presionaban por el futuro control del Ejército, sin que apareciera un liderazgo que los pudiera unificar. Era una situación delicada, si se tiene en cuenta que en el proyecto de estabilidad los mayores desafíos internos y externos y dentro de la institución comenzaban a tomar fuerza fenómenos disolventes como el del narcotráfico.²⁰

El general Gramajo se despidió con una advertencia muy explícita en su libro *El liderazgo militar*, publicado unas semanas antes de dejar el cargo, al recordar cómo en los últimos tiempos desaparecieron los ejércitos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá por no haber sabido resistir las presiones de la sociedad ni adaptarse a los nuevos tiempos. Antes de partir a la Universidad de Harvard, criticó a los partidos políticos y señaló que se estaban cometiendo *graves errores en materia de derechos humanos*.

7. Los empresarios duros

Mientras el gobierno se hundía en el fracaso en 1990, los grupos financieros aprovechaban las ventajas de un plan de ajuste aplicado en medio de la debacle gubernamental.

A pesar de la derrota parcial que sufrió el sector empresarial con la batalla de la reforma tributaria, y de que de hecho se produjo un movimiento en algunos puestos directivos del CACIF, en 1988 se mantuvieron Juan Luis Bosch y Víctor Suárez en la Cámara de Industria y el CACIF, así como Edgar Heinemann en la Cámara de Comercio, representantes de la línea más dura y beligerante. Además, se produjo una fuerte renovación de directivas en casi todas las cámaras, saliendo un gran número de empresarios que habían llegado en 1985-86. Por su lado, la AGA, la Cámara del Agro y ANACAFÉ constituyeron UNAGRO, con lo cual se renovó la dirigencia empresarial agropecuaria.

Desde enero de 1988, el CACIF inició una vía de oposición legalista, influyendo en el poder judicial para que declarara inconstitucionales las medidas económicas del gobierno y presentando a la DC como una organización totalitaria, que no respetaba los mecanismos legales que la llevaron al gobierno. El gobierno intentaba neutralizar la respuesta empresarial con acuerdos sectoriales con los azucareros, los avicultores y los comerciantes. Por ejemplo, el Ministerio de Economía negoció con los azucareros un incremento del 23% en el precio interno, a cambio del compromiso de los azucareros de que

20 Según los datos de la DEA, fue en noviembre de 1988 al llegar al país el colombiano Ricardo Espinoza, contacto del cartel de Medellín, que se asocia con Arnoldo Vargas (alcalde de Zacapa y antiguo empleado del general Carlos Arana), cuando se comienzan a tener noticias de aterrizajes de avionetas con cocaína en pistas particulares de la costa sur. Finalmente, con la llegada del general Callejas a la dirección de Aduanas, en enero de 1990, coincidió con un súbito impulso del tráfico ilegal de carros importados, y varios escándalos por tráfico de cocaína que implicaron al Comisariato del Ejército y a una almacenadora propiedad del Instituto de Previsión Militar (IPM).

realizaran obras sociales. Pero las presiones empresariales paralizaron en el Congreso la discusión de la Ley de Tierras Ociosas, la Ley Forestal y la reforma al Código de Trabajo.

La estrategia empresarial era renunciar a la guerra ideológica. Heinemann, presidente del CACIF, y Roberto Castañeda, de UNAGRO, dejaron de lado la discusión de modelos de desarrollo y propusieron negociar con el gobierno únicamente las reglas del juego: congelamiento de salarios y de las reformas al Código de Trabajo, liberación de precios y devaluación, lo cual desbarató el pacto social que el gobierno había firmado con la UASP en abril. Simultáneamente, algunos sectores empresariales habían adelantado nuevas demandas al gobierno, como cuando el 8 de febrero la Asociación de Amigos del País solicitó que se eliminara el monopolio de la generación de energía eléctrica.

Sin embargo, nuevos elementos, como la pastoral de la Conferencia Episcopal sobre el tema de la tierra, alimentaron las posiciones más radicales.²¹ Días después fue el intento de golpe de Estado. Una vez fracasada la intentona golpista, el sector empresarial centró sus esfuerzos en una campaña de imagen, pero siguió intransigente en el diálogo con el gobierno. En junio el sector empresarial se negó a sentarse con el gobierno y los sindicatos a negociar un Pacto Social, a pesar de que el 25 de mayo apareció un campo pagado apoyando al CACIF para que reiniciara el diálogo con el gobierno y mejorara las condiciones salariales, firmado por los empresarios *mayores de 60 años*: Juan de Dios Aguilar, Miguel Abascal, general Manuel Arana Osorio, Domingo Moreira, Edgar Castillo Sibinaldi, Justo Abascal, Roberto Alejos Arzú, Julián Presa y Juan Francisco Gutiérrez, entre otros. UNAGRO dijo que la violación de los principios constitucionales por parte del gobierno hacía imposible un diálogo.

El 15 de junio el gobierno liberó el precio del azúcar y permitió el alza de varios productos básicos, respondiendo así a los compromisos que había establecido con los sectores empresariales que monopolizaban el mercado interno; pero de todas maneras continuó la presión del sector empresarial, aprovechando precisamente la crisis provocada por el golpe y las presiones militares. A partir de octubre se fueron produciendo paulatinos acercamientos: fueron invitados a la presentación del ESTNA, Heinemann, Arturo Pellecer, J.C. Vercesi y el sindicalista Alfaro Mijangos; en diciembre, cuando el Ejército creó la Fundación para el Desarrollo Institucional de Guatemala, firmaron el acta los empresarios Juan Luis Bosch y Ramiro Castillo Love; también en diciembre asistieron gobierno y empresarios a la Cumbre de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, en Miami, y se llegó a un pacto: que el gobierno trabajaría sin presiones, pero con compromisos. Simbólicamente, Heinemann abrazó a

21 El 6 de abril la UNAGRO replicó en campo pagado la Carta Pastoral de la CEG *El Clamor por la Tierra*; el día 10 lo hizo el empresario Ernesto Cofiño reclamando que los obispos abordaran el control de la natalidad como solución al problema de la pobreza; el 11 lo hizo la Asociación de Amigos del País; el 12, Manuel Ayau y la Asociación de Ganaderos del Suroccidente, que reprodujo una carta pastoral de Mario Rossell de 1954, sobre los peligros del comunismo.

Alfonso Cabrera. Para entonces, el gobierno estudiaba varios proyectos de mediano plazo de interés para el sector empresarial: renovación de la planta telefónica, construcción de la autopista Palín-Escuintla, carretera a Petén, desarrollo industrial de la frontera con México (Retalhuleu) y privatización de Aviataca. Las oportunidades que ofrecían estos proyectos atrajeron a empresarios como Juan Maegli, Ramón Campollo y Habie.

Sin embargo, en 1989 Heinemann salió de la dirección del CACIF y llegó Juan Luis Bosch, de la Cámara de Industria, implicado en el golpe de 1988; también llegó al CACIF Ramón Álvarez Campollo (directivo de ANACAFÉ en los años 70), miembro de UNAGRO, y Dionisio Gutiérrez ocupó la presidencia de la Cámara de la Libre Empresa. Los objetivos de los nuevos grupos empresariales siguieron centrados en reducir la capacidad económica del Estado, haciendo especial énfasis en participar o controlar la privatización del patrimonio nacional.

Pero en 1989 el sector empresarial agrario tuvo que enfrentar la primera huelga campesina de envergadura en la costa sur dirigida especialmente contra los azucareros, uno de los sectores más beneficiados por las concesiones económicas del gobierno. No obstante, una vez resuelta la huelga, la UNAGRO, presionada por los azucareros, aceptó por primera vez sentarse a negociar públicamente con la UASP. Los empresarios azucareros no parecían dispuestos a correr con los altos costos de una huelga sólo por la intransigencia. Además intentaban atraerse a la dirigencia sindical en temas como la privatización del IGSS o la reinversión de utilidades. En febrero se iniciaron las conversaciones entre la UASP y UNAGRO en un nuevo giro del sector empresarial que pretendía aislar más al gobierno y ganar apoyos para su política de mediano plazo: el 19 de abril UNAGRO pidió que se privatizara el IGSS en Escuintla y Juan Luis Bosch anunció que presentaría al Congreso un proyecto de privatización del IGSS; poco después, el 28 de abril, el CACIF se unía a las críticas al IGSS de la CUSG y de UNSITRAGUA. Sin embargo, al ser elegido Efraín Portillo como presidente de UNAGRO, se paralizó el diálogo con la UASP.

Desde marzo el CACIF había expresado al Presidente su preocupación por el incremento de acciones guerrilleras en el suroccidente del país. Y pese a que en ese mismo mes se instaló el Diálogo Nacional con la ausencia del CACIF y la UNAGRO, el 16 de marzo se organizó una reunión del EMDN con la directiva del CACIF para explicarles la política militar —ya durante el trimestre anterior el ministro Gramajo se había reunido varias veces con Juan Luis Bosch y con el capitán David Ordóñez (Gramajo, 1995). Finalmente, otro elemento que concurrió en la intentona golpista fue el nerviosismo que provocó en los sectores empresariales que ya estaban calculando su espacio de poder después de las elecciones presidenciales de 1990, el surgimiento de la candidatura de Alvaro Arzú, respaldado por un sector de gerentes y medianos empresarios, y la del general Efraín Ríos Montt, que contaba con el apoyo inicial de varios pujantes empresarios.

La directiva del CACIF, que fue relevada en julio, perdió crédito en los sectores empresariales por su excesiva politización y surgieron posiciones pidiendo la democratización de las organizaciones de los empresarios. El caos institucional que se produjo después de este segundo golpe, con aumento de la violencia, la represión política, la corrupción y la impunidad, alcanzó también

al sector empresarial, iniciándose de hecho la escalada del narcotráfico en el país. En este contexto de corrupción fueron avanzando los primeros proyectos de privatización de las empresas públicas, en los cuales participaron algunos representantes de aquel.

La violencia y el desarrollo de la guerra fue otro de los temas que preocupó a los empresarios en el segundo semestre de 1989. Ya en septiembre, después de varios atentados desestabilizadores, fueron detenidos varios socios de Sisniega Otero, entre otros Gustavo Anzueto Vielman. El 26 de septiembre se publicaron declaraciones del vocero del Ejército informando que la institución armada había autorizado a algunos finqueros a tener en sus fincas armas de grueso calibre para repeler ataques de ladrones y subversivos, y el 31 de octubre juramentaron a 150 patrulleros en Santa Rosa, presidiendo el acto la Asociación de Cafetaleros de Oriente. Finalmente, el 23 de noviembre, el presidente Cerezo denunció que el salvadoreño Roberto D'Aubuisson enviaba armas a la extrema derecha guatemalteca. Semanas antes se había conocido que los empresarios del suroccidente estaban armando al personal de sus fincas.

Así las cosas, a finales de año, en medio de la bancarrota del gobierno, el sector empresarial logró substanciosas ventajas. Diariamente, los bancos privados compraban US\$7.5 millones y vendían US\$5 millones, mientras frente a las protestas de los cafetaleros por el aumento de tasas de interés, la UNAGRO consiguió crédito oficial al 16%. Como punto final, el CACIF se enfrentó al presupuesto del gobierno en las partidas de gastos confidenciales y transferencias; en esta ocasión el Congreso rechazó el presupuesto para 1990. Los costos de estos éxitos empresariales cayeron sobre las espaldas de otros sectores.

8. Los golpeados

Realmente el sector popular fue el más directamente afectado por la desestabilización política provocada con los dos intentos de golpe de Estado. Aunque el gobierno hizo pública en febrero de 1988 una nueva escala de salarios mínimos, que en la mayor parte de la actividad económica representaba un promedio de Q2.30 diarios, el índice de precios al consumidor aumentó desde 1983 el 198% y la moneda perdió el 50% de su valor. Mientras el salario nominal diario era de Q5.80, que en términos reales equivalía a Q2.64, el costo de las necesidades básicas de una familia era de Q16 diarios. Por otro lado, el desempleo y subempleo alcanzaban al 45% de la población económicamente activa (UASP, 1988).

En materia agraria, el gobierno compró en 1988 al general Lucas García la finca Yalpemech de 9,000 hectáreas para asentar a familias refugiadas en Honduras. De 1986 a octubre de 1988 el gobierno había entregado 18 proyectos con una extensión de 5,895 hectáreas para beneficiar a 16,000 familias. También la Fundación del Centavo, con ayuda de la AID, entregó 6,257 hectáreas que beneficiaron a 1,731 familias. El 22 de mayo de 1989 el gobierno informó haber entregado la finca Chocolá y anexos a 11,135 campesinos del movimiento pro-tierras.

Pero estas escasas medidas resultaron insuficientes, y de hecho las luchas populares fueron creciendo a lo largo de los dos años: la huelga de los trabajadores de la salud en 1988; las masivas protestas convocadas por la UASP en agosto del mismo año en contra de las medidas económicas del gobierno; la lucha de los trabajadores de la empresa Lunafil, y de los trabajadores del INDE. El año 1989 se inauguró con una huelga de 50,000 cortadores de caña en la costa sur. Poco después se produjeron huelgas y manifestaciones de empleados públicos, contra la privatización y recortes de plazas. En el sector privado, se desarrollaron huelgas largas y sin solución (Acumuladores Víctor, Petrosteel, Confecciones Transcontinental e Hidrogás, entre otras). Así las cosas, el 4 de junio estalló una huelga magisterial en todo el país, dirigida por la Unidad de Acción Magisterial. El conflicto se prolongó por tres meses. El 29 de junio se sumaron a la huelga de maestros el INDE, Correos y Salud Pública; a mediados de julio se encontraban ya en luchas sindicales los empleados de Comunicaciones, Instituto de Servicios Agropecuarios, Finanzas, Migración, Correos, INDE, BANDESA, Banco de los Trabajadores, Tribunal Supremo Electoral, y Puerto Quetzal. Finalmente, una nueva huelga estalló en la costa sur en octubre. Pero ya la represión y el desgaste afectaban seriamente la capacidad reivindicativa del movimiento popular.

Esta represión fue aumentando en las escasas luchas que afectaban directamente a los intereses de la empresa privada. Unidas a estas muestras de violencia directa, una parte del sector empresarial impulsó también la política de dividir al sector laboral fomentando el Solidarismo. En 1989, después de que los finqueros de la costa sur recurrieran a la policía y al Ejército para sofocar la huelga campesina, la violencia siguió siendo la norma en los pocos. La AEU los líderes magisteriales y algunos sindicalistas de empresas en conflicto fueron las víctimas.²² En muchos de estos casos apareció la Policía Nacional implicada en los secuestros. También se dieron campañas de intimidación y guerra psicológica.

La escalada de violencia política contra el movimiento popular llegó, en 1989, a unos niveles similares a los de 1980. En octubre y noviembre, el presidente habló de una campaña desestabilizadora. Sin embargo, ya para entonces las acusaciones apuntaban hacia el EMP como el centro que organizaba la represión, como afirmó el ex ministro de Gobernación, Juan José Rodil (*Prensa Libre* 17/9/89). La violencia era un síntoma del empantanamiento de la política de estabilidad, pero además tenía el propósito de abortar cualquier intento guerrillero por consolidar un frente urbano, posibilidad que se había acrecentado en el fragor de la huelga magisterial de mediados de 1989.

El análisis de las violaciones a los derechos humanos indica cómo a partir del primer intento de golpe en mayo de 1988, pero especialmente a partir de la *presión institucional* del 10 de agosto de ese año, el gobierno civil adoptó una actitud de abierta complicidad con las actuaciones represivas del Ejército.

22 El caso de la desaparición y ejecución de la directiva de la AEU en 1989 se analiza en el Capítulo *Los mecanismos del horror*, del Tomo II de este Informe.

Myrna Mack²³

La noche del 11 de septiembre de 1990 la antropóloga Myrna Mack Chang fue atacada por un comando operativo de la inteligencia militar dirigido por el sargento Noel de Jesús Beteta Álvarez, miembro de un Grupo Especial, asignado al Archivo. Myrna Mack salía de las oficinas de AVANCSO situadas en la 12 Calle y 12 Avenida de la Zona 1 cuando fue sorprendida por sus agresores, quienes así culminaban un seguimiento de dos semanas sobre la víctima. El cuerpo de la antropóloga quedó mortalmente herido con 27 puñaladas.

Hacia 1990 Myrna Mack era la única experta independiente en el tema de los desplazados internos a causa del conflicto armado. Este era un tema exclusivo del Ejército y considerado estratégico en sus últimos planes militares de campaña. Su objetivo era recuperar (capturar) a los desplazados en la montaña para erosionar la base social guerrillera y eludir el costo político de reconocerle beligerancia a la insurgencia en la víspera del inicio de las negociaciones de paz.

Sin embargo el 7 y 8 de septiembre de 1990, parte de estos desplazados, llamados desde 1987 Comunidades de Población en Resistencia (CPR), dieron a conocer su existencia en Guatemala a través de un campo pagado en los periódicos, y reclamaron que se les reconociera como población civil no combatiente. Esta declaración rompió la línea de operación militar que se llevaba en ese momento. Por lo tanto, tuvo un efecto en la seguridad del Estado.

La inteligencia militar atribuyó equivocadamente a Myrna Mack la autoría de ese documento²⁴ y decidió asesinarla como represalia y para mandar un mensaje a los sectores civiles, como la Iglesia católica, las ONG y otros, que querían intervenir apoyando la reinsertión de las CPR, al margen del control del Ejército.

Helen Mack, hermana de Myrna, decidió emprender un arduo esfuerzo en los tribunales para identificar y sancionar a los autores del asesinato. No obstante las múltiples irregularidades judiciales fueron develando varios eslabones de una amplia cadena de impunidad, que había empezado desde el día del asesinato en aspectos como el encubrimiento de la Policía Nacional, los vicios de la investigación forense y la alteración de la escena del crimen. En efecto, miembros de inteligencia militar estuvieron presentes en el lugar del asesinato. Por otro lado, la Policía Nacional elaboró dos informes: uno, mutilado, que fue enviado a los tribunales desligando al Ejército de cualquier responsabilidad y levantando la hipótesis de que el móvil del delito era el

23 El caso Myrna Mack es analizado en varias secciones de este Informe; en el siguiente resumen únicamente se incluyen los aspectos políticos más relevantes del asesinato y del proceso penal seguido contra los responsables.

24 Esta apreciación fue equivocada, pues el documento de las CPR fue aprobado por la asamblea de éstas, las cuales le solicitaron al obispo de El Quiché, Julio Cabrera, que lo diera a conocer al presidente Vinicio Cerezo. Después de dos meses de tratar infructuosamente de concertar una cita con Cerezo, las CPR decidieron hacerlo público. Myrna Mack asesoraba al obispo en sus diligencias.

robo; el otro, que identifica a Noel Beteta como uno de los autores materiales y plantea la motivación política del asesinato, permaneció oculto.²⁵ El 5 de agosto de 1991, a sólo 50 metros del cuartel central de la Policía Nacional, fue asesinado el investigador José Miguel Mérida Escobar, quien había dirigido las pesquisas y confirmado la validez del informe completo.

Otros testigos del caso fueron amenazados y varios se vieron obligados a abandonar el país, entre ellos, el segundo investigador, colega de Mérida, Pérez Ixcajop. El Ministerio de la Defensa obstruyó las diligencias judiciales, rechazó los pedidos de información y mostró una actitud negligente. Argumentando que la información solicitada era secreta, diluyó la responsabilidad de los tres oficiales del EMP imputados (general Edgar Godoy Gaitán, coronel Juan Valencia Osorio y teniente coronel Juan Guillermo Oliva Carrera), hasta el punto de no establecer las tareas de Beteta Álvarez en el Archivo ni responder quién supervisaba su trabajo. Asimismo fueron alteradas pruebas del Centro Médico Militar, se suplantaron documentos del ministerio de la Defensa y fueron desaparecidos informes del Ministerio de Finanzas.

Beteta Álvarez fue capturado en los Estados Unidos, deportado y llevado a juicio en Guatemala. Tras el conocimiento del caso por parte de once jueces, finalmente el 12 de febrero de 1993 fue condenado a 25 años de prisión incommutables. La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia de casación afirmando la condena contra Beteta y dejó abierto procedimiento contra los autores intelectuales. Éstos recurrieron al amparo, pero les fue negado por la Corte de Constitucionalidad.

El análisis de la información sugieren indicios y elementos de prueba sobre la responsabilidad de Godoy Gaitán, Valencia Osorio y Oliva Carrera, quienes habrían llevado a cabo un plan que consistió en organizar un aparato de vigilancia de las actividades de Myrna Mack y ordenar su asesinato a los miembros del EMP que llevaron a cabo la vigilancia.

La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) concluyó en 1992 una investigación sobre el asesinato de Myrna Mack y lo calificó de *ejecución extrajudicial cometida por las fuerzas de seguridad del Estado*. El jefe de investigaciones de la PDH explicó el sistema de vigilancia sobre la víctima y sostuvo que sólo un aparato que actúa impúnemente puede llevarlo a cabo, pues además es capaz de ejercer miedo sobre los testigos y familiares de la víctima.

Varios elementos confluyen en la configuración del caso judicial:

- El EMP tenía interés expreso en el tema de los desplazados y había asignado personal para recopilar información en la dependencia

25 Este informe lo presentó con posterioridad a los tribunales el jefe del Ministerio Público, Acisclo Valladares, tras el cambio del director de la Policía, y fue ratificado por el encargado de la investigación, el agente José Miguel Mérida Escobar, a pesar del miedo que tenía. *He firmado mi sentencia de muerte*, expresó después de su declaración oficial.

presidencial responsable del tema (CEAR). Noel de Jesús Beteta trabajaba como sargento mayor especialista en el Archivo del EMP. El Archivo era el organismo de inteligencia del EMP y realizaba acciones operativas, de investigación y espionaje. Estas eran operaciones encubiertas, al margen de cualquier control judicial. Durante el proceso judicial el ex-presidente Ramiro de León admitió que nadie sabía hasta dónde llegaban las funciones del Archivo. También el ex-presidente Vinicio Cerezo confirmó que el Ejército le había ocultado información sobre las actividades que llevaba a cabo. El ex-ministro de la Defensa, general Héctor Gramajo, describió al Archivo como una *oficina secreta* del aparato de seguridad.²⁶ En conclusión, la existencia del Archivo ha reñido con la Constitución convirtiendo a un órgano militar en policía política.

- Por otro lado, tanto los planes de campaña del Ejército para 1989 y 1990, como los documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, demuestran que entre el EMP y la Dirección de Inteligencia del EMDN hubo coordinación táctica y estratégica (como en el caso del SIPROCI). En la zona Ixil, donde Myrna Mack llevó a cabo parte de sus estudios, ella fue controlada por agentes G-2. Esta información habría sido trasladada a la D-2 donde se evaluó y se complementó con la labor de inteligencia de un *agente A* de los servicios de inteligencia, según admitió el mismo Beteta Álvarez.

9. A las puertas del poder

El sector empresarial no divisaba un horizonte tan oscuro al finalizar 1989. Los acontecimientos internacionales parecían acompañar su entusiasmo por el rápido desgaste del gobierno de la DC que se había atrevido a enfrentarles, y por las ventajas que estaba logrando con la aplicación de unas medidas descoordinadas de ajuste de la economía. En marzo, ARENA había triunfado en las elecciones presidenciales salvadoreñas y en Panamá la derecha empresarial se convertía en un símbolo de la lucha por la democracia, después de que en las elecciones presidenciales de mayo triunfó realmente la alianza empresarial opositora. Por otro lado, en septiembre se celebró en El Salvador la reunión de directores de la Federación Centroamericana de Cámaras de Industria y Comercio para discutir programas de ajuste estructural en los países de la región. Finalmente, el fracaso de la ofensiva guerrillera salvadoreña, la caída de los países del bloque socialista en Europa y la invasión de Panamá creaban un panorama internacional prometedor.

En las vísperas electorales la derecha se apresuró a preparar su control del poder político en las elecciones de 1990. En septiembre Ríos Montt había interpuesto recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se

26 El general Gramajo acepta que fracasó en su intento de cambiar actitudes rígidas dentro del Ejército. Y como prueba cita el asesinato de Myrna Mack, entre otros.

pronunciara sobre su postulación, pero no fue éste el elegido. Desde que surgiera en abril la candidatura de Álvaro Arzú sin contar con el beneplácito de los más poderosos empresarios, Juan Luis Bosch había propuesto a la cúpula del sector empresarial la creación del Grupo Pirámide, que intentaría controlar los fondos empresariales que financiaban las campañas presidenciales hacia una única opción. A finales de 1989, Manuel Ayau (el fundador de la Universidad Marroquín y adalid de la derecha empresarial neoliberal) le pidió a Jorge Carpio, líder de la UCN, ocupar la candidatura a la vicepresidencia. De esta manera los clanes empresariales que habían sobrevivido a las duras pruebas de los años 80 se preparaban nuevamente para el poder. Esta nueva fracción empresarial, que sustituía a gran parte de la vieja clase cafetalera e industrial, surgía con un proyecto que había transitado por tres fases: de la base de poder económico oligopólico (concentración de capital financiero y comercial) a la constitución de las bases de un poder ideológico (control de medios de comunicación, del contenido básico de la reforma institucional del Estado y de la educación) hasta el control del poder político (Gutiérrez, 1995).

Sin embargo este optimismo no tuvo en cuenta varios factores que serían determinantes para que durante el primera mitad de la década de 1990 su proyecto no lograra cuajar. El proceso de reconcentración de capital aún no estaba finalizado. En el mismo sector industrial monopólico y ventajista se producían fuertes contradicciones que, por ejemplo, se plasmaron en la guerra entre embotelladora La Mariposa (que importaba vidrio centroamericano) y CAVISA (monopolio en el suministro de envases de vidrio). También se registró un enfrentamiento entre industriales y comerciantes por el tema de la importación de ropa usada. En junio de 1989 el Congreso de la Cámara de Industria pidió al gobierno contrapartidas a la supresión de barreras arancelarias. Sin embargo, hacia 1989, cuando los industriales decidieron realizar un censo de empresas, prácticamente se encontraron con una planta de sobrevivencia, o bien ya reconvertida bajo las nuevas condiciones del mercado. Sólo aquellas industrias subsidiarias de consorcios estadounidenses (como las químico-farmacéuticas) siguieron operando de acuerdo con los planes diseñados por las compañías matrices (Gutiérrez, 1995).

Con la salida del general Gramajo del Ejército no quedaba resuelto definitivamente el reparto del poder del Estado entre el poder económico y el militar. Con el surgimiento público del Grupo Pirámide, la cúpula empresarial se concentró en lograr una candidatura presidencial que les diera directamente el control del Ejecutivo, y perdieron cualquier interés en escuchar las propuestas del Ejército como grupo de poder. En los años 80 fue cobrando fuerza en los sectores empresariales una corriente neoliberal, antiestatal y antiburocrática que forzosamente condujo hacia una actitud contra el Ejército, *como parásito y mal administrador de los recursos públicos*. Incluso era frecuente escuchar a empresarios que la guerrilla seguía existiendo porque al Ejército le interesaba para así justificar su control de la sociedad.

Ahora bien, la política de los Estados Unidos estaba cambiando. Con la llegada del presidente Bush fueron cambiando los parámetros de este país respecto a sus antiguos aliados en el istmo. El sector empresarial tardó aún en comprender que las violaciones en materia de derechos humanos, hacia las que

había adoptado la política de ignorarlas, podían acarrearle fuertes pérdidas económicas al implicar un cese de ayudas o limitaciones de acceso a los mercados.

El desarrollo de la lucha contrainsurgente empezó a ser visiblemente negativo. En momentos en que la evolución de la economía obligaba a arrinconar los proyectos desarrollistas, surgieron fuertes movimientos no previstos como las ocupaciones de fincas, que sorprendieron al sector empresarial. Además, durante 1989, la guerrilla aumentó su actividad militar en la carretera del Pacífico, desde la capital hasta la frontera con México. Simultáneamente, a partir de agosto de 1989 iniciaron una campaña de atentados contra el suministro eléctrico en el país y limitados ataques a objetivos militares en centros urbanos. Y a partir de octubre de ese año, la guerrilla inició su ofensiva contra la infraestructura económica.

Sin embargo, ninguno de estos desafíos parecían estar presentes en las previsiones del Grupo Pirámide, que por otro lado apostaría en las elecciones de 1990 por un candidato perdedor.



Capítulo Séptimo

El gobierno de Serrano Elías

La nueva década llegó marcada con el fracaso del primer gobierno civil de la Democracia Cristiana, debido a su incapacidad de armonizar el proyecto de Estabilidad Nacional del Ejército y el proyecto de ajuste económico neoliberal de la empresa privada. Uno de los candidatos menos esperados terminó ganando las elecciones presidenciales. Jorge Serrano Elías obtuvo la presidencia con el 24.8% del electorado, solamente diez escaños en el Congreso y el 3% de las municipalidades. La llegada de un nuevo gobierno especialmente débil ofreció al sector empresarial la oportunidad de *imponer sus reglas de juego*.

Sin embargo, para entonces, dentro del sector empresarial se estaba desarrollando una pugna sorda: unos empresarios intentaban acaparar los nuevos mecanismos de formación de capital (especialmente financieros); otros defendían los viejos esquemas burocráticos que durante los años 70 permitieron surgir grandes fortunas; otros más buscaban en la privatización del sector público, la llegada de ayudas en la posguerra o incluso en el narcotráfico nuevas palancas para enriquecerse aceleradamente. En este confuso panorama la incapacidad de negociar y compartir espacios políticos, condujo al sector empresarial a intentos de ocupar el poder de manera excluyente, lo que desestabilizó nuevamente el sistema democrático por la vía de las conspiraciones o el boicot fiscal.

Esta coyuntura convergió con una profunda crisis de credibilidad en el sistema institucional político. El fracaso político de la Democracia Cristiana (DC) originó una pérdida de su base social histórica: las clases medias surgidas en los años 60 y 70, proletarizadas en los años 80, que comenzaron a ser sustituidas por una nueva clase media vinculada a la especulación comercial y financiera, claramente aliada del sector empresarial, particularmente de sus grupos modernizantes (Gutiérrez, 1995).

De la misma manera las organizaciones históricas del sector popular, que en los últimos años de los 80 tuvieron un rápido despertar, fueron incapaces de ajustarse a la nueva situación. El movimiento de empleados públicos quedó atrapado en las redes de su propia burocracia y en ocasiones fácilmente manejable por el poder político o el empresarial. Los sindicatos privados fueron desarticulados por la intransigencia patronal, que en ningún momento los aceptó como contraparte negociadora. Además las profundas transformaciones sociales ocurridas en los años 80 desfiguraron la estructura social hasta el punto de convertir en minoritarios a los trabajadores asalariados estables.¹ Fue un nuevo movimiento popular, surgido alrededor de la dinámica de la guerra interna, el

1 La Población Económicamente Activa (PEA) registrada en el seguro social equivalía a un 36% de la PEA total (INE, 1989)

que ocupó un lugar de protagonismo en la lucha social, convirtiéndose así en objetivo de la represión gubernamental y de los ataques del sector empresarial.

1. El candidato de los empresarios

El año 1990 fue decisivo por las transformaciones que el gobierno de la DC, ya tan debilitado, puso en marcha. Por otro lado, el sector empresarial comenzó a usar las armas de la economía para fortalecer sus posiciones de poder político. Así, durante 1990 la inversión privada apenas creció un 2.7% y el gobierno anunció que la tributación generada por las exportaciones en 1988 había bajado casi un 50%, a pesar de que las exportaciones crecieron en un 3%. Incluso durante 1990 el diputado Héctor Luna Trócoli denunció que aunque se reportaron compras por Q7,333 millones, sólo se declaró IVA por Q3,171 millones. Como el mismo gobierno denunciaría en mayo: el sector empresarial había emprendido una *huelga fiscal*, destinando sin embargo fondos para pagar a los candidatos que se presentaban a las elecciones presidenciales.

Efectivamente, desde febrero el alcalde capitalino Álvaro Arzú, había presentado su candidatura presidencial acompañado por Fraterno Vila, un influyente azucarero. También el líder de la Unión de Centro Nacional (UCN), Jorge Carpio, buscaba atraerse el apoyo del sector empresarial. Sin embargo, el sector *duro* del CACIF, que controlaba el organismo desde 1987, había trazado su propia estrategia electoral corporativa. Así fue como surgió el *Grupo Pirámide*, que había funcionado en las sombras, apoyando la creación de una candidatura única que concentrara todo el apoyo económico del sector empresarial (en lugar de las históricas negociaciones para comprar voluntades en unos y otros partidos). El *Grupo Pirámide* se decidió por la candidatura de Jorge Carpio, a la que pronto se sumaron políticos como el exministro de Gobernación Juan José Rodil Peralta o el líder sindical de la CUSG Alfaro Mijangos. En septiembre *se culmina el sueño de dos generaciones de empresarios*, como tituló un medio de prensa, al unirse Jorge Carpio y Manuel Ayau en la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia.²

2 Se trataba, empero, de un esfuerzo más aparente que real. Álvaro Arzú, acompañado por un fuerte sector agroexportador, también representaba intereses políticos empresariales, especialmente de los azucareros. La preparación del *Grupo Pirámide* más bien pareció reflejar el intento de un sector de establecer consensos acerca de la política de ajuste estructural a implementar con el nuevo gobierno. Este grupo contactó a economistas con crédito en las esferas empresariales de Centroamérica, entre ellos Arnold Harberger y Ernesto Fontaine. De allí salió el llamado *Plan Harberger (Lineamiento de Política Económica y Social para Guatemala 1990-96*, 8 de junio de 1990. Mimeo). El plan contenía variables para aplicar un ajuste estructural, más que un programa con propósitos definidos. Y fue usado como una especie de encuesta a los candidatos que pretendían el apoyo empresarial. En septiembre Arzú, atraído por Heinemann, se entrevistó con el equipo de Harberger y rechazó el plan por las presiones de despidos en el sector público. Mientras Jorge Carpio se mostraba entusiasmado, pero su compañero Manuel Ayau era reticente debido *al excesivo gradualismo* de la propuesta.

En cualquier caso los resultados electorales que le dieron el triunfo a Jorge Serrano, desbarataron la estrategia del Grupo Pirámide. El plan Harberger más bien pareció un sondeo de opinión llevado a cabo por el sector que manejaba esta estrategia electoral, que no resultó ser el grupo más poderoso económicamente,³ sino el que buscaba las formas de lograr a través de la política *ventajas compensatorias* en el nuevo cuadro de los poderes económicos.

2. Las batallas de la paz

Durante el gobierno de Serrano Elías el Ejército aceptó formalmente negociar una solución política al conflicto interno, entendiéndola como la rendición de la guerrilla. Ésta aceptó las propuestas de negociación ante la imposibilidad de un triunfo armado y como un mecanismo para transformar en logros políticos sus avances militares.

En este contexto ambos bandos aumentaron la presión militar aunque sin lograr que el desarrollo de la guerra acercara las posibilidades de paz. Las presiones internacionales para terminar con el conflicto, sumadas a las corrientes por la desmilitarización, colocaron al Ejército a la defensiva. Su respuesta fue aumentar los mecanismos de control social y permitir que llegara a la cúpula militar una línea guerrerista, que finalmente provocaría el intento de golpe de Estado en mayo de 1993.

La primera reunión establecida en los acuerdos de Oslo, entre representantes de los partidos políticos y la URNG, se celebró a finales de mayo de 1990 en El Escorial, España, y causó profunda inquietud en el Ejército. Ahí la guerrilla aceptó como marco de negociación los Acuerdos de Esquipulas y la Constitución, y los partidos se comprometieron a proponer reformas constitucionales, a pesar de que anteriormente se habían reunido con los militares que les expusieron los límites: el marco institucional creado por la Constitución de 1985 y el no reconocimiento de la URNG como fuerza beligerante. Vinicio Cerezo respondió inmediatamente afirmando que las conversaciones iniciadas no eran sino el primer paso para lograr el desarme y la desmovilización de la URNG, al tiempo que el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) iniciaba una campaña represiva contra aquellos movimientos sociales que consideraba un apoyo a la subversión o un desafío a su control social.

Las reuniones con diversos sectores sociales que la guerrilla celebró durante el segundo semestre de 1990 (*Inforpress*, 1995) no sirvieron a ambos bandos más que para demostrar internacionalmente una disposición al diálogo. Aunque la URNG sí las aprovechó para reforzar sus relaciones y alianzas políticas, estaba claro que cualquier compromiso debería buscarse con el gobierno que asumiría en enero de 1991. El Ejército encontró en estas conversaciones una manera de aplazar un problema que no estaba en

3 El poder económico real quedó en un pequeño grupo: Novella, Castillo, Gutiérrez-Bosch (Grupo Multinversiones, con 54 firmas en Centroamérica), Herrera, García-Campollo y Botrán, con grupos emergentes como los Habie-Nathusius, y el grupo de azucareros.

condiciones de abordar, a la vez que desviaba las nacientes presiones por la desmilitarización y reducción de las fuerzas armadas.⁴

La fuerza armada tomó la iniciativa con el *Plan Total de Paz* presentado por el nuevo presidente Jorge Serrano Elías el 3 de abril de 1991, en el que le proponía a la guerrilla llegar a un alto al fuego y su rendición en un plazo inmediato, para después pasar a negociar las condiciones de su reinserción política (*Inforpress*, 1995). De hecho esta propuesta, al igual que las que la guerrilla había adelantado sobre la desmilitarización del país, suponía un desafío a la otra parte, ya que la URNG, a través de *Pablo Monsanto*, había afirmado en 1990 que su propuesta de reinserción en la vida política era participar en una Asamblea Constituyente, como condición previa para el desarme.

Sin embargo el *Plan de Paz Total* del presidente Serrano era la primera propuesta que reconocía a la guerrilla como contraparte para negociar, e incluso incorporó en la comisión oficial negociadora a una importante representación del alto mando militar.⁵ La mayoría de los analistas apreciaron un alto componente de iniciativa propia del presidente Serrano Elías en esta propuesta.⁶ El mismo presidente declaró en aquellas fechas: *El logro de la paz total será el punto de partida para nuestro país. Ustedes verán lo que vamos a recibir en términos de cooperación internacional, de inversión extranjera, de afluencia de turismo.* En medios diplomáticos se valoró que la propuesta no era muy sólida en sus contenidos y carecía de una estrategia negociadora.

La intención de Serrano, según los analistas, era *suavizar* al Ejército para que en el plazo de dos años se pudiera llegar a abordar un proceso de negociación serio. *Serrano usa la política de componer las maletas sobre el camino y sentar a los militares con la guerrilla para que frente a frente se vayan suavizando, ya que una vez subidos al carro de la negociación no podrán volverse atrás.* (IC 178, Guatemala, años 90.)

La URNG encaró estas propuestas valorando la debilidad política del nuevo presidente, el desconcierto en el Ejército ante las presiones internacionales y los resultados de sus campañas militares en 1990, que habían logrado retornar el escenario de guerra a zonas vitales para el país. Ganar tiempo resultaba un factor clave de la guerrilla para ir debilitando al adversario, mientras asimilaba los cambios internacionales. Los resultados inmediatos de este proceso negociador le favorecieron: el acuerdo sobre el procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos le abrió las puertas para ampliar el trabajo político en el interior e

4 En la reunión de presidentes centroamericanos celebrada en La Antigua del 15 al 17 de junio de 1990 el secretario de Estado, James Baker, declaró que en el futuro la ayuda al desarrollo estaría condicionada al respeto de los derechos humanos y los avances en la reducción de los gastos militares. En esa línea se creó una Comisión Centroamericana de Seguridad y Desarme. Días antes el encargado para el subcontinente del Departamento de Estado, Bernard Aronson, había felicitado a los participantes en la reunión de El Escorial.

5 Los generales Edgar Godoy Gaitán, subjefe del EMDN, José Domingo García Samayoa, comandante de la Guardia de Honor, Mario Enríquez, comandante de la zona militar de Playa Grande, y Marco Antonio González Taracena, jefe de la Policía Militar Ambulante (PMA).

6 Incluso había organizado su propio equipo de asesores encabezados por Amílcar Burgos, político de raíces socialcristianas que anteriormente asesoró al Consejo de Estado del general Ríos Montt. Además, Antonio Arenales Forno, ex-asesor de la cancillería en temas de negociación centroamericana, fue nombrado embajador en Ginebra.

internacionalmente. También con el proceso acordado se creaban condiciones para que el movimiento popular, en el que la URNG tenía influencia política, se desarrollara.

En la medida en que iba avanzando el proceso de paz en El Salvador y se estabilizaba la transición en Nicaragua, las presiones internacionales fueron crecientes sobre Guatemala durante 1991. En junio el embajador de los Estados Unidos anunció que el Congreso, que había suspendido la ayuda militar y condicionaba la asistencia económica, estaba discutiendo la aprobación de un fondo especial para impulsar el proceso de paz. Poco después el gobierno anunciaba la creación del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) para canalizar ayudas al desarrollo en áreas de pacificación.

El panorama cambió rápidamente a partir de julio, ya que después de producirse un primer relevo en el mando el Ejército⁷ se iniciaron operativos militares contra algunos de los frentes guerrilleros y la situación de derechos humanos se volvió a agravar. La URNG siguió la presión política e introdujo en la negociación el tema de los derechos humanos, la disolución de las PAC, la formación de una Comisión de la Verdad y la verificación de las Naciones Unidas.

Fue después de que el presidente promovió nuevos cambios drásticos en la cúpula militar, en diciembre de 1991,⁸ que el Ejército aumentó su discurso militarista e inició nuevas ofensivas contra los frentes guerrilleros, especialmente el Frente Unitario Central y la retaguardia de la ORPA en San Marcos y Retalhuleu, lo cual se tradujo inmediatamente en un aumento de la violencia política y los atentados indiscriminados. La nueva cúpula militar pretendió dar un giro a las negociaciones, revirtiéndolas contra la guerrilla, mientras consideraba que en 1991 se había sobredimensionado la presión internacional, aceptando unos planteamientos de negociación que favorecían a los insurgentes. Para el primer trimestre de 1992 ya había trascendido la influencia que el jefe del EMP, general Francisco Ortega Menaldo, ejercía sobre el mandatario civil, mientras se consolidaba el poder del ministro de la Defensa y del jefe de EMDN.

Fue después de este reajuste que el gobierno logró retirar al observador de las Naciones Unidas, Francesc Vendrell, y que tanto el CACIF como la Asociación General de Agricultores (AGA) solicitaron al gobierno que no llegara a compromisos con la guerrilla por tratarse de grupos fuera de la ley. En medio de un clima fuertemente adverso al Ejército y del inicio de una crisis del sistema institucional, el diálogo entró en un callejón sin salida. La URNG, como lo había

7 El 30 de junio pasó a retiro el general Raúl Molina Bedoya, seguidor de la doctrina de Estabilidad Nacional; Edgar Godoy ascendió a la jefatura del EMDN; el coronel Francisco Ortega Menaldo (el más fuerte representante de la *Cofradía*) pasó a ser jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP); el general José Domingo García Samayoa fue ascendido a la subjefatura del EMDN; el general José Luis Quilo Ayuso (comandante en Chimaltenango y Suchitepéquez durante el resurgimiento guerrillero) pasó al Cuartel General; el general Jorge Roberto Perussina fue trasladado de la comandancia de Petén (donde había iniciado una ofensiva antiguerrillera hacía unos meses) al Mariscal Zavala; el general Marco Antonio González Taracena dejó la PMA y se hizo cargo de la Dirección de Inteligencia; el coronel César Augusto Cabrera dejó la D-2 y fue transferido como subjefe de la Zona Militar de Suchitepéquez.

8 El 7 de diciembre el presidente cesó al ministro de la Defensa y al jefe del EMDN y ascendió a los generales García Samayoa y Perussina. En 17 de las 22 comandancias militares hubo cambios de alto nivel.

hecho en el segundo semestre de 1990, volvió a decir que no podía firmar compromisos con un gobierno que carecía de capacidad para cumplirlos. En tanto, el Ejército continuaba con su ofensiva para desgastar los frentes guerrilleros.

El gobierno de Serrano logró sin embargo avances importantes en el terreno internacional. Pudo consolidar el Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz (México, Venezuela, Colombia, España) y desarrolló una agresiva política exterior con Antonio Arenales Forno en Ginebra, Edmond Mulet en Washington y Fernando González Davison en Roma. Pero, en este contexto, la elección en los Estados Unidos del presidente demócrata Bill Clinton influyó negativamente en la apuesta militarista de la cúpula militar. La embajada de los Estados Unidos, que había venido interviniendo y presionando en casos como el de la monja Dianna Ortiz, la antropóloga Myrna Mack y el estadounidense Michael Devine, comenzó a intervenir directamente en apoyo de las organizaciones que defendían los derechos humanos. Entendiendo por fin que los plazos se acortaban y que el tiempo jugaba en su contra, la cúpula del Ejército trazó una estrategia para revertir esta situación en 1993 o interrumpir el proceso.

La ofensiva del Ejército *Victoria 93* lanzada especialmente contra la retaguardia del EGP, pretendía desestabilizar las unidades militares permanentes guerrilleras buscando afectar a los mandos insurgentes o lograr información estratégica, como hizo en 1992 con la retaguardia de la ORPA. Pero la campaña militar se vio limitada por el retorno de refugiados y la salida de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), dos procesos que habían logrado atraer la atención internacional.

Esta ofensiva se acompañó de una nueva propuesta de Serrano ante las Naciones Unidas el 14 de enero, en la que ofrecía un plazo terminante de 90 días, aceptando la verificación de los compromisos por parte de las Naciones Unidas e incluso reconociendo totalmente la beligerancia de la URNG, al proponer su repliegue en zonas previamente determinadas. Serrano levantó este plan en medio de una coyuntura internacional compleja, pues si bien el gobierno había logrado mejorar los respaldos internacionales, especialmente con la formación del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz, las presiones en materia de derechos humanos y otros factores, como la concesión, en diciembre de 1992, del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, el Premio Nobel Alternativo a Helen Mack y el inicio del retorno de los refugiados condicionaban fuertemente a su gobierno.

La URNG se limitó a ofrecer un cese al fuego inmediato, replanteando su plataforma antimilitarista, a la vez que presionaba para que la discusión volviera a los complejos *temas sustantivos* acordados en Querétaro. Ya para entonces la URNG sostenía reuniones oficiosas con representantes de la DC y seguía esperando que el alargamiento del proceso acabara de derribar la fragilidad de los planteamientos gubernamentales. Eso ocurrió el 25 de mayo cuando el presidente Serrano, apoyado por la cúpula militar, intentó derrocar la misma institucionalidad instaurada por el Ejército en 1984.

3. Haciendo la guerra

La salida del general Gramajo y la llegada del general Juan Leonel Bolaños al Ministerio de la Defensa, así como del general Roberto Mata a la jefatura del

EMDN, no representó un cambio sustancial en la política militar. Dio la impresión de que mientras los cargos oficiales eran ocupados por fieles seguidores de la tesis de la Estabilidad Nacional (incluso el equipo de guerra internacional y psicológica del Estado Mayor del ministro de la Defensa, al parecer, continuó sin muchos cambios), la práctica seguida por el Ejército era delineada por los acuerdos de la Junta de Comandantes. Mientras la guerrilla incrementaba substancialmente sus operaciones ofensivas, el Ejército siguió mostrando escasa iniciativa en el terreno militar, en tanto que se centraba en la *guerra sucia* contra el movimiento social.⁹

En el primer semestre de 1991, tras la llegada del nuevo gobierno, estando aún fresco el impacto de la masacre de Santiago Atitlán (diciembre de 1990) y la comunidad internacional alertada por el carácter conservador del nuevo mandatario, se mantuvo la misma tónica. A pesar de las promesas del nuevo presidente de que emprendería una lucha abierta contra la impunidad, los puestos clave de la Policía Nacional siguieron bajo control militar, y se produjeron crímenes intimidatorios relevantes, como el de la dirigente política Dinorah Pérez y el religioso Moisés Cisneros. En el campo militar la guerrilla lanzó una ofensiva unitaria en sus frentes tradicionales, en la que destacaron los frecuentes ataques en el norte de Alta Verapaz y sur del Petén, al oleoducto entre Chisec y Fray Bartolomé de las Casas; una fuerte campaña de propaganda armada en Huehuetenango y un ataque en Villacanales, a sólo 36 kilómetros de la capital. El Ejército no presentó más respuesta que la continuación de las intimidaciones y crímenes en el área rural y el inicio de una campaña de *guerra psicológica* con la presentación en mayo de 54 guerrilleros del EGP y las FAR que supuestamente se entregaron acogiéndose a la amnistía.

A partir de junio el Ejército retomó la iniciativa y lanzó una campaña militar contra las áreas Ixil e Ixcán y dio inicio en Petén el operativo *Lacandona 91* contra el narcoterrorismo, dirigido por el general Roberto Perussina y apoyado por el coronel Homero García Carrillo desde el DIDE. A partir de entonces, y hasta 1993, se produjeron los enfrentamientos más fuertes entre la guerrilla y el Ejército desde la llegada del gobierno civil. El 21 de julio el Ejército bombardeó el área próxima a Cuarto Pueblo, cuando una comisión multipartita intentaba visitar a las CPR del Ixcán.

Mientras, la guerrilla continuaba con los atentados contra el oleoducto y ocupaba Pueblo Nuevo Viñas, en Santa Rosa. En agosto la guerrilla afirmó haber derribado un helicóptero en el cerro Tziazá, en Chajul, y dinamitó el puente sobre el río Chixoy frente a la Base Militar de Playa Grande. El 30 de ese mes los insurgentes ocuparon la cabecera de Escuintla. La guerra siguió sintiéndose esporádicamente en la ciudad cuando en agosto la URNG atacó con lanzacohetes RPG-7 un puesto policial en la zona 13 de la ciudad y el Ejército emprendió un amplio operativo de control de las áreas marginales de la capital. En el suroccidente del país, el Ejército creó la Fuerza de Tarea Quetzal con sede en Santa Ana Berlín con el propósito de lanzar fuertes ataques contra la retaguardia de la ORPA, dotando de movilidad a sus batallones especiales con el uso de vehículos artillados capaces de desplazar en una noche a 300 soldados a 50 kilómetros de distancia.

9 La llegada de coronel César Augusto Cabrera a la D-2, de Ortega Menaldo a la PMA y del coronel Julio Caballeros a la dirección de la Policía Nacional, coincidió con la época de mayor represión del gobierno de la DC.

Este esfuerzo militar del Ejército contra los frentes tradicionales de la URNG no logró resultados espectaculares, en la medida en que las fuerzas guerrilleras habían desarrollado en los últimos cinco años una cierta capacidad de maniobra y coordinación, manejando unidades de 100 combatientes en operaciones combinadas que hacía inútiles los esfuerzos del Ejército para fijar las posiciones guerrilleras. Por otro lado, el uso intensivo de alto poder de fuego y el intento de controlar a la población en las áreas de conflicto aumentó las violaciones de los derechos humanos, que rápidamente atrajeron la atención de los observadores internacionales. Finalmente la guerrilla concentró efectivos seleccionados de todas sus organizaciones en el Frente Unitario Central, que operaba en la estratégica zona de la bocacosta. En la ciudad, en el segundo semestre de 1991, continuó agudizándose la campaña de crímenes intimidatorios que ya se había iniciado al poco tiempo de asumir el gobierno Serrano Elías. En agosto destacaron los ataques a la prensa internacional (*NOTIMEX* e *IPS*) y en octubre se terminó de perfilar el mecanismo de control militar de la Policía Nacional, con el nombramiento del teniente coronel Luis Fernández Ligorria como subdirector con control operativo.¹⁰

Esta línea ofensiva militar del Ejército se vio acentuada cuando en enero de 1992 llegaron al Ministerio de la Defensa el general José Domingo García Samayo y a la jefatura del EMDN el general Roberto Perussina. El ministro de la Defensa afirmó que *militarmente* la guerrilla no existe, pero la nueva cúpula del Ejército planteaba que aunque no podían ganar la guerra en el corto plazo ni tampoco la podían prolongar indefinidamente, sí era factible endurecer la presión militar sobre la guerrilla y dejar abierta la puerta del diálogo para desgastarla políticamente, más que como mecanismo para llegar a un acuerdo político.

Probablemente los mayores combates en los últimos diez años de guerra se dieron en la zona de la bocacosta y la costa sur durante 1992, donde el Ejército lanzó una fuerte ofensiva contra la retaguardia de la ORPA, precisamente en el momento en que esta organización concentraba su actividad militar en Escuintla y Palín. La campaña militar contra el frente de la ORPA combinó las operaciones de patrullaje y persecución militar con las de guerra psicológica e inteligencia, buscando capturar vivos a guerrilleros para obtener información o presentarlos a la opinión pública como arrepentidos y derrotados.¹¹ Esta táctica se desarrolló intensamente en el período del presidente Serrano Elías y logró afectar, aunque no desarticular, a las unidades militares de la ORPA.

10 En agosto fue asesinado, a 50 metros del cuartel de la Policía Nacional, el jefe de Homicidios José Miguel Mérida Escobar, quien había dirigido la investigación del caso Myrna Mack.

11 La campaña psicológica tuvo un desarrollo incierto. En enero de 1992 el coronel Julio Yon Rivera, nuevo director del Departamento de Información y Divulgación del Ejército (DIDE) presentó a varios supuestos guerrilleros que se entregaron, pero el Procurador de los Derechos Humanos demostró que habían sido capturados. En marzo se acogió a la amnistía el ex-miembro de las FAR, Danilo Rodríguez. En julio el EMP secuestró a Maritza Urrutia y la obligó a grabar una declaración inculpatória. En octubre arreciaron los ataques contra la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG). En enero de 1993 el Ejército presentó algunos documentos que pretendían demostrar que el jesuita Ricardo Falla era comandante guerrillero.

La ofensiva tuvo su respuesta guerrillera. En los primeros cuatro meses de 1992 la ORPA realizó ataques, tomas y emboscadas en Escuintla, Quezaltenango, Retalhuleu y San Marcos. El ministro de la Defensa anunció, en los últimos días de abril, una ofensiva en la que iban a emplear a las PAC. A partir de esas fechas el enfrentamiento bajó de intensidad, reportándose esporádicamente algún incidente como cuando en julio el Ejército informó haber matado una mujer mexicana en combate con la guerrilla en San Juan Ostunalco, Quezaltenango, o cuando en noviembre la guerrilla atacó con lanzacohetes la finca y residencia presidencial en Santo Tomás. La URNG mantuvo cierta actividad hasta que en febrero de 1993, después de que el presidente replanteara el proceso de negociación y el Ejército lanzara su ofensiva *Victoria 93* contra la retaguardia del EGP, se produjo un repunte de la actividad guerrillera.

La campaña *Victoria 93* estuvo al mando de los coroneles Víctor Manuel Argueta y Francisco Marín Golib en el norte de El Quiché y sur del Petén. Su propósito no era consolidar control territorial o instalar posiciones militares en el área de movimientos de la insurgencia, sino evitar que las fuerzas del EGP pudieran agruparse para emprender ataques guerrilleros de envergadura.¹²

La guerrilla había mostrado durante el segundo semestre de 1992 una actividad relativamente baja. En primer lugar por tener que pasar a la defensiva frente a la permanente iniciativa militar del Ejército, la cual además acertó a concentrar sus esfuerzos en la costa sur, donde la URNG pretendía articular el Frente Central Unitario. Pero además, el desarrollo de las negociaciones y el creciente protagonismo de los sectores civiles, en el retorno de los refugiados y las campañas por la paz y contra la impunidad, introdujeron contradicciones en las organizaciones guerrilleras. La URNG unificó sus posiciones afirmando que la presión militar era la única que podía garantizar resultados en una negociación y que el desarme sólo se produciría en el momento en que se verificara el cumplimiento de todos los compromisos; pero, durante 1992, perdió buena parte de la capacidad ofensiva que había desarrollado en 1990 y 91, y empezó a mostrar problemas graves de reclutamiento.

La política de represión iniciada en 1991 por el gobierno del presidente Serrano Elías siguió en 1992 y 1993, con una tendencia a aumentar los actos intimidatorios, los atentados selectivos y las amenazas indirectas contra dirigentes de la sociedad civil, en la medida en que iban tomando mayor protagonismo. Durante esta etapa destacó el intento del Ejército de someter y controlar el poder judicial, lo cual provocó un debate y un movimiento cívico contra la impunidad, que finalmente colocó a los militares a la defensiva. En algunos momentos de extrema tensión, la política represiva se vio acompañada de campañas desestabilizadoras con la colocación indiscriminada de bombas en

12 El Ejército había lanzado varias campañas militares contra la zona de guerra en El Quiché. En 1992 fue nombrado comandante de la Zona Militar el coronel Mario Rolando Terraza Pinot, un oficial de línea guerrillero que sin embargo había fracasado en su paso por la Zona de San Marcos en los momentos de mayor actividad de la ORPA. Terraza inauguró su jefatura anunciando que la guerrilla pretendía crear una zona liberada en el norte de El Quiché y pedir reconocimiento internacional. La mayoría de las operaciones militares se centraron en hostigar a las CPR sin que el Ejército, durante dos años, lograra mostrar éxitos militares comparables a los alcanzados en el combate a la ORPA unos años atrás.

la ciudad, especialmente en abril de 1992 y 1993. En el campo disminuyeron los hostigamientos y crímenes contra la población sospechosa de ser favorable a la guerrilla (especialmente las CPR y campesinos del Petén y Suchitepéquez), pero el Ejército continuó usando a las PAC, ya no como escudo militar, sino como un instrumento para dividir a la población en las áreas de disputa. En zonas como el sur de El Quiché los patrulleros, y ya no el Ejército, cometieron múltiples violaciones contra la población rural.

4. Un entorno inseguro

A partir de 1990 el entorno internacional se volvió, cuando menos, incierto. El desplome de los países socialistas europeos, la derrota electoral del Frente Sandinista, la derrota de la ofensiva de la guerrilla salvadoreña y las nuevas medidas de bloqueo contra el régimen de Cuba, alentaban a las posiciones más extremistas de la derecha sobre su triunfo histórico. Sin embargo también era previsible que estaba surgiendo un nuevo marco de relaciones internacionales, como comenzaron a indicar en septiembre los resultados de la cumbre de Malta, con el inicio de una nueva fase en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Fue en este contexto en que, imprevisiblemente, la guerrilla guatemalteca logró un salto en el desarrollo de la guerra, pasando de emboscadas a ataques a puestos fijos del Ejército y desarrollando acciones en los departamentos más próximos a la capital y a la zona agroexportadora, como Escuintla o Santa Rosa. También inició una campaña contra objetivos económicos, como las torres de distribución de la energía eléctrica o algunos puentes que resultaban estratégicos para la agroexportación.

Todo parece indicar que, aparte de las presiones internacionales para desactivar el conflicto armado en Guatemala, tanto el Ejército como el gobierno y en buena medida el sector empresarial valoraron erróneamente la situación de la guerrilla, considerando que sus propuesta de diálogo correspondían a una situación de aislamiento internacional y debilitamiento político. Sólo esto parece explicar la actitud del sector empresarial cuando acudió en agosto a reunirse con la URNG. Previamente tuvieron una reunión con el ministro de la Defensa, general Juan Leonel Bolaños, en la que éste les transmitió la posición del Ejército: el diálogo con la guerrilla únicamente tenía sentido como un mecanismo para aumentar su aislamiento interno e internacional. Así, los empresarios acudieron a Ottawa con un estudio recriminatorio sobre los daños que la guerrilla había causado a la economía del país. Por su parte, la guerrilla se limitó a advertir a los empresarios que en el futuro emprendería acciones militares contra objetivos económicos.

Además, el tema de los derechos humanos comenzó a tomar un giro imprevisto. Pero fue en julio, cuando varias organizaciones de derechos humanos pidieron al ex presidente Carter que promoviera en los Estados Unidos la suspensión de toda la ayuda a Guatemala por la persistente violencia política, cuando el sector empresarial comenzó a comprender el costo que podía tener el empinamiento del Ejército al intentar exterminar las posibilidades políticas de

la guerrilla machacando al movimiento popular. A pesar de ello no hubo grandes iniciativas empresariales para intervenir en uno de los años más negros en materia de violación de los derechos humanos desde que llegara el gobierno civil.

5. Palos de ciego

Una de las hipótesis más confirmadas por la historia de la violencia en Guatemala es aquella que advierte que cuando el contexto internacional presiona excesivamente, el Ejército aprieta el lazo interno, en lugar de ceder a las presiones. Otro supuesto confirmado es que cuando se comienza a acercar el momento de la negociación más se endurecen las posiciones de las partes. Probablemente cruzando estas dos hipótesis podría hallarse una explicación de contexto para la inaudita violencia que se registró en el año 1990, en la que las fuerzas de la represión golpearon a diestra y siniestra pareciendo que pretendían crear una situación de pánico generalizado.

El año se inició con una marcha organizada por la UASP contra la carestía de la vida que agrupó a unos 10,000 manifestantes. Pero el movimiento popular estaba en un ciclo de reflujo. Cuando el CUC llamó nuevamente a una huelga general en la costa sur, ya no tuvo la acogida que había tenido el año anterior. Igualmente frustrante resultó el desenlace de la huelga de los trabajadores de la histórica empresa de CAVISA, que ocuparon durante varios meses la planta en la negociación del pacto colectivo hasta que fueron desalojados el 3 de junio sin que se produjera solidaridad por parte del resto del movimiento sindical. De hecho la dirigencia popular de la UASP estuvo absorbida por sus negociaciones con el gobierno, las cuales fueron abandonadas por éste en marzo. En cualquier caso, el gobierno se despidió en vísperas electorales aprobando un salario mínimo en el campo de Q10 y una Ley de Prestaciones por Tiempo Servido que recogía la mayoría de las reivindicaciones sindicales.

Pero antes parecía que se había producido un fuerte desarme del liderazgo del movimiento popular. El líder de la CUSG, Alfaro Mijangos, se había presentado como candidato a diputado en la lista de la UCN y otros dirigentes aparecieron en las listas electorales de la Democracia Cristiana. Por otro lado, la tercera Conferencia Sindical de UNSITRAGUA decidió *llegar a acuerdos con el sector privado para evitar la desestabilización del proceso democrático*. Meses después se producía un aumento del 100% del precio del transporte urbano en la capital, sin que se registrara reacción del movimiento popular. Todo esto en un año que resultó especialmente dramático para la economía de la población.

El tremendo desajuste estructural en materia social se vio acompañado de una cruel ola de violencia política que además de centrarse en las áreas de conflicto se ensañó especialmente contra dirigentes y activistas de algunas organizaciones populares e incluso en algunos casos alcanzó a personas extranjeras, como el caso del asesinato del político salvadoreño Héctor Oqueli en enero, el del empresario estadounidense Michael Devine en junio, la detención de cuatro religiosas extranjeras en Antigua y las torturas contra la monja ursulina Dianna Ortiz en diciembre.

6. Llega la globalización

El triunfo de Serrano Elías planteó inmediatamente a los grupos de poder (el Ejército y los empresarios) el problema de su debilidad política, que resultaba desestabilizadora e inapropiada para establecer objetivos a medio plazo en una coyuntura tan desafiante en lo nacional y en lo internacional.

Ya en el momento electoral algunos altos oficiales del Estado Mayor del ministro de la Defensa (que fundamentalmente seguían siendo los que trabajaron en la línea de la Estabilidad Nacional de Gramajo) iniciaron su aproximación a los sectores empresariales, advirtiéndoles que la aplicación de un programa de ajuste y estabilización de la economía (como los empresarios demandaban) podía crear fuertes tensiones o estallidos sociales conduciendo a la ingobernabilidad del país.

Frente a este peligro, y ante la debilidad del sistema político, el Ejército se presentaba como el único garante de la estabilidad política. Algunos sectores empresariales modernizantes empezaron a crear puentes con esta corriente militar (el término con que generalmente se les designó fue el de *militares constitucionalistas*, distinguiéndolos de aquellos otros que estaban dispuestos a romper las reglas de juego institucionales si la situación se les volvía crítica). Pero estos sectores empresariales aportaban sus propios argumentos en el sentido de que también el Ejército debía entrar en la lógica del ajuste del sector público, suprimiéndose por ejemplo los gastos confidenciales y las transferencias presupuestarias que los militares usaban para extraer fondos públicos adicionales, o sacando a los militares de cargos en la administración pública.

El nuevo presidente incorporó a destacados representantes del poder económico a su gobierno.¹³ En sus primeros meses de administración, el presidente Serrano argumentó que arrastraba una deuda flotante del período anterior de Q800 millones y un déficit fiscal que sumado a las pérdidas cambiarias del Banco de Guatemala representaba el 5% del PIB, e intentó negociar con el sector empresarial una reforma tributaria que le permitiera iniciar un programa de atención social en el interior del país, ya no con la política de grandes estrategias desarrollistas, sino creando mecanismos de intervención en áreas estratégicas a través de los Fondos de Inversión Social y cediendo espacios de las funciones sociales del Estado a la iniciativa empresarial.¹⁴

Posteriormente el gobierno negoció con el sector privado la emisión de bonos por Q1,700 millones para atender sus compromisos de pago con el exterior, y una reforma tributaria (Decreto 59/91 Ley del Impuesto Extraordinario y de Emisión de

13 Entre ellos a Federico Linares en el Banco de Guatemala; Richard Aitkenhead, cercano a los azucareros, en Economía; Álvaro Colom, proveniente de la Gremial de Exportadores no Tradicionales; Álvaro Heredia, del PAN, en Comunicaciones; Adolfo Boppel, de la UNAGRO, en Agricultura; Mario Bendfeldt en Desarrollo y Alfonso Rodríguez Anker en el Instituto de Electrificación (INDE).

14 Igual que Cerezo en 1986, Serrano inició su mandato solicitando a los empresarios un aumento en la recaudación de Q600 millones a cambio de reducir el sector público en un 10%. Para negociar esto se creó una comisión empresarios-gobierno para analizar las reglas del juego a partir de tres puntos: salarios, impuestos y precios. Como resultado, inmediatamente se liberalizaron todos los precios y se retiró del Congreso la Ley de Prestaciones por Tiempo Servido.

Bonos de Emergencia) que debería dar Q1,000 millones al fisco. Como contrapartida el sector empresarial confiaba en que el manejo de estos valores públicos en manos de los empresarios, mejoraría sus posiciones para negociar la privatización del sector público en el mediano plazo. La emisión de CENIVACUS a tasas de interés de 33% en 180 días, encareció el crédito productivo, pero también atrajo los capitales que estaban depositados en el exterior. En efecto, la respuesta empresarial fue fulminante: en tres meses repatriaron capitales para invertir con garantías de rendimiento cinco veces superiores a los que obtenían en los Estados Unidos. Así las reservas monetarias llegaron a los US\$500 millones, aunque deducían intereses anuales superiores al 30%.

No tuvo igual acogida sin embargo la propuesta para aumentar la recaudación fiscal. En marzo el gobierno inició un programa de Modernización Tributaria con el objetivo de alcanzar una tasa del 10% del PIB. El Decreto 59-91 preveía una emisión de bonos obligatorios que debía representar el 2% de las utilidades de las empresas, con amortización a diez años a una tasa de interés del 8%. La banca privada debería asumir Q120 millones de los de Emergencia, o sea, el 2% de sus ganancias.

La Ley fue aprobada finalmente en julio, después de que el CACIF presionara a los diputados para limitar el alcance de la recaudación a sólo Q500 millones. Aún así, en 1991 los ingresos tributarios crecieron un 30%. Como respuesta el gobierno, que ya había anticipado una amnistía fiscal, anunció una Ley extraordinaria de Regulación Tributaria que proveería otros fondos, y finalmente en abril de 1992 el Congreso aprobó un paquete de leyes de Modernización Tributaria (IVA, ISR y Papel y Timbres) que pretendía también ampliar la base imponible.

La falta de una respuesta fiscal más sólida frustró los propósitos del gobierno de poner en marcha un plan de compensación social. Apenas instalado el gobierno se había comprometido a aumentar la inversión pública hasta en Q1,300 millones, pero en el primer trimestre el gobierno sólo destinó Q90 millones. En 1992 se agravó la situación. Al 31 de julio el gobierno había invertido únicamente el 1% de lo presupuestado para educación y el 4% en salud. A finales de año los ministerios de inversión social habían ejecutado únicamente Q42 millones de los Q2,276 millones que tenían presupuestados. Poco antes de las elecciones municipales de 1993, un centenar de alcaldes ocuparon la Catedral Metropolitana exigiendo que les entregaran el 8% del presupuesto del último trimestre de 1992 y el primero de 1993.

Claro que en el tema del gasto social resultó de gran importancia la incapacidad del gobierno para destrabar las puertas del financiamiento internacional. En este sentido, el equipo del presidente Serrano mantenía el criterio de que en la medida en que el plan de estabilización económica lograra las metas planteadas, los organismos internacionales liberarían fondos para aplicar un plan social compensatorio. Precisamente en aquella coyuntura se produjo un cambio de orientación en los organismos financieros internacionales, poniendo más énfasis en las reformas estructurales. En la medida en que el plan económico que el presidente Serrano comprometió con los empresarios no tenía previstas estas reformas, los financiamientos no fluyeron como se esperaba. Únicamente en octubre de 1991 el gobierno logró un crédito del BID por US\$19 millones y en

1992 el ministro de Finanzas logró el acuerdo *stand by* y un préstamo del Banco Mundial por US\$150 millones, dirigidos a un Plan de Modernización Económica (reforma tributaria y democratización del sistema financiero) y otro de Desarrollo Social (FIS y FONAPAZ).

Al igual que se puede decir que en el período 1990-93 la población experimentó un retroceso en sus indicadores sociales del que todavía no se ha recuperado, igualmente la economía sufrió un fuerte freno. De hecho el gobierno logró contener inmediatamente la inflación mediante la depresión del consumo y una política de recesión muy fuerte.

7. La batalla de la privatización

Después de los desgastantes enfrentamientos con el gobierno de Vinicio Cerezo, la cúpula empresarial logró imponer sus planteamientos con sorprendente facilidad. El sector empresarial negoció con el nuevo gobierno ganando una serie de medidas previas a la aplicación del plan de estabilización económica. El gobierno liberó los precios tope antes de bajar los aranceles por presión de los industriales y motivó el alza de las tasas de interés por presión del sector financiero, antes de exigir o plantear una efectiva regulación o modernización. También aceptó retirar de la discusión en el Congreso la Ley de Compensación por Tiempo Servido. El acuerdo fue lograr el ajuste monetario sin recurrir a reformas estructurales.

El gobierno, fuertemente presionado por el presidente del banco central, Federico Linares, privilegió a los sectores del capital financiero, en detrimento de los industriales, agrícolas y comerciales. Ello significaba premiar a los grupos que habían logrado prepararse para salir airosos en las nuevas reglas de juego económico. El complejo mundo empresarial, que en la época de oposición a Cerezo había logrado una homogeneización digamos ideológica (todos los empresarios contra el gobierno), comenzó a reagruparse en función de intereses corporativos de poder. La crisis internacional de los precios del café contribuyó a desplazar el poder histórico de este grupo, ubicándolo en las filas de los opositores al gobierno.

Paralelamente surgieron nuevos mecanismos de formación de capital. El narcotráfico encontró un terreno propicio para el lavado de grandes capitales utilizando las condiciones favorables para la importación de capitales y su colocación en bonos del Estado. También en el sector de la construcción y en el comercio de importación (fuertemente corrompido desde la estructura de la aduana pública) pudieron crear redes de movimiento ilegal de capitales. La misma DEA estadounidense estimó que entre los US\$1,000 millones que los empresarios guatemaltecos repatriaron en 1991, al menos US\$300 millones procedían del narcotráfico.¹⁵

15 Para entonces el narcotráfico ya era un negocio floreciente. Según la DEA el promedio de vuelos mensuales de los narcotraficantes era de 145, utilizando las 600 pistas privadas de aterrizaje en la costa sur.



Manifestación de sindicatos públicos frente al Palacio Nacional. (Foto Revista Crónica).

Las expectativas en los beneficios de la privatización del sector público mantuvieron cohesionado al sector empresarial en este período. De hecho éste había sido uno de los compromisos implícitos en el apoyo que recibió el gobernante en los inicios de su mandato. Pero el Presidente, a pesar de que en los primeros meses de gobierno creó una Comisión de Privatización bajo la coordinación de Juan Luis Mirón, fue dejando pasar tiempo al descubrir todos los intereses que entraban en juego, como en el caso de las telecomunicaciones, aunque la prioridad en la privatización resultó siendo la generación de la energía eléctrica.

Simultáneamente el Ejército, a través del jefe de EMP, fue aumentando su influencia en la Presidencia¹⁶ en la misma medida en que el propio Serrano comenzaba a mostrarse interesado en participar en las operaciones de privatización. En agosto de 1992 se iniciaron, en medio de constantes aumentos del costo de la energía, las obras de las barcazas generadoras de energía de la empresa ENRON en Puerto Quetzal, en las que participaba el director del INDE, Alfonso Rodríguez Anker, un empresario vinculado al negocio energético. Un año después, el 17 de marzo de 1993, el gobierno publicó el Acuerdo Gubernativo desmonopolizando las actividades de generación de energía eléctrica. Para entonces el involucramiento del Presidente y su círculo más próximo en el negocio de la generación de energía ya era un asunto público. El Congreso acusó de corrupción al director del INDE, Rodríguez Anker. Una

16 Significativamente los recursos que alimentaban al EMP aumentaron. En el presupuesto para 1992 los gastos confidenciales ascendieron a Q50.4 millones y los gastos de la Presidencia a Q209 millones.

semana después, el influyente diputado Obdulio Chinchilla sufría un atentado grave cuando estaba negociando precisamente el apoyo de los diputados al proyecto gubernamental, y días después el propio presidente Serrano suspendía el Congreso y suprimía varios derechos constitucionales en lo que fue llamado el autogolpe de Estado.

8. Las luchas por el poder

El negocio de la privatización del sector eléctrico no fue el único tema que precipitó la crisis final del gobierno de Serrano Elías. Varios sectores de la cúpula empresarial analizaron en 1991 el error del *Grupo Pirámide* al apoyar a Serrano y comenzaron a preparar sus propios liderazgos políticos manejando el concepto de *sociedad civil*. José Rubén Zamora (editor del periódico *Siglo Veintiuno*), el grupo *Crónica*, Dionisio Gutiérrez, Alejandro Botrán y Juan Luis Bosch, pensaban que bien podrían ser los Cristiani de Guatemala, máxime con un sistema político partidista tan frágil que había permitido el triunfo de Serrano.

Las propuestas que el presidente lanzó al comienzo de su mandato —concertación social, lucha contra la impunidad y negociación de la paz— no incluían mayores contenidos políticos, pero servían para aplazar las presiones internacionales y ganar tiempo frente a las tensiones internas. Los empresarios iniciaron las presiones políticas sobre el mandatario desde el momento de la misma toma de posesión. Obligaron al gobierno a romper su alianza de transición con la Democracia Cristiana y a procesar a varios funcionarios. Las acusaciones de corrupción quedaron en manos del Procurador de la Nación, Acisclo Valladares, y se centraron en los organismos a privatizar (INDE, GUATEL, BANVI, INTA, Aduanas). También exigieron y lograron la disminución de las tasas pasivas de interés, para aliviar sus propias tensiones internas. Asimismo el CACIF presionó a los diputados para que redujeran en un 20% el valor de los bonos de emergencia por Q700 millones.

Además de esta permanente presión política, el sector empresarial fue adoptando una postura propia frente al diálogo con la guerrilla, que ahora parecía avanzar. El CACIF y la AGA presionaron para que el gobierno no se sentara a negociar con delincuentes. El sector empresarial mantuvo una postura igualmente intransigente con el tema de los derechos humanos. Frente a las crecientes presiones internacionales, especialmente del Congreso y el Senado de Estados Unidos, en enero de 1992 el presidente del CACIF, Luis Alberto Reyes Mayén, acusó de malos guatemaltecos a quienes denunciaban la situación de los derechos humanos, ya que perjudicaban los intereses comerciales del país. A mediados de 1992, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llegó a solicitar que se condicionara cualquier tipo de ayuda a Guatemala al respeto a los derechos humanos. A esta presión se unían las denuncias por narcotráfico, que afectaban a algunos militares, y un recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos y hostigamientos a la prensa y a sectores de la sociedad civil, que provocaron la renuncia del ministro de Gobernación. Fue en este momento que los sectores civilistas del empresariado reforzaron su hostigamiento político al presidente.

Realmente el primer tema crucial de este enfrentamiento se dio en enero de 1992, después de que el Congreso eligiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombrara presidente al diputado Juan José Rodil Peralta. Esta resolución era resultado de una alianza entre la UCN, el MAS y la DC que devolvía a Serrano el control del poder legislativo, lo cual aumentaba su margen de maniobra para legislar en los dos temas que ya se estaban volviendo polémicos: la reforma tributaria y la privatización. El instrumento utilizado para esta campaña fue el de los medios de comunicación, especialmente el diario *Siglo Veintiuno*, en el que tenían representación los sectores económicamente más poderosos. Así, comenzaron a aparecer en la prensa las denuncias de enriquecimiento del vicepresidente Gustavo Espina (compra de Metro Norte y de una finca por US\$7 millones) y del presidente Serrano Elías (compra de la finca La Candelaria por Q8 millones, otra en Taxisco por US\$14 millones, compra de tierras en Río Dulce, Izabal), mientras el Procurador General lanzaba las acusaciones contra diputados por narcotráfico y contrabando. A pesar de que el Congreso declaró sin lugar el antejuicio contra el diputado Elder Vargas por narcotráfico, poco después el Procurador General de la Nación inició antejuicio contra el diputado Obdulio Chinchilla por tráfico de carros robados.

Ante la debilidad política del Presidente y los desafíos del movimiento civil, el Ejército reforzó el control gubernamental a través del EMP, especialmente a partir de diciembre de 1992, cuando el Presidente subió a la cúpula el equipo de José Domingo García Samayoa y Roberto Perussina, este último jefe del EMDN e íntimo amigo del general Francisco Ortega Menaldo, jefe del EMP. Significativamente los fondos confidenciales de la Presidencia, manejados por su EMP, pasaron de Q209 millones a Q303 millones en 1993. Frente a un gabinete sin cohesión y extremadamente débil, el EMP se convirtió en la institución ejecutiva que controlaba y realizaba los aspectos estratégicos de la política gubernamental y garantizaba al resto de la institución militar el control del poder civil.

Pero este papel terminaría revirtiéndose contra la institución en 1993 cuando, frente a los desafíos de la sociedad civil, el EMP comenzó a aparecer públicamente como un organismo que asesinaba a opositores, tenía cárceles clandestinas, amenazaba a líderes empresariales y a directores de los periódicos, conspiraba contra el Ministerio Público, atentaba contra políticos opositores e incluso controlaba la correspondencia de importantes instituciones del Estado.

En tanto, el presidente Serrano iba imponiendo su poder personal sobre el resto de las instituciones políticas. En octubre de ese año, con el beneplácito de la Corte de Constitucionalidad y del Estado Mayor de la Defensa, el Presidente reconoció la independencia de Belice. En noviembre fue elegido presidente del Congreso el demócrata-cristiano José Lobo Dubón con el apoyo de la UCN y el MAS, después de reformar la Ley de Régimen Interior; en seguida el Congreso conoció un proyecto de reformas a la Ley del Organismo Judicial que aumentaba los poderes del Presidente de la Corte Suprema.

En 1993 creció el enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno. Federico Linares, presidente del banco central, y Juan Luis Mirón, ministro de Economía, dimitieron en enero. Apenas llegado a la Presidencia del Banco de Guatemala, el demócrata-cristiano Lizardo Sosa anunció un incremento del

encaje bancario, pero el sector privado se opuso y la Junta Monetaria no la autorizó. El presidente Serrano siguió tomando medidas para presionar a los empresarios. Se conoció públicamente un proyecto de Ley de Emisión del Pensamiento que recortaba la libertad de prensa y en junta de gabinete del día 25 se acordó conceder el canal 9 de televisión al Ejército, lo que provocó la inmediata reacción del sector empresarial.

Hasta el momento, y principalmente debido a la reacción autocrática del presidente Serrano, el sector empresarial estaba logrando, gracias a su política agresiva en los medios de comunicación, colocarse a la cabeza de la sociedad civil y de sus protestas frente al poder Ejecutivo. Sin embargo, en abril, a raíz de las elecciones municipales, la Democracia Cristiana anunció un programa populista y de convergencia nacional y decidió romper la alianza en el Congreso con la UCN y el MAS, con lo cual el gobierno perdió el control del legislativo, de la Corte Suprema de Justicia, de la Junta Monetaria y de la Corte de Constitucionalidad. Su único aliado estable era el alto mando militar. Cuando en las elecciones municipales el partido del gobierno logró una importante victoria, el Presidente se sintió con la fuerza política para intentar disolver el Congreso, y se precipitó en el golpe e Estado.

Además de los intereses ocultos que se manejaban en la privatización de la energía eléctrica, otro probable motivo que llevó a que Serrano tomara esta medida fue la insoportable presión del sector empresarial, ya que la demanda de divisas pasó de US\$14 millones a US\$27 millones en los días previos al golpe y la caída de ingresos fiscales era claramente predecible. Por otro lado, una parte del sector empresarial había logrado articular una confluencia de intereses con altos jefes militares, como se evidenciaría en el desarrollo de los acontecimientos de mayo-junio de 1993. Simultáneamente un grupo de los mandos militares, que habían jugado un papel significativo en el planteamiento de la doctrina de la Estabilidad Nacional en tiempos de Gramajo, inició una aproximación a los sectores empresariales, profesionales y políticos, cuestionando la línea del Alto Mando. En este grupo destacó especialmente el coronel Otto Pérez, director de la D-2.

9. Las otras sociedades civiles

Durante el mandato del presidente Serrano la sociedad civil experimentó un notable desarrollo. La lucha contra las violaciones de los derechos humanos, que hasta entonces mantenían en un perfil creciente pero controlable, experimentó un desarrollo impresionante al pasar de las denuncias y protestas de algunos grupos locales a acciones concertadas en el terreno internacional, demostrando mayor agilidad para percibir e incorporar los cambios en la geoestrategia regional.

Las mismas propuestas formales del Presidente para acabar con la impunidad (que se contradecían con la mayor militarización de la administración civil) abrieron espacios a la lucha civil contra la impunidad, reflejada especialmente en el caso del asesinato de Myrna Mack. La actitud desafiante del Ejército en los casos de ciudadanos estadounidenses como Michael Devine y Dianna Ortiz, la respuesta agresiva a las propuestas de los Estados Unidos sobre

desmilitarización y la evidencia de la implicación de los mandos militares en el narcotráfico, determinaron una posición más agresiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de su representación diplomática en el tema de los derechos humanos. Tal posición se focalizaba directamente en el Ejército y con objetivos precisos: la desaparición del EMP y las PAC, y la desmilitarización de la Policía Nacional, recomendaciones señaladas en el informe del experto de las Naciones Unidas .

La sociedad civil comenzó también a ocupar espacios cada vez más significativos en la vida del país, desafiando el control del Ejército. Fenómenos como la salida a la luz pública de los desplazados, el retorno de los refugiados y las demandas de los sectores surgidos de la represión, motivaron una actitud más activa de otros sectores importantes –como la Iglesia católica y las ONG– y se convirtieron en una corriente que, aún sin suficiente articulación y coherencia, generaba una fuerte presión. El gobierno y el Ejército respondieron aumentando la represión y acusando al movimiento civil de formar parte de la guerrilla. Por último el movimiento indigenista irrumpió sorpresivamente en la vida política del país a raíz de la campaña por los 500 años de la invasión y se convirtió en poco tiempo en una nueva corriente social que exigía su propio espacio.

En este contexto cobró especial auge un nuevo movimiento de ocupación de fincas en demanda de soluciones salariales o por la propiedad de la tierra. El 12 de febrero de 1991 fueron desalojados con violencia por la Policía Nacional, los campesinos que ocupaban la finca Olga María en Tiquisate, muriendo una mujer en los incidentes. Nuevamente en marzo se produjeron invasiones de tierras estatales y fueron expulsados violentamente por la PMA los campesinos que ocuparon la finca Jaibal, en San Jorge La Laguna, Sololá. En aquella ocasión el presidente de la Cámara del Agro exigió mano dura para defender la propiedad. En julio de 1992 volvió a producirse una violenta represión contra los campesinos que ocupaban la finca Pampas del Horizonte, en Cajolá, Quetzaltenango, en tanto seguía creciendo un movimiento organizativo por la demanda de tierras que se manifestaría con más fuerza en el período siguiente.

Sin embargo el movimiento sindical histórico siguió experimentando un claro retroceso, entre otras cosas porque la estructura social sobre la que se basaba varió dramáticamente (por ejemplo, el desempleo y subempleo pasó del 43.5% en 1987 al 65% en 1991) y se vio atorado en el marco de la negociación gobierno-guerrilla. La URNG presionó a las organizaciones populares para que tomaran una postura más agresiva, buscando el desgaste del gobierno, y éste golpeó en numerosas ocasiones a las organizaciones para debilitar las posiciones políticas de la guerrilla. En cualquier caso, el 22 de febrero el Presidente anunció la preparación de un Pacto Social y convocó a las organizaciones sindicales CGTG, CUSG y también al CACIF, pero UNSITRAGUA no participó; posteriormente el proyecto fracasó. Aunque en agosto el mandatario anunció un aumento salarial para todos los empleados públicos, esto no evitó que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial se declarara en paro de labores desde el 4 de octubre y lograra aumentos extraordinarios de Q200. Pero cuando en noviembre la Federación Nacional de Trabajadores Municipales anunció un paro general, sólo respondieron los trabajadores de Quetzaltenango, Mazatenango y Cuyotenango.

Y luego que el Congreso derogara definitivamente, el 2 de julio de 1992, la Ley de Compensación Laboral, la FENASTEG declaró el día 17 un paro total de labores que logró aumentos salariales parciales, y dos días después una manifestación de trabajadores entregó a la Corte de Constitucionalidad un recurso contra la anulación de la Ley de Compensación por Tiempo Servido. Poco después, en octubre, el Congreso aprobó varias reformas al Código de Trabajo, luego que los sindicatos de los Estados Unidos amenazaron con un boicot comercial a Guatemala. Pocos días antes del golpe el Presidente aprobó un acuerdo gubernativo que suspendía el derecho de huelga en el sector estatal, pero una semana después, tras llegar a acuerdos con los sindicatos, lo suspendió. En resumen, el movimiento sindical de trabajadores públicos durante el gobierno de Serrano no logró presentar una propuesta reivindicativa coherente, menos prepararse para desafíos como la privatización de las empresas y servicios estatales, que ya estaban en debate. Aunque la represión ejercida en 1990, que continuó bajo el nuevo gobierno, influyó en esta situación, la corrupción de este gobierno también pudo haber contribuido a debilitar a las dirigencias sindicales.

El movimiento sindical tampoco tuvo especial relevancia en el sector de la empresa privada. La violencia que los empresarios exigieron al gobierno en el caso de las invasiones de fincas en litigio se trasladó a otros conflictos en el campo, sobre todo a huelgas de trabajadores bananeros en Izabal.

En 1991 y 1992 la represión gubernamental afectó también al sector popular organizado y a la comunidad de la Universidad de San Carlos (USAC): atentados dinamiteros, asesinatos y amenazas de muerte afectaron a estudiantes, trabajadores y catedráticos; también a dirigentes sindicales (amenazas a Byron Morales de UNSITRAGUA) e integrantes del grupo *Guatemala Unida* (asesinato de Dinorah Pérez), entre otros.

Pero la represión fue mucho más cruel contra la población en las zonas donde se desarrollaba el conflicto armado, o contra aquellas organizaciones que el Ejército vinculaba más directamente con la URNG. Sólo en abril de 1991, los PAC y los comisionados militares perpetraron numerosos asesinatos y amenazas en Sololá, Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y El Quiché, principalmente contra activistas de CONAVIGUA y CONDEG. En junio el vicepresidente Gustavo Espina acusó a los refugiados de estar manipulados por la URNG. Pero el experto de las Naciones Unidas denunció que el 13 de ese mismo mes el Ejército bombardeó las aldeas Chaxy y Santa Rosa en el área de Xeputul, y el 15 de junio los alrededores de Cantabal, Ixcán; también acusó al Ejército de haber masacrado a campesinos el 3 y 17 de junio en Petén, durante el operativo *Lacandona 91*. Nuevos bombardeos se produjeron el 21 de julio en Cuarto Pueblo, cuando una comisión pretendía visitar a las CPR del Ixcán; el experto de las Naciones Unidas denunció que el 20 y 21 de julio el Ejército bombardeó Santiaguito en el Ixcán. En la capital elementos uniformados de la Policía Nacional allanaron la sede de CONAVIGUA el 28 de ese mismo mes; otro allanamiento se produjo el 21 de noviembre.

El patrón represivo a lo largo de 1991 y 1992 fue creciente y hubo casos en que el propio presidente Serrano se vio involucrado. Por ejemplo, en enero de 1992, el mandatario acusó a Amílcar Méndez, dirigente de CERJ, de pertenecer a la URNG; cuatro meses más tarde, Méndez sufría un atentado. Las CPR fueron

especialmente castigadas, a tal grado que la Conferencia Episcopal tuvo que denunciar, en febrero de 1993, que 400 desplazados de las CPR del Ixcán habían salido hacia México debido a la ofensiva del Ejército.

La represión alcanzó también a otros sectores —como la Iglesia y la prensa— que desafiaron al Ejecutivo. En 1991, fueron asesinados el sacerdote Moisés Cisneros (el 30 de abril) y el encargado de la pastoral social de la diócesis de El Quiché, Julio Quevedo (el 15 de julio); una bomba estalló, el 19 de agosto, en un céntrico edificio capitalino en el que funcionaban varias agencias de prensa. En 1992, el catequista Enrique Adolfo Piril Paniagua fue asesinado y el párroco Pedro Ventura Lux murió en circunstancias extrañas; también en noviembre de ese año, el ministro de la Defensa acusó a Ronalth Ochaeta, director de la ODHAG, de responder a los lineamientos de la guerrilla.

Las violaciones de los derechos humanos experimentaron un desarrollo inesperado durante el mandato de Serrano Elías. Según la ODHAG, en 1991 se cometieron 551 ejecuciones extrajudiciales, 205 asesinatos, 143 desapariciones forzadas y 123 casos de tortura; mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos reportó 148 ejecuciones extrajudiciales y 118 desapariciones forzadas. Estas cifras se incrementaron de manera notable en 1992. Según la CDHG, entre el 1 de enero y el 18 de agosto se cometieron 1,128 asesinatos, de los cuales 350 fueron ejecuciones extrajudiciales (65 presentaban señales de tortura), 21 detenidos desaparecidos y 31 ejecuciones; hubo 32 detenciones arbitrarias, 104 amenazas de muerte, 289 atentados y 321 bombardeos y ametrallamientos.

El sector empresarial, a pesar de que buscó una coincidencia con el movimiento popular —especialmente en 1993— que le sirviera de paraguas en su intento de encabezar la *sociedad civil* para presionar al poder político, no tuvo una actitud coherente de rechazo o lucha contra las violaciones de los derechos humanos. Únicamente en los medios de prensa que controlaba, y en la medida en que contribuía a debilitar al Presidente, se dio espacio a la investigación de algunos casos.

ODHAG

10. Relevos en los cuarteles

El nuevo gobernante había expuesto durante la campaña electoral su pensamiento respecto a los militares, al afirmar que en una sociedad subdesarrollada políticamente como la guatemalteca, el único sostén de la institucionalidad y del Estado asegurando su eficiencia, era el Ejército. Por otro lado, desde que ocupara la Presidencia del Consejo de Estado bajo el mandato de Ríos Montt, había dejado clara su sumisión al poder militar. Frente a su debilidad política (no controlaba ningún otro poder del Estado), Serrano reforzó el autoritarismo presidencial, lo cual a su vez aumentó el poder del EMP, sin las interferencias que en la etapa anterior habían creado los políticos del partido gobernante.

Con la llegada del nuevo presidente, se produjeron algunas presiones internacionales para que siguiera en el Ministerio de la Defensa el general Bolaños, al que le quedaban dos años de servicio, o bien que ascendiera el general Raúl Molina Bedoya. Sin embargo la Junta de Comandantes impuso al

nuevo Presidente la salida de Bolaños y de Mata Gálvez, y el nombramiento del general Luis Enrique Mendoza, que ocupaba el cargo de subjefe del EMDN. Mendoza escogió como viceministro al general Humberto Ángeles. Con este movimiento la Junta de Comandantes intentó estabilizar el proceso de ascensos, al equilibrar las distintas corrientes mientras definía una nueva estrategia para enfrentar la difícil situación que atravesaba.

Sin embargo continuaron las tensiones internas. Significativamente, en marzo de 1991, Hugo Arce, columnista de *Siglo Veintiuno*, denunciaba que la guerrilla ya se había instalado en Alta Verapaz y estaba llegando a la ciudad capital; afirmaba también que muchos oficiales, desmoralizados por el curso de la guerra, se estaban dando de baja y pasando a la empresa privada. Reaparecieron los *Oficiales de la Montaña* acusando a la cúpula militar de los asesinatos nunca esclarecidos del general en retiro Anacleto Maza Castellanos y del capitán Jorge Méndez Barragán, ex jefe de la DIC en la Policía Nacional.

El nuevo equipo de mando en el Ejército se centró especialmente en enfrentar de una manera más activa la campaña internacional por la desmilitarización. Aunque el presidente Serrano anunció medidas cosméticas –como que el Comité de Reconstrucción Nacional pasaría al Ministerio de Desarrollo y el Instituto Geográfico Militar al de Comunicaciones– en realidad reforzó la militarización de Gobernación y de la Policía Nacional, y pronto el EMP comenzó a invadir funciones de la gestión presidencial, amenazando incluso a otros ministerios como el de Finanzas.

El Ejército endureció su postura frente a la embajada de los Estados Unidos y significativamente en enero no autorizó el aterrizaje en la zona militar del aeropuerto del avión que transportaba al subsecretario de Estado Bernard Aronson, que llegaba para la toma de posesión de Serrano. En abril el presidente rechazó públicamente una entrega de US\$100,000 de ayuda militar estadounidense. En tanto, la embajada enviaba mensajes discretos sobre la implicación de militares en narcotráfico. En este contexto el discurso nacionalista sustituyó al de la Estabilidad Nacional. Desde enero de 1991 varios columnistas afirmaban que la guerrilla estaba ganando la guerra política con el tema de la desmilitarización, al coincidir con los intereses del Departamento de Estado.

En mayo Prensa Libre editorializaba sobre la *cruzada para eliminar a los ejércitos iberoamericanos*. Por su parte, el ministro de la Defensa anunciaba que *el Ejército no entiende ni quiere entender el concepto de desmilitarización y rechaza cualquier propuesta de reducirse, incluso si se alcanzara la paz*. Sin embargo, en el primer semestre de 1991, llegaron los primeros miembros de ONUSAL a El Salvador y el Ejército hondureño explicó que su nuevo papel se vinculaba a la cooperación del desarrollo, la conservación de la naturaleza y la lucha contra el narcotráfico, como funciones que evitarían su reducción. Cuando el ministro de la Defensa, Luis Enrique Mendoza, afirmó que la lucha por preservar la ecología y combatir el narcotráfico eran las funciones del Ejército en tiempos de paz, los militares guerrillistas, que ya estaban desarrollando ofensivas militares en Petén y San Marcos, presionaron nuevamente.

El debate del antimilitarismo, planteado en términos defensivos, perjudicó más que benefició al Ejército. La aceptación del diálogo con la guerrilla como excusa para desviar tensiones internacionales desconcertó a los militares, hasta

el punto que el general Mario Enríquez llegó a hablar de *borrón y cuenta nueva* y afirmó que ninguna guerra terminaba con el rendimiento total: un punto de vista que no era compartido por casi ningún otro miembro de la Junta de Comandantes, la cual había perdido influencia y actividad desde la llegada de Serrano.

La campaña nacionalista se enfrentaba con el sector empresarial modernizante, que estaba planteándose la globalización. Los planteamientos desarrollistas habían quedado definitivamente fuera de la agenda del nuevo gobierno, batalla que el Ejército perdió silenciosamente. En medio de estas tensiones, en julio de 1991 se produjeron nuevos cambios militares, que colocaron a los oficiales más militaristas de las promociones 67 y 68 en la línea de ascenso a la cúpula, y desplazaron a algunos de la línea de la Estabilidad (de la promoción 70), que habían sido ascendidos por encima de otros con mayor antigüedad.

Este reacomodo de la cúpula militar no acabó, sin embargo, con las tensiones internas. Un poco después estalló el escándalo por la compra de los helicópteros Sikorsky, vinculado con el Banco de Crédito y Comercio Internacional y el narcotráfico, que implicó a los generales Gramajo, Mata y Godoy, los más poderosos representantes de la tesis de la Estabilidad Nacional. Cuando en agosto fueron asesinados once trailereros en la carretera a Taxisco, y el coronel Julio Balconi dirigió la operación para detener al comandante de la Base del Pacífico, coronel Aníbal Girón Arriola (uno de los oficiales más veteranos), apareció un nuevo comunicado de los *Oficiales de la Montaña* acusando a González Taracena (ascendido, junto a Balconi, por encima de su turno) de ser el responsable.

Los nuevos reacomodos y ascensos no lograron detener la crisis interna, que estalló en diciembre cuando sorprendentemente el presidente cesó al ministro de la Defensa, Luis Enrique Mendoza, y al jefe de EMDN, Edgar Godoy Gaitán. Ya entonces el poder del jefe del EMP, general Francisco Ortega Menaldo, era asunto de opinión pública. Con estos cambios, José Domingo García Samayoa subió al Ministerio de la Defensa y Roberto Perussina al EMDN; Mario Enríquez quedó como subjefe de EMDN, y José Luis Quilo como viceministro. Pasaron a retiro los generales Edgar Godoy y Jaime Rabanales, y el coronel Byron Israel Lima.¹⁷

Este nuevo movimiento en la cúpula de mando llevó definitivamente al poder a los *señores de la guerra*, quienes pensaban que en aquella coyuntura la clave para el Ejército era lograr una victoria militar contundente sobre la guerrilla, y que el alto mando debía estar formado por aquellos jefes que lograrán éxitos en combate. A diferencia de otras pugnas internas en el Ejército, en la que se definían fundamentalmente diversas opciones ideológicas o

17 Unas semanas después, en enero de 1992, se produjeron nuevos ascensos a general: Julio Balconi Turcios quien, sin embargo, pasó a dirigir la Politécnica, lo cual representaba un descenso en la carrera; Rafael Rosito Contreras que pasó a Inspector General; Julio Fidencio Otzoy que de la Zona Militar de Chimaltenango pasó a Mariscal Zavala; Carlos Eduardo Santizo Franco que de la Zona Militar de El Quiché fue trasladado a la Guardia de Honor y Pineda Carranza de la Base de Paracaidistas a Chimaltenango; Mario Rolando Terraza Pinot pasó a El Quiché, pese a que había fracasado como comandante de San Marcos.

políticas, en esta ocasión el elemento de más peso fue la reacción de los oficiales de promociones minoritarias, que se veían desplazados por oficiales más jóvenes promovidos por el general Gramajo. La falta de liderazgo de los altos oficiales que Gramajo dejó tras de sí (Bolaños, Mendoza) ayudó a la nueva cúpula militar que se instaló en 1992.

En enero de ese año la guerrilla salvadoreña y el gobierno firmaron los acuerdos de paz, que incluían duras medidas contra el Ejército de aquel país. La llegada de ese nuevo grupo encabezado por García Samayoa representó una postura más activa frente a los desafíos externos. Pretendieron dar un giro a las negociaciones de paz. Cuando en febrero se celebró una reunión de la Comisión Centroamericana de Seguridad, el Ejército mantuvo una posición cerrada a cualquier cambio; se conocía que su tropa había pasado de 31,700 efectivos en 1985 a 43,300 en 1990 y su presupuesto de US\$197 millones en 1985 a US\$322 millones en 1990.

El debate en la opinión pública sobre la desmilitarización fue sustituido por el de la reconversión de los ejércitos. Articulistas como Carlos Rafael Soto y Danilo Rodríguez afirmaron que la reconversión era un asunto que los militares debían resolver sin interferencias de la sociedad civil y menos de presiones internacionales. En este sentido el Ejército presentó al Congreso una nueva Ley de Servicio Militar y Civil. Pero estos planteamientos no pudieron evitar que a lo largo de 1992 el enfrentamiento del Ejército con la sociedad civil adquiriera una relevancia inaudita. En momentos en que la Comisión de la Verdad comenzaba a instalarse en El Salvador, y en Honduras los empresarios rechazaban la participación de los militares en la privatización de empresas públicas, comenzó a generarse una oposición civil al Ejército en Guatemala.

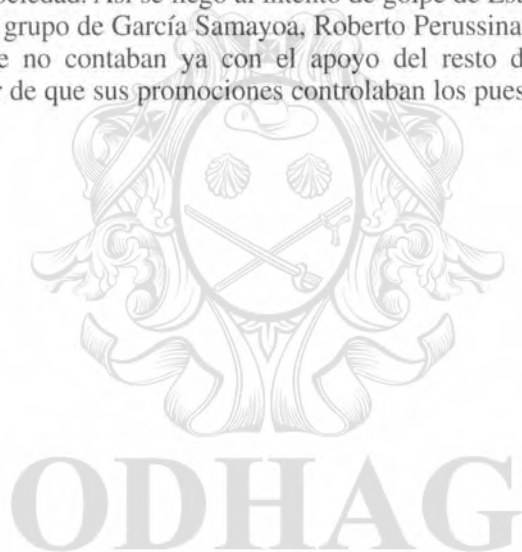
Pronto la campaña se centró en el poder del jefe del EMP, Francisco Ortega Menaldo, a quien la opinión identificaba como el *hombre fuerte* de la nueva cúpula militar. La revista *Crónica* publicó un reportaje sobre el poder del EMP y el Ministerio Público sindicó a esta institución del crimen contra Myrna Mack. La Fiscalía Militar comenzó a investigar también el caso de los Sikorsky, en el que se implicaba abiertamente al EMP. Meses después el sindicato de GUATEL denunció que el Ejército controlaba más de 10,000 líneas de teléfono, y el 22 de diciembre fueron detenidos tres especialistas del EMP acusados de disparar contra el catedrático Alfredo Torres.

Los enfrentamientos internos en el Ejército no habían cesado con los cambios de enero de 1992. El narcotráfico pasó a ocupar un papel muy fuerte en las luchas entre las camarillas. En marzo, cuando la embajada de los Estados Unidos estaba presionando con más fuerza, se produjo una ola de atentados y bombas terroristas en la capital; y en mayo fue asesinado el ex-coronel Raúl Andrade de León. Un mes después fueron muertos el narcotraficante Edgar Gálvez y el coronel Juan José Ruiz Furlán, subjefe de la oficina del control de armas. En julio fue asesinado el coronel en retiro Luis Rolando Girón, ex-jefe de Aeronáutica Civil. Durante ese año únicamente García Samayoa y Perussina ascendieron a generales de división, en tanto que González Taracena era relevado del mando del Cuartel General y sustituido por Pineda Carranza (compañero de promoción de Perussina) tras la oscura fuga de unos soldados acusados de criminales. Las tensiones se mostraron también cuando el coronel

Roberto Letona Hora, jefe del Estado Mayor del ministro y miembro de la promoción de Otto Pérez, fue secuestrado en el Cuartel General y enviado como agregado militar a Costa Rica.

Pero el marco internacional continuó ensombreciéndose para el Ejército en 1993, tras el movimiento de la sociedad civil. Ya entonces se perfilaban dos estrategias bien claras en el Ejército: la de los *señores de la guerra* y la de quienes se preparaban para manejar un proceso de paz. Mientras los primeros seguían apoyándose en el poder presidencial y su EMP, los segundos –entre los que destacaban el general Mario Enríquez, el coronel Otto Pérez y el mayor Mauricio López Bonilla– iniciaban aproximaciones a sectores empresariales, políticos y profesionales dispuestos a limitar la autocracia de Jorge Serrano.

El dudoso éxito de la ofensiva *Victoria 93* y el escandaloso intento del ministro de la Defensa por participar en los negocios de la privatización, como sucedió con el canal 9 de televisión, aumentaron la distancia entre la cúpula militar y el resto de la sociedad. Así se llegó al intento de golpe de Estado institucional de mayo, cuando el grupo de García Samayoa, Roberto Perussina y Francisco Ortega descubrieron que no contaban ya con el apoyo del resto de los comandantes militares, a pesar de que sus promociones controlaban los puestos clave.





ODHAG

Capítulo octavo

Preparando la posguerra

1. El salto al vacío

El 25 de mayo de 1993 el presidente Jorge Serrano decidió sorpresivamente disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y desconocer al Procurador General de la Nación y al Procurador de Derechos Humanos. A la vez decretó un sistema de censura y suspendió varios artículos de la Constitución que garantizaban los derechos personales. Serrano justificó el golpe de Estado en la necesidad de *terminar con la mafia y la corrupción en el legislativo y el judicial*, y prometió unas inmediatas elecciones legislativas para restablecer la constitucionalidad. Algunos observadores señalaron que inicialmente estas medidas lograron un relativo apoyo de la opinión pública, dado el descrédito del sistema de partidos políticos. Sin embargo la reacción inmediata del sector empresarial y de una parte de la cúpula militar, el papel de los medios de comunicación, las presiones internacionales y la reacción de los sectores organizados y los líderes de la sociedad civil, rápidamente crearon un cuadro desfavorable para el presidente.

Aunque el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), general Francisco Ortega, el ministro de la Defensa, José Domingo García, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), Jorge Roberto Perussina, apoyaban a Serrano, el Consejo de Comandantes decidió dejar solo al presidente, para ver si lograba mantenerse a flote. Pero desde el primer momento del golpe se organizó una conspiración entre los sectores militares *constitucionalistas*, encabezados por el director de Inteligencia (D-2), coronel Otto Pérez Molina, y los empresarios *modernizantes*, que liberaron al Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, y mantuvieron una intensa actividad de coordinación en las protestas ciudadanas.

Por parte de los sectores empresariales el objetivo principal parecía ser *limpiar la mesa*, de manera que el programa de modernización económica (fundamentalmente la privatización de las empresas del sector público) se realizara sin interferencias de los partidos ni los organismos del Estado. Adicionalmente estaban interesados en una posición más definida frente a las negociaciones de paz, convencidos de que ésta podría abrir las puertas financieras y comerciales en el mercado internacional. En este punto coincidían con los militares *constitucionalistas* que valoraban cómo la posición defensiva de los militares guerreristas no resolvía el problema del papel del Ejército en la posguerra.

A pesar de las protestas el ministro de la Defensa se empeñó en apoyar al presidente y destituyó al coronel Otto Pérez, enviándolo a Cobán, y a otros nueve

oficiales de inteligencia que fueron destinados al interior del país. Entonces se produjo una reacción no esperada por el general García Samayoa: la protesta de los comandantes de la Brigada Mariscal Zavala, de la Base Naval del Pacífico y de otras zonas militares del país. Una vieja brecha dentro del Ejército se volvió a abrir.¹

El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, jugó un papel clave al desconocer las medidas de Serrano. Cinco días después del golpe el ministro de la Defensa, José Domingo García, informó que Serrano había renunciado. Éste aún intentó maniobrar para que el vicepresidente Gustavo Espina le sustituyera, pero ya entonces las fuerzas opositoras habían trazado su propio plan. Los partidos políticos se habían comprometido a la autodepuración del Congreso, y la Coordinadora de Sectores Civiles jugaba un importante papel de oposición cerca de líderes de la Iglesia Católica, la Universidad de San Carlos, Rigoberta Menchú, Helen Mack, y jóvenes empresarios como Lionel Toriello, Peter Lamport y José Rubén Zamora. Entonces se creó la Instancia de Consenso (CACIF, partidos, CGTG-CUSG) que logró incorporar al Foro Multisectorial Social (UASP, ONG, USAC, organizaciones indígenas).

La Instancia de Consenso pidió la depuración del Legislativo y el Judicial, y propuso una terna para elegir presidente. El 6 de junio el Congreso eligió como presidente a Ramiro de León. También fue elegido vicepresidente Arturo Herbruger, bajo presiones del general Perussina para entonces ministro de la Defensa. Aunque el nuevo presidente se apresuró a destituir a García Samayoa y Francisco Ortega, en el Ejército quedó una situación de difícil equilibrio, al ascender Perussina al Ministerio y pasar Quilo Ayuso del viceministerio a la subjefatura del EMDN.²

Unas semanas más tarde el presidente resolvía esta situación al pasar a Perussina a retiro y ascender a Mario Enríquez al Ministerio. Esta medida provocó reacciones internas³ que fueron aprovechadas para limpiar la escala de

- 1 José Domingo García Samayoa era comandante del Mariscal Zavala en 1982, cuando los oficiales jóvenes dieron el golpe de Estado que llevó a Ríos Montt a la presidencia, y García Samayoa se negó a apoyarlo, siendo detenido por los militares insurrectos. Roberto Perussina era entonces jefe de inteligencia del EMP y Francisco Ortega asesor del ministro de Finanzas, coronel Hugo Tulio Búcaro (de hecho dirigía una dependencia secreta de seguridad en el Ministerio de Finanzas). Frente a ellos Mario Enríquez y Manuel Argueta fueron los oficiales de más alta graduación que se integraron a la Junta de Ríos Montt, junto a otros oficiales de la promoción de Otto Pérez. Todos ellos sufrieron represalias cuando en 1983 un nuevo golpe militar destituyó a Ríos Montt. De hecho, desde entonces surgiría la división entre *La Cofradía* y *El Sindicato*. Diez años más tarde, los oficiales de el Sindicato lograron por fin desplazar a *la Cofradía*, cosa que no pudo conseguir el general Gramajo en toda su etapa al frente del Ministerio.
- 2 Ortega Menaldo fue destinado a Quetzaltenango, Otto Pérez fue nombrado jefe del EMP, Mario Enríquez quedó como jefe del EMDN y José Luis Quilo Ayuso como subjefe del EMDN. En el acto de despedida a García Samayoa, Quilo Ayuso achacó su relevo a una conjura de los oficiales que apoyaron el golpe de Ríos Montt.
- 3 A finales de julio hay un conato de sublevación en la zona militar con sede en Cuilapa, Santa Rosa, al mando del coronel Jorge Roberto Trejo. Esto provoca el 2 de agosto una recomposición de los mandos y son removidos cinco comandantes de zona. Ortega Menaldo fue enviado a la Junta Interamericana de Defensa, a la Fuerza Aérea llega el coronel Luis Imeri y Trejo es enviado a Venezuela.

mando de militares no afines a la nueva línea; quedó únicamente el general Quilo Ayuso como jefe del EMDN, pero controlado de cerca por el subjefe del EMDN, general Marco Antonio González Taracena, uno de los más hábiles aliados de Enríquez. Otros altos militares –como Carlos Pineda Carranza, comandante del Mariscal Zavala–, si bien apoyaban la línea *constitucionalista* y el proceso de negociaciones, eran partidarios de una mayor agresividad en la guerra.

Era la primera vez desde 1990 que se instalaba en la cúpula del Ejército un grupo de militares unificados en un propósito: diseñar una estrategia apropiada para enfrentar las negociaciones de paz y el futuro del Ejército en la posguerra. Era además un grupo amplio que permitía trazar una estrategia de mediano plazo al agrupar a oficiales de promociones que iban de la 62 (1968) a la 73 (1966), en la que destacaban los generales Mario Enríquez, Marco Antonio González Taracena y Julio Balconi Turcios; los coroneles Otto Pérez, Letona Hora, Mario Mérida, José Luis Fernández Ligorria y Benjamín Godoy Búrban. A ellos se unían los tenientes coroneles Otto Noak y Rolando Díez; los mayores Mauricio López Bonilla, José Cabrera, Luis Alburez y Francisco García Cuyún, y el capitán Otto Spiegler.

Pero este relevo tampoco significó una revisión de las líneas operativas del Ejército. De acuerdo con el análisis funcional de la tesis de la Estabilidad Nacional (de la que Otto Pérez era uno de los más completos expositores), dentro de la institución militar se pueden detectar vulnerabilidades (violación injustificada de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico) que por diversas razones se convierten en inevitables, pues combatirlas podría desestabilizar a toda la institución y al Estado. La solución propuesta era manejar las vulnerabilidades para impedir que se convirtieran en amenazas. Fue así que oficiales de *La Cofradía* siguieron, una vez más, controlando espacios vitales en los aparatos de seguridad y en la escala de mando, independientemente de las afinidades de promoción con otros oficiales de el Sindicato.

La nueva cúpula militar logró consolidarse con relativa facilidad en una institución que desde 1990 carecía de liderazgo, pero no pudo evitar las presiones internas. En enero de 1994, el general Quilo, jefe de EMDN, aprovechó la ausencia del ministro de la Defensa para reunir a la Junta de Comandantes y ordenar que se acuartelara a los patrulleros civiles para impedir que votaran en el referéndum de reformas constitucionales. En febrero se vivió un clima de alta inestabilidad, en medio de reuniones del general Quilo con empresarios y políticos como Fernando Andrade, que estudiaban la posibilidad de forzar la dimisión del presidente Ramiro de León para que ascendiera el vicepresidente Herbruger.

El ministro de la Defensa visitó de urgencia las zonas militares del interior del país, acusó al jefe del EMDN de mantenerlas precariamente abastecidas y prometió mejoras económicas. El 18 de febrero, el presidente convocó de urgencia al gabinete para anunciar cambios militares⁴. En el nuevo equilibrio de corrientes

4 Fue destituido Quilo Ayuso y en su lugar fue nombrado González Taracena, como subjefe del EMDN fue nombrado Pineda Carranza. Los miembros de la promoción 73 comenzaron a ocupar posiciones. Los militares que participan en la comisión de diálogo son Balconi Turcios, Pineda Carranza y José Horacio Soto Salán.

militares, destacó el ascenso de Pineda Carranza, quien en 1992 fue el principal apoyo de Perussina en el EMDN. Pero la mayor concesión de este reajuste fue la salida del ministro de Gobernación, Arnoldo Ortiz Moscoso, que había intentado desmilitarizar la Policía Nacional. Con la llegada del coronel Mario Mérida al Viceministerio de Gobernación, el Ejército volvería a emplear con fuerza la *guerra sucia* en su enfrentamiento no sólo contra la izquierda, sino también contra sectores empresariales, y en la lucha por controlar los resortes institucionales políticos y judiciales. Se registró, asimismo, una autodepuración que implicó el asesinato de miembros de la seguridad del Estado fuera de control.

El nuevo grupo que subió a la cúpula militar buscó la manera de preservar el poder de la institución frente a las presiones de otros poderes como el empresarial, las demandas de la sociedad civil o las exigencias de la URNG. Esto le llevó a desarrollar un discurso para la posguerra acompañado de reformas parciales, pero al mismo tiempo los organismos de seguridad e inteligencia mantuvieron una presión constante frente a los oponentes. El factor internacional, una vez más, se les escapó de las manos. En 1995, cuando las negociaciones de paz dieron un giro impredecible para el Ejército, esta nueva cúpula militar dirigida por Enríquez entró en un rápido desgaste, al intentar resolver temas como la depuración y la participación del Ejército en la privatización.

2. Ramiro de León y los empresarios

Quienes confiaron en que la llegada a la presidencia de Ramiro de León Carpio representaba finalmente la estabilidad política, no tardaron en sentirse frustrados. Las presiones empresariales, que hicieron fracasar los dos gobiernos civiles anteriores, sembraron también de incertidumbre el gobierno de Ramiro de León, independiente de sus propias debilidades y vacilaciones.

En los últimos tiempos de Serrano se produjo un acercamiento entre un sector *renovador* de la alta oficialidad y algunos elementos empresariales y políticos decididos a preparar un cuadro estratégico más favorable frente a una negociación de paz que preveían como inevitable a mediano plazo. Entre los empresarios destacaron Dionisio Gutiérrez, director del programa televisivo *Libre Encuentro*, miembro del grupo empresarial de Pollo Campero y de uno de los mayores grupos financieros centroamericanos, Multinversiones-, José Rubén Zamora y Lionel Toriello, directivos del diario *Siglo Veintiuno*, que agrupaba a un sector modernizante de la Cámara de Industria ahora participando en el sector financiero (los Castillo y los Novella), junto a grupos comerciales como los Paiz y los poderosos azucareros.

El esquema político nacional resultaba ya infuncional para los dos principales grupos de poder: el militar y el económico. Con la resolución de la crisis provocada por el golpe, éstos fueron los grandes ganadores. La contracción de precios y mercados en el comercio internacional de los principales productos de agroexportación, había desestabilizado los compromisos contraídos por el sector empresarial con el gobierno de Serrano para llevar adelante el Plan de Estabilización Económica y el Ajuste Estructural pactado con los organismos financieros internacionales. Las oportunidades que ofrecía la privatización de

empresas públicas permitió que surgiera una nueva elite empresarial especulativa ligada al poder político y militar. Todo ello agudizó las contradicciones empresariales y provocó que los empresarios decidieran participar activamente en la solución de la crisis provocada por el golpe. Con Ramiro de León en la Presidencia el sector empresarial pareció haberse reunificado en torno a la necesidad de aplicar un plan de ajuste estructural con *rostro humano*, buscando amplio apoyo financiero internacional para que se hiciera cargo de la *compensación social*.

Después de la crisis de mayo de 1993, el poder económico logró ampliar su influencia tanto en la sociedad como en el ejecutivo, lo que le permitía abordar la reestructuración económica en mejores condiciones. Desde esa fecha una parte del sector empresarial comenzó a presionar para lograr el control del Ejecutivo y de instituciones como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Frente a estas presiones, Ramiro de León, al igual que los dos presidentes civiles anteriores, se refugió en el EMP.

El gobierno de Ramiro de León, que se inició con la promesa de regenerar las instituciones del sistema político, terminó envuelto en las redes de la corrupción y el compadrazgo que desde 1985 han acompañado a los presidentes civiles. La imagen del mandatario se deterioró por la falta de inversión que repercutió en el deterioro de la red vial y del sistema de salud pública; por su indecisión frente a la corrupción del sistema político (que se agravó por las numerosas irregularidades y escándalos originados ante la privatización de FEGUA y GUATEL), y la impunidad, señalada por MINUGUA como uno de los principales vicios del régimen, que quedó patente en los intentos de esclarecer el asesinato del guerrillero Efraín Bámaca y juzgar a los culpables. En lugar de abordar estos problemas el presidente se preocupó por organizar una campaña personalista, hasta el punto de que en el presupuesto de 1995 la Presidencia se asignó Q782 millones (más que el ministerio de la Defensa, que recibió Q755 millones). Sólo en los primeros seis meses del año, el presidente gastó Q7.2 millones en pagar a sus asesores personales.

Durante 1995 la imagen del presidente llegó a los niveles más bajos de popularidad. En octubre, la revista *Crónica* afirmaba: *Ramiro de León ha sido el gobernante que más daño ha hecho a Guatemala, al reforzar la estructura de control militar sobre el Ejecutivo*. Desde el 22 de mayo el país fue gobernado por un llamado Comité de Crisis, formado por los ministros de la Defensa, Relaciones Exteriores y Gobernación, además del Fiscal General, el presidente de la Comisión de Paz (COPAZ), el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y el Presidente de la República. Sin embargo este Comité de Crisis fue manejado, de hecho, por el jefe del EMP, general Otto Pérez Molina.⁵

5 El Presidente organizó su equipo con amigos personales como Ortiz Moscoso en Gobernación, Celestino Tay Coyoy en Educación, Luis Arturo del Valle en Agricultura, Rómulo Caballeros en la Secretaría de Planificación, Arturo Fajardo en Relaciones Exteriores y Willy Zapata en el Banco de Guatemala. Además se rodeó de un grupo de asesores entre los que destacaron Antonio Arenales Forno, Mario Carpio, Iván Barrera, Ricardo Molina, Roberto Alfaro, Carlos Taracena de la Cerda, Oliverio García Rodas, Héctor Luna, Danilo Parinello y Mario Enríquez.

3. Lucha de poderes

La cruzada por la depuración de los poderes judicial y legislativo emprendida por el nuevo presidente bajo fuertes presiones del sector empresarial⁶ se convirtió en una pelea que en vez de restablecer la credibilidad del sistema político lo mantuvo en una permanente crisis, que se trasladaría hasta el inicio de la campaña electoral en agosto de 1995, cuando Ríos Montt cuestionó la legalidad del proceso electoral. El sector empresarial presionó durante 1993 con fuerza para lograr una depuración arbitraria que aumentara su influencia sobre los legisladores, mientras éstos se atrincheraban en la legalidad institucional. En esta crisis, en la que el sector empresarial llegó incluso a proponer en noviembre de 1993 el anticipo de las elecciones presidenciales, las instancias de la sociedad civil –participantes en la crisis de mayo de 1993– fueron relegadas y terminaron desplazándose hacia la participación en el proceso negociador de paz a través de la Asamblea de Sectores Civiles.

El presidente del Congreso, el demócrata cristiano José Lobo Dubón, señaló al EMP y al grupo empresarial Gutiérrez- Bosch y a los azucareros, a través de sus medios *Siglo Veintiuno* y *Crónica*, como los poderes que intentaban ajustar la institucionalidad política a la medida de sus intereses. Posteriormente los diputados legislaron contra los empresarios apoyando el subsidio al consumo eléctrico, la Ley de Delito Fiscal y la Ley de Compensación por Tiempo Servido. Así, la crisis política e institucional se siguió manifestando durante 1994 y 1995, mientras los partidos mayoritarios en el Congreso manejaron su poder para intervenir en las pugnas entre el Ejecutivo y el sector empresarial alrededor de la reforma tributaria.

Los perdedores de este enfrentamiento fueron los empresarios, ya que el presidente y los partidos frenaron sus pretensiones de rápido ajuste económico, e incluso propusieron y aprobaron medidas de reforma tributaria. El presidente Ramiro de León, inicialmente próximo a los objetivos empresariales, terminó alejándose y, como se dijo, acudió al EMP para reforzar su autoridad. En esta pugna de poderes, que se desarrolló especialmente en 1994, la presión de la corriente desarrollista en el Ejército jugó nuevamente un papel importante, ahora bajo la forma de *planes de reconstrucción para la posguerra*. Pero estas presiones terminaron en 1995, cuando esa corriente quedó bajo el asedio de la opinión pública internacional y las denuncias de la prensa local, replegándose a la defensa de los intereses corporativos de la institución.

Paralelamente se registró una sorda lucha entre empresarios y militares. Ya en el atentado contra Obdulio Chinchilla en mayo de 1993, trascendió que el diputado estaba chantajeando al presidente Serrano para participar en la privatización del subsector eléctrico.⁷ Desde enero de 1991 un sector empresarial había comprendido que cualquier intento de reajustar o reducir el sector público toparía con los

6 Los representantes de la empresa privada en la Instancia Nacional de Consenso definieron la lista de los 16 diputados depurables.

7 Fue menos público que Chinchilla se había convertido en los últimos años en uno de los mayores proveedores del Estado y estaba involucrado en negocios como el de tráfico de vehículos robados, en el cual existían fuertes intereses militares.

intereses económicos del Ejército, que se manifestaban en todos los niveles. Por otra parte el proceso de paz apoyado por las nuevas corrientes desmilitarizadoras en los Estados Unidos ofrecía una oportunidad para intentar desplazar a los militares del poder económico sin arriesgarse a enfrentamientos frontales.

El Ejército respondió inicialmente a este desafío agrediendo a los líderes empresariales más significativos (especialmente bajo el mandato de Serrano), fomentando la oposición a las privatizaciones entre sindicalistas y políticos y presionando para participar.⁸ Mientras la cúpula del Ejército parecía buscar un acomodo con el sector empresarial en este tema, de 1993 a 1995 se desató una ola de secuestros y acusaciones contra militares que participaban en negocios sucios, por otro. Este enfrentamiento no impidió que cierto sector empresarial siguiera yendo, como venía haciendo desde los años 70, a *tocar la puerta de los cuarteles*.

4. El chantaje fiscal y la privatización

Inicialmente el gobierno de Ramiro de León anunció un Plan de 180 días, con 417 proyectos, acorde a la estrategia de fondos dirigidos a sectores focalizados donde la inversión tuviera un alto impacto. Poco después el programa económico del gobierno encontró un nuevo lenguaje para el mismo proyecto que, a paso lento, se estaba implantando en el país: reafirmaba teóricamente la modernización productiva, la privatización del sector público, la reforma financiera y la reinserción en el mercado mundial. Atendiendo al sector joven empresarial modernizante que le había apoyado, habló de *desmonopolización de mercados, reforma administrativa entendida como descentralización, afirmación del papel subsidiario del Estado y mejora de capacidad gerencial de la administración pública*. Pero influido también por sus amigos de corte socialdemócrata, habló de reactivar el Sistema de Consejos de Desarrollo Regional y se iniciaron acciones para fortalecer la Unidades Técnicas de Planificación. En esa línea dio nuevo impulso al Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario para que canalizara fondos a los Consejos de Desarrollo, y fortaleció FONAPAZ.

El plan, sin embargo, fracasó aquel año por la falta de capacidad de la administración pública y lo poco realista de sus metas. Lo más que consiguió el presidente fue acelerar el desembolso del 8% constitucional a las municipalidades. En aquellos momentos, tanto los empresarios modernizantes como los militares que apoyaban el proceso negociador apostaban por un rápido desenlace de éste, aún a costa de concesiones importantes a la URNG, para atraer una fuerte ayuda internacional a la reconstrucción de la posguerra, la cual absorbería los costos sociales del plan de ajuste.

Después del golpe de Serrano el nuevo presidente delineó una estrategia para las negociaciones de paz con la guerrilla, que consistía en dividir la negociación en dos áreas: la de los temas de fondo que dieron origen al conflicto

8 Como ejemplo, el presidente Ramiro de León nombró gerente de GUATEL al mayor Gustavo Díaz López, conocido militar golpista desde 1987, a quien el general Gramajo amenazó con fusilar.

y serían discutidos por todos los sectores sociales en un Foro Permanente por la Paz, y los temas operativos del cese de hostilidades que serían discutidos por una representación del Ejército y la guerrilla, con mediación de la OEA y las Naciones Unidas. Esta estrategia estuvo muy influida por sectores empresariales que sobrevaloraron su liderazgo en la sociedad y pensaron que la URNG carecía de apoyos sólidos en el interior del país. Estos sectores confiaron en que el prestigio internacional del nuevo presidente colocaría a la URNG a la defensiva. El plan satisfacía, además, el interés más importante del Ejército: seguir sin reconocer beligerancia a la URNG.

Sin embargo la mayoría del sector empresarial no correspondió económicamente con la buena disposición del mandatario. El déficit fiscal del gobierno se duplicó, alcanzando Q944 millones, y el índice de recaudación cayó del 8.4% del PIB en 1992 al 7.9% en 1993, pese a que el presidente anunció una meta del 12%, que es la que aconsejaban el FMI y el Banco Mundial. Esa caída se debió a que la evasión fiscal provocada por el golpe alcanzó Q1,500 millones..

En 1994 el escenario se complicó después de que la Corte de Constitucionalidad emitió un dictamen contra la retención del Impuesto sobre la Renta, precisamente en momentos en que el gobierno se preparaba para negociar el apoyo económico del sector empresarial. En pocos meses esta medida provocó una crisis fiscal.

En marzo de ese año el presidente pidió a los empresarios un mayor apoyo financiero y éstos le exigieron a cambio un ritmo más rápido en la privatización de empresas públicas. Pero el tema de la reforma fiscal ya se había convertido en una condición para que los organismos financieros internacionales permitieran alcanzar las ventajas de los programas de asistencia. Según el mismo CACIF, la evasión alcanzaba el 67% en el Impuesto sobre la Renta de las empresas y el 50% en las individuales; la evasión en el IVA se calculaba en el 37%.

En 1995 el CACIF siguió su campaña iniciada el año anterior y amenazó con llevar las medidas de reforma tributaria ante la Corte de Constitucionalidad. Las impugnaciones del sector empresarial hicieron perder al gobierno Q1,000 millones de los ingresos presupuestados. En el terreno político, la reacción de los empresarios fue negar hasta última hora el apoyo a la candidatura presidencial de Álvaro Arzú, considerada oficialista, y emprender una campaña de desprestigio contra el presidente por mal manejo del gasto público.

Las peleas del presidente con los empresarios se reflejaron también en la privatización, un tema que el sector empresarial planteó al nuevo mandatario como *la asignatura pendiente* desde el gobierno anterior. Apenas llegado a la presidencia, Ramiro de León vetó el subsidio al sector eléctrico aprobado por el Congreso y revocó el decreto de desmonopolización del sector energético. Además anunció que la privatización de activos estatales estaría prevista en su plan de gobierno 1994-95. Se refirió entonces a la venta de FEGUA, la descentralización de las comunicaciones y la privatización del subsector eléctrico.

En mayo de 1994 el Ministerio de Comunicaciones anunció que entregaría el mantenimiento de la red vial en concesión a empresas privadas, y también GUATEL ofreció a la empresa privada la extensión de servicios. En octubre el presidente nombró a Manuel Ayau (empresario representante de la firma Fabrigás, con intereses particulares en la privatización del subsector eléctrico)

presidente de la Comisión Gubernamental de Privatización y desmonopolización, y el Ministerio de Agricultura alquiló las instalaciones de la estatal PROLAC a la cooperativa lechera Xelac de Totonicapán. En diciembre el FRG propuso una ley para privatizar GUATEL.⁹ El proceso avanzó en 1995, ya que el gobierno había incluido en el presupuesto para ese año el ingreso de Q100 millones por venta de activos del Estado. Pero a partir de la salida de Manuel Ayau de la Comisión de Privatización el proceso entró en una red de complicaciones.¹⁰

5. Los negocios de la paz

Uno de los temas de coincidencia entre los grupos empresariales y militares que impidieron el golpe de Serrano fue el diseño de un proyecto de posguerra, basado en la firma inmediata de los acuerdos de paz, a cambio de algunas concesiones políticas a la URNG, que atrajera inversiones al país y les permitiera manejar sus intereses prioritarios (la reestructuración interna del Ejército y el reordenamiento de la economía) al margen de presiones nacionales o internacionales. Para ello contaban con la excelente imagen internacional del nuevo presidente y la apariencia de que el movimiento contra el golpe respondía a un fuerte movimiento de toda la sociedad civil, que ahora estaría representada en el nuevo gobierno.

El interés por llegar cuanto antes a la etapa de posguerra se reflejó en las declaraciones de muchos funcionarios. El 24 de mayo el gobierno anunció que ya estaban preparando los proyectos de reconstrucción para presentarlos a la comunidad internacional, pues Suecia había anunciado que donaría US\$103 millones cuando se firmara la paz. El Secretario de Planificación Económica, Guillermo Rodríguez, afirmó que la ayuda para la paz estaría condicionada a la descentralización y modernización del Estado (en esos términos se referían los empresarios a la privatización) y desmintió que hubieran donantes que exigieran la reforma agraria, pues éstos se inclinaban más bien por el manejo medioambiental y forestal.

Los líderes empresariales que figuraron en el derrocamiento de Serrano se habían alejado ya de las propuestas concretas de paz, al fracasar sus intentos por hegemonizarlas. En agosto de 1993 la Instancia Nacional de Consenso con el apoyo del CACIF, representado por Peter Lamport y Víctor Suárez, presentó una propuesta para las negociaciones de paz coincidente con el gobierno, planteando una negociación paralela en dos mesas: esta Instancia asumía la representación de la sociedad civil, dejando de lado la Coordinadora Civil por la Paz y la Coordinadora de Sectores Civiles. Pero después de una intensa campaña en los

9 La presentó Francisco Villagrán Kramer argumentando que se convirtiera en una Sociedad Anónima de Servicio Público.

10 El 20 de febrero de 1994 el Congreso eliminó el monopolio del INDE en la generación de energía eléctrica, y el 23 Ayau propuso la desmonopolización de GUATEL mediante la subasta de los servicios de telefonía celular. Pero debido a las presiones de la ministra de Finanzas, pues GUATEL transferiría ese año Q150 millones al gobierno, Ayau dimitió de la comisión.

medios la Instancia Nacional de Consenso desapareció de escena. En octubre Carlos Vielman, presidente de la Cámara de Industria, se opuso a que la URNG participara en el Foro Permanente por la Paz propuesto por el gobierno. El sector empresarial –al igual que el presidente– estaba todos sus esfuerzos en la depuración del sistema político.

En 1994 los sectores de poder económico quisieron convertir el proceso de negociaciones en un tren rápido, cuyo único fin fuera la finalización del enfrentamiento militar, el desarme y la desmovilización de la URNG y la llegada al país de financiamientos internacionales para la paz. Pero otro sector empresarial históricamente más poderoso pensó que difícilmente los acuerdos de paz se firmarían en 1994 y que en todo caso, no debía permitirse que las presiones internacionales o el curso de las negociaciones de paz impusieran transformaciones económicas que les pudieran hacer perder ventajas. Para este grupo, en el que destacan agroexportadores como los cafetaleros, 1994 fue un año de extraordinarias ganancias ya que los precios de sus productos experimentaron una fuerte alza en el mercado internacional.¹¹ En su perspectiva, el alza de los precios internacionales podría durar hasta cinco años, lo que les permitiría acumular suficiente capital para aumentar su poder financiero y aprovechar las ventajas de la globalización económica; por eso eran más reacios a que se iniciaran transformaciones inmediatas, salvo el desmantelamiento de la administración pública y el Estado.

Aunque las críticas del sector empresarial a la política económica todavía se limitaban –en enero de 1994– a la falta de decisión para bajar las tasas de interés bancario y a la sobrevaluación del quetzal, la *guerra sorda* de los aparatos de seguridad contra los empresarios ya se había iniciado y se manifestaba sobre todo en el auge de los secuestros, hasta el punto que el CACIF pidió al gobierno que decretara el estado de excepción, y una comisión del sector privado advirtió que se produciría una fuga de inversiones si persistía la inseguridad.

Los sectores empresariales que habían participado en el derrocamiento de Serrano perdieron influencia, en tanto que los sectores tradicionales, especialmente los caficultores, comenzaron a recuperar su poder. Este sector sería el que desde 1994 comenzaría a presionar sobre el proceso de negociaciones de paz, llegando a arrastrar en muchos momentos al resto del sector empresarial, al menos hasta octubre de 1995.

El auge de los ingresos por exportaciones se trasladó inmediatamente al sector financiero que seguía su larga época de expansión. Al mismo tiempo avanzaban reformas a la Ley de Bancos que incidirían en la liberación de operaciones financieras para el sistema bancario privado y en la desregulación del sistema financiero. Y continuaron las presiones para devaluar la moneda o descontrolar la política de cambios como sucedió en el período 1985-86, lo cual convenía especialmente a los agroexportadores tradicionales. En octubre de 1994 se produjo una nueva depreciación de la moneda que, según Willy Zapata, presidente del Banco de Guatemala, respondía a la especulación, ya que con una

11 En abril los ingresos por exportaciones de café se estimaban en US\$368 millones, un 35% más que el año anterior; en su conjunto las exportaciones tradicionales crecieron en un 14.3% por el alza de los precios

demanda diaria de US\$30 millones le fue suficiente a la banca central introducir US\$7.8 millones al mercado para que se detuviera el alza del dólar.

Pronto el sector empresarial valoró que este auge del precio del café era coyuntural y volvió a concentrar su atención el negocio de la posguerra. El economista Edgar Pape advertía, a mediados de 1994, sobre cómo sectores empresariales merodeaban los US\$120 millones que podrían obtenerse del Grupo Consultivo como apoyo para la posguerra.¹²

Efectivamente en junio una representación del CACIF asistió a la reunión del gobierno con el Grupo Consultivo del Banco Mundial, donde se recibieron ofertas de US\$400 millones en préstamos y US\$153 millones en donaciones como apoyo a la postguerra en proyectos dirigidos a las áreas de derechos humanos, asentamiento de población desarraigada y programas para los pueblos indígenas. Los recursos se canalizarían a través de SEGEPLAN, ONG, FIS, FONAPAZ y FODIGUA, organismos los que había personajes representativo de los sectores empresariales más renovadores, como Álvaro Colom y Guillermo Rodríguez.

Poco después cuando el Congreso, con el apoyo del PAN, aprobó la reforma tributaria presentada por el gobierno y rechazada por el CACIF, otros sectores de empresarios la consideraron apropiada, siempre que se realizara a cambio la privatización; incluso hablaron de crear un *impuesto para la paz* cuyos fondos serían administrados por una fundación creada por ellos. Igualmente, en enero de 1995 hubo sectores empresariales partidarios de negociar reformas a las medidas tributarias (como suprimir el código tributario), en tanto que otros se pronunciaron por el rechazo total.¹³

La inversión privada aumentó en 1995, los nuevos grupos económicos surgidos desde 1990 se prepararon para una etapa de mayor crecimiento una vez lograda la firma de los acuerdos de paz, lo cual se reflejó en los resultados económicos del ejercicio 1995. Según el Banco de Guatemala el crecimiento del PIB fue del 4.9% superior al 3.9% de 1994; la inversión privada creció un 8.7% frente al 3.5% del año anterior; la actividad agropecuaria se incrementó un 2.9%, pero allí destacó el banano con 8.6% y el azúcar con 19.1%; el transporte aumentó un 6.3%, la construcción un 7.9%, la banca un 8% y el sector manufacturero un 3.2%.

Esta variación en las perspectivas económicas provocó también un cierto giro en las posturas del sector empresarial. Aunque el CACIF presentó sus

12 De hecho, a aquella reunión asistieron los empresarios con un documento sobre la paz en el que estimaban unas necesidades de US\$6,000 millones para desarrollo social.

13 Una anécdota sobre cómo el Presidente intentó manipular las divisiones empresariales en abril de 1995, muestra las diferencias reales que existían entre los distintos sectores. El 11 de enero el gobierno, con el apoyo de las bancadas del FRG-DC y PAN, decretó la unificación arancelaria de las importaciones en un 10%, una medida criticada por la Cámara de Industria, pero apoyada por la de Comercio. Entonces se produjo la dimisión del ministro de Economía, Eduardo González, miembro de la Gremial de Exportaciones no Tradicionales y directivo del Banco del Café, pero Jorge Briz Abularach, presidente de la Cámara de Comercio, visitó a De León para felicitarle. Y mientras García Noriega, del CACIF, negaba que esa medida hubiera dividido a los empresarios, Juan José Gutiérrez, de la Cámara de Industria, amenazaba con un paro de labores o con acudir nuevamente a la Corte de Constitucionalidad.

propuestas para el período después de la firma de la paz, se opuso al documento de Consenso de la ONU sobre el tema de las reformas económico-sociales, y Peter Lamport, presidente de la Comisión de Paz del CACIF, pidió a MINUGUA ser enérgica con la URNG por los ataques contra finqueros y llamó a los empresarios a tener una actitud beligerante para evitar que la URNG pudiera lograr grandes concesiones políticas; además advirtió que los empresarios recurrirían a la vía legal por los acuerdos que lesionaran sus derechos garantizados en la Constitución.¹⁴

6. Los empresarios entran en guerra

El auge de los sectores exportadores tradicionales, especialmente los cafetaleros, en 1994 influyó en su postura respecto al proceso de paz. La reacción del general Quilo Ayuso en enero de 1994, junto a otros sectores empresariales que nunca estuvieron de acuerdo en ceder espacios a la insurgencia, fue una muestra de cómo algunos sectores de poder tradicional percibieron el curso desfavorable de las negociaciones.

En abril de 1994 el general Gramajo declaraba a la revista *Crónica: El papel de esa burocracia internacional (MINUGUA) debe especificarse muy bien, porque Guatemala va a ser un país intervenido por ellos. En El Salvador se convirtieron en una institución paralela, en lugar de apuntalar al gobierno y a la policía*. En mayo de 1994 el Procurador de los Derechos Humanos dio curso a la denuncia de un empresario que acusaba a la URNG de invadir su finca durante varios meses y exigirle el pago de un impuesto de guerra; el CACIF solicitó al Procurador General procesar a los miembros de la Comandancia de la URNG, y la Asociación General de Agricultores (AGA) afirmó que el gobierno debía suspender las negociaciones mientras siguiera la campaña de extorsión. En junio el CACIF señaló que en lo que iba de año los finqueros habían pagado Q25 millones a la guerrilla por *impuesto de guerra*. Simultáneamente hizo un llamamiento al cese del fuego inmediato e incondicional, que fue rechazado por la URNG bajo el argumento de que interfería en el proceso de negociación y representaba sólo los intereses de un sector *recalcitrante* de la iniciativa privada.

No obstante lo anterior, el CACIF anunció que una Comisión Empresarial de Paz integrada por Luis Reyes Mayén, Peter Lamport, Juan José Gutiérrez, Carlos Vielman y Augusto García Noriega viajaría a México para entrevistarse con la URNG, dada la poca representatividad de la Asamblea de Sectores

14 A la vez trató de convencer a los propios empresarios de que las negociaciones eran inevitables. Su argumento fue que éstas no nacían de la correlación de fuerzas interna en el país, sino de las presiones externas, pero que estas presiones eran inevitables. Recordó cómo la economía de Guatemala y la actividad del sector empresarial dependía de los mercados internacionales y por tanto el sector empresarial no podía vivir de espaldas a los cambios que sucedían en el mundo. De tal manera que si la presión internacional imponía la negociación, los empresarios debían aceptar este marco y ver cómo lo revertían para que les resultara favorable. Habló por ejemplo de que la población involucrada en el conflicto (sobre todo los refugiados) comprendía a un sector de trabajadores aptos para incorporarse a proyectos de desarrollo económico, y que el sector empresarial debía aprovechar esa fuerza laboral.

Civiles, pero la guerrilla se negó a reunirse con ellos. En esa época, Gustavo Anzueto Vielman afirmaba: *Lo único que traerá el fin del conflicto son más fondos para programas emergentes... al ponerse la meta de firmar la paz el gobierno se apartó del camino, pues tendrá que hacer muchas concesiones con costos muy altos... la experiencia que hemos visto en los países donde la paz se ha impuesto es que la violencia ha seguido.*

En noviembre el presidente de la AGA, Humberto Pretti, acusó a la Iglesia católica de instigar a los campesinos para que invadieran fincas. Para entonces la guerrilla había iniciado una campaña de destrucción de cosechas de café e instalaciones en fincas de San Marcos que no pagaban el salario mínimo de Q22.40. Paralelamente, el 9 de septiembre de 1993, la URNG comenzó un plan de sabotaje económico con la voladura de un puente en Costa Cuca y la destrucción de una torre de energía en Escuintla; el 13 de octubre la guerrilla voló un puente en Río Bravo, Suchitupéquez, y el 17 de octubre otro en Taxisco, Santa Rosa.

En 1995 un sector empresarial comenzó a situarse frontalmente frente al proceso de negociaciones: Edgar Heinemann y Juan Mauricio Wurmser se sumaron a la Comisión de Paz del CACIF, para endurecer la postura de ésta, y el 19 de mayo la Coordinadora Nacional Agropecuaria (CONAGRO) apareció defendiendo al Ejército, que en esos momentos atravesaba una fuerte presión externa,¹⁵ con la siguiente afirmación: *No puede haber paz a cualquier precio... no puede haber paz política.* Al frente de la misma aparecía Anzueto Vielman, el ex- general Quilo y el presidente de la Coordinadora de Asociaciones Regionales de Caficultores de Occidente, Rodrigo Rodríguez.

Por otro lado, al rechazar el Registro de Ciudadanos su candidatura presidencial, Ríos Montt anunció que de todas maneras se presentaría a inscribirse y llamó a la población a acompañarle. En esos días, desconocidos colocaron una granada frente al Congreso y se produjeron varios atentados, incluido un supuesto ataque a la residencia de Ríos Montt, del cual acusó al Ejército. Se fue produciendo así una especie de acercamiento de las *víctimas de la paz* (finqueros amenazados, militares acusados, políticos rechazados), cuya mejor muestra fue el caso del general Quilo Ayuso con el empresario Anzueto Vielman, creadores de la Coordinadora Nacional Agropecuaria, que agrupaba a los gremios de ganaderos, cafetaleros, lecheros, algodones, huleros y exportadores de productos no tradicionales, y se enfrentaba con los azucareros. En mayo casi lograron el control de ANACAFE, y se enfrentaron con Humberto Pretti, presidente de la Cámara del Agro, y con Marco Augusto García Noriega (azucarero y presidente del CACIF), acusándolos de no defender a sus asociados. Precisamente parece haber sido la fuerza que estaba tomando este grupo lo que movió a Peter Lampion a reaccionar a la defensiva e intentar tener una postura más beligerante en el proceso de negociación.

15 En marzo de 1995 el congresista demócrata Robert Torricelli acusó al coronel Julio Alpírez de estar pagado por la CIA y haber participado en el asesinato de Michael Devine y Efraín Bámaca. El día 25 estalló una bodega con explosivos en el aeropuerto, siendo Alpírez el segundo comandante del Agrupamiento Táctico. Aunque un tribunal militar los absolvió, Alpírez y el coronel Mario García Catalán fueron suspendidos del Ejército un buen tiempo.

Por otro lado, las presiones para la depuración del Ejército provocaron nuevas corrientes internas en la institución, reavivando la lucha de poder que se venía desarrollando larvadamente desde 1991, aunque en el acercamiento entre *oficiales constitucionalistas y empresarios modernizantes* se había producido, desde 1992, una comunidad de intereses alrededor de buscar la manera de encontrar nuevos espacios económicos a los militares, sin que esto entorpeciera el desarrollo económico empresarial. Sin embargo, el descalabro financiero del gobierno provocado precisamente por el chantaje fiscal de los empresarios de línea dura, ensombreció cualquier proyecto en este sentido.

En enero de 1994, con el auge de los secuestros de empresarios y el surgimiento de numerosos casos de militares implicados en actos delictivos, comenzó a hablarse en medios empresariales de una nueva división en el Ejército, entre *los corruptos y los honrados*. Para entonces, la mayoría de los oficiales que habían llegado al rango de tenientes coroneles y coroneles, encabezados por el coronel Otto Pérez Molina, estaban interesados en llegar a un acuerdo con el sector modernizante de los empresarios para participar en el proceso de privatización o en los proyectos económicos que surgieran del proceso de paz. Frente a estos, los miembros de promociones inferiores, liderados por algunos ex-oficiales que se habían lucrado con el patrimonio del Estado, anunciaban que las empresas a privatizar eran estratégicas y debían mantenerse bajo control del Estado.

Para otros observadores, en el descontento militar no pesaban tanto los elementos políticos como las consideraciones económicas. Las promociones que en aquellos momentos estaban llegando al grado de teniente coronel eran precisamente las más numerosas en el Ejército (se graduaron en los años 78-82) y veían ante ellas un panorama incierto. A la perspectiva de que los acuerdos sobre desmilitarización de la sociedad incluyeran medidas que les cerraran las puertas del poder económico burocrático, se unían las frecuentes presiones del sector privado para desplazar a los militares de la administración del Estado, aunque en aquellos momentos la cúpula en el poder parecía estar negociando este tema con los candidatos presidenciales y el gobierno.

Los elementos anteriores generaron una falta de liderazgo de la cúpula del mando militar, lo cual creó en el Ejército una situación de intranquilidad que afectaba especialmente a los mandos subalternos (capitán, mayor y teniente coronel, además de los especialistas veteranos) quienes veían incierto su futuro -según lo que se pudiera acordar en las negociaciones sobre el tema de desmilitarización- y desconfiaban de sus jefes del alto mando, pensando que podrían comprometer su futuro. Algunos Sectores se fueron aproximando a Ríos Montt, considerando que tanto ellos como la candidatura presidencial del general eran víctimas de una misma conjura del comunismo interno e internacional (ver más adelante en la campaña desestabilizadora). Entre los líderes de este movimiento cabría destacar a los ex- militares Quilo Ayuso y José Domingo García Samayoa (ex-ministro de la Defensa) presidente de la Asociación de Militares Veteranos de Guatemala. Uno de los puntos de convergencia del movimiento militar y el empresarial fue el rechazo al proceso de negociaciones de paz.

En junio el CACIF rechazó el documento propuesto por las Naciones Unidas sobre el tema económicosocial y agrario y la CONAGRO publicó un campo pagado de apoyo al Ejército. En agosto el CACIF se reunió con el Presidente para tratar los

temas de seguridad y proceso de paz y Humberto Pretti, presidente de la Cámara del Agro, expresó su preocupación por la inviabilidad de los acuerdos. En septiembre Pretti, Roberto Castañeda y el ganadero José Francisco Morales Melgar –quien había llamado al Ejército para que se instalara en su finca en Chiquimulilla– anunciaron una campaña internacional para denunciar la extorsión de la guerrilla y la indiferencia del gobierno.

Pretti advirtió que el CACIF pediría al gobierno que se retirara de la mesa de negociaciones si la guerrilla seguía cobrando el impuesto de guerra; también criticó la desaparición de los Comisionados Militares sin sustituirlos por un nuevo ente de seguridad en el interior de la república. Ese mes, el Ministerio Público investigó de oficio las denuncias del sector privado contra la comandancia de la URNG y el ministro de la Defensa afirmó que los finqueros tenían razones para pedir al gobierno que se suspendieran las conversaciones de paz. El 2 de octubre la CONAGRO publicó un nuevo comunicado en el que afirmaba: *Negociar con delincuentes es ilegal y no tiene más valor que el papel que se gasta... en todo caso, los ciudadanos afectados podrán hacer reclamos por la vía civil y penal a las personas que resultares responsables y así se hará.* También la Asociación de Amigos del País mostró su preocupación por la forma en que fueron suscritos los compromisos de Contadora entre la URNG y los partidos políticos, advirtiendo que las reformas constitucionales que surgieran en el proceso de paz deberían ser aprobadas en un plebiscito. Frente a estas presiones la URNG descartó suspender el cobro del impuesto de guerra antes de que finalizaran las negociaciones de paz, y declaró que tratarían el caso con MINUGUA y no con los finqueros.

Como respuesta CONAGRO advirtió que MINUGUA no estaba autorizada para participar en ningún acto que violara la ley, recordó que la obligación de los ciudadanos cuyos derechos se violaran era acudir a los tribunales –y no a la Misión– y presentó una querrela ante el Organismo Judicial para que declarase si tenía validez legal el proceso negociador.

Como respuesta el presidente de la COPAZ, Héctor Rosada, y la Comisión Empresarial de Paz se reunieron con la presencia de miembros de CONAGRO. Poco después el vicepresidente del CACIF, Humberto Pretti, afirmaba que se debía continuar con el proceso negociador, y el CACIF aclaraba en campo pagado su convicción de que las negociaciones constituían una ruta viable para terminar con el estéril enfrentamiento armado. CONAGRO aclaró también que no estaba contra el proceso de paz sino por el imperio de la ley, pero de todas formas el abogado Luis Beltranena Valladares, en nombre de Fernando Guirola Coguel y Jorge Eduardo Ortega Sierra, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los acuerdos de paz. La Corte de Constitucionalidad informó que integraría un tribunal para conocer la acción contra el proceso de paz, ya que este podría verse interrumpido.

7. La guerra sigue

No es de extrañar que en medio de este caos político el gobierno apenas pudiera atender las necesidades más elementales de la población, y que los servicios públicos continuaran deteriorándose. Según las Naciones Unidas, la

inversión pública representó el 32% del producto interno en 1992, pero cayó al 0.8% en 1993 y al 0.4% en 1994. En agosto de 1994, ante la evasión fiscal, el gobierno anunció la reducción de Q546 millones en los gastos de inversión. Se informó también de la cancelación del Ministerio de Desarrollo, el Comité de Reconstrucción Nacional y varias dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes, mientras el vicepresidente Herbruger afirmaba que habría que despedir al 50% de los trabajadores del Estado.

Para octubre, el gobierno sólo había podido ejecutar el 35% de sus programas, y a finales del año un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) reveló se había ejecutado el 78% del presupuesto público de funcionamiento en 1994, pero apenas el 53% de inversión. Aunque se trasladaron Q58.4 millones de los gastos confidenciales de la Presidencia para Salud y Educación, parece que estos nunca llegaron, pues en Salud sólo se gastó el 36.6% de lo programado y en Educación el 59.26%. De hecho, los programas sociales (incluidos los fondos especiales) no representaron en el presupuesto de 1994 más que el 19.1% del total de la inversión. Aunque el gobierno de Ramiro de León hizo frecuente alarde de su nueva política de fondos sociales, desde octubre de 1995 el Ministerio de Finanzas congeló todos los desembolsos para gastos de inversión afectando especialmente a los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones, sobre los cuales se mantenía la amenaza de privatización que terminaría por dejar totalmente desatendidos a sectores mayoritarios de la población.

Por otra parte, el movimiento popular no se recuperaba de los cambios políticos ocurridos en el último año. Fue hasta el 17 de mayo de 1994, al iniciar sus actividades la Asamblea de Sectores Civiles, con la ausencia del CACIF, cuando volvió a articular una presencia política. Pero en aquellos momentos la URNG se mostraba reacia a dar un protagonismo a la ASC en el proceso de negociaciones, después de la experiencia de mayo de 1993, cuando el sector empresarial logró manipular la reacción cívica. La URNG estaba muy interesada, sin embargo, en sostener conversaciones con la Democracia Cristiana, que ofrecía un programa populista y de concertación nacional bajo el cual la URNG podía desarrollar experiencias de participación política.

En noviembre de 1994, la ASC terminó su mandato de preparar propuestas para la discusión de los temas sustantivos, pero elaboró un proyecto para dar continuidad a su trabajo. Sin embargo, trascendieron rumores de que la URNG podría canalizar su participación política en las elecciones de 1995 a través de la ASC cuando miembros de la URNG iniciaron consultas sobre la posibilidad de proponer al obispo Quezada como candidato presidencial. Alfonso Cabrera, que también estaba negociando el apoyo de la URNG en las elecciones presidenciales de 1995, reveló que Quezada podría ser candidato presidencial, con lo cual quedó frustrada esta iniciativa, al retirarse el obispo de la presidencia de la ASC. A partir de este momento, las organizaciones populares comenzaron a girar alrededor de las candidaturas electorales: el 22 de septiembre, miembros de la Asamblea y la Comandancia en pleno de la URNG se reunieron en la sede de Naciones Unidas en El Salvador para discutir sobre las elecciones y el proceso negociador, y para que los acuerdos logrados se incluyeran en el plan de gobierno del próximo presidente.

La propuesta de convocar una ASC que abría una puerta a la participación política de los sectores populares, pareció obedecer más al interés de la URNG de legitimar los acuerdos y conservar un margen de presión desde afuera sobre la mesa de negociaciones. De hecho, los temas que de antemano parecían estar abiertos a negociaciones eran una cierta modernización-depuración de algunas instituciones del Estado y una cierta modernización económica; únicamente en el terreno político el gobierno-Ejército parecía que dejaban abiertas las puertas de algunas concesiones. La cúpula militar valoraba el proceso de negociación como una oportunidad para legitimarse históricamente y preparar las bases de su hegemonía en el futuro; había elaborado una serie de propuestas, especialmente en torno al cese al fuego parcial y anticipado y se estaba preparando para lograr el control de la población afectada por el conflicto a través de los programas de ayuda y desarrollo.

La dinámica de la URNG y de algunas organizaciones populares desde que se inició el proceso de negociación fue aumentar la presión sobre los empresarios, especialmente en lo que se refería al tema de las tierras y el cobro de impuestos. Esto provocó una radicalización de estos sectores que presentaron iniciativas al margen de la ASC, a fin de presionar e interferir el proceso de negociación. En estas iniciativas se pudo apreciar una coincidencia entre algunos sectores del empresariado y del Ejército.

El movimiento popular no elaboró una propuesta profunda que abarcara la reconciliación y el fin de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos de la sociedad, ni propuestas sectoriales y comunitarias para la reinserción de los sectores afectados por el conflicto y la solución de los problemas que le dieron origen. El movimiento popular pareció verse arrastrado por la dinámica de la URNG frente al proceso de negociación y perdió la posibilidad de incidir en espacios más amplios. Paralelamente, la URNG promovió un movimiento social, especialmente las luchas de funcionarios del Estado y de los campesinos por tierras, que incidiera indirectamente en el proceso de negociación.

En cuanto a los sectores populares, el empleo informal aumentó y la inflación, sin ser desorbitada, generó una recesión en el consumo del 20%. Algunos movimientos reivindicativos, como las huelgas de empleados públicos, con un alto índice de politización y gremialismo, tuvieron un impacto negativo en otros sectores populares y la situación de descomposición económico-social creó las condiciones para movimientos como los levantamientos de Santa Lucía Cotzumalguapa y San Cristóbal Verapaz, fácilmente manipulables por el Ejército, o los linchamientos de delincuentes.

En este contexto social las luchas populares que se desarrollaron en el gobierno de De León siguieron la tónica imperante desde 1990. La lucha por la tierra, la presencia de los movimientos indígenas, las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los movimientos de retorno o reubicación de los desplazados y refugiados, fueron las dominantes en el período 1993-95.

Tal vez la lucha más significativa en este período fue la de los campesinos e indígenas invasores de fincas, en torno a la cual se registró un fuerte movimiento organizativo. El movimiento de retorno de refugiados y la salida a la luz de los desplazados continuó su ritmo, atrayendo a sectores importantes de

solidaridad internacional y actividad de las ONG. Las exigencias de desmilitarización se centraron en el tema de las PAC y del Servicio Militar y en la salida de los destacamentos en algunas comunidades. La presión contra la impunidad se mantuvo constante; además de los organismos de derechos humanos, esta lucha contra la impunidad involucró a notables ciudadanos y terminó afectando las decisiones judiciales. Sin embargo, las luchas reivindicativa sociales, a pesar de la aguda crisis que se atravesaba, apenas destacaron. En 1993, una huelga bananera, iniciada en junio, fue derrotada; el gobierno y el sindicato de FEGUA firmaron un acuerdo para la privatización de la empresa. En junio de 1995, el secretario del Sindicato de Luz y Fuerza de la EEGSA, Jorge Rosales, presentó al gobierno un proyecto para vender bonos de electricidad por los Q5,000 millones en que se valoraba el patrimonio de la empresa. Para entonces, la Central de Trabajadores del Campo apoyaba la candidatura del PAN; Armando Sánchez, dirigente de la UASP y de FENASTEG, vinculado a ORPA, aceptaba una candidatura a diputado por el FRG, y las acusaciones de corrupción en la CGTG ponían en entredicho el sistema sindicalista tradicional. También en junio se produjeron enfrentamientos de trabajadores de la Dirección de Caminos que iban a ser despedidos y la Policía. Dos meses después, Humberto Pretti, vicepresidente del CACIF, y sindicalistas de Luz y Fuerza y del STINDE propusieron un aumento de tarifas eléctricas.

Esta escasa actividad reivindicativa laboral no impidió que la represión prosiguiera. El Ejército siguió usando sus aparatos de seguridad para enfrentar el movimiento popular, amedrentar a la sociedad civil y oponerse a otros poderes reales como los empresarios o institucionales como los magistrados y políticos, ya que en esta etapa se encontró frente a un considerable aumento de las iniciativas de la sociedad civil que ya se venían desarrollando con fuerza desde 1992, muchas de las cuales afectaban además temas vitales como la impunidad y la desmilitarización.

Estas presiones lograron incorporar a sectores amplios de la sociedad (como la viuda de Jorge Carpio) y de la opinión pública (como la columnista Marta Altolaguirre) y terminaron involucrando al sistema judicial. En este contexto, la violación de los derechos humanos en la ciudad capital siguió una marcha ascendente, en la línea de atentados contra ciudadanos opositores, periodistas, miembros de las iglesias y de las ONG; hubo ataques al movimiento sindical y popular organizado e incluso contra defensores de derechos humanos y el mismo Organismo Judicial, reaparecieron grupos como Jaguar Justiciero o Comité Nacional Anticomunista, y se aplicaron nuevas formas de intimidación con menor costo político como allanamientos de oficinas, interrogatorios para dejar después libre a la víctima, o la presencia de elementos de las PAC que siguieron a sus víctimas hasta la capital. También se dieron otras formas de violencia indiscriminada, como cuando en septiembre de 1994 volvió a aparecer una ola de atentados terroristas en la capital o la ejecución de miembros de las maras, achacada al viceministro de Gobernación, coronel Mario Mérida.

Jorge Carpio

La noche del 3 de julio de 1993 Jorge Carpio, líder de la UCN y director de *Diario El Gráfico*, fue asesinado a la altura del kilómetro 141 de la carretera a Chichicastenango. Con él murieron tres de sus acompañantes, Juan Vicente Villacorta, Alejandro Ávila y Rigoberto Rivas, y quedó herido de gravedad el menor Sidney Shaw Díaz. El ataque -tipo emboscada- fue ejecutado por unas 25 personas que usaban pasamontañas negros y estaban armados con fusiles Galil y M-16, escuadras y pistolas. Habiendo descartado el robo y por los fuertes indicios de responsabilidad de agentes del Estado, este hecho se ha calificado como ejecución extrajudicial.

Carpio había sido fundador de la UCN en julio de 1983 y participado con fuerte respaldo electoral en los comicios de 1985 y 1990, en los que disputó la Presidencia en las segundas rondas con los otros candidatos más votados. El 5 de junio de 1993, cuando se decidía en el Congreso la sucesión del ex-presidente Jorge Serrano, Carpio se valió del poder de su partido para evitar la aprobación de una nueva ley de amnistía por delitos políticos y comunes conexos.

El asesinato de que fue víctima causó una profunda conmoción en las primeras semanas en que el recién electo presidente -y primo suyo- Ramiro de León Carpio definía las líneas de política de su gobierno. Esta muerte marcó la incipiente gestión del nuevo mandatario mostrando la porosidad de su poder por su incapacidad de romper el brutal esquema de impunidad, amenazas e irregularidades que ha acompañado el proceso de esclarecimiento de este caso.

Los hechos de encubrimiento se han convertido en indicios que respaldan la tesis de una autoría intelectual en las altas esferas militares y/o políticas. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Gobernación aseguró que las fuerzas de seguridad montaron operativos móviles en la ruta un día antes de los asesinatos (*La Hora* 13/7/93), el inspector de la Policía Mario Carpio Mazariegos sostuvo que *no se destacaron retenes u operativos policíacos en lugares cercanos* (Oficio 3325, 3/8/93).

Mientras la noche de la tragedia un oficial y quince soldados del destacamento de Chichicastenango fueron llevados a las 22:40 por dos sobrevivientes de la caravana que acompañaba a Jorge Carpio con el fin de que efectuaran un rastreo, el Ministerio de la Defensa negó que se haya llevado algún patrullaje en el lugar ese 3 de julio (Oficio 9675 del 30/7/93).

Un reporte del comandante de la Zona Militar 20 (Santa Cruz del Quiché), general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, dice que *no se recogió ningún cascabillo u ojiva* (Oficio 1156-93), sin embargo dos sobrevivientes declararon judicialmente haberle entregado a este oficial una ojiva y un cascabillo que se encontraban en el vehículo en que viajaban cuando ocurrió la tragedia. Esos medios de prueba no fueron enviados en su oportunidad por el oficial al Gabinete de Identificación de la Policía. El 20 de julio el juez de Instrucción solicitó a la Zona Militar 20 los nombres de los soldados que efectuaron el patrullaje la noche del 3 de julio, pero tampoco fueron proporcionados.

El 7 de julio las autoridades capturaron a once sospechosos de haber participado en los asesinatos, pero sólo a tres de ellos se les abrió proceso judicial por este caso, el resto fueron acusados únicamente de agrupación ilegal de gente armada y robo agravado. Ninguno de los reos es confeso ni se les encontró alguna arma u objeto que los implicara directamente en el hecho. Las armas que las autoridades les confiscaron (fotografiadas por la prensa) tampoco fueron consignadas a los tribunales durante los siguientes meses en que el Ministerio Público lo solicitó.

En la madrugada del 19 de enero de 1994 fue incendiado el archivo judicial de Santa Cruz del Quiché, donde se encontraba el proceso penal del caso Carpio y sus acompañantes. El expediente estuvo desaparecido por diez días sin que ninguno de los funcionarios, civiles o militares, haya podido dar una explicación razonable de lo ocurrido. La ODHAG denunció el 17 de febrero de ese mismo año que los autores materiales del asesinato múltiple eran miembros de las PAC. Los datos que posee el Ministerio Público implican además a agentes de la inteligencia militar. Tanto los familiares como los investigadores que se han hecho cargo de las pesquisas sufrieron continuadas amenazas obligándoles a abandonar temporalmente el país en varios momentos.

Pero fue en el campo donde, a pesar de los discursos de la batalla por la paz, siguió manifestándose el mayor hostigamiento a los grupos populares que pedían la desmilitarización y el fin de las PAC. El Ejército azuzó un mayor hostigamiento de los colonos asentados en el Ixcán y en el área Ixil contra los antiguos pobladores refugiados o desplazados, organizó una campaña de pánico contra la presencia de extranjeros en el país, y en menor medida siguieron apareciendo cadáveres de civiles en las áreas de expansión de la actividad militar guerrillera. Finalmente, se registraron asesinatos de policías que investigaban delitos en los que pudieran estar implicados militares o miembros de las PAC.

8. La URNG y la firma de la paz

Con una táctica conservadora la guerrilla calculó a partir de 1994 sus esfuerzos militares de manera que pudiera mantener una presión indefinida y difícilmente desarticulable. Concentró sus esfuerzos en una fuerza unitaria, ubicada cerca de la capital, a la que destinó recursos y efectivos seleccionados y mantuvo sus frentes tradicionales en actividades de hostigamiento y propaganda armada. De esta manera los plazos para preparar una estrategia política se alargaban a la espera de un mayor desgaste de las instituciones democráticas, y en tanto podía ensayar otras formas de presión social como las invasiones de fincas.

Aunque la URNG se resentía de un fuerte desgaste político desde el inicio del retorno de los refugiados —que se agudizó especialmente a partir de que decidiera un alto al fuego unilateral en mayo de 1993— recurrió al planteamiento de una *paz armada* (firmar los acuerdos de paz, pero no desmovilizarse) que se

prolongaría hasta que tuviera suficientes evidencias de que el gobierno estaba en capacidad de cumplir con los compromisos de paz. Por eso la URNG no mostró ningún interés en aceptar la *salida honrosa* que el gobierno de Ramiro de León le ofrecía.

En 1994 después de la firma del Tratado de Libre Comercio con México y la amenaza de la insurrección zapatista, el logro de la paz en Guatemala adquirió una nueva perspectiva geoestratégica para los Estados Unidos y la comunidad internacional, que aumentaron las presiones. Los acuerdos del 10 de enero de 1994 cambiaron totalmente la dinámica formal de las negociaciones, al asumir Naciones Unidas un papel de mediador y comprometerse las partes a un calendario preestablecido.

El gobierno entró en una carrera por demostrar que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de evitar un solo día de conflicto; el Ejército comenzó a aplicar sus medidas de *guerra por la paz* (ver más adelante) y logró que se firmara un acuerdo sobre Derechos Humanos sin incluir el tema de la Comisión de la Verdad, lo cual le permitió aplazar las fuertes presiones internas que se habían reflejado en la conspiración del general Quilo Ayuso.

La URNG se sintió presionada también para lograr cuanto antes acuerdos que resultaran favorables a sus bases sociales. Sin embargo los primeros logrados, en especial el de Esclarecimiento Histórico, tuvieron un marcado carácter impositivo, que finalmente no satisfizo a ninguna de las dos partes. Por otro lado, el acuerdo sobre Derechos Humanos, si bien no incidió directamente en un cambio de la situación en esta materia, abrió una dinámica impredecible para el Ejército con la instalación de la Misión Verificadora de Naciones Unidas, ya que la URNG y las organizaciones populares podían hacer un uso amplio de las atribuciones de MINUGUA.

Para el Ejército, la contrapartida a estos primeros acuerdos era lograr al menos un cese al fuego, que le permitiera mostrar logros más concretos a su gente y centrar todos sus esfuerzos en conquistar espacios en la sociedad civil con la *guerra para la paz*. También el gobierno y los sectores empresariales necesitaban este logro para poder comenzar a capitalizar sus inversiones en el negocio de la paz. Sin embargo la URNG ya había trazado su propia estrategia, y no estaba dispuesta a repetir la experiencia de mayo de 1993, en que sus efectivos se desmoralizaron ante una tregua unilateral que no tenía mayor proyección. Por otro lado, las críticas de muchos sectores a la secretividad del proceso negociador y a los resultados del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, la pusieron a la defensiva. La negociación se empantanó nuevamente, y ambos bandos optaron por un esfuerzo militar. Hasta que el 22 de diciembre, el secretario general de Naciones Unidas exigió a ambas partes un plan en quince días para dinamizar las negociaciones, ya que en caso contrario podría retirar la misión verificadora.

En 1995, una nueva presión de la comunidad internacional sirvió para que el calendario de las negociaciones de paz se ajustara al calendario de las elecciones políticas, lo cual formalmente fue aceptado por la URNG, a cambio de que la discusión de los temas fundamentales no se desvirtuara. La URNG mantuvo su compromiso de participar en las elecciones aún sin tener una estrategia muy definida, pero el tema de la depuración del Ejército y la

desmilitarización de la sociedad quedó en primer plano. Los Estados Unidos aumentó su presión sobre el Ejército, de tal manera que en junio de 1995 se llegó a una situación en que alcanzaron un nivel jamás conocido, y el liderazgo del general Mario Enríquez comenzó a disminuir de manera alarmante.

9. El triunfo de un candidato empresario

Las elecciones generales de 1995 tenían un especial significado: abrían la posibilidad de intentar una revitalización del proceso de institucionalidad política iniciado por los militares en 1984, después de que a partir de la crisis del gobierno de la Democracia Cristiana en 1989, el sistema político partidista y las instituciones clave de la estabilidad política (Presidencia, Congreso, Poder Judicial) entraron en una dinámica de creciente desprestigio popular. Del resultado de las elecciones de 1995 dependía la viabilidad de la reforma del Estado, condición imprescindible para el logro de la firma de la paz y el inicio de la modernización económica. El partido político que resultara ganador tendría que enfrentar estos dos desafíos. Así lo expresaba un análisis de la Fundación Myrna Mack:

El proceso electoral se perfila como el espacio para el reacomodo de las fuerzas políticas a fin de rediseñar la transición que quedó seriamente averiada con el autogolpe del mayo de 1993. Se trata de un juego de elites que disputan sus espacios en el período postbélico... Son grupos hegemónicos que se adhieren a la agenda internacional que promueve el fin del conflicto por la vía negociada, la reconversión del Ejército y la modernización de la economía... Las elecciones son el escenario, por excelencia, de los cambios de relaciones de fuerza en una coyuntura. Pero los comicios del 12 de noviembre tienen una carga especial: van a configurar el espacio y los actores políticos que acabarán dando la fisonomía al proceso de paz. Esto es, los alcances en las transformaciones de las estructuras económicas y militares.

Ante la crisis institucional con que se despidió el gobierno de Ramiro de León Carpio, el proceso electoral fue visualizado por los países interesados en las negociaciones de paz como una oportunidad para que el sistema representativo político ganara mayores cuotas de credibilidad y, en este sentido, presionaron para que la URNG mostrara públicamente su apoyo al mismo e incluso para que participara indirectamente en él. Las presiones diplomáticas actuaron también de alguna manera sobre las autoridades electorales para que la candidatura presidencial de Ríos Montt no fuera aceptada.

A diferencia de lo que fueron los procesos electorales en Nicaragua y El Salvador en situación de negociaciones de paz o acuerdos postbélicos, la organización de las elecciones en Guatemala adoleció de mecanismos de institucionalización. A diferencia de El Salvador en 1992, donde se realizó una campaña de empadronamiento que duró casi un año, en Guatemala la campaña de empadronamiento fue meramente formal y llena de irregularidades: un tercio

de la población en edad de votar, la mayoría afectada por la guerra, no logró siquiera inscribirse, ni se le brindaron oportunidades para hacerlo; el gobierno tampoco aceptó un financiamiento de la Unión Europea para facilitar el transporte gratis el día de las elecciones. Guatemala carecía además de una legislación que controlara el financiamiento delictivo de los partidos, o que regulara el acceso de todas las opciones a los medios de comunicación. Y el Tribunal Electoral fue totalmente ineficiente para garantizar la libre emisión del voto y evitar la amenaza y el chantaje de los políticos contra las poblaciones del interior del país. MINUGUA se abstuvo de asumir el control del ejercicio democrático del voto como una de sus misiones de supervisión.

El PAN y el FRG triunfaron en la primera vuelta electoral; aunque el PAN no logró la mayoría absoluta en los conteos presidenciales, alcanzó la mayoría en el Congreso (47 escaños de 80) y un tercio de las alcaldías del país. La gran sorpresa fueron los resultados del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), al que los sondeos atribuían el 0.5% de la intención de voto, al colocar a seis diputados en el Congreso y convertirse en la tercera fuerza electoral.¹⁶

Sin embargo, los panistas necesitaban un amplio margen de legitimidad para llevar a delante un programa de gobierno que podría, en el primer año de gestión, darles poder de negociación frente a los grupos influyentes de la empresa privada y el Ejército. Por ello, el no haber logrado la mayoría absoluta en la primera vuelta, como esperaban, resultó decepcionante. Pero más decepcionante les resultó el escaso margen con que lograron triunfar en la segunda vuelta. El PAN sólo ganó en la segunda vuelta en cuatro de los 22 departamentos del país, con un ausentismo del 63.32% del padrón (53.2 en la primera vuelta), con lo cual llegó a la Presidencia con el 18.08% de los inscritos en el Registro de Ciudadanos y el 9% de los guatemaltecos en edad de votar. La diferencia del PAN con el FRG se limitó a 32,000 votos, equivalentes al 2.5%. El FRG mantuvo su voto militante y por eso el abstencionismo en la segunda vuelta le favoreció.

El triunfo del PAN representó en cierta medida una salida a la crisis que atravesaron los sectores derechistas del país y a las ambiciones políticas de los empresarios después de la llegada de los gobiernos civiles en 1985. El PAN es una fuerza política surgida después de que Alvaro Arzú lograra la municipalidad de Guatemala en 1985 y arrastrara a su partido a sectores de la clase media y profesionales decepcionados del gobierno de la Democracia Cristiana. Posteriormente el PAN logró aprovechar las disputas de políticos y grandes empresarios originadas durante el gobierno de Serrano, y amplió sus espacios de influencia jalando cuadros de los partidos políticos que entraban en crisis. Ya en la época de Ramiro de León, el PAN se convirtió en la opción electoral del gobierno y de aquellos grupos económicos y militares que se aprovechaban de él.

16 A mediados de 1995 la Asamblea de los Sectores Civiles sufrió una precipitada metamorfosis. Sus principales líderes pasaron a formar parte de una coalición electoral, el FDNG, entrando en choque con otros grupos de izquierda disidentes de la URNG. Dirigentes históricos del movimiento de derechos humanos, como Nineth Montenegro (GAM), Rosalina Tuyuc (CONAVIGUA) y Amílcar Méndez (CERJ), así como líderes sindicales (Byron Morales, UNSITRAGUA), indígenas (Juan León, Defensoría Maya), intelectuales (Jorge González del Valle y Antonio Móvil), de ONG de desarrollo (Manuela Alvarado) y organizaciones campesinas (CUC), pasaron a encabezar el nuevo frente.

A través de un complejo y accidentado proceso de seis años (Arzú anunció por primera vez su candidatura presidencial en mayo de 1989), el nuevo presidente fue ganándose la confianza de algunos de los más poderosos grupos del sector empresarial. Su principal carta de presentación era un plan de obras de infraestructura vial y la estrategia para atraer financiamiento que apoyara los acuerdos de paz; pero ambos puntos exigían una nueva reforma fiscal. En cuanto al Ejército, los panistas no tenían antecedentes de relaciones con los militares, y tampoco habían elaborado una estrategia de aproximación, como hizo la DC. Se referían con frecuencia a la decadencia de la institución y a sus vinculaciones con corrupción administrativa, narcotráfico y secuestros, pero sus relaciones más sistemáticas habían sido con la inteligencia del Estado Mayor Presidencial, Otto Pérez, Otto Noak y el secretario de inteligencia José María Argueta, así como con el general Sergio Camargo Muralles, aunque contaban en sus filas de candidatos con ex militares de prestigio e influencia como los generales Arturo de la Cruz y Jaime Rabanales.

Con estos antecedentes el nuevo presidente comenzó a conformar su equipo de gobierno. En primer lugar, incorporó a personajes no partidarios, sino vinculados al presidente por viejas relaciones de amistad o por prestigio personal: Gustavo Porras, coordinador de la COPAZ; Eduardo Stein, ministro de Relaciones Exteriores; Ricardo Stein, director de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia; Gabriel Aguilera, vicecanciller; Arnoldo Ortiz Moscoso, ministro de Trabajo; Mariano Rayo, secretario de Planificación; y Mario René Cifuentes, viceministro de Gobernación. También incorporó a personajes de absoluta fidelidad personal provenientes del PAN, como Ricardo de la Torre, vocero presidencial, María del Carmen Valle, administradora de los negocios de Arzú y luego secretaria particular del presidente, y Emilio Saca, secretario ejecutivo de la Presidencia.

Sin embargo, el presidente tuvo que incluir en su equipo de gobierno a la corriente de Flores Asturias dentro del PAN, más conservadora, con Rodolfo Mendoza en Gobernación, Arabella Castro en Cultura, Marco Tulio Sosa en Salud y Augusto Vela en Cultura; y aceptar a aquellos ministros que fueron seleccionados en sus negociaciones con el sector privado, como Juan Mauricio Wurmser en Economía, Luis Reyes Mayén en Agricultura, Fritz García Gallont en Comunicaciones y José Alejandro Arévalo en Finanzas. Finalmente, los ministros tecnócratas seleccionados por su expediente fueron Willy Zapata en el Banco de Guatemala, y Leonel López Rodas en Energía.

Una vez conformado el gabinete, el presidente marcó prioridades. En primer lugar puso a caminar la reforma administrativa del ejecutivo, y envió cinco iniciativas de ley al Congreso: reformas al Código Municipal, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de Probidad, reformas a la Ley de Contraloría de Cuentas y Ley Orgánica de las Fuerzas de Seguridad. Después, marcó a los principales ministerios las líneas de actuación y, en un seminario celebrado en Antigua, unificó los mecanismos de funcionamiento administrativo del gobierno. En este marco, el nuevo gobierno estableció inmediatamente sus prioridades políticas, que se centraron en tres objetivos: la clausura del conflicto armado interno, la puesta en marcha de una depuración del Ejército y la negociación con el sector empresarial de un apoyo financiero para resolver el déficit fiscal.

El papel de la Iglesia

En la negociaciones de paz

Cuando el 30 de septiembre de 1987 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), el presidente Cerezo le solicitó a la CEG la designación de dos delegados para representar a la Iglesia. Así fueron nombrados los obispos Rodolfo Quezada y Juan Gerardi. Los otros miembros de la Comisión eligieron al obispo Quezada como presidente de la instancia. La CNR promovió un Diálogo Nacional que abrió espacios de participación a los sectores civiles y propició la negociación directa entre el gobierno y la URNG. Quezada fue entonces nombrado conciliador entre las partes.

El camino de la CNR fue largo y dificultoso. Después de múltiples encuentros, discusiones y declaraciones conjuntas de la URNG y representantes de distintos sectores sociales, políticos y empresariales (ver Capítulo Séptimo), finalmente el 26 de abril de 1991 se firmó el Acuerdo de México que incluyó un temario de discusiones. Éste fue dividido en temas sustantivos¹⁷ y operativo-militares.¹⁸

Un segundo acuerdo, el de Querétaro, se firmó el 25 de julio de 1991 y en octubre se inició el tramamiento del tema de los derechos humanos. Este tema representaba un gran escollo en la negociación, pues además incluía una comisión de la verdad sobre las principales violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. *Se negoció letra por letra*, asegura el obispo Quezada. A fines de 1992 se tenían acordado nueve de los once puntos de los que contaba el Acuerdo Global de Derechos Humanos.

La última ronda de conversaciones se llevó a cabo en México a partir del 5 de mayo de 1993. El conciliador había formulado a las partes un documento para la discusión, pero días antes de la reunión fue filtrado a la prensa y la negociación se vio afectada por el disgusto que manifestó la URNG. Con el golpe de Estado del 26 de mayo de ese mismo año se cayó en un impasse, hasta que el 10 de enero de 1994 el gobierno de Ramiro de León y la guerrilla cambiaron el formato: desapareció la figura del conciliador y se dio paso a la mediación de la ONU.

En ese mismo acuerdo se pidió a la CEG la designación de Quezada como presidente de la Asamblea de Sectores Civiles (ASC). La CEG fijó un plazo de cinco meses para que el obispo desempeñara la función, sin comprometerse a dar un aval a los contenidos de los consensos. El 15 de mayo se inauguró la ASC y el 15 de octubre la Asamblea entregó los cinco documentos de consenso sobre

17 Éstos eran: Democratización y derechos humanos; fortalecimiento del poder civil y funciones del Ejército en una sociedad democrática; identidad y derechos de los pueblos indígenas; reformas constitucionales y régimen electoral; aspectos socioeconómicos y situación agraria; y reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.

18 Contemplaron: Bases para la reincorporación de la URNG a la vida política del país, arreglos para el definitivo cese el fuego, cronograma de implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos y firma del acuerdo definitivo de paz.

poblaciones desarraigadas, pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y situación agraria, las funciones del Ejército en una sociedad democrática y reformas constitucionales. Estos sirvieron de base para las negociaciones entre las partes.

En enero de 1995 la CEG retiró a Quezada para que pudiera atender sus funciones pastorales, tras siete años de mediación, y porque en la ASC se perfilaban movimientos para formar un partido político. El 11 de julio de 1995 los obispos dieron a conocer otra carta pastoral sobre la reconciliación, la paz y la solidaridad, “¡Urge la verdadera paz!”, en la que llamaron a una reflexión sobre *la historia de injusticia y las exigencias para instaurar la justicia en nuestro país*.

En el retorno de refugiados

Desde 1986 el gobierno de Cerezo promovió sus propias repatriaciones, negociando individualmente con las familias, pero una vez en Guatemala se les mantuvo en campamentos temporales semimilitarizados y en condiciones materiales precarias. Por su parte, los refugiados más politizados decidieron organizar las Comisiones Permanentes de Refugiados Guatemaltecos en México (CCPP) y empezaron la negociación de su retorno.

En la mediación de las condiciones para el retorno la Iglesia jugó un papel, tanto de las diócesis de las zonas importantes de retorno (Huehuetenango, Alta Verapaz, El Quiché, Petén y San Marcos), como la CEG, que nombró a un representante para la Instancia Mediadora y Verificadora.¹⁹

Las CCPP lograron un acuerdo con el gobierno en octubre de 1992, el cual les amparaba en términos de seguridad física y material (acceso a la tierra), les facilitaba acompañamiento nacional e internacional y condiciones de reasentamiento. Los refugiados se organizaron en *vertientes* según las zonas de reasentamiento, y prepararon visitas de reconocimiento para ubicar tierras donde asentarse y entrar en contacto con las comunidades vecinas. En el trabajo preparatorio la Iglesia, a través de los párrocos, ayudó para dar información a las comunidades receptoras, muchas de las cuales se manifestaban renuentes de convivir con aquellos que el Ejército y otros agentes, como las PAC, durante años señalaron como guerrilleros.

El primer retorno bajo este acuerdo ocurrió en enero de 1993 en el Ixcán. La primera comunidad de retornados, unas 250 personas, formó la población *Victoria 20 de Enero*. De ahí en adelante continuó el flujo hacia otras poblaciones de El Quiché, Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz y la costa sur. Las diócesis, CONFREGUA y otras instancias continuaron apoyando a los retornados con programas de desarrollo comunitario. De la población originaria de los campamentos casi la mitad decidió regresar, aunque el número que permanece sigue siendo considerable.²⁰

19 Esta instancia estaba formada por representantes diplomáticos, el jefe de la misión de ACNUR, agencias de desarrollo e iglesias, y mantuvo como presidentes a los sucesivos obispos delegados de la CEG, Jorge Mario Ávila, Gerardo Flores y Mario Enrique Ríos.

20 Varios miles de familias se afincarán permanentemente en México aceptando las condiciones que les ofreció el gobierno de ese país. El retorno se dio en regiones deprimidas

En el caso de las CPR

Como se dijo, las CPR fueron comunidades de desplazados internos que al huir del Ejército se internaron en la montaña -en zonas de presencia guerrillera- para salvar sus vidas. A principios de los años 90 las iglesias y otras organizaciones definieron a las CPR como población civil bajo acoso, necesitada de apoyo político, humanitario y de atención pastoral.

En enero de 1988 el obispo de El Quiché, Julio Cabrera, visitó a los refugiados asentados en México, y ahí conoció a miembros de las CPR del Ixcán. Ellos le pidieron que permitiera al jesuita Ricardo Falla que los atendiera pastoralmente, y así comenzó la relación de la Iglesia con esas comunidades. La información de Falla al obispo Cabrera fue creando una relación estrecha con esas comunidades. En junio de 1989, en ocasión de la primera reunión de Falla y los catequistas de las CPR del Ixcán, Marcelino López Balan, el principal de ellos, grabó para el obispo un casete en el que describió la misión pastoral que tuvo que realizar durante varios años de aislamiento.²¹

El 7 de septiembre de 1990 se hizo público el primer comunicado de las CPR de la Sierra, y como reacción inmediata un comando de la inteligencia militar asesinó a la antropóloga Myrna Mack, quien apoyaba al obispo Cabrera. El 31 de enero de 1991 se dieron a conocer las CPR del Ixcán y más tarde, en Petén, una nueva CPR.

A partir de 1992 se impulsaron acciones para tratar de romper el aislamiento de las CPR, considerando que serían blanco militar en la víspera de la definición de las negociaciones de paz. A finales de ese año hubo una visita a pie al Ixcán y a la Sierra encabezada por los obispos Álvaro Ramazzini de San Marcos y Julio Cabrera de El Quiché, con numerosos acompañantes nacionales e internacionales. Así quedó abierta la puerta de las CPR para que su población iniciara visitas a sus comunidades de origen.

El reconocimiento civil de estas poblaciones, que alteraba los planes militares del Ejército (ver Capítulo séptimo), generó ataques del presidente Jorse Serrano contra la CEG y los obispos Cabrera y Ramazzini. En septiembre de 1992, Ricardo Falla publicó el libro **Masacres de la Selva**, y como respuesta el

económicamente, carentes de servicios públicos; además la población joven encontró muchas dificultades para adaptarse a la nueva situación. La masacre de once campesinos en Xamán, Chisec, Alta Verapaz, el 8 de octubre de 1995, mostró las dificultades de la reinserción en términos de seguridad (por la visión formada en los oficiales y tropa del Ejército de ver a los refugiados como enemigos). Once personas murieron, incluyendo dos niños, y varias decenas sufrieron heridas, algunas de ellas muy graves. La comunidad sufrió no sólo el nuevo trauma de la masacre, sino también las consecuencias posteriores como intimidaciones e intentos de culpabilizarla por lo sucedido, por parte del ejército. La masacre de Xamán tuvo también un fuerte impacto en Guatemala y especialmente en los procesos de retorno. La acusación particular en el proceso judicial fue asumida por la FRMT. Todavía hoy en curso, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad.

- 21 Las CPR del Ixcán, con 450 familias, formaron pequeñas comunidades que llegaron a ser unas 28. Sus habitantes eran miembros de la Cooperativa Ixcán Grande, RL, y además había gente que procedía de otros lugares. Las CPR de la Sierra eran unas 2,500 familias, la mayoría originarios de El Quiché; en su huida llegaron a asentarse en tierras cultivadas o cultivables abandonadas por chajulenses que eran presionados por la guerrilla y que se refugiaron en el pueblo de Chajul.

Ejército trató de capturarlo, pero al no lograr ese objetivo confiscó sus pertenencias (diarios, cuadernos de trabajo de campo y documentos de la Iglesia). Para entonces, varias instituciones comenzaron a atender la petición de las CPR de que llegaran a vivir con ellos a fin de asegurar su vida.

No tardó en presentarse el problema de la tierra. Las CPR del Ixcán solicitaron a la diócesis de El Quiché la obtención de derechos de tierra para familias que no la tenían. Aprovechando un ofrecimiento de ceder propiedades mediante compensación se obtuvieron 225 parcelas, pero fueron usurpadas a las comunidades por las propias cooperativas a fin de destinarlas a hijos de los socios. Las CPR del Ixcán prefirieron buscar una nueva tierra y la diócesis de El Quiché obtuvo financiamiento para la compra de 30 caballerías de tierra. A finales de febrero de 1995 esta población creó la comunidad Primavera.

El 16 de mayo de 1995, tanto las CPR de la Sierra como los Comités pro-Tierra de Chajul, pidieron la mediación del obispo Cabrera para encontrar una solución al problema de la tierra. Desde agosto de ese año hasta enero de 1996 ambos grupos trabajaron hasta lograr una plataforma de negociación que se presentó al presidente Arzú. Los grupos enfrentados acordaron hacer juntos una sola petición, y el 18 de junio firmaron un Acuerdo Marco de negociación entre el gobierno y las CPR de la Sierra y Comités pro-Tierra de Chajul, que dio la base del trabajo para ambos grupos de pobladores (unas 3,500 familias).

En Derechos humanos

En 1990 el obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi, fue encargado por el arzobispo Próspero Penados para organizar la Oficina de Servicio Social del Arzobispado de Guatemala (OSSAG), de donde surgió en ese mismo año la ODHAG, que desarrolló un trabajo de documentación y asesoría de casos de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional.

La ODHAG levantó varios casos de violaciones, publicó informes sobre la evolución de los derechos humanos en el país, desarrolló programas de educación y se convirtió en punto de referencia en el debate sobre el tema. Tampoco escapó de las presiones del Ejército y, como consecuencia del hostigamiento en 1992, su director Ronalht Ochaeta tuvo que salir del país por algunos meses. No obstante, en varias otras diócesis los obispos y las pastorales sociales incorporaron en su agenda el tema de los derechos humanos a través de la creación de oficinas jurídicas y programas de educación popular.

El 20 de octubre de 1994 los obispos de la CEG decidieron avalar una iniciativa presentada por la ODHAG para diseñar el proyecto REMHI como una contribución de la Iglesia a la reconstrucción humana de las comunidades afectadas por el conflicto armado. El proyecto se comenzó a organizar en abril de 1995, con la participación de diez de las once diócesis en que en ese momento estaba organizada la Iglesia, y la espina dorsal de su organización fueron los Animadores de la Reconciliación, catequistas, líderes de comunidades, que recibieron una capacitación en historia del conflicto, salud mental y levantamiento de información.

11. La paz a pesar de todo

La negociación terminó en noviembre de 1995 y empezó la *concertación* entre la URNG y el equipo del que sería electo presidente en enero de 1996, Alvaro Arzú del PAN (Rosada, 1996). La dirigencia insurgente no ocultó su preferencia por Arzú y señaló que ese partido tenía un proyecto de largo plazo que les daba certeza para concluir las negociaciones e iniciar el período del posconflicto. Las reuniones informales se sucedieron en El Salvador, Italia y México.

Arzú nombró una nueva COPAZ dirigida por su principal asesor Gustavo Porras (ex-integrante del EGP) y compuesta por Raquel Zelaya, una intelectual con influencia en los tres últimos gobiernos civiles, directora ejecutiva de ASIES; Richard Aitkenhead, ex-ministro de Finanzas Públicas y cercano a los azucareros, y el general Otto Pérez Molina, Inspector General del Ejército y pieza clave de la transición del gobierno de Ramiro de León al de Arzú. Las nuevas comisiones comenzaron a trabajar inmediatamente los borradores del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y la Situación Agraria, que finalmente fue aprobado el 6 de mayo de 1996. Desde principios de marzo, la URNG había decidido un *cese al fuego*, que fue seguido inmediatamente por Arzú. Este no se rompió, a pesar de las tensiones ocurridas en octubre, como más adelante se verá.

En el ínterin, empero, la optimista dinámica que adquirió el proceso generó desconcierto en las filas de la URNG. La comisión político-diplomática de los insurgentes mantenía posiciones duras y expectativas más altas que la misma comandancia general, lo que fue interpretado como un freno para las negociaciones. En consecuencia, los cuatro miembros de la Comandancia insurgente decidieron disolver la comisión y trabajar solos en las negociaciones.

Las críticas al Acuerdo no se hicieron esperar. Se le calificó de *neoliberal*, se dijo que resumía el programa de gobierno del PAN sin que se tocaran aspectos estructurales como la desigualdad en la distribución de la riqueza. A pesar de ello fue importante la inclusión de un catastro nacional, el reforzamiento de los gastos sociales y la meta de aumentar la carga tributaria al 12% del PIB en el 2000.

Las negociaciones siguieron sin tropiezos aparentes hasta la firma del último acuerdo sustantivo, sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el papel del Ejército en una sociedad democrática, que fue suscrito el 19 de septiembre en México. En este acuerdo se describe un procedimiento para que la sociedad se acerque a las instituciones públicas y participe en su reactivación; se presenta un plan general de reforma de los aparatos de seguridad, que incluye la creación de una Policía Nacional Civil, la reestructuración de los aparatos de inteligencia (buscando reducir su alta discrecionalidad) y la reconversión del Ejército a las necesidades de un país en época de paz (la reducción de sus efectivos y presupuesto, y la reorientación de sus funciones exclusivamente a la defensa de la seguridad exterior).

Tras esa firma la cuestión fue cómo preservar el proceso de paz y llevarlo a su culminación a más tardar en diciembre de 1996, para que no saliera de la

programación presupuestaria de la cooperación internacional. En ese propósito confluyeron el gobierno de Arzú, la Comandancia de la URNG y la comunidad internacional, en especial el grupo de países amigos (España, Estados Unidos, México y Noruega).

Pero se traslucía que el proceso era frágil y podía sufrir un penoso daño desluciendo sus alcances. Virtualmente la calificación de los actores en esta coyuntura, partía de la posición que tuvieran frente a las negociaciones de paz. Así había *amigos* y *enemigos* de la paz, sin grandes matices. El riesgo era confundir la posición de los actores frente al proceso de paz, con la postura ante los promotores del proyecto (el gobierno y la URNG) o más aún: frente a la política global de la administración de Arzú.

Se aceptó como un hecho que la Comandancia de la URNG había decidido clausurar el conflicto armado y preparar a sus fuerzas para su inserción en la actividad política legal. Ello obedecía a un cálculo según el cual la paz tendría que firmarse a un corto plazo con un gobierno que asegurara algún grado de ascendencia sobre los grupos de poder (Ejército y sector empresarial) y, por tanto, que garantizara el cumplimiento de los acuerdos de paz. En ese cálculo se estimaba el tiempo necesario para diseñar las estrategias, organizar la maquinaria política y preparar las alianzas, con vistas en las elecciones de noviembre de 1999.

Los críticos de la Comandancia sostenían que, en aras de esa estrategia, se habían comprometido los *principios revolucionarios*. Y ponían como ejemplo el acuerdo socioeconómico calificado como un *programa de claro corte neoliberal*. En la otra esquina estaban las críticas para el gobierno. Los grupos conservadores de la empresa privada señalaban que Arzú era prisionero de sus asesores, quienes por su afinidad con la guerrilla le concedían beligerancia. Ellos sostenían que la paz no era un clamor popular (sería en algún grado importante para menos del 20% de la población), sino una imposición de la agenda de algunos *gobiernos extranjeros*, los que en el pasado *financiaron a la guerrilla*. Afirmaban que el gobernante había incurrido en ilegalidades al permitir que las columnas insurgentes, armadas, ocuparan poblados y realizaran propaganda, incluso con la cobertura de la prensa. En contrapartida creían que el Ejército se encontraba confundido, desmoralizado y sin liderazgo, mientras la guerrilla estaba transformando su *derrota militar en victoria política*.

La negociación llegó todavía a su punto más sensible: la definición de la figura que daría la visa de legalidad a los miembros de la URNG. Desde principios de 1996 surgió la inquietud en la comunidad de derechos humanos de que la supuesta concertación entre las partes los llevaría a avalar una amnistía general, una suerte de ley del perdón y olvido para todos los guerreros. Ello puso en estado de alerta a quienes trabajosamente habían empujado procesos en los tribunales contra los agentes del Estado y de aquellos que tutelaban el derecho de las víctimas de acceder a la justicia.

Ante el riesgo decidieron, en junio de 1996, organizar una Alianza contra la Impunidad a fin de evitar que se promulgara una nueva ley de amnistía general. La estrategia de la Alianza consistió en proponer una amnistía limitada, en correspondencia con el objetivo de la negociación, que era la reinserción de los alzados en armas, excluyendo a los militares.

Con figuras prestigiosas como Helen Mack, Rigoberta Menchú, Lulú Colom, Douglas González, Karen Fischer e instituciones como la ODHAG y FAMDEGUA inesperadamente emergió otro actor que estaba fuera del control de las partes y gozaba de apreciable reconocimiento público, lo que le confería su propia fuerza política. El nuevo escenario colocó a las partes en un punto en el que nadie quiso cargar anticipadamente con el costo de una amnistía. El gobierno no quiso tomar la iniciativa para evitar una exposición riesgosa, y la Comandancia de la URNG se limitó a rechazar una amnistía general, sin proponer su figura propia de reinserción. El Congreso, al que le correspondía aprobar la ley, prefirió hablar extemporáneamente de plebiscitos, en tanto algunos asesores de la mesa de negociación insinuaban que debían ser los tribunales los que se encargaran de calificar los delitos políticos.

La Alianza enmarcó los términos del debate con una propuesta de ley exclusiva para la reinserción de los insurgentes, señalando como amnistiables los delitos políticos, no así los comunes conexos, una definición que los tribunales dudosamente tendrían fuerza para aplicar. Era la primera vez, desde que se iniciaron las negociaciones en abril de 1991, que un tema de la mesa adquiría una dinámica propia en la sociedad civil, acompañado de un debate público. Sólo era comparable a la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque los parámetros políticos eran diferentes, así como lo que específicamente estaba en juego. En el caso que nos ocupa se trataba de un instrumento *ad hoc* para desbloquear la tradicional exclusión política.

En octubre ocurrió un hecho inesperado que cambiaría el curso de los acontecimientos y de hecho el escenario del posconflicto. El gobierno se vio forzado a hacer público que la ORPA había secuestrado a Olga de Novella, de 86 años, integrante de una de las familias de negocios más influyentes de Guatemala. Según la versión oficial, el presidente se había visto obligado a canjear al guerrillero jefe del comando para salvar la vida de la octogenaria. Sin embargo pocos creyeron la versión y muchos criticaron la violación gubernamental de los procedimientos jurídicos establecidos (ver recuadro). Además se desató una ola de críticas contra la URNG que obligaron al retiro de la mesa de las negociaciones de *Gaspar Ilom*, el comandante en jefe de ORPA, y a introducir variantes en el orden de los acuerdos operativos pendientes. Así, se adelantó el acuerdo de cese al fuego y luego, en esas condiciones, se aprobó el acuerdo de reinserción.

El acuerdo reflejó al final los intereses de amnistía que los militares nunca ocultaron. Fue una amnistía más amplia para ellos que para los insurgentes. En medio de estas tormentas, finalmente se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera la tarde del 29 de diciembre de 1996. De ahí en adelante empezaría otro capítulo de la historia guatemalteca.

El último desaparecido del conflicto (El caso Mincho)

El domingo 25 de agosto de 1996 un comando urbano de la ORPA secuestró en la zona 6 de la capital a Olga de Novella. El grupo guerrillero, simulando un retén de la Policía Nacional, desarmó a la seguridad de Enrique y Olga Novella raptándola a ella.

La noticia del plagio se conoció por vías extraoficiales como otro dato alarmante que reforzó la psicosis de inseguridad que se vive en el país. Esas mismas versiones señalaban que las negociaciones con los secuestradores habían deslizado el monto del rescate de US\$ 14 millones, a US\$ 10 millones, llegando a los US\$ 6 millones sin que la familia cediera. Entretanto el señor Enrique Novella (90 años) sufría serios quebrantes de salud.²²

Los primeros indicios que tuvo el comando antisequestros del EMP apuntaban a la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, desde donde operaba una banda de secuestradores y roba vehículos. Sin embargo una fuente sostiene que la D-2 pudo haber estado al corriente de los hechos desde un principio a través de uno de sus agentes infiltrados en la célula guerrillera. Si esa versión fuera la correcta querría decir que la inteligencia militar dejó correr los acontecimientos buscando la ampliación del costo político para la ORPA, la fuerza insurgente mejor preparada en la URNG para el período del posconflicto.

Transcurrieron siete semanas hasta que el comando antisequestros interceptó a la cabeza del comando guerrillero, Rafael Valdizón Nuñez (*Isaías*), jefe del Estado Mayor y miembro de la Dirección Nacional de la ORPA, un cuadro incondicional de Rodrigo Asturias (*Gaspar Ilom*). En ese lapso se firmó el último de los acuerdos sustantivos (Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática) y se programó el final de las negociaciones con una sucesiva firma de acuerdos operativos, incluyendo el de la reinserción, en tres capitales europeas y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera en la capital de Guatemala.

Según la versión que admiten en privado algunos funcionarios del gobierno, el 19 de octubre el comando antisequestros detectó a Valdizón Nuñez y a su escolta Juan José Cabrera Rodas (*Mincho*), un antiguo militante de base que ya tenía asignadas tareas en organismos legales. Sin embargo, de acuerdo a la versión del FRG, el comando del EMP tomó por asalto la casa donde los guerrilleros mantenían secuestrada a Olga de Novella y ahí capturó a *Isaías* y *Mincho* liberando a la plagiada. El matiz es clave pues permite hablar o no de canje.

22 Enrique Novella era una reconocida autoridad moral en el mundo empresarial, a quien frecuentemente se acudía para mediar en los conflictos internos, y además tenía un vínculo directo familiar por afinidad con el presidente Arzú. Aunado a ello el Grupo Novella fue uno de las tres principales referencias del apoyo empresarial al gobierno del PAN.

En esa casa de seguridad, situada probablemente al sur de la ciudad, permanecían otros miembros de la célula guerrillera. De acuerdo a las fuentes oficiales, el 20 de octubre se dio el canje entre *Isaías* y la señora de Novella en un lugar discreto contiguo a la Avenida Petapa zona 12, cerca del Centro Antialcohólico. Los hechos hubieran quedado allí, bajo estricto secreto.

Pero menos de una semana después varios diputados y dirigentes del FRG amenazaron con hacer públicos los acontecimientos enfatizando su propia versión (que sería la de algún grupo de la propia inteligencia militar): que el gobierno había liberado a *Isaías* con el único objetivo de no dañar las negociaciones de paz. La filtración precipitó los acontecimientos, aunque era poco probable que el secreto se hubiera podido mantener por mucho tiempo dada la red de contactos políticos que irradiaba la mesa de negociaciones y que el manejo de una información tan sensible efectivamente desequilibraba a una de las partes. Súbitamente, entonces, la negociación se vio alterada.

El gobierno decidió adelantarse al FRG y el 28 de octubre, en la víspera de una reunión programada con la URNG para tratar el acuerdo sobre reinsertión, dio una conferencia de prensa en la que enteró a la opinión pública sobre la responsabilidad de la ORPA en el secuestro de la señora Novella. Significativamente a esa conferencia asistió Gustavo Porras, quien había participado en el canje y además habría tenido el manejo político de la crisis. También estuvieron el ministro de la Defensa, general Julio Balconi, quien había tenido una participación marginal sólo a través de algunos miembros de su Estado Mayor personal, y el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, quien llevó la voz cantante pero en realidad era el que menos encajaba en el asunto. Ellos convencieron a Arzú de no exponerse públicamente, en contra de la opinión del propio mandatario de asumir él las consecuencias.

Hasta ese momento el nombre de *Mincho* no había salido en ninguna de las declaraciones. Solamente *Isaías*, cuando estuvo detenido en el segundo nivel de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (7 Avenida y 4 Calle Zona 1) preguntó insistentemente por su compañero, a quien sabía herido. Cuando se restablecieron las comunicaciones internas en la ORPA la dirección y algunos militantes aconsejaron a los familiares presentar una denuncia ante MINUGUA. Ellos lo hicieron a finales de octubre. A su vez funcionarios de MINUGUA aconsejaron a los familiares acudir a algunas instituciones no gubernamentales de derechos humanos para tener más apoyo. A partir de ese momento el caso *Mincho* comenzó a ser público, a pesar de que tanto el gobierno como la URNG negaron su existencia.

La prensa y la Alianza contra la Impunidad se encargaron de develar el asunto. Las investigaciones demostraron, en primer lugar, que Juan José Cabrera Rodas o *Mincho* no era un personaje ficticio: había nacido en Sololá, tenía esposa, padres y hermanos, amigos de barrio y compañeros de oficina. Y fueron más allá. A los medios les fue filtrada la fotografía de un cadáver

en descomposición encontrado en el basurero de la zona 3 a mediados de diciembre que había sido enterrado como XX en el cementerio La Verbena. Las pesquisas de los reporteros corroboraron que la fotografía tenía respaldo en los archivos de la Policía. Los rasgos de la fotografía del cadáver desfigurado encajaban de una forma extraordinaria con los de un retrato de *Mincho*. Un fotomontaje de *Prensa Libre* mostró esas semejanzas.

Entretanto MINUGUA había decidido iniciar una investigación de oficio y el equipo encargado encontró varias pistas. Sin embargo por indicaciones del responsable de verificación en la Misión esas pesquisas fueron suspendidas inexplicablemente y los archivos del caso centralizados por el funcionario. Un memorándum interno fechado en noviembre expresa la sorpresa de los verificadores de campo por la decisión adoptada y recuerda que la violación cometida era un crimen de lesa humanidad.

Si la fecha de los registros de la morgue son correctos significa que *Mincho* fue ejecutado cuando en Madrid, España, la URNG y la COPAZ suscribían el Acuerdo Bases para la Reinserción, el 12 de diciembre. Ese mismo día David Stephen, director de MINUGUA conoció que su cargo lo ocuparía Jean Arnault, el mediador de las negociaciones, a propuesta del gobierno y la insurgencia.

En el segundo trimestre de 1997 se desató una agria polémica entre la Alianza contra la Impunidad y Jean Arnault, como jefe de MINUGUA, por una parte, y entre la Alianza y el gobierno, por la otra. De rebote la URNG terció en el asunto, pero más por su falta de beligerancia y mutismo públicos. El tema de fondo era el encubrimiento de la desaparición forzada y una presumible ejecución extrajudicial. Al final de esta medición de fuerzas tanto MINUGUA como la URNG se ablandaron un poco. La ex-guerrilla comenzó a admitir la existencia de *Mincho* y la MINUGUA, en un informe preliminar de sus investigaciones fechado el 20 de mayo, trasladó el balón al Ejecutivo: admitió que *Mincho* había sufrido una desaparición forzada²³ y dijo tener elementos de convicción para señalar al EMP como responsable. Sólo el gobierno no dio marcha atrás -a pesar de los matices posteriores que quiso introducir el ministro Rodolfo Mendoza- y tuvo una respuesta iracunda ante el informe de la Misión. El mensaje era: el caso está cerrado y MINUGUA no tiene autorización para seguir injiriendo en el tema. El canciller Eduardo Stein recomendó que el Ministerio Público tomara cartas en el asunto, como de oficio le correspondía.

De ahí en adelante el caso fue saliendo de los titulares de prensa. Las relaciones entre las ONG y Arnault quedaron dañadas, a pesar de los esfuerzos del diplomático por restituir las. La secretaría general de la ONU envió un par de misiones discretas para investigar los alcances de una probable responsabilidad de encubrimiento de una Misión considerada hasta entonces exitosa. El caso *Mincho* sigue abierto. La última gestión fue la

23 Por cierto, en el último informe de 1996 sobre el cumplimiento del Acuerdo Global de Derechos Humanos, que correspondía al período en que ocurrieron estos hechos, la Misión concluía que por primera vez no se reportaban desapariciones forzadas en el país desde que estaba verificando la evolución de los derechos humanos en el país.

exhumación de un cadáver en el lugar donde él supuestamente fue enterrado. Aunque los análisis finales de laboratorio no están disponibles, la Alianza contra la Impunidad dijo tener indicios que el cadáver había sido cambiado días antes de que el procedimiento forense se llevara a cabo. Todos los mecanismos de la impunidad volvieron a funcionar, irónicamente esta vez en nombre de los acuerdos de paz.





ODHAG

Indice

Palabras preliminares	XI
Presentación general	XIX

TOMO III: EL ENTORNO HISTÓRICO

Introducción

Capítulo Primero

Breves Antecedentes

1. De Barrios a Ponce Vaides	1
Militarización de los campesinos	3
Los comisionados militares	5
2. La revolución de octubre	6
El decreto 900 en San Martín Jilotepeque	8
Cronología de la Operación Éxito de la CIA	9
3. El protagonismo de la Iglesia	12
Acción Católica	14
4. El golpe del 54	15
La prisión de Escuintla (un testimonio)	17
5. Panorama económico	19
6. La situación política	20
La constitución del 56	22
7. El clima en los cuarteles	23

Capítulo Segundo

El conflicto armado en los años 60

1. La sublevación del 13 de noviembre	25
2. El escenario político posterior	28
El Organismo Judicial	29
3. Las jornadas de marzo y abril	29
4. Secuelas de la crisis	30
5. Las incipientes guerrillas	32
Los trecistas	32
El foco de Concuá	33

La columna de Huehuetenango	33
6. Las primeras FAR	35
7. El golpe del 63	38
La política de Peralta Azurdia	39
Búsqueda de otra institucionalidad	41
Situación socioeconómica y laboral	42
La Constitución del 65	44
8. El gobierno de Méndez Montenegro	44
El caso de los 28	45
El pacto con el Ejército	48
El “nuevo” aparato militar	49
Los grupos paramilitares	51
Los comisionados contra la población (testimonios)	52
La escalada de violencia	54
9. La guerrilla	56
El FGEI y el MR-13	56
Luchas internas	59
Las segundas FAR	62
Auge y ocaso	64
10. La Iglesia católica	68

Capítulo Tercero

Los gobiernos militares de los años 70

Primera parte: El proyecto militar	73
--	----

1. El gobierno de Arana	74
Estados de sitio y violencia política	74
Los recursos de exhibición personal	77
Las organizaciones populares	78
Situación económica	78
Alianzas de poder	79
El plan de desarrollo 1971-75	80
2. El gobierno de Laugerud	80
Impulso a la inversión	81
El plan de desarrollo 1975-79	82
Las luchas populares	83
La organización indígena	84
3. Otras tendencias del período	86

Segunda parte: La época de Lucas

1. La violencia política	90
Crímenes en el claro	90
Las ofensivas contrainsurgentes	102

2. Una época de cambios e incertidumbres	105
3. La estrategia contrainsurgente	107
El escenario de la confrontación	110
La “tierra arrasada”	111
4. La estrategia insurgente	114
“La guerra del pueblo”	116
“Pobres contra ricos”	119
5. Socios interesados	120
6. El movimiento popular	122
El CUC	123
La huelga en la costa sur	125
7. Las víctimas	127
8. La Iglesia católica	128
Los centros de formación	129
Las cartas pastorales	130
“Unidos en la esperanza”	131
La polarización política	132
Cierre de la diócesis de El Quiché	135
La Iglesia en el conflicto: diferentes voces	138
Sacerdotes y religiosas víctimas	144
9. El final de Lucas	155

Capítulo Cuarto

El gobierno de Ríos Montt

1. Un giro dramático en la historia	157
2. Malos socios	159
3. La nueva contrainsurgencia	161
4. Las ofensivas contrainsurgentes 1982-83	171
En el área ixil	171
Limpieza de frontera	178
En Huhuetenango	178
En Ixcán	181
Las ofensivas en el corredor central	182
Sololá	186
La ofensiva en El Quiché y Las Verapaces	188
En El Quiché	188
En Alta y Baja Verapaz	189
En San Marcos	192
En Petén	192
En la capital, oriente y la costa	193
En Quetzaltenango	194
5. La URNG	196
El EGP	196
La ORPA	204

Las FAR	210
Los PGT	212
6. La Iglesia en la mira	214
Buscando entre las cenizas	215

Capítulo Quinto

El gobierno de Mejía Vítores

1. El reencuentro institucional	219
2. Recomposición política	220
3. Vuelven los viejos oficiales	222
4. Las presiones internacionales	224
5. Siempre demócratas	225
6. Crisis y contrainsurgencia	228
7. La población recuperada	234

Capítulo Sexto

El gobierno de Vinicio Cerezo

Primera parte: La transición (1986-87)

1. La concertación	238
2. Los primeros acuerdos	241
3. Las primeras tensiones	246
4. Ruidos en los cuarteles	247
5. La fuerza de la nueva derecha empresarial	250
6. Una batalla sin ganadores	252
7. El poder de El Sindicato	255
8. La doctrina de Estabilidad Nacional	258
9. La ofensiva de "Fin de Año"	260
10. La neutralidad activa	263
11. "El mensaje" y otras técnicas	264
12. La deuda social	266
13. El "coup de force"	268

Segunda parte: La conspiración (1988-89)

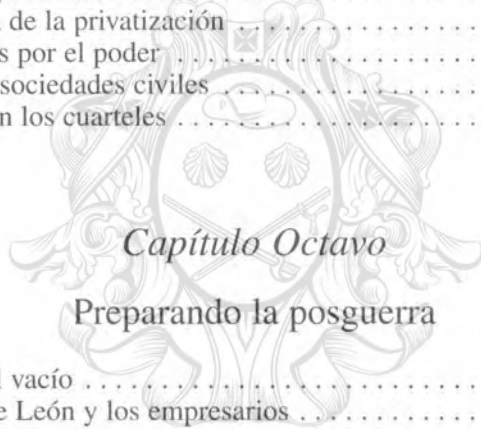
1. Los golpes	271
2. La guerra sucia	274
3. Diplomacia y terrorismo	278
4. El nuevo escenario internacional	280
5. El derrumbe de la estabilidad	283
6. El Ejército pierde liderazgo	285

7. Los empresarios duros	287
8. Los golpeados	290
9. A las puertas del poder	294

Capítulo Séptimo

El gobierno de Serrano Elías

1. El candidato de los empresarios	298
2. Las batallas de la paz	299
3. Haciendo la guerra	302
4. Un entorno inseguro	306
5. Palos de ciego	307
6. Llegó la globalización	308
7. La batalla de la privatización	310
8. Las luchas por el poder	312
9. Las otras sociedades civiles	314
10. Relevos en los cuarteles	317



Capítulo Octavo

Preparando la posguerra

1. El salto al vacío	323
2. Ramiro de León y los empresarios	326
3. Lucha de poderes	328
4. El chantaje fiscal y la privatización	329
5. Los negocios de la paz	331
6. Los empresarios entran en guerra	334
7. La guerra sigue	337
8. La URNG y la firma de la paz	342
9. El triunfo de un candidato empresario	344
10. El papel de la Iglesia	347
11. La paz a pesar de todo	351

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	365
--------------------------------	-----



ODHAG

Bibliografía General

- ACNUR, Informe sobre la situación de los refugiados en el mundo. Icaria, Madrid, 1994.
- Adams, Richard, Crucifixion by power. University of Texas Press, Austin, Texas, 1970.
- _____, Conclusions: what can we know about the harvest of violence, en: R. C. Carmack (De.) Harvest of violence. University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1988.
- Aguilera Peralta, Gabriel y Jorge Romero Imery, Dialéctica del terror en Guatemala. EDUCA, San Jose Costa Rica, 1981.
- _____, La contrainsurgencia rural en Guatemala. Instituto Centroamericano de Documentación e Investigación Social, 1985 (Mimeo).
- Aitkenhead, Richard, Los ochenta. crónica de una década difícil. Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 1989 (Tesis).
- Albizures, Miguel Ángel, Luchas y experiencias del movimiento sindical, período 1976-junio 1978, en: ECA, Guatemala: Drama y conflicto social (Número extraordinario), 356/357, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El Salvador, 1978.
- _____, Tiempo de sudor y de lucha. Editorial Praxis, México, 1987.
- Alvarado Arellano, Huberto. Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo. Guatemala, 1975 (Mimeo).
- Alvarado Pinetta, Edgar, La agricultura en Guatemala. Cámara del Agro de Guatemala, Guatemala, 1981.
- Americas Watch, La detención clandestina en Guatemala. Volumen 5, Número 2. Marzo, 1993 (Trad. no oficial).
- Amnistía Internacional, Los derechos humanos en Guatemala. Guatemala 1980.
- _____, Guatemala: Programa gubernamental de asesinatos políticos. Londres, 1981.
- Arias, Arturo, El movimiento indígena en Guatemala, 1970-83, en: Daniel Camacho y Rafael Menjívar (Coords.), Movimientos populares en Centroamérica. EDUCA, San José Costa Rica, 1985.
- Arriola, Aura Marina, Guatemala: contrainsurgencia y guerra de exterminio. ENIAL, México DF, 1982.
- ASIES, IV Seminario sobre realidad nacional. Guatemala, mayo 1988.
- AVANCSO, Política exterior y estabilidad estatal. Cuadernos de Investigación No. 5, Guatemala, 1990.
- _____, ¿Dónde está el futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados. Cuadernos de Investigación No. 8, Guatemala, julio de 1992.
- Barillas, Danilo, La Democracia Cristiana y su posición ante el Ejército de Guatemala hoy. Guatemala, 1974 (Mimeo).
- Bauer Paiz, Alfonso e Iván Carpio Alfaro, Memorias de Alfonso Bauer Paiz. Historia no oficial de Guatemala. Rusticatio Ediciones, Guatemala, 1996.
- Beltranena Falla, Francisco Fernando, Guatemala: pretorianismo y democracia estratégica. Universidad Francisco Marroquín, Instituto de Estudios Políticos. Guatemala, septiembre de 1992 (Tesis).

- Bendaña Perdomo, Ricardo, *La Iglesia en Guatemala. Síntesis histórica del catolicismo*. Artemis-Edinter, Guatemala, 1996.
- Beristain, Carlos Martín, *Viaje a la memoria. Por los caminos de la milpa*. Lallevir. Barcelona, España, marzo de 1997.
- Bettelheim, B. *El corazón bien informado*. Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
- Breton, André, *El complejo ajaw y el complejo mam. Memorias del II Coloquio internacional de mayistas*. Vol. I, UNAM, México, 1989.
- Cabrera Ovalle, Julio, *Consuela a mi pueblo (Selección de homilías)*. Voces del Tiempo, Guatemala, 1997.
- Cáceres, Carlos, *Apróximación a Guatemala*. Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sin. México, 1980.
- Cambranes, J. C. (Ed.), *500 años de lucha por la tierra. Estudios sobre propiedad rural y reforma agraria en Guatemala*. FLACSO, Guatemala, 1992 (Volúmenes 1 y 2).
- Carmack, Robert M. (Comp.), *Guatemala: cosecha de violencias*. FLACSO, San José Costa Rica, 1991.
- Casaus Arzú, Marta, *Guatemala: linaje y racismo*. FLACSO, San José Costa Rica, 1992.
- Centro de Investigación y Documentación Centroamericana, *Violencia y contraviolencia: desarrollo histórico de la violencia institucional en Guatemala*. Editorial Universitaria, Guatemala, 1980.
- Centro ESTNA, *Situación de defensa y seguridad en Guatemala (Curso 1989-90. Sesión 89019)*. Guatemala, septiembre 1989.
- Cerezo, Vinicio, *El Ejército: ¿una alternativa? s.e./s.f.*
- COLAT, *Psicopatología de la tortura y el exilio*. Fundamentos, Madrid, 1982.
- _____, *Así buscamos rehacernos*. CELADEC, Bruselas, 1987.
- Colom, Yolanda, *Mujeres en la alborada*, Guatemala, 1997 (Inédito).
- Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social de la ONU, *El derecho a la reparación*. E/CN.4/Sub.2/1996/18.
- Comité Nacional de Unidad Sindical, *Revista Unidad (diversos ejemplares)*. México, 1986.
- Comité Pro Justicia y Paz en Guatemala, *Los derechos humanos en Guatemala*. Guatemala, 1986.
- Conferencia Episcopal de Guatemala, *Al servicio de la vida, la justicia y la paz*. Documentos de la CEG 1956-1997, Guatemala, 1997.
- Corby, M., *La necesaria relatividad cultural de los sistemas de valores humanos: mitologías, ideologías, ontologías y formaciones religiosas. Análisis epistemológico de las configuraciones axiológicas humanas*. Universidad de Salamanca, Instituto Interdisciplinario de Barcelona, 1983.
- Cox, Glenn, *Guatemala insurrecta: violencia y orden pretoriano*, 1995 (Mimeo).
- Crosby, Benjamín, *Crisis y fragmentación: relaciones entre los sectores público y privado en América Central*. Latin American and Caribbean Center, Florida International University, Occasional Papers Series, mayo 1985.
- Cullather, Nicholas, *Operation PBSUCCESS. The United States and Guatemala 1952-1954*. History Staff, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Washington, DC, 1994.

- Dary, Claudia, El derecho internacional humanitario y el orden jurídico maya. Una perspectiva histórica. FLACSO, Guatemala, 1997.
- Davis, S. H., Introduction: sowing in seeds of violence, en: R.C. Carmack (Ed.) Harvest of violence. University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1988.
- Diócesis del Quiché, Y dieron la vida por El Quiché. Guatemala, 1992.
- _____, El Quiché: el pueblo y su Iglesia (1960-80). Santa Cruz del Quiché, Guatemala, julio, 1994.
- Ejército de Guatemala, Escuela de Inteligencia, Manual de interrogatorio, enero, 1980.
- _____, Estado Mayor General del Ejército-Centro de Estudios Militares (Comisión de trabajo), Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Guatemala, 1 Abril, 1982 (Mimeo).
- _____, Manual de contrainsurgencia, 1983.
- _____, Estado Mayor de la Defensa Nacional, Doctrina de Asuntos Civiles. Guatemala, 8 de agosto 1986 (Mimeo).
- _____, Foro 27 años de lucha por la libertad. Guatemala, agosto de 1987 (Versión dactilográfica).
- _____, Estado Mayor de la Defensa Nacional, La tesis de la Estabilidad Nacional, Guatemala, 1988 (Mimeo).
- _____, Ministerio de la Defensa Nacional, Reglamento para el servicio militar en tiempo de paz, en: Diario de Centro América, julio 1 de 1991.
- _____, Estado Mayor del Ejército. División de Inteligencia, Manual de área. Guatemala, marzo, 1996.
- Ejército Guerrillero de los Pobres, La lucha democrática, revolucionaria y popular contra el poder de los ricos. Manifiesto al pueblo de Guatemala. Octubre de 1978 (Mimeo).
- _____, COTRAM, El desarrollo del trabajo amplio de masas en la coyuntura actual, 1981 (Mimeo).
- _____, Informador guerrillero (Varios números), 1982.
- _____, Orientaciones provisionales para que los cuadros de dirección intermedia expliquen a los miembros de la Organización las interrogantes previsibles que surgirán con motivo de la muerte de Camilo a manos del enemigo, 15 de agosto de 1983 (Mimeo).
- _____, Línea de masas, s.f. (Mimeo).
- _____, Los cinco principios, s.f. (Mimeo).
- Equipo Ak'kutan, Evangelio y culturas en Verapaz. Guatemala, 1993.
- Equipo de Antropología Forense de Guatemala, Las masacres en Rabinal. Guatemala, 1985.
- Escoto, Jorge y Manfredo Marroquín, La AID en Guatemala. Poder y sector empresarial. CRIES/AVANCSO, Guatemala, 1992.
- Escuela de Ciencia Política, Revista Política y Sociedad (Número extraordinario). Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, abril, 1978.
- Falla, Ricardo, Quiché rebelde. Editorial Universitaria, Guatemala, 1978.
- _____, Libro preparatorio de las Masacres de la Selva (Título no oficial), 1987 (Inédito).

- _____, Introducción al resumen (Agosto, 1990), en: Joaquín Noval, *Resumen Etnográfico de Guatemala*. Editorial Piedrasanta, Guatemala, 1992.
- _____, *Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala (1975-1982)*. Editorial Universitaria, Guatemala, 1992.
- _____, *Historia de un gran amor. Recuperación autobiográfica de las experiencias con las Comunidades de Población en Resistencia*. Ixcán, Guatemala. Mayo de 1993.
- Farías, P., Central and south american refugees, en: A.J. Marsella, T. Bornemann, S Ekblad y J. Orley (Eds.) *Amidst peril and pain: the mental health and well-being of the world's refugees*. American Psychological Association, Washington, 1994.
- Fernández Fernández, José Manuel, *Comunidades indígenas y conflicto social en Guatemala*. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid, 1988.
- Figueroa Ibarra, Carlos, *El proletariado rural en el agro guatemalteco*. Editorial Universitaria de Guatemala, 1981.
- _____, *El recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala*. EDUCA, San José Costa Rica, 1991.
- _____, *Violencia política e insurgencia en Guatemala (1954-95)*, en: *América Latina, violencia y miseria en el crepúsculo del siglo*. Universidad Autónoma de Puebla-Asociación Latinoamericana de Sociología. México, 1996.
- Flores, Marco Antonio, *Fortuny: un comunista guatemalteco (Memorias)*. Óscar de León Palacios, Palo de Hormigo y Universitaria. Guatemala, 1994.
- Fundación Friedrich Ebert (Comp.), *Acuerdos de Paz*, Guatemala, febrero de 1997.
- Fundación Myrna Mack, *Hacia un sistema de inteligencia para la democracia en Guatemala (Documento preliminar de trabajo)*. Guatemala, octubre de 1997 (Mimeo).
- Galeano, Eduardo, *Guatemala país ocupado*. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1971.
- Garnier, Leonardo, *La economía centroamericana en los ochenta*, en: *Historia General de Centroamérica (Tomo VI)*, FLACSO, San José Costa Rica, 1993.
- Gramajo, Héctor Alejandro, *Lección inaugural, X Promoción. Curso comando y Estado Mayor*. Centro de Estudios Militares. Guatemala, 30 abril de 1987 (Mimeo).
- _____, *Liderazgo militar y el futuro del Ejército de Guatemala*. Editorial del Ejército, Guatemala, mayo de 1990.
- _____, *De la guerra... a la guerra. La difícil transición política en Guatemala*. Fondo de Cultura Editorial, Guatemala, 1995.
- Guerra Borges, Alfredo. *La experiencia de Guatemala y algunos problemas de la actual lucha revolucionaria*. En: *Revista Internacional*, No 6-Junio, 1964. Praga.
- Guerra Borges, Alfredo, *El desarrollo económico de Centroamérica*, en: *Historia General de Centroamérica (Tomo V)*. FLACSO, San José Costa Rica, 1993.



ODHAG



ODHAG

Impreso por
Litografía e Imprenta LIL, S.A.
Apartado 75-1100
San José, Costa Rica
371967